

21422

# LAS REFORMAS LEGISLATIVAS

DEL

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA,

(Código penal, Organización del Poder Judicial, etc.)

CON NOTAS Y OBSERVACIONES

POR

D. M. F. M.,

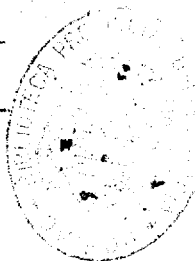
ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID.

SEGUNDA EDICION CONSIDERABLEMENTE AUMENTADA.

---

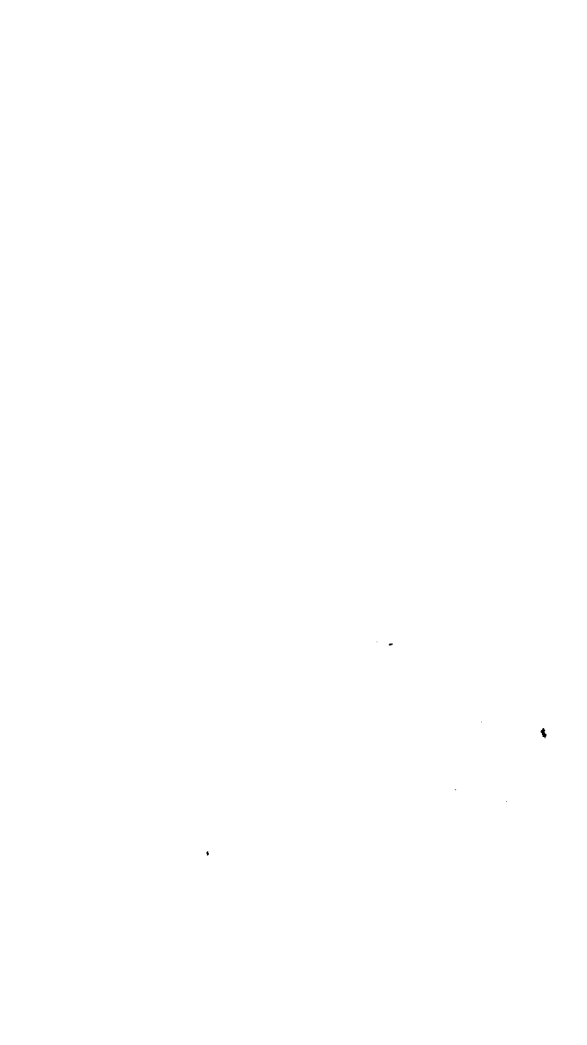
3 pesetas en Madrid.  
3,50 en provincias.

---



MADRID: 1870.

Imprenta de J. A. García, Corredora Baja de San Pablo, 27.



## ESTE LIBRO CONTIENE:

	Págs.
1.º El nuevo Código penal de España, comparado con el de 1848 y su reforma de 1850.....	7
2.º Decreto de 17 de Setiembre de 1870 sobre aplicacion del art. 23 del Código penal.....	219
3.º La ley sobre Organizacion del poder judicial, anotada para su más fácil inteligencia.....	229
4.º La ley de matrimonio civil.....	485
5.º El decreto de 16 de Agosto de 1870 sobre su planteamiento.....	512
6.º Circular de la Direccion del registro sobre el mismo asunto.....	529
7.º La ley de registro civil.....	615
8.º La ley estableciendo el recurso de casacion en lo criminal.....	569
9.º La ley reformando el recurso de casacion en lo civil.....	550
10. La ley reformando el procedimiento criminal.....	599
11. La ley sobre el ejercicio de la gracia de indulto.....	607
12. Las leyes suprimiendo la pena de argolla, efectos civiles de la interdiccion, reversion de oficios de la fé pública y provision de notarias.....	479
Y 13. Las leyes autorizando al Gobierno para plantear todas estas reformas, y los decretos señalando la fecha en que habian de empezar á regir..	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">                     al frente de las le- yes res- pectivas.                 </div>

—————

12 reales en Madrid, en el despacho de libros de la Imprenta Nacional, y en las principales librerías.

14 reales en provincias, franco de porte y *certificado*.

Los pedidos á D. Antonio San Martin, Puerta del Sol, núm. 6, librería, Madrid.





Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó por suplemento al núm. 243 de la *Gaceta de Madrid*, correspondiente al 31 de Agosto de 1870 la siguiente

## LEY.

Don Francisco Serrano y Dominguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortés soberanas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, salud: las Cortés Constituyentes de la Nacion española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia para plantear como ley provisional el adjunto proyecto reformando el Código penal.

La comision nombrada por las Cortés para informar sobre esta autorizacion, propondrá dictámen definitivo acerca de la reforma, el cual se discutirá con preferencia á otros asuntos tan pronto como las Cortés reanuden sus sesiones.

De acuerdo de las Cortés se comunica al Regente del Reino para su promulgacion como ley.

Palacio de las Cortés 17 de Junio de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Mariano Rius Montaner, Diputado Secretario.

Por tanto:

Mando á todos los tribunales, justicias, jefes, gober-

nadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.

Madrid 18 de Junio de 1870.—Francisco Serrano.—  
El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos.

---

La *Gaceta* del 1.º de Setiembre publicó asimismo el siguiente decreto:

## MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

### DECRETO.

Usando de la autorizacion concedida al Gobierno por la ley de 17 de Junio último, y conformándome con el parecer del Consejo de Ministros:

Como Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. El Código penal reformado y aprobado por la ley de 17 de Junio último, se observará en la Península é islas adyacentes, desde su publicacion oficial, á tenor de lo dispuesto en la ley de 28 de Noviembre de 1837.

Dado en Madrid á 30 de Agosto de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de Hacienda, interino de Gracia y Justicia, Laureano Figuerola.

# CÓDIGO PENAL.

---

## LIBRO PRIMERO.

Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas.

### TITULO I.

DE LOS DELITOS Y FALTAS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL, LA ATENUAN Ó LA AGRAVAN.

### CAPITULO I.

#### *De los delitos y faltas.*

Artículo 1.º Son delitos ó faltas las acciones y las omisiones voluntarias penadas por la ley.

Las acciones y omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario.

El que cometiere voluntariamente un delito <sup>y falta</sup> incurrirá en responsabilidad criminal, aunque el mal ejecutado fuere distinto del que se habia propuesto ejecutar (1).

---

(1) En el Código de 1850 este artículo estaba redactado de la manera siguiente:

**Art. 2.º** En el caso en que un tribunal tenga conocimiento de algun hecho que estime digno de represion y que no se halle penado por la ley, se abstendrá de todo procedimiento sobre él y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sancion penal.

Del mismo modo acudirá al Gobierno, exponiendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicacion de las disposiciones del Código resultare notablemente excesiva la pena, atendidos el grado de malicia y el daño causado por el delito (1).

**Art. 3.º** Son punibles, no solo el delito consumado, sino el frustrado y la tentativa.

Hay delito frustrado cuando el culpable practica todos los actos de ejecucion que deberian producir como resultado el delito, y sin embargo no lo producen por causas independientes de la voluntad del agente.

Hay tentativa cuando el culpable da principio á la ejecucion del delito directamente por hechos exteriores, y no practica todos los actos de ejecucion que debieran producir el delito, por causa ó accidente que no sean su propio y voluntario desistimiento.

**Art. 4.º** La conspiracion y la proposicion para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente (2).

•Es delito ó falta toda accion ú omision voluntaria penada por la ley.

•Las acciones ú omisiones se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario.

•El que ejecutare voluntariamente el hecho, será responsable de él é incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella á quien se proponia ofender.

(1) En este artículo se ha suprimido el párrafo primero del art. 2.º del Código de 1850, que decia así: •No serán castigados otros actos ú omisiones que los que la ley con anterioridad haya calificado de delitos ó faltas.

(2) Esto mismo se estableció en el Código de 1848; pero despues en la re-

La conspiracion existe cuando dos ó más personas se conciertan para la ejecucion del delito y resuelven ejecutarlo.

La proposicion existe cuando el que ha resuelto cometer un delito propone su ejecucion á otra ú otras personas.

Art. 5.º Las faltas solo se castigan cuando han sido consumadas. //

Art. 6.º Se reputan delitos graves los que la ley castiga con penas que en cualquiera de sus grados sean afflictivas (1).

Se reputan delitos menos graves los que la ley reprime con penas que en su grado máximo sean correccionales (2).

Son faltas las infracciones á que la ley señala penas leves.

Art. 7.º No quedan sujetos á las disposiciones de este Código los delitos que se hallen penados por leyes especiales (3).

## CAPITULO II.

### *De las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.*

Art. 8.º No delinquen, y por consiguiente están exentos de responsabilidad criminal:

forma de 1850 se dijo pura y simplemente que eran tambien punibles «la conspiracion y la proposicion para cometer un delito.» Esta novedad, que ha desaparecido por fortuna, era en opinion de todos nuestros tratadistas de derecho penal uno de los mayores lunares que tenia el Código de 1850.

(1) En este párrafo se han añadido al primitivo Código las palabras «que en cualquiera de sus grados sean.»

(2) En este párrafo se han añadido asimismo las palabras «que en su grado máximo sean.»

(3) La redaccion de este artículo es mejor que la que tenia el mismo número del Código de 1850.

*Se exceptúan las faltas frustradas, con-  
sueñadas y la propia ag.*

1.º El imbecil y el loco, á no ser que éste haya obrado en un intervalo de razon.

Cuando el imbecil ó el loco hubiere ejecutado un hecho que la ley califique de delito grave, el tribunal decretará su reclusion en uno de los hospitales destinados á los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin prévia autorizacion del mismo tribunal.

Si la ley califique de delito menos grave el hecho ejecutado por el imbecil ó el loco, el tribunal, segun las circunstancias del hecho, practicará lo dispuesto en el párrafo anterior, ó entregará al imbecil ó loco á su familia, si ésta diese suficiente fianza de custodia (1).

2.º El menor de nueve años.

|| 3.º El mayor de nueve años y menor de 15, á no ser que haya obrado con discernimiento.

El tribunal hará declaracion expresa sobre este punto para imponerle pena, ó declararlo irresponsable.

Cuando el menor sea declarado irresponsable, en conformidad con lo que se establece en este número y en el que precede, será entregado á su familia con encargo de vigilarlo y educarlo. A falta de persona que se encargue de su vigilancia y educacion, será llevado á un establecimiento de beneficencia destinado á la educacion de huérfanos y desamparados, de donde no saldrá sino al tiempo y con las condiciones prescritas para los acogidos.

4.º El que obra en defensa de su persona ó derechos, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

Primera. Agresion ilegítima.

|| Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impedirle ó repelerla.

---

(1) Las palabras «El imbecil ó el loco» han sustituido á las del «loco ó demente» que se empleaban en el Código de 1850.

Tercera. Falta de provocacion suficiente por parte del que se defiende.

5.º El que obra en defensa de la persona ó derechos de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes ó hermanos legítimos, naturales ó adoptivos, de sus afines en los mismos grados, y de sus consanguíneos hasta el cuarto civil, siempre que concurren la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de haber precedido provocacion de parte del acometido, no hubiere tenido participacion en ella el defensor (1).

6.º El que obra en defensa de la persona ó derechos de un extraño, siempre que concurren la primera y la segunda circunstancias prescritas en el número 4.º y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento ú otro motivo ilegítimo.

7.º El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

Primera. Realidad del mal que se trata de evitar.

Segunda. Que sea mayor que el causado para evitarlo.

Tercera. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

8.º El que en ocasion de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente, sin culpa ni intencion de causarlo.

9.º El que obra violentado por una fuerza irresistible.

10.º El que obra impulsado por miedo insuperable de un mal igual ó mayor.

---

(1) En el Código de 1850 decia este artículo: «El que obre en defensa de la persona ó derechos de sus ascendientes, descendientes, cónyuge ó hermanos, de los afines en los mismos grados y de sus consanguíneos hasta el cuarto civil, siempre que, etc.»

11.º El que obra en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio ó cargo.

12.º El que obra en virtud de obediencia debida.

13.º El que incurre en alguna omision, hallándose impedido por causa legítima ó insuperable.

### CAPITULO III.

#### *De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal.*

Art. 9.º Son circunstancias atenuantes:

1.ª Las expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.

2.ª La de ser el culpable menor de 18 años.

3.ª La de no haber tenido el delincuente intencion de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo (1).

4.ª La de haber precedido inmediatamente provocacion ó amenaza adecuada de parte del ofendido (2).

5.ª La de haber ejecutado el hecho en vindicacion próxima de una ofensa grave, causada al autor del delito, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, naturales ó adoptivos, ó afines en los mismos grados (3).

6.ª La de ejecutar el hecho en estado de embriaguez, cuando ésta no fuere habitual ó posterior al proyecto de cometer el delito.

Los tribunales resolverán, con vista de las circunstan-

(1) En el Código de 1850 se decía: «De causar todo el mal que produjo.»

(2) Se ha añadido la palabra «adecuada.»

(3) Este número ha sufrido una modificacion análoga á la que hemos hecho notar en el núm. 5.º del art. 8.º



cias de las personas, y de los hechos, cuándo haya de considerarse habitual la embriaguez (1).

7.<sup>a</sup> La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebató y obcecación.

8.<sup>a</sup> Y últimamente, cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores.

## CAPITULO IV.

### *De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.*

Art. 10. Son circunstancias agravantes:

1.<sup>a</sup> Ser el agraviado cónyuge ó ascendiente, descendiente, hermano legítimo, natural ó adoptivo, ó afin en los mismos grados del ofensor.

Esta circunstancia la tomarán en consideración los tribunales para apreciarla como agravante ó atenuante, según la naturaleza y los efectos del delito (2).

2.<sup>a</sup> ~~Ejecutar~~ el hecho con alevosía.

Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos ó formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente á asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido (3).

3.<sup>a</sup> Cometer el delito mediante precio, recompensa ó promesa.

(1) El Código de 1850 decía: «Se reputa habitual un hecho cuando se ejecuta tres veces ó más, con intervalo á lo menos de veinticuatro horas entre uno y otro acto.

(2) Es tanto más oportuna la reforma que se introduce por este párrafo, cuanto que aun con arreglo al Código de 1850 el parentesco, no solo era circunstancia atenuante, sino eximente en los casos de hurto, defraudación etcétera.

(3) El Código de 1850 se limitaba á decir que habia alevosía cuando se obraba á traición ó sobre seguro.

4.<sup>a</sup> Ejecutarlo por medio de inundacion, incendio, veneno, explosion, varamiento de nave ó avería causada de propósito, descarrilamiento de locomotora ó del uso de otro artificio ocasionado á grandes estragos.

5.<sup>a</sup> Realizar el delito por medio de la imprenta, litografía, fotografía ú otro medio análogo que facilite la publicidad.

Esta circunstancia la tomarán en consideracion los tribunales para apreciarla como agravante ó atenuante, segun la naturaleza y los efectos del delito (1).

6.<sup>a</sup> Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecucion.

7.<sup>a</sup> Obrar con premeditacion conocida.

8.<sup>a</sup> Emplear astucia, fraude ó disfraz.

9.<sup>a</sup> Abusar de superioridad, ó emplear medio que debilita la defensa.

10.<sup>a</sup> Obrar con abuso de confianza.

11.<sup>a</sup> Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.

12.<sup>a</sup> Emplear medios ó hacer que concurren circunstancias que añadan la ignominia á los efectos propios del hecho (2).

13.<sup>a</sup> Cometer el delito con ocasion de incendio, naufragio ú otra calamidad ó desgracia.

14.<sup>a</sup> Ejecutarlo con auxilio de gente armada ó de personas que aseguren ó proporcionen la impunidad.

15.<sup>a</sup> Ejecutarlo de noche ó en despoblado, *y en deshabitado y en una villa.*

(1) En el proyecto presentado por el Gobierno á las Cortes se decia: «Esta circunstancia la tomarán en consideracion los tribunales segun la naturaleza y los efectos del delito.» La modificacion, como se ve, resulta en beneficio de la imprenta.

(2) «Emplear medios ó concurrir circunstancias,» decia el Código de 1850. Nos parece más castiza, y sobre todo más gramatical nueva redaccion.

Esta circunstancia la tomarán en consideracion los tribunales segun la naturaleza y accidentes del delito.

16.<sup>a</sup> Ejecutarlo en desprecio ó con ofensa de la autoridad pública.

17.<sup>a</sup> Haber sido castigado el culpable anteriormente por delito á que la ley señale igual ó mayor pena, ó por dos ó más delitos á que aquella señale pena menor.

Esta circunstancia la tomarán en consideracion los tribunales, segun las circunstancias del delincuente y la naturaleza y los efectos del delito (1).

18.<sup>a</sup> Ser reincidente.

Hay reincidencia cuando al ser juzgado el culpable por un delito, estuviere ejecutoriamente condenado por otro comprendido en el mismo título de este Código (2).

19.<sup>a</sup> Cometer el delito en lugar sagrado, en los Palacios de las Córtes ó del Jefe del Estado ó en la presencia de éste ó donde la autoridad pública se halle ejerciendo sus funciones.

20.<sup>a</sup> Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del respeto que por la dignidad, edad ó sexo mereciere el ofendido, ó en su morada, cuando no haya provocado el suceso.

21.<sup>a</sup> Ejecutarlo con escalamiento.

Hay escalamiento cuando se entra por una vía que no sea la destinada al efecto (3).

22.<sup>a</sup> Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo ó pavimento, ó con fractura de puertas ó ventanas.

23.<sup>a</sup> Ser vago el culpable.

(1) Es altamente plausible la reforma que se introduce en este punto, y la cual tiene por objeto castigar con mayor rigor á los que tienen, por decirlo así, el hábito de delinquir que á los que no se hallan en este caso.

(2) El Código de 1850 decia: «Sea reincidente de delito de la misma especie.»

(3) El Código de 1850 no definia el escalamiento.

Se entiende por vago el que no posee bienes ó rentas, ni ejerce habitualmente profesion, arte ú oficio, ni tiene empleo, destino, industria, ocupacion lícita ó algun otro medio legítimo y conocido de subsistencia, por más que sea casado y con domicilio fijo (1).

## TITULO II.

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y FALTAS.

### CAPITULO I.

*De las personas responsables criminalmente de los delitos y faltas.*

Art. 11. Son responsables criminalmente de los delitos:

- 1.º Los autores.
- 2.º Los cómplices.
- 3.º Los encubridores.

Son responsables criminalmente de las faltas:

- 1.º Los autores.
- 2.º Los cómplices (2).

Art. 12. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los delitos y faltas que se cometan por medio de la imprenta, grabado ú otro medio mecánico de publicacion. De dichos delitos responderán criminalmente solo los autores (3).

Art. 13. Se consideran autores:

---

(1) Tampoco estaba incluida taxativamente la vagancia como circunstancia agravante en el Código de 1850; pero en cambio contenia la cláusula general «de cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores,» que ha desaparecido.

(2) El Código de 1850 admitia tambien los encubridores en las faltas.

(3) Todo este artículo ha sido añadido al Código de 1850, y por lo tanto desde él empieza la alteracion sucesiva de la antigua numeracion.

1.º Los que toman parte directa en la ejecucion del hecho.

2.º Los que fuerzan ó inducen directamente á otros á ejecutarlo.

3.º Los que cooperan á la ejecucion del hecho por un acto sin el cual no se hubiere efectuado.

Art. 14. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, solamente se reputarán autores de los delitos mencionados en el art. 12 los que realmente lo hayan sido del escrito ó estampa publicados. Si estos no fueren conocidos ó no estuvieren domiciliados en España ó estuvieren exentos de responsabilidad criminal con arreglo al art. 8.º de este Código, se reputarán autores los directores de la publicacion que tampoco se hallen en ninguno de los tres casos mencionados. En defecto de estos, se reputarán autores los editores tambien conocidos y domiciliados en España y no exentos de responsabilidad criminal segun el artículo anteriormente citado, y en defecto de estos, los impresores.

Se entiende por impresores para el efecto de este artículo los directores ó jefes del establecimiento en que se haya impreso, grabado, ó publicado por cualquiera otro medio el escrito ó estampa criminal (1).

Art. 15. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el art. 13, cooperan á la ejecucion del hecho por actos anteriores ó simultáneos.

Art. 16. Son encubridores los que, con conocimiento de la perpetracion del delito, sin haber tenido participacion en él como autores ni cómplices, intervienen con posterioridad á su ejecucion de alguno de los modos siguientes:

---

(1) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

1.º Aprovechándose por sí mismos ó auxiliando á los delinquentes para que se aprovechen de los efectos del delito.

2.º Ocultando ó inutilizando el cuerpo, los efectos ó los instrumentos del delito para impedir su descubrimiento.

3.º Albergando, ocultando ó proporcionando la fuga al culpable, siempre que concorra alguna de las circunstancias siguientes:

Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas de parte del encubridor.

Segunda. La de ser el delincuente reo de traicion, regicidio, parricidio, asesinato, ó reo conocidamente habitual de otro delito.

4.º Denegando el cabeza de familia á la autoridad judicial el permiso para entrar de noche en su domicilio á fin de aprehender al delincuente que se hallare en él (1).

Art. 17. Están exentos de las penas impuestas á los encubridores los que lo sean de sus cónyuges, de sus ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, naturales y adoptivos, ó afines en los mismos grados, con solo la excepcion de los encubridores que se hallaren comprendidos en el núm. 1.º del artículo anterior.

## CAPITULO II.

*De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas.*

Art. 18. Toda persona responsable criminalmente de un delito ó falta, lo es tambien civilmente.

---

(1) Este precepto tiende á evitar los abusos que podrian cometerse á la sombra del art. 5.º de la Constitucion, y no existia, por lo tanto, en el Código de 1850.

Art. 19. La exencion de responsabilidad criminal declarada en los números 1.º, 2.º, 3.º, 7.º y 10 del artículo 8.º no comprende la de la responsabilidad civil, la cual se hará efectiva con sujecion á las reglas siguientes:

Primera. En los casos 1.º, 2.º y 3.º son responsables civilmente por los hechos que ejecutare el loco ó imbecil y el menor de nueve años, ó el mayor de esta edad y menor de 15 que no haya obrado con discernimiento, los que los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

No habiendo persona que los tenga bajo su potestad ó guarda legal, ó siendo aquella insolvente, responderán con sus bienes los mismos locos, imbeciles ó menores, salvo el beneficio de competencia en la forma que establezca la ley civil (1).

Segunda. En el caso del núm. 7.º son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, á proporcion del beneficio que hubieren reportado.

Los tribunales señalarán segun su prudente arbitrio la cuota proporcional de que cada interesado deba responder.

Cuando no sean equitativamente asignables, ni aun por aproximacion, las cuotas respectivas, ó cuando la responsabilidad se extienda al Estado ó á la mayor parte de una poblacion, y en todo caso, siempre que el daño se hubiere causado con el asentimiento de la autoridad ó de sus agentes, se hará la indemnizacion en la forma que establezcan las leyes ó reglamentos especiales (2).

---

(1) Aunque este párrafo es en la esencia el mismo del Código de 1850, ha sido corregida su primitiva redaccion, suprimiendo el último que decia: «Si no tuviese bienes, responderán sus padres ó guardadores en la forma expresada en la regla 1.ª»

(2) «Con intervencion de la autoridad,» decia el Código de 1850.

Tercera. En el caso del núm. 10 responderán principalmente los que hubiesen causado el miedo, y subsidiariamente y en defecto de ellos, los que hubiesen ejecutado el hecho, salvo respecto á estos últimos el beneficio de competencia (1).

Art. 20. Son tambien responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los posaderos, taberneros y cualesquiera personas ó empresas, por los delitos que se cometieren en los establecimientos que dirijan, siempre que por su parte ó la de sus dependientes haya intervenido infraccion de los reglamentos generales ó especiales de policía.

Son además responsables subsidiariamente los posaderos de la restitution de los efectos robados ó hurtados dentro de sus casas á los que se hospedaren en ellas, ó de su indemnizacion, siempre que estos hubiesen dado anticipadamente conocimiento al mismo posadero, ó al que lo sustituya en el cargo, del depósito de aquellos efectos en la hospedería, y además hubiesen observado las prevenciones que los dichos posaderos ó sus sustitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos. No tendrá lugar la responsabilidad en caso de robo con violencia ó intimidacion en las personas, á no ser ejecutado por los dependientes del posadero (2).

Art. 21. La responsabilidad subsidiaria que se establece en el artículo anterior, será tambien extensiva á los amos, maestros, personas y empresas dedicadas á cualquier género de industria, por los delitos ó faltas en que hubiesen incurrido sus criados, discípulos, oficiales, aprendices ó

---

(1) Se ha añadido al Código de 1850 desde las palabras «salvo respecto, etc.»

(2) El Código de 1850 no hablaba de las empresas en el párrafo primero. Tambien ha sido modificada la redaccion del segundo párrafo.



dependientes en el desempeño de sus obligaciones ó servicio (1).

### TITULO III.

#### DE LAS PENAS.

#### CAPITULO I.

##### *De las penas en general.*

Art. 22. No será castigado ningun delito ni falta con pena que no se halle establecida por ley anterior á su perpetracion (2).

Art. 23. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo de un delito ó falta, aunque al publicarse aquellas hubiere recaído sentencia firme y el condenado estuviere cumpliendo la condena.

Art. 24. El perdon de la parte ofendida no extingue la accion penal. Esto no se entiende respecto á los delitos que no pueden ser perseguidos sin prévia denuncia ó consentimiento del agraviado.

La responsabilidad civil, en cuanto al interés del condonante, se extingue por su renuncia expresa.

Art. 25. No se reputarán penas:

1.º La detencion y la prision preventiva de los procesados.

2.º La suspension de empleo ó cargo público acordada durante el proceso ó para instruirlo.

3.º Las multas y demás correcciones que en uso de las atribuciones gubernativas ó disciplinarias impongan los superiores á sus subordinados ó administrados.

---

(1) Tampoco el artículo correspondiente del Código de 1850 hablaba de las empresas.

(2) Corregida la redaccion del Código de 1850.

4.º Las privaciones de derechos y las reparaciones que en forma penal establezcan las leyes civiles (1).

## CAPITULO II.

### *De la clasificacion de las penas.*

Art. 26. Las penas que pueden imponerse con arreglo á este Código y sus diferentes clases son las que comprende la siguiente

### ESCALA GENERAL.

#### *Penas aflictivas.*

Muerte.

Cadena perpétua.

Reclusion perpétua.

Relegacion perpétua.

Extrañamiento perpétuo.

Cadena temporal.

Reclusion temporal.

Relegacion temporal.

Extrañamiento temporal.

Presidio mayor.

Prision mayor.

Confinamiento.

Inhabilitacion absoluta perpétua.

Inhabilitacion absoluta temporal.

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850 en las disposiciones correspondientes á estos tres últimos artículos.

Inhabilitacion espe-	}	para	{	Cargo público, dere-
cial perpétua. ....				
Inhabilitacion espe-				
cial temporal. ....				cho de sufragio activo y pasivo, profesion ú ofi- cio (1).

*Penas correccionales.*

Presidio correccional.

Prision correccional.

Destierro.

Reprension pública.

Suspension de cargo público, derecho de sufragio ac-  
tivo y pasivo, profesion ú oficio.

Arresto mayor (2).

*Penas leves.*

Arresto menor.

Reprension privada.

*Penas comunes á las tres clases anteriores.*

Multa.

Caucion.

*Penas accesorias.*

Degradacion.

Interdicción civil.

Pérdida ó comiso de los instrumentos y efectos del  
delito.

Pago de costas (3).

---

(1) De las penas afflictivas han desaparecido el presidio y la prision me-  
nores.

(2) De las penas correccionales ha desaparecido la sujecion á la vigilan-  
cia de la autoridad.

(3) Ha desaparecido de entre las penas accesorias el resarcimiento de  
gastos ocasionados por el juicio.

Art. 27. La multa, cuando se impusiere como pena principal, se reputará aflictiva si excediere de 2.500 pesetas; correccional si no excediere de 2.500 y no bajare de 125, y leve si no llegare á 125 pesetas.

Art. 28. Las penas de inhabilitacion y suspension para cargos públicos y derecho de sufragio son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente la ley, declara que otras penas las llevan consigo.

Las costas procesales se entienden impuestas por la ley á los criminalmente responsables de todo delito ó falta.

### CAPITULO III.

#### *De la duracion y efectos de la pena.*

#### Seccion primera.

##### Duracion de las penas.

Art. 29. Los condenados á las penas de cadena, reclusion y relegacion perpétuas y á la de extrañamiento perpétuo, serán indultados á los treinta años de cumplimiento de la condena, á no ser que por su conducta ó por otras circunstancias graves no fuesen dignos del indulto, á juicio del Gobierno (1).

Las penas de cadena, reclusion, relegacion y extrañamiento temporales durarán de doce años y un dia á veinte años.

Las de presidio y prision mayores y la de confinamiento, durarán de seis años y un dia á doce años.

Las de inhabilitacion absoluta é inhabilitacion especial temporales durarán de seis años y un dia á doce años.

---

(1) Como resulta á primera vista, la tendencia de este párrafo es á la extincion de las penas perpétuas, anatematizadas por la ciencia, pero mantenidas en casi todos los Códigos por una triste necesidad.

Las de presidio y prision correccionales y destierro durarán de seis meses y un dia á seis años.

La de suspension durará de un mes y un dia á seis años.

La de arresto mayor durará de un mes y un dia á seis meses.

La de arresto menor durará de uno á treinta dias.

La de caucion durará el tiempo que determinen los tribunales (1).

Art. 30. Lo dispuesto en el artículo anterior no tiene lugar respecto de las penas que se imponen como accesorias de otras, en cuyo caso tendrán las penas accesorias la duracion que respectivamente se halle determinada por la ley.

Art. 31. Cuando el reo estuviere preso, la duracion de las penas temporales empezará á contarse desde el dia en que la sentencia condenatoria hubiere quedado firme.

Quando el reo no estuviere preso, la duracion de las penas que consistan en privacion de libertad empezará á contarse desde que aquel se halle á disposicion de la autoridad judicial para cumplir su condena.

La duracion de las penas de extrañamiento, confinamiento y destierro no empezará á contarse sino desde el dia en que el reo hubiere empezado á cumplir la condena.

Quando el reo entablare recurso de casacion, y fuere desechado, no se le abonará en la pena el tiempo trascurrido desde la sentencia de que recurrió hasta la sentencia que desechó el recurso (2).

(1) El tiempo de duracion de las penas ha sufrido modificaciones importantes; siendo especialmente digna de llamar la atencion la que han experimentado las de presidio y prision correccionales y destierro, que por el Código de 1850 duraban de siete meses á tres años.

(2) Corregida la redaccion del Código de 1850.

## Seccion segunda.

Efectos de las penas segun su naturaleza respectiva.

**Art. 32.** La pena de inhabilitacion absoluta perpétua producirá los efectos siguientes:

1.º La privacion de todos los honores y de los cargos y empleos públicos que tuviere el penado, aunque fueren de eleccion popular.

2.º La privacion del derecho de elegir y ser elegido para cargos públicos de eleccion popular.

3.º La incapacidad para obtener los honores, cargos, empleos y derechos mencionados.

4.º La pérdida de todo derecho ó jubilacion, cesantía ú otra pension por los empleos que hubiere servido con anterioridad, sin perjuicio de la alimenticia que el Gobierno podrá concederle por servicios eminentes.

No se comprenden en esta disposicion los derechos ya adquiridos al tiempo de la condena por la viuda é hijos del penado.

**Art. 33.** La pena de inhabilitacion absoluta temporal producirá los efectos siguientes:

1.º La privacion de todos los honores y de los empleos y cargos públicos que tuviere el penado aunque fueren de eleccion popular.

2.º La privacion del derecho de elegir y de ser elegido para cargos públicos de eleccion popular, durante el tiempo de la condena.

3.º La incapacidad para obtener los honores, empleos, cargos y derechos mencionados en el núm. 1.º, igualmente por el tiempo de la condena.

**Art. 34.** La inhabilitacion especial perpétua para cargos públicos producirá los efectos siguientes:

1.º La privacion del cargo ó empleo sobre que recayere y de los honores anejos á él.

2.º La incapacidad de obtener otros análogos.

Art. 35. La inhabilitacion especial perpétua para el derecho de sufragio privará perpétuamente al penado del derecho de elegir y ser elegido para el cargo público de eleccion popular sobre que recayere.

Art. 36. La inhabilitacion especial temporal para cargo público producirá los efectos siguientes:

1.º La privacion del cargo ó empleo sobre que recayere y de los honores anejos á él.

2.º La incapacidad de obtener otros análogos durante el tiempo de la condena.

Art. 37. La inhabilitacion especial temporal para el derecho de sufragio privará al penado del derecho de elegir y ser elegido durante el tiempo de la condena para el cargo público de eleccion popular sobre que recayere.

Art. 38. La suspension de un cargo público inhabilitará al penado para su ejercicio y para obtener otro de funciones análogas por el tiempo de la condena.

Art. 39. La suspension del derecho de sufragio inhabilitará al penado igualmente para su ejercicio durante el tiempo de la condena (1).

Art. 40. Cuando la pena de inhabilitacion, en cualquiera de sus clases, y la de suspension recayeren en personas eclesiásticas, se limitarán sus efectos á los cargos, derechos y honores que no tuvieren por la Iglesia, y á la asignacion que tuvieren derecho á percibir por razon de su cargo eclesiástico (2).

Art. 41. La inhabilitacion perpétua especial para pro-

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850 desde el art. 32 inclusive.

(2) Reformado esencialmente como consecuencia de las nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado.

fesion ú oficio privará al penado perpétuamente de la facultad de ejercerlos.

La temporal le privará igualmente por el tiempo de la condena.

Art. 42. La suspension de profesion ú oficio producirá los mismos efectos que la inhabilitacion temporal durante el tiempo de la condena.

Art. 43. La interdiccion civil privará al penado, mientras la estuviere sufriendo, de los derechos de pátria potestad, tutela, curaduría, participacion en el consejo de familia, de la autoridad marital, de la administracion de bienes y del derecho de disponer de los propios por actos entre vivos. Exceptúanse los casos en que la ley limita determinadamente sus efectos.

Art. 44. La pena de caucion producirá la obligacion del penado de presentar un fiador abonado que haya de responder de que aquel no ejecutará el mal que se tratare de precaver, y haya de obligarse á satisfacer, si lo causare, la cantidad que hubiere fijado el tribunal en la sentencia.

El tribunal determinará, segun su prudente arbitrio, la duracion de la fianza.

Si no la diere el penado, incurrirá en la pena de destierro.

Art. 45. Los sentenciados á las penas de inhabilitacion para cargos públicos, derecho de sufragio, profesion ú oficio, perpétua ó temporalmente, podrán ser rehabilitados en la forma que determine la ley.

Art. 46. La gracia de indulto no producirá la rehabilitacion para el ejercicio de los cargos públicos y el derecho de sufragio, si en el indulto no se concediere especialmente la rehabilitacion.

Art. 47. Las costas comprenderán los derechos é indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales,



ya consistan en cantidades fijas ó inalterables por hallarse anticipadamente determinadas por las leyes, reglamentos ó Reales órdenes, ya no estén sujetas á arancel.

Art. 48. El importe de los derechos é indemnizaciones que no estuvieren señalados anticipadamente en los términos prescritos en el artículo anterior, se fijarán por el tribunal en la forma que establezca la ley de enjuiciamiento criminal (1).

Art. 49. En el caso en que los bienes del penado no fueren bastantes á cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán por el orden siguiente:

1.º La reparacion del daño causado é indemnizacion de perjuicios.

2.º La indemnizacion al Estado por el importe del papel sellado y demás gastos que se hubiesen hecho por su cuenta en la causa.

3.º Los costas del acusador privado.

4.º Las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.

5.º La multa.

Cuando el delito hubiere sido de los que solo pueden perseguirse á instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia á la indemnizacion del Estado (2).

Art. 50. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer las responsabilidades pecuniarias comprendidas en los números 1.º, 3.º y 5.º del artículo anterior, quedará sujeto á una responsabilidad personal subsidiaria á razon de un dia por cada cinco pesetas, con sujecion á las reglas siguientes:

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850 desde el art. 48.

(2) Este último párrafo no existia en el Código de 1850. Además se ha corregido en el resto del artículo la redaccion de dicho Código.

1.<sup>a</sup> Cuando la pena principal impuesta se hubiere de cumplir por el reo encerrado en un establecimiento penal; continuará en el mismo, sin que pueda exceder esta detencion de la tercera parte del tiempo de la condena, y en ningun caso de un año.

2.<sup>a</sup> Cuando la pena principal impuesta no se hubiere de cumplir por el reo encerrado en un establecimiento penal y tuviere fijada su duracion, continuará sujeto, por el tiempo señalado en el número anterior, á las mismas privaciones en que consista dicha pena.

3.<sup>a</sup> Cuando la pena principal impuesta fuere la de re-  
presion, multa ó caucion, el reo insolvente sufrirá en la cárcel de partido una detencion que no podrá exceder en ningun caso de seis meses cuando se hubiese procedido por razon de delito, ni de quince dias cuando hubiese sido por falta.

Art. 51. La responsabilidad personal subsidiaria por insolvencia no se impondrá al condenado á pena superior en la escala general á la de presidio correccional.

Art. 52. La responsabilidad personal que hubiese sufrido el reo por insolvencia, no le eximirá de la reparacion del daño causado y de la indemnizacion de perjuicios, si llegare á mejorar de fortuna; pero sí de las demás responsabilidades pecuniarias comprendidas en los números 3.<sup>o</sup> y 5.<sup>o</sup> del art. 49 (1).

### Seccion tercera.

Penas que llevan consigo otras accesorias.

Art. 53. La pena de muerte, cuando no se ejecutare por haber sido indultado el reo, llevará consigo la de inha

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1859 desde el art. 50.

bilitacion absoluta perpétua, si no se hubiese remitido especialmente en el indulto dicha pena accesoria.

Art. 54. La pena de cadena perpétua llevará consigo las siguientes:

1.<sup>a</sup> Degradacion, en el caso de que la pena principal de cadena perpétua fuere impuesta á un empleado público por abuso cometido en el ejercicio de su cargo, y éste fuere de los que confieren carácter permanente.

2.<sup>a</sup> La interdiccion civil.

Aunque el condenado obtuviere indulto de la pena principal, sufrirá la de inhabilitacion perpétua absoluta si no se hubiere remitido esta pena accesoria en el indulto de la principal.

Art. 55. La pena de reclusion perpétua llevará consigo la de inhabilitacion perpétua absoluta, cuya pena sufrirá el condenado aunque se le hubiere indultado de la principal, si en el indulto no se le hubiere remitido aquella.

Art. 56. Las penas de relegacion perpétua y extrañamiento perpétuo, llevarán consigo la misma que la reclusion perpétua, debiendo de aplicarse á ella las disposiciones del anterior artículo.

Art. 57. La pena de cadena temporal llevará consigo las siguientes:

1.<sup>a</sup> Interdiccion civil del penado durante la condena.

2.<sup>a</sup> Inhabilitacion absoluta perpétua.

Art. 58. La pena de presidio mayor llevará consigo la de inhabilitacion absoluta temporal en toda su extension.

Art. 59. La pena de presidio correccional llevará consigo la suspension de todo cargo público, profesion, oficio, ó derecho de sufragio.

Art. 60. Las penas de reclusion, relegacion y extrañamiento temporales llevarán consigo la de inhabilitacion absoluta temporal en toda su extension.

Art. 61. La pena de confinamiento llevará consigo la de inhabilitacion absoluta temporal durante el tiempo de la condena.

Art. 62. Las penas de prision mayor y correccional y arresto mayor llevarán consigo la de suspension de todo cargo, y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.

Art. 63. Toda pena que se impusiere por un delito llevará consigo la pérdida de los efectos que de él proviniesen y de los instrumentos con que se hubiere ejecutado.

Los unos y los otros serán decomisados, á no ser que pertenecieren á un tercero no responsable del delito.

Los que se decomisaren se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto á cubrir las responsabilidades del penado, ó se inutilizarán si son ilícitos (1).

## CAPITULO IV.

### DE LA APLICACION DE LAS PENAS.

#### Seccion primera.

Reglas para la aplicacion de las penas á los autores de delito consumado, de delito frustrado y tentativa, y á los cómplices y encubridores.

Art. 64. A los autores de un delito ó falta se impondrá la pena que para el delito ó falta que hubieren cometido se hallare señalada por la ley.

Siempre que la ley señalare generalmente la pena de un delito, se entenderá que la impone al delito consumado.

Art. 65. En los casos en que el delito ejecutado fue-

---

(1) Todos los artículos que comprendia esta seccion del Código de 1850 han sido reformados, corrigiéndose además su redaccion.

re distinto del que se habia propuesto ejecutar el culpable, se observarán las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Si el delito ejecutado tuviere señalada pena mayor que la correspondiente al que se habia propuesto ejecutar el culpable, se impondrá á éste en su grado máximo la pena correspondiente al segundo.

2.<sup>a</sup> Si el delito ejecutado tuviere señalada pena menor que la correspondiente al que se habia propuesto ejecutar el culpable, se impondrá á éste tambien en su grado máximo la pena correspondiente al primero.

3.<sup>a</sup> Lo dispuesto en la regla anterior no tendrá lugar cuando los actos ejecutados por el culpable constituyeren además tentativa ó delito frustrado de otro hecho, si la ley castigara estos actos con mayor pena, en cuyo caso se impondrá la correspondiente á la tentativa ó al delito frustrado en su grado máximo (1).

Art. 66. A los autores de un delito frustrado se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la ley para el delito consumado. (1)

Art. 67. A los autores de tentativa de delito se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la ley para el delito consumado (2).

Art. 68. A los cómplices de un delito consumado se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la ley para el delito consumado.

Art. 69. A los encubridores de un delito consumado se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la ley para el delito consumado.

Art. 70. A los cómplices de un delito frustrado se

(1) Este artículo no existia en el Código de 1850.

(2) Se ha suprimido el párrafo que en el artículo del Código de 1850 correspondiente á éste se referia á la conspiracion y proposicion para cometer un delito.

*(1) Se observará la misma regla respecto á los actos de tentativa y delito frustrado cuando la ley castiga con mayor pena.*

impondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la ley para el delito frustrado.

Art. 71. A los encubridores de un delito frustrado se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la ley para el delito frustrado.

Art. 72. A los cómplices de tentativa de delito se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la ley para la tentativa de delito.

Art. 73. A los encubridores de tentativa de delito se impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por la ley para la tentativa de delito.

Art. 74. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos 69, 71 y 73 los encubridores comprendidos en el número 3.º del art. 16, en quienes concurra la circunstancia primera del mismo número, á los cuales se impondrá la pena de inhabilitacion perpétua especial, si el delincuente encubierto fuere reo de delito grave, y la de inhabilitacion especial temporal, si lo fuere de delito menos grave.

Art. 75. Las disposiciones generales contenidas en los artículos 66 y siguientes hasta el 74 inclusive no tendrán lugar en los casos en que el delito frustrado, la tentativa, la complicidad ó el encubrimiento se hallen especialmente penados por la ley.

Art. 76. Para graduar las penas que en conformidad á lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes hasta el 73 inclusive, corresponde imponer á los autores de delito frustrado y de tentativa y á los cómplices y encubridores, se observarán las reglas siguientes:

1.ª Cuando la pena señalada al delito fuere una sola é indivisible, la inmediatamente inferior será la que siga en número en la escala gradual respectiva á la pena indivisible.

2.ª Cuando la pena señalada al delito se componga

de dos penas indivisibles ó de una ó más divisibles impuestas en toda su extension, será inmediatamente inferior la que siga en número en la escala gradual respectiva á la menor de las penas impuestas.

3.<sup>a</sup> Cuando la pena señalada al delito se componga de una ó dos indivisibles y del grado máximo de otra divisible, la pena inmediatamente inferior se compondrá de los grados medio y mínimo de la propia pena divisible y del máximo de la que la siga en número en la respectiva escala gradual.

4.<sup>a</sup> Cuando la pena señalada al delito se componga de varios grados correspondientes á diversas penas divisibles, la inmediatamente inferior se compondrá del grado que siga al mínimo de los que constituyan la pena impuesta y de los otros dos más inmediatos que se tomarán de la propia pena impuesta, si los hubiere, y en otro caso de la pena que siga en número en la respectiva escala gradual.

5.<sup>a</sup> Cuando la ley señalare la pena al delito en una forma especialmente no prevista en las cuatro reglas anteriores, los tribunales, procediendo por analogía, aplicarán las penas correspondientes á los autores de delito frustrado y tentativa y á los cómplices y encubridores.

Art. 77. Cuando la pena señalada al delito estuviere incluida en dos escalas, se hará la gradacion prevenida en el artículo precedente por la escala que comprenda las penas con que estén castigados la mayor parte de los delitos de la seccion, capítulo ó título donde esté contenido el delito (1).

---

(1) Las disposiciones correspondientes en el Código de 1850 á las que se contienen desde el art. 67 inclusive, han sido reformadas, siéndolo tambien, por consiguiente, la tabla demostrativa.

TABLA demostrativa de *lo dispuesto en este capítulo.*

	Pena señalada para el delito.	Pena correspondiente al autor del delito frustrado y cómplice del delito consumado.	Pena correspondiente al autor de tentativa de delito consumado, al encubridor del propio delito, y á los cómplices del delito frustrado.	Pena correspondiente al encubridor de delito frustrado y á los cómplices de tentativa.	Pena correspondiente al encubridor de tentativa de delito.
Primer caso.	Muerte.	Cadena perpétua.	Cadena temporal.	Presidio mayor.	Presidio correccional.
Segundo caso.	Cadena perpétua á muerte.	Cadena temporal.	Presidio mayor.	Presidio correccional.	Arresto mayor.
Tercer caso...	Cadena temporal en su grado máximo á muerte.	Presidio mayor en su grado máximo á cadena temporal en su grado medio.	Presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio.	Arresto mayor en su grado máximo á presidio correccional en su grado medio.	Multa y arresto mayor en sus grados mínimo y medio.
Cuarto caso...	Presidio mayor en su grado máximo á cadena temporal en su grado medio.	Presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio.	Arresto mayor en su grado máximo á presidio correccional en su grado medio.	Multa y grado mínimo y medio del arresto mayor.	Multa.



## Seccion segunda.

Reglas para la aplicacion de las penas en consideracion á las circunstancias atenuantes y agravantes.

Art. 78. Las circunstancias atenuantes ó agravantes se tomarán en consideracion para disminuir ó aumentar la pena en los casos y conforme á las reglas que se prescriben en esta seccion.

Art. 79. No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyeren un delito especialmente penado por la ley, ó que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito, que sin la concurrencia de ellas no pudiera cometerse.

Art. 80. Las circunstancias agravantes ó atenuantes que consistieren en la disposicion moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido, ó en otra causa personal, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad solo de aquellos autores, cómplices ó encubridores en quienes concurrieren.

Las que consistieren en la ejecucion material del hecho ó en los medios empleados para realizarlo, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad únicamente de los que tuvieren conocimiento de ellas en el momento de la accion ó de su cooperacion para el delito.

Art. 81. En los casos en que la ley señalare una sola pena indivisible, la aplicarán los tribunals sin consideracion á las circunstancias atenuantes ó agravantes que concurran en el hecho.

En los casos en que la ley señalare una pena compuesta de dos indivisibles, se observarán para su aplicacion las siguientes reglas:

1.<sup>a</sup> Cuando en el hecho hubiere concurrido solo alguna circunstancia agravante se aplicará la pena mayor.

2.<sup>a</sup> Cuando en el hecho no hubieren concurrido circunstancias atenuantes ni agravantes se aplicará la pena menor.

3.<sup>a</sup> Cuando en el hecho hubiere concurrido alguna circunstancia atenuante y ninguna agravante se aplicará la pena menor.

4.<sup>a</sup> Cuando en el hecho hubieren concurrido circunstancias atenuantes y agravantes las compensarán racionalmente por su número é importancia los tribunales para aplicar la pena á tenor de las reglas precedentes, segun el resultado que diere la compensacion.

Art. 82. En los casos en que la pena señalada por la ley contenga tres grados, bien sea una sola pena divisible, bien sea compuesta de tres distintas, cada una de las cuales forma un grado, con arreglo á lo prevenido en los artículos 97 y 98, los tribunales observarán para la aplicacion de la pena, segun haya ó no circunstancias atenuantes ó agravantes, las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Cuando en el hecho no concurrieren circunstancias agravantes ni atenuantes impondrán la pena señalada por la ley en su grado medio.

2.<sup>a</sup> Cuando concurriere solo alguna circunstancia atenuante la impondrán en el grado mínimo.

3.<sup>a</sup> Cuando concurriere solo alguna circunstancia agravante la impondrán en el grado máximo.

4.<sup>a</sup> Cuando concurrieren circunstancias atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmente para la designacion de la pena, graduando el valor de unas y otras.

5.<sup>a</sup> Cuando seados ó más, y muy calificadas, las circunstancias atenuantes y no concurra ninguna agravante, los tribunales impondrán la pena inmediatamente in-

ferior á la señalada por la ley en el grado que estimen correspondiente, segun el número y entidad de dichas circunstancias.

6.ª Cualquiera que sea el número y entidad de las circunstancias agravantes, los tribunales no podrán imponer pena mayor que la designada por la ley en su grado máximo.

7.ª Dentro de los límites de cada grado, los tribunales determinarán la cuantía de la pena en consideracion al número y entidad de las circunstancias agravantes y atenuantes y á la mayor ó menor extension del mal producido por el delito (1).

Art. 83. En los casos en que la pena señalada por la ley no se componga de tres grados, los tribunales aplicarán las reglas contenidas en el artículo anterior, dividiendo en tres períodos iguales el tiempo que comprenda la pena impuesta, formando un grado de cada uno de los tres períodos (2).

Art. 84. En la aplicacion de las multas, los tribunales podrán recorrer toda la extension en que la ley permita imponerlas, consultando para determinar en cada caso su cuantía, no solo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal ó facultades del culpable.

Art. 85. Cuando no concurrieren todos los requisitos que se exigen en el caso del núm. 8.º del art. 8.º para eximir de responsabilidad, se observará lo dispuesto en el artículo 579. (3)

Art. 86. Al menor de 15 años, mayor de nueve, que

(1) Aunque sin variar esencialmente las disposiciones del Código de 1850 respecto de circunstancias atenuantes y agravantes, se ha corregido en este considerablemente la redaccion y el orden en que estaban colocadas las disposiciones.

(2) Este artículo no existia en el Código de 1850.

3) No es este art. el q' se refiere á lo expuesto en el art. 8º del art. 8º sino el § 8º.

no esté exento de responsabilidad por haber declarado el tribunal que obró con discernimiento, se le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados, por lo menos, á la señalada por la ley al delito que hubiere cometido.

Al mayor de 15 años, y menor de 18, se aplicará siempre en el grado que corresponda la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley.

Art. 87. Se aplicará la pena inferior en uno ó dos grados, á la señalada por la ley, cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que se trata en el art. 8.º, siempre que concurriere el mayor número de ellos, imponiéndola en el grado que los tribunales estimaren correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos que faltaren ó concurrieren.

Esta disposicion se entiende sin perjuicio de la contenida en el art. 85.

### Seccion tercera.

Disposiciones comunes á las dos secciones anteriores.

Art. 88. Al culpable de dos ó más delitos ó faltas se impondrán todas las penas correspondientes á las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible por la naturaleza y efectos de las mismas.

Art. 89. Cuando todas ó algunas de las penas correspondientes á las diversas infracciones no pudieran ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se observarán respecto á ellas las reglas siguientes:

1.ª En la imposicion de las penas se seguirá el ór-

den de su respectiva gravedad, para su cumplimiento sucesivo por el condenado, en cuanto sea posible por haber obtenido indulto de las primeramente impuestas ó por haberlas ya cumplido.

La gravedad respectiva de las penas para la observancia de lo dispuesto en el párrafo anterior se determinará con arreglo á la siguiente escala:

Muerte.

Cadena perpétua.

Cadena temporal.

Reclusion perpétua.

Reclusion temporal.

Presidio mayor.

Prision mayor.

Presidio correccional.

Prision correccional.

Arresto mayor.

Relegacion perpétua.

Relegacion temporal.

Extrañamiento perpétuo.

Extrañamiento temporal.

Confinamiento.

Destierro.

2.<sup>a</sup> Sin embargo de lo dispuesto en la regla anterior, el máximum de duracion de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por que se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de imponérsele las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum del tiempo predicho.

En ningun caso podrá dicho máximum exceder de cuarenta años.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta regla se

computará la duracion de la pena perpétua en treinta años (1).

Art. 90. Las disposiciones del artículo anterior no son aplicables en el caso de que un solo hecho constituya dos ó más delitos, ó cuando el uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.

En estos casos solo se impondrá la pena correspondiente al delito más grave, aplicándola en su grado máximo.

Art. 91. Siempre que los tribunales impusieren una pena que llevare consigo otras por disposicion de la ley, segun lo que se prescribe en la seccion tercera del capítulo anterior, condenarán tambien expresamente al reo en estas últimas.

Art. 92. En los casos en que la ley señala una pena inferior ó superior en uno ó más grados, á otra determinada, se observarán para su graduacion las reglas prescritas en los artículos 76 y 77.

La pena inferior ó superior se tomará de la escala gradual en que se halle comprendida la pena determinada.

Cuando haya de aplicarse una pena superior á la de arresto mayor, se tomará de la escala en que se hallen comprendidas las penas señaladas para los delitos más graves de la misma especie que el castigado con arresto mayor.

Los tribunales atenderán para hacer la aplicacion de la pena inferior ó superior á las siguientes

---

(1) Las disposiciones correspondientes á estas en el Código de 1850 y que estaban contenidas en el art. 76 de aquel Código, han experimentado una reforma tan esencial como puede observarse comparando el citado art. 76 con este.

## ESCALAS GRADUALES.

### Escala número 1.º

- 1.º Muerte.
- 2.º Cadena perpétua.
- 3.º Cadena temporal.
- 4.º Presidio mayor.
- 5.º Presidio correccional.
- 6.º Arresto.

### Escala núm. 2.º

- 1.º Muerte.
- 2.º Reclusion perpétua.
- 3.º Reclusion temporal.
- 4.º Prision mayor.
- 5.º Prision correccional.
- 6.º Arresto.

### Escala núm. 3.º

- 1.º Relegacion perpétua.
- 2.º Relegacion temporal.
- 3.º Confinamiento.
- 4.º Destierro.
- 5.º Represion pública.
- 6.º Caucion de conducta.

### Escala núm. 4.º

- 1.º Extrañamiento perpétuo.
- 2.º Extrañamiento temporal.
- 3.º Confinamiento.
- 4.º Destierro.
- 5.º Represion pública.
- 6.º Caucion de conducta.

**Escala núm 5.º**

- 1.º Inhabilitacion absoluta perpétua.
- 2.º Inhabilitacion absoluta temporal.
- 3.º Suspension de... { Cargos públicos, de derecho  
de sufragio activo y pasivo,  
profesion ú oficio.

**Escala núm. 6.º**

- 1.º Inhabilitacion especial perpétua.
  - 2.º Inhabilitacion especial temporal.
  - 3.º Suspension de... { Para cargo público, derecho  
de sufragio activo y pasivo,  
profesion ú oficio.
- (1).

Art. 93. La multa se considerará como la última pena de todas las escalas graduales anteriores.

Cuando se hubiere impuesto en este concepto, la responsabilidad subsidiaria correspondiente á ella por insolvencia del culpable establecida en el art. 50, no podrá exceder del tiempo de duracion correspondiente á la pena inmediatamente superior de la escala respectiva (2).

Art. 94. En los casos en que la ley señala una pena superior á otra determinada, sin designar especialmente cuál sea, sino hubiere pena superior en la escala respectiva, ó aquella fuese la de muerte, se considerarán como inmediatamente superiores las siguientes:

- 1.ª Si la pena determinada fuese la de cadena ó reclusion perpétuas ó inhabilitacion absoluta ó inhabilita-

(1) Las escalas graduales del Código de 1850 han sufrido la modificacion consiguiente á la supresion de penas que en otro lugar hemos señalado.

(2) Este segundo párrafo no existia en el Código de 1850.



cion especial perpétuas, las mismas penas, con la cláusula de que el penado no goce del beneficio establecido en el art. 29 de este Código sino á los 40 años.

2.<sup>a</sup> Si fuere la de relegacion perpétua, la de reclusion perpétua.

3.<sup>a</sup> Si fuere la de extrañamiento perpétuo, la de relegacion perpétua (1).

Art. 95. Cuando sea necesario elevar ó bajar la pena de multa uno ó más grados, se aumentará ó se rebajará respectivamente por cada uno la cuarta parte del máximo de la cantidad determinada en la ley; y para rebajarla, se hará una operacion inversa.

Iguales reglas se seguirán respecto de las multas que no consistan en cantidad fija sino proporcional (2).

Art. 96. Cuando las mujeres incurrieren en delitos que este Código castiga con las penas de cadena perpétua ó temporal, ó con las de presidio mayor ó correccional, se les impondrán respectivamente las de reclusion perpétua ó temporal, prision mayor ó correccional (3).

Art. 97. En las penas divisibles, el período legal de su duracion se entiende distribuido en tres partes, que forman los tres grados, mínimo, medio y máximo, de la manera que expresa la siguiente (4)

(1) Las disposiciones contenidas en estas tres reglas no existian en el Código de 1850.

(2) En el artículo correspondiente á éste, en el Código de 1850, se han suprimido las disposiciones que determinaban el máximo de la multa que podian imponer los tribunales segun su mayor ó menor gerarquía.

(3) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850. El artículo 99 del mismo disponia que las mujeres que fueran sentenciadas á cadena temporal ó perpétua, cumpliesen su condena en una casa de presidio mayor de las destinadas para las personas de su sexo.

(4) Esta tabla demostrativa ha sido reformada en consonancia con las variaciones introducidas en las penas, que ya hemos indicado en el lugar correspondiente.



# TABLA DE MOSTRATIVA.

*de la duracion de las penas divisibles y del tiempo que abraza cada uno de sus grados.*

PENAS.	TIEMPO que comprende toda la pena.	TIEMPO que comprende el grado mínimo.	TIEMPO que comprende el grado medio.	TIEMPO que comprende el grado máximo.
Cadena, reclusion, relegacion y extrañamiento temporales.....	De 12 años y un dia, á 20 años.	De 12 años y un dia, á 14 años y 8 meses.	De 14 años 8 me- ses y un dia, á 17 años y 4 meses.	De 17 años 4 meses y un dia, á 20 años.
Presidio y prision mayores y confinamiento.....	De 6 años y un dia, á 12 años.	De 6 años y un dia, á 8 años.	De 8 años y un dia, á 10 años.	De 10 años y un dia, á 12 años.
Inhabilitacion absoluta é inhabi- litacion especial temporal.....				
Las de presidio, prision correc- cional y destierro.....	De 6 meses y un dia, á 6 años.	De 6 meses y un dia, á 2 años y 4 meses.	De 2 años 4 me- ses y un dia, á 4 años 2 meses.	De cuatro años 2 meses y un dia, á 6 años.
La de suspension.....	De un mes y un dia, á 6 años.	De un mes y un dia, á 2 años.	De 2 años y un dia, á 4 años.	De cuatro años y un dia, á 6 años.
La de arresto mayor.....	De un mes y un dia, á 6 meses.	De uno á 2 meses.	De 2 meses y un dia, á 4 meses.	De 4 meses y un dia, á 6 meses.
La de arresto menor.....	De uno á 30 dias.	De uno á 10 dias.	De 11 á 20 dias.	De 21 á 30 dias.

Art. 98. En los casos en que la ley señalare una pena compuesta de tres distintas, cada una de estas formará un grado de penalidad: la más leve de ellas el mínimo; la siguiente el medio, y la más grave el máximo.

Cuando la pena señalada no tenga una de las formas previstas especialmente en este libro, se distribuirán los grados, aplicando por analogía las reglas fijadas (1).

## CAPITULO V.

*De la ejecucion de las penas y de su cumplimiento.*

### Seccion primera.

#### Disposiciones generales.

Art. 99. No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia firme.

Art. 100. Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias ó accidentes que los expresados en su texto.

Se observará tambien, además de lo que dispone la ley, lo que se determine en los reglamentos especiales para el gobierno de los establecimientos en que deben cumplirse las penas acerca de la naturaleza, tiempo y demás circunstancias de los trabajos, relaciones de los penados entre sí y con otras personas, socorros que puedan recibir y régimen alimenticio.

Los reglamentos dispondrán la separacion de sexos en establecimientos distintos, ó por lo menos en departamentos diferentes.

Art. 101. Cuando el delincuente cayere en locura ó

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850.

en imbecilidad despues de pronunciada sentencia firme, se suspenderá la ejecucion tan solo en cuanto á la pena personal, observándose en sus casos respectivos lo establecido en los párrafos segundo y tercero, núm. 1.º del artículo 8.º

En cualquier tiempo en que el delincuente recobrare el juicio cumplirá la sentencia, á no ser que la pena hubiera prescrito, con arreglo á lo que se establece en este Código (1).

Se observarán tambien las disposiciones respectivas de esta seccion, cuando la locura ó imbecilidad sobreviniera hallándose el sentenciado cumpliendo la sentencia (2).

## Seccion segunda.

### Penas principales.

Art. 102. La pena de muerte se ejecutará en garrote sobre un tablado.

La ejecucion se verificará á las veinticuatro horas de notificada la sentencia, de dia, con publicidad, y en el lugar destinado generalmente al efecto, ó en el que el tribunal determine cuando haya causas especiales para ello (3).

Esta pena no se ejecutará en dias de fiesta religiosa ó nacional.

Art. 103. Hasta que haya en las cárceles un lugar destinado para la ejecucion pública de la pena de muerte,

---

(1) Por el Código de 1850, si en la sentencia se imponia una pena menor que cualquiera de las afflictivas, el tribunal podia acordar que el loco ó demente (como allí se decia), fuese entregado á la familia bajo fianza de custodia, y de tenerle á disposicion del tribunal.

(2) El Código de 1850 no preveia el caso de prescripcion.

(3) El Código de 1850 no señalaba plazo para la ejecucion despues de notificada la sentencia: la práctica habia introducido el de cuarenta y ocho horas, que era demasiado largo.

el sentenciado á ella, que vestirá hopa negra, será conducido al patíbulo en el carruaje destinado al efecto, ó donde no lo hubiere, en carro (1).

Art. 104. El cadáver del ejecutado quedará expuesto en el patíbulo hasta una hora antes de oscurecer, en la que será sepultado, entregándolo á sus parientes ó amigos para este objeto, si lo solicitaren. El entierro no podrá hacerse con pompa.

Art. 105. No se ejecutará la pena de muerte en la mujer que se halle en cinta, ni se le notificará la sentencia en que se le imponga hasta que hayan pasado cuarenta dias despues del alumbramiento.

Art. 106. ~~(1) La pena de cadena perpetua~~ se cumplirán en cualquiera de los puntos destinados á este objeto, en Africa, Canarias ó Ultramar.

Art. 107. Los sentenciados á cadena temporal ó perpétua trabajarán en beneficio del Estado; llevarán siempre una cadena al pié, pendiente de la cintura; se emplearán en trabajos duros y penosos, y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento (2).

Sin embargo, cuando el tribunal, consultando la edad, salud, estado ó cualesquiera otras circunstancias personales del delincuente, creyere que éste debe cumplir la pena en trabajos interiores del establecimiento, lo expresará así en la sentencia.

Art. 108. Los sentenciados á cadena temporal ó perpétua no podrán ser destinados á obras de particulares ni á las públicas que se ejecutaren por empresas ó contratas con el Gobierno.

(1) El Código de 1850 decia: «En caballería ó carro,» y en otro artículo añadía: «El regicida y el parricida serán conducidos al patíbulo con hopa amarilla y un birrete del mismo color, una y otro con manchas encarnadas.»

(2) El Código de 1850 decia: «Pendiente de la cintura ó asida á la de otro penado.»

(1) Las penas de cadena perpetua y temporal, se cumplirán...

Art. 109. El condenado á cadena temporal ó perpétua que tuviere antes de la sentencia 60 años de edad, cumplirá la condena en una casa de presidio mayor.

Si los cumpliera estando ya sentenciado, se le trasladará á dicha casa-presidio, en la que permanecerá durante el tiempo prefijado en la sentencia.

Art. 110. La reclusion perpétua y la temporal se cumplirán en establecimientos situados dentro ó fuera de la Península (1).

Los condenados á ellas estarán sujetos á trabajo forzoso en beneficio del Estado, dentro del recinto del establecimiento (2).

Art. 111. Las penas de relegacion perpétua y temporal se cumplirán en Ultramar en los puntos para ello destinados por el Gobierno.

Los relegados podrán dedicarse libremente, bajo la vigilancia de la autoridad, á su profesion ú oficio, dentro del rádio á que se extiendan los límites del establecimiento penal.

Art. 112. El sentenciado á extrañamiento será expulsado del territorio español para siempre, si fuese perpétuo; y si fuese temporal por el tiempo de la condena.

Art. 113. Las penas de presidio se cumplirán en los establecimientos destinados para ello, los cuales estarán situados, para el presidio mayor dentro de la Península é islas Baleares ó Canarias, y para el correccional dentro de la Península (3).

(1) El Código de 1850 decia: «Pero dentro de la Península é islas Baleares ó Canarias.»

(2) La disposicion de este párrafo no existia en el Código de 1850.

(3) El Código de 1850 decia: «Para el menor (esto es, presidio) dentro del territorio de la Audiencia que lo imponga, y para el correccional dentro de la provincia en que tuviese su domicilio el penado, y en su defecto en la que hubiese cometido el delito.»

Los condenados á presidio estarán sujetos á trabajos forzosos dentro del establecimiento en que cumplan la condena.

Art. 114. El producto del trabajo de los presidiarios será destinado:

1.º Para hacer efectiva la responsabilidad civil de aquellos, proveniente del delito.

2.º Para indemnizar al establecimiento de los gastos que ocasionaren.

3.º Para proporcionarles alguna ventaja ó ahorro durante su detencion, si lo mereciesen, y para formarles un fondo de reserva, que se les entregará á su salida del presidio, ó á sus herederos, si fallecieren en él (1).

Art. 115. Las penas de prision se cumplirán en los establecimientos destinados para ello, los cuales estarán situados, para la prision mayor dentro de la Península é islas Baleares ó Canarias, y para la correccional dentro del territorio de la Audiencia que la hubiere impuesto (2).

Los condenados á prision no podrán salir del establecimiento en que la sufran durante el tiempo de su condena, y se ocuparán por su propio beneficio en trabajos de su eleccion, siempre que fueren compatibles con la disciplina reglamentaria. Estarán, sin embargo, sujetos á los trabajos del establecimiento hasta hacer efectivas las responsabilidades señaladas en los números 1.º y 2.º del artículo anterior: tambien lo estarán los que no tengan oficio ó modo de vivir conocido y honesto.

Art. 116. Los sentenciados á confinamiento serán conducidos á un pueblo ó distrito situado en las islas Ba-

(1) Se han añadido al Código de 1850 las palabras, *ó á sus herederos si fallecieren en él.*

(2) Reformado en el mismo sentido indicado en nuestra nota al art. 113.



leares ó Canarias, en el cual permanecerán en completa libertad bajo la vigilancia de la autoridad (1).

Los tribunales, para el señalamiento del punto en que deba cumplirse la condena, tendrán en cuenta el oficio, profesion ó modo de vivir del sentenciado, con objeto de que pueda adquirir su subsistencia (2).

Los que fueren útiles por su edad, salud y buena conducta podrán ser destinados, con su anuencia, por el Gobierno al servicio militar (3).

El sentenciado á destierro quedará privado de entrar en el punto ó puntos que se designen en la sentencia y en el rádio que en la misma se señale, el cual comprenderá una distancia de 25 kilómetros al menos y 250 á lo más del punto designado.

Art. 117. El sentenciado á reprension pública la recibirá personalmente en audiencia del tribunal á puerta abierta.

El sentenciado á reprension privada la recibirá personalmente en audiencia del tribunal, á presencia del secretario y á puerta cerrada.

Art. 118. El arresto mayor se sufrirá en la casa pública destinada á este fin en las cabezas de partido.

Lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 115, es aplicable en sus casos respectivos á los condenados á esta pena.

Art. 119. El arresto menor se sufrirá en las casas de ayuntamiento ú otras del público, ó en la del mismo penado, cuando así se determine en la sentencia, sin poder salir de ellas en todo el tiempo de la condena.

(1) El Código de 1850 añadía después de la palabra «Canarias» las siguientes: «ó á un punto aislado de la Península.»

(2) La disposicion de este párrafo no existia en el Código de 1850.

(3) El Código de 1850 añadía después de las palabras «podrán ser destinados,» las siguientes: «Por el Gobierno al servicio militar si fueran solteros y no tuvieran medios con que subsistir.»

## Seccion tercera.

Penas accesorias.

Art. 120. El sentenciado á degradacion será despojado por un alguacil, en audiencia pública del tribunal, del uniforme, traje oficial, insignias y condecoraciones.

El despojo se hará á la voz del presidente, que lo ordenará con esta fórmula: «Despojad á (el nombre del sentenciado) de sus insignias y condecoraciones, de cuyo uso la ley le declara indigno: la ley le degrada por haberse él degradado á sí mismo.»

## TITULO IV.

### DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

Art. 121. La responsabilidad civil establecida en el capítulo II, título II de este libro, comprende:

- 1.º La restitution.
- 2.º La reparacion del daño causado.
- 3.º La indemnizacion de perjuicios.

Art. 122. La restitution deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con abono de deterioros ó menoscabos, á regulacion del Tribunal.

Se hará la restitution aunque la cosa se halle en poder de un tercero, y éste la haya adquirido por un medio legal, salva su repeticion contra quien corresponda.

Esta disposicion no es aplicable en el caso de que el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable (1).

---

(1) El Código de 1850 decia: «Con arreglo á las leyes civiles;» pero en este se han añadido las palabras «para hacerla irreivindicable.»

Art. 123. La reparacion se hará valorándose la entidad del daño por regulacion del Tribunal, atendido el precio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de afeccion del agraviado (1).

Art. 124. La indemnizacion de perjuicios comprenderá, no solo los que se hubieren causado al agraviado, sino tambien los que se hubieren irrogado por razon del delito á su familia ó á un tercero.

Los Tribunales regularán el importe de esta indemnizacion en los mismos términos prevenidos para la reparacion del daño en el artículo precedente.

Art. 125. La obligacion de restituir, reparar el daño é indemnizar los perjuicios, se trasmite á los herederos del responsable.

La accion para repetir la restitucion, reparacion é indemnizacion se trasmite igualmente á los herederos del perjudicado.

Art. 126. En el caso de ser dos ó más los responsables civilmente de un delito ó falta, los tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.

Art. 127. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los autores, los cómplices y los encubridores, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las correspondientes á los demás responsables.

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva primero en los bienes de los autores, despues en los de los cómplices, y por último, en los de los encubridores.

Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria, como la subsidiaria, quedará á salvo

---

(1) El Código de 1850 decia: «El precio *natural* de la cosa.»

la repeticion del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes á cada uno (1).

Art. 128. El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito ó falta, está obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere participado (2).

## TITULO V.

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS Y LOS QUE DURANTE UNA CONDENA DELINQUEN DE NUEVO.

### CAPITULO I.

*De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias.*

Art. 129. Los sentenciados que hubieren quebrantado su condena sufrirán una agravacion en la pena con sujecion á lo que se dispone en las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Los sentenciados á cadena ó reclusion cumplirán sus respectivas condenas, haciéndoles sufrir por un tiempo, que no excederá de tres años, las mayores privaciones que autoricen los reglamentos, y destinándolos á los trabajos más penosos.

Si la pena fuere perpétua, no gozarán del beneficio que concede el art. 29 hasta que hayan cumplido la agravacion en la pena que se les hubiere impuesto.

---

(1) Reformado en el sentido que puede verse consultando el art. 121 del Código de 1850.

(2) Se ha suprimido al final de este título el art. 123 del Código de 1850, que decía así: «Una ley especial determinará los casos y forma en que el Estado ha de indemnizar el agraviado por un delito ó falta, cuando los autores y demás responsables careciesen de medios para hacer la indemnizacion.

Si fuere temporal y la agravacion de pena no pudiere cumplirse dentro del término señalado en la anterior condena, continuarán sujetos á ella hasta extinguir el tiempo de la agravacion.

2.<sup>a</sup> Los sentenciados á relegacion ó á extrañamiento, serán condenados á prision correccional, que no podrá exceder de tres años, debiendo los relegados sufrirla en el punto de la relegacion si fuere posible, y en el más inmediato si no lo fuere, y los extrañados en uno de los establecimientos penales del Reino.

Cumplidas estas condenas, continuarán sufriendo las anteriores.

3.<sup>a</sup> Los sentenciados á presidio, prision ó arresto sufrirán un recargo de la misma pena, que no podrá exceder de la sexta parte del tiempo que les faltare para cumplir su primitiva condena.

4.<sup>a</sup> Los sentenciados á confinamiento serán condenados á prision correccional que no podrá exceder de dos años; y cumplida esta condena, extinguirán la de confinamiento.

5.<sup>a</sup> Los desterrados serán condenados á arresto mayor, cumplido el cual extinguirán la pena de destierro.

6.<sup>a</sup> Los inhabilitados para cargo, derechos de sufragio, profesion ú oficio que los obtuvieren ó ejercieren, cuando el hecho no constituya un delito especial, serán condenados al arresto mayor y multa de 100 á 1.000 pesetas.

7.<sup>a</sup> Los suspensos de cargo, derecho de sufragio, profesion ú oficio que los ejercieren, sufrirán un recargo por igual tiempo al de su primitiva condena y una multa de 50 á 500 pesetas (1).

---

(1) Reformado en el sentido que puede verse consultando el art. 124 del Código de 1850, y generalmente en beneficio de los penados.

Art. 130. Las agravaciones prescritas en el artículo anterior, respecto á los que sufran privacion de libertad, no se aplicarán á los que se fugaren de los establecimientos penales ó de sus destacamentos, sin violencia, intimidacion ni resistencia, sin fractura de puertas ó ventanas, paredes, techos ó suelos, sin usar ganzúas ó llaves falsas, sin escalamiento y sin ponerse de acuerdo con otros penados ó dependientes del establecimiento.

El quebrantamiento de la sentencia, cuando no concurren una ó más de estas circunstancias, será corregido con la cuarta parte de la pena respectivamente señalada en el art. 129 (1).

## CAPITULO II.

*De las penas en que incurren los que despues de haber sido condenados por sentencia firme no cumplida ó durante el tiempo de su condena, delinquen de nuevo.*

Art. 131. Los que cometieren algun delito ó falta despues de haber sido condenados por sentencia firme no empezada á cumplir, ó durante el tiempo de su condena, serán castigados con sujecion á las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Se impondrá en su grado máximo la pena señalada por la ley al nuevo delito ó falta.

2.<sup>a</sup> Los tribunales observarán, en cuanto sean aplicables á este caso, las disposiciones comprendidas en el artículo 88 y regla 1.<sup>a</sup> del art. 89 de este Código.

3.<sup>a</sup> El penado comprendido en este artículo será indultado á los 70 años si hubiere ya cumplido la condena primitiva, ó cuando llegare á cumplirla despues de la edad

---

(1) La disposicion que contiene este articulo no existia en el Código de 1850.

sobredicha, á no ser que por su conducta ó por otras circunstancias no fuere digno de la gracia (1).

## TITULO VI.

DE LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (2).

Art. 132. La responsabilidad penal se extingue:

- 1.º Por la muerte del reo en cuanto á las penas personales siempre, y respecto á las pecuniarias, solo cuando á su fallecimiento no hubiere recaído sentencia firme.
- 2.º Por el cumplimiento de la condena.
- 3.º Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.
- 4.º Por indulto.

El indultado no podrá habitar por el tiempo que, á no haberlo sido, debería durar la condena, en el lugar en que viva el ofendido, sin el consentimiento de éste; quedando en otro caso sin efecto el indulto acordado.

5.º Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos que no puedan dar lugar á procedimiento de oficio.

6.º Por la prescripción del delito.

7.º Por la prescripción de la pena (3).

Art. 133. Los delitos prescriben á los veinte años, cuando señalare la ley al delito la pena de muerte ó de cadena perpétua.

A los quince, cuando señalare cualquiera otra pena aflictiva.

(1) Reformado en sentido análogo al que hemos indicado en nuestras notas al art. 129.

(2) En el Código de 1850 el epígrafe de este título decía: «De la prescripción de las penas.»

(3) Las disposiciones de este artículo no existían en el Código de 1850.

A los diez, cuando señalare penas correccionales.

Exceptúanse los delitos de calumnia á injuria,<sup>(1)</sup> de los cuales el primero prescribirá al año, y el segundo á los seis meses, *y los delitos á los tres meses.*

Las faltas prescriben á los dos meses.

Cuando la pena señalada sea compuesta, se estará á la mayor para la aplicacion de las reglas comprendidas en los párrafos primero, segundo y tercero de este artículo.

El término de la prescripcion comenzará á correr desde el dia en que se hubiere cometido el delito; y si entonces no fuere conocido, desde que se descubra y se empiece á proceder judicialmente para su averiguacion y castigo.

Esta prescripcion se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo á correr de nuevo el tiempo de la prescripcion, desde que aquel termine sin ser condenado, ó se paralice el procedimiento, á no ser por rebeldía del culpable procesado (1).

Art. 134. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

Las de muerte y cadena perpétua, á los veinte años.

Las demás penas aflictivas, á los quince años.

Las penas correccionales, á los diez años.

Las leves, al año.

El tiempo de esta prescripcion comenzará á correr desde el dia en que se notifique personalmente al reo la sentencia firme, ó desde el quebrantamiento de la condena si hubiera ésta comenzado á cumplirse.

Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido para el caso en que el reo se presentare ó sea habido, cuando se ausentare á país extranjero con el cual Es-

---

(1) Las disposiciones de este artículo no existian en el Código de 1850.

*(1) y los comprendidos en el art. 582 de la Ley de Enjuiciamiento.*



paña no haya celebrado tratados de extradición, ó teniendo, no estuviere comprendido en ellos el delito, ó cuando cometiere uno nuevo antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda comenzar á correr de nuevo (1).

Art. 135. La responsabilidad civil nacida de delitos ó faltas, se extinguirá del mismo modo que las demás obligaciones, con sujeción á las reglas de derecho civil (2).

---

(1) El Código de 1850 decía: «Art. 127. Para que tenga lugar la prescripción se necesita que el sentenciado, durante el término de ella, no haya cometido delito alguno ni se haya ausentado de la Península é islas adyacentes.»

(2) La disposición de este artículo no existía en el Código de 1850.



## LIBRO SEGUNDO.

---

### Delitos y sus penas.

#### TITULO I.

##### DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR DEL ESTADO (1).

#### CAPITULO I.

##### *Delitos de traicion.*

Art. 136. El español que indujere á una potencia extranjera á declarar guerra á España, ó se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de cadena perpétua á muerte si llegare á declararse la guerra, y en otro caso con la de cadena temporal en su grado medio á la de cadena perpétua.

Art. 137. Será castigado con la pena de cadena perpétua á muerte:

1.º El español que facilitare al enemigo la entrada en el Reino, la toma de una plaza, puesto militar, buque del Estado ó almacenes de boca ó guerra del mismo.

2.º El español que sedujere tropa española ó que se hallare al servicio de España para que se pase á las filas

---

(1) En el Código de 1850 el epígrafe de este título era: «Delitos contra la religión,» que, como es natural, ha desaparecido por la nueva ley fundamental del Estado.

enemigas ó deserte de sus banderas, estando en campaña.

3.º El español que reclutare en España gente para hacer la guerra á la Pátria bajo las banderas de una potencia enemiga.

Los delitos frustrados de los hechos comprendidos en los números anteriores, serán castigados como si fueren consumados, y las tentativas con la pena inferior en un grado.

Art. 138. Será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo á muerte:

1.º El español que tomare las armas contra la Pátria bajo banderas enemigas.

2.º El español que reclutare en España gente para el servicio de una potencia enemiga, en el caso de que no fuese para que aquella tome parte directa en la guerra contra España.

3.º El español que suministre á las tropas de una potencia enemiga caudales, armas, embarcaciones, efectos ó municiones de boca ó guerra ú otros medios directos y eficaces para hostilizar á España, ó favoreciere el progreso de las armas enemigas de un modo no comprendido en el artículo anterior.

4.º El español que suministrarle al enemigo planos de fortalezas ó de terrenos, documentos ó noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar á España ó de favorecer el progreso de las armas enemigas.

5.º El español que en tiempo de guerra impidiere que las tropas nacionales reciban los auxilios expresados en el número 3.º ó los datos y noticias indicados en el 4.º

Art. 139. La conspiracion para cualquiera de los delitos expresados en los tres artículos anteriores se castigará con la pena de presidio mayor, y la proposicion

para los mismos delitos, con la de presidio correccional.

Art. 140. El extranjero residente en territorio español que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, será castigado con la pena inmediatamente inferior á la señalada en éstos, salvo lo establecido por tratados ó por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos.

Art. 141. Los que cometieren los delitos expresados en los artículos anteriores contra una potencia aliada de España, en el caso de hallarse en campaña contra el enemigo comun, serán castigados con las penas inferiores en un grado á las respectivamente señaladas.

Art. 142. Incurrirán en la pena de cadena perpétua á muerte los Ministros de la Corona que, con infraccion del art. 74 de la Constitucion, autorizaren decreto:

1.º Enajenando, cediendo ó permutando cualquiera parte del territorio español.

2.º Admitiendo tropas extranjeras en el Reino.

3.º Ratificando tratados de alianza ofensiva, que hayan producido la guerra de España con otra potencia.

Art. 143. Serán castigados con la pena de cadena temporal en su grado medio á cadena perpétua, los mencionados en el artículo anterior, que con infraccion del artículo 74 de la Constitucion autorizaren decreto:

1.º Ratificando tratados de alianza ofensiva, que no hayan producido la guerra de España con otra potencia.

2.º Ratificando tratados en que se estipulare dar subsidios á una potencia extranjera (1).

---

(1) Todos los artículos del Código de 1850 correspondientes á los comprendidos en esta seccion han sido reformados. Además se han añadido los artículos 142 y 143.

## CAPITULO II.

*Delitos que comprometen la paz ó la independencia del Estado.*

Art. 144. El ministro eclesiástico que en el ejercicio de su cargo publicare ó ejecutare bulas, breves ó despachos de la corte pontificia ú otras disposiciones ó declaraciones que atacaren la paz ó la independencia del Estado ó se opusieren á la observancia de sus leyes ó provocaren su inobservancia, incurrirá en la pena de extrañamiento temporal.

El lego que las ejecutare, incurrirá en la de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 250 á 2.500 pesetas (1).

Art. 145. El que introdujere, publicare ó ejecutare en el Reino cualquiera orden, disposicion ó documento de un Gobierno extranjero que ofenda á la independencia ó seguridad del Estado, será castigado con las penas de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 250 á 2.500 pesetas, á no ser que de este delito se sigan directamente otros más graves, en cuyo caso será penado como autor de ellos (2).

Art. 146. En el caso de cometerse cualquiera de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores por un funcionario del Estado, abusando de su carácter ó funciones, se le impondrá, además de las penas señaladas en ellos, la de inhabilitacion absoluta perpétua.

Art. 147. El que con actos ilegales, ó que no estén autorizados competentemente, provocare ó diere motivo á

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

una declaracion de guerra contra España por parte de otra potencia, ó expusiere á los españoles á experimentar vejaciones ó represalias en sus personas ó en sus bienes, será castigado con la pena de reclusion temporal si fuere funcionario del Estado, y no siéndolo, con la de prision mayor.

Si la guerra no llegare á declararse, ni á tener efecto las vejaciones ó represalias, se impondrán las penas respectivas en el grado inmediatamente inferior (1).

Art. 148. Se impondrá la pena de reclusion temporal al que violare tregua ó armisticio acordado entre la Nacion española y otra enemiga, ó entre sus fuerzas beligerantes de mar ó tierra.

Art. 149. El funcionario público que abusando de su cargo comprometiere la dignidad ó los intereses de la Nacion española de un modo que no esté comprendido en este capítulo, será castigado con las penas de prision mayor é inhabilitacion perpétua para el cargo que ejerciere (2).

Art. 150. El que sin autorizacion bastante levantara tropas en el Reino para el servicio de una potencia extranjera, cualquiera que sea el objeto que se proponga, ó la nación á quien intente hostilizar, será castigado con las penas de prision mayor y multa de 5.000 á 50.000 pesetas (3).

El que sin autorizacion bastante destinare buques al corso, será castigado con las penas de reclusion temporal y multa de 2.500 á 25.000 pesetas (4).

Art. 151. El que en tiempo de guerra tuviere correspondencia con país enemigo ú ocupado por sus tropas, será castigado:

---

(1) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

(2) Reformado permaneciendo la misma pena.

(3) Reformado aumentando la multa.

(4) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

1.º Con la pena de prision mayor si la correspondencia se siguiere en cifras ó signos convencionales.

2.º Con la de prision correccional si se siguiere en la forma comun y el Gobierno la hubiere prohibido.

3.º Con la de reclusion temporal si en ella se dieren avisos ó noticias de que pueda aprovecharse el enemigo, cualquiera que sea la forma de la correspondencia, y aunque no hubiere precedido prohibicion del Gobierno.

En las mismas penas incurrirá el que ejecutare los delitos comprendidos en este artículo, aunque dirija la correspondencia por país amigo ó neutral para eludir la ley (1).

Si el culpable se propusiere servir al enemigo con sus avisos ó noticias, se observará lo dispuesto en los artículos 137 y 138.

Art. 152. El español culpable de tentativa para pasar á país enemigo, cuando lo hubiere prohibido el Gobierno, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 150 á 1.500 pesetas (2).

### CAPITULO III.

#### *Delitos contra el derecho de gentes.*

Art. 153. El que matare á un Monarca ó Jefe de otro Estado residentes en España, será castigado con la pena de reclusion temporal en su grado máximo á muerte.

El que produjere lesiones graves á las mismas personas, será castigado con la pena de reclusion temporal, y con la de prision mayor si las lesiones fueren leves.

En la última de dichas penas incurrirán los que co-

(1) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la pena.



metieren contra las mismas personas cualquiera otro atentado de hecho no comprendido en los párrafos anteriores (1).

Art. 154. El que violare la inmunidad personal ó el domicilio de un Monarca ó del Jefe de otro Estado, recibidos en España con carácter oficial, ó el de un representante de otra potencia, será castigado con la pena de prision correccional.

Cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el anterior no tuvieren señalada una penalidad recíproca en las leyes del país á que correspondan las personas ofendidas, se impondrá al delincuente la pena que seria propia del delito, con arreglo á las disposiciones de este Código, si la persona ofendida no tuviere el carácter oficial mencionado en el párrafo anterior (2).

#### CAPITULO IV.

##### *Delitos de piratería (3).*

Art. 155. El delito de piratería cometido contra españoles ó súbditos de otra nacion que no se halle en guerra con España, será castigado con la pena de cadena temporal á cadena perpétua (4).

Cuando el delito se cometiere contra súbditos no beligerantes de otra nacion que se halle en guerra con España, será castigado con la pena de presidio mayor (5).

Art. 156. Incurrirán en la pena de cadena perpétua

---

(1) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

(2) La disposicion de este último párrafo no existia en el Código de 1850.

(3) En el Código de 1850 los delitos de piratería no estaban comprendidos en un capitulo especial.

(4) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

(5) La disposicion de este último párrafo no existia en el Código de 1850.

á muerte los que cometan los delitos de que se trata en el párrafo primero del artículo anterior, y en la pena de cadena temporal á cadena perpétua los que cometan los delitos de que habla el párrafo segundo del mismo artículo:

1.º Siempre que hubieren apresado alguna embarcacion al abordaje ó haciéndola fuego.

2.º Siempre que el delito fuere acompañado de asesinato ú homicidio ó de alguna de las lesiones designadas en los artículos 429 y 430 y en los números 1.º y 2.º del 431.

3.º Siempre que fuere acompañado de cualquiera de los atentados contra la honestidad señalados en el capítulo II, título IX de este libro.

4.º Siempre que los piratas hayan dejado algunas personas sin medio de salvarse.

5.º En todo caso el capitan ó patron piratas (1).

## TITULO II.

### DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION (2).

#### CAPITULO I.

*Delitos de lesa magestad, contra las Córtes, el Consejo de Ministros, y contra la forma de gobierno.*

#### Seccion primera.

Delitos de lesa magestad.

Art. 157. Al que matare al Rey se le impondrá la pena de reclusion perpétua á muerte.

---

(1) Reformado en consonancia con los artículos anteriores. Se han suprimido las disposiciones correspondientes á los artículos 158 y 159 del Código de 1859, referentes á los que entregaran á piratas la embarcacion á cuyo bordo fueran, y á los que residiendo en los dominios españoles traficaren con piratas conocidos.

(2) Este título es sin duda alguna el más importante del nuevo Código;

Art. 158. El delito frustrado y la tentativa de delito de que trata el artículo anterior, se castigará con la pena de reclusion temporal en su grado máximo á muerte.

La conspiracion con la de reclusion temporal.

Y la proposicion con la de prision mayor.

Art. 159. Se castigará con la pena de reclusion temporal á reclusion perpétua:

1.º Al que privare al Rey de su libertad personal.

2.º Al que con violencia ó intimidacion graves le obligare á ejecutar un acto contra su voluntad.

3.º Al que le causare lesiones graves, no estando comprendidas en el párrafo primero del art. 158.

Art. 160. En los casos de los números 2.º y 3.º del artículo anterior, si la violencia, la intimidacion ó las lesiones no fueren graves, se impondrá al culpable la pena de reclusion temporal.

Art. 161. Se impondrá tambien la pena de reclusion temporal:

1.º Al que injuriare ó amenazare al Rey en su presencia.

2.º Al que invadiese violentamente la morada del Rey.

Art. 162. Incurrirá en las penas de prision mayor y multa de 500 á 5.000 pesetas el que injuriare ó amenazare al Rey por escrito, y con publicidad fuera de su presencia.

Las injurias y amenazas inferidas en cualquiera otra

pero su misma importancia exige un comentario detenido que nos proponemos hacer con más tiempo y más espacio del que hoy podemos disponer.

Por otra parte, y siendo completamente nuevas casi todas las disposiciones que comprende, omitimos las indicaciones que con referencia al Código de 1850 hemos hecho en otros artículos.

Permitasenos, sin embargo, recomendar el estudio detenido de un título que encierra, por decirlo así, la garantía eficaz de que no seguirán siendo una letra muerta las antiguas franquicias populares y los nuevos derechos individuales consignados en la Constitución de 1869.

forma, serán castigadas con la pena de prision correccional en su grado medio á prision mayor en su grado mínimo si fueren graves, y con la de arresto mayor en su grado medio á prision correccional en su grado mínimo si fueren leves.

Art. 163. El que matare al inmediato sucesor á la Corona, ó al Regente del Reino, será castigado con la pena de reclusion temporal en su grado máximo á muerte.

El delito frustrado y la tentativa se castigarán con la pena de reclusion temporal á muerte.

La conspiracion, con la de prision mayor en sus grados medio y máximo.

Y la proposicion, con la de prision correccional en su grado máximo á prision mayor en su grado mínimo.

Art. 164. Los delitos de que se trata en los artículos precedentes de esta seccion, con excepcion de los comprendidos en el anterior artículo, cometidos contra el inmediato sucesor á la Corona, el consorte del Rey ó el Regente del Reino, serán castigados con las penas inferiores en un grado á las señaladas en ella.

## Seccion segunda.

Delitos contra las Córtes y sus individuos, y contra el Consejo de Ministros.

Art. 165. Serán castigados con la pena de relegacion temporal en su grado máximo á relegacion perpétua los individuos de la familia del Rey, los Ministros, las autoridades y demás funcionarios, así civiles como militares, que cuando vacare la Corona ó el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno del Estado, impidieren á las Córtes reunirse, ó coartaren su derecho para nombrar tutor al Rey menor, ó para elegir la Regencia del Reino, ó no obedecieren á la Regencia, despues de haber esta pres-

tado ante las Córtes juramento de guardar la Constitucion y las leyes.

Art. 166. Incurrirán en la pena de relegacion temporal los Ministros:

1.º Cuando el Rey no cumpliera con el precepto constitucional de reunir las Córtes todos los años, convocándolas á más tardar para el dia 1.º de Febrero.

2.º Cuando el Rey no cumpliera con el precepto constitucional de tenerlas reunidas á lo menos cuatro meses cada año, sin incluir en este tiempo el que invirtieren en su constitucion.

3.º Cuando estuviere reunido uno de los Cuerpos Colegisladores sin estarlo el otro, excepto el caso en que el Senado se constituya en tribunal.

4.º Cuando firmaren Real decreto de disolucion de uno ó de ambos Cuerpos Colegisladores que no tenga la convocatoria de las Córtes para dentro de tres meses.

5.º Cuando firmaren decreto suspendiendo las Córtes, sin consentimiento de éstas, más de una vez, en una legislatura.

Art. 167. Los que invadieran violentamente ó con intimidacion el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores, serán castigados con la pena de relegacion temporal, si estuvieren las Córtes reunidas.

Art. 168. Incurrirán en la pena de confinamiento los que promovieren, dirigieren ó presidieren manifestaciones ú otra clase de reuniones al aire libre en los alrededores del Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores, cuando estén abiertas las Córtes.

Serán considerados como promovedores y directores de dichas reuniones ó manifestaciones los que por los discursos que en ellas pronunciaren, impresos que publicaren ó en ellas repartieren, por lemas, banderas ú otros signos

que ostentaren, ó por cualesquiera otros hechos, deban ser considerados como inspiradores de los actos de aquellas.

Art. 169. Los que sin estar comprendidos en el artículo anterior tomaren parte en las reuniones al aire libre de que en el mismo se trata, serán castigados con la pena de destierro.

Art 170. Los que, perteneciendo á una fuerza armada, intentaren penetrar en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores para presentar en persona y colectivamente peticiones á las Córtes, incurrirán en la pena de relegacion temporal.

Art. 171. Los que, sin pertenecer á una fuerza armada, intentaren penetrar en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores para presentar en persona y colectivamente peticiones á las Córtes, incurrirán en la pena de confinamiento.

El que solo intentare penetrar en ellos para presentar en persona individualmente una ó más peticiones, incurrirá en la de destierro.

Art. 172. Incurrirán tambien en la pena de confinamiento los que, perteneciendo á una fuerza armada, presentaren ó intentaren presentar colectivamente, aunque no fuere en persona, peticiones á cualesquiera de los Cuerpos Colegisladores.

En igual pena incurrirán los que, formando parte de una fuerza armada, las presentaren ó intentaren presentar individualmente, no siendo con arreglo á las leyes de su instituto en cuanto tengan relacion con éste.

Las penas señaladas en este artículo y en el 170 se impondrán respectivamente en su grado máximo á los que ejercieren mando en la fuerza armada.

Art. 173. El que injuriare gravemente á alguno de los Cuerpos Colegisladores hallándose en sesion ó á alguna de

sus comisiones en los actos públicos en que los representan, será castigado con la pena de relegacion temporal.

Cuando la injuria fuere menos grave, la pena será la de confinamiento.

Art. 174. Incurrirán tambien en la pena de confinamiento:

1.º Los que perturbaren gravemente el orden de las sesiones en los Cuerpos Colegisladores.

2.º Los que injuriaren ó amenazaren en los mismos actos á algun Diputado ó Senador.

3.º Los que fuera de las sesiones injuriaren ó amenazaren á un Senador ó Diputado por las opiniones manifestadas ó por los votos emitidos en el Senado ó en el Congreso.

4.º Los que emplearen fuerza, intimidacion ó amenaza grave para impedir á un Diputado ó Senador asistir al Cuerpo Colegislador á que pertenezca, ó por los mismos medios coartaren la libre manifestacion de sus opiniones ó la emision de su voto.

En los casos previstos en los números 2.º, 3.º y 4.º de este artículo la provocacion al duelo se reputará amenaza grave.

Art. 175. Cuando la perturbacion del orden de las sesiones, la injuria, la amenaza, la fuerza, ó la intimidacion de que habla el artículo precedente no fueren graves, el delincuente sufrirá la pena de destierro y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 176. Las penas señaladas en los artículos 168 y siguientes hasta el 175 inclusive, se impondrán en su grado máximo cuando los reos fueren reincidentes.

Art. 177. El funcionario público que cuando estén abiertas las Córtes detuviere ó procesare á un Diputado ó Senador, á no ser hallado *infraganti*, sin permiso del res-

pectivo Cuerpo Colegislador, incurrirá en la pena de inhabilitacion temporal especial.

En la misma pena incurrirá el juez que, cuando hubiere dictado sentencia contra un Senador ó Diputado, en proceso seguido sin el permiso á que se refiere el párrafo anterior, llevare á efecto dicha sentencia sin que el Cuerpo Colegislador á que pertenezca el procesado hubiere autorizado su ejecucion.

Tambien serán castigados con la misma pena de inhabilitacion temporal especial los funcionarios administrativos ó judiciales que detuvieren á un Senador ó Diputado hallados *infraganti* sin dar cuenta á las Córtes inmediatamente cuando estuvieren abiertas, ó dejaren tambien de dar cuenta á las Córtes, tan luego como se reunieren, del arresto de cualquiera de sus individuos que hubieren ordenado, ó del proceso que contra cualquiera de aquellos hubieren incoado durante la suspension de las sesiones.

Art. 178. Incurrirán en la pena de relegacion temporal:

1.º Los que invadieren violentamente ó con intimidacion el local donde esté constituido y deliberando el Consejo de Ministros.

2.º Los que coartaren ó por cualquier medio pusieren obstáculos á la libertad de los Ministros reunidos en Consejo.

Art. 179. Incurrirán en la pena de confinamiento:

1.º Los que calumniaren, injuriaren ó amenazaren gravemente á los Ministros constituidos en Consejo.

2.º Los que emplearen fuerza ó intimidacion graves para impedir á un Ministro concurrir al Consejo.

Art. 180. Cuando la calumnia, la injuria, la amenaza, la fuerza ó la intimidacion de que se habla en los artículos precedentes no fueren graves, se impondrá al culpable la pena en el grado mínimo.



La provocacion al duelo se reputará siempre amenaza grave.

## Seccion tercera.

Delitos contra la forma de gobierno.

Art. 181. Son reos de delito contra la forma de gobierno establecida por la Constitucion, los que ejecutaren cualquiera clase de actos ó hechos encaminados directamente á conseguir por la fuerza, ó fuera de las vías legales, uno de los objetos siguientes:

1.º Reemplazar el gobierno monárquico-constitucional por un gobierno monárquico-absoluto ó republicano.

2.º Despojar en todo ó en parte á cualquiera de los Cuerpos Colegisladores, al Rey, al Regente ó á la Regencia de las prerogativas y facultades que les atribuye la Constitucion.

3.º Variar el órden legítimo de sucesion á la Corona, ó privar á la dinastía de los derechos que la Constitucion le otorga.

4.º Privar al padre del Rey, ó en su defecto á la madre, y en defecto de ambos al Consejo de Ministros, de la facultad de gobernar provisionalmente al Reino hasta que las Córtes nombren la Regencia, cuando el Rey se imposibilitare para ejercer su autoridad ó vacare la Corona, siendo de menor edad el inmediato sucesor.

Art. 182. Delinquen tambien contra la forma de gobierno:

1.º Los que en las manifestaciones políticas, en toda clase de reuniones públicas ó en sitios de numerosa concurrencia, dieren vivas ú otros gritos que provocaren aclamaciones directamente encaminadas á la realizacion de

cualquiera de los objetos determinados en el artículo anterior.

2.º Los que en dichas reuniones y sitios pronunciaren discursos ó leyeren ó repartieren impresos ó llevaren lemas y banderas que provocaren directamente á la realizacion de los objetos mencionados en el artículo anterior.

Art. 183. Delinquen además contra la forma de gobierno los funcionarios públicos que dieren cumplimiento á mandato ú orden que el Rey dictare en ejercicio de su autoridad, sin estar firmado por el Ministro á quien corresponda.

Art. 184. Los que se alzaren públicamente en armas y en abierta hostilidad para perpetrar cualquiera de los delitos previstos en el art. 181 serán castigados con las penas siguientes:

1.º Los que hubieren promovido el alzamiento ó lo sostuvieren ó lo dirigieren ó apareciaren como sus principales autores, con la pena de reclusion temporal en su grado máximo á muerte.

2.º Los que ejercieren un mando subalterno, con la de reclusion temporal á muerte, si fueren personas constituidas en autoridad civil ó eclesiástica, ó si hubiere habido combate entre la fuerza de su mando y la fuerza pública fiel al Gobierno, ó aquella hubiere causado estragos en las propiedades de los particulares, de los pueblos ó del Estado, cortado las líneas telegráficas ó las vías férreas, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones ó distraído los caudales públicos de su legítima inversion.

Fuera de estos casos, se impondrá al culpable la pena de reclusion temporal.

3.º Los meros ejecutores del alzamiento, con la pena de prision mayor en su grado medio á reclusion temporal

en su grado mínimo, en los casos previstos en el párrafo primero del número anterior, y con la de prision mayor en toda su extension, en los comprendidos en el párrafo segundo del propio número.

Art. 185. Los que sin alzarse en armas y en abierta hostilidad contra el Gobierno, cometieren alguno de los delitos previstos en el mencionado art. 181 serán castigados con la pena de prision mayor.

Art. 186. El que cometiere cualquiera de los delitos comprendidos en el art. 182 será castigado con la pena de destierro.

Art. 187. El funcionario público responsable del delito previsto en el art. 183 sufrirá la pena de inhabilitacion temporal especial.

## Seccion cuarta.

Disposicion comun á las tres secciones anteriores.

Art. 188. Lo dispuesto en los artículos que comprenden de este capítulo se entiende sin perjuicio de lo ordenado en otros de este Código que señalen mayor pena á cualquiera de los hechos en aquellos castigados.

## CAPITULO II.

*De los delitos cometidos con ocasion del ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitucion.*

### Seccion primera.

Delitos cometidos por los particulares con ocasion del ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitucion.

Art. 189. No son reuniones ó manifestaciones pacíficas:

1.º Las que se celebraren con infraccion de las disposiciones de policia establecidas con carácter general ó permanente en el lugar en que la reunion ó manifestacion tenga efecto.

2.º Las reuniones al aire libre ó manifestaciones políticas que se celebraren de noche.

3.º Las reuniones ó manifestaciones á que concurriere un número considerable de ciudadanos con armas de fuego, lanzas, sables, espadas ú otras armas de combate.

4.º Las reuniones ó manifestaciones que se celebraren con el fin de cometer alguno de los delitos penados en este Código, ó las en que, estando celebrándose, se cometiere alguno de los delitos penados en el título III, libro 2.º del mismo.

Art. 190. Los promovedores y directores de cualquiera reunion ó manifestacion que se celebrare sin haber puesto por escrito en conocimiento de la autoridad con veinticuatro horas de anticipacion el objeto, tiempo y lugar de la celebracion, incurrirán en la pena de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 191. Los promovedores y directores de cualquiera reunion ó manifestacion comprendida en alguno de los casos del art. 189, incurrirán en la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio, y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 192. En los casos de los artículos precedentes, si la reunion ó manifestacion no hubiere llegado á celebrarse, la pena personal será la inmediatamente inferior en grado.

Art. 193. Para la observancia de lo dispuesto en los artículos anteriores, se reputarán como directores de la reunion ó manifestacion los que, por los discursos que en ellas pronunciaren, por los impresos que hubieren publi-

cado ó hubieren en ellas repartido, por los lemas, banderas ú otros signos que en ellas hubieren ostentado, ó por cualesquiera otros hechos aparecieren como inspiradores de los actos de aquellas.

Art. 194. Los meros asistentes á las reuniones ó manifestaciones comprendidas en los números 1.º, 2.º y 4.º del art. 189 serán castigados con la pena de arresto mayor.

Art. 195. Incurrirán respectivamente en las penas inmediatamente superiores en grado, los promovedores, directores y asistentes á cualquiera reunion ó manifestacion, si no la disolvieren á la segunda intimacion que al efecto hicieren las autoridades ó sus agentes.

Art. 196. Los que concurrieren á reuniones ó manifestaciones llevando armas de fuego, lanzas, espadas, sables ú otras armas blancas de combate, serán castigados con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio.

Art. 197. Los asistentes á reuniones ó manifestaciones que durante su celebracion cometieren alguno de los delitos penados en este Código, incurrirán en la pena correspondiente al delito que cometieren, y podrán ser aprehendidos en el acto por la autoridad, ó sus agentes ó en su defecto por cualquiera de los demás asistentes.

Art. 198. Se reputan asociaciones ilícitas:

1.º Las que por su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral pública.

2.º Las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos penados en este Código.

Art. 199. Incurrirán en la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.500 pesetas:

1.º Los fundadores, directores y presidentes de aso-

ciaciones que se establecieran y estuvieran comprendidas en alguno de los números del artículo anterior.

Si la asociacion no hubiere llegado á establecerse, la pena personal será la inmediatamente inferior en grado.

2.º Los fundadores, directores y presidentes de asociaciones que se establecieren sin haber puesto en conocimiento de la autoridad local su objeto y estatutos con ocho dias de anticipacion á su primera reunion, ó veinticuatro horas antes de la sesion respectiva, el lugar en que hayan de celebrarse éstas, aun en el caso en que llegare á cambiarse por otro el primeramente elegido.

3.º Los directores ó presidentes de asociaciones que no permitieran á la autoridad ó á sus agentes la entrada ó la asistencia á las sesiones.

4.º Los directores ó presidentes de asociaciones que no levanten la sesion á la segunda intimacion que con este objeto hagan la autoridad ó sus agentes.

Art. 200. Incurrirán en la pena de arresto mayor:

1.º Los meros individuos de asociaciones comprendidas en el art. 198.

Cuando la asociacion no hubiere llegado á establecerse, las penas serán reprension pública y multa de 125 á 1.250 pesetas.

2.º Los meros asociados que cometieren el delito comprendido en el núm. 3.º del artículo anterior.

3.º Los meros asociados que no se retiren de la sesion á la segunda intimacion que la autoridad ó sus agentes hagan para que las sesiones se suspendan.

Art. 201. Incurrirán en las penas inmediatamente superiores en grado á las respectivamente señaladas en los dos artículos anteriores, los fundadores, directores, presidentes é individuos de asociaciones que vuelvan á celebrar sesion, despues de haber sido suspendida por la autoridad

ó sus agentes, mientras que la judicial no haya dejado sin efecto la suspension ordenada.

Art. 202. Incurrirán en la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 250 á 2.500 pesetas los que fundaren establecimientos de enseñanza que por su objeto ó circunstancias sean contrarios á la moral pública.

Art. 203. Incurrirán en la pena de arresto mayor:

1.º Los autores, directores, editores ó impresores, en sus respectivos casos, de publicaciones clandestinas.

Se entienden por tales las que no lleven pié de imprenta ó le lleven supuesto.

2.º Los directores, editores ó impresores, tambien en sus respectivos casos, de publicaciones periódicas que no hayan puesto en conocimiento de la autoridad local el nombre del director, antes de salir aquella á luz.

En la misma pena incurrirán los mencionados en este artículo cuando no pusieren en conocimiento de la autoridad local, antes de salir á luz la publicacion periódica, el nombre del editor si aquella lo tuviere.

## Seccion segunda.

De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos individuales sancionados por la Constitucion.

Art. 204. El funcionario público que arrogándose atribuciones judiciales impusiere algun castigo equivalente á pena personal, incurrirá:

1.º En la pena de inhabilitacion absoluta temporal, si el castigo impuesto fuere equivalente á pena aflictiva.

2.º En la pena de suspension en sus grados medio y máximo, si fuere equivalente á pena correccional.

3.º En la de suspension en sus grados mínimo y medio si fuere equivalente á pena leve.

Art. 205. Si la pena arbitrariamente impuesta se hubiere ejecutado, además de las determinadas en el artículo anterior, se aplicará al funcionario culpable la misma pena impuesta y en el mismo grado.

No habiéndose ejecutado la pena, se le aplicará la inmediatamente inferior en grado, si aquella no hubiere tenido efecto por causa independiente de su voluntad.

Art. 206. Cuando la pena arbitrariamente impuesta fuere pecuniaria, el funcionario culpable será castigado:

1.º Con la de inhabilitacion absoluta temporal y multa del tanto al triplo, si la pena por él impuesta se hubiere ejecutado.

2.º Con la de suspension en sus grados medio y máximo y multa de la mitad al tanto, si no se hubiere ejecutado por causa independiente de su voluntad.

3.º Con la de suspension en sus grados mínimo y medio, si no se hubiere ejecutado por revocacion voluntaria del mismo funcionario.

Art. 207. Las autoridades y funcionarios civiles y militares, que aun hallándose en suspenso las garantías constitucionales, establecieren una penalidad distinta de la prescrita previamente por la ley para cualquier género de delitos, y los que la aplicaren, incurrirán respectivamente, y segun los casos, en las penas señaladas en los tres artículos anteriores.

Art. 208. La autoridad judicial que entregare indebidamente una causa criminal á otra autoridad ó funcionario militar ó administrativo que ilegalmente se la reclamare, será castigada con la pena de suspension en su grado medio y máximo.

Serán castigados con la pena inmediatamente superior



en grado, la autoridad ó funcionario militar ó administrativo que insistiere en la exigencia de la entrega indebida de la causa, obligando á la autoridad judicial, despues de haberle hecho ésta presente la ilegalidad de la reclamacion.

Art. 209. Si la persona del reo hubiere sido tambien exigida y entregada, las penas serán en sus respectivos casos las inmediatamente superiores en grado á las señaladas en el artículo anterior.

Art. 210. El funcionario público que detuviere á un ciudadano, á no ser por razon de delito, no estando en suspenso las garantías constitucionales, incurrirá en las penas de multa de 125 á 1.250 pesetas, si la detencion no hubiere excedido de tres dias; en la de suspension en sus grados mínimo y medio, si pasando de este tiempo, no hubiere llegado á quince; en la de suspension en su grado máximo á inhabilitacion absoluta temporal en su grado medio, si no habiendo bajado de quince dias, no hubiere llegado á un mes; en la de prision correccional en su grado máximo á prision mayor en su grado mínimo, si hubiere pasado de un mes y no hubiere excedido de un año, y en la de prision mayor en su grado medio á reclusion temporal en toda su extension, si hubiere pasado de un año.

Art. 211. El funcionario público que dilatare el cumplimiento de un mandato judicial para que se ponga en libertad á un preso ó detenido que tuviere á su disposicion, será castigado con las penas inmediatamente superiores en grado á las señaladas en el artículo anterior en proporcion al tiempo de la dilacion.

Art. 212. Incurrirá respectivamente en las penas superiores en grado á las señaladas en el art. 210 el funcionario público, que no siendo autoridad judicial, y no es-

tando en suspenso las garantías constitucionales, detuviere á un ciudadano por razon de delito y no lo pusiere á disposicion de la autoridad judicial, en las veinticuatro horas siguientes á la en que se hubiere hecho la detencion.

Art. 213. Incurrirán tambien en las mismas penas, en sus respectivos casos:

1.º El alcaide de cárcel ó cualquiera otro funcionario público que recibiere en calidad de detenido á cualquier ciudadano y dejare trascurrir veinticuatro horas sin ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial.

2.º El alcaide de cárcel ó cualquier otro funcionario público que no pusiese en libertad al detenido que no hubiere sido constituido en prision en las setenta y dos horas siguientes á la en que aquel hubiere puesto la detencion en conocimiento de la autoridad judicial.

3.º El alcaide de cárcel ó cualquier otro funcionario público que recibiere en calidad de preso á un ciudadano, á no ser en virtud de mandamiento judicial, ó lo retuviere en prision despues de las setenta y dos horas de haberle sido entregado en tal concepto, ó habérsele notificado el auto de prision, sin que durante este tiempo le hubiere sido notificado tambien el auto ratificando aquel.

4.º El alcaide de cárcel ó cualquier otro funcionario público que ocultare un preso á la autoridad judicial.

5.º El alcaide de cárcel ó jefe de establecimiento penal que sin mandato de autoridad judicial tuviere á un preso ó sentenciado incomunicado ó en lugar distinto del que le corresponda.

6.º El alcaide de cárcel ó jefe de establecimiento penal que impusiere á los presos ó sentenciados privaciones indebidas ó usare con ellos de un rigor innecesario.

7.º El alcaide de cárcel ó jefe de establecimiento penal que negare á un detenido ó preso ó á quien le repre-

sentare, certificacion de su detencion ó prision, ó que no diere curso á cualquiera solicitud relativa á su libertad.

8.º El jefe de establecimiento penal que retuviere á un ciudadano en el establecimiento despues de tener noticia oficial de su indulto ó despues de haber extinguido su condena.

Art. 214. Incurrirán en la pena de suspension en sus grados mínimo y medio:

1.º La autoridad judicial que no pusiere en libertad ó no constituyere en prision por auto motivado al ciudadano detenido dentro de las setenta y dos horas siguientes á la en que aquel hubiere sido puesto á su disposicion.

2.º La autoridad judicial que no ratificare el auto de prision ó no lo dejare sin efecto, dentro de las setenta y dos horas siguientes á la en que aquel hubiere sido dictado.

3.º La autoridad judicial que fuera de los casos expresados en los dos números anteriores, retuviere en calidad de preso al ciudadano cuya soltura proceda.

4.º La autoridad judicial que decretare ó prolongare indebidamente la incomunicacion de un preso.

5.º El escribano ó secretario de juzgado ó tribunal que dejare trascurrir el término fijado en el núm. 1.º de este artículo sin notificar al detenido el auto constituyéndole en prision ó dejando sin efecto la detencion.

6.º El escribano ó secretario de tribunal ó juzgado que dilatare indebidamente la notificacion de auto alzando la incomunicacion ó poniendo en libertad á un preso.

7.º El escribano ó secretario de tribunal ó juzgado que dilatare dar cuenta á estos de cualquiera solicitud de un detenido ó preso ó de su representante, relativa á su libertad.

Cuando la demora á que se refieren los números anteriores hubiere durado más de un mes y no hubiere excedido de tres, incurrirán los culpables en sus respectivos casos en la pena de suspension en su grado máximo á inhabilitacion absoluta temporal en su grado medio y multa de 125 á 1.250 pesetas; y si hubiere excedido de dicho tiempo, en la de inhabilitacion absoluta temporal en su grado máximo á inhabilitacion absoluta perpétua y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Art. 215. Incurrirán en las penas de suspension en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas:

1.º El funcionario público que no siendo autoridad judicial y no estando en suspenso las garantías constitucionales, entrare en el domicilio de un español ó extranjero sin su consentimiento, á no ser en los casos y con los requisitos previstos en los párrafos primero y ~~cuarto~~ del art. 5.º de la Constitucion.

2.º El funcionario público que no siendo autoridad judicial y no estando tampoco en suspenso las garantías constitucionales, registrare los papeles de un ciudadano ó extranjero y efectos que se hallaren en su domicilio, á no ser que el dueño hubiere prestado su consentimiento.

Si no devolviere al dueño inmediatamente despues del registro los papeles y efectos registrados, la pena será la inmediatamente superior en grado.

Si los sustrajere y se los apropiare, será castigado como reo de delito de robo con violencia en las personas.

3.º El funcionario público que con ocasion del registro de papeles y efectos de un ciudadano cometiere cualquiera otra vejacion injusta contra las personas ó daño innecesario en sus bienes.

Si los delitos penados en los tres números anteriores fueren cometidos de noche, las penas serán las de suspension en sus grados medio y máximo, y multa de 250 á 2.500 pesetas, salvo lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del núm. 2.º, respecto á los cuales la pena será la inmediatamente superior en grado á las en ellos señaladas.

Art. 216. La autoridad judicial que fuera de los casos previstos en los párrafos primero y ~~cuarto~~ del art. 5.º de la Constitucion, y no estando en suspenso las garantías constitucionales, entrare de noche en el domicilio de un español ó extranjero sin su consentimiento, incurrirá en la pena de suspension en sus grados mínimo y medio, y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 217. En la misma pena incurrirá la autoridad judicial que registrare de noche en el domicilio de un español ó extranjero sus papeles y efectos, á no ser con su consentimiento.

Art. 218. El funcionario público que no siendo autoridad judicial detuviere la correspondencia privada confiada al correo ó recibida y cursada á su destino por la primera estacion telegráfica en que se hubiere entregado, incurrirá en la multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 219. El funcionario público que no siendo autoridad judicial abriere la correspondencia privada confiada al correo, incurrirá en la pena de suspension en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 220. El funcionario público que la sustrajere, será castigado con la pena de inhabilitacion absoluta temporal en sus grados mínimo y medio y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Art. 221. El funcionario público que estando en suspenso las garantías constitucionales desterrare á un ciu-

dadano á una distancia mayor de 250 kilómetros de su domicilio, á no ser en virtud de sentencia judicial, incurrirá en la pena de multa de 125 á 1.250 pesetas.

El funcionario público que no estando en suspenso las garantías constitucionales compeliere á un ciudadano á mudar de domicilio ó residencia, será castigado con la pena de destierro y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 222. El funcionario público que deportare ó extrañare del Reino á un ciudadano, á no ser en virtud de sentencia firme, será castigado con la pena de confinamiento mayor y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Art. 223. El Ministro de la Corona que mandare pagar un impuesto del Estado no votado ó autorizado por las Córtes, será castigado con la pena de inhabilitacion absoluta temporal y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Art. 224. La autoridad que mandare pagar un impuesto provincial ó municipal, no aprobado legalmente por la respectiva Diputacion provincial ó ayuntamiento, será castigado con la pena de suspension en su grado máximo á inhabilitacion absoluta temporal en su grado mínimo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 225. Los <sup>funcionarios públicos</sup> que exigieren á los contribuyentes para el Estado, la provincia ó el municipio el pago de impuestos no autorizados, segun su clase respectiva, por las Córtes, la Diputacion provincial ó el ayuntamiento, incurrirán en la pena de suspension en sus grados medio y máximo á inhabilitacion absoluta temporal en su grado medio y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Si la exaccion se hubiere hecho efectiva, la multa será del tanto al triplo de la cantidad cobrada.

Si la exaccion se hubiere hecho empleando el apremio ú otro medio coercitivo, la pena será la de inhabilitacion absoluta temporal, y la multa sobredicha.

Art. 226. Si el importe cobrado no hubiere entrado, según su clase, en las cajas del Tesoro, de la provincia ó del municipio, por culpa del que la hubiere exigido, será éste castigado como estafador con el grado máximo de la pena que como tal le corresponda.

Art. 227. Las autoridades que presten su auxilio y cooperacion á los funcionarios mencionados en los dos artículos anteriores, incurrirán en las penas de inhabilitacion absoluta temporal en sus grados mínimo y medio, y multa de 125 á 1.250 pesetas.

En el caso en que se hubieren lucrado de las cantidades cobradas, serán castigadas como co-autores del delito penado en el artículo anterior.

Art. 228. El funcionario público que expropiare de sus bienes á un ciudadano ó extranjero para un servicio ú obra pública, á no ser en virtud de sentencia ó mandamiento judicial, y con los requisitos prevenidos en las leyes, incurrirá en las penas de suspension en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

En la misma pena incurrirá el que lo perturbare en la posesion de sus bienes, á no ser en virtud de mandato judicial.

Art. 229. Serán castigados con las penas de suspension en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas:

1.º El funcionario público que no estando en suspension las garantías constitucionales prohibiere ó impidiere á un ciudadano, no detenido ni preso, concurrir á cualquiera reunion ó manifestacion pacífica.

2.º El funcionario público que en el mismo caso le impidiere ó prohibiere formar parte de cualquiera asociacion, á no ser alguna de las comprendidas en el art. 198 de este Código.

3.º El funcionario público que en el mismo caso de los artículos anteriores prohibiere ó impidiere á un ciudadano dirigir solo ó en union con otros peticiones á las Córtes, al Rey ó á las autoridades.

Art. 230. El funcionario público que impidiere por cualquier medio la celebracion de una reunion ó manifestacion pacíficas de que tuviere conocimiento oficial, ó la fundacion de cualquiera asociacion que no esté comprendida en el art. 198 de este Código, ó la celebracion de sus sesiones, á no ser las en que se hubiere cometido alguno de los delitos penados en el título III, libro 2.º del mismo, incurrirá en la pena de suspension en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 231. Serán castigados con la pena de suspension en su grado máximo á inhabilitacion absoluta temporal en su grado mínimo y multa de 250 á 2.500 pesetas:

1.º El funcionario público que ordenare la disolucion de alguna reunion ó manifestacion pacífica.

2.º El funcionario público que ordenare la suspension de cualquiera asociacion no comprendida en el art. 198 de este Código.

Art. 232. El funcionario público que no pusiere en conocimiento de la autoridad judicial, en las veinticuatro horas siguientes al hecho, la suspension de una asociacion ilícita ó la de la sesion de cualquiera otra asociacion que hubiere acordado y las causas que hayan motivado la suspension ordenada, incurrirá en la pena de suspension en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 233. Incurrirá en las mismas penas el funcionario público que ordenare la clausura ó disolucion de cualquier establecimiento privado de enseñanza, á no ser por motivos racionalmente suficientes de higiene ó moralidad,



y el que no pusiere en conocimiento de la autoridad judicial dicha clausura ó disolucion en las veinticuatro horas siguientes de haber sido llevada á efecto.

Art. 234. Incurrirá en la pena de destierro en sus grados mínimo y medio el funcionario público que, sin haber intimado dos veces consecutivas la disolucion de cualquiera reunion ó manifestacion, ó la suspension de las sesiones de una asociacion, empleare la fuerza para disolverla ó suspenderla, á no ser en el caso de que hubiere precedido agresion violenta por parte de los reunidos, manifestantes ó asociados.

Si del empleo de la fuerza hubieren resultado lesiones leves á alguno ó á algunos de los concurrentes, la pena será la de destierro en sus grados medio y máximo y la misma multa.

Si las lesiones fueren graves, la pena será la de confinamiento en sus grados mínimo y medio y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Si hubiere resultado muerte, la pena será la de confinamiento en su grado máximo á relegacion temporal y multa de 1.250 á 12.500 pesetas.

Art. 235. El funcionario público que una vez disuelta cualquiera reunion, manifestacion, ó suspendida cualquiera asociacion ó su sesion, se negare á poner en conocimiento de la autoridad judicial, que se lo reclamare, las causas que hubieren motivado la disolucion ó suspension, será castigado con la pena de inhabilitacion absoluta temporal y multa de 250 á 2.500 pesetas.

### Seccion tercera.

Delitos relativos al libre ejercicio de los cultos.

Art. 236. Incurrirá en la pena de prision correccio-

nal en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas el que por medio de amenazas, violencias ú otros apremios ilegítimos forzare á un ciudadano á ejercer actos religiosos ó á asistir á funciones de un culto que no sea el suyo.

Art. 237. Incurrirá en las mismas penas señaladas en el artículo anterior el que impidiere, por los mismos medios, á un ciudadano practicar los actos del culto que profese ó asistir á sus funciones.

Art. 238. Incurrirán en la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas:

1.º El que por los medios mencionados en el artículo anterior forzare á un ciudadano á practicar los actos religiosos ó á asistir á las funciones del culto que éste profese.

2.º El que por los mismos medios impidiere á un ciudadano observar las fiestas religiosas de su culto.

3.º El que por los mismos medios le impidiere abrir su tienda, almacén ú otro establecimiento, ó le forzare á abstenerse de trabajos de cualquiera especie en determinadas fiestas religiosas.

Lo prescrito en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio de las disposiciones generales ó locales de orden público y policía.

Art. 239. Incurrirán en las penas de prision mayor en sus grados mínimo y medio los que tumultuariamente impidieren, perturbaren ó hicieren retardar la celebracion de los actos de cualquier culto en el edificio destinado habitualmente para ello, ó en cualquier otro sitio donde se celebraren.

Art. 240. Incurrirán en las penas de prision correccional en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas:

1.º El que con hechos, palabras, gestos ó amenazas ultrajare al ministro de cualquier culto, cuando se hallare desempeñando sus funciones.

2.º El que por los mismos medios impidiere, perturbare ó interrumpiere la celebracion de las funciones religiosas en el lugar destinado habitualmente á ellas ó en cualquier otro en que se celebraren.

3.º El que escarneciére públicamente alguno de los dogmas ó ceremonias de cualquiera religion que tenga prosélitos en España.

4.º El que con el mismo fin profanare públicamente imágenes, vasos sagrados ó cualesquiera otros objetos destinados al culto.

Art. 241. El que en un lugar religioso ejecutare con escándalo actos que, sin estar comprendidos en ninguno de los artículos anteriores, ofendieren el sentimiento religioso de los concurrentes, incurrirá en la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio.

### Seccion cuarta.

Disposicion comun á las tres secciones anteriores.

Art. 242. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de lo ordenado en otros de este Código que señalen mayor pena á cualquiera de los hechos comprendidos en las tres secciones anteriores.

## TITULO III.

DELITOS CONTRA EL ÓRDEN PÚBLICO.

### CAPITULO I.

#### *Rebelion.*

Art. 243. Son reos de rebelion los que se alzaren

públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Destronar al Rey, deponer al Regente ó Regencia del Reino, ó privarles de su libertad personal ú obligarles á ejecutar un acto contrario á su voluntad.

2.º Impedir la celebracion de las elecciones para Diputados á Cortes <sup>del Reino</sup> en todo el Reino, ó la reunion legítima de las mismas.

3.º Disolver las Cortes ó impedir la deliberacion de alguno de los Cuerpos Colegisladores ó arrancarles alguna resolucion.

4.º Ejecutar cualquiera de los delitos previstos en el artículo 165.

5.º Sustraer el Reino ó parte de él ó algun cuerpo de tropa de tierra ó de mar, ó cualquiera otra clase de fuerza armada, de la obediencia al supremo Gobierno.

6.º Usar y ejercer por sí ó despojar á los Ministros de la Corona de sus facultades constitucionales, ó impedirles ó coartarles su libre ejercicio (1).

Art. 244. Los que induciendo y determinando á los rebeldes, hubieren promovido ó sostuvieren la rebelion, y los caudillos principales de ésta, serán castigados con la pena de reclusion temporal en su grado máximo á muerte.

Art. 245. Los que ejercieren un mando subalterno en la rebelion, incurrirán en la pena de reclusion temporal á muerte, si se encontraren en alguno de los casos previstos en el párrafo primero del núm. 2.º del art. 184; y con la de reclusion temporal si no se encontraren incluidos en ninguno de ellos.

Art. 246. Los meros ejecutores de la rebelion serán castigados con la pena de prision mayor en su grado me-

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850.

dio á reclusion temporal en su grado mínimo en los casos previstos en el párrafo primero del núm. 2.º del artículo 184, y con la de prision mayor en toda su extension no estando en el mismo comprendidos (1).

Art. 247. Cuando la rebellion no hubiere llegado á organizarse con jefes conocidos, se reputarán por tales los que de hecho dirigieren á los demás ó llevarén la voz por ellos ó firmaren los recibos ú otros escritos expedidos á su nombre ó ejercieren otros actos semejantes en representacion de los demás (2).

Art. 248. Serán castigados como rebeldes con la pena de prision mayor:

1.º Los que sin alzarse contra el Gobierno cometieren por astucia ó por cualquier otro medio alguno de los delitos comprendidos en el art. 243.

2.º Los que sedujeren tropas ó cualquiera otra clase de fuerza armada de mar ó de tierra para cometer el delito de rebellion.

Si llegare á tener efecto la rebellion, los seductores se reputarán promovedores y sufrirán la pena señalada en el artículo 244.

Art. 249. La conspiracion para el delito de rebellion será castigada con la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo.

La proposicion será castigada con la prision correccional en su grado mínimo y medio (3).

---

(1) Estos tres artículos han sido reformados en el sentido de disminuir la pena.

(2) Corregida la redaccion del Código de 1850.

(3) Reformado, lo mismo que el 248, en el sentido de disminuir la pena.

## CAPITULO II.

*Sedicion.*

Art. 250. Son reos de sedicion los que se alzan pública y tumultariamente para conseguir por la fuerza, ó fuera de las vías legales, cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Impedir la promulgacion ó la ejecucion de las leyes ó la libre celebracion de las elecciones populares en alguna provincia, circunscripcion ó distrito electoral.

2.º Impedir á cualquiera autoridad, corporacion oficial ó funcionario público el libre ejercicio de sus funciones ó el cumplimiento de sus providencias administrativas ó judiciales.

3.º Ejercer algun acto de odio ó venganza en la persona ó bienes de alguna autoridad ó de sus agentes.

4.º Ejercer, con un objeto político ó social, algun acto de odio ó de venganza contra los particulares ó cualquiera clase del Estado.

5.º Despojar, con un objeto político ó social, de todos ó de parte de sus bienes propios á alguna clase de ciudadanos, al municipio, á la provincia ó al Estado, ó talar ó destruir dichos bienes (1).

Art. 251. Los que induciendo y determinando á los sediciosos hubieren promovido ó sostenido la sedicion y los caudillos principales de esta, serán castigados con la pena de reclusion temporal, si se encontraren en alguno de los casos previstos en el párrafo primero del núm. 2.º

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850 en el sentido de dar mayores garantías al orden y á la propiedad.

del art. 184; y con la de prision mayor si no se encontraren incluidos en ninguno de ellos (1).

Art. 252. Los meros ejecutores de la sedicion, serán castigados con la pena de prision correccional en su grado medio y máximo en los casos previstos en el párrafo primero del núm. 2.º del art. 184 citado; y con la de prision correccional en su grado mínimo y medio no estando en el mismo artículo comprendidos (2).

Art. 253. Lo dispuesto en el art. 247 es aplicable al caso de sedicion cuando ésta no hubiere llegado á organizarse con jefes conocidos.

Art. 254. La conspiracion para el delito de sedicion será castigada con la pena de arresto mayor á prision correccional en su grado mínimo (3).

Art. 255. Serán castigados con la pena de prision correccional en su grado medio y máximo los que sedujeren tropas ó cualquiera otra clase de fuerza armada de mar ó de tierra para cometer el delito de sedicion.

Si llegare á tener efecto la sedicion, los seductores se reputarán promovedores y sufrirán la pena á estos señalada en el art. 251 (4).

Art. 256. En el caso de que la sedicion no hubiere llegado hasta el punto de embarazar de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública, y no hubiere tampoco ocasionado la perpetracion de otro delito grave, los tribunales rebajarán de uno á dos grados las penas señaladas en los artículos de este capítulo (5).

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de agravar la penalidad.

(3) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad. El Código de 1850 castigaba tambien la proposicion.

(4) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(5) Reformado en el sentido de agravar la penalidad.

## CAPITULO III.

*Disposiciones comunes á los dos capítulos anteriores.*

Art. 257. Luego que se manifieste la rebelion-ó sedicion, la autoridad gubernativa intimará hasta dos veces á los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimacion el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente despues de la segunda intimacion, la autoridad hará uso de la fuerza pública para disolverlos.

Las intimaciones se harán mandando ondear al frente de los sublevados la bandera nacional si fuere de dia, y si fuere de noche, requiriendo la retirada á toque de tambor, clarin ú otro instrumento á propósito.

Si las circunstancias no permitieren hacer uso de los medios indicados, se ejecutarán las intimaciones por otros, procurando siempre la mayor publicidad.

No serán necesarias respectivamente la primera ó la segunda intimacion desde el momento en que los rebeldes ó sediciosos rompieren el fuego.

Art. 258. Cuando los rebeldes ó sediciosos se disolvieren ó sometieren á la autoridad legítima, antes de las intimaciones ó á consecuencia de ellas, quedarán exentos de toda pena los meros ejecutores de cualquiera de aquellos delitos, y tambien los sediciosos comprendidos en el art. 251, si no fueren empleados públicos.

Los tribunales en este caso rebajarán á los demás culpables de uno á dos grados las penas señaladas en los dos capítulos anteriores.

Art. 259. Los delitos particulares cometidos en una



rebelion ó sedicion, ó con motivo de ellas, serán castigados respectivamente, segun las disposiciones de este Código.

Cuando no puedan descubrirse sus autores, serán penados como tales los jefes principales de la rebelion ó sedicion.

Art. 260. Las autoridades de nombramiento directo del Gobierno que no hubieren resistido á la rebelion ó sedicion por todos los medios que estuvieren á su alcance, sufrirán la pena de inhabilitacion absoluta temporal á perpétua.

Las que no fueren de nombramiento directo del Gobierno sufrirán la pena de suspension en su grado máximo á inhabilitacion absoluta temporal en su grado medio.

Art. 261. Los empleados que continuaren desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados, ó que sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonaren cuando haya peligro de rebelion ó sedicion, incurrirán en la pena de inhabilitacion especial temporal.

Art. 262. Los que aceptaren empleos de los rebeldes ó sediciosos serán castigados con la pena de inhabilitacion absoluta temporal para cargos públicos en su grado mínimo (1).

#### CAPITULO IV.

*De los atentados contra la autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia (2).*

Art. 263. Cometén atentado:

1.º Los que sin alzarse públicamente emplearen fuer-

---

(1) Estos tres últimos artículos han sido reformados en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) El epígrafe del Código de 1850 decia «De los atentados y desacatos contra la autoridad, y de otros desórdenes públicos.»

za ó intimidación para alguno de los objetos señalados en los delitos de rebelion y sedicion.

2.<sup>o</sup> Los que acometieren á la autoridad ó á sus agentes, ó emplearen fuerza contra ellos, ó los intimaren gravemente, ó les hicieren resistencia tambien grave, cuando se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos ó con ocasion de ellas (1).

Art. 264. Los atentados comprendidos en el artículo anterior, serán castigados con las penas de prision correccional en su grado medio á prision mayor en su grado mínimo y multa de 250 á 2.500 pesetas, siempre que concorra alguna de las circunstancias siguientes:

1.<sup>a</sup> Si la agresion se verificare á mano armada.

2.<sup>a</sup> Si los reos fueren funcionarios públicos.

3.<sup>a</sup> Si los delincuentes pusieren manos en la autoridad.

4.<sup>a</sup> Si por consecuencia de la coaccion, la autoridad hubiere accedido á los exigencias de los delincuentes

Sin estas circunstancias la pena será de prision correccional en su grado mínimo al medio y multa de 150 á 1.500 pesetas.

Se pondrá la pena señalada en el párrafo anterior en su grado máximo á los culpables, cuando hubieren puesto manos en las personas que acudieren en auxilio de la autoridad, ó en sus agentes, ó en los funcionarios públicos (2).

Art. 265. Los que sin estar comprendidos en el artículo 263, resistieren á la autoridad ó á sus agentes, ó los desobedecieren gravemente en el ejercicio de las fun-

---

(1) En vez de las palabras «ó con ocasion de ellas,» el Código de 1850 decia: «y tambien cuando no las ejercieren, siempre que sean conocidas ó se anuncien como tales.»

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

ciones de sus cargos, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

## CAPITULO V.

*De los desacatos, insultos, injurias y amenazas á la autoridad, y de los insultos, injurias y amenazas á sus agentes y á los demás funcionarios públicos.*

Art. 266. Cometén desacato.

1.º Los que, hallándose un Ministro de la Corona ó una autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaren ó insultaren de hecho ó de palabra en su presencia ó en escrito que les dirigieren, ó los amenazaren.

2.º El funcionario público que, hallándose su superior gerárquico en el ejercicio de su cargo, lo calumniare, injuriare ó insultare de hecho ó de palabra en su presencia ó en escrito que le dirigiere, ó le amenazare (2).

Por consecuencia de lo dispuesto en los dos números anteriores, la publicacion por la prensa periódica de los escritos en ellos mencionados, no constituirá por sí sola delito de desacato (3).

Art. 267. Cuando la calumnia, insulto, injuria ó amenaza de que habla el artículo precedente fueren graves, el delincuente sufrirá la pena de prision correccional en su grado mínimo y medio y multa de 150 á 1.500 pesetas.

*Si fueren menos graves, la pena será de arresto mayor*

(1) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido que puede verse consultando los artículos desde el 192 al 206 del Código de 1850.

(3) Este último párrafo no existia en el proyecto presentado por el Gobierno, habiéndole admitido la comision á excitacion del Diputado Sr. Don José Luis Albareda.

en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 268. La provocacion al duelo, aunque sea embozada ó con apariencias de privada, se reputará amenaza grave para los efectos del artículo anterior.

Art. 269. Los que, hallándose un Ministro de la Corona ó una autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con ocasion de éstas, los calumniaren, injuriaren, insultaren de hecho ó de palabra fuera de su presencia ó en escrito que no estuviere á ellos dirigido, serán castigados con la pena de arresto mayor.

Art. 270. Se impondrá tambien la pena de arresto mayor á los que injuriaren, insultaren ó amenazaren de hecho ó de palabra á los funcionarios públicos ó á los agentes de la autoridad en su presencia ó en escrito que se les dirigiere (2).

## CAPITULO VI.

### *Desórdenes públicos.*

Art. 271. Los que causaren tumulto ó turbaren gravemente el órden en la audiencia de un tribunal ó juzgado, en los actos públicos propios de cualquiera autoridad ó corporacion, en algun colegio electoral, oficinas ó establecimiento público; en espectáculos ó solemnidad ó reunion numerosa, serán castigados con las penas de arresto mayor en su grado medio á prision correccional en su grado mínimo y multa de 150 á 1.500 pesetas (3).

---

(1) Reformado en el sentido de agravar la penalidad, á consecuencia de la modificacion que ha experimentado en cuanto á su duracion la prision correccional.

(2) Ni este artículo ni el anterior existian en el Código de 1850.

(3) Corregida la redaccion del Código de 1850.

**Art. 272.** Los que turbaren gravemente el orden público para causar injuria ú otro mal á alguna persona particular, incurrirán en la pena de arresto mayor.

Si este delito tuviere por objeto impedir á alguna persona el ejercicio de sus derechos políticos, se impondrá al culpable la citada pena de arresto mayor en su grado máximo (1).

**Art. 273.** Se impondrá tambien la pena de arresto mayor, á no corresponder una superior con arreglo á otros artículos del Código, á los que dieren gritos provocativos de rebellion ó sedicion en cualquiera reunion ó asociacion ó en lugar público, ú ostentaren en los mismos sitios lemas ó banderas que provocaren directamente á la alteracion del orden público (2).

**Art. 274.** Los que extrajeren de las cárceles ó de los establecimientos penales á alguna persona detenida en ellos, ó la proporcionaren la evasion, serán castigados con la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo, si emplearen al efecto la violencia ó intimidacion ó el soborno, y con la pena de arresto mayor si se valieren de otros medios.

Si la evasion del detenido se verificare fuera de dichos establecimientos, sorprendiendo á los encargados de conducirlos, se aplicarán las mismas penas en su grado mínimo (3).

**Art. 275.** Los que causaren desperfectos en los caminos de hierro ó en las líneas telegráficas ó intercepta-

(1) Este último párrafo ha sido reformado en el sentido de agravar la penalidad.

(2) Reformado en el sentido de disminuir considerablemente la penalidad. Se han suprimido además los artículos inmediatamente posteriores á éste en el Código de 1859 que se referian á los delitos electorales, y al caso de que los delitos penados en aquel capítulo fuesen cometidos por personas constituidas en autoridad civil ó eclesiástica.

(3) Reformado en el sentido de variar esencialmente la penalidad.

ren las comunicaciones ó la correspondencia, serán castigados con la pena de prision correccional en su grado mínimo al medio (1).

Art. 276. A los que destruyeren ó deterioraren pinturas, estátuas ú otro monumento público de utilidad ú ornato, se les aplicará la pena de arresto mayor en su grado medio á prision correccional en su grado mínimo (2).

## CAPITULO VII.

### *Disposiciones comunes á los tres capítulos anteriores.*

Art. 277. Para los efectos de los artículos comprendidos en los tres capítulos precedentes, se reputará autoridad al que por sí solo ó como individuo de alguna corporacion ó tribunal ejerciere jurisdiccion propia.

Se reputarán tambien autoridades los funcionarios del ministerio fiscal.

Art. 278. En el caso de hallarse constituido en autoridad civil ó religiosa el que cometiere cualquiera de los delitos expresados en los tres capítulos anteriores, será castigado con el máximo de la respectiva pena y con la inhabilitacion absoluta temporal.

Art. 279. Los ministros de una religion que en el ejercicio de sus funciones provocaren á la ejecucion de cualquiera de los delitos comprendidos en los tres capítulos anteriores, serán castigados con la pena de destierro, si sus provocaciones no surtieren efecto, y con la de confinamiento mayor si le produjeren, á no ser que correspon-

(1) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

diere, por otros artículos del Código, mayor pena al delito cometido (1).

## TITULO IV.

### DE LAS FALSEDADES.

#### CAPITULO I.

*De la falsificacion de la firma ó estampilla Real, firmas de los Ministros, sellos y marcas.*

#### Seccion primera.

De la falsificacion de la firma ó estampilla Real y firmas de los Ministros.

Art. 280. El que falsificare la firma ó estampilla del Rey ó del Regente del Reino, ó la firma de los Ministros de la Corona, será castigado con la pena de cadena temporal (2).

Art. 281. El que falsificare la firma ó estampilla del Jefe de una potencia extranjera ó la firma de sus Ministros, será castigado con la pena de presidio mayor si hubiere hecho el culpable uso en España de la firma ó estampilla falsificadas, y con la de presidio correccional en su grado medio al máximo, cuando hubiere hecho uso de ellas fuera de España.

Art. 282. El que á sabiendas usare firma ó estampilla falsa de las clases á que se refieren los artículos ante-

---

(1) Las disposiciones de este capítulo no existían en el Código de 1850.

En cambio, se han suprimido las disposiciones del capítulo IV del título III del Código de 1850, que trataba de las asociaciones ilícitas.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

riores, incurrirá en la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada en los mismos para los falsificadores (1).

## Seccion segunda.

De la falsificacion de sellos y marcas.

Art. 283. El que falsificare el sello del Estado será castigado con la pena de cadena temporal.

El que á sabiendas usare el sello falso del Estado, será castigado con la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada en el párrafo anterior.

Art. 284. El que falsificare el sello del Estado de una potencia extranjera y usare de él en España, será castigado con la pena de presidio mayor y con la de presidio correccional en su grado medio al máximo, si hubiere hecho uso de él fuera del Reino (2).

Art. 285. El que constándole la falsedad de los sellos de que se trata en los dos artículos anteriores, y sin haber tenido parte en su falsificacion, se sirviere de ellos ó los usare, será castigado con la pena inmediata inferior á la señalada en los referidos artículos para los falsificadores (3).

Art. 286. La falsificacion de las marcas y sellos de los fieles-contrastes, será castigada con las penas de presidio mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 287. Con la pena señalada en el artículo anterior serán castigados los que á sabiendas expusieren á la

---

(1) Ni la disposicion de este artículo, ni la del anterior, existian en el Código de 1850.

(2) Idem id. id.

(3) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.



venta objetos de oro ó plata marcados con sellos falsos de contraste (1).

Art. 288. La falsificacion de los sellos usados por cualquiera autoridad, tribunal, corporacion oficial ú oficina pública será castigada con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 150 á 1.500 pesetas (2).

El solo uso de esta clase de sellos, á sabiendas de que son falsos, se castigará con igual pena, si tuviere por objeto el lucro con perjuicio de los fondos públicos; en otro caso se impondrá al culpable la pena inmediatamente inferior en grado (3).

Art. 289. La falsificacion de los sellos, marcas y contraseñas de que se usa en las oficinas del Estado para identificar cualquier objeto ó para asegurar el pago de impuestos, será castigada con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 150 á 1.500 pesetas (4).

Art. 290. Si las falsificaciones de que tratan los dos artículos anteriores se hubieren verificado sin emplear timbre, ni sello, ni otro instrumento mecánico propio para la falsificacion, se impondrá al culpable la pena inmediatamente inferior en grado á las señaladas para aquellos delitos (5).

Art. 291. La falsificacion de sellos, marcas, billetes, ó contraseñas que usen las empresas ó establecimientos industriales ó de comercio, será castigada con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio (6).

---

(1) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(3) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(4) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(5) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

(6) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

Art. 292. Será castigado con lá pena de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas el que expendiere objetos de comercio, sustituyendo en ellos la marca ó el nombre del fabricante verdadero por la marca ó nombre de otro fabricante supuesto (1).

Art. 293. Incurrirá tambien en la pena de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas el que hiciere desaparecer de cualquiera sello, billete ó contraseña la marca ó signo que indique haber ya servido ó sido inutilizado para el objeto de su expedicion.

El que usare á sabiendas de esta clase de sellos ó contraseñas incurrirá en la multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

## CAPITULO II.

### *De la falsificacion de moneda.*

Art. 294. El que fabricare moneda falsa, de un valor inferior á la legítima, imitando moneda de oro ó de plata que tenga curso legal en el Reino, será castigado con las penas de cadena temporal en su grado medio á cadena perpétua y multa de 2.500 á 25.000 pesetas, y con la de presidio mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas, si la moneda falsa imitada fuere de vellon (3).

Art. 295. El que cercenare moneda legítima será castigado con las penas de presidio mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas si la moneda fuere de oro ó plata, y con la de presidio correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas, si fuere de vellon.

---

(1) No existia en el Código de 1850.

(2) Idem id. id.

(3) Reformado en el sentido de distinguir entre el fabricante, el introductor y expendedor de moneda falsa, confundidos en una misma penalidad por el Código de 1850.

Art. 296. El que fabricare moneda falsa del valor de la legítima, imitando moneda que tenga curso legal en el Reino, será castigado con las penas de presidio correccional en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 297. El que fabricare moneda falsa, imitando moneda que no tenga curso legal en el Reino, será castigado con las penas de presidio correccional en sus grados medio y máximo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 298. El que cercenare moneda legítima que no tenga curso legal en el Reino, será castigado con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Art. 299. Las penas señaladas en los artículos anteriores se impondrán en sus respectivos casos á los que introdujeran en el Reino moneda falsa.

Con las mismas penas serán castigados tambien los expendedores de moneda falsa, cuando exista connivencia entre ellos y los falsificadores ó introductores.

Art. 300. Los que sin la connivencia de que habla el artículo precedente, expendieren monedas falsas ó cercenadas, que hubieren adquirido sabiendo que lo eran, para ponerlas en circulacion, serán castigados con las penas de presidio correccional en sus grados medio y máximo y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 301. El que habiendo recibido de buena fé moneda falsa la expendiere despues de constarle su falsedad, será castigado, si la expedicion excediere de 125 pesetas, con la multa del tanto al triplo del valor de la moneda.

---

(1) Los artículos anteriores, desde el 295 inclusive, son una consecuencia natural de la reforma á que se refiere nuestra nota al art. 294.

Art. 302. Serán castigados como reos de tentativa de los delitos de expendicion de moneda, aquellos en cuyo poder se encontraren monedas falsas que por su número y condiciones se infiera razonablemente que están destinadas á la expendicion (1).

### CAPITULO III.

*De la falsificacion de billetes de Banco, documentos de crédito, papel sellado, sellos de telégrafos y correos y demás efectos timbrados, cuya expendicion esté reservada al Estado.*

Art. 303. Los que falsificaren billetes de Banco ú otros títulos al portador ó sus cupones, cuya emision hubiere sido autorizada por una ley del Reino, ó los que los introdujeren, serán castigados con las penas de cadena temporal en su grado medio á cadena perpétua y multa de 2.500 á 25.000 pesetas.

La misma pena se impondrá á los que los expendieren en connivencia con el falsificador ó introductor (2).

Art. 304. Los que sin estar en relacion con los falsificadores ó introductores adquirieren, para ponerlos en circulacion, billetes de Banco ú otros títulos al portador ó sus cupones, sabiendo que eran falsos, serán castigados con la pena de cadena temporal.

Art. 305. Serán castigados tambien con la pena de cadena temporal los que falsificaren en España billetes de Banco ú otra clase de títulos al portador ó sus cupones, cuya emision esté autorizada por una ley de un país extranjero ó por una disposicion que tenga en el mismo fuerza de ley (3).

---

(1) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(2) El Código de 1850 no exigia taxativamente la connivencia en el falsificador ó introductor.

(3) Las disposiciones de este artículo y del anterior no existian en el Código de 1850.

Art. 306. Los que habiendo adquirido de buena fé billetes de Banco ú otros títulos al portador ó sus cupones, comprendidos en los artículos 303 y 305, los expendieren, sabiendo su falsedad, serán castigados con las penas de presidio correccional en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas (1).

Art. 307. Los que falsificaren ó introdujeren en el Reino títulos nominativos ú otros documentos de crédito, que no sean al portador, cuya emision esté autorizada en virtud de una ley, serán castigados con las penas de cadena temporal y multa de 2.500 á 5.000 pesetas.

Art. 308. Los que falsificaren títulos nominativos ú otra clase de documentos de crédito que no sean al portador, cuya emision esté autorizada por una ley de un país extranjero ó por una disposicion que tenga en el mismo fuerza de ley, serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado medio á cadena temporal en su grado mínimo.

Art. 309. El que á sabiendas negociare ó de cualquier otro modo se lucrare con perjuicio de tercero de un título falso de los comprendidos en los dos artículos precedentes, incurrirá en las penas de presidio correccional en sus grados medio y mínimo y multa de 150 á 1.500 pesetas.

Art. 310. El que presentare en juicio algun título nominativo al portador ó sus cupones, constándole su falsedad, incurrirá en las penas de presidio correccional en sus grados medio y mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Art. 311. El que falsificare papel sellado, sellos de te-

---

(1) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(2) Las disposiciones de estos cuatro últimos artículos no existían en el Código de 1850.

légrafos ó de correos ó cualquiera otra clase de efectos timbrados, cuya expencion esté reservada al Estado, será castigado con la pena de presidio mayor.

Igual pena se impondrá á los que los introdujerén en el territorio español ó á los que los expendieren en connivencia con los falsificadores ó introductores (1).

Art. 312. Los que sin estar en relacion con los falsificadores ó introductores adquirieren á sabiendas papel, sellos ó efectos falsos de la clase mencionada en el artículo anterior para expenderlos, serán castigados con la pena de presidio correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 150 á 1.500 pesetas (2).

Art. 313. Los que habiendo adquirido de buena fé efectos públicos de los comprendidos en el artículo anterior, los expendieren, sabiendo su falsedad, incurrirán en la pena de arresto mayor en sus grados máximo á prision correccional en su grado mínimo (3).

Los que meramente los usaren, teniendo conocimiento de su falsedad, incurrirán en la multa del quinto al décuplo del valor del papel ó efectos que hubieren usado (4).

---

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(3) Reformado en el sentido de agravar la penalidad.

(4) La disposicion de este párrafo no existia en el Código de 1850.

## CAPITULO IV.

*De la falsificacion de documentos.*

## Seccion primera.

De la falsificacion de documentos públicos, oficiales y de comercio, y de los despachos telegráficos (1).

Art. 314. Sera castigado con las penas de cadena temporal y multa de 500 á 5.000 pesetas el funcionario público que abusando de su oficio, cometiere falsedad:

1.º Contrahaciendo ó fingiendo letra, firma ó rúbrica.

2.º Suponiendo en un acto la intervencion de personas que no la han tenido.

3.º Atribuyendo á las que han intervenido en él declaraciones ó manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

4.º Faltando á la verdad en la narracion de los hechos.

5.º Alterando las fechas verdaderas.

6.º Haciendo en documento verdadero cualquiera alteracion ó intercalacion que varíe su sentido.

7.º Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, ó manifestando en ella cosa contraria ó diferente de la que contenga el verdadero original.

8.º Intercalando cualquiera escritura en un protocolo, registro ó libro oficial.

Será castigado tambien con la pena señalada en el

---

(1) El epígrafe de esta seccion en el Código de 1850 decia «De la falsificacion de documentos públicos ó oficiales y de comercio.»

párrafo primero de este artículo el ministro eclesiástico que incurriere en alguno de los delitos comprendidos en los números anteriores, respecto á actos ó documentos que puedan producir efectos en el estado de las personas ó en el orden civil (1).

Art. 315. El particular que cometiere en documento público ú oficial ó en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, será castigado con las penas de presidio mayor y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Art. 316. El que á sabiendas presentare en juicio ó usare, con intencion de lucro, un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes, será castigado con la pena inferior en dos grados á la señalada á los falsificadores.

Art. 317. Los funcionarios públicos encargados del servicio de los telégrafos que supusieren ó falsificaren un despacho telegráfico, incurrirán en la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo.

El que hiciera uso del despacho falso con intencion de lucro ó deseo de perjudicar á otro, será castigado como el autor de la falsedad (2).

## Seccion segunda.

De la falsificacion de documentos privados.

Art. 318. El que con perjuicio de tercero ó con ánimo de causárselo cometiere en documento privado alguna de las falsedades designadas en el art. 314, será castigado

(1) Corregida la redaccion del articulo que correspondia á éste en el Código de 1850.

(2) Las disposiciones de este artículo y del anterior no existian en el Código de 1850.



con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 250 á 2.500 pesetas (1).

Art. 319. El que sin haber tomado parte en la falsificación, presentare en juicio ó hiciere uso con intencion de lucro ó con perjuicio de tercero y á sabiendas, de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior, incurrirá en la pena inferior en un grado á la señalada á los falsificadores (2).

### Seccion tercera.

De la falsificación de cédulas de vecindad y certificados.

Art. 320. El funcionario público que abusando de su oficio expidiere una cédula de vecindad bajo un nombre supuesto, ó la diere en blanco, será castigado con las penas de prision correccional en sus grados mínimo y medio é inhabilitacion especial temporal.

Art. 321. El que hiciere una cédula de vecindad falsa, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Las mismas penas se impondrán al que en una cédula de vecindad verdadera mudare el nombre de la persona á cuyo favor hubiere sido expedida, ó de la autoridad que la hubiere expedido, ó que alterare en ella alguna otra circunstancia esencial.

Art. 322. El que hiciere uso de la cédula de vecindad de que se trata en el artículo anterior será castigado con multa de 125 á 1.250 pesetas.

En la misma pena incurrirán los que hicieren uso de

---

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad, por la alteracion hecha en cuanto á la duracion del presidio correccional.

(2) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

otra cédula de vecindad verdadera expedida á favor de una persona (1).

Art. 323. El facultativo que librare certificado falso de enfermedad ó lesion con el fin de eximir á una persona de algun servicio público, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 324. El funcionario público que librare certificacion falsa de méritos ó servicios, de buena conducta, de pobreza ó de otras circunstancias análogas, será castigado con las penas de suspension en sus grados medio y máximo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 325. El particular que falsificare una certificacion de la clase designada en los artículos anteriores, será castigado con la pena de arresto mayor.

Esta disposicion es aplicable al que hiciere uso á sabiendas de la certificacion falsa (2).

## CAPITULO V.

### *Disposiciones comunes á los cuatro capítulos anteriores.*

Art. 326. El que fabricare ó introdujere cuños, sellos, marcas ó cualquiera otra clase de útiles é instrumentos destinados conocidamente á la falsificacion de que se trata en los capítulos precedentes de este titulo, será castigado con las mismas penas pecuniarias y con las personales inmediatamente inferiores en grado á las respectivamente señaladas á los falsificadores.

Art. 327. El que tuviere en su poder cualquiera de los útiles ó instrumentos de que se habla en el artículo

---

(1) La redaccion de estos artículos ha sido modificada por consecuencia de la abolicion de los pasaportes y creacion de las cédulas de vecindad.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

anterior y no diere descargo suficiente sobre su adquisicion ó conservacion, será castigado con las mismas penas pecuniarias y las personales inferiores en dos grados á las correspondientes á la falsificacion para que aquellos fueren propios.

Art. 328. El funcionario que para ejecutar cualquiera falsificacion en perjuicio del Estado, de una corporacion ó de un particular de quien dependa, hiciere uso de los útiles ó instrumentos legítimos que le estuvieren confiados, incurrirá en las mismas penas pecuniarias y personales que correspondan á la falsedad cometida, imponiéndoselas en su grado máximo, y además en la de inhabilitacion absoluta temporal en su grado máximo á inhabilitacion absoluta perpétua (1).

Art. 329. Los que sin estar comprendidos en el artículo anterior se apoderaren de los útiles ó instrumentos legítimos que en el mismo se expresan é hicieron uso de ellos para ejecutar cualquiera falsificacion en perjuicio del Estado, de una corporacion ó de un particular á quien pertenecieren, incurrirán en las mismas penas pecuniarias y en las personales inmediatamente inferiores en grado que correspondan á la falsedad cometida (2).

Art. 330. Cuando sea estimable el lucro que hubieren reportado ó se hubieren propuesto los reos de falsificacion penados en este título, se les impondrá una multa del tanto al triplo del lucro, á no ser que el máximo de ella sea menor que el mínimo de la señalada al delito, en cuyo caso se les aplicará esta (3).

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(3) Se han suprimido al final de este capítulo las disposiciones de los artículos 239 y 240 del Código de 1850, que decian así:

«Art. 239. Los culpables de las falsificaciones penadas en este título que se declaren á la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento y

## CAPITULO VI.

*De la ocultacion fraudulenta de bienes ó de industria, del falso testimonio y de la acusacion y denuncias falsas (1).*

Art. 331. El que requerido por el competente funcionario administrativo ocultare el todo ó parte de sus bienes ó el oficio ó la industria que ejerciere con el propósito de eludir el pago de los impuestos que por aquellos ó por esta debiere satisfacer, incurrirá en una multa del tanto al quíntuplo del importe de los impuestos que debiera haber satisfecho, sin que en ningun caso pueda bajar de 125 pesetas (2).

Art. 332. El que en causa criminal diere falso testimonio en contra del reo será castigado:

1.º Con la pena de cadena temporal en su grado máximo á cadena perpétua, si el reo hubiere sido condenado en la causa á la pena de muerte y esta se hubiere ejecutado.

---

revelaren las circunstancias del delito, quedarán exentos de pena, salvo la de sujecion á la vigilancia, que podrán imponerles los tribunales.

•Para gozar de la exencion de este artículo en los casos de falsificacion de moneda y de cualquiera clase de documento de crédito del Estado ó Bancos autorizados por el Gobierno, será además necesario que la delacion se verifique antes de la emision de moneda ó documentos.

•En los demás casos, tambien es precisa la circunstancia de que la falsificacion no haya causado perjuicio á tercero, ó que se haya indemnizado á éste cumplidamente.

•Art. 240. Los tribunales rebajarán de uno á dos grados la pena, imponiéndola en el que estimen conveniente, y conmutarán la de presidio en prision en todos los casos de que trata el capitulo anterior, cuando la falsedad no ocasionare perjuicio efectivo y considerable á tercero, ni hubiese producido grave escándalo.»

El artículo que acabamos de copiar, se añadió al Código de 1848 en la reforma de 1850.

(1) El epígrafe de este capítulo en el Código de 1850, decia: «Del falso testimonio y de la acusacion y denuncia calumniosas.»

(2) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

2.º Con la pena de cadena temporal, si el reo hubiere sido condenado en la causa á la de cadena perpétua y la hubiere empezado á sufrir.

3.º Con la pena de presidio mayor, si el reo hubiere sido condenado en la causa á la de cadena perpétua y no la hubiere empezado á sufrir.

4.º Con la pena de presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio, si el reo hubiere sido condenado en la causa á cualquiera otra pena aflictiva y la hubiere empezado á sufrir.

5.º Con la pena de presidio correccional en su grado medio á la de presidio mayor en su grado mínimo, si el reo hubiere sido condenado en la causa á cualquiera otra pena aflictiva y no la hubiere empezado á sufrir.

6.º Con las penas de presidio correccional en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas, si el reo hubiere sido condenado en la causa á pena correccional y la hubiere empezado á sufrir.

7.º Con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio, y multa de 150 á 1.500 pesetas, si el reo hubiere sido condenado en la causa á pena correccional y no la hubiere empezado á sufrir.

8.º Con las penas de arresto mayor en su grado máximo á presidio correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas, si el reo hubiere sido condenado á una pena leve y la hubiere empezado á sufrir.

9.º Con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas, si el reo hubiere sido condenado á pena leve y no la hubiere empezado á sufrir.

II Art. 333. El que en causa criminal diere falso testimonio en favor del reo, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado medio y multa de 150 á 1.500 pesetas, si la

causa fuere por delito, y con la de arresto mayor si fuere por falta.

Art. 334. Al que en causa criminal por delito diere falso testimonio que no perjudique ni favorezca al reo, se le impondrá la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio (1).

Art. 335. El falso testimonio en causa civil será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo á presidio correccional en su grado medio y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Si el valor de la demanda no excediere de 50 duros las penas serán la de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Art. 336. Las penas de los artículos precedentes son aplicables en su grado máximo á los peritos que decláren falsamente en juicio.

Art. 337. Siempre que la declaracion falsa del testigo ó perito fuere dada mediante cohecho, las penas serán las inmediatas superiores en grado á las respectivamente designadas en los artículos anteriores, imponiéndose además la multa del tanto al triplo del valor de la promesa ó dádiva.

Esta última será decomisada cuando hubiere llegado á entregarse al sobornado.

Art. 338. Cuando el testigo ó perito, sin faltar sustancialmente á la verdad, la alteraren con reticencias ó inexactitudes, las penas serán:

1.º Multa de 150 á 1.500 pesetas, si la falsedad recayere en causa sobre delito.

---

(1) Además de algunas variaciones de método muy aceptables, estos tres últimos artículos han sido reformados en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) El Código de 1850 decía: *Las de arresto mayor y multa, etc.*

2.º De 125 á 1.250 pesetas, si recayere en juicio sobre falta ó en negocio civil (1).

Art. 339. El que presentare á sabiendas testigos ó documentos falsos en juicio, será castigado como reo de falso testimonio.

*7º* Art. 340. Se comete el delito de acusacion ó denuncia falsa imputando falsamente á alguna persona hechos, que si fueren ciertos, constituirian delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio, si esta imputacion se hiciera ante funcionario administrativo ó judicial, que por razon de su cargo, debiera proceder á su averiguacion ó castigo.

No se procederá, sin embargo, contra el denunciador ó acusador sino en virtud de sentencia firme, ó auto, tambien firme, de sobreseimiento del tribunal que hubiere conocido del delito imputado.

Este mandará proceder de oficio contra el denunciador ó acusador siempre que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir el nuevo proceso (2).

Art. 341. El reo de acusacion ó denuncia falsa, será castigado con la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo, cuando el delito imputado fuere grave; con la de prision correccional en sus grados mínimo y medio, si fuere el delito imputado menos grave, y con la de arresto mayor, si la imputacion hubiere sido de una falta, imponiéndose además en todo caso una multa de 250 á 2.500 pesetas (3).

(1) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(2) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

(3) Corregida la redaccion del articulo correspondiente á este en el Código de 1850.

## CAPITULO VII.

*De la usurpacion de funciones, calidad y títulos y uso indebido de nombres, trajes, insignias y condecoraciones (1).*

Art. 342. El que sin título ó causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad ó funcionario público, atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio.

Art. 343. El que atribuyéndose la cualidad de profesor ejerciere públicamente actos propios de una facultad que no pueda ejercerse sin título oficial, incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo.

Art. 344. El que usurpare carácter que habilite para el ejercicio de los actos propios de los ministros de un culto que tenga prosélitos en España ó ejerciere dichos actos, incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo.

Art. 345. El que usare y públicamente se atribuyere títulos de nobleza que no le pertenecieran, incurrirá en la multa de 250 á 2.500 pesetas.

---

(1) El epígrafe de este capítulo en el Código de 1850 decía: «De la usurpacion de funciones, calidad y nombres supuestos.» Por lo demás, aquel capítulo contenia solo las disposiciones siguientes:

«Art. 250. El que usurpare carácter que habilite para la administracion de sacramentos y ejerciere actos propios de él, será castigado con la pena de presidio mayor: si la usurpacion fuere del carácter de diácono ó subdiácono, la pena será la de presidio correccional.

«Art. 251. El que se fingiere autoridad, empleado público ó profesor de una facultad que requiera título, y ejerciere actos propios de dicha profesion ó cargos, será castigado, en el primer caso, con la pena de prision menor, y en el segundo y tercero con la de prision correccional.

«Art. 252. El simple uso del hábito, insignias ó uniformes propios del estado clerical ó de un cargo público, será castigado con arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.»



Art. 346. El que usare públicamente un nombre supuesto, incurrirá en las penas de arresto mayor en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Cuando el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algun delito, eludir una pena ó causar algun perjuicio al Estado ó á los particulares, se impondrán al culpable las penas de arresto mayor en sus grados medio y máximo y multa de 150 á 1.500 pesetas.

No obstante lo dispuesto en este artículo, el uso de nombre supuesto podrá ser autorizado temporalmente por la autoridad superior administrativa, mediando justa causa.

Art. 347. El funcionario público que en los actos propios de su cargo atribuyere á cualquiera persona, en connivencia con ella, títulos de nobleza ó nombre que no le pertenezca, incurrirá en la multa de 150 á 1.500 pesetas.

Art. 348. El que usare pública é indebidamente uniforme ó traje propios de un cargo que no ejerciera, ó de una clase á que no perteneciera, ó de un estado que no tuviera, ó insignias ó condecoraciones que no estuviera autorizado para llevar, será castigado con la pena de multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

---

(1) El uso indebido de cruces y condecoraciones se castigaba como falta en el Código de 1850.

## TITULO V (1).

DE LA INFRACCION DE LAS LEYES SOBRE INHUMACIONES, DE  
LA VIOLACION DE SEPULTURAS Y DE LOS DELITOS CONTRA  
LA SALUD PÚBLICA.

### CAPITULO I.

*De la infraccion de las leyes sobre inhumaciones y de la violacion de sepulturas.*

Art. 349. El que practicare ó hubiere hecho practicar una inhumacion, contraviniendo á lo dispuesto por las leyes ó reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, incurrirá en las penas de arresto mayor y multa de 150 á 1.500 pesetas.

Art. 350. El que violare los sepulcros ó sepulturas, practicando cualesquiera actos que tiendan directamente á faltar al respeto debido á la memoria de los muertos, será condenado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

### CAPITULO II.

*De los delitos contra la salud pública.*

Art. 351. El que sin hallarse competentemente au-

---

(1) El titulo correspondiente á éste en el Código de 1850 tenia un solo capitulo con el epigrafe «Delitos contra la salud pública.»

(2) Las disposiciones de estos dos articulos no existian en el Código de 1850, por más que bajo el epigrafe de «Delitos contra la religion» se encontrase el art. 138, que decia así: «El que exhumare cadáveres humanos, los mutilare ó profanare de cualquier otra manera, será castigado con la pena de prision correccional.»

torizado elaborar sustancias nocivas á la salud, ó productos químicos que puedan causar grandes estragos para expendarlos, ó los despachare, ó vendiere ó comerciare con ellos, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 352. El que hallándose autorizado para el tráfico de sustancias que puedan ser nocivas á la salud, ó productos químicos de la clase expresada en el artículo anterior, los despachare ó suministrar, sin cumplir con las formalidades prescritas en los reglamentos respectivos, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 353. Los farmacéuticos que despacharen medicamentos deteriorados ó sustituyeren unos por otros, ó los despacharen sin cumplir con las formalidades prescritas en las leyes y reglamentos, serán castigados con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Si por efecto del despacho del medicamento hubiere resultado la muerte de una persona, se impondrá al culpable la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo y la multa de 250 á 2.500 pesetas (2).

Art. 354. Las disposiciones de los dos artículos anteriores son aplicables á los que trafiquen con las sustancias ó productos expresados en ellos y á los dependientes de los farmacéuticos cuando fueren los culpables.

Art. 355. El que exhumare ó trasladare los restos humanos con infraccion de los reglamentos y demás dis-

---

(1) El Código de 1850 consideraba como faltas el despachar medicamentos en virtud de recetas que no se hallaren debidamente autorizadas ó sustituir unos medicamentos por otros.

(2) Este último párrafo no existía en el artículo correspondiente del Código de 1850.

posiciones de sanidad, incurrirá en la multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 356. El que con cualquiera mezcla nociva á la salud alterare las bebidas ó comestibles destinados al consumo público, ó vendiere géneros corrompidos, ó fabricare ó vendiere objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo á la salud, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Los géneros alterados y los objetos nocivos serán siempre inutilizados (2).

Art. 357. Se impondrá tambien la pena señalada en el artículo anterior:

1.º Al que escondiere ó sustrajere ~~para venderlos como~~ efectos destinados á ser inutilizados ó desinfectados, *con ánimo de venderlos ó comprarlos.*

2.º Al que arrojase en fuente, cisterna ó rio, cuya agua sirva de bebida, algun objeto que haga al agua nociva para la salud (3).

## TITULO VI (4).

### DE LOS JUEGOS Y RIFAS.

Art. 358. Los banqueros y dueños de casas de juego de suerte, envite ó azar, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas; y en caso de reincidencia, con las de arresto mayor en su grado má-

(1) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

(2) Este último párrafo, no existia en el artículo correspondiente del Código de 1850.

(3) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

(4) El título VI del libro 2.º del Código de 1850 trataba «de la vagancia y mendicidad,» que no son penables con arreglo al nuevo Código.

ximo á prision correccional en su grado mínimo y doble multa.

Los jugadores que concurrieren á las casas referidas, con las de arresto mayor en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

En caso de reincidencia, con la de arresto mayor en su grado medio y doble multa (1).

Art. 359. Los empresarios y expendedores de billetes de loterías ó rifas no autorizadas serán castigados con la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Los que en el juego ó rifa usaren de medios fraudulentos para asegurar la suerte, serán castigados como estafadores.

Art. 360. El dinero ó efectos y los instrumentos y útiles destinados al juego ó rifa caerán en comiso (2).

## TITULO VII.

DE LOS DELITOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS (3).

### CAPITULO I.

#### *Prevaricacion.*

Art. 361. El juez que, á sabiendas, dictare sentencia injusta contra el reo, en causa criminal por delito, incurrirá en la pena impuesta por la sentencia, si ésta se hu-

(1) Reformado en el sentido de agravar la pena pecuniaria.

(2) Las variaciones introducidas en estos artículos con relacion al Código de 1850 son puramente de método.

(3) Por regla general, donde el Código de 1850 usaba la palabra «emplea-do», el Código reformado dice «funcionario».

biere ejecutado, y además en la de inhabilitacion temporal absoluta en su grado máximo á inhabilitacion perpétua absoluta.

Art. 362. El juez que, á sabiendas, dictare sentencia injusta en contra del reo, cuando ésta no hubiere llegado á ejecutarse, será castigado con la pena inmediatamente inferior en grado á la que en la sentencia injusta hubiere impuesto siendo el delito grave, y con la inmediatamente inferior en dos grados á la que hubiere impuesto, si el delito fuere menos grave.

En todos los casos de este artículo se impondrá tambien al culpable la pena de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial.

Art. 363. Si la sentencia injusta se dictare á sabiendas contra el reo en juicio sobre falta, las penas serán las de arresto mayor á inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial.

Art. 364. El juez que, á sabiendas, dictare sentencia injusta, en causa criminal, á favor del reo, incurrirá en la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio é inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial, si la causa fuere por delito grave; en la de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo é igual inhabilitacion, si la causa fuere por delito menos grave, y en la de arresto mayor en su grado mínimo y suspension, si fuere por falta.

Art. 365. El juez que, á sabiendas, dictare sentencia injusta en causa civil, incurrirá en las penas de arresto mayor en su grado medio á prision correccional en su grado mínimo é inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial.

Art. 366. El juez que, por negligencia ó ignorancia inexcusables, dictare en causa civil ó criminal sentencia manifiestamente injusta, incurrirá en la pena de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion especial perpétua.

Art. 367. El juez que, á sabiendas, dictare providencia interlocutoria injusta, incurrirá en la pena de suspension (1).

Art. 368. El juez que se negare á juzgar, so pretesto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, será castigado con la pena de suspension.

En la misma pena incurrirá el juez culpable de retardo malicioso en la administracion de justicia.

Art. 369. El funcionario público que, á sabiendas, dictare ó consultare providencia ó resolucion injusta en negocio contencioso-administrativo, ó meramente administrativo, incurrirá en la pena de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial (2).

Con la misma pena será castigado el funcionario público que dictare ó consultare, por negligencia ó ignorancia inexcusables, providencia ó resolucion manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo ó meramente administrativo (3).

(1) La reforma en este punto ha sido tan trascendental y extensa, como que en el Código de 1850 solo existia respecto al punto á que se refieren los anteriores artículos las disposiciones siguientes:

«Art. 269. El juez que á sabiendas dictare sentencia definitiva manifiestamente injusta, incurrirá:

1.º En la pena de inhabilitacion perpétua absoluta si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal por delito, y además en la misma pena impuesta por la sentencia, si esta se hubiere ejecutado, y en la inferior en un grado á la señalada por la ley si la sentencia fuera inapelable y absolutoria en causa por delito grave.

2.º En la de inhabilitacion perpétua especial en cualquier otro caso.»

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(3) La disposicion de este último párrafo no existia en el Código de 1850.

Art. 370. El funcionario público que, faltando á la obligacion de su cargo, dejare maliciosamente de promover la persecucion y castigo de los delincuentes, incurrirá en la pena de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial.

Art. 371. Será castigado con una multa de 250 á 2.500 pesetas el abogado ó procurador que, con abuso malicioso de su oficio, ó negligencia ó ignorancia inexcusables, perjudicare á su cliente ó descubriere sus secretos, habiendo de ellos tenido conocimiento en el ejercicio de su ministerio (1).

Art. 372. El abogado ó procurador que, habiendo llegado á tomar la defensa de una parte, defendiere despues, sin su consentimiento, á la contraria en el mismo negocio, ó la aconsejare, será castigado con las penas de inhabilitacion temporal especial y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

## CAPITULO II.

### *Infidelidad en la custodia de presos.*

Art. 373. El funcionario público culpable de connivencia en la evasion de un preso cuya conduccion ó custodia le estuviere confiada, será castigado:

1.º En el caso de que el fugitivo se hallare condenado por ejecutoria en alguna pena, con la inferior á esta en dos grados y con la de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial (3).

---

(1) Reformado en el sentido de penar la negligencia ó ignorancia inexcusables, que no se castigaba expresamente por el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(3) Reformado en el sentido de sustituir en algunos casos la inhabilitacion temporal por la perpétua que establecia en todos el Código de 1850.



2.º Con la pena inferior en tres grados á la señalada por la ley al delito por el cual se hallare procesado el fugitivo, si no se le hubiere condenado por ejecutoria, y con la de inhabilitacion especial temporal.

Art. 374. El particular, que hallándose encargado de la conduccion ó custodia de un preso ó detenido, cometiere alguno de los delitos expresados en el artículo precedente, será castigado con las penas inmediatamente inferiores en grado á las señaladas al funcionario público.

### CAPITULO III.

#### *Infidelidad en la custodia de documentos.*

Art. 375. El funcionario público que sustrajere, destruyere ú ocultare documentos ó papeles que le estuvieren confiados por razon de su cargo, será castigado:

1.º Con las penas de prision mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas, siempre que del hecho resultare grave daño de tercero ó de la causa pública.

2.º Con las de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas cuando no fuere grave el daño de tercero ó de la causa pública.

En uno y otro caso se impondrá además la pena de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial.

Art. 376. El funcionario público que teniendo á su cargo la custodia de papeles ó efectos sellados por la autoridad, quebrantare los sellos ó consintiere en su quebrantamiento, será castigado con las penas de prision correccional en su grado mínimo y medio, inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Art. 377. El funcionario público que no estando comprendido en el artículo anterior abriere ó consintiere abrir sin la autorizacion competente papeles ó documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada, incurrirá en las penas de arresto mayor, inhabilitacion temporal especial y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Las penas designadas en los tres artículos anteriores son aplicables tambien á los eclesiásticos y á los particulares encargados accidentalmente del despacho ó custodia de documentos ó papeles por comision del Gobierno, ó de funcionarios á quienes hubieren sido confiados aquellos por razon de su cargo (1).

## CAPITULO IV.

### *De la violacion de secretos.*

Art. 378. El funcionario público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razon de su oficio ó entregare indebidamente papeles ó copia de papeles que tenga á su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspension en su grado mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Si de la revelacion ó de la entrega de papeles resultare grave daño para la causa pública, las penas serán de inhabilitacion especial temporal en su grado máximo á inhabilitacion especial perpétua y prision correccional en sus grados medio y máximo (3).

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850. Por lo demás, se ha reformado en cuanto á la pena de inhabilitacion en el sentido indicado en la nota al art. 373.

(2) El Código de 1850 no penaba taxativamente al funcionario que «entregase indebidamente papeles ó copia de papeles que tenga á su cargo y no deban ser publicados.»

(3) Reformado en el sentido de convertir en algunos casos en temporal la inhabilitacion, que por el Código de 1850 era siempre perpétua.

**Art. 379.** El funcionario público que sabiendo por razon de su cargo los secretos de un particular los descubriere, incurrirá en las penas de suspension, arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

## CAPITULO V.

### *Desobediencia y denegacion de auxilio (1).*

**Art. 380.** Los funcionarios judiciales ó administrativos que se neguen abiertamente á dar el debido cumplimiento á sentencias, decisiones ú órdenes de autoridad superior, dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en las penas de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial y multa de 150 á 1.500 pesetas (2).

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal los funcionarios públicos por no dar cumplimiento á un mandato administrativo que constituya una infraccion manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional.

Tampoco incurrirán en responsabilidad criminal los funcionarios públicos constituidos en autoridad que no den cumplimiento á un mandato de igual clase, en el que se infrinja manifiesta, clara y terminantemente cualquiera otra ley (3).

**Art. 381.** El funcionario que habiendo suspendido

---

(1) El epígrafe de este capítulo, en el Código de 1850, decia: «Resistencia y desobediencia.»

(2) Reformado en el sentido de sustituir la pena de arresto mayor por la de multa, y de convertir en algunos casos en temporal la inhabilitacion que por el Código de 1850 era siempre perpétua.

(3) Las disposiciones de estos dos últimos párrafos no existian en el Código de 1850.

por cualquier motivo, que no fuere de los expresados en el segundo párrafo del artículo anterior, la ejecucion de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere despues que aquellos hubieren desaprobado la suspension, sufrirá la pena de inhabilitacion perpétua especial y prision correccional en sus grados mínimo y medio (1).

Art. 382. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare la debida cooperacion para la administracion de justicia ú otro servicio público, incurrirá en la pena de suspension en sus grados mínimo y medio, y multa de 125 á 1.250 <sup>ad</sup> pesetas.

Si de su omision resultare grave daño para la causa pública ó á un tercero, las penas serán de inhabilitacion perpétua especial y multa de 150 á 1.500 pesetas (2).

Art. 383. El que rehusare ó se negare á desempeñar un cargo público de eleccion popular, sin presentar ante la autoridad que corresponda excusa legal, ó despues que la excusa fuere desatendida, incurrirá en la multa de 150 á 1.500 pesetas.

En la misma pena incurrirá el jurado que voluntariamente dejare de desempeñar su cargo sin excusa admitida, y el perito y el testigo que dejaren tambien voluntariamente de comparecer ante un tribunal á prestar sus declaraciones cuando hubieren sido oportunamente citados al efecto (3).

## CAPITULO VI.

*Anticipacion, prolongacion y abandono de funciones públicas.*

Art. 384. El que entrare á desempeñar un empleo ó cargo público sin haber prestado en debida forma el jura-

(1) Reformado en consonancia con las nuevas disposiciones del artículo anterior.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(3) Las disposiciones de este artículo no existian en el Código de 1850.

mento ó fianza requeridas por las leyes, quedará suspendido del empleo ó cargo hasta que cumpla con las formalidades respectivas, é incurrirá en la multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 385. El funcionario público que continuare ejerciendo su empleo, cargo ó comision despues que debiere cesar conforme á las leyes, reglamentos ó disposiciones especiales de su ramo respectivo, será castigado con las penas de inhabilitacion especial temporal en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Art. 386. El funcionario culpable de cualquiera de los delitos penados en los dos artículos anteriores que hubiere percibido algunos derechos ó emolumentos por razon de su cargo ó comision antes de poder desempeñarlo ó despues de haber debido cesar en él, será además condenado á restituirlos con la multa del 10 al 50 por 100 de su importe (3).

Art. 387. El funcionario público, que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare, con daño de la causa pública, será castigado con la pena de suspension en sus grados medio y máximo (4).

Si el abandono de destino se hiciere para no impedir, no perseguir, ó no castigar cualquiera de los delitos comprendidos en los títulos I y II del libro 2.<sup>o</sup> de este Código, se impondrá al culpable la pena de prision correccional en su grado mínimo al medio, y la de arresto mayor, si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir ó no castigar cualquiera otra clase de delito (5).

(1) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(2) Idem idem idem.

(3) En el Código de 1850 no existian las palabras «antes de poder desempeñarlo ó despues de haber debido cesar en él.»

(4) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(5) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

## CAPITULO VII.

*Usurpacion de atribuciones y nombramientos ilegales.*

Art. 388. El funcionario público que invadiere las atribuciones del poder legislativo, ya dictando reglamentos ó disposiciones generales excediéndose de sus atribuciones, ya derogando ó suspendiendo la ejecución de una ley, incurrirá en la pena de inhabilitacion temporal especial y multa de 150 á 1.500 pesetas (1).

Art. 389. El juez que se abrogase atribuciones propias de las autoridades administrativas ó impidiere á estas el ejercicio legítimo de las suyas, será castigado con la pena de suspension.

En la misma pena incurrirá todo funcionario del orden administrativo que se abrogare atribuciones judiciales ó impidiere la ejecución de una providencia ó decision dictada por juez competente.

Art. 390. El funcionario público, que legalmente requerido de inhibicion, continuare procediendo, antes que se decida la contienda jurisdiccional, será castigado con la multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Art. 391. Los funcionarios administrativos ó militares que dirigieren órdenes ó intimaciones á una autoridad judicial, relativas á causas ó negocios cuyo conocimiento ó resolucion sean de la exclusiva competencia de los tribunales de justicia, incurrirán en las penas de suspension en sus grados mínimo y medio y multa de 250 á 2.500 pesetas (3).

---

(1) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(3) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

Art. 392. El eclesiástico, que requerido por el tribunal competente, rehusare remitirle los autos pedidos para la decision de un recurso de fuerza interpuesto, será castigado con la pena de inhabilitacion temporal especial.

La reincidencia se castigará con la de inhabilitacion perpétua especial.

Art. 393. El funcionario público que, á sabiendas, propusiere ó nombrare para cargo público persona en quien no concurren los requisitos legales, será castigado con la pena de suspension y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

## CAPITULO VIII.

### *Abusos contra la honestidad.*

Art. 394. El funcionario público que solicitare á una mujer que tenga pretensiones pendientes de su resolucion, ó acerca de las cuales tenga que evacuar informe ó elevar consulta á su superior, será castigado con la pena de inhabilitacion temporal especial.

Art. 395. El alcalde que solicitare á una mujer sujeta á su guarda, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados medio al máximo.

Si la solicitada fuere esposa, hija, hermana, ó afín en los mismos grados de persona que tuviere bajo su guarda, la pena será prision correccional en sus grados mínimo al medio.

En todo caso incurrirá además en la de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial (2).

---

(1) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(2) Reformado en el sentido de que la inhabilitacion pueda ser temporal en algunos casos, cuando, segun el Código de 1850, era siempre perpétua.

Se ha suprimido además la disposicion general del art. 313 del Código de 1850, que decía así:

## CAPITULO IX.

*Cobhecho.*

Art. 396. El funcionario público que recibiere por sí ó por persona intermedia dádiva ó presente, ó aceptare ofrecimientos ó promesas por ejecutar un acto relativo al ejercicio de su cargo que constituya delito, será castigado con las penas de presidio correccional en su grado mínimo al medio y multa del tanto al triplo del valor de la dádiva, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido por la dádiva ó promesa, si lo hubiere ejecutado.

Art. 397. El funcionario público que recibiere por sí ó por persona intermedia dádiva ó presente, ó aceptare ofrecimiento ó promesa por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo, que no constituya delito y que lo ejecutare, incurrirá en la pena de presidio correccional en su grado mínimo y medio y multa del tanto al triplo del valor de la dádiva: si el acto injusto no llegare á ejecutarse, se impondrán las penas de arresto mayor en su grado máximo á presidio correccional en su grado mínimo y multa del tanto al duplo del valor de la dádiva.

Art. 398. Cuando la dádiva recibida ó prometida tuviere por objeto abstenerse el funcionario público de un acto que debiera practicar en el ejercicio de los deberes de su cargo, las penas serán las de arresto mayor en su grado medio al máximo y multa del tanto al triplo del valor de aquella.

---

«Art. 313. El empleado público que en el ejercicio de su cargo cometiere algun abuso que no esté penado especialmente en los capitulos precedentes de este título (los anteriores al que trataba del cohecho) incurrirá en una multa de 20 á 200 duros cuando el daño causado por el abuso no fuere estimable, y del 20 al 100 por 100 de su valor cuando lo fuere; pero nunca bajará de 20 duros.»



Art. 399. Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá aplicacion á los jurados, árbitros, arbitradores, peritos, hombres buenos ó cualesquiera personas que desempeñaren un servicio público.

Art. 400. Las personas responsables criminalmente de los delitos comprendidos en los artículos anteriores incurrirán además de las penas en ellos impuestas, en la de inhabilitacion especial temporal.

Art. 401. El funcionario público que admitiere regalos que le fueren presentados en consideracion á su oficio, será castigado con la suspension en sus grados mínimo y medio y reprension pública.

Art. 402. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos ó promesas corrompieran á los funcionarios públicos, serán castigados con las mismas penas que los empleados sobornados, menos la de inhabilitacion.

Art. 403. Cuando el soborno mediar en causa criminal en favor del reo, por parte de su cónyuge ó de algun ascendiente, descendiente, hermano ó afín en los mismos grados, solo se impondrá al sobornante una multa equivalente al valor de la dádiva ó promesa.

Art. 404. En todo caso las dádivas ó presentes serán decomisados (1).

## CAPITULO X.

### *Malversacion de caudales públicos.*

Art. 405. El funcionario público que, por razon de sus funciones, teniendo á su cargo caudales ó efectos públicos, los sustrajere ó consintiere que otros los sustraigan, será castigado:

---

(1) Reformadas las disposiciones que correspondian á las comprendidas en este capítulo en el Código de 1850.

1.º Con la pena de arresto mayor en su grado máximo á presidio correccional en su grado mínimo si la sustraccion no excediere de 50 pesetas.

2.º Con la de presidio correccional en sus grados medio y máximo si excediere de 50 y no pasare de 2.500.

3.º Con la de presidio mayor si excediere de 2.500 y no pasare de 50.000 pesetas.

4.º Con la de cadena temporal si excediere de 50.000.

En todos los casos con la de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua absoluta (1).

Art. 406. El funcionario público que por abandono ó negligencia inexcusables diere ocasion á que se efectua-re por otra persona la sustraccion de caudales ó efectos públicos de que se trata en los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo anterior, incurrirá en la pena de multa equivalente al valor de los caudales ó efectos sustraídos (2).

Art. 407. El funcionario que con daño ó entorpecimiento del servicio público aplicare á usos propios ó ajenos los caudales ó efectos puestos á su cargo, será castigado con las penas de inhabilitacion especial temporal y multa del 20 al 50 por 100 de la cantidad que hubiere distraído (3).

No verificándose el reintegro, se le impondrán las penas señaladas en el art 405.

Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, incurrirá en las penas

(1) Reformado el primer párrafo por haberse añadido en él las palabras «por razon de sus funciones.» También ha sido reformado en el sentido de convertir en algunos casos en temporal especial la inhabilitacion absoluta perpétua que para todos los casos establecia el Código de 1850.

(2) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(3) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

de suspension y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad distraida.

Art. 408. El funcionario público que diere á los caudales ó efectos que administrare una aplicacion pública diferente de aquella á que estuvieren destinados, incurrirá en las penas de inhabilitacion temporal y una multa del 5 al 50 por 100 de la cantidad distraida, si de ello resultare daño ó entorpecimiento del servicio á que estuvieren consignados, y en la de suspension si no resultare (1).

Art. 409. El funcionario público que debiendo hacer un pago, como tenedor de fondos del Estado, no lo hiciera, será castigado con las penas de suspension y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad no satisfecha.

Esta disposicion es aplicable al funcionario público que, requerido con orden de autoridad competente, rehusare hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia ó administracion.

La multa se graduará en este caso por el valor de la cosa, y no podrá bajar de 125 pesetas (2).

Art. 410. Las disposiciones de este capítulo son extensivas á los que se hallaren encargados por cualquier concepto de fondos, rentas ó efectos provinciales ó municipales, ó pertenecientes á un establecimiento de instruccion ó beneficencia, y á los administradores ó depositarios de caudales embargados, secuestrados ó depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan á particulares.

## CAPITULO XI.

### *Fráudes y exacciones ilegales.*

Art. 411. El funcionario público que interviniendo

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

por razon de su cargo en alguna comision de suministros, contratas, ajustes ó liquidaciones de efectos ó haberes públicos se concertare con los interesados ó especuladores ó usare de cualquiera otro artificio para defraudar al Estado, incurrirá en las penas de presidio correccional en sus grados medio y máximo á inhabilitacion temporal especial en su grado máximo é inhabilitacion perpétua especial (1).

Art. 412. El funcionario público que directa ó indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato ú operacion en que deba intervenir por razon de su cargo, será castigado con las penas de inhabilitacion temporal especial y multa del 10 al 50 por 100 del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.

Esta disposicion es aplicable á los peritos, árbitros y contadores particulares respecto de los bienes ó cosas en cuya tasacion, particion ó adjudicacion hubieren intervenido, y á los tutores, curadores y albaceas respecto de los pertenecientes á sus pupilos ó testamentarías.

Art. 413. El funcionario público que exigiere directa ó indirectamente mayores derechos que los que le estuvieren señalados por razon de su cargo, será castigado con una multa del duplo al cuádruplo de la cantidad exigida.

El culpable habitual de este delito incurrirá además en la pena de inhabilitacion temporal especial (2).

Art. 414. El funcionario público, que abusando de su cargo, cometiere alguno de los delitos expresados en el capítulo IV, seccion segunda, título XIII de este libro, incurrirá, además de las penas allí señaladas, en la de inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabilitacion perpétua especial.

---

(1) Reformado en el sentido de convertir en algunos casos en temporal la inhabilitacion perpétua que imponia el Código de 1850.

(2) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

## CAPITULO XII.

*Negociaciones prohibidas á los empleados.*

Art. 415. Los jueces, los funcionarios del ministerio fiscal, los jefes militares, gubernativos ó económicos de una provincia ó distrito, con excepcion de los alcaldes, que durante el ejercicio de sus cargos, se mezclaren directa ó indirectamente en operaciones de ágio, tráfico ó granjería, dentro de los límites de su jurisdiccion ó mando, sobre objetos que no fueren producto de sus bienes propios, serán castigados con las penas de suspension y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Esta disposicion no es aplicable á los que impusieren sus fondos en acciones de Banco ó de cualquiera empresa ó compañía, con tal que no ejerzan en ellas cargo ni intervencion directa, administrativa ó económica (1).

## CAPITULO XIII.

*Disposicion general.*

Art. 416. Para los efectos de este título y de los anteriores del presente libro, se reputará funcionario público todo el que por disposicion inmediata de la ley, ó por eleccion popular ó por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de funciones públicas (2).

---

(1) Reformado de acuerdo con algunas disposiciones de la ley de organizacion de tribunales.

(2) Corregida la redaccion del Código de 1850.

## TITULO VIII.

## DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.

## CAPITULO I.

*Parricidio* (1).

Art. 417. El que matare á su padre, madre ó hijo, sean legítimos ó ilegítimos, ó á cualquiera otro de sus ascendientes ó descendientes, ó á su cónyuge, será castigado, como parricida, con la pena de cadena perpétua á muerte (2).

## CAPITULO II.

*Asesinato* (3).

Art. 418. Es reo de asesinato el que sin estar comprendido en el artículo anterior matare á alguna persona concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

- 1.<sup>a</sup> Con alevosía.
- 2.<sup>a</sup> Por precio ó promesa remuneratoria.
- 3.<sup>a</sup> Por medio de inundacion, incendio ó veneno.
- 4.<sup>a</sup> Con premeditacion conocida.
- 5.<sup>a</sup> Con ensañamiento, aumentando deliberada é inhumanamente el dolor del ofendido.

El reo de asesinato será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo á muerte (4).

---

(1) En el Código de 1850, el parricidio no ocupaba un solo capítulo.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(3) En el Código de 1850 no se distinguía especialmente el *asesinato* del *homicidio*. En la práctica se distinguían estos dos actos, añadiendo al sustantivo *homicidio* los adjetivos *cualificado* ó *simple* respectivamente.

(4) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

## CAPITULO III.

*Homicidio.*

Art. 419. Es reo de homicidio el que sin estar comprendido en el art. 417 matare á otro, no concurriendo alguna de las circunstancias numeradas en el artículo anterior.

El reo de homicidio será castigado con la pena de reclusion temporal.

Art. 420. Cuando, riñendo varios y acometiéndose entre sí confusa y tumultuariamente, hubiere resultado muerte y no constare su autor, pero sí los que hubieren causado lesiones graves, serán éstos castigados con la pena de prision mayor.

No constando tampoco los que hubieren causado lesiones graves al ofendido, se impondrá á todos los que hubieren ejercido violencias en su persona la de prision correccional en sus grados medio y máximo (1).

Art. 421. El que prestare auxilio á otro para que se suicide será castigado con la pena de prision mayor; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la pena de reclusion temporal (2).

## CAPITULO IV.

*Disposiciones comunes á los tres capítulos anteriores.*

Art. 422. Los tribunales, apreciando las circunstancias del hecho, podrán castigar el delito frustrado de par-

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

ricidio, asesinato y homicidio con una pena inferior en un grado á la que debiera corresponderle segun el art. 66.

Podrán tambien rebajar en un grado, segun las circunstancias del hecho, la pena correspondiente á la tentativa, segun el art. 67.

Art. 423. El acto de disparar un arma de fuego contra cualquiera persona, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio, si no hubieren concurrido en el hecho todas las circunstancias necesarias para constituir delito frustrado ó tentativa de parricidio, asesinato, homicidio ó cualquier otro delito á que esté señalada una pena superior por alguno de los artículos de este Código (1).

## CAPITULO V.

### *Infanticidio.*

Art. 424. La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo, que no haya cumplido tres dias, será castigada con la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo.

Los abuelos maternos que para ocultar la deshonra de la madre cometieren este delito, con la de prision mayor.

Fuera de estos casos, el que matare á un recién-nacido incurrirá, segun los casos, en las penas del parricidio ó del asesinato.

## CAPITULO VI.

### *Aborto.*

Art. 425. El que de propósito causare un aborto será castigado:

---

(1) Las disposiciones de estos artículos no existían en el Código de 1850.



1.º Con la pena de reclusion temporal, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada.

2.º Con la de prision mayor si, aunque no la ejerciera, obrare sin consentimiento de la mujer.

3.º Con la de prision correccional en sus grados medio y máximo, si la mujer lo consintiera.

Art. 426. Será castigado con prision correccional en sus ~~grados~~ <sup>grados</sup> mínimo y medio el aborto ocasionado violentamente, cuando no haya habido propósito de causarlo.

Art. 427. La mujer que causare su aborto, ó consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con prision correccional en sus grados medio y máximo.

Si lo hiciere para ocultar su deshonor, incurrirá en la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio.

Art. 428. El facultativo que abusando de su arte causare el aborto ó cooperare á él, incurrirá respectivamente en su grado máximo en las penas señaladas en el artículo 425.

El farmacéutico que sin la debida prescripcion facultativa expendiere un abortivo, incurrirá en las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

## CAPITULO VII.

### *Lesiones (2).*

Art. 429. El que de propósito castrar á otro será castigado con la pena de reclusion temporal á perpétua.

Art. 430. Cualquiera otra mutilacion ejecutada igual-

---

(1) La disposicion de este último párrafo no existia en el Código de 1850.

(2) El epigrafe del capítulo correspondiente á éste en el Código de 1850, decia: «Lesiones corporales.»

mente de propósito, se castigará con la pena de reclusion temporal (1).

Art. 431. El que hiriere, golpear ó maltratare de obra á otro, será castigado como reo de lesiones graves:

1.º Con la pena de prision mayor, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido imbécil, impotente ó ciego.

2.º Con la de prision correccional en sus grados medio y máximo, si de resultas de las lesiones el ofendido hubiere perdido un ojo ó algun miembro principal, ó hubiere quedado impedido de él, ó inutilizado para el trabajo á que hasta entonces se hubiere habitualmente dedicado.

3.º Con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio, si de resultas de las lesiones el ofendido hubiere quedado deforme, ó perdido un miembro no principal, ó quedado inutilizado de él, ó hubiere estado incapacitado para su trabajo habitual ó enfermo por más de noventa dias.

4.º Con la de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo, si las lesiones hubieren producido al ofendido enfermedad ó incapacidad para el trabajo por más de treinta dias.

Si el hecho se ejecutare contra alguna de las personas que menciona el art. 417 ó con alguna de las circunstancias señaladas en el art. 418, las penas serán la de reclusion temporal en sus grados medio y máximo, en el caso del núm. 1.º de este artículo, y la de prision correccional en su grado máximo á prision mayor en su grado mínimo, en el caso del núm. 2.º ~~del artículo (2)~~. *note pris*

No están comprendidas en el párrafo anterior las lesiones correccionales en sus grados medio y máximo.

(1) Lo mismo la disposicion de este articulo que la del anterior, han sido reformadas en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) Reformado, haciendo distincion entre las lesiones, que aparecian conundidas en el Código de 1850, y disminuyendo la penalidad.

*reforma de la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo en el art. 431 del código de 1850.*

siones que al hijo causare el padre, excediéndose en su correccion (1).

Art. 432. Las penas del artículo anterior son aplicables respectivamente al que sin ánimo de matar causare á otro alguna de las lesiones graves administrándole á sabiendas sustancias ó bebidas nocivas, ó abusando de su credulidad ó flaqueza de espíritu.

Art. 433. Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes que produzcan al ofendido inutilidad para el trabajo por ocho dias ó más, ó necesidad de la asistencia de facultativo por igual tiempo, se reputarán menos graves y serán penadas con el arresto mayor, ó el destierro y multa de 125 á 1.250 pesetas, segun el prudente arbitrio de los tribunales (2).

Cuando la lesion menos grave se causare con intencion manifiesta de injuriar, ó con circunstancias ignominiosas, se impondrá además del arresto mayor una multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 434. Las lesiones menos graves inferidas á padres, ascendientes, tutores, curadores, maestros ó personas constituidas en dignidad ó autoridad pública, serán castigadas siempre con prision correccional en sus grados mínimo y medio.

Art. 435. Cuando en la riña tumultuaria, definida en el art. 420, resultaren lesiones graves y no constare quiénes las hubieren causado, se impondrá la pena inmediatamente inferior á la correspondiente á las lesiones causadas, á los que aparezcan haber ejercido cualquiera violencia en la persona del ofendido (3).

---

(1) La disposicion de este último párrafo no existia en el Código de 1850.

(2) En el Código de 1850 se decia: «por cinco dias ó más.»

(3) Reformado en el sentido que puede verse consultando el art. 347 del Código de 1850.

Art. 436. El que se mutilare ó el que prestare su consentimiento para ser mutilado con el fin de eximirse del servicio militar, y fuere declarado exento de este servicio por efecto de la mutilacion, incurrirá en la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo.

Art. 437. El que inutilizare á otro con su consentimiento para el objeto mencionado en el artículo anterior, incurrirá en la pena de presidio correccional en sus grados mínimo y medio.

Si lo hubiere hecho mediante precio, la pena será la inmediatamente superior á la señalada en el párrafo anterior.

Si el reo de este delito fuere padre, madre, cónyuge, hermano ó cuñado del mutilado, la pena será la de arresto mayor en su grado medio á prision correccional en su grado mínimo (1).

## CAPITULO VIII.

### *Disposicion general.*

Art. 438. El marido que sorprendiendo en adulterio á su mujer matare en el acto á ésta ó al adúltero, ó les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro.

Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena.

Estas reglas son aplicables en iguales circunstancias á los padres respecto de sus hijas menores de 23 años y sus corruptores, mientras aquellas vivieren en la casa paterna.

---

(1) Las disposiciones de estos dos últimos artículos no existian en el Código de 1850.

El beneficio de este artículo no aprovecha á los que hubieren promovido ó facilitado la prostitucion de sus mujeres ó hijas.

## CAPITULO IX.

### *Duelo.*

Art. 439. La autoridad que tuviere noticia de estar-se concertando un duelo, procederá á la detencion del provocador y á la del retado, si éste hubiere aceptado el desafío, y no los pondrá en libertad hasta que den palabra de honor de desistir de su propósito.

El que faltando deslealmente á su palabra, provocare de nuevo á su adversario, será castigado con las penas de inhabilitacion temporal absoluta para cargos públicos, y confinamiento.

El que aceptare el duelo en el mismo caso, será castigado con la de destierro.

Art. 440. El que matare en duelo á su adversario será castigado con la pena de prision mayor.

Si le causare las lesiones señaladas en el núm. 1.º del artículo 431, con la de prision correccional en sus grados medio y máximo.

En cualquiera otro caso se impondrá á los combatientes la pena de arresto mayor, aunque no resulten lesiones.

Art. 441. En lugar de las penas señaladas en el artículo anterior, se impondrá la de confinamiento en caso de homicidio, la de destierro en el de lesiones comprendidas en el núm. 1.º del art. 431, y la de 50 á 500 pesetas de multa en los demás casos:

1.º Al provocado á desafío que se batiere por no haber obtenido de su adversario explicacion de los motivos del duelo.

2.º Al desafiado que se batiere por haber desechado su adversario las explicaciones suficientes ó satisfaccion decorosa del agravio inferido.

3.º Al injuriado que se batiere por no haber podido obtener del ofensor la explicacion suficiente ó satisfaccion decorosa que le hubiere pedido.

Art. 442. Las penas señaladas en el art. 440 se aplicarán en su grado máximo:

1.º Al que provocare el duelo sin explicar á su adversario los motivos, si éste lo exigiere.

2.º Al que habiéndolo provocado, aunque fuere con causa, desechare las explicaciones suficientes ó la satisfaccion decorosa que le haya ofrecido su adversario.

3.º Al que habiendo hecho á su adversario cualquiera injuria, se negare á darle explicaciones suficientes ó satisfaccion decorosa.

Art. 443. El que incitare á otro á provocar ó aceptar un duelo, será castigado respectivamente con las penas señaladas en el art. 440 si el duelo se lleva á efecto.

Art. 444. El que denostare ó desacreditare públicamente á otro por haber rehusado un duelo, incurrirá en las penas señaladas para las injurias graves.

Art. 445. Los padrinos de un duelo del que resultaren muerte ó lesiones, serán respectivamente castigados como autores de aquellos delitos con premeditacion, si hubieren promovido el duelo ó usado cualquier género de alevosía en su ejecucion ó en el arreglo de sus condiciones.

Como cómplices de los mismos delitos, si lo hubieren concertado á muerte ó con ventaja conocida de alguno de los combatientes.

Incurrirán en las penas de arresto mayor y multa de

250 á 2.500 pesetas, si no hubieren hecho cuanto estuvo de su parte para conciliar los ánimos ó no hubieren procurado concertar las condiciones del duelo de la manera menos peligrosa posible para la vida de los combatientes.

Art. 446. El duelo que se verificare sin la asistencia de dos ó más padrinos mayores de edad por cada parte, y sin que estos hayan elegido las armas y arreglado todas las demás condiciones, se castigará:

1.º Con prision correccional, no resultando muerte ó lesiones.

2.º Con las penas generales de este Código, si resultare; pero nunca podrá bajarse de la prision correccional.

Art. 447. Se impondrán tambien las penas generales de este Código y además la de inhabilitacion absoluta temporal:

1.º Al que provocare ó diere causa á un desafío proponiéndose un interés pecuniario ó un objeto inmoral.

2.º Al combatiente que cometiere la alevosía de faltar á las condiciones concertadas por los padrinos.

## TITULO IX.

### DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD.

#### CAPITULO I.

##### *Adulterio.*

Art. 448. El adulterio será castigado con la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo.

Cometen adulterio la mujer casada que yace con varon que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque despues se declare nulo el matrimonio.

Art. 449. No se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del marido agraviado.

Este no podrá deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren, y nunca si hubiere consentido el adulterio ó perdonado á cualquiera de ellos.

Art. 450. El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta á su consorte (1).

En este caso se tendrá tambien por remitida la pena al adúltero.

Art. 451. La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirá sus efectos plenamente en lo penal cuando fuere absolutoria.

Si fuere condenatoria, será necesario nuevo juicio para la imposicion de las penas.

Art. 452. El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal ó fuera de ella con escándalo, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio.

La manceba será castigada con la de destierro.

Lo dispuesto en los artículos 449 y 450 es aplicable al caso de que se trata en el presente.

## CAPITULO II.

### *Violacion y abusos deshonestos.*

Art. 453. La violacion de una mujer será castigada con la pena de reclusion temporal.

Se comete violacion yaciendo con la mujer en cualquiera de los casos siguientes:

1.º Cuando se uzare de fuerza ó intimidacion.

---

(1) «Volviendo á reunirse con ella,» añadía el Código de 1850.



2.º Cuando la mujer se hallare privada de razon ó de sentido por cualquiera causa.

3.º Cuando fuere menor de 12 años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las circunstancias expresadas en los dos números anteriores (1).

Art. 454. El que abusare deshonestamente de persona de uno ú otro sexo, concurriendo cualquiera de las circunstancias expresados en el artículo anterior, será castigado segun la gravedad del hecho con la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo.

### CAPITULO III.

#### *Delitos de escándalo público (2).*

Art. 455. El que hallándose unido en matrimonio religioso indisoluble, abandonare á su consorte y contraer nuevo matrimonio segun la ley civil con otra persona, ó vice-versa, aunque el matrimonio religioso que nuevamente contrajere no fuere indisoluble, incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y reprension pública (3).

Art. 456. Incurrirán en la pena de arresto mayor y reprension pública los que de cualquier modo ofendieren el pudor ó las buenas costumbres con hechos de grave escándalo ó trascendencia no comprendidos expresamente en otros artículos de este Código.

Art. 457. Incurrirán en la pena de multa de 125 á

---

(1) Reformado en el sentido de sustituir la pena de cadena temporal con la de reclusion temporal.

(2) Este epígrafe no existia en el Código de 1850, aunque alguna de las disposiciones que contiene este capítulo estaban comprendidas bajo el epígrafe de «*Violacion.*»

(3) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

1.250 pesetas los que expusieren ó proclamaren, por medio de la imprenta y con escándalo, doctrinas contrarias á la moral pública (1).

## CAPITULO IV.

### *Estupro y corrupcion de menores.*

Art. 458. El estupro de una doncella mayor de 12 años y menor de 23, cometido por autoridad pública, sacerdote, criado, doméstico, tutor, maestro ó encargado por cualquier título de la educacion ó guarda de la estuprada, se castigará con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio.

En la misma pena incurrirá el que cometiere estupro con su hermana ó descendiente, aunque sea mayor de 23 años.

El estupro cometido por cualquiera otra persona con una mujer mayor de 12 años y menor de 23, interviniendo engaño, se castigará con la pena de arresto mayor.

Con la misma pena se castigará cualquier otro abuso deshonesto cometido por las mismas personas y en iguales circunstancias (2).

Art. 459. El que habitualmente ó con abuso de autoridad ó confianza, promoviere ó facilitare la prostitucion ó corrupcion de menores de edad para satisfacer los deseos de otro, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio é inhabilitacion temporal absoluta si fuere autoridad (3).

---

(1) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

(2) Corregida la redaccion del Código de 1850 y reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(3) El Código de 1850 no preveia el caso de que el corruptor fuese autoridad.

## CAPITULO V.

*Rapto.*

Art. 460. El rapto de una mujer ejecutado contra su voluntad y con miras deshonestas será castigado con la pena de reclusion temporal.

En todo caso se impondrá la misma pena, si la robada fuere menor de 12 años.

Art. 461. El rapto de una doncella menor de 23 años y mayor de 12, ejecutado con su anuencia, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio (1).

Art. 462. Los reos de delito de rapto que no dieren razon del paradero de la persona robada ó explicacion satisfactoria sobre su muerte ó desaparicion, serán castigados con la pena de cadena perpétua.

## CAPITULO VI.

*Disposiciones comunes á los capítulos anteriores.*

Art. 463. No puede procederse por causa de estupro sino á instancia de la agraviada, ó de sus padres, ó abuelos, ó tutor.

Para proceder en las causas de violacion y en las de rapto ejecutado con miras deshonestas, bastará la denuncia de la persona interesada, de sus padres, abuelos ó tutores, aunque no formalicen instancia.

---

(1) Lo mismo este artículo que el anterior han sido reformados en el sentido de disminuir la penalidad.

Si la persona agraviada careciere, por su edad ó estado moral, de personalidad para comparecer en juicio, y fuere además de todo punto desvalida, careciendo de padres, abuelos, hermanos, tutor ó curador que denuncien, podrán verificarlo el procurador síndico ó el fiscal, por fama pública.

En todos los casos de este artículo, el perdón expreso ó presunto de la parte ofendida extinguirá la acción penal ó la pena, si ya se hubiere impuesto al culpable.

El perdón no se presume sino por el matrimonio de la ofendida con el ofensor (1).

Art. 464. Los reos de violación, estupro ó rapto serán también condenados por vía de indemnización:

1.º A dotar á la ofendida, si fuere soltera ó viuda.

2.º A reconocer la prole, si la calidad de su origen no lo impidiere.

3.º En todo caso á mantener la prole.

Art. 465. Los ascendientes, tutores, curadores, maestros y cualesquiera personas que con abuso de autoridad ó encargo cooperaren como cómplices á la perpetración de los delitos comprendidos en los cuatro capítulos precedentes, serán penados como autores.

Los maestros ó encargados en cualquiera manera de la educación ó dirección de la juventud, serán además condenados á la inhabilitación temporal especial en su grado máximo á inhabilitación perpétua especial (2).

Art. 466. Los comprendidos en el artículo precedente, y cualesquiera otros reos de corrupción de menores en

(1) El artículo correspondiente á éste en el Código de 1850, decía: «En todos los casos del presente artículo el ofensor se libra de la pena casándose con la ofendida, cesando el procedimiento en cualquier estado de él en que lo verifique.»

(2) Reformado en el sentido de convertir en algunos casos la inhabilitación perpétua, que para todos establecía el Código de 1850, en temporal.

interés de tercero, serán condenados en las penas de interdicción del derecho de ejercer la tutela y ser miembros del consejo de familia (1).

## TITULO X.

### DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR.

#### CAPITULO I.

##### *Calumnia.*

Art. 467. Es calumnia la falsa imputacion de un delito de los que dan lugar á procedimientos de oficio.

Art. 468. La calumnia propagada por escrito y con publicidad, se castigará con las penas de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 500 á 5.000 pesetas cuando se imputare un delito grave, y con las de arresto mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas, si se imputare un delito menos grave.

Art. 469. No propagándose la calumnia con publicidad y por escrito, será castigada:

1.º Con las penas de arresto mayor en su grado máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas, cuando se imputare un delito grave.

2.º Con el arresto mayor en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas, cuando se imputare un delito menos grave.

Art. 470. El acusado de calumnia quedará exento de toda pena, probando el hecho criminal que hubiere imputado.

---

(1) Reformado á consecuencia de la supresion de la pena de sujecion á la vigilancia de la autoridad.

La sentencia en que se declare la calumnia, se publicará en los periódicos oficiales, si el calumniado lo pidiera.

## CAPITULO II.

### *Injurias.*

Art. 471. Es injuria toda expresion proferida ó accion ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona.

Art. 472. Son injurias graves:

1.º La imputacion de un delito de los que no dan lugar á procedimiento de oficio.

2.º La de un vicio ó falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito ó interés del agraviado.

3.º Las injurias que por su naturaleza, ocasion ó circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas.

4.º Las que racionalmente merezcan la calificacion de graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor.

Art. 473. Las injurias graves hechas por escrito y con publicidad, serán castigadas con la pena de destierro en su grado medio al máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

No concurriendo aquellas circunstancias, se castigarán con las penas de destierro en su grado mínimo al medio y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 474. Las injurias leves serán castigadas con las penas de arresto mayor en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas, cuando fueren hechas por escrito y con publicidad.

No concurriendo estas circunstancias, se penarán como faltas.

Art. 475. Al acusado de injuria no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo.

En este caso será absuelto el acusado si probare la verdad de las imputaciones.

### CAPITULO III.

#### *Disposiciones generales.*

Art. 476. Se comete el delito de calumnia ó injuria, no solo manifestamente, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones.

Art. 477. La calumnia y la injuria se reputarán hechas por escrito y con publicidad cuando se propagaren por medio de papeles impresos, litografiados ó grabados, por carteles ó pasquines fijados en los sitios públicos, ó por papeles manuscritos comunicados á más de 10 personas.

Art. 478. El acusado de calumnia ó injuria encubierta ó equívoca que rehusare dar en juicio explicacion satisfactoria acerca de ella, será castigado como reo de calumnia ó injuria manifesta.

Art. 479. Los directores ó editores de los periódicos en que se hubieren propagado las calumnias ó injurias, insertarán en ellos dentro del término que señalen las leyes ó el tribunal en su defecto, la satisfaccion ó sentencia condenatoria, si lo reclamase el ofendido (1).

---

(1) El artículo correspondiente á este en el Código de 1850, decia: «Los editores de los periódicos etc.»

**Art. 480.** Podrán ejercitar la accion de calumnia ó injuria los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermano del difunto agraviado, siempre que la calumnia ó injuria trascendiere á ellos, y en todo caso el heredero.

**Art. 481.** Procederá asimismo la accion de calumnia ó injuria cuando se hayan hecho por medio de publicaciones en país extranjero.

**Art. 482.** Nadie podrá deducir accion de calumnia ó injuria causadas en juicio sin prévia licencia del juez ó tribunal que de él conociere.

Nadie será penado por calumnia ó injuria sino á que-rella de la parte ofendida, salvo cuando la ofensa se dirija contra la autoridad pública, corporaciones ó clases determinadas del Estado, y lo dispuesto en el capítulo V del título III de este libro.

El culpable de injuria ó de calumnia contra particulares, quedará relevado de la pena impuesta mediando perdon de la parte ofendida.

Para los efectos de este artículo se reputan autoridad los Soberanos y Príncipes de naciones amigas ó aliadas, los agentes diplomáticos de las mismas y los extranjeros con carácter público que segun los tratados debieren comprenderse en esta disposicion.

Para proceder en los casos expresadas en el párrafo anterior ha de preceder excitacion especial del Gobierno.



## TITULO XI.

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.

## CAPITULO I.

*Suposicion de partos y usurpacion del estado civil.*

Art. 483. La suposicion de partos (1) y la sustitucion de un niño por otro, serán castigadas con las penas de presidio mayor y multa de 250 á 2.500 pesetas.

Las mismas penas se impondrán al que ocultare ó expusiere un hijo legítimo con ánimo de hacerle perder su estado civil.

Art. 484. El facultativo ó funcionario público que, abusando de su profesion ó cargo, cooperare á la ejecucion de alguno de los delitos expresados en el artículo anterior, incurrirá en las penas del mismo, y además en la de inhabilitacion temporal especial.

Art. 485. El que usurpare el estado civil de otro, será castigado con la pena de presidio mayor.

## CAPITULO II.

*Celebracion de matrimonios ilegales.*

Art. 486. El que contrajere segundo ó ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será castigado con la pena de prision mayor (2).

---

(1) El Código de 1859 decia «la suposicion de parto,» y esto mismo creemos que se ha querido decir en este.

(2) En el Código de 1859 se añadía: «En igual pena incurrirá el que contrajere matrimonio estando ordenado en sacris ó ligado con voto solemne de castidad.

Art. 487. El que con algun impedimento dirimente no dispensable contrajere matrimonio, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo (1).

Art. 488. El que contrajere matrimonio mediando algun impedimento dispensable, será castigado con una multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Si por culpa suya no revalidare el matrimonio, prévia dispensa, en el término que los tribunales designen, será castigado con la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo, de la cual quedará relevado cuando quiera que se revalide el matrimonio.

Art. 489. El menor que contrajere matrimonio sin el consentimiento de sus padres ó de las personas que para el efecto hagan sus veces, será castigado con prision correccional en sus grados mínimo y medio.

El culpable deberá ser indultado desde que los padres ó las personas á quienes se refiere el párrafo anterior aprobaren el matrimonio contraído (3).

Art. 490. La viuda que se casare antes de los trescientos un dias desde la muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento, si hubiere quedado en cinta, incurrirá en las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

En la misma pena incurrirá la mujer cuyo matrimonio se hubiere declarado nulo, si se casare antes de su alumbramiento ó de haberse cumplido trescientos un dias despues de su separacion legal.

Art. 491. El adoptante que sin prévia dispensa ci-

---

(1) El Código de 1850 decia: «No dispensable por la Iglesia.»

(2) Análoga supresion se ha hecho en este artículo.

(3) En lugar de este último párrafo decia el Código de 1850: «La pena será de arresto mayor si las personas expresadas aprobaren el matrimonio despues de contraído.»

vil, contrajere matrimonio con sus hijos ó descendientes adoptivos, será castigado con la pena de arresto mayor.

Art. 492. El tutor ó curador que antes de la aprobacion legal de sus cuentas, contrajere matrimonio ó prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos ó descendientes con la persona que tuviere ó hubiere tenido en guarda, á no ser que el padre de ésta hubiere autorizado debidamente este matrimonio, será castigado con las penas de prision correccional en su grado medio y máximo y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 493. El juez municipal que autorizare matrimonio prohibido por la ley ó para el cual haya algun impedimento no dispensable, será castigado con las penas de suspension en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2 500 pesetas (2).

Si el impedimento fuere dispensable, las penas serán destierro en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas (3).

Art. 494. En todos los casos de este capítulo el contrayente doloso será condenado á dotar segun su posibilidad á la mujer que hubiere contraido matrimonio de buena fé.

(1) En este artículo se han añadido á la disposicion correspondiente en el Código de 1850 las palabras *A no ser que el padre de ésta hubiere autorizado debidamente este matrimonio.*

(2) El Código de 1850 decia: *El eclesiástico que autorizare matrimonio prohibido por la ley civil ó para el cual haya algun impedimento canónico no dispensable etc.*

(3) Se han suprimido los párrafos del Código de 1850, que decian: «En uno y otro caso se le condenará por via de indemnizacion de perjuicios al abono de las costas de la dispensa, mancomunadamente con el cónyuge doloso.»

«Si hubiere habido buena fé por parte de ambos contrayentes, será condenado por el todo.»

## TITULO XII.

## DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD.

## CAPITULO I.

*Detenciones ilegales.*

Art. 495. El particular que encerrare ó detuviere á otro privándole de su libertad, será castigado con la pena de prision mayor.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecucion del delito.

Si el culpable diere libertad al encerrado ó detenido dentro de los tres dias de su detencion sin haber logrado el objeto que se propusiere, ni haberse comenzado el procedimiento, las penas serán prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 496. El delito de que se trata en el artículo anterior será castigado con la pena de reclusion temporal:

1.º Si el encierro ó detencion hubieren durado más de veinte dias.

2.º Si se hubiere ejecutado con simulacion de autoridad pública.

3.º Si se hubieren causado lesiones graves á la persona encerrada ó detenida ó se le hubiere amenazado de muerte.

Art. 497. El que fuera de los casos permitidos por la ley aprehendiere á una persona para presentarla á la

---

(1) Al principio de este artículo se ha añadido la palabra *particular*.

autoridad, será castigado con las penas de arresto menor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

## CAPITULO II.

### *Sustraccion de menores.*

Art. 498. La sustraccion de un menor de siete años será castigada con la pena de cadena temporal.

Art. 499. En la misma pena incurrirá el que hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare á sus padres ó guardadores ni diere explicacion satisfactoria acerca de su desaparicion.

Art. 500. El que indujere á un menor de edad, pero mayor de siete años, á que abandone la casa de sus padres, tutores ó encargados de su persona, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

## CAPITULO III.

### *Abandono de niños.*

Art. 501. El abandono de un niño menor de siete años será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Quando por las circunstancias del abandono se hubiere ocasionado la muerte de un niño, será castigado el culpable con la pena de prision correccional en sus grados medio y máximo; si solo se hubiere puesto en peligro su vida, la pena será la misma prision correccional en su grado mínimo y medio (3).

---

(1) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(2) Reformado en el mismo sentido que el artículo anterior.

(3) En el Código de 1850 no se preveia el caso de que el abandono hubiere causado la muerte del niño.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda cuando constituyere otro delito más grave.

Art. 502. El que teniendo á su cargo la crianza ó educacion de un menor lo entregare á un establecimiento público ó á otra persona sin la anuencia de la que se lo hubiere confiado ó de la autoridad en su defecto, será castigado con una multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

#### CAPITULO IV.

##### *Disposicion comun á los tres capítulos precedentes.*

Art. 503. El que detuviere ilegalmente á cualquiera persona, ó sustrajere un menor de siete años, y no diere razon de su paradero ó no acreditare haberlo dejado en libertad, será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo á cadena perpétua.

En la misma pena incurrirá el que abandonare un niño menor de siete años, si no acreditare que le dejó abandonado sin haber cometido otro delito (2).

#### CAPITULO V.

##### *Allanamiento de morada.*

Art. 504. El particular que entrare en morada agena contra la voluntad de su morador será castigado con arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Si el hecho se ejecutare con violencia ó intimidacion,

---

(1) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(2) Corregida la redaccion del Código de 1850 y reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

las penas serán prision correccional en su grado medio y máximo y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 505. La disposicion del artículo anterior no es aplicable al que entra en la morada agena para evitar un mal grave á sí mismo, á los moradores ó á un tercero, ni al que lo hace para prestar algun servicio á la humanidad ó á la justicia.

Art. 506. Lo dispuesto en este capítulo no tiene aplicacion respecto de los cafés, tabernas, posadas y demás casas públicas mientras estuvieren abiertas.

## CAPÍTULO VI.

### *De las amenazas y coacciones.*

Art. 507. El que amenazare á otro con causar al mismo ó á su familia en sus personas, honra ó propiedad un mal que constituya delito, será castigado:

1.º Con la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la ley al delito con que amenazare, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad ó imponiendo cualquiera otra condicion, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito, y con la pena inferior en dos grados si no lo hubiere conseguido (2).

La pena se impondrá en su grado máximo si las amenazas se hicieren por escrito ó por medio de emisario.

2.º Con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas si la amenaza no fuere condicional (3).

---

(1) Al principio de este artículo se ha añadido la palabra *particular*, reformándole además en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(2) El Código de 1850 decia: *Imponiendo cualquiera otra condicion ilícita*.

(3) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

Art. 508. Las amenazas de un mal que no constituya delito hechas en la forma expresada en el núm. 1.º del artículo anterior, serán castigadas con la pena de arresto mayor.

Art. 509. En todos los casos de los dos artículos anteriores se podrá condenar además al amenazador á dar caucion de no ofender al amenazado, y en su defecto á la pena de destierro (1).

Art. 510. El que sin estar legítimamente autorizado impidiere á otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, ó le compeliere á efectuar lo que no quiera, sea justo ó injusto, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

Art. 511. El que con violencia se apoderare de una cosa perteneciente á su deudor para hacerse pago con ella, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado mínimo y una multa equivalente al valor de la cosa, pero que en ningun caso bajará de 125 pesetas (3).

## CAPITULO VII.

### *Descubrimiento y revelacion de secretos.*

Art. 512. El que para descubrir los secretos de otro se apoderare de sus papeles ó cartas y divulgare aquellos, será castigado con las penas de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Si no los divulgare, las penas serán arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

---

(1) El Código de 1850 decia: «Y en su defecto á la pena de sujecion á la vigilancia de la autoridad.»

(2) Reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(3) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.



Esta disposicion no es aplicable á los maridos, padres, tutores ó quienes hagan sus veces, en cuanto á los papeles ó cartas de sus mujeres, hijos ó menores que se hallen bajo su dependencia.

Art. 513. El administrador, dependiente ó criado que en tal concepto supiere los secretos de su principal y los divulgare, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 514. El encargado, empleado ú obrero de una fábrica ú otro establecimiento industrial que con perjuicio del dueño descubriere los secretos de su industria, será castigado con las penas de prision correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

### TITULO XIII.

#### DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.

#### CAPITULO I.

##### *De los robos.*

Art. 515. Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucrarse, se apoderan de las cosas muebles ó ajenas, con violencia ó intimidacion en las personas, empleando fuerza en las cosas (3).

Art. 516. El culpable de robo con violencia ó intimidacion en las personas será castigado:

1.º Con la pena de cadena perpétua á muerte, cuando

---

(1) Estos dos articulos han sido reformados en el mismo sentido que el anterior.

(2) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

(3) Idem id. id.

con motivo ó con ocasion del robo resultare homicidio.

2.º Con la pena de cadena temporal en su grado medio á cadena perpétua, cuando el robo fuere acompañado de violacion ó mutilacion causada de propósito, ó con su motivo ú ocasion se causare alguna de las lesiones penadas en el núm. 1.º del art. 431, ó el robado fuere detenido bajo rescate ó por más de un dia.

3.º Con la pena de cadena temporal, cuando, con el mismo motivo ú ocasion, se causare alguna de las lesiones penadas en el núm. 2.º del artículo mencionado en el número anterior.

4.º Con la pena de presidio mayor en su grado medio á cadena temporal en su grado mínimo, cuando la violencia ó intimidacion, que hubiere concurrido en el robo, hubiere tenido una gravedad manifiestamente innecesaria para su ejecucion, ó cuando en la perpetracion del delito se hubieren por los delincuentes inferido á personas, no responsables del mismo, lesiones comprendidas en los números 3.º y 4.º del citado art. 431 (1).

5.º Con la pena de ~~presidio~~ <sup>prisión</sup> correccional á presidio mayor en su grado medio en los demás casos.

Art. 517. Si los delitos de que tratan los números 3.º, 4.º y 5.º del artículo anterior hubieren sido ejecutados en despoblado y en cuadrilla, se impondrá á los culpables la pena en el grado máximo.

Al jefe de la cuadrilla, si estuviere total ó parcialmente armada, se impondrá, en los mismos casos, la pena superior inmediata (2).

Art. 518. Hay cuadrilla, cuando concurren á un robo más de tres malhechores armados (3).

(1) Reformado principalmente en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(3) La disposicion de este párrafo no existia en el Código de 1850.

Los malhechores presentes á la ejecucion de un robo en despoblado y en cuadrilla, serán castigados como autores de cualquiera de los atentados cometidos por ella, si no constare que procuraron impedirlos.

Se presume haber estado presente á los atentados cometidos por una cuadrilla el malhechor que anda habitualmente en ella, salvo la prueba en contrario.

Art. 519. La tentativa y el delito frustrado de robo, cometidos con el delito mencionado en el número 1.º del artículo 516, serán castigados con la pena de cadena temporal en su grado máximo á cadena perpétua, á no ser que el homicidio cometido la mereciere mayor, segun las disposiciones de este Código (1).

Art. 520. El que para defraudar á otro le obligare con violencia ó intimidacion á suscribir, otorgar ó entregar una escritura pública ó documento, será castigado como culpable de robo con las penas respectivamente señaladas en este capítulo.

Art. 521. Los que con armas robaren en casa habitada ó edificio público, ó destinado al culto religioso, serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado medio á cadena temporal en su grado mínimo, si el valor de los efectos robados excediere de 500 pesetas, y se introdujeren los malhechores en la casa ó edificio donde el robo tuviere lugar ó en cualquiera de sus dependencias, por uno de los medios siguientes:

- 1.º Por escalamiento.
- 2.º Por rompimiento de pared, techo ó suelo ó fractura de puerta ó ventana.
- 3.º Haciendo uso de llaves falsas, ganzúas ú otros instrumentos semejantes. (1)

(1) En el Código de 1850 se decia: «La tentativa de robo acompañada de los delitos etc.»

(1) Sin con fractura de puertas, armarios, etc., ni de muebles ni objetos arrastrados, ni de llaves, ni de sustracción por fracturación de cerraduras.

4.º Con nombre supuesto ó ~~simulacion de~~ autoridad.

Cuando los malhechores ~~llevaran~~ <sup>llevaran</sup> armas y el valor de lo robado no excediere de 500 pesetas, se impondrá la pena inmediatamente inferior. (1)

Cuando no llevaran armas ni el valor de lo robado excediere de 500 pesetas, se impondrá <sup>(2)</sup> en su grado mínimo la pena señalada en el párrafo anterior (1).

Art. 522. Cuando los delitos de que se habla en el artículo anterior hubieren sido ejecutados en despoblado y en cuadrilla <sup>(3)</sup> se impondrá á los culpables la pena en el grado máximo (2).

Art. 523. Se considerará casa habitada, todo albergue que constituyere la morada de una ó más personas, aunque se encontraren accidentalmente ausentes de ella cuando el robo tuviere lugar.

Se considerarán dependencias de casa habitada ó de edificio público ó destinado al culto, sus patios, corrales, bodegas, graneros, pajares, cocheras, cuadras y demás departamentos ó sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicacion interior con el mismo y con el cual forman un solo todo.

No estarán comprendidas en el párrafo anterior las huertas y demás terrenos destinados al cultivo ó á la pro-

(1) Las disposiciones correspondientes á este artículo en el Código de 1850, han sufrido varias reformas. Aquel Código decía: «Los malhechores que llevando armas robaren en iglesia ó lugar sagrado, incurrirán en la pena de presidio mayor en su grado medio á cadena temporal en igual grado, si cometieren el delito:

1.º Con escalamiento:

.....

5.º En despoblado y en cuadrilla.

En caso de reincidencia serán castigados con la pena de cadena temporal en su grado medio al máximo.»

En aquel Código no se tenía en cuenta por otra parte para variar la pena el valor de lo robado.

(2) Véase la nota al artículo anterior.

*La misma regla se debe aplicar cuando los malhechores, llevando armas, pero el valor de lo robado no excediere de 500 pesetas, = (2) = á los culpables la pena señalada en los dos párrafos anteriores.*

ducción, aunque estén cercadas, contiguas al edificio y en comunicacion interior con el mismo.

Art. 524. Cuando el robo, de que se trata en el artículo 521, se hubiere efectuado en una dependencia de casa habitada, edificio público ó destinado al culto religioso, introduciéndose los culpables saltando un muro exterior y se hubiere limitado la sustraccion á ~~frutas~~, semillas, ~~alimentos, animales ó cosas que sirven para el cultivo~~ y el valor de las cosas robadas no excediere de 25 pesetas, se impondrá á los culpables la pena de arresto mayor en su grado medio á prision correccional en su grado mínimo (1).

Art. 525. El robo cometido en lugar no habitado ó en un edificio que no sea de los comprendidos en el párrafo 1.º del art. 521, si el valor de los objetos robados excediere de 500 pesetas, se castigará con la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo, siempre que concorra alguna de las circunstancias siguientes:

- 1.º Escalamiento.
- 2.º Rompimiento de paredes, techos ó suelos, <sup>+ ó fracturados</sup> puertas ó ventanas exteriores.
- 3.º La de haber hecho uso de llaves falsas, ganzúas ú otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo.
- 4.º Fractura de puertas, armarios, arcas ú otra clase de muebles ú objetos cerrados ó sellados.
- 5.º Sustraccion de los objetos cerrados ó sellados de que trata el párrafo anterior, aunque se fracturen fuera del lugar del robo.

Cuando el valor de los objetos robados no excediera de

(2) Ni la disposicion de este articulo, ni la del anterior, existian en el Código de 1850.

*...al culto religioso.....*  
 1) ...alimentos, frutas o lías....

500 pesetas, se impondrá la pena inmediatamente inferior.

Art. 526. En los casos del artículo anterior, el robo que no excediere de 25 pesetas se castigará con arresto mayor en sus grados medio y máximo.

Si las cosas robadas fueren de las mencionadas en el art. 524, se castigará con la pena inmediatamente inferior (1).

Art. 527. El robo de que se trata en los artículos 524, 525 y 526, se castigará con la pena inmediatamente superior, si el culpable fuere dos ó más veces reincidente.

Art. 528. El que tuviere en su poder ganzúas ú otros instrumentos destinados especialmente para ejecutar el delito de robo y no diere el descargo suficiente sobre su adquisicion ó conservacion, será castigado con la pena de arresto mayor en su grado máximo á presidio correccional en su grado mínimo (2).

En igual pena incurrirán los que fabricaren dichos instrumentos. Si fueren cerrajeros, se les aplicará la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo (3).

Art. 529. Se entenderán llaves falsas:

1.º Los instrumentos á que se refiere el artículo anterior.

2.º Las llaves legítimas sustraídas al propietario.

3.º Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para la apertura de la cerradura violentada por el culpable (4).

(1) Todos estos artículos han sido reformados en el sentido de disminuir la pena y de distinguir entre el robo de efectos de cierto valor y la sustraccion de frutos, semillas, etc.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

(3) El Código de 1859 no penaba especialmente á los cerrajeros.

(4) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

## CAPITULO II.

*De los hurtos.*

Art. 530. Son reos de hurto:

1.º Los que con ánimo de lucrarse, y sin violencia ó intimidacion en las personas ni fuerza en las cosas, toman las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.

2.º Los que encontrándose una cosa perdida, y sabiendo quién es su dueño, se la apropiaren con intencion de lucro (1).

3.º Los dañadores que sustrajeren ó utilizaren los frutos ú objeto del daño causado, salvo los casos previstos en los artículos 606, número 1.º; 607, números 1.º, 2.º y 3.º; 608, número 1.º; 610, número 1.º; 611, 613, segundo párrafo del 617, y 618.

Art. 531. Los reos de hurto serán castigados:

1.º Con la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo, si el valor de la cosa hurtada excediere de 2.500 pesetas.

2.º Con la pena de presidio correccional en sus grados mínimo y medio, si no excediere de 2.500 pesetas y pasare de 500.

3.º Con arresto mayor en su grado medio á presidio correccional en su grado mínimo, si no excediere de 500 y pasare de 100 (2).

4.º Con el arresto mayor en toda su extension, si no excediere de 100 y pasare de 10.

---

(1) La disposicion de este número no existia en el Código de 1850. En su lugar decia lo siguiente:

«2.º Los que con ánimo de lucrarse negaren haber recibido dinero ú otra cosa mueble que se les hubiese entregado en préstamo, depósito ó por otro título que obligue á devolucion ó restitucion.

(2) Estos tres números han sido reformados en el sentido de aumentar la cantidad y disminuir la pena.

5.º Con arresto mayor en sus grados mínimo y medio, si no excediere de 10 y el reo hubiere sido condenado dos veces por hurto en juicio de faltas (1).

Art. 532. No obstante lo dispuesto en el número 4.º del artículo anterior, no se considerará delito, sino que se castigará como falta, el hurto de semillas alimenticias, frutos y leñas, cuando el valor de la cosa sustraída no excediere de 20 pesetas y el reo no ~~hubiere sido condenado dos veces reincidente~~ (2).

Art. 533. El hurto se castigará con las penas inmediatamente superiores en grado á las respectivamente señaladas en los dos artículos anteriores:

1.º Si fueren cosas destinadas al culto, ó se cometieren en acto religioso, ó en edificio destinado á celebrarlos.

2.º Si fuere doméstico ó interviniera grave abuso de confianza.

3.º Si fuere dos ó más veces reincidente.

## CAPITULO III.

### *De la usurpacion.*

Art. 534. Al que con violencia ó intimidacion en las personas ocupare una cosa inmueble ó usurpare un derecho real de agena pertenencia, se impondrá, además de las penas en que incurriera por las violencias que causare, una multa del 50 al 100 por 100 de la utilidad que haya reportado, no bajando de 125 pesetas.

(1) Las disposiciones de estos dos últimos números no existían en el Código de 1850.

(2) La disposición de este artículo no existía en el Código de 1850.

*El reo hubiere sido condenado por delito de robo ó hurto de cosas ajenas, multa de hurto.*



Si la utilidad no fuere estimable, se impondrá la multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 535. El que alterare términos ó lindes de los pueblos ó heredades ó cualquiera clase de señales destinadas á fijar los límites de prédios contiguos, será castigado con una multa del 50 al 100 por 100 de la utilidad que haya reportado ó debido reportar por ello.

Si no fuere estimable la utilidad, se le impondrá la multa de 125 á 1.250 pesetas (2).

## CAPITULO IV.

### *Defraudaciones.*

#### Seccion primera.

Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles.

Art. 536. El que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, será castigado con las penas de presidio mayor, si fuere comerciante, y con la de presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio, si no lo fuere (3).

Art. 537. El quebrado que fuere declarado en insolvencia fraudulenta con arreglo al Código de Comercio, será castigado con la pena de presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio.

Art. 538. El quebrado que fuere declarado en insolvencia culpable por alguna de las causas comprendidas en

---

(1) Al principio de este artículo se han añadido las palabras *ó intimidación*. Además ha sido reformado en el sentido de aumentar la pena pecuniaria.

(2) Corregida la redaccion del Código de 1850 y reformado en el mismo sentido que el anterior.

(3) El Código de 1850 decia, en vez de «*si fuere comerciante*,» «*si fuere persona dedicada habitualmente al comercio*.» Además, el segundo caso del artículo ha sido reformado en el sentido de agravar la penalidad.

el art. 1005 del Código de Comercio, incurrirá en la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio (1).

Art. 539. En los casos de los dos artículos precedentes, si la pérdida ocasionada á los acreedores no llegare al 10 por 100 de sus respectivos créditos, se impondrán al quebrado las penas inmediatamente inferiores en grado á la señalada en dichos artículos (2).

Cuando la pérdida excediere del 50 por 100, se impondrán en su grado máximo las penas señaladas en los dos mencionados artículos.

Art. 540. Las penas señaladas en los tres artículos anteriores son aplicables á los comerciantes, aunque no estén matriculados si ejercieren habitualmente el comercio.

Art. 541. Serán penados como cómplices del delito de insolvencia fraudulenta, los que ejecutaren cualquiera de los actos que se determinan en el art. 1010 del Código de Comercio.

Art. 542. Incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo, el concursado, no comerciante, cuya insolvencia fuere resultado en todo ó en parte de alguno de los hechos siguientes:

1.º Haber hecho gastos domésticos ó personales excesivos y descompasados con relacion á su fortuna, atendidas las circunstancias de su rango y familia.

2.º Haber sufrido en cualquiera clase de juego pérdidas que excedieren de lo que por vía de recreo aventurare,

(1) Lo mismo este artículo que el anterior han sido reformados en el sentido de agravar la pena.

(2) «Del cuarenta por ciento,» decia el Código de 1850.

en entretenimientos de esta clase, un padre de familia arreglado.

3.º Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas ú otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito dependa exclusivamente del azar.

4.º Haber enajenado con depreciacion notable bienes cuyo precio estuviere adeudando.

5.º Retardo en haber dejado de presentarse en concurso, cuando su pasivo fuere tres veces mayor que su activo.

Art. 543. Incurrirá en la pena de presidio correccional en su grado máximo, á presidio mayor en su grado mínimo, el concursado, no comerciante, cuya insolvencia fuere resultado en todo ó en parte de alguno de los hechos siguientes:

1.º Haber incluido gastos, pérdidas ó deudas supuestas ú ocultado bienes ó derechos en el estado de deudas, relacion de bienes ó memorias que haya presentado á la autoridad judicial.

2.º Haberse apropiado ó distraido bienes ajenos que le estuvieren encomendados en depósito, comision ó administracion.

3.º Haber simulado enajenacion ó cualquier gravámen de bienes, deudas ú obligaciones.

4.º Haber adquirido por título oneroso bienes á nombre de otra persona.

5.º Haber anticipado en perjuicio de los acreedores pago que no fuere exigible sino en época posterior á la declaracion de concurso.

6.º Haber distraido, con posterioridad á la declaracion en concurso, valores correspondientes á la masa.

Art. 544. Es aplicable á los dos anteriores artículos la disposicion contenida en el 539.

**Art. 545.** Serán penados como cómplices del delito de insolvencia fraudulenta, cometida por el deudor no dedicado al comercio, los que ejecutaren cualquiera de los actos siguientes:

1.º Confabularse con el concursado para suponer crédito contra él ó para aumentarlo, alterar su naturaleza ó fecha con el fin de anteponerse en la graduación con perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verificare antes de la declaración del concurso.

2.º Haber auxiliado al concursado para ocultar ó sustraer sus bienes.

3.º Ocultar á los administradores del concurso la existencia de bienes que perteneciendo á este, obren en poder del culpable, ó entregarlos al concursado y no á dichos administradores.

4.º Verificar con el concursado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores.

**Art. 546.** Las penas señaladas en este capítulo se impondrán en su grado máximo al medio al quebrado ó concursado que no restituyere el depósito miserable ó necesario (1).

## Sección segunda.

Estafas y otros engaños.

**Art. 547.** El que defraudare á otro en la sustancia,

---

(1) Las disposiciones contenidas en los artículos desde el 541 hasta el 546, ambos inclusive, no existían en el Código de 1850. En cambio, ha sido suprimido el último artículo de la sección correspondiente en aquel Código, que decía así:

•Art. 448. El deudor no dedicado al comercio que se constituya en insolvencia por ocultación ó enajenación maliciosa de sus bienes, será castigado:

•1.º Con la pena de arresto mayor, si la deuda excede de 5 duros y no pasa de 100.

•2.º Con la de prisión correccional, si excediere de 100 duros. •

cantidad ó calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será castigado:

1.º Con la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio, si la defraudacion no excediere de 100 pesetas.

2.º Con la de arresto mayor en su grado medio á presidio correccional en su grado mínimo, excediendo de 100 pesetas y no pasando de 2.500.

3.º Con la de presidio correccional en sus grados mínimo y medio, excediendo de 2.500 pesetas (1).

Art. 548. Incurrirá en las penas del artículo anterior:

1.º El que defraudare á otros usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia ó cualidades supuestas, aparentando bienes, crédito, comision, empresa ó negociaciones imaginarias, ó valiéndose de cualquiera otro engaño semejante que no sea de los expresados en los casos siguientes.

2.º Los plateros y joyeros que cometieren defraudacion, alterando en su calidad, ley ó peso los objetos relativos á su arte ó comercio.

3.º Los traficantes que defraudaren usando de pesos ó medidas faltas en el despacho de los objetos de su tráfico.

4.º Los que defraudaren con pretexto de supuestas remuneraciones á empleados públicos, sin perjuicio de la accion de calumnia que á estos corresponda.

A los comprendidos en los tres números anteriores se les impondrán las penas en su grado máximo.

5.º Los que en perjuicio de otro se apropiaren ó distrajeren dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que

---

(1) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

hubieren recibido en depósito, comision ó administracion, ó por otro título que produzca obligacion de entregarla ó devolverla, ó negaren haberla recibido.

Las penas se impondrán en el grado máximo en el caso de depósito miserable ó necesario.

6.º Los que cometieren alguna defraudacion abusando de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algun documento en perjuicio del mismo ó de un tercero.

7.º Los que defraudaren haciendo suscribir á otro con engaño algun documento.

8.º Los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte.

9.º Los que cometieren defraudacion sustrayendo, ocultando ó inutilizando en todo ó en parte algun proceso, expediente, documento ú otro papel de cualquiera clase.

Cuando se cometiere el mismo delito sin ánimo de defraudar, se impondrá á sus autores una multa de 125 á 1.250 pesetas (1).

Art. 549. Los delitos expresados en los números anteriores serán castigados con la pena respectivamente superior en un grado si los culpables fueren dos ó más veces reincidentes en el mismo ó semejante especie de delito.

Art. 550. El que fingiéndose dueño de una cosa inmueble la enajenare, arrendare, gravare ó empeñare, será castigado con la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio, y una multa del tanto al triplo del importe del perjuicio que hubiere irrogado.

En la misma pena incurrirá el que dispusiere de una cosa como libre sabiendo que estaba gravada (2).

(1) La única reforma que se realiza en este punto es incluir en un solo artículo disposiciones que estaban diseminadas en varios artículos en el Código de 1850.

(2) El Código de 1850 no imponía más pena que la multa.

Art. 551. Incurrirán en las penas señaladas en el artículo precedente:

1.º El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del mismo ó de un tercero.

2.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

Art. 552. Incurrirán asimismo en las penas señaladas en el art. 550 los que cometieren alguna defraudacion de la propiedad literaria ó industrial (1).

Art. 553. El que abusando de la impericia ó pasiones de un menor le hiciere otorgar en su perjuicio alguna obligacion, descargo ó trasmision de derecho por razon de préstamo de dinero, crédito ú otra cosa mueble, bien aparezca el préstamo claramente, bien se halle encubierto bajo otra forma, será castigado con las penas de arresto mayor y multa del 10 al 50 por 100 del valor de la obligacion que hubiera otorgado el menor.

Art. 554. El que defraudare ó perjudicare á otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado en los artículos anteriores de esta seccion, será castigado con una multa del tanto al duplo del perjuicio que irrogare; y en caso de reincidencia, con la del duplo y arresto mayor en su grado medio al máximo.

## CAPITULO V.

### *De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas.*

Art. 555. Los que solicitaren dádiva ó promesa para no tomar parte en una subasta pública, y los que inten-

---

(1) El Código de 1850 añadía: «Los ejemplares, máquinas ú objetos contrahechos, introducidos ó expendidos fraudulentamente, se aplicarán al per-

taren alejar de ella á los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas ó cualquier otro artificio con el fin de alterar el precio del remate, serán castigados con una multa del 10 al 50 por 100 del valor de la cosa subastada, á no merecerla mayor por la amehaza ú otros medios que emplearen.

Art. 556. Los que se coligaren con el fin de encarecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo ó regular sus condiciones, serán castigados, siempre que la coligacion hubiere comenzado á ejecutarse, con la pena de arresto mayor (1).

Esta pena se impondrá en su grado máximo á los jefes y promovedores de la coligacion y á los que para asegurar su éxito emplearen violencias ó amenazas, á no ser que por ellas merecieren mayor pena.

Art. 557. Los que esparciendo falsos rumores ó usando de cualquier otro artificio consiguieren alterar los precios naturales que resultarian de la libre concurrencia en las mercancías, acciones, rentas públicas ó privadas, ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto de contratacion, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Art. 558. Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre cosas alimenticias ú otros objetos de primera necesidad, la pena se impondrá en su grado máximo.

---

judicado, y tambien las láminas ó utensilios empleados para la ejecucion del fraude, cuando solo pudiesen usarse para cometerle.

«Si no pudiese tener efecto esta disposicion, se impondrá al culpable la multa del duplo del valor de la defraudacion, que se aplicará al perjudicado.»

(1) El Código de 1850 imponia además la multa de 10 á 100 duros, y contenia el siguiente párrafo, que ha sido suprimido en la reforma:

«Si la coligacion se formase en una poblacion menor de 10.000 almas, las penas serán arresto menor y multa de 5 á 50 duros.



Para la imposición de esta pena bastará que la coligación haya comenzado á ejecutarse.

## CAPITULO VI.

### *De las casas de préstamos sobre prendas.*

Art. 559. Será castigado con la multa de 500 á 5.000 pesetas el que hallándose dedicado á la industria de préstamos sobre prendas, sueldos ó salarios, no llevar libros asentando en ellos sin claros ni entrerenglondos las cantidades prestadas, los plazos ó intereses, los nombres y domicilios de los que las reciban, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda, y las demás circunstancias que exigen los reglamentos (1).

Art. 560. El prestamista que no diere resguardo de la prenda ó seguridad recibida, será castigado con una multa del duplo al quíntuplo de su valor (2).

## CAPITULO VII.

### *Del incendio y otros estragos.*

Art. 561. Serán castigados con la pena de cadena temporal en su grado máximo á perpétua:

---

(1) El Código de 1850 decía:

•Art. 465. Será castigado con la multa de 100 á 1.000 duros el que hallándose dedicado, *con licencia ó sin ella*, á la industria de que se habla en el artículo anterior, no llevar, etc. •

Además, ha desaparecido la disposición del art. 464 de dicho Código, que era la siguiente:

•Art. 464. El que sin licencia de la autoridad se dedicare habitualmente á prestar sobre prendas ú otras seguridades, será castigado con la multa de 20 á 200 escudos. •

(2) Por el Código de 1850, lo mismo en el caso de este artículo que en el del anterior, las cantidades prestadas caían en comiso.

1.º Los que incendiaren arsenal, astillero, almacén, fábrica de pólvora ó de pirotécnia militar, parque de artillería, archivo ó museo general del Estado.

2.º Los que incendiaren un tren de viajeros en marcha ó un buque fuera de puerto.

3.º Los que incendiaren en poblado un almacén de materias inflamables ó explosivas.

4.º Los que incendiaren un teatro ó una iglesia ú otro edificio destinado á reuniones, cuando se hallare dentro una concurrencia numerosa (1).

Art. 562. Serán castigados con la pena de cadena temporal á perpétua los que incendiaren edificio, alquería, choza, albergue ó buque en puerto, sabiendo que dentro de ellos se hallaban una ó más personas.

Art. 563. Se impondrá la pena de cadena temporal:

1.º A los que incendiaren un edificio público, si el valor del daño causado excediere de 2.500 pesetas.

2.º A los que incendiaren una casa habitada ó cualquiera edificio en que habitualmente se reúnan diversas personas ignorando si había ó no gente dentro, ó un tren de mercancías en marcha, si el daño causado en los casos mencionados excediere también de 2.500 pesetas.

Art. 564. Serán castigados con la pena de presidio mayor:

1.º Los que cometieren cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo anterior, si el valor del daño causado no excediere de 2 500 pesetas.

2.º Los que incendiaren en poblado un edificio, no destinado á habitación ni reunión, si el valor del daño causado excediere de 2.500 pesetas.

---

(1) Las disposiciones de estos tres últimos números no existían en el Código de 1850.

Art. 565. Cuando el daño causado en el núm. 2.º del artículo anterior no excediere de 2.500 pesetas, pero pasare de 250, se impondrá al culpable la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo.

Si no excediere de 250 pesetas se le impondrá la pena de presidio correccional en sus grados mínimo y medio.

Art. 566. Serán castigados con la pena de presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio, cuando el daño causado excediere de 2.500 pesetas:

1.º Los que incendiaren un edificio destinado á habitacion en lugar despoblado.

2.º Los que incendiaren mieses, pastos, montes ó plantíos.

Art. 567. Cuando el daño causado en los casos del artículo anterior no excediere de 2.500 pesetas y pasare de 250, la pena será la de presidio correccional en su grado medio á presidio mayor en su grado mínimo.

Art. 568. Si no llegare á 250 pesetas, se impondrá la pena inferior en un grado, si el incendio se hubiere causado en edificio, y la inferior en dos si hubiere sido de mieses, pastos, montes ó plantíos.

Art. 569. Cuando en el incendio de mieses, pastos, montes ó plantíos hubiera habido peligro de propagacion por hallarse otros contíguos á los incendiados, se impondrá la pena superior en un grado de la correspondiente al delito.

Art. 570. El incendio de cosas no comprendidas en los artículos anteriores, será castigado:

1.º Con la pena de arresto mayor en sus grados medio y máximo, no excediendo de 50 pesetas el daño causado.

2.º Con la de arresto mayor en su grado máximo á

presidio correccional en su grado mínimo, si el daño causado excediere de 50 pesetas y no pasare de 500.

3.º Con la de presidio correccional en sus grados mínimo y medio, si el daño causado excediere de 500 pesetas y no pasare de 2.500.

4.º Y con la de presidio correccional en sus grados medio y máximo, si excediere de 2.500 pesetas (1).

Art. 571. En caso de aplicarse el incendio á chozas, pajares ó cobertizos deshabitados, ó á cualquier otro objeto cuyo valor no excediere de 250 pesetas, en tiempo ó con circunstancias que manifiestamente excluyan todo peligro de propagacion, el culpable no incurrirá en las penas señaladas en este capítulo, pero sí en las que mereciere por el daño que causare, con arreglo á las disposiciones del capítulo siguiente.

Art. 572. Incurrirán respectivamente en las penas de este capítulo, los que causaren estragos por medio de inmersión ó varamiento de nave, inundación, explosión de una mina ó máquina de vapor, levantamiento de los rails de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de estas para la seguridad de los trenes en marcha, destrozo de los hilos y postes telegráficos, y en general de cualquiera otro agente ó medio de destrucción tan poderoso como los expresados (2).

Art. 573. El culpable de un incendio ó estragos en bienes ajenos no se eximirá de las penas impuestas en

(1) Las disposiciones de los anteriores artículos desde el 561 están reformadas en relación á sus correspondientes del Código de 1850 en el sentido de distinguir casos que aquel Código consideraba idénticos para la imposición de la pena, y en el de rebajar ésta.

(2) El Código de 1850 no se refería taxativamente al levantamiento de los rails de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de estas para la seguridad de los trenes en marcha y destrozo de los hilos y postes telegráficos.

este capítulo, aunque para cometer el delito hubiere incendiado ó destruido bienes de su pertenencia.

Art. 574. Si las cosas incendiadas pertenecieren exclusivamente al incendiario, se le impondrá la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo, si el incendio hubiere sido causado con propósito de defraudar los derechos de tercero ó de causarle perjuicio, ó si aun sin este propósito se le hubiere realmente causado, ó bien si la cosa incendiada hubiere sido un edificio en lugar poblado (1).

## CAPITULO VIII.

### *De los daños.*

Art. 575. Son reos de daño, y están sujetos á las penas de este capítulo, los que en la propiedad ajena causaren alguno que no se halle comprendido en el anterior.

Art. 576. Serán castigados con la pena de prision correccional en su grado mínimo y medio los que causaren daños cuyo importe excediere de 2.500 pesetas:

1.º Con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad ó en venganza de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra empleados públicos, bien contra particulares, que como testigos ó de cualquiera otra manera hayan contribuido ó puedan contribuir á la ejecucion ó aplicacion de las leyes.

---

(1) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850. En cambio, se ha suprimido la disposicion del art. 472 de dicho Código, que era la siguiente:

«Art. 472. El que fuere aprehendido con mecha ó preparativo conocidamente dispuesto para incendiar ó causar alguno de los estragos expresados en este capítulo, será castigado con la pena de presidio menor.»

2.º Produciendo por cualquier medio infeccion ó contagio en ganados.

3.º Empleando sustancias venenosas ó corrosivas.

4.º En cuadrilla ó despoblado.

5.º En un archivo ó registro.

6.º En puentes, caminos, paseos ú otros objetos de uso público ó comunal.

7.º Arruinando al perjudicado (1).

Art. 577. El que con alguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior causare daño cuyo importe exceda de 50 pesetas, pero no pase de 2.500, será castigado con la pena de arresto mayor (2).

Art. 578. El incendio ó destruccion de papeles ó documentos cuyo valor fuere estimable, se castigará con arreglo á las disposiciones de este capítulo.

Si no fuere estimable, con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado medio y multa de 250 á 2.500 pesetas (3).

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando el hecho no constituya otro delito más grave.

Art. 579. Los daños no comprendidos en los artículos anteriores, cuyo importe pase de 50 pesetas, serán castigados con la multa del tanto al triplo de la cuantía á que ascendieren, no bajando nunca de 75 pesetas.

Esta determinacion no es aplicable á los daños causados por el ganado y los demás que deben calificarse de faltas con arreglo á lo que se establece en el libro 3.º

Las disposiciones del presente capítulo solo tendrán

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) Reformado en el sentido de aumentar el mínimun de la cantidad y de rebajar la pena.

(3) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

lugar cuando al hecho no corresponda mayor pena, al tenor de lo determinado en el art. 530 (1).

## CAPITULO IX.

### *Disposiciones generales.*

Art. 580. Están exentos de responsabilidad criminal, y sujetos únicamente á la civil, por los hurtos, defraudaciones ó daños que recíprocamente se causaren:

1.º Los cónyuges, ascendientes y descendientes ó afines en la misma línea.

2.º El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no haya pasado á poder de otro.

3.º Los hermanos y cuñados si vivieren juntos.

La excepcion de este artículo no es aplicable á los extraños que participaren del delito.

## TITULO XIV.

### DE LA IMPRUDENCIA TEMERARIA.

Art. 581. El que por imprudencia temeraria ejecutar un hecho que si mediere malicia constituiria un delito grave, será castigado con la pena de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo, y con arresto mayor en sus grados mínimo y medio si constituyere un delito menos grave (2).

Al que con infraccion de los reglamentos cometiere un

---

(1) Corregida la redaccion del Código de 1850.

(2) Reformado en el primer caso de los dos que comprende este párrafo en el sentido de disminuir la penalidad.

delito por simple imprudencia ó negligencia, se impondrá la pena de arresto mayor en sus grados medio y máximo.

En la aplicacion de estas penas procederán los tribunales segun su prudente arbitrio, sin sujetarse á las reglas prescritas en el art. 82.

Lo dispuesto en el presente artículo no tendrá lugar cuando la pena señalada al delito sea igual ó menor que las contenidas en el párrafo primero del mismo, en cuyo caso los tribunales aplicarán la inmediata á la que corresponda en el grado que estimen conveniente.

## TITULO XV.

### DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 582. Los que provocaren directamente por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicacion, á la perpetracion de los delitos comprendidos en este Código, incurrirán en la pena inferior en dos grados á la señalada al delito.

Art. 583. Si á la provocacion hubiere seguido la perpetracion del delito, la pena de la provocacion será la inmediatamente inferior en grado á la que para aquel esté señalada (1).

---

(1) Estas *disposiciones generales* no existian en el Código de 1850.



## LIBRO TERCERO.

---

### De las faltas y sus penas (1).

#### TITULO I.

#### DE LAS FALTAS DE IMPRENTA Y CONTRA EL ÓRDEN PÚBLICO.

#### CAPITULO I.

#### *De las faltas de imprenta (2).*

Art. 584. Incurrirán en la pena de 25 á 125 pesetas de multa:

1.º El director de un periódico en el cual se hubieren anunciado hechos falsos, si se negare á insertar gratis, dentro del término de tres dias, la contestacion que le dirija la persona ofendida, ó cualquiera otra autorizada para ello, rectificándolos ó explicándolos, con tal que la rectificacion no excediere en extension del doble del suelto ó noticia falsa.

En el caso de ausencia ó muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus hijos, padres, hermanos y herederos.

2.º Los que por medio de la imprenta, litografía ú otro medio de publicacion divulgaren maliciosamente he-

---

(1) En el Código de 1850 las faltas no se hallaban clasificadas por su naturaleza como en este, sino por las penas que les estaban impuestas, lo cual, además de no obedecer al método seguido en el libro segundo, producía dificultad para encontrar con prontitud la disposicion que se buscaba.

En este punto, pues, la reforma ofrece un notable progreso sobre el Código reformado.

(2) Todas las disposiciones de este capitulo son producto de la reforma.

chos relativos á la vida privada que, sin ser injuriosos, puedan producir perjuicios ó graves disgustos en la familia á que la noticia se refiera.

3.º Los que por los mismos medios publicaren maliciosamente noticias falsas de las que pueda resultar algun peligro para el orden público ó daño á los intereses ó al crédito del Estado.

4.º Los que en igual forma, sin cometer delito, provocaren á la desobediencia de las leyes y de las autoridades constituidas, hicieren la apología de acciones calificadas por la ley de delito ú ofendieren á la moral, á las buenas costumbres ó á la decencia pública.

5.º Los que publicaren maliciosamente disposiciones, acuerdos ó documentos oficiales sin la debida autorización, antes que hayan tenido publicidad oficial.

## CAPITULO II.

### *Faltas contra el orden público.*

Art. 585. Los que apedrearen ó mancharen estátuas ó pinturas ó causaren un daño cualquiera en las calles, parques, jardines ó paseos, en el alumbrado ó en objetos de ornato ó pública utilidad ó recreo, aun cuando pertenecieren á particulares, serán castigados con la multa del duplo al cuádruplo del valor del daño causado, si el hecho no estuviere comprendido por su gravedad en el libro 2.º de este Código.

En la misma pena incurrirán los que de cualquier modo infringieren disposiciones dictadas sobre ornato de las poblaciones (1).

---

(1) El Código de 1850 imponía la pena de arresto de cinco á quince dias, ó una multa de 5 á 15 duros.

**Art. 586.** Serán castigados con la pena de arresto de uno á diez dias y multa de 5 á 50 pesetas:

1.º Los que perturbaren los actos de un culto ú ofendieren los sentimientos religiosos de los concurrentes á ellos de un modo no previsto en la seccion tercera, capítulo II, título II del libro 2.º de este Código.

2.º Los que con la exhibicion de estampas ó grabados ó con otra clase de actos ofendieren la moral y las buenas costumbres sin cometer delito (1).

**Art. 587.** Serán castigados con la pena de uno á cinco dias de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas los que dentro de poblacion ó en sitio público ó frecuentado dispararen armas de fuego, cohetes, petardos ú otro proyectil cualquiera que produzcan alarma ó peligro.

**Art. 588.** Serán castigados con las penas de uno á quince dias de arresto y multa de 25 á 75 pesetas (2):

(1) Los artículos correspondientes á este en el Código de 1850 decian así:  
 \*Art. 481. Serán castigados con las penas de arresto de uno á diez dias, multa de 3 á 15 duros y reprension:

1.º El que blasfemare públicamente de Dios, de la Virgen, de los santos ó de las cosas sagradas.

2.º El que en la misma forma, con dichos, con hechos, ó por medio de estampas, dibujos ó figuras cometiere irreverencia contra las cosas sagradas ó contra los dogmas de la religion sin llegar al escárnio de que habla el artículo 133.

3.º Los que en menor escala que la determinada en dicho artículo cometieren simple irreverencia en los templos, ó á la puerta de ellos, y los que en las mismas inquieten, denuesten ó zahieran á los fieles que concurren á los actos religiosos.

4.º El que públicamente maldigere al Rey, ó con otras espresiones cometiere desacato contra su sagrada persona.

**Art. 482.** Incurren en las penas de uno á cinco dias de arresto, de 1 á 10 duros de multa y reprension:

1.º Los que públicamente ofendieren al pudor con acciones ó dichos desonestos.

2.º El que exponga al público y el que con publicidad ó sin ella exponda estampas, dibujos ó figuras que ofendan al pudor y á las buenas costumbres.

Los jueces y tribunales calificarán prudencialmente cuándo hay publicidad en los casos del presente artículo y del anterior, segun las circunstancias del lugar, tiempo y personas, y escándalo producido por la falta. •

(2) Reformado en el sentido de aumentar la pena y los casos de incurrir en falta.

1.º Los que turbaren levemente el orden en la Audiencia ó juzgado, en los actos públicos, en espectáculos, solemnidades ó reuniones numerosas (1).

2.º Los subordinados del orden civil que falteren al respeto y sumision debidos á sus superiores, cuando el hecho no tuviere señalada mayor pena en este Código ó en otras leyes (2).

Art. 589. Serán castigados con la multa de 5 á 25 pesetas y reprension:

1.º Los que promovieren ó tomaren parte activa en encerradas ú otras reuniones tumultuosas con ofensa de alguna persona ó con perjuicio ó menoscabo del sosiego público (3).

2.º Los que en rondas ú otros esparcimientos nocturnos turbaren el orden público sin cometer delito (4).

3.º Los que causaren perturbacion ó escándalo con su embriaguez (5).

4.º Los que sin estar comprendidos en otras disposiciones de este Código turbaren levemente el orden público usando de medios que racionalmente deban producir alarma ó perturbacion (6).

5.º Los que faltaren al respeto y consideracion debida á la autoridad ó la desobedecieren levemente, dejando de cumplir las órdenes particulares que les dictare, si la falta de respeto ó la desobediencia no constituyeran delito (7).

6.º Los que ofendieren de un modo que no constitu-

(1) Reformado en el sentido de aumentar la pena y los casos de incurrir en falta.

(2) El Código de 1850 no imponia la pena pecuniaria.

(3) Reformado en el sentido de disminuir la pena y de confundir en una misma á todos los que en ella incurran.

(4) Idem id. id.

(5) Reformado en el sentido de aumentar la pena.

(6) La disposicion de este número no existia en el Código de 1850.

(7) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

ya delito á los agentes de la autoridad cuando ejerzan sus funciones y los que en el mismo caso los desobedecieren (1).

7.º Los que no prestaren á la autoridad el auxilio que reclamare en caso de delito, de incendio, naufragio, inundacion ú otra calamidad, pudiendo hacerlo sin perjuicio ni riesgo personal (2).

Art. 590. Serán castigados con la multa de 25 á 75 pesetas los que ocultaren su verdadero nombre, vecindad, estado ó domicilio á la autoridad ó funcionario público que se lo preguntare por razon de su cargo (3).

Art. 591. Serán castigados con la pena de 5 á 25 pesetas de multa:

1.º Los que ejercieren sin título actos de una profesion que lo exija (4).

2.º Los que salieren de máscara en tiempo no permitido, contraviniendo á las disposiciones de la autoridad (5).

3.º Los que usaren armas sin licencia (6).

## TITULO II.

### DE LAS FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES Y RÉGIMEN DE LAS POBLACIONES.

Art. 592. Serán castigados con las penas de uno á diez dias de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas:

1.º Los que se negaren á recibir en pago moneda legítima (7).

(1) La disposicion de este número no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(3) Idem id. id.

(4) Idem id. id.

(5) Reformado en el sentido de aumentar la pena.

(6) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

(7) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

2.º Los que habiendo recibido de buena fé moneda falsa la expendieren en cantidad menor de 125 pesetas y mayor de 25, despues de constarles su falsedad (1).

2.º Los traficantes ó vendedores que tuvierén medidas ó pesos dispuestos con artificio para defraudar, ó de cualquier modo infringieran las reglas establecidas sobre contraste para el gremio á que pertenezcan (2).

4.º Los que defraudarén al público en la venta de sustancias, ya sea en cantidad ya en calidad, por cualquiera medio no penado expresamente.

5.º Los traficantes ó vendedores á quienes se aprehendieren sustancias alimenticias que no tengan el peso, medida ó calidad que corresponda (3).

Art. 593. Serán castigados con la pena de cinco á quince dias de arresto y multa de 25 á 75 pesetas:

1.º Los que esparcieren falsos rumores ó usaren de cualquier otro artificio ilícito para alterar el precio natural de las cosas si el hecho no constituyere delito (4).

2.º Los que infringieren las reglas de policía dirigidas á asegurar el abastecimiento de las poblaciones (5).

Art. 594. Los que en sitios ó establecimientos públicos promovieren ó tomaren parte en cualquiera clase de juegos de azar que no fueren de puro pasatiempo y recreo, incurrirán en la multa de 5 á 25 pesetas (6).

Art. 595. Serán castigados con la pena de cinco á quince dias de arresto y multa de 25 á 75 pesetas en los casos no comprendidos en el libro 2.º:

(1) La disposicion de este número no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de disminuir la pena.

(3) Reformados, lo mismo este número que el anterior, en el sentido de aumentar la pena.

(4) La disposicion de este número no existia en el Código de 1850.

(5) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(6) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

1.º Los farmacéuticos que expendieren medicamentos de mala calidad (1).

2.º Los dueños ó encargados de fondas, confiterías, panaderías ú otros establecimientos análogos que expendieren ó sirvieren bebidas ó comestibles adulterados ó alterados, perjudiciales á la salud, ó no observaren en el uso y conservacion de las vasijas, medidas y útiles destinados al servicio, las reglas establecidas ó las precauciones de costumbre, cuando el hecho no constituya delito (2).

Art. 596. Serán castigados con la multa de 5 á 26 pesetas y reprension:

1.º Los que se bañaren faltando á las reglas de decencia ó de seguridad establecidas por la autoridad (3).

2.º Los que infringieren las disposiciones sanitarias de policía sobre prostitucion (4).

3.º Los que infringieren las reglas dictadas por la autoridad en tiempos de epidemia ó contagio (5).

4.º Los que infringieren los reglamentos, ordenanzas y bandos sobre epidemia de animales, extincion de langosta ú otra plaga semejante (6).

5.º Los que infringieren las disposiciones sanitarias dictadas por la administracion sobre conduccion de cadáveres y enterramientos en los casos no previstos en el libro 2.º de este Código.

6.º Los que profanaren los cadáveres, cementerios ó lugares de enterramiento por hechos ó actos que no constituyan delito (7).

---

(1) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(2) Idem id. id.

(3) Idem id. id.

(4) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(5) Idem id. id.

(6) Idem id. id.

(7) Las disposiciones de estos dos números no existian en el Código de 1850.

7.º Los que arrojaran animales muertos, basuras ó escombros en las calles y en los sitios públicos donde esté prohibido hacerlo ó ensuciaren las fuentes ó abrevaderos (1).

8.º Los que infringieren las reglas ó bandos de policía sobre la elaboracion de sustancias fétidas é insalubres ó las arrojaran á las calles (2).

9.º Los que de cualquier otro modo que no constituya delito infringieren los reglamentos, ordenanzas ó bandos sobre higiene pública dictados por la autoridad dentro del círculo de sus atribuciones (3).

Art. 597. Serán castigados con las penas de uno á cinco dias de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas:

1.º Los que dieren espectáculos públicos ó celebraren cualquiera clase de reuniones sin obtener la debida licencia ó traspasando los límites de la que les fuere concedida (4).

2.º Los que abrieren establecimientos de cualquiera clase sin licencia de la autoridad, cuando fuere necesaria (5).

Art. 598. Serán castigados con las penas de cinco á diez dias de arresto ó multa de 25 á 75 pesetas:

1.º Los que apagaren el alumbrado público ó del exterior de los edificios ó el de los portales ó escaleras de los mismos (6).

2.º Los que faltaren á las reglas establecidas para el alumbrado público, donde este servicio se hiciere por los particulares (7).

---

(1) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(2) Idem id. id.

(3) Idem id. id.

(4) Idem id. id.

(5) Idem id. id.

(6) Idem id. id.

(7) Idem id. id.



Art. 599. Serán castigados con las penas de 5 á 50 pesetas de multa ó reprension:

1.º Los facultativos que, notando en una persona á quien asistieren ó en un cadáver señales de envenenamiento ó de otro delito, no dieren parte á la autoridad inmediatamente, siempre que por las circunstancias no incurrieren en responsabilidad mayor (1)

2.º Los encargados de la guarda ó custodia de un loco que lo dejaren vagar por las calles y sitios públicos sin la debida vigilancia (2).

3.º Los dueños de animales feroces y dañinos que los dejaren sueltos ó en disposicion de causar mal (3).

4.º Los que infringieren los reglamentos, ordenanzas ó bandos relativos á carruajes públicos (4).

5.º Los que corrieren caballerías ó carruajes por las calles, paseos y sitios públicos con peligro de los transeuntes ó con infraccion de las ordenanzas y bandos de buen gobierno (5).

6.º Los que obstruyeren las aceras, calles y sitios públicos con actos ó artefactos de cualquiera especie.

7.º Los que arrojaran á la calle ó sitio público agua, piedras ú otros objetos que puedan causar daño á las personas ó en las cosas, si el hecho no tuviere señalada mayor pena por su intensidad ó circunstancias (6).

8.º Los que tuvieran en los parajes exteriores de su morada sobre la calle ó vía pública objetos que amenacen causar daños á los transeuntes (7).

---

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) Reformado en el sentido de aumentar ó disminuir la penalidad segun los casos.

(3) Idem id. id.

(4) Idem id. id.

(5) Idem id. id.

(6) Idem id. id.

(7) Idem id. id.

**Art. 600.** Serán castigados con la multa de 5 á 50 pesetas:

1.º Los dueños de fondas, posadas y demás establecimientos destinados á hospedaje que dejaren de dar á la autoridad los partes y noticias prevenidos por los reglamentos, ordenanzas ó bandos en el tiempo y forma que estuvieren prevenidos.

2.º Los criados de servicio, mozos y dependientes que no conservaren con la debida formalidad la cartilla de informes ó dejaren de cumplir las prevenciones establecidas para garantía y seguridad (1).

**Art. 601.** Serán castigados con la pena de 25 á 75 pesetas:

1.º Los que contravinieren á las reglas establecidas para evitar la propagacion del fuego en las máquinas de vapor, calderas, hornos, estufas, chimeneas ú otros lugares semejantes, ó construyeren esos objetos con infraccion de los reglamentos, ordenanzas ó bandos, ó dejaren de limpiarlos ó cuidarlos con peligro de incendio (2).

2.º Los que infringiendo las órdenes de la autoridad descuidaren la reparacion de edificios ruinosos ó de mal aspecto (3).

3.º Los que infringieren las reglas de seguridad concernientes al depósito de materiales, apertura de pozos ó escavaciones (4).

4.º Los que infringieren los reglamentos, ordenanzas ó bandos de la autoridad sobre elaboracion y custodia de materias inflamables ó corrosivas ó productos químicos que puedan causar extragos (5).

---

(1) Las disposiciones de este artículo no existian en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(3) Idem id. id.

(4) Idem id. id.

(5) Idem id. id.

## TITULO III.

## DE LAS FALTAS CONTRA LAS PERSONAS.

Art. 602. Serán castigados con la pena de arresto menor los que causaren lesiones que impidan al ofendido trabajar de uno á siete dias ó hagan necesaria por el mismo tiempo la asistencia facultativa (1).

Si concurriere la circunstancia de ser padre, hijo, marido ó tutor el ofensor, se aplicará el grado máximo de la pena, sean cuálesquiera las circunstancias que concurran (2).

Art. 603. Serán castigados con la pena de cinco á quince dias de arresto y reprension:

1.º Los que causaren lesiones que no impidan al ofendido dedicarse á sus trabajos habituales ni exijan asistencia facultativa.

2.º Los maridos que maltraten á sus mujeres, aun cuando no les causaren lesiones de las comprendidas en el párrafo anterior.

3.º Las mujeres desobedientes á sus maridos que les maltrataren de obra ó de palabra (3).

4.º Los cónyuges que escandallzaren en sus disensiones domésticas despues de haber sido amonestados por la autoridad, si el hecho no estuviere comprendido en el libro 2.º de este Código.

---

(1) Reformado en el sentido de aumentar el número de dias de imposibilidad de trabajar, y de aumentar ó disminuir la pena, segun los casos.

(2) Esta disposicion no existia en el Código de 1850, y no se aviene bien en cuanto á las lesiones causadas por los padres á lo dispuesto en los artículos 10 y 431 del Código reformado.

(3) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

5.° Los padres de familia que abandonaren sus hijos, no procurándoles la educacion que requiera su clase y sus facultades permitan.

6.° Los tutores, curadores ó encargados de un menor de 15 años que desobedecieren los preceptos sobre instruccion primaria obligatoria, ó abandonaren el cuidado de su persona (1).

7.° Los hijos de familia que faltaren al respeto y su-mision debidos á sus padres.

8.° Los pupilos que cometieren igual falta hácia sus tutores.

9.° Los que encontrando abandonado un menor de siete años con peligro de su existencia, no lo presentaren á la autoridad ó á su familia (2).

10. Los que en la exposicion de niños quebrantaren las reglas ó costumbres establecidas en la localidad respectiva, y los que dejaren de llevar al asilo de expósitos ó á lugar seguro á cualquier niño que encontraren abandonado (3).

11. Los que no socorrieren ó auxiliaren á una persona que encontraren en despoblado herida ó en peligro de perecer, cuando pudieren hacerlo sin detrimento propio, á no ser que esta omision constituya delito (4) (11)

Art. 604. Serán castigados con las penas de uno á cinco dias de arresto ó multa 5 á 50 pesetas:

1.° Los que golpearan ó maltrataren á otro de obra ó de palabra sin causarle lesion (5).

2.° Los que sin hallarse comprendidos en otras dis-

(1) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(3) Reformado en el sentido de suprimir la pena pecuniaria.

(4) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(5) La disposicion de este número no existia en el Código de 1850.

1) El autor que en la misma disposicion en el art. 420 de este Co. de, cuando q. hubiesen ejercido una ligera violencia superiora del ofensor, siempre q. a esta no se lea en el mismo caso q. el autor nunca graves y no

posiciones de este Código amenazaren á otro con armas ó las sacaren en riña como no sea en justa defensa (1).

3.º Los que de palabra y en el calor de la ira amenazaren á otro con causarle un mal que constituya delito, y por sus actos posteriores demostraren que persistieron en la idea que significaron con su amenaza, siempre que por las circunstancias el hecho no estuviere comprendido en el libro 2.º de este Código (2).

4.º Los que de palabra amenazaren á otro con causarle un mal que no constituya delito.

5.º Los que causaren á otro una coaccion ó vejacion injusta, no penada en el libro 2.º de este Código (3).

Art. 605. Serán castigados con la multa de 5 á 25 pesetas y reprension:

1.º Los que injuriaren livianamente á otro de obra ó de palabra si reclamare el ofendido, cuyo perdon extinguirá la pena (4).

2.º Los que requeridos por otros para evitar un mal mayor dejaren de prestar el auxilio reclamado, siempre que no hubiera de resultarle perjuicio alguno (5).

3.º Los que por simple imprudencia ó por negligencia, sin cometer infraccion de los reglamentos, causaren un mal, que si mediare malicia constituiria delito ó falta (6).

## TITULO IV.

### DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD.

Art. 606. Serán castigados con la pena de arresto

---

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) Idem id.

(3) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

(4) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad y de hacer necesaria la reclamacion de partes.

(5) Esta disposicion no existia en el Código de 1850.

(6) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

menor, si el hecho no estuviere penado en el libro 2.º de este Código:

1.º Los que por cualquiera de los medios señalados en el art. 530 cometieren hurto por valor menor de 10 pesetas, ó 20 siendo de sustancias alimenticias, frutos ó leñas no siendo dos ó más veces reincidentes (1).

2.º Los que por interés ó lucro interpretaren sueños, hicieren pronósticos ó adivinaciones ó abusaren de la credulidad pública de otra manera semejante.

Art. 607. Serán castigados con la pena de uno á quince dias de arresto menor:

1.º Los que entraren en heredad ó campo ageno para coger frutos y comerlos en el acto (2).

2.º Los que en la misma forma cogieren frutos, mieses ú otros productos florestales para echarlos en el acto á caballerías ó ganados (3).

3.º Los que sin permiso del dueño entraren en heredad ó campo ageno antes de haber levantado por completo la cosecha para aprovechar el espiguelo ú otros restos de aquella (4).

4.º Los que entraren en heredad agena cerrada ó en la cercada, si estuviere manifiesta la prohibicion de entrar (5).

Art. 608. Serán castigados con la multa de 5 á 25 pesetas:

1.º Los que entraren á cazar ó pescar en heredad cerrada ó campo vedado sin permiso del dueño (6).

(1) Las disposiciones de este número no existian en el Código de 1850.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la pena.

(3) La disposicion de este articulo no existia en el Código de 1850.

(4) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(5) Idem id., habiéndose añadido las palabras «si estuviere manifiesta la prohibicion de entrar.»

(6) Idem id.

2.º Los que con cualquier motivo ó pretexto atravessaren plantíos, sembrados, viñedos ú olivares.

Si en cualquiera de los casos anteriores hubiere intimidación ó violencia en las personas ó fuerza en las cosas, se entenderán las penas duplicadas, si con arreglo á las disposiciones de este Código no correspondiera otra mayor (1).

Art. 609. Por el solo hecho de entrar en heredad murada y cercada sin permiso del dueño, incurrirá en la multa de 3 pesetas (2).

Art. 610. Serán castigados con la multa de 25 á 75 pesetas:

1.º Los que llevando carruajes, caballerías ó animales dañinos cometieren alguno de los excesos previstos en los dos artículos anteriores, si por razón del daño no merecieren pena mayor (3).

2.º Los que destruyeren ó destrozaren choza, albergue, setos, cercas, vallados ú otras defensas de las propiedades (4).

3.º Los que causaren daño arrojando desde fuera piedras, materiales ó proyectiles de cualquiera clase (5).

~~Art. 611. Los dueños de ganados que entraren en heredad ó campo ajeno y causaren daños serán castigados con la multa por cada cabeza de ganado:~~

~~1.º De 3 á 9 reales si fuere vacuno.~~

~~2.º De 2 á 6 si fuere caballar, mular ó asnal.~~

~~3.º De 1 á 3 si fuere cabrío y en la heredad hubiere arbolado.~~

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad en lo que se refiere á la caza y pesca.

(2) El Código de 1850 castigaba este hecho con una multa de medio duro á cuatro.

(3) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(4) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(5) La disposición de este número no existía en el Código de 1850.

*(Art. 611. El dueño de ganado que entrase en heredad ajena y causare daños será castigado con la multa por cada cabeza de ganado: 1.º de 3 á 9 reales si fuere vacuno; 2.º de 2 á 6 si fuere caballar, mular ó asnal; 3.º de 1 á 3 si fuere cabrío y en la heredad hubiere arbolado.)*

4.º De 1.º á 2.º si fuere lanar ó de otra especie, no comprendida en los números anteriores, se castiga de modo arbolado (1).

Art. 612. Los dueños de ganados de cualquiera clase que entraren sin causar daño en heredad ajena, sin permiso del dueño, incurrirán en la multa de medio real por cada cabeza.

Si la heredad fuere cercada ó tuviere viñedos, olivares, sembrados ú otros plantíos, ó hubiere reincidencia, se impondrá la multa ~~en cada reincidencia~~ (2).

Art. 613. Si los ganados se introdujeran de propósito ó por abandono ó negligencia de los dueños ó ganaderos, además de pagar las multas expresadas en los artículos anteriores, sufrirán los dueños y ganaderos en sus respectivos casos de uno á treinta dias de arresto, si no les correspondiera mayor pena como reos de hurto ó daño por voluntad ó imprudencia.

Si reincidieran por tercera vez en el término de treinta dias, serán juzgados y penados como reos de hurto ó daño, comprendidos en el libro 2.º

Art. 614. Serán castigados con la pena de arresto menor, ó multa de 5 á 125 pesetas, los que ejecutaren incendio de cualquiera clase que no esté penado en el libro 2.º de este Código (3).

(1) El Código de 1850 exigía en el primer párrafo de este artículo, que el daño excediera de 2 duros.

Por lo demás, el núm. 4.º estaba redactado en los siguientes términos:

4.º Del tanto del daño á un tercio más si fuere lanar ó de otra especie no comprendida en los números anteriores.

•Esto mismo se observará si el ganado fuere cabrio y no tuviere arbolado.

(2) El Código de 1850 decía:

Art. 497. El dueño de ganados que entrare en heredad ajena sin causar daño, pero no siendo permitido, cuando no lleguen á 20 cabezas, será castigado con multa de medio duro á 4.

(3) Las disposiciones de estos dos últimos artículos no existían en el Código de 1850.



Art. 615. Serán castigados con la multa de 5 á 25 pesetas:

1.º Los que infringieren los reglamentos ó bandos de buen gobierno sobre quema de rastrojos ú otros productos florestales (1).

2.º Los que infringieren las ordenanzas de caza y pesca (2).

Art. 616. Serán castigados con la pena de arresto de uno á cinco dias ó multa de 5 á 25 pesetas los que causaren un daño de los comprendidos en este Código cuyo importe no exceda de 50 pesetas (3).

Art. 617. Los que cortaren árboles en heredad agena causando daño que no exceda de 50 pesetas, serán castigados con la multa del duplo al cuádruplo del daño causado; y si éste no consistiere en cortar árboles sino en talar ramaje ó leña, la multa se entenderá del tanto al duplo del daño causado (4).

Si el dañador comprendido en este artículo sustrajere ó utilizare los frutos ú objetos del daño causado y el valor de éste no excediere de 10 pesetas, ó 20 siendo de semillas alimenticias, frutos ó leñas, sufrirá la pena de cinco á quince dias de arresto (5).

Art. 618. Los que aprovechando aguas que pertenezcan á otros ó distrayéndolas de su curso causaren daño cuyo importe no exceda de 50 pesetas, incurrirán en la multa del duplo al cuádruplo del daño causado (6).

Art. 619. Los que intencionalmente, por negligencia

(1) Reformado en el sentido de disminuir la penalidad.

(2) Reformado en el sentido de aumentar la penalidad.

(3) Idem id.

(4) Idem id.

(5) Reformado en el sentido de disminuir la pena cuando el daño es en sustancias alimenticias, frutos ó leñas, y de aumentarla cuando el daño es en otras cosas.

(6) Reformado en el sentido de duplicar la pena.

*La pena de arresto ó multa no se impone á los que infringieren las ordenanzas de caza y pesca en la medida de la real porción de*

ó por descuido causaren un daño cualquiera no penado en este libro ni en el anterior, serán castigados con la multa del medio al tanto del daño causado si fuere estimable, y no siéndolo, con la multa de 5 á 75 pesetas (1).

## TITULO V.

### DISPOSICIONES COMUNES Á LAS FALTAS.

Art. 620. En la aplicacion de las penas de este libro procederán los tribunales segun su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo á las circunstancias del caso.

Art. 621. Los cómplices en las faltas serán castigados con la misma pena que los autores en su grado mínimo.

Art. 622. Caerán siempre en comiso:

1.º Las armas que llevare el ofensor al cometer un daño ó inferir una injuria si las hubiere mostrado.

2.º Las bebidas y comestibles falsificados, adulterados ó pervertidos siendo nocivos.

3.º Las monedas ó efectos falsificados, adulterados ó averiados que se expendieren como legítimos ó buenos (2).

4.º Los comestibles en que se defraudare al público en cantidad ó calidad.

5.º Las medidas ó pesos falsos.

6.º Los enseres que sirvan para juegos ó rifas.

7.º Los efectos que se empleen para adivinaciones ú otros engaños semejantes.

(1) La disposicion de este artículo no existia en el Código de 1850.

(2) En el Código de 1850 se decia: «Los efectos falsificados etc.,» sin incluir las monedas.

Art. 623. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas expresadas en el artículo anterior lo decretarán los tribunales á su prudente arbitrio, segun los casos y circunstancias.

Art. 624. Los penados con multas que fueren insolventes, serán castigados con un dia de arresto por cada 5 pesetas de que deban responder.

Cuando la responsabilidad no llegare á 5 pesetas, serán castigados, sin embargo, con un dia de arresto.

Por las otras responsabilidades pecuniarias en favor de tercero, serán castigados tambien con un dia de arresto por cada 5 pesetas (1).

Art. 625. En las ordenanzas municipales y demás reglamentos generales ó particulares de la administracion que se publicaren en lo sucesivo, y en los bandos de policía y buen gobierno que dictaren las autoridades, no se establecerán penas mayores que las señaladas en este libro, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, á no ser que se determinare otra cosa por leyes especiales.

Conforme á este principio, las disposiciones de este libro no excluyen ni limitan las atribuciones que por las leyes municipales ó cualesquiera otras especiales competen á los funcionarios de la administracion para dictar bandos de policía y buen gobierno, y para corregir gubernativamente las faltas en los casos en que su represion les esté encomendada por las mismas leyes (2).

---

(1) «Por cada medio duro» decia el Código de 1850.

(2) El párrafo correspondiente á este en el Código de 1850 decia así :

«Conforme á este principio, las disposiciones de este libro no excluyen ni limitan las atribuciones que por las leyes de 8 de Enero y 2 de Abril de 1845, y cualesquiera otras especiales, competen á los agentes de la Administracion para dichos bandos, etc.»

## DISPOSICION FINAL.

Art. 626. Quedan derogadas todas las leyes penales generales anteriores á la promulgacion de este Código, salvo las relativas á los delitos no sujetos á las disposiciones del mismo, con arreglo á lo prescrito en el art. 7.º

Palacio de las Córtes 17 de Junio de 1870.==Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.==Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.==Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.==Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.==Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1870.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

En la *Gaceta* del día 21 de Setiembre de 1870 se publicó rectificado el siguiente decreto sobre aplicacion del artículo 23 del Código penal.

## MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

### EXPOSICION.

Señor: El art. 23 del Código penal reformado, que con arreglo á la ley de autorizacion de 17 de Junio del corriente año, se promulgó el 30 de Agosto último, contiene la declaracion de que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo de un delito ó falta, aunque al publicarse aquellas hubiese recaído sentencia firme; y habiéndose disminuido en otros artículos del mismo Código la penalidad que antes se hallaba establecida respecto á varios hechos punibles, el Ministro que suscribe ha considerado de urgente necesidad someter á la aprobacion de V. A. las reglas más indispensables para la inmediata aplicacion de estas rebajas de condena, en los casos en que deba tener lugar.

Tal es el objeto del adjunto proyecto de decreto, en cuyas principales disposiciones se ha procurado ante todo fijar de una manera clara cuándo ha de entenderse que en la nueva legislacion se ha introducido una rebaja de pena, estableciéndose despues los trámites que se han de seguir para aplicar á cada uno de los reos que la estén sufriendo, el beneficio á que tenga derecho. En cuanto á lo primero, el Ministro que suscribe no ha podido menos de atenerse á las reglas de apreciacion que han presidido á la redaccion del Código reformado, en la parte de él en que se enumeran y clasifican las diferentes especies de

penas imponibles; y en cuanto á lo segundo, ha obedecido al propósito de no convertir en un nuevo y dilatado juicio la revision de las ejecutorias cuya penalidad haya que variar, y de anticiparse en todos los casos en que sea posible á la gestion de los mismos interesados para aplicarles las rebajas de condena que les correspondan.

La sencillez y brevedad en los trámites era esencial para facilitar la aplicacion del benéfico principio asentado en el Código reformado; y el procedimiento de oficio, siempre que la naturaleza de las cosas no ofreciese grave obstáculo, era el que más estaba en armonía con la equidad. La ignorancia, tan comun en los penados, y el aislamiento en que su situacion les constituye, fácilmente pudieran producir su negligencia en instar y promover lo que más les favorezca; y ciertamente no seria disculpable en el poder social el dejar que por tal motivo se prolongasen los sufrimientos de aquellos desgraciados más allá de los límites que el legislador, segun su última apreciacion, ha estimado justos. Esto, sin embargo, no deberá embarazar en ningun caso la natural facultad de los penados para anticiparse á toda otra gestion, promoviendo por sí la declaracion de rebaja en sus condenas, y aun frecuentemente esta iniciativa de su parte será la que haya de prevalecer, como sucederá siempre que por no hallarse el penado privado de su libertad no haya jefe de establecimiento penal ni otro agente administrativo que haga presente á los tribunales el hecho de encontrarse aquel extinguiendo una condena que deba ser rebajada.

Las demás disposiciones que se proponen son meramente aclaratorias; y es tanto mayor su utilidad, cuanto más eficazmente han de contribuir á disipar dudas y vacilaciones que pudieran embarazar la marcha de los tri-

bunales en el desempeño de la pesada tarea que, aparte de sus ocupaciones ordinarias, se les encomienda.

Por lo tanto, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobacion de V. A. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 17 de Setiembre de 1870.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

#### DECRETO.

Como Regente del Reino, y conformándome con lo expuesto por el Ministro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Conforme á lo prevenido en el art. 23 del Código penal reformado, se procederá desde luego á aplicar á los reos de delitos ó faltas que estén sufriendo las condenas que se les hayan impuesto por sentencia ejecutoria dictada con arreglo á la legislacion vigente hasta la promulgacion de aquel las disposiciones del mismo que los favorezcan.

Art. 2.º Se entenderá que las disposiciones del Código reformado favorecen al reo en comparacion con la legislacion anterior:

1.º Cuando en el Código reformado se señale para el delito ó falta de que se trate una pena comprendida en una escala gradual inferior de las que el mismo Código establece, y de menor duracion que la correspondiente por la legislacion anterior á la impuesta al reo en la sentencia ejecutoria.

2.º Cuando en el Código reformado se señale una pena que, estando comprendida en la misma escala gradual que la impuesta en la sentencia, sea de menor duracion que esta.

3.º Cuando en el Código reformado se señale una pena que, siendo de igual duracion que la impuesta en la sentencia, esté comprendida en una escala gradual inferior.

4.º Cuando en el Código reformado se señale una pena que, siendo de menor duracion que la impuesta en la sentencia, esté comprendida en una escala gradual superior á aquella en que figure esta última.

Art. 3.º En los casos de los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo precedente, se aplicará al reo el beneficio que por la menor duracion de la pena por mejorar en la escala gradual, ó por las dos ventajas á la vez, resulta á favor del mismo.

En el caso del núm. 4.º se aplicará el beneficio expresado en el mismo; pero si el reo no se conformare con la alteracion producida en la naturaleza de la pena por pasar á una escala gradual superior, y dedujere en tal sentido reclamacion dentro del término de quince dias, se dejará sin efecto la anterior resolucion, y se dispondrá que el reo cumpla su condena tal y como le hubiese sido impuesta en la sentencia ejecutoria.

Art. 4.º En el caso de que el reo hubiese obtenido indulto parcial ó conmutacion de su condena con anterioridad á la publicacion del Código reformado, no se sustituirá la pena que esté sufriendo por la correspondiente al delito señalado en el mismo Código, sino cuando esta sea menos grave que aquella, atendidas su naturaleza y duracion, conforme á las reglas comprendidas en el mencionado art. 2.º

Art. 5.º El beneficio establecido en el art. 29 del Código reformado en favor de los reos condenados á penas perpétuas, se entenderá tambien concedido á los que, habiendo sido condenados á diez años de presidio con re-



tencion, de conformidad con la legislacion antigua, se hallen todavía cumpliendo su condena en cualquiera de los establecimientos penales del Reino.

Art. 6.º La aplicacion de las rebajas de condena y demás beneficios á que se refieren los artículos anteriores, se acordará por los tribunales y juzgados que hubiesen dictado las sentencias ejecutorias en que dichas condenas hubiesen sido impuestas.

Art. 7.º Al efecto los jefes de los establecimientos penales, dentro de los quince dias siguientes al de la publicacion de este decreto, remitirán á los presidentes de las Audiencias donde radiquen los tribunales ó juzgados sentenciadores una relacion exacta de los penados que en dichos establecimientos se hallaren sufriendo condena, con expresion del delito que hubiesen cometido, pena que se les hubiese impuesto, fecha de la sentencia, Sala que la hubiese dictado, dia en que cada reo hubiese empezado á cumplir su condena, indultos que hubiese obtenido y tiempo que al empezar á regir el Código reformado le faltase para extinguir dicha condena.

Art. 8.º Recibidas estas relaciones por los presidentes de las Audiencias, formarán á su tenor y remitirán á los tribunales ó juzgados que hubiesen dictado las sentencias ejecutorias, ó que legalmente los sustituyan, un estado de las causas que respectivamente les correspondan, á fin de que procedan desde luego á aplicar el beneficio concedido en el art. 23 del Código en las causas en que así corresponda.

Los tribunales y juzgados sentenciadores pasarán dicho estado al representante del ministerio fiscal, quien propondrá, en vista del mismo y de los antecedentes necesarios, lo que estime procedente. La Sala ó el juzgado respectivo dictará en seguida providencia motivada, de-

clarando si há lugar ó no á la aplicacion del beneficio establecido en el art. 23 del Código penal reformado, y determinándolo, en caso afirmativo. De esta providencia se expedirá certificacion y se remitirá al jefe del establecimiento penal que corresponda, para que, haciéndose saber al interesado, proceda á su inmediato cumplimiento, caso de no haber reclamacion en contrario, con arreglo al número 4.º del art. 2.º

Art. 9.º Los interesados que se sintieren agraviados por la providencia expresada en el artículo precedente, podrán reclamar ante el tribunal ó juzgado que la hubiere dictado dentro del término de quince dias, á contar desde aquel en que hubieren sido enterados. El tribunal ó juzgado, oyendo nuevamente al representante del ministerio fiscal, resolverá lo que estime procedente. Contra esta resolucion no se dará recurso alguno.

Art. 10. Los jefes de establecimientos penales remitirán á los presidentes de las Audiencias, juntamente con las relaciones expresadas en el art. 7.º, un informe detallado acerca de la conducta de cada uno de los reos condenados á la pena de diez años de presidio con retencion que la hubieren sufrido por más de treinta años: en vista de este informe, y oyendo previamente al representante del ministerio fiscal y á la parte agraviada si la hubiese, la Sala respectiva acordará si há ó no lugar á proponer al Gobierno la concesion de indulto. En el primer caso, hará dicha Sala desde luego la propuesta, observándose lo dispuesto en el art. 27 y siguientes de la ley provisional sobre el ejercicio de aquella gracia.

Art. 11. Los tribunales ó jueces que estuvieren conociendo de causas formadas por hechos que en la legislacion anterior hubiesen sido calificados de delitos, y en el Código reformado lo estén de faltas, sobreseerán en

aquellas, remitiéndolas desde luego al juzgado municipal correspondiente para que proceda con arreglo á las prescripciones de dicho Código, poniendo inmediatamente en libertad á los procesados que estén constituidos en prision preventiva.

Art. 12. Los tribunales y jueces sobreseerán desde luego en las causas pendientes por hechos que, estando calificados de delitos en la legislacion anterior, hayan dejado de serlo en el Código reformado, y declararán exentos de la pena impuesta á los reos de los mismos que la estuvieren sufriendo, expidiendo desde luego las correspondientes certificaciones para que se lleve á efecto dicha exencion.

Art. 13. Sin perjuicio de lo prescrito en los artículos anteriores para que los tribunales y juzgados procedan de oficio á la aplicacion de las rebajas de condena y demás beneficios que sean procedentes, los interesados podrán solicitarla, dirigiendo las correspondientes instancias á dichos tribunales ó juzgados sentenciadores.

Art. 14. Las costas y gastos á que dé lugar la ejecucion de este decreto serán de oficio.

Madrid 17 de Setiembre de 1870.==Francisco Serrano.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.



Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicaron en la *Gaceta* de 15 de Setiembre de 1870 las siguientes disposiciones:

## LEY.

Don Francisco Serrano y Dominguez, Regente del Reino por la voluntad de las Córtes Soberanas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, salud: Las Córtes Constituyentes de la Nacion española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia para que plantee como ley provisional el adjunto proyecto de ley sobre organizacion del poder judicial. La comision nombrada por las Córtes para informar sobre esta autorizacion, tan luego como se reanuden las tareas parlamentarias, formulará dictámen definitivo, que se discutirá con preferencia á los demás asuntos, salvo el relativo á la reforma del Código penal.

De acuerdo de las Córtes se comunica al Regente del Reino para su promulgacion como ley.

Palacio de las Córtes 23 de Junio de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Mariano Rius Montaner, Diputado Secretario.

Por tanto: Mando á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad,

que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.

Madrid 15 de Setiembre de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

---

### DECRETO.

Usando de la autorizacion concedida al Gobierno por la ley de 23 de Junio último, y conformándome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. La ley provisional sobre organizacion del poder judicial, aprobada por la de 23 de Junio último, se observará desde que su publicacion se verifique en los términos prevenidos en la ley de 28 de Noviembre de 1837.

Dado en Madrid á 15 de Setiembre de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

# LEY PROVISIONAL

SOBRE

## ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL (1).

### TITULO PRELIMINAR.

Artículo 1.º La justicia se administrará en nombre del Rey.

Art. 2.º La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá exclusivamente á los jueces y tribunales.

Art. 3.º Los jueces y tribunales no ejercerán más funciones que las expresadas en el artículo anterior y las que esta ley ú otras les señalen expresamente.

Art. 4.º Por consecuencia de lo ordenado en el artículo que precede, no podrán los jueces ni los tribunales mezclarse directa ni indirectamente en asuntos peculiares á la Administracion del Estado, ni dictar reglas ó disposiciones de carácter general acerca de la aplicacion ó interpretacion de las leyes.

Tampoco podrán aprobar, censurar ó corregir la aplicacion ó interpretacion de las leyes, hecha por sus inferiores en el órden gerárquico, sino cuando administren justi-

---

(1) Esta ley se publicó en las *Gacetas* del 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de Setiembre de 1870.

cia en virtud de las apelaciones ó de los recursos que las leyes establezcan.

Art. 5.º Lo prescrito en el artículo anterior no obstará á que los presidentes de los tribunales, y en su caso las Salas de gobierno, por conducto de los presidentes, dirijan á los juzgados y tribunales á ellas inferiores, que estén comprendidos en su respectivo territorio, las prevenciones que estimaren oportunas para la mejor administracion de justicia, dando cuenta sin dilacion al tribunal inmediato superior, y directamente al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 6.º Las disposiciones reglamentarias que el Poder ejecutivo adopte en uso de sus atribuciones, nunca alcanzarán á derogar ni á modificar la organizacion de los juzgados y tribunales, ni las condiciones que para el ingreso y ascenso en la carrera judicial señalen las leyes.

Art. 7.º No podrán los jueces, magistrados y tribunales:

1.º Aplicar los reglamentos generales, provinciales ó locales, ni otras disposiciones de cualquiera clase que sean, que estén en desacuerdo con las leyes.

2.º Dar posesion de sus cargos á los jueces y magistrados cuyos nombramientos no estuvieren arreglados á la Constitucion de la Monarquía, á esta ley ó á otras especiales (1).

3.º Dirigir al Poder ejecutivo, á funcionarios públicos ó á corporaciones oficiales felicitaciones ó censuras por sus actos.

4.º Tomar en las elecciones populares del territorio en que ejerzan sus funciones más parte que la de emitir su voto personal.

---

(1) Esta disposicion es una de las mas eficaces garantías para asegurar el cumplimiento de la Constitucion democrática de 1869 en lo que se refiere al nombramiento de los individuos del poder judicial.



Esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplirán los deberes que por razón de sus cargos les impongan las leyes.

5.º Mezclarse en reuniones, manifestaciones ú otros actos de carácter político, aunque sean permitidos á los demás españoles (1).

6.º Concurrir en cuerpo, de oficio, ó en traje de ceremonia á fiestas ó actos públicos, sin más excepcion que cuando tengan por objeto cumplimentar al Monarca ó al Regente del Reino, ó cuando el Gobierno expresamente lo ordenare.

Art. 8.º Los jueces y magistrados responderán civil y criminalmente de las infracciones de las leyes que cometan en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

No les eximirá de estas responsabilidades alegar su obediencia á las disposiciones del Poder ejecutivo en lo que sean contrarias á las leyes (2).

Art. 9.º No podrá el Gobierno destituir, trasladar de sus cargos, ni jubilar á los jueces y magistrados, sino en los casos y en la forma que establecen la Constitucion de la Monarquía y las leyes.

En ningun caso podrá suspenderlos.

Art. 10. El sello para autorizar los documentos judiciales será uniforme en toda la Monarquía. Contendrá las armas de España, y en la orla el nombre del juzgado ó tribunal que los expida.

---

(1) Separar la política del poder judicial era una de las cosas mas necesarias en España; pero esta medida era de todo punto indispensable despues de promulgada la nueva Constitucion.

(2) Así debe ser en efecto, desde que la administracion de justicia deja de ser una rama del poder ejecutivo y se convierte en un poder independiente.

## TITULO I.

## DE LA PLANTA Y ORGANIZACION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

## CAPITULO I.

*De la division territorial en lo judicial y de los juzgados y tribunales.*

Art. 11. El territorio de la Península, islas Baleares y Canarias se dividirá para los efectos judiciales:

En distritos; éstos en partidos; éstos en circunscripciones, y éstas en términos municipales.

Art. 12. Habrá para la administracion de justicia:

En cada término municipal, uno ó más jueces municipales.

En cada circunscripcion, un juez de instruccion.

En cada partido, un tribunal de partido.

En cada distrito, una Audiencia.

En la capital de la Monarquía, el Tribunal Supremo.

Art. 13. Una ley especial hará la division judicial en conformidad á lo prescrito en el art. 11 de la presente ley.

En esta division se designarán, además de las demarcaciones señaladas en el art. 11, las poblaciones en que puedan constituirse:

1.º Salas ordinarias de Audiencia para juzgar de las causas por delitos en que las Audiencias deban conocer con intervencion del Jurado.

2.º Salas extraordinarias de Audiencia para juzgar de las causas por delitos comunes, que siendo ordinariamente de las atribuciones de las Audiencias, sin in-

tervencion del Jurado, puedan verse en tribunales presididos por un magistrado, y compuestos de él y dos jueces de tribunales de partido en los casos que establece esta ley.

La designacion de estas poblaciones no constituirá una division judicial especial, ni alterará el orden gerárquico de los juéces, de los magistrados, ni de los tribunales.

Art. 14. Para el señalamiento de las poblaciones á que se refiere el artículo anterior, se atenderá sola y exclusivamente á la más fácil y expedita administracion de justicia, tomándose al efecto en cuenta la distancia que de ellas haya á la capital de la Audiencia, la dificultad para comparecer en esta los testigos y de verificarse las pruebas, la circunstancia de tener por lo menos el suficiente número de personas que reúnan las cualidades necesarias para ser jurados, atendidas las condiciones de capacidad que la ley exija y la facultad de recusarlos, la facilidad de alojamiento y la proporcion de un edificio adecuado para la celebracion de los juicios.

Art. 15. Los juzgados y tribunales, cualquiera que sea su clase, á excepcion del Tribunal Supremo, tomarán su denominacion de los pueblos en que residan.

Estos serán:

La capital del distrito, para las Audiencias.

La cabeza de partido, para los tribunales de partido.

La cabeza de circunscripcion, para los juzgados de instruccion.

El pueblo respectivo, para los juzgados municipales.

Art. 16. En las poblaciones en que hubiere dos ó más juzgados municipales, ó de instruccion, ó dos ó más tribunales de partido, tomarán el nombre que se dé al cuartel, circunscripcion ó partido en que ejerzan su jurisdiccion, además del de la poblacion en que residan.

Art. 17. Una vez hecha la division judicial, no po-

drán aumentarse ni disminuirse los distritos, los partidos ni las circunscripciones, ni segregarse territorios de unos distritos para agregarlos á otros, ni cambiarse la capital de distrito, ni la cabeza de partido ó de circunscripcion, sino en virtud de una ley (1).

Art. 18. Tampoco podrán separarse de los partidos y circunscripciones unos pueblos para agregarlos á otros, ni suprimir ni aumentar las poblaciones en que puedan constituirse las Salas ordinarias ó extraordinarias de Audiencia á que se refiere el art. 13, sino concurriendo las circunstancias, y al tenor de las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Que existan motivos de conveniencia pública, suficientemente justificados en el expediente que se instruirá en el Ministerio de Gracia y Justicia.

2.<sup>a</sup> Que se dé audiencia en dicho expediente á los ayuntamientos de los pueblos interesados y á la Diputacion provincial.

3.<sup>a</sup> Que los tribunales de los partidos interesados, y la Sala de gobierno de la Audiencia respectiva, informen sobre la utilidad, ventajas ó inconvenientes de la alteracion.

4.<sup>a</sup> Que en ningun caso se reunan en un mismo partido pueblos que correspondan á diferentes provincias.

5.<sup>a</sup> Que sea oido el Consejo de Estado.

6.<sup>a</sup> Que se acuerde por el Consejo de Ministros.

Art. 19. El Real decreto en que se establezca la alteracion será refrendado por el Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 20. Los jueces municipales residirán en el término del pueblo en que ejerzan sus funciones.

---

(1) De desear era que una disposicion legal pusiera término á las constantes traslaciones de las cabezas de partido, que la mayor parte de las veces no tenian otra razon de ser que la mayor ó menor influencia de los Diputados del partido que era objeto de la modificacion.

Los demás jueces y magistrados, en los pueblos, cabeza ó capital de la respectiva division territorial.

Art. 21. Cuando por circunstancias extraordinarias, tales como la de estar sitiada la poblacion en que residan, ó por hallarse ésta ocupada por enemigos ó dominada por rebeldes, no pudieren los jueces de instruccion, los tribunales de partido ó las Audiencias ejercer la jurisdiccion con seguridad, libertad y desembarazo, se trasladarán:

Los jueces de instruccion, al pueblo que designen los tribunales de partido.

Los tribunales de partido, al que designen las Audiencias.

Las Audiencias, al punto que consideren más conveniente hasta la resolucion del Gobierno.

En todo caso, se procurará, mientras sea posible, que ninguno salga de su respectiva jurisdiccion.

Art. 22. Los jueces municipales no estarán obligados á salir del término municipal en los casos á que se refiere el artículo anterior, y serán acreedores á recompensa si continuando en el ejercicio de su jurisdiccion y limitándose á ella, contribuyeren al orden y á disminuir las consecuencias de las circunstancias anormales en que se encontraren los pueblos.

Art. 23. En todos los pueblos que sean cabezas de partido y en los que con arreglo al art. 13 hayan de constituirse las Salas ordinarias ó extraordinarias de Audiencias, habrá un edificio en que puedan celebrarse las audiencias y juicios públicos, y colocarse las dependencias judiciales con el decoro, sencillez y dignidad correspondientes á las altas funciones de la magistratura y á la publicidad de los debates judiciales.

Contribuirán al efecto con la mitad del coste de estos edificios las cabezas de los partidos judiciales y con la

otra mitad los pueblos que los compongan con arreglo á la distribucion que hagan las Diputaciones provinciales, atendido el número de vecinos y riqueza de las poblaciones.

Art. 24. En los pueblos en que la capacidad de las casas consistoriales lo permitiere, podrán colocarse en ellas los tribunales de partido, con tal que sea con toda independencia de las salas y oficinas municipales.

Para la habilitacion de estos locales contribuirán la cabeza de partido y los demás pueblos en la proporcion que establece el anterior artículo.

Art. 25. En la misma proporcion establecida en el artículo 23 contribuirán los pueblos de cada partido á la conservacion y reparacion de los mismos edificios.

Art. 26. Cuando las poblaciones á que se refieren los tres artículos precedentes, no hubieren habilitado en el término de dos años, despues de publicada esta ley y la de division judicial, un edificio para la administracion de justicia, y existiere otra poblacion bien situada para llenar las condiciones señaladas en el art. 23, en que pueda con decoro administrarse la justicia, podrá el Gobierno trasladar á ella el tribunal de partido y designarla para la constitucion de las Salas ordinarias y extraordinarias de Audiencia, observando lo prevenido en el art. 18.

No obstará esto á que el Gobierno haga cumplir á los pueblos negligentes las obligaciones que les impone esta ley.

Art. 27. Bajo la denominacion general de tribunales, usada en esta ley, se comprenden los de partido, las Audiencias y el Tribunal Supremo.

Quando se use de la denominacion especial á una clase de tribunales, solo comprenderá á aquellos que la lleven.

Art. 28. Bajo la denominacion general de jueces, se comprenden los municipales, los de instruccion y los que compongan los tribunales de partido, con inclusion de los presidentes y los suplentes de cada una de las clases expresadas.

Art. 29. Bajo la denominacion general de magistrado se comprenden los que administran justicia en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, en plazas de número ó como suplentes, y por lo tanto los presidentes y presidentes de Sala de los mismos tribunales.

Art. 30. Exceptúanse de los dos artículos anteriores los casos en que la ley conceda expresa y especialmente atribuciones ó imponga deberes determinados á los presidentes de tribunales ó á los que lo fueren de Salas, ó contrapongan sus atribuciones y deberes á los que tengan los demás jueces ó magistrados.

## CAPITULO II.

### *De los jueces municipales.*

Art. 31. El cargo de juez municipal será bienal y obligatorio.

Art. 32. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán excusarse de ser jueces municipales:

- 1.º Los mayores de 60 años.
- 2.º Los Senadores y Diputados á Córtes.
- 3.º Los que hubieren sido reelegidos antes de espirar los cuatro años siguientes á aquel en que hubieren cesado en su anterior cargo.
- 4.º Los suplentes de jueces municipales durante los dos años siguientes á aquel en que dejaron de serlo.

## CAPITULO III.

*De los juzgados de instruccion y tribunales de partido.*

Art. 33. En cada partido judicial habrá por lo menos un tribunal de partido.

En los pueblos que por sí solos, ó con otros que se les agreguen, llegaren á 100.000 almas, podrá haber dos tribunales de partido.

En los que lleguen á 200.000, podrá haber tres.

Art. 34. Los tribunales de partido serán de ingreso ó de ascenso.

Todos tendrán las mismas atribuciones y ejercerán igual jurisdiccion.

Art. 35. Serán de ascenso los tribunales de partido que residan en capitales de provincias ó en poblaciones que tengan más de 20.000 almas.

Los demás serán de ingreso.

Art. 36. Los tribunales de partido se compondrán de tres jueces, de los que uno tendrá el carácter de presidente y el nombramiento de tal.

Art. 37. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los tribunales de partido serán presididos extraordinariamente por un magistrado de la Audiencia respectiva con sujecion á las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Los presidentes de las Audiencias nombrarán magistrados que constituyéndose en los tribunales de partido los presidan con voto, al menos en seis dias consecutivos de audiencia pública.

2.<sup>a</sup> Turnarán en este servicio los magistrados de Audiencia, sin distincion entre los que compongan las Salas de lo civil y criminal.



De él estarán exentos los presidentes de Audiencias y de sus Salas.

3.<sup>a</sup> No se admitirán excusas para eximirse de este servicio, á no ser que estén fundadas en la imposibilidad de prestarlo.

Los presidentes de las Audiencias las estimarán segun su prudente arbitrio, y pondrán en conocimiento del Ministro de Gracia y Justicia las que admitieren, con informe razonado.

4.<sup>a</sup> Los presidentes de Audiencia señalarán el tribunal de partido que ha de presidir cada magistrado.

5.<sup>a</sup> No habrá turno entre los tribunales de partido del distrito de las Audiencias para que sean presididos por magistrados.

Los presidentes de las Audiencias designarán á estos, teniendo exclusivamente en cuenta la mejor administracion de justicia.

6.<sup>a</sup> El tribunal de partido á que asista un magistrado se constituirá para los asuntos de justicia con éste y dos de los jueces que correspondan al tribunal, alternando estos entre sí, sin exclusion del que tenga nombramiento de presidente del mismo tribunal.

7.<sup>a</sup> Los magistrados que presidieren tribunales de distrito darán á su regreso cuenta en una Memoria de visita á las Salas de gobierno de las Audiencias, de todo cuanto juzguen digno de atencion relativamente al modo de administrarse la justicia, á las prácticas abusivas que se hayan introducido, á la conducta y dignidad de los que desempeñen funciones judiciales y al cumplimiento de los deberes de los auxiliares y subalternos.

8.<sup>a</sup> Las Salas de gobierno de las Audiencias pasarán estas Memorias á los respectivos fiscales, y en vista de su dictámen adoptarán las medidas que estén dentro de sus

atribuciones para corregir lo que sea digno de reforma y proponer al Gobierno por conducto del presidente lo que merezca ser puesto en su conocimiento, y á cuya correccion no alcancen sus facultades.

Art. 38. Cada partido judicial se dividirá en dos circunscripciones.

Este número podrá aumentarse en los partidos que por su extension, naturaleza del terreno, dificultad de comunicaciones ú otras causas, sea necesario ó conveniente para la mejor administracion de justicia.

#### CAPITULO IV.

##### *De las Audiencias.*

Art. 39. Habrá en la Península, islas adyacentes y Canarias 15 Audiencias, que residirán en Albacete, Barcelona, Búrgos, Cáceres, Coruña, Granada, Madrid, Oviedo, Las Palmas, Palma, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Art. 40. Todas las Audiencias serán de igual categoría, excepto la de Madrid, que será de ascenso.

Art. 41. Cada Audiencia ejercerá su jurisdiccion en el territorio de las provincias que á continuacion se expresan:

La de Albacete comprenderá las provincias de  
Albacete.

Ciudad-Real.

Cuenca.

Murcia.

La de Barcelona, las provincias de  
Barcelona.

Gerona.

- Lérida.
- Tarragona.
- La de Búrgos, las provincias de
  - Alava.
  - Búrgos.
  - Logroño.
  - Santander.
  - Soria.
  - Vizcaya.
- La de Cáceres, las provincias de
  - Badajoz.
  - Cáceres.
- La de la Coruña, las provincias de
  - La Coruña.
  - Lugo.
  - Orense.
  - Pontevedra.
- La de Granada, las provincias de
  - Almería.
  - Granada.
  - Jaen.
  - Málaga.
- La de Madrid, las provincias de
  - Avila.
  - Guadalejara.
  - Madrid.
  - Segovia.
  - Toledo.
- La de las Palmas, las islas Canarias.
- La de Palma, las islas Baleares.
- La de Oviedo, la provincia de este nombre.
- La de Pamplona, las provincias de
  - Guipúzcoa.

Navarra.

La de Sevilla, las provincias de

Cádiz..

Huelva.

Córdoba.

Sevilla.

La de Valencia, las provincias de

Alicante.

Castellon.

Valencia.

La de Valladolid, las provincias de

Leon.

Palencia.

Salamanca.

Valladolid.

Zamora.

La de Zaragoza, las provincias de

Huesca.

Teruel.

Zaragoza.

Art. 42. 'En cada Audiencia habrá una Sala de gobierno y las de justicia que señala esta ley.

Art. 43. El presidente, los presidentes de Sala y el fiscal de cada Audiencia compondrán su Sala de gobierno.

Art. 44. Las Salas de justicia serán de lo civil ó de lo criminal.

Exceptúanse las Audiencias de Las Palmas, Palma y Pamplona, en cada una de las cuales habrá una sola Sala para lo civil y lo criminal.

Art. 45. No habrá otra precedencia entre los magistrados que compongan las Salas de lo civil y de lo criminal que la que les corresponda segun su cargo y antigüedad.

Art. 46. En cada Audiencia habrá un presidente de la misma.

Art. 47. Las Audiencias de Madrid y Barcelona tendrán tres Salas de justicia, y dos las de Albacete, Búrgos, Cáceres, Coruña, Granada, Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Art. 48. En cada Audiencia habrá además un número de presidentes de Sala igual al de éstas, respectivamente señalado en el artículo anterior.

Art. 49. En cada Audiencia, una Sala solamente será de lo criminal.

Art. 50. Las Salas de lo civil constarán de cuatro magistrados, además de su presidente.

El Gobierno señalará desde luego provisionalmente el número de magistrados que habrán de componer las Salas de lo criminal en cada Audiencia, fijándolo definitivamente en el año inmediato siguiente al planteamiento de la reforma que habrá de hacerse en el procedimiento criminal.

Una vez fijado definitivamente el número, no podrá ser alterado sino por una ley.

Art. 51. Las Salas de lo civil y de lo criminal se auxiliarán mutuamente en el despacho de los negocios de su respectiva competencia cuando fuere necesario.

Art. 52. Los magistrados de unas y otras Salas que no fueren indispensables para constituir las, suplirán á los de las otras que estuviesen ausentes ó impedidos de asistir á ellas.

Art. 53. En los casos en que la aglomeracion de causas criminales en alguna Audiencia lo hiciere necesario ó conveniente, se podrá formar otra Sala, que tomará el número siguiente á la última de las de planta, para auxiliar á ésta, si hubiere bastantes magistrados para constituir la.

Art. 54. Las Audiencias administrarán justicia en la capital del distrito.

Art. 55. No obstante lo ordenado en el artículo que precede, se constituirán Salas de lo criminal en las poblaciones designadas en la ley de division judicial, con arreglo al núm. 1.º del art. 13 de la presente, para juzgar las causas en que deba intervenir el Jurado.

Los presidentes de las Salas de lo criminal y los magistrados que las formen turnarán en este servicio.

Cuando no asista el presidente de Sala, presidirá el magistrado más antiguo de los que la formen.

Art. 56. Se considerarán para los efectos legales, y se denominarán *Salas extraordinarias de Audiencia* las que en conformidad al núm. 2.º del art. 13 de esta ley se reunan para juzgar las causas por delitos comunes de la competencia de las Audiencias en las poblaciones á que se refiere el expresado número.

Las presidirá con voto un magistrado correspondiente á la Sala de lo criminal de la Audiencia respectiva, formando con él la Sala extraordinaria dos jueces del tribunal del partido en que esta se constituya.

Este servicio se hará turnando por una parte los magistrados, á excepcion de los presidentes de las Salas, y por otra los jueces de tribunal del partido correspondiente, no estando exento de él el presidente del mismo.

Art. 57. Para presidir extraordinariamente los tribunales de partido con arreglo al art. 37, nombrarán mensualmente los presidentes de las Audiencias:

De Madrid, Barcelona, Búrgos, Coruña, Granada, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, dos magistrados en cada mes.

De Albacete, Cáceres y Oviedo, un magistrado en cada mes.

De las Palmas, Palma y Pamplona, un magistrado en cada trimestre.

Art. 58. Los presidentes de las Audiencias tomarán en consideracion el estado de las causas á que se refiere el art. 56, al designar los magistrados que con arreglo al 37 deben salir para présidir los tribunales de partido, con el fin de que un mismo magistrado desempeñe á la vez ambos servicios en cuanto lo consienta la administracion de justicia.

## CAPITULO V.

### *Del Tribunal Supremo.*

Art. 59. El Tribunal Supremo ejercerá su jurisdiccion en todo el territorio español, y residirá en la capital de la Monarquía.

Ningun otro tribunal podrá tener el título de Supremo.

Art. 60. El Tribunal Supremo se compondrá de un presidente, de cuatro presidentes de Sala y de 28 magistrados.

Art. 61. Habrá en el Tribunal Supremo una Sala de gobierno y cuatro de justicia.

Art. 62. La Sala de gobierno se compondrá del presidente, de los presidentes de Sala y del fiscal.

Art. 63. Las Salas de justicia tendrán la numeracion y denominaciones siguientes:

- 1.<sup>a</sup> Sala de lo civil.
- 2.<sup>a</sup> Sala de admision en lo criminal.
- 3.<sup>a</sup> Sala de casacion en lo criminal.
- 4.<sup>a</sup> Sala de recursos contra la administracion.

No habrá entre los magistrados que las compongan

otra precedencia que la que les corresponda por su cargo y antigüedad.

Art. 64. Cada Sala de justicia se compondrá de un presidente de Sala y de siete magistrados.

## CAPITULO VI.

### *De los jueces y magistrados suplentes.*

Art. 65. En cada juzgado municipal habrá un juez suplente que reemplazará al propietario en los casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibilidad, recusacion ó de cualquier otro impedimento legítimo del propietario.

Art. 66. Cada juez municipal, antes de tomar posesion de su cargo, ó á lo sumo dentro de los ocho dias siguientes á aquel en que la hubiese tomado, propondrá en terna las personas entre las que se haya de elegir un suplente, expresando las condiciones que determinen su capacidad legal y la respectiva preferencia entre los propuestos.

Esta propuesta la elevará al presidente de la Audiencia por conducto del presidente del tribunal del partido, el cual la acompañará con su informe.

Art. 67. Es extensivo á los jueces municipales suplentes lo que respecto á lo obligatorio del cargo, á la capacidad legal para obtenerlo, á su duracion, á las exenciones, incompatibilidades, reclamaciones y vacantes que ocurrieren antes de terminar el tiempo ordinario de sus funciones, se establece en esta ley.

Art. 68. Cuando quedaren vacantes simultáneamente los cargos de juez municipal y de suplente ó por cualquiera de las causas expresadas en la ley no pudiere ninguno de ellos desempeñar sus funciones, serán reemplaza-



dos por los que hubiesen sido jueces municipales en los años inmediatamente anteriores, por orden inverso, con exclusion de los suplentes.

Art. 69. Los jueces municipales de las cabezas de circunscripcion si fueren letrados, y en otro caso sus suplentes que lo fuerean, reemplazarán á los jueces de instruccion. Ninguno que tenga la circunstancia mencionada podrá excusarse del desempeño de esta sustitucion.

Art. 70. Cuando ni los jueces municipales ni sus suplentes fueren letrados, se dará cuenta al presidente de la Audiencia para que nombre á un aspirante ó á otro letrado, que se encargue del juzgado de instruccion, desempeñando entre tanto sus funciones el juez municipal.

Art. 71. Los jueces municipales que no siendo letrados desempeñaren accidentalmente juzgados de instruccion, se asesorarán, para ejercer la jurisdiccion, de un letrado, en todo lo que no sea de mera tramitacion.

Cuando esto suceda, el sueldo que en su caso debiera corresponder al juez municipal en sus funciones de juez de instruccion, se invertirá hasta donde alcance, en los honorarios que devengue el asesor.

Art. 72. Mientras que el juez municipal esté encargado de las funciones de juez de instruccion, será reemplazado en sus funciones propias por su suplente.

Art. 73. Los jueces de los tribunales de partido serán sustituidos por otros jueces de su misma clase en los pueblos donde haya más de uno de estos tribunales.

Donde no haya más de uno, ó habiéndolo no hubiere jueces disponibles para completar el tribunal en que faltare alguno, serán sustituidos por un aspirante, y en su defecto, por un juez municipal de la cabeza del partido que reuna la circunstancia de ser letrado.

En este servicio turnarán primero los aspirantes y

despues los jueces municipales de la cabeza de partido.

Art. 74. Cuando los magistrados de la dotacion de alguna Sala de Audiencia no bastaren para constituirla en número suficiente, por enfermedad, ausencia, incompatibilidad, recusacion ú otro impedimento legítimo de alguno de ellos, asistirán para completarla los magistrados de las otras Salas que designe el presidente de la Audiencia.

Art. 75. La designacion prevenida en el artículo anterior recaerá por turno, que comenzará en los más modernos.

En la Audiencia de Madrid se auxiliarán con preferencia entre sí los magistrados que pertenezcan á las Salas de lo civil. Cuando esto no sea posible, se designarán para auxiliarlas magistrados de la Sala de lo criminal.

Los magistrados de la Sala de lo civil á su vez, auxiliarán á la Sala de lo criminal.

Los presidentes de las Audiencias procurarán la igualdad entre todos los magistrados respecto á este servicio.

Art. 76. Los magistrados de las diferentes Salas del Tribunal Supremo se suplirán recíprocamente, del mismo modo que los de las Audiencias, para completar el número necesario de la que no tenga el que se requiera para el conocimiento de los negocios sujetos á su jurisdiccion.

El presidente observará, en lo que quepa, lo dispuesto en el artículo anterior respecto á los presidentes de las Audiencias.

Art. 77. Habrá en las Audiencias magistrados suplentes que serán llamados á las Salas de justicia en los casos en que por circunstancias accidentales no bastaren los de planta hasta el punto de que por su falta pudiera paralizarse ó demorarse la administracion de justicia.

Los magistrados suplentes serán nombrados por el Rey á propuesta de las respectivas Salas de gobierno, an-

tes de las vacaciones, y su nombramiento será para el año judicial siguiente,

Nunca podrá exceder el número de los elegidos de la tercera parte de los magistrados que compongan la dotación de planta del tribunal respectivo.

Art. 78. El cargo de magistrados suplentes de las Audiencias solo podrá recaer en los que tengan las condiciones necesarias para obtener iguales cargos en propiedad.

Art. 79. El Tribunal Supremo no tendrá ordinariamente suplentes.

Se podrá, sin embargo, nombrar los necesarios para algun caso extraordinario en que por falta de propietarios hubiera de paralizarse la administracion de justicia.

Los nombrados habrán de tener por lo menos las circunstancias necesarias para ser magistrados propietarios de la Audiencia de Madrid.

## TITULO II.

DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA INGRESAR Y ASCENDER EN LA CARRERA JUDICIAL.

### CAPITULO I.

#### *De los aspirantes á la judicatura.*

Art. 80. Habrá un cuerpo de aspirantes á la judicatura.

Su número será variable, fijándolo oportunamente el Gobierno todos los años, de modo que al principio de cada uno haya aspirantes suficientes para cubrir las vacantes probables de los juzgados de instruccion en aquel año y en el siguiente.

Art. 81. El cuerpo de aspirantes se dividirá en tantos colegios como Audiencias haya en la Península, islas Baleares y Canarias.

Art. 82. Los colegios estarán bajo la dependencia de los presidentes de las respectivas Audiencias.

Art. 83. Para ser admitido en el cuerpo de aspirantes será necesario ser español, haber cumplido 23 años y ser licenciado en derecho civil por Universidad costeada por el Estado.

Deberán además no estar comprendidos en ninguna de las incapacidades que para obtener cargos judiciales establece esta ley.

Art. 84. Los que pretendan entrar en el cuerpo de aspirantes, justificarán ante el presidente de la Audiencia en cuyo distrito se hallen domiciliados, las circunstancias expresadas en la primera parte del artículo anterior, y obtendrán del mismo una certificación de aptitud para ser admitidos á exámen de calificación, cuando despues de tomar los informes reservados que estime convenientes, resultare no tener ninguno de los impedimentos expresados en la segunda parte del mismo artículo.

Los mismos presidentes remitirán estos expedientes al Gobierno con un informe sobre la conducta moral, circunstancias y cualidades de los que pretendan entrar en el cuerpo de aspirantes.

Art. 85. Para el exámen de los que pretendan entrar en el cuerpo de aspirantes habrá en Madrid una Junta calificadora, compuesta:

Del presidente del Tribunal Supremo, que lo será tambien de dicha Junta.

Del fiscal del Tribunal Supremo.

De dos magistrados del Tribunal Supremo, ó de la Audiencia de Madrid, nombrados por el Gobierno.

Del decano del colegio de abogados de Madrid.

De tres letrados nombrados por el Gobierno á propuesta en terna hecha por la Junta de gobierno del colegio de Madrid entre los que paguen en el concepto de abogados una de las tres primeras cuotas del subsidio industrial.

De dos catedráticos de derecho de la Universidad central, nombrados por el Gobierno.

De un secretario con voto, que nombrará el Gobierno á propuesta en terna de la Junta calificadora.

Art. 86. Los miembros de la Junta calificadora que no lo sean por razon de oficio, cesarán cuando se haga nueva oposicion de aspirantes á la judicatura, á no ser reelegidos.

Art. 87. En el caso en que el presidente del Tribunal Supremo, ó el fiscal, ó el decano del colegio de abogados, no pudieren asistir á la Junta calificadora por incompatibilidad ó por cualquier otra causa, serán sustituidos:

El presidente del Tribunal Supremo, por un presidente de Sala del mismo tribunal, nombrado por el Gobierno.

El fiscal del Tribunal Supremo, por el teniente fiscal del mismo, y á falta de éste, por uno de los abogados fiscales de dicho Tribunal, nombrado por el Gobierno.

El decano del colegio de abogados, por un individuo de la Junta de gobierno nombrado por la misma.

Art. 88. El Gobierno remitirá los expedientes instruidos por los presidentes de las Audiencias á la Junta calificadora, la cual solo admitirá á la oposicion á los que reunieren las condiciones que requiere esta ley para poder ser aspirantes.

La Junta calificadora convocará á los opositores todos los años en el mes de Setiembre, fijando los plazos en

que hayan de concurrir, y señalando los días en que deban hacerse los ejercicios.

Art. 89. Los reglamentos señalarán los ejercicios teóricos y prácticos que hayan de sufrir los examinandos y el tiempo de su duración.

Los ejercicios serán siempre públicos.

Art. 90. Terminados los exámenes, la Junta formará una lista de los que considere aptos, numerándolos por el orden del mérito de cada uno.

Art. 91. El Ministro de Gracia y Justicia admitirá en el cuerpo de aspirantes á los examinados y aprobados por el orden de numeración que tengan en las listas formadas por la Junta calificadora.

Art. 92. Los aspirantes examinados y aprobados que no ingresaren en el cuerpo por no alcanzar á su número el de las vacantes que hubieren de proveerse en el año, no podrán optar á las de años siguientes sin nueva oposición.

Art. 93. Los nombramientos de los aspirantes á la judicatura se publicarán en la *Gaceta de Madrid*, con expresión del número correspondiente á cada uno de los nombrados en la escala del cuerpo.

El Ministro de Gracia y Justicia expedirá un título á cada aspirante que nombrare.

Art. 94. Pasarán los aspirantes nombrados á formar parte del colegio respectivo de las Audiencias en cuyos distritos tuvieren su residencia, concurriendo á las sesiones públicas del tribunal ó tribunales del lugar de su domicilio, y ocupando en ellas el sitio que se les designará en los reglamentos (1).

---

(1) A juzgar por lo que dispone el art. 97, la concurrencia á las sesiones públicas de los tribunales es potestativa, si bien parece que se tendrá en cuenta para el nombramiento.

Art. 95. Podrán los aspirantes cambiar de domicilio poniéndolo en conocimiento del presidente de la Audiencia y esperando su contestacion.

El presidente no se lo negará sin justa causa; y cuando el cambio de domicilio fuere para punto que no correspondiese al distrito de la misma Audiencia, lo pondrá en conocimiento del presidente de la Audiencia á que pasare.

El aspirante deberá en este caso, tan luego como cambie su domicilio, ponerse á las órdenes del presidente de la Audiencia á cuyo territorio se hubiese trasladado.

Art. 96. Los aspirantes, aunque no hayan cumplido 25 años, serán nombrados en los pueblos de su domicilio con preferencia á otros letrados:

- 1.º Jueces municipales.
- 2.º Suplentes de los mismos y de los de instruccion.
- 3.º Sustitutos de jueces de tribunales de partido cuando lleven por lo menos un año en el cuerpo.
- 4.º Sustitutos de fiscales de tribunales de partido ó de abogados fiscales de Audiencias, cuando no hubiere dentro del distrito de las mismas aspirantes al ministerio fiscal de que pueda disponerse.

En los tres primeros casos, los nombramientos serán hechos por los presidentes de las Audiencias; en el cuarto, por el fiscal, que pedirá al presidente que le designe al efecto los aspirantes que tenga disponibles.

Por estos nombramientos no se entenderán separados los elegidos del cuerpo de aspirantes á que correspondan.

La aceptacion del desempeño de los cargos de los tres primeros números en el pueblo en que estén domiciliados los aspirantes á la judicatura, será obligatoria, pero no la de los cargos del núm. 4.º

Art. 97. Los presidentes de Sala de las Audiencias

y los de los tribunales de partido en que sea juez municipal ó suplente algun aspirante, darán cuenta al fin de cada año á los presidentes de las Audiencias del comportamiento que los aspirantes hubiesen observado, expresando si han asistido con frecuencia á las sesiones, y el concepto que hayan formado de su aptitud profesional, y de su conducta y celo por el servicio público.

Igual cuenta darán los fiscales de las Audiencias respecto á los aspirantes á la judicatura que ejerciesen algun cargo en su ministerio.

Art. 98. Los presidentes de las Audiencias darán cuenta al fin de cada año al Ministerio de Gracia y Justicia del comportamiento de los aspirantes que residan en su respectivo distrito, acompañando un resúmen de los informes que hubiesen dado de ellos los presidentes de Sala y de los tribunales de partido, y los fiscales de las Audiencias en sus respectivos casos.

Art. 99. Cuando un aspirante incurriere en alguno de los impedimentos que inhabiliten para el ejercicio de funciones judiciales, darán en seguida parte al presidente de la Audiencia, el cual lo elevará al Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 100. Los informes que los presidentes de las Audiencias dieren de los aspirantes en cumplimiento de lo prevenido en los dos artículos anteriores, se pasarán á la Junta calificadora, la cual, en su vista, y oyendo cuando lo estime necesario á los interesados, podrá proponer al Gobierno:

1.º La exclusion del cuerpo de los que con arreglo al artículo 99 se hayan imposibilitado para continuar en él.

2.º La postergacion por tiempo de tres meses á un año, á contar desde el dia en que les corresponda ser nombrados jueces de instruccion, de aquellos que por su



conducta, falta en el cumplimiento de sus deberes, ó de aptitud para el desempeño de sus funciones, no fuesen dignos de ser promovidos á la judicatura, pero dieren esperanzas de enmienda.

3.º La exclusion definitiva de los que hubieren sido postergados dos veces por cualquiera de las causas expresadas en el párrafo anterior.

Art. 101. Contra la resolucion del Gobierno conformándose con lo propuesto por la Junta calificadora en los casos expresados en el artículo anterior, no se dará ulterior recurso.

Art. 102. Los aspirantes que se crean perjudicados en un derecho perfecto que tuvieren para entrar en la carrera judicial, bien por no ser colocados en el lugar de la escala que les corresponda, ó bien por no ser promovidos cuando les toque con arreglo á esta ley, podrán recurrir contra la resolucion del Gobierno, por la vía contenciosa, al Tribunal Supremo dentro de un mes contado desde el dia en que administrativamente se les hubiese notificado la resolucion.

Art. 103. Lo dispuesto en el artículo que antecede, no es aplicable á las resoluciones que el Gobierno dictare en conformidad á los artículos 91 y 101.

Art. 104. Cuando ocurra alguna vacante ó postergacion en el cuerpo de aspirantes, correrá la escala del mismo, ocupando todos los que tuvieren puestos inferiores al que vacare ó fuere postergado, el inmediato superior.

Art. 105. Todos los años se publicará en la *Gaceta* el escalafon de los aspirantes.

Las alteraciones que en él ocurran, se comunicarán inmediatamente á todos aquellos que en su consecuencia vanen de puesto en el mismo.

Art. 106. Los aspirantes no podrán ejercer empleo

público, ni cargo ninguno de administracion general, provincial ó municipal.

Si fueren nombrados para alguno que sea obligatorio con arreglo á las leyes, podrán excusarse de él y tendrán derecho á que sea admitida la excusa.

Si lo admitieren, dejarán de pertenecer al cuerpo.

Art. 107. No estará prohibido á los aspirantes el ejercicio de la abogacía.

Art. 108. En los presupuestos generales del Estado se consignará anualmente una cantidad para honorarios de los que compongan la Junta calificadora, que no correspondan á la magistratura ó al ministerio fiscal.

Esta cantidad se aplicará en la forma que prevenga el reglamento de oposiciones.

## CAPITULO II.

*De las condiciones comunes á todos los cargos judiciales.*

Art. 109. Para ser juez ó magistrado, cualquiera que sea la clase ó denominacion del cargo, se requiere:

- 1.º Ser español de estado seglar.
- 2.º Haber cumplido 25 años.
- 3.º No hallarse comprendido en ninguno de los casos de incapacidad ó de incompatibilidad que establece esta ley.

4.º Estar dentro de las condiciones que para cada clase de cargos se hallan establecidas en la misma.

Art. 110. No podrán ser nombrados jueces ni magistrados:

- 1.º Los impedidos física ó intelectualmente.
- 2.º Los que estuvieren procesados por cualquier delito.
- 3.º Los que estuvieren condenados á cualquier pena

correccional ó aflictiva, mientras que no la hayan sufrido ú obtenido de ella indulto total.

4.º Los que hubieren sufrido y cumplido cualquiera pena que los haga desmerecer en el concepto público.

5.º Los que hubieren sido absueltos de la instancia en causa criminal, mientras que por el trascurso del tiempo la absolucion no se hubiere convertido en libre.

6.º Los quebrados no rehabilitados.

7.º Los concursados mientras no sean declarados inculpables.

8.º Los deudores á fondos públicos como segundos contribuyentes.

9.º Los que tuvieren vicios vergonzosos (1).

10.º Los que hubieren ejecutado actos ú omisiones, que aunque no penables, los hagan desmerecer en el concepto público.

Art. 111. Los cargos de jueces y magistrados serán incompatibles:

1.º Con el ejercicio de cualquiera otra jurisdiccion.

2.º Con otros empleos ó cargos dotados ó retribuidos por el Estado, por las Córtes, por la Casa Real, por las provincias ó por los pueblos.

3.º Con los cargos de diputados provinciales, de alcaldes, regidores y cualesquiera otros provinciales ó municipales.

4.º Con empleos de subalternos de tribunales ó juzgados.

Art. 112. El ejercicio de las funciones judiciales será justa causa para eximirse de los cargos obligatorios de que se hace mencion en el núm. 3.º del artículo anterior.

---

(1) ¿Cómo y por quién se acreditará esta circunstancia? Hé aquí una duda que deberán resolver los reglamentos.

La autoridad á quien corresponda admitir la exencion, no podrá desecharla:

El que no manifestare la causa para eximirse de los expresados cargos en el término de ocho dias, se entenderá que ha renunciado al judicial, el cual quedará vacante de derecho.

Art. 113. Los que ejerciendo cualquier empleo ó cargo de los expresados en el art. 111 fueren nombrados jueces ó magistrados, podrán eximirse de uno ú otro cargo ó empleo en el término de ocho dias desde aquel en que fueren nombrados.

Si no lo hicieren, se entenderá que renuncian al cargo judicial.

Art. 114. No podrán pertenecer simultáneamente á un mismo tribunal los jueces ó magistrados que tuvieren parentesco entre sí dentro del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad.

Esta disposicion será aplicable á los jueces y magistrados que tengan parentesco, dentro de los grados expresados, con los fiscales, tenientes fiscales, abogados fiscales ó auxiliares del mismo tribunal.

Lo será igualmente cuando el parentesco, dentro de los mismos grados, fuere entre los jueces municipales y los de tribunales de partido con los fiscales ó jueces de instruccion del mismo tribunal, ó de cualquiera de ellos con los magistrados de la Audiencia respectiva.

Art. 115. En los casos á que se refiere el artículo anterior, quedará sin efecto el nombramiento hecho á favor de quien tuviere parientes con los cuales fuere incompatible el nombrado, desempeñando funciones judiciales ó fiscales, con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior.

## CAPITULO III.

*De las condiciones comunes á los jueces de instruccion, á los tribunales de partido y á los magistrados.*

Art. 116. Los jueces de instruccion, los de los tribunales de partido, los magistrados de número y los suplentes de cualquiera de las mismas clases deberán reunir, además de las condiciones expresadas en el art. 109, la de ser abogados ó licenciados en derecho civil por Universidad costeada por el Estado.

Art. 117. Nadie podrá ser juez de instruccion, ni de tribunal de partido, ni magistrado de Audiencia á cuya jurisdiccion pertenezcan:

1.º El pueblo de su naturaleza.

2.º El pueblo en que él ó su mujer hubieren residido de continuo en los cinco años anteriores al nombramiento.

3.º El pueblo en que al hacerse el nombramiento ejerciere cualquiera industria, comercio ó granjería.

4.º El pueblo en que él ó su mujer ó los parientes de uno ó de otro en línea recta ó en la transversal dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, ó segundo de afinidad, poseyeren bienes raíces, ó ejercieren alguna industria, comercio ó granjería.

5.º El pueblo en que hubiese ejercido la abogacía en los dos años anteriores al nombramiento.

6.º El pueblo en que hubiese sido auxiliar ó subalterno de juzgado ó tribunal.

Art. 118. Las disposiciones contenidas en el artículo que antecede, no serán aplicables á los cargos de jueces ó magistrados que ejerzan sus funciones en Madrid.

Art. 119. No podrán ejercer por sí, ni por sus mu-

jeros, ni á nombre de otro, industria, comercio ni granjería, ni tomar parte en empresas ni en sociedades mercantiles como s6cios colectivos 6 como directores gestores, administradores 6 consejeros:

1.º Los jueces de instruccion en la circunscripcion á que se extendiere su jurisdiccion.

2.º Los jueces de tribunales de partido y los magistrados de Audiencias dentro del partido 6 distrito á que se extendiere la jurisdiccion del tribunal 6 de la Audiencia á que pertenezcan.

3.º Los magistrados del Tribunal Supremo en toda la Monarquía.

Art. 120. Los que contravinieren á lo que en el artículo anterior se ordena, se considerarán como renunciantes del cargo que desempeñaren.

#### CAPÍTULO IV.

*De las condiciones especiales á los jueces municipales.*

Art. 121. Los jueces municipales y sus suplentes, además de las condiciones señaladas en el art. 109, habrán de saber leer y escribir y estar domiciliados en el pueblo en donde hubieren de ejercer sus funciones.

Art. 122. Donde hubiere letrados con aptitud para ser jueces municipales, serán preferidos á los que no lo fueren, á no mediar motivos que aconsejen lo contrario.

#### CAPÍTULO V.

*De las condiciones especiales para ingresar y ascender en los juzgados de instruccion y en los tribunales de partido.*

Art. 123. Los juzgados de instruccion se proveerán

únicamente en aspirantes á la judicatura, confiriendo de cada cinco vacantes:

1.º Dos á los que tengan los dos primeros números en el cuerpo de aspirantes.

2.º Dos á los que el Gobierno considere más dignos entre los aspirantes comprendidos en la tercera parte superior de la escala.

3.º Uno al que el Gobierno considere más digno entre todos los que correspondan al mismo cuerpo de aspirantes, con tal que lleven en él un año por lo menos.

Art. 124. Cuando en el caso del párrafo segundo del artículo anterior, el número de individuos que compongan la escala no sea exactamente divisible por tres, se entenderán comprendidos en el tercio superior de ella los que formen el residuo de dicha division y tengan los números inmediatos al último de los que compongan el mismo tercio superior.

Art. 125. Los aspirantes postergados, mientras lo estuvieren, dejarán de ser promovidos á la judicatura cuando les corresponda por rigurosa antigüedad, sin que puedan tampoco proveerse en ellos las tres vacantes mencionadas en los números 2.º y 3.º del artículo 123.

Art. 126. Las plazas de jueces de tribunales de partido solo podrán proveerse:

Las de jueces de tribunales de ingreso, á excepcion de las de sus presidentes, en jueces de instruccion.

Las de presidentes de tribunales de partido de ingreso y de jueces de tribunales de ascenso, en jueces de tribunales de ingreso.

Las de presidentes de tribunales de partido de ascenso, en presidentes de los de ingreso ó en jueces de los de ascenso.

Art. 127. Para computar la antigüedad de los jueces

de los tribunales de partido de ascenso y de los presidentes de los de ingreso, formarán todos una sola clase y tendrán una sola escala.

Art. 128. De cada cinco vacantes que en dichos tribunales de partido ocurran, se conferirán:

Dos á los que ocuparen los dos primeros números en la escala del grado inmediatamente inferior, siempre que no hubiesen sufrido en los dos últimos años más de dos correcciones disciplinarias.

Dos á los que el Gobierno considere más dignos entre los jueces comprendidos en la mitad superior de la escala inferior sobredicha.

Una al juez de dicha escala inferior que el Gobierno juzgue como más digno entre todos los de su clase.

Art. 129. La vacante de libre eleccion entre los comprendidos en toda la escala, no podrá proveerse sino en el que lleve por lo menos dos años de servicio en la clase inmediatamente inferior.

Art. 130. Los jueces que hubiesen sido corregidos disciplinariamente más de dos veces durante los dos años anteriores á la provision de la vacante, no serán nombrados en los dos primeros turnos concedidos á la antigüedad, las dos primeras veces que en otro caso debiera corresponderles el ascenso, pero serán elegidos en las primeras vacantes que despues ocurran con cargo á los mismos turnos de antigüedad rigurosa, si no hubiesen vuelto á incurrir en correccion disciplinaria. Cuando la correccion disciplinaria consistiese en suspension, no podrán ser ascendidos hasta que la correccion esté cumplida.

Art. 131. En los turnos concedidos respectivamente á los jueces comprendidos en la mitad, en los dos tercios ó en cualquier lugar de las escalas, podrán ser nombrados los que hayan sido disciplinariamente corregidos, cuando



á juicio del Gobierno deban cesar los efectos de dicha correccion en cuanto á los ascensos que fuera del órden de antigüedad rigurosa puedan merecer los mismos corregidos.

Art. 132. Cuando la correccion disciplinaria consistiere en suspension ó postergacion para los ascensos, no podrá hacer uso el Gobierno de la facultad concedida en el artículo anterior, mientras no haya trascurrido el tiempo por el cual hubiere sido aquella impuesta.

## CAPITULO VI.

### *De las condiciones para ingresar y ascender en las Audiencias.*

Art. 133. De cada cuatro vacantes de magistrados que ocurran en las Audiencias, con excepcion de la de Madrid, se proveerán:

1.º Dos en presidentes de tribunales de partido de ascenso.

2.º Una en teniente fiscal ó abogado fiscal de Audiencia.

3.º Una en secretario de gobierno ó de Sala del Tribunal Supremo ó de Audiencia, ó en un abogado, ó en un catedrático de derecho de Universidad costeada por el Estado.

Art. 134. Las dos plazas de magistrados que hayan de proveerse necesariamente con arreglo á lo prevenido en el artículo anterior en presidentes de tribunales de partido de ascenso, se conferirán:

La primera al más antiguo de esta clase que no hubiese sido corregido disciplinariamente en los dos últimos años.

Respecto á los que lo hubiesen sido, se observará lo que en igual caso se establece en el art. 130 respecto á los ascensos de jueces de tribunales de partido.

La segunda á uno de los comprendidos en la escala de los mismos jueces que haya sido por lo menos cuatro años presidente de tribunal de partido de ascenso, aunque hubiese sido alguna vez corregido disciplinariamente, siempre que el motivo de la correccion no le haya hecho indigno del ascenso á juicio del Gobierno, y no consista aquella en suspension ó postergacion por tiempo no cumplido.

Art. 135. La tercera vacante del turno que con arreglo al art. 133 podrá proveerse en tenientes fiscales ó abogados fiscales de las Audiencias, se proveerá solamente en los tenientes fiscales de Audiencia de fuera de Madrid ó en abogados fiscales de la de Madrid que llevarén tres años en estas clases, ó en abogados fiscales de fuera de Madrid que hubiesen desempeñado este cargo durante seis años.

Art. 136. En la cuarta vacante del turno que con arreglo al mismo art. 133 habrá de proveerse en secretarios de Audiencia, abogados ó catedráticos de derecho, el nombramiento deberá recaer:

Cuando sea en secretarios, en los que lo hayan sido de gobierno ó de Sala de justicia en Audiencia que no sea la de Madrid, ocho años, ó en la de Madrid seis, ó en el Tribunal Supremo tres.

Cuando sea en abogados, que, además de tener las condiciones que para ser magistrado exige esta ley y la de no tener ninguna de las incapacidades ó incompatibilidades que la misma establece, reúnan las circunstancias siguientes:

- 1.º Haber ejercido la abogacía diez años en capital

de Audiencia, pagando en los cinco últimos por lo menos la primera cuota de contribucion, y en Madrid una de las primeras.

2.<sup>a</sup> No haber sufrido correccion que les haya hecho desmerecer en el concepto público á juicio del Gobierno.

Cuando sea en catedráticos de derecho, que, además de reunir las condiciones que para ser magistrado establece esta ley, y no tener ninguna de las incapacidades é incompatibilidades que la misma establece, hubiesen por lo menos desempeñado su plaza en propiedad seis años.

Art. 137. Cuando el Gobierno no usare de la facultad que le corresponde con arreglo al art. 133, de elegir en el cuarto turno secretarios de tribunales, abogados ó catedráticos, nombrará libremente á un presidente de tribunal de partido de ascenso entre todos los de la escala.

Art. 138. De cada cuatro plazas de magistrados de la Audiencia de Madrid que vacaren se proveerán:

1.<sup>o</sup> Una, en el magistrado más antiguo de fuera de Madrid que no hubiere sufrido durante los dos últimos años de desempeño de su cargo correccion disciplinaria que le deba privar del ascenso á juicio del Gobierno.

2.<sup>o</sup> Dos, en magistrados de Audiencia de fuera de Madrid, que lleven por lo menos cuatro años de antigüedad en su cargo y que se hallen en el caso del número anterior.

3.<sup>o</sup> Una, en fiscal de Audiencia de fuera de Madrid, ó en abogado fiscal del Tribunal Supremo, ó en teniente fiscal de la Audiencia de Madrid, que lleven por lo menos seis años en el ejercicio de este cargo, ó en secretarios de Sala del Tribunal Supremo con diez años de ejercicio, ó en abogados que hubiesen ejercido su profesion por más de quince años en capital de Audiencia, pagando la primera cuota de contribucion por lo menos cinco años,

ó una de las dos primeras cuotas si fuere en el colegio de Madrid.

Art. 139. Cuando el Gobierno no usare de la facultad de hacer el nombramiento del cuarto turno, con arreglo á lo prescrito en el núm. 3.º del artículo que precede, podrá nombrar á un magistrado de Audiencia de fuera de Madrid, cualesquiera que sean el número que tenga en la escala y los años que lleve de servicio en su clase.

Art. 140. Las presidencias de Sala en las Audiencias, á excepcion de la de Madrid, se proveerán en los que tuvieren las condiciones expresadas en los casos segundo y tercero del art. 138.

Art. 141. Las presidencias de las Audiencias, á excepcion de la de Madrid, y las presidencias de Sala de la de Madrid, se proveerán por eleccion libre del Gobierno:

En los que hubiesen desempeñado ó desempeñaren presidencias de Sala de Audiencia, á excepcion de la de Madrid.

En los que sean ó hubiesen sido fiscales de la Audiencia de Madrid ó tenientes fiscales únicos del Tribunal Supremo.

En magistrados de Audiencia de Madrid, que lleven por lo menos cuatro años de ejercicio en este cargo.

Art. 142. El nombramiento de presidente de la Audiencia de Madrid podrá recaer en presidentes de las demás Audiencias, en presidentes de Sala, ó fiscal de la de Madrid, ó en teniente fiscal único del Tribunal Supremo, por eleccion libre del Gobierno.

Art. 143. Las presidencias de las Audiencias serán cargos en comision, y los que las obtengan tomarán desde su nombramiento los primeros números de la escala de los presidentes de Sala, segun su respectiva antigüedad.

Podrán ser separados por el Gobierno despues de oir al Consejo de Estado, pero conservarán el cargo de presidentes de Sala, y además de su sueldo, la mitad del sobresueldo que como presidentes les correspondia, la cual conservarán hasta que sean promovidos á otras plazas ó jubilados.

## CAPITULO VII.

*De las condiciones especiales para ingresar y ascender en el Tribunal Supremo.*

Art. 144. De cada cuatro vacantes que ocurran en las plazas de magistrado del Tribunal Supremo se proveerán:

Tres en presidentes de la Audiencia de Madrid ó en quien hubiese sido tres años presidente de Audiencia de fuera de Madrid, ó presidente de Sala ó fiscal de la de Madrid, ó teniente fiscal único del Tribunal Supremo, ó en el magistrado más antiguo de la de Madrid.

La cuarta vacante podrá proveerse en abogados que hayan ejercido veinte años en capital de Audiencia, ó quince en Madrid, pagando á lo menos en los ocho últimos la primera cuota del subsidio industrial.

No recayendo la eleccion en ninguno de esta clase, se nombrará quien reuna las condiciones expresadas en el párrafo primero de este artículo.

Art. 145. Para ser nombrado presidente de Sala del Tribunal Supremo se necesitará hallarse en alguno de los casos siguientes:

- 1.º Haber sido Ministro de Gracia y Justicia.
- 2.º Haber sido fiscal del Tribunal Supremo.
- 3.º Haber sido magistrado del Tribunal Supremo tres años por lo menos.

4.º Haber sido Ministro de la Corona y ejercido los cargos de magistrado, el de fiscal de Audiencia, ó la abogacía en Madrid durante quince años, pagando en los cinco últimos por lo menos la primera cuota del subsidio industrial.

Art. 146. Para ser nombrado presidente del Tribunal Supremo será necesario estar en alguno de los casos siguientes:

1.º Haber sido Presidente del Consejo de Ministros, ó Ministro de Gracia y Justicia, si fueren ó hubiesen sido magistrados del mismo Tribunal Supremo, magistrados ó fiscales de Audiencia, ó ejercido la abogacía diez años por lo menos.

2.º Haber sido Presidente del Senado ó del Congreso de los Diputados con alguna de las circunstancias expresadas en el número anterior.

3.º Haber sido presidente del Consejo de Estado ó de la seccion de Estado y Gracia y Justicia del mismo, con alguna de las circunstancias expresadas en el núm. 1.º

4.º Haber sido presidente de Sala ó fiscal del Tribunal Supremo un año por lo menos.

### **TITULO III.**

DEL NOMBRAMIENTO, JURAMENTO, ANTIGUEDAD, TRATAMIENTO, TRAGE Y DOTACION DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.

#### **CAPITULO I.**

*Del nombramiento de los jueces municipales.*

Art. 147. Los jueces municipales y sus suplentes

serán nombrados por los presidentes de las Audiencias en virtud de propuesta en terna que les harán los presidentes de los tribunales de partido durante los quince días primeros del mes de Mayo, en los años en que deba verificarse la renovacion.

Art. 148. Para el acierto de la eleccion podrán los presidentes de los tribunales de partido pedir, si lo consideraren necesario ó conveniente, noticias á los jueces municipales en ejercicio, á los de instruccion y á cualesquiera otras autoridades ó personas que les merezcan confianza.

Ninguna autoridad judicial ó administrativa podrá negarles su concurso.

Art. 149. En la propuesta harán los presidentes de los tribunales de partido expresion de las circunstancias que determinen la aptitud legal de los designados, y cualesquiera otras que los recomienden para su cargo.

Art. 150. En las poblaciones que tuvieren más de un tribunal de partido, cada uno hará la propuesta de los jueces municipales que correspondan á la parte de poblacion sujeta á su jurisdiccion.

Art. 151. Los presidentes de las Audiencias podrán, cuando lo estimaren conveniente, pedir noticias en los términos expresados en el art. 148 acerca de las circunstancias de los propuestos.

Art. 152. Cuando los presidentes de las Audiencias encontraren las propuestas arregladas á las leyes y no usaren de la facultad que les concede el artículo anterior, ó usándola consideraren que tienen aptitud legal todos los propuestos, harán el nombramiento dentro de los quince primeros días del mes de Junio.

Art. 153. Cuando alguno ó algunos de los propuestos carecieren de aptitud legal y otros la tuvieren, podrán

los presidentes de las Audiencias hacer el nombramiento de los aptos, ó mandar completar las ternas, sustituyendo con personas en quienes concurren los requisitos legales á los que no los tuviesen.

Cuando todos los propuestos carecieren de aptitud legal, devolverán las ternas para que se formen de nuevo.

Art. 154. Los nombramientos de los jueces municipales se insertarán por relacion en los *Boletines oficiales* de las provincias respectivas.

Art. 155. Los jueces municipales electos, en quienes concorra alguna circunstancia que les inhabilite para el desempeño del cargo, ó les exima del mismo, podrán solicitar del presidente de la Audiencia que se declare su exencion.

Esta solicitud habrá de hacerse por conducto del presidente del tribunal del partido á que corresponda el pueblo para el cual los solicitantes hubieren sido nombrados jueces municipales, dentro de los ocho dias siguientes á aquel en que se hubiese comunicado su nombramiento.

Art. 156. Los que supiesen cualquier impedimento legal que tuviere para desempeñar su cargo alguno que hubiese sido nombrado juez municipal, podrán manifestarlo al presidente de la Audiencia por conducto del que lo sea del tribunal del partido respectivo, dentro del término señalado en el artículo anterior.

Art. 157. El presidente del tribunal del partido remitirá con toda brevedad al de la Audiencia las solicitudes y reclamaciones mencionadas en los dos artículos anteriores, con el informe que considere procedente.

Art. 158. El presidente de la Audiencia, en vista de las excusas ó reclamaciones que se le hubieren presentado, oyendo al fiscal y cuando lo considere conveniente á la Sala de gobierno, declarará segun proceda:



1.º La admision de la excusa ó de la reclamacion, en cuyo caso quedará sin efecto el nombramiento y se procederá á hacer otro.

2.º La no admision de la excusa ó reclamacion.

3.º La averiguacion y comprobacion de los hechos alegados ó denunciados, en cuyo caso no se dará posesion al elegido, si aún no la hubiese tomado, hasta que recaiga decision.

Tampoco se hará novedad mientras no recaiga decision, en el caso en que el nombrado hubiese tomado posesion de su cargo.

Art. 159. Antes del 15 de Julio el presidente de la Audiencia decidirá todas las reclamaciones que haya pendientes y mandará publicar en los *Boletines oficiales* de las respectivas provincias las rectificaciones hechas definitivamente.

Art. 160. Los que, despues de nombrados los jueces municipales, supieren que alguno de ellos está incapacitado legalmente para ejercer el cargo, podrán en cualquier tiempo manifestarlo al presidente de la Audiencia, quien tomando los informes que juzgue necesarios, y siempre el del presidente del tribunal del partido, y despues de oir á la Sala de gobierno, decidirá lo que proceda.

Art. 161. Las decisiones admitiendo ó desechando las excepciones ó reclamaciones serán siempre fundadas.

Art. 162. Contra las decisiones de los presidentes de las Audiencias, admitiendo ó desestimando las alegaciones de exencion ó las reclamaciones, solo habrá recurso al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 163. Las vacantes que ocurran durante el bienio en que deban desempeñar sus cargos los jueces municipales, se proveerán por los presidente de las Audiencias, previos los trámites expresados en los artículos an-

teriores de este capítulo, tanto en lo relativo al nombramiento, como en lo concerniente á exenciones y reclamaciones; pero sin sujecion á los plazos marcados en los artículos anteriores.

Art. 164. Los nombrados para ocupar dichas vacantes cesarán, si no fueren reelegidos, al terminar los dos años por que debieron haber desempeñado el cargo sus antecesores.

## CAPITULO II.

*Del nombramiento de los jueces de instruccion, de los de tribunales de partido y de los magistrados.*

Art. 165. Los jueces de instruccion y los que formen los tribunales de partido, cualquiera que sea su categoría ó clase, serán nombrados de Real orden.

Los magistrados, cualquiera que sea su categoría y clase, serán nombrados por Real decreto.

En los nombramientos de todos los comprendidos en este artículo, se expresarán las condiciones especiales en virtud de las que ingresen ó asciendan en sus cargos respectivos.

Art. 166. No se podrá hacer nombramiento de jueces de instruccion, ni de tribunales de partido, ni de magistrados de ninguna clase, sin que preceda propuesta de la seccion de Estado y de Gracia y Justicia del Consejo de Estado.

Art. 167. Para que tenga efecto lo ordenado en el artículo anterior, se formará en el Ministerio de Gracia y Justicia:

1.º Un escalafon general en que se comprendan las escalas:

De aspirantes.

De jueces de instruccion.

De jueces de tribunales de partido de ingreso.

De jueces de partido de ascenso y de presidentes de tribunales de partido de ingreso.

De presidentes de tribunales de partido de ascenso.

De magistrados de Audiencia, á excepcion de la de Madrid.

De presidentes de Audiencia, presidentes de Sala de Audiencia, á excepcion de la de Madrid, y de magistrados de la Audiencia de Madrid.

De presidente y presidentes de Sala de la Audiencia de Madrid.

De magistrados del Tribunal Supremo.

De presidentes de Sala del Tribunal Supremo.

2.º Un expediente para cada aspirante, juez ó magistrado.

Art. 168. El escalafon general se imprimirá todos los años en número bastante de ejemplares para que puedan adquirirlo todos los interesados.

Art. 169. En el expediente de que trata el artículo 167, hará constar el interesado con documentos públicos, auténticos y solemnes, sus circunstancias para ingresar ó ascender en la carrera judicial y los méritos especiales que lo recomienden y que puedan darle preferencia.

Art. 170. Se comprenderán solo como méritos especiales que deban constar en los expedientes:

1.º Las publicaciones científico-jurídicas calificadas al efecto por la corporacion que señale el Gobierno ó por la comision que nombre en cada caso.

2.º Los servicios prestados en comisiones que tengan por objeto la formacion de leyes cuya aplicacion corresponde á los tribunales.

3.º Los servicios distinguidos prestados en la carrera

judicial sosteniendo con dignidad y energía la integridad de sus funciones, ó corriendo peligros, ó padeciendo en su persona ó en sus bienes, en cumplimiento de sus deberes.

4.º Los servicios de otra clase prestados al Estado en otras carreras.

Art. 171. La Secretaría del Ministerio, por su parte, hará constar en los expedientes:

1.º Las correcciones disciplinarias y condenaciones en costas que se hayan impuesto al juez ó magistrado.

2.º Las responsabilidades civiles y criminales que contra él se hayan intentado y su éxito.

3.º El concepto que merezca á sus superiores inmediatos, fundado principalmente en haberse confirmado ó revocado frecuentemente sus fallos.

Art. 172. Respecto á los que pretendan entrar en la magistratura y no correspondan al órden judicial, y á los tenientes y abogados fiscales y secretarios de los tribunales, que el Gobierno pensare en promover á ella, el Ministerio de Gracia y Justicia formará los expedientes, utilizando los datos que existan en sus oficinas y completando los necesarios en la forma prevenida en el art. 170.

Art. 173. Lo prevenido en el artículo anterior se observará respecto á los abogados cuando el Gobierno considere que debe darse curso á sus solicitudes para ingresar en la magistratura, siendo requisito necesario oír en este caso á los decanos de los colegios y á los presidentes de los tribunales en que hubieren ejercido su profesion.

Art. 174. En los expedientes á que se refieren los artículos que preceden, se hará constar la conducta moral de los que sean ó pretendan ser jueces ó magistrados, por los medios que estime el Gobierno, limitándose á actos exteriores que tengan más ó menos publicidad.

En el caso de haber antecedentes desfavorables, solo

se unirá al expediente la comunicacion dada al interesado de lo que resultare y de los descargos que alegare en su favor.

Art. 175. El Gobierno pasará anualmente el escalafon general al Consejo de Estado, y los expedientes que sean necesarios para que pueda cumplir las obligaciones que le impone esta ley.

Art. 176. En los turnos que deban conferirse necesariamente á los más antiguos, el Consejo de Estado se limitará á designar los que tengan esta circunstancia, á no mediar causa legal que lo impidiere.

Cuando la hubiere, la manifestará al Gobierno, y propondrá al que siga en antigüedad.

Art. 177. En los turnos que correspondieren á los que estuviesen en alguna parte de la escala ó en toda ella, ó en que se hayan de proveer las plazas entre los que pertenecen á la carrera judicial ó fiscal, el Consejo de Estado presentará para cada plaza una lista de 10 candidatos, en que se expresen la capacidad legal de los propuestos y sucintamente los motivos de su respectiva preferencia.

Art. 178. El Gobierno elegirá libremente dentro de la propuesta.

En el caso de que alguno de los comprendidos por el Consejo en la propuesta, careciese de cualquiera de las condiciones necesarias para ingresar en la magistratura ó judicatura, ó para obtener el ascenso, el Gobierno podrá devolver la propuesta, mandando que se forme otra nueva.

Art. 179. En las cuartas vacantes de los turnos para el nombramiento de magistrados de Audiencia, á excepcion de la de Madrid, que deban proveerse con arreglo al artículo 136, ó para la de Madrid con arreglo al 139, ó para el Tribunal Supremo con arreglo al párrafo tercero

del 144 de esta ley, el Gobierno pasará al Consejo de Estado el expediente de la persona que se proponga agraciarse.

El Consejo se limitará á calificar la capacidad legal del designado, con arreglo á los expresados artículos 136, 139 y 144.

Art. 180. Los que teniendo un derecho perfecto y determinado para ingresar ó ascender en la carrera judicial, fueren pospuestos indebidamente, podrán entablar recurso contencioso ante el Tribunal Supremo.

### CAPITULO III.

#### *Del juramento y de la toma de posesion de los jueces y magistrados.*

Art. 181. Los presidentes de las Audiencias remitirán los nombramientos de jueces municipales y sus suplentes á los presidentes de los tribunales de partido, los cuales los pondrán en conocimiento de los juzgados municipales respectivos y en el de los nombrados.

Art. 182. El Gobierno remitirá los nombramientos de los jueces de instruccion, los de los jueces que compongan los tribunales de partido y los de los magistrados á los presidentes de las Audiencias ó al del Tribunal Supremo, á quienes respectivamente corresponda recibir el juramento y dar ó mandar dar posesion á los nombrados. Tambien comunicará á estos el Gobierno sus respectivos nombramientos.

Art. 183. Los presidentes de las Audiencias y el del Tribunal Supremo, en sus casos respectivos, mandarán pasar al ministerio fiscal los nombramientos á que se refiere el artículo anterior, para que emita su opinion acer-

ca de si han sido hechos con arreglo á la Constitucion y á las leyes.

Art. 184. Evacuado el informe por el ministerio fiscal, se dará cuenta al tribunal respectivo en pleno, el cual, si lo encontrare legal, acordará su cumplimiento.

Si considerare que el nombramiento no es conforme á la Constitucion ó á las leyes, manifestará reverentemente al Gobierno los motivos que le hayan obligado á no darle cumplimiento.

Art. 185. Corresponde mandar prestar el juramento para dar posesion de los cargos á que se refieren los dos artículos anteriores:

Respecto á los jueces municipales, al tribunal de partido, el cual lo hará al comunicar los nombramientos á los juzgados.

Respecto á los jueces de instruccion, á los jueces de los tribunales de partido, y á los magistrados de las Audiencias, á las Audiencias en pleno del respectivo territorio.

Respecto á los magistrados del Tribunal Supremo, á este mismo Tribunal en pleno.

Art. 186. En los casos de los dos últimos párrafos del artículo anterior, el tribunal respectivo, al tiempo de acordar que se cumpla el nombramiento, ordenará que preste el juramento y tome posesion de su cargo el nombrado.

Art. 187. Los jueces y magistrados de nombramiento Real se presentarán á jurar sus respectivos cargos dentro de los treinta dias siguientes al de la fecha de sus respectivos nombramientos, y de cuarenta y cinco los electos para Canarias.

El que no se presentare en dichos términos se entenderá que renuncia su cargo, á no justificar documentalmente, á juicio del Gobierno, su imposibilidad para verificarlo.

A los que justificaren su imposibilidad les concederá el Gobierno la próroga que estime bastante.

Art. 188. La fórmula del juramento que han de prestar todos los jueces y magistrados sin distincion alguna, será:

*Guardar y hacer guardar la Constitucion de la Monarquía.*

*Ser fieles al Rey.*

*Administrar recta, cumplida é imparcial justicia.*

*Cumplir todas las leyes y disposiciones que se refieran al ejercicio de su cargo.*

Art. 189. Prestarán el juramento prescrito en el artículo anterior:

Los jueces municipales de pueblos que no sean cabeza de partido, ante los jueces municipales que cesen, y en su defecto ante sus suplentes, en el lugar destinado á las audiencias del juzgado.

Los jueces municipales de pueblos cabeza de partido y sus suplentes, ante el tribunal del partido.

Los jueces de instruccion y los de los tribunales de partido, ante la Sala de gobierno de la Audiencia del distrito á que pertenezcan los juzgados ó tribunales para que hayan sido nombrados.

Los magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo, ante los tribunales á que respectivamente correspondan, constituidos en pleno y en audiencia pública, con asistencia del ministerio fiscal y á presencia de todos los auxiliares y subalternos.

Art. 190. Los jueces municipales y sus suplentes de pueblos en que no residan tribunales de partido, tomarán posesion de sus cargos en el acto mismo de prestar juramento.

Los que lo sean de pueblos en que esté la residencia



de tribunales de partido, la tomarán despues de haber prestado el juramento, constituyéndose al efecto en el lugar designado para la audiencia del juzgado respectivo.

Art. 191. Los jueces de instruccion y de los tribunales de partido se presentarán en el lugar en que esté la residencia del juzgado ó tribunal dentro de los seis dias siguientes á aquel en que hubiere prestado juramento en las Audiencias. Al que sin justa causa no se presentare, se le considerará comprendido en el párrafo segundo del art. 187 de esta ley.

Art. 192. Tomarán posesion de sus cargos los jueces de instruccion y los de tribunales de partido en el lugar respectivamente señalado para su residencia.

Art. 193. Darán la posesion :

A los jueces municipales, á sus suplentes y á los jueces de instruccion, los que estuvieren ejerciendo las respectivas jurisdicciones.

A los jueces de los tribunales de partido, el tribunal para que hubiesen sido nombrados.

A unos y á otros se dará la posesion en audiencia pública con asistencia del ministerio fiscal, de los auxiliares y de los subalternos de los respectivos juzgados ó tribunales.

Art. 194. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, tomarán posesion en el acto de prestar el juramento.

Art. 195. A la prestacion de juramento y toma de posesion de los presidentes de las Audiencias asistirán los jueces municipales y los del tribunal ó tribunales de partido de la capital en que resida la Audiencia y comisiones de los colegios de abogados, notarios y procuradores.

Al juramento y posesion del presidente del Tribunal Supremo asistirá además la Audiencia de Madrid en cuerpo.

## CAPITULO IV.

*De la antigüedad y precedencia de los jueces y magistrados.*

Art. 196. Los jueces y magistrados tomarán su antigüedad, en la clase á que correspondan, desde el dia que hayan entrado en posesion del cargo que obtengan en ella.

Entre los que tomen posesion en un mismo dia, será el más antiguo aquel cuyo nombramiento sea anterior en fecha.

Si los nombramientos tuviesen la misma fecha, será más antiguo el que tuviese más años de servicio en la clase inmediatamente inferior.

Si tambien fueren iguales en este concepto, se determinará su antigüedad respectiva por los años que cada uno hubiere servido en la carrera judicial ó fiscal.

Art. 197. La mayor antigüedad dará precedencia:

1.º En el orden de asientos y puestos entre los jueces y magistrados de la misma clase.

2.º Para la presidencia accidental de Salas ó de tribunales de partido entre los magistrados ó jueces que los compongan en los casos de vacante ó de cualquier otro impedimento del presidente propietario.

3.º Para la presidencia accidental de las Audiencias y del Tribunal Supremo entre los presidentes de Sala, en el mismo caso del número anterior.

4.º Para asistir á la Sala de gobierno á falta de alguno de los presidentes que deban componerla entre los magistrados que compongan la misma Sala de justicia cuyo presidente no asistiere.

## CAPITULO V.

*De los honores de los jueces y magistrados.*

Art. 198. Los tribunales tendrán de palabra y por escrito el tratamiento impersonal.

Art. 199. Los jueces de instruccion y de tribunales de distritos en los actos de oficio tendrán el tratamiento de *Señoría*.

Art. 200. Los magistrados y presidentes de Sala de las Audiencias tendrán el tratamiento personal de *Señoría*.

Art. 201. Los presidentes de las Audiencias y los de Sala de Madrid, el de *Señoría ilustrísima*.

Los magistrados del Tribunal Supremo el de *Excellencia*.

Art. 202. En los actos de oficio, los jueces y magistrados no podrán recibir mayor tratamiento que el correspondiente á su empleo efectivo en la carrera judicial, aunque lo tuvieren superior en diferente carrera ó por otros títulos.

Tampoco podrán usar, cuando se reúnan en cuerpo ó en Salas, ninguna condecoracion que les dé derecho á tratamiento superior que el que corresponda al que preside el acto.

Art. 203. Los jueces y magistrados que se hayan jubilado ó salido del servicio, voluntariamente, ó por imposibilidad de continuar desempeñándolo, conservarán el tratamiento personal que hubiesen obtenido en la carrera, y le perderán los que hubiesen sido depuestos, en los casos y en la forma establecidos en esta ley.

Art. 204. No obstante lo dispuesto en el artículo an-

terior, los jueces y magistrados jubilados que hubiesen servido por más de veinticinco años efectivos en la carrera judicial, podrán obtener los honores de la categoría superior inmediata á la de su último empleo, si mereciesen esta recompensa por dilatados y distinguidos servicios en la misma carrera.

Art. 205. Fuera del caso expresado en el artículo que precede, no se concederán honores de juez ó magistrado, ni se dará á los que lo sean, categoría superior al empleo que desempeñen.

## CAPITULO VI.

### *Del traje de los jueces y magistrados.*

Art. 206. Los jueces municipales y sus suplentes cuando los reemplazaren, usarán en todos los actos en que ejerzan jurisdiccion, ó á que concurren como tales, una medalla de plata pendiente de un cordon negro, cuyo modelo aprobará el Gobierno.

Art. 207. Los jueces y magistrados, en las audiencias públicas, en los demás actos oficiales dentro del edificio y en los actos solemnes á que deban concurrir en comision ó en cuerpo con arreglo á esta ley, ó cuando de Real órden se les mande, usarán el traje de ceremonia.

Art. 208. El traje de ceremonia será:

Para los jueces de instruccion y de tribunales de partido, la toga, medalla y placa que estén establecidos para los jueces de primera instancia por las disposiciones vigentes á la publicacion de esta ley.

Para los magistrados de Audiencia y del Tribunal Supremo, la toga, medalla y placa que les esté señalada á la publicacion de esta ley.

En los demás actos oficiales no expresados en el artículo precedente, los jueces y magistrados usarán solo la placa ó medalla y el baston, con el distintivo que les esté señalado.

Art. 209. El presidente del Tribunal Supremo usará ordinariamente el collar pequeño, y en los actos solemnes el gran collar de la justicia sobre toga igual á la de los demás magistrados.

Art. 210. El Ministro de Gracia y Justicia cuando presida el Tribunal Supremo en pleno, ó su Sala de gobierno, lo que no podrá hacer cuando se constituyan en Sala de justicia, asistirá con toga, usando el distintivo que se establezca por disposicion especial.

Art. 211. Ningun juez ni magistrado podrá usar otro trage ni otras insignias que las que correspondan á su empleo en la carrera judicial, ni condecoraciones superiores á las que use el presidente.

## CAPITULO VII.

### *De la dotacion de los jueces y magistrados.*

Art. 212. Los jueces municipales y sus suplentes percibirán solo los honorarios que les señalen los aranceles judiciales.

Art. 213. Los jueces de instruccion, á excepcion de los de poblaciones que excedan de 40.000 almas, tendrán 4.000 pesetas al año.

Los jueces de instruccion de poblaciones que excedan de 40.000 almas, 4.500 pesetas.

Los jueces de instruccion de Madrid y los de tribunales de partido de ingreso, 5.000 pesetas.

Los presidentes de tribunales de partido de ingreso y los jueces de partido de ascenso, 5.500 pesetas.

Los presidentes de los tribunales de partido de ascenso y los jueces de los partidos de Madrid, 7.000 pesetas.

Los presidentes de los tribunales de partido de Madrid, 8.000 pesetas.

Art. 214. A los jueces de tribunales de partido á quienes se confie una visita de inspeccion fuera del pueblo de su residencia en los casos en que puedan ser nombrados para ella en conformidad á esta ley, se les abonará por cada dia que dure su comision 15 pesetas. Este aumento no se tomará en cuenta para los derechos pasivos.

Art. 215. Los magistrados de Audiencias, á excepcion de los de Madrid, tendrán anualmente 8.500 pesetas.

Los presidentes de Sala, 10.000 pesetas.

Los presidentes de Audiencias, 10.000 pesetas y un sobresueldo de 2.500 pesetas.

Art. 216. Los magistrados de la Audiencia de Madrid, 10.000 pesetas.

Los presidentes de Sala, 11.500 pesetas.

El presidente, 11.500 pesetas y un sobresueldo de 2.500 pesetas.

Art. 217. A los magistrados de Audiencia que con arreglo á los artículos 13, 55, 56 y 57 salieren á presidir tribunales de partido, ó Salas extraordinarias de justicia, ó á constituirse en Salas de Audiencia fuera de la capital de su residencia, se les dará un sobresueldo de 25 pesetas por cada dia que estén fuera de su domicilio.

Este aumento no se tomará en cuenta para los derechos pasivos.

Art. 218. Los magistrados del Tribunal Supremo disfrutarán 14.000 pesetas al año.

Los presidentes de Sala, 15.000 pesetas.

El presidente, 30.000 pesetas.

Tendrá, además, el presidente del Tribunal Supremo por gastos de representacion 5.000 pesetas.

Art. 219. Los suplentes de los jueces de instruccion y los de los tribunales de partido mientras desempeñen las funciones de éstos, disfrutarán la mitad del sueldo de aquel á quien sustituyan.

Art. 220. El descuento de sueldo que se establece en el artículo anterior, respecto á los jueces en favor de sus suplentes, es extensivo á los magistrados en el caso que se nombre un suplente para sustituirlos.

## TÍTULO IV.

### DE LA INAMOVILIDAD JUDICIAL.

#### CAPÍTULO I.

##### *Disposiciones generales.*

Art. 221. Gozarán de la inamovilidad judicial con arreglo al art. 9.º de esta ley:

Los jueces y magistrados que ejerzan funciones permanentes sin limitacion de tiempo. Los jueces que ejerzan funciones con limitacion de tiempo señalado en la ley ó en su nombramiento, solo por el tiempo en que deban desempeñarlas.

Art. 222. La inamovilidad judicial consiste en el derecho que tienen los jueces y magistrados á no ser destituidos, suspensos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas que en este título se expresan.

#### CAPÍTULO II.

##### *De la destitucion de los jueces y magistrados.*

Art. 223. Procede de derecho la destitucion de los jueces y magistrados:

1.º Por sentencia firme en que esta se declare.

2.º Por sentencia firme en que se imponga á un juez ó magistrado pena correccional ó afflictiva, las cuales llevarán siempre consigo la destitucion.

Los tribunales que pronunciasen estas sentencias remitirán certificacion fehaciente de ellas al Ministerio de Gracia y Justicia para que pueda proceder á la provision de las vacantes.

Art. 224. Podrán los jueces y magistrados ser destituidos en virtud de Real decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el de Gracia y Justicia, previa consulta del Consejo de Estado:

1.º Cuando hubieren incurrido en alguno de los casos de incapacidad que establece el art. 110, á excepcion del 2.º, ó en alguna incompatibilidad de las expresadas en el art. 111.

2.º Cuando hubieren sido corregidos disciplinariamente por hechos graves que sin constituir delitos, comprometan la dignidad de su ministerio ó los hagan desmerecer en el concepto público.

3.º Cuando hubieren sido absueltos de la instancia en cualquiera clase de procesos, mientras la absolucion por el lapso del tiempo no se convierta en libre.

4.º Cuando hayan sido una ó más veces declarados responsables civilmente.

5.º Cuando por su conducta viciosa, por su comportamiento poco honroso, ó por su habitual negligencia, no sean dignos de continuar ejerciendo funciones judiciales.

Art. 225. Para que pueda cumplirse lo ordenado en el artículo que precede, los tribunales remitirán al Ministerio de Gracia y Justicia los antecedentes relativos á las causas de destitucion comprendidas en los números



1.º y 5.º del mismo artículo y certificaciones literales de las providencias en que impongan las correcciones disciplinarias, absuelvan de la instancia ó condenen á responsabilidad civil á jueces ó magistrados.

Art. 226. En cualquiera de los expresados casos, antes de pasar al Consejo de Estado los expedientes de destitucion, se oirá instructivamente al interesado y al fiscal de la Audiencia respectiva, cuando se trate de jueces municipales y de partido, y al fiscal del Tribunal Supremo respecto á los magistrados.

### CAPÍTULO III.

#### *De la suspension de los jueces y magistrados.*

Art. 227. La suspension de los jueces y magistrados solo tendrá lugar por auto del tribunal competente, en los casos siguientes:

1.º Cuando se hubiere declarado haber lugar á proceder criminalmente contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

2.º Cuando por cualquier otro delito se hubiere dictado contra ellos auto de prision ó fianza equivalente.

3.º Cuando sin preceder prision ni fianza se pidiere contra ellos por el ministerio fiscal una pena aflictiva ó correccional.

4.º Cuando por las correcciones disciplinarias que se les hubiesen impuesto, apareciese que se hallaban en el caso 2.º del art. 224.

5.º Cuando se decretare disciplinariamente.

Art. 228. En los tres primeros casos del artículo precedente, el tribunal que conociere de la causa impondrá

la suspension en el mismo auto en que dictare la providencia que lo motive.

En el cuarto caso la impondrá la Sala de gobierno de la Audiencia respectiva á los jueces municipales, de instruccion ó de tribunales de partido, y la de gobierno del Tribunal Supremo á los magistrados. Para este efecto se constituirán en Salas de justicia y llamarán á sí los antecedentes de las correcciones impuestas.

En el quinto caso, la impondrá el Tribunal ó la Sala de gobierno á que corresponda conocer de la falta que diere lugar á la correccion disciplinaria, constituyéndose al efecto en Sala de justicia.

En los dos últimos casos, oirá por escrito ú oralmente al interesado, si compareciere, en virtud de la citacion que se le haga.

Art. 229. La suspension durará:

En los casos 1.º, 2.º y 3.º del art. 227, hasta que recaiga en la causa sentencia de absolucion libre ó haya trascurrido el tiempo necesario para que se convierta en libre la absolucion de la instancia, si tal hubiere sido el resultado de la causa.

En el caso 4.º, hasta que se hubiere declarado ó desestimado la absolucion.

En el caso 5.º, todo el tiempo por el que se hubiere impuesto la correccion disciplinaria.

Art. 230. Procederá la suspension disciplinaria de los jueces de instruccion, jueces de partido y magistrados de Audiencia, á excepcion de los de Madrid, hasta que sean trasladados á otras plazas:

1.º Cuando se casaren con mujer nacida dentro de la demarcacion, circunscripcion, partido ó distrito en que ejerzan sus funciones, á no haber sido accidental su nacimiento, ó con la que estuviere establecida en él, ó pose-

yere en el mismo bienes inmuebles, ó los poseyeren sus parientes en línea recta ascendente ó descendente, ó en el segundo grado de la colateral.

2.º Cuando por actos propios ó de su mujer hubieren adquirido en el mismo territorio bienes inmuebles, mas no cuándo les vinieren por sucesion ó por actos de un tercero.

Art. 231. La suspension en los casos del artículo anterior será decretada por las Salas de gobierno de las Audiencias cuando los comprendidos en él sean jueces de instruccion ó de partido, y por la Sala de gobierno del Tribunal Supremo cuando sean magistrados de Audiencia.

En ambos casos se constituirán al efecto en Salas de justicia, citarán á los interesados, y si comparecieren, los oirán por escrito ú oralmente.

Art. 232. En los casos 1.º, 2.º y 3.º del art. 227 recibirá el suspenso la mitad del sueldo.

En los casos 4.º y 5.º del mismo artículo, y en los casos del 230, no recibirá ninguno.

Art. 233. Cuando el juez ó el magistrado suspenso fuere absuelto libremente en los casos 1.º, 2.º y 3.º del art. 227, se le abonará la parte de sueldo que durante la suspension haya dejado de percibir.

Cuando lo hubiese sido solo de la instancia, no tendrá derecho á sueldo alguno.

## CAPITULO IV.

### *De la traslacion de los jueces y magistrados.*

Art. 234. Los jueces de nombramiento Real y los magistrados de Audiencia, á excepcion de los de Madrid, serán necesariamente trasladados:

1.º Cuando lleven ocho años de residencia en una misma poblacion.

2.º Cuando por actos ajenos á sus propios hechos, hubiere alguno de aquellos, ó su mujer, ó sus ascendientes ó descendientes, ó los de su mujer, ó sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, adquirido bienes inmuebles en la demarcacion á que se extienda la jurisdiccion del juzgado ó tribunal á que corresponda.

3.º Cuando por alguna circunstancia que no sea la expresada en el art. 230 se reunieren en un tribunal ó Audiencia dos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, en cuyo caso procurará el Gobierno que la traslacion se haga dentro de cuatro meses, destinando entre tanto á los que sean parientes á diferentes Salas de justicia.

4.º En los casos expresados en el art. 230, debiendo entonces hacerse la traslacion, siempre que fuere posible, dentro de un año desde que comenzó la suspension.

Art. 235. Los jueces de tribunales de partido y magistrados de Audiencia podrán ser trasladados:

1.º Por disidencias graves con los demás magistrados que compongan el tribunal á que correspondan.

2.º Cuando la Sala de gobierno de la Audiencia lo proponga con fundado motivo, respecto á los jueces de los tribunales de partido, ó la del Tribunal Supremo de Justicia respecto á los magistrados de Audiencia.

3.º Cuando circunstancias de otra clase, ó consideraciones de órden público muy calificadas exigieren la traslacion.

Art. 236. La traslacion de los jueces y magistrados que se fundare en alguna de las causas del art. 230 no podrá hacerse en ningun caso á plaza que tenga categoría

ó sueldo superior ó inferior al que desempeñase el trasladado.

Art. 237. La traslacion se hará siempre, prévia consulta del Consejo de Estado, en decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el de Gracia y Justicia.

## CAPITULO V.

### *De la jubilacion de los jueces y magistrados.*

Art. 238. Los jueces y magistrados que se inutilizaren física ó intelectualmente para el servicio, serán jubilados.

Art. 239. Podrán ser jubilados á su instancia, ó por resolucion del Gobierno:

Los jueces de instruccion que hayan cumplido 65 años.

Los jueces de partido y magistrados que hayan cumplido 70.

Art. 240. Cuando la jubilacion no sea á instancia del interesado, deberá ser oido el juez ó magistrado en el expediente gubernativo que al efecto se instruya, si se fundase en las causas expresadas en el art. 238.

Art. 241. Los jueces y magistrados tendrán por jubilacion la que les corresponda, atendidos sus años de servicio, en los mismos términos que los que tienen iguales sueldos en las demás carreras del Estado, computándoles el aumento de tiempo que por razon de carrera les corresponda.

Art. 242. Los jubilados por inutilidad procedente de lesiones recibidas en actos del servicio ó por consecuencia de ellas, disfrutarán:

El sueldo entero que hubiesen tenido como activos en

el caso de haber servido en la carrera judicial ó fiscal veinte años.

Cuatro quintas partes del mismo sueldo, cualesquiera que sean los años que hubieren servido.

Art. 243. Los jubilados por inutilidad antes de cumplir los 60 años, podrán ser rehabilitados y volver al servicio, acreditando haber desaparecido la causa que hubiese motivado la jubilacion, y despues de oido el Consejo de Estado.

Los rehabilitados seguirán percibiendo el sueldo que como jubilados les corresponda hasta que sean de nuevo colocados.

## CAPITULO VI.

*De los recursos por quebrantamiento de las disposiciones comprendidas en este título.*

Art. 244. Podrán los jueces y magistrados entablar recurso contencioso contra la administracion ante el Tribunal Supremo:

- 1.º Cuando fueren suspendidos por el Gobierno.
- 2.º Cuando fueren destituidos ó trasladados sin hacer expresion de la causa en que se funde la destitucion ó traslacion.
- 3.º Cuando la causa de la destitucion ó traslacion no sea de las que señala esta ley.
- 4.º Cuando fueren destituidos ó trasladados sin haberse observado para ello todas las formas que prescriben la Constitución de la Monarquía y esta ley.
- 5.º Cuando fueren jubilados sin alguna de las causas señaladas en esta ley, ó sin guardarse las formas que para la jubilacion se prescriben en ella.

## TITULO V.

## DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL.

## CAPITULO I.

*De la responsabilidad criminal de los jueces y magistrados.*

Art. 245. La responsabilidad criminal podrá exigirse á los jueces y magistrados cuando infringieren leyes relativas al ejercicio de sus funciones, en los casos expresamente previstos en el Código penal ó en otras leyes especiales.

Art. 246. El juicio de responsabilidad criminal contra jueces y magistrados solo podrá incoarse:

1.º En virtud de providencia de tribunal competente.

2.º A instancia del ministerio fiscal.

3.º A instancia de persona hábil para comparecer en juicio en uso del derecho que da el art. 98 de la Constitución.

Art. 247. Cuando el Tribunal Supremo, por razon de los pleitos ó causas de que conozca, ó de la inspeccion y vigilancia que sobre sus inferiores ejerza, ó por cualquier otro medio tuviere noticia de algun acto de jueces ó magistrados que pueda calificarse de delito, mandará formar causa para su averiguacion y comprobacion, oyendo previamente al ministerio fiscal.

Art. 248. Lo ordenado en el artículo anterior será extensivo á las Audiencias, en el caso de que sea de su competencia conocer del hecho que pueda calificarse de delito.

Si no fuere de su competencia, pondrán en conocimiento del tribunal que la tenga, los hechos, con los antecedentes que puedan ser útiles en los autos.

Art. 249. Los jueces y tribunales de partido se limitarán á poner en conocimiento del fiscal de la Audiencia á cuyo territorio pertenezcan, los hechos y los antecedentes que tengan, para que éste pueda ejercitar la accion criminal correspondiente, ó excitar á otro fiscal á que proceda si fuere de distinta jurisdiccion el delincuente.

La misma manifestacion harán los jueces y tribunales al presidente de la Audiencia, expresando que ya lo han puesto en conocimiento del fiscal.

Art. 250. El ministerio fiscal podrá promover procedimientos criminales:

1.º En cumplimiento de una Real orden.

2.º En virtud del deber que tiene de promover el descubrimiento y el castigo de los delitos.

Art. 251. La Real orden en que se excite al ministerio fiscal para incoar los procedimientos, expresará el hecho ó hechos que deban ser objeto de las actuaciones judiciales y será dirigida al fiscal del Tribunal Supremo.

Art. 252. El fiscal del Tribunal Supremo, recibida la Real orden, formulará la denuncia correspondiente cuando fueren magistrados aquellos contra quienes deba procederse.

Art. 253. Cuando la Real orden mande proceder contra un juez municipal, de instruccion ó de tribunal de partido, el fiscal del Tribunal Supremo la trasladará al de la Audiencia á que corresponda el conocimiento de la causa, con las instrucciones que estime convenientes.

Art. 254. Lo mismo hará el fiscal del Tribunal Supremo cuando tuviere conocimiento de algun hecho que



dé lugar á exigir la responsabilidad de algun juez de los comprendidos en el artículo anterior.

Art. 255. Los fiscales de las Audiencias, cuando reciban del fiscal del Tribunal Supremo la Real orden excitándolos á promover una causa contra jueces municipales, de instruccion ó de tribunales de partido, entablarán la denuncia que proceda con arreglo á las leyes.

Tambien harán la denuncia correspondiente los fiscales de las Audiencias cuando llegue á su conocimiento la perpetracion de algun delito cometido por un juez municipal de instruccion ó de tribunal de partido, sin necesitar excitacion de su superior gerárquico, ni del Gobierno.

Art. 256. En los casos en que los fiscales de las Audiencias tuvieren conocimiento de haber delinquido algun magistrado, lo pondrán en conocimiento del fiscal del Tribunal Supremo, el cual procederá á promover la causa si lo estimare procedente.

Art. 257. Los fiscales de los juzgados municipales y de los de tribunales de partido harán la misma denuncia prevenida en el artículo anterior á los de las Audiencias de que dependan, relativamente á los delitos que cometan los jueces y magistrados.

Art. 258. Para que pueda incoarse causa con el objeto de exigirse la responsabilidad criminal á jueces ó magistrados en el caso 3.º del art. 246, deberá preceder un ante-juicio con arreglo á los trámites que establezca la ley de Eujuiciamiento criminal y la declaracion de haber lugar á proceder contra ellos.

Esta declaracion no prejuzgará su criminalidad.

Art. 259. Del ante-juicio de que trata el artículo que precede, conocerá el mismo tribunal que en su caso deba conocer de la causa.

## CAPITULO II.

*De la responsabilidad civil de los jueces y magistrados.*

Art. 260. La responsabilidad civil de los jueces y magistrados estará limitada al resarcimiento de los daños y perjuicios estimables que causen á los particulares, corporaciones, ó al Estado, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia ó ignorancia inexcusables.

Art. 261. Se entenderá por perjuicios estimables para los efectos del artículo anterior, todos los que pueden ser apreciados en metálico al prudente arbitrio de los tribunales.

Art. 262. Se tendrán por inexcusables la negligencia ó la ignorancia cuando, aunque sin intencion, se hubiese dictado providencia manifestamente contraria á la ley, ó se hubiere faltado á alguu trámite ó solemnidad, mandada observar por la misma bajo pena de nulidad.

Art. 263. La responsabilidad civil solamente podrá exigirse á instancia de la parte perjudicada ó de sus causa-habientes, en juicio ordinario y ante el tribunal inmediatamente superior al que hubiere incurrido en ella.

Art. 264. Cuando se entablare contra los magistrados de una Sala del Tribunal Supremo, se exigirá ante todos los demás que compongan el Tribunal, constituidos en Sala de justicia, siendo presidente el que lo sea del Tribunal.

Art. 265. La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que sea firme la sentencia que hubiere recaído en la causa ó pleito en que se suponga causado el agravio.

Art. 266. No podrá entablar el juicio de responsabi-

lidad civil el que no haya reclamado oportunamente durante el juicio pudiendo hacerlo.

En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la sentencia firme.

## TITULO VI.

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

### CAPITULO I.

#### *De la extension de la jurisdiccion ordinaria.*

Art. 267. La jurisdiccion ordinaria será la competente para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio español, entre españoles, entre extranjeros, y entre españoles y extranjeros.

Art. 268. Exceptúanse únicamente de lo prescrito en el artículo anterior la prevencion de los juicios de testamentaría y abintestato de los militares y marinos muertos en campaña ó navegacion, para lo cual serán competentes los jefes y autoridades de guerra y de marina.

Esta prevencion se limitará á las diligencias necesarias para que se dé sepultura á los restos mortales del finado, á la formacion de inventario y depósito de sus bienes y á su entrega á los instituidos herederos ó á los que lo sean abintestato dentro del tercer grado civil, no habiendo quien lo contradiga.

Las diligencias se practicarán con acuerdo de asesor siempre que sea posible.

Cuando no se presente el heredero instituido, ó en su defecto el legítimo dentro del tercer grado, ó se suscitare oposicion á que se entregue la herencia á quien la recla-

mare, suspenderán las autoridades referidas su intervencion, pasando todo lo que hubieren practicado al juzgado á que con arreglo á esta ley corresponda el conocimiento de la testamentaría ó del abintestato.

Art. 269. Corresponderá á la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de las causas criminales, cualquiera que sea la penalidad señalada por las leyes, sin más excepciones que las que se establecen en esta ley.

## CAPITULO II.

### *De las atribuciones de los jueces municipales.*

Art. 270. Corresponderá á los jueces municipales, en materia civil:

1.º Intervenir en la celebracion de los actos de conciliacion.

2.º Ejercer la jurisdiccion voluntaria en los casos para que expresamente les autoricen las leyes.

3.º Conocer en primera instancia y en juicio verbal de las demandas cuyo objeto no exceda de 250 pesetas (1).

4.º Dictar á prevencion las primeras providencias en las testamentarías ó sucesiones intestadas, cuando proceda segun las leyes, en los pueblos donde no residiere tribunal de partido, hasta que éste tome conocimiento de ellas.

Se entenderá por primeras providencias para los efectos de este artículo, las que tengan por objeto poner en seguridad los bienes de las herencias y proveer á todo lo que no admita dilacion.

Cuando los jueces municipales intervengan en estas

---

(1) Antes de la publicacion de esta ley, los jueces de paz conocian en primera instancia y en juicio verbal de las demandas cuyo objeto no excedia de 600 rs.

actuaciones, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del tribunal del partido, al que remitirán las diligencias que hubieren practicado.

5.º Adoptar en los casos que requieran una determinación que sin daño de los interesados no pueda diferirse, providencias interinas, dando cuenta al tribunal de partido con remisión de los antecedentes.

6.º Desempeñar las comisiones auxiliatorias que los jueces de instruccion ó el tribunal del partido les confieran.

7.º Conocer de los demás juicios que se les encomienden por las leyes.

Art. 271. Corresponderá á los jueces municipales en materia penal:

1.º Conocer en primera instancia de los juicios de faltas (1).

2.º Instruir á prevención las primeras diligencias en las causas criminales.

3.º Desempeñar las comisiones auxiliatorias que los jueces de instruccion y el tribunal de partido les confieran.

### CAPITULO III.

#### *De las atribuciones de los jueces de instruccion.*

Art. 272. Corresponderá á los jueces de instruccion:

En lo civil, desempeñar las funciones que expresamente les atribuyan las leyes, y las comisiones que para la práctica de determinadas diligencias les confieran los respectivos tribunales de partido.

---

(1) Por la antigua legislación, los alcaldes eran los encargados del conocimiento en primera instancia de estos juicios y de la instruccion y desempeño á que se refieren los números 2.º y 3.º La reforma encarna en este punto un verdadero progreso que preocupaciones políticas habian impedido hasta ahora llevar á cabo.

En lo criminal, instruir las sumarias de las causas y las demás diligencias que les encarguen los jueces de partido.

En lo civil y criminal, desempeñar las comisiones auxiliaorias que por conducto del tribunal del partido les dirijan otros jueces ó tribunales.

## CAPITULO IV.

### *De las atribuciones de los tribunales de partido.*

Art. 273. Corresponderá á los tribunales de partido, en materia civil:

1.º Decidir las competencias que se susciten entre los jueces municipales, cuando correspondan ambos á su partido.

2.º Ejercer la jurisdiccion voluntaria con arreglo á las leyes.

3.º Conocer en primera instancia:

De los juicios, á excepcion de los verbales, y de aquellos que, con arreglo á esta ley, son de la competencia de las Audiencias ó del Tribunal Supremo.

De las recusaciones de los jueces de instruccion de su partido y de las que se interpongan contra un solo juez de su tribunal.

De las demandas de responsabilidad civil contra jueces municipales y de instruccion, correspondientes á su partido.

4.º Conocer en segunda instancia:

De los juicios verbales.

De las recusaciones de los jueces municipales contra los autos de primera instancia en que se haya denegado la recusacion.

5.º Desempeñar ó hacer desempeñar las comisiones que les confieran otros tribunales.

Art. 274. Corresponderá á los tribunales de partido en materia penal:

1.º Decidir las competencias que se susciten entre los jueces municipales, cuando correspondan ambos á su partido.

2.º Declarar á quién corresponde actuar cuando estén discordes dos jueces de instruccion correspondientes á su partido.

3.º Conocer en única instancia y en juicio oral y público de los delitos á que ley señale en su grado máximo una pena correccional, segun la escala general del artículo 26 del Código penal, sin más excepciones que las que establece esta ley al señalar las atribuciones de las Audiencias y del Tribunal Supremo.

4.º Conocer en primera instancia de las recusaciones de los jueces de instruccion correspondientes á su partido, y de las que se interpongan contra un solo juez de su tribunal.

5.º Conocer en segunda instancia:

De los juicios de faltas.

De las recusaciones de los jueces municipales contra los autos de primera instancia en que se haya denegado la recusacion.

6.º Desempeñar ó hacer desempeñar las comisiones auxilatorias que otros tribunales les confieran.

## CAPITULO V.

### *De las atribuciones de las Audiencias.*

Art. 275. Corresponderá á las Salas de lo civil de las Audiencias:

1.º Decidir las competencias que se susciten en materia civil entre los jueces municipales de su distrito que correspondan á diferentes partidos.

2.º Decidir las competencias en materia civil entre los tribunales de partido de su distrito.

3.º Conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan contra los jueces eclesiásticos, sufragáneos ó metropolitanos, en materia civil.

4.º Conocer en única instancia de los incidentes en asuntos civiles cuando versen sobre recusacion de sus magistrados y de los promovidos contra los jueces de los tribunales de partido cuando fuere más de uno el recusado.

5.º Conocer en primera instancia de los recursos de responsabilidad civil que se promuevan contra jueces municipales de instruccion ó de tribunales de partido.

6.º Conocer en segunda instancia :

De los juicios y de los negocios civiles de que hubieren conocido en primera los tribunales de partido de su territorio.

De los incidentes de recusacion de jueces de instruccion y de tribunales de partido, cuando fuese uno solo el recusado en materia civil.

7.º Auxiliar á la administracion de justicia en lo civil siempre que sean requeridos al efecto por otros jueces ó tribunales.

Art. 276. Corresponderá á las Salas de lo criminal de las Audiencias:

1.º Decidir las competencias en materia criminal que se susciten entre los tribunales de partido cuando los contendientes correspondan á su distrito.

2.º Conocer con intervencion del Jurado:

De las causas por delitos á que las leyes señalaren



penas superiores á la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, segun la escala general.

De las causas, cualquiera que sea la penalidad que las leyes impongan, por delitos:

De lesa Magestad.

De rebellion.

De sedicion.

3.º Conocer en única instancia y en juicio oral y público:

De las causas por delitos á que la ley en cualquiera de sus grados señale pena superior á la de presidio correccional y que no exceda de presidio mayor.

De las causas contra jueces municipales y los que en los juzgados de esta jurisdiccion ejercieren el ministerio fiscal, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

De las causas contra los jueces de instruccion, los de los tribunales de partido y sus fiscales, por cualquiera clase de delitos.

De las causas contra los jueces eclesiásticos, con excepcion de aquellos que deban ser juzgados por el Tribunal Supremo.

De las causas contra los funcionarios del órden administrativo que ejerzan autoridad, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, en los casos que no estén atribuidos por esta ley ó por otra al Tribunal Supremo.

4.º Conocer en única instancia de los incidentes de recusacion de sus magistrados y de los promovidos contra jueces de tribunales de partido cuando fuere más de uno el recusado en negocio criminal.

5.º Conocer en segunda instancia de los incidentes de recusacion de jueces de instruccion, y de jueces de tri-

bunales de partido, cuando fuere uno solo el recusado en materia criminal.

6.º Auxiliar á la administracion de justicia en lo criminal siempre que sea requerida al efecto por otros juzgados y tribunales.

Art. 277. Corresponde á las Audiencias en pleno constituidas en tribunales de justicia decidir de los incidentes de recusacion que se promovieren sobre la de sus presidentes y presidentes de Sala ó de más de dos magistrados de una Sala de justicia.

## CAPITULO VI.

### *De las atribuciones del Tribunal Supremo.*

Art. 278. La Sala primera del Tribunal Supremo conocerá de los negocios civiles que á continuacion se expresan:

1.º De las competencias que se susciten entre jueces y tribunales que no tengan otro superior comun.

2.º De los recursos de fuerza contra el Tribunal de la Rota de la Nunciatura.

3.º De la admision de los recursos de casacion.

4.º De los recursos de queja contra los autos de las Audiencias en que se deniegue la admision del recurso de casacion por quebrantamiento de forma, ó el testimonio de la sentencia en los interpuestos por violacion de ley ó de doctrina legal.

5.º De los recursos de casacion por quebrantamiento de forma, que hubiesen sido admitidos por la Audiencia competente.

6.º De los recursos de casacion por quebrantamiento de ley ó de doctrina legal.

7.º De las cuestiones de fondo, cuando se hubiese declarado haber lugar al recurso de casacion.

8.º Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, con arreglo á los tratados, y á las leyes vigentes.

Se exceptúa el caso en que, segun los tratados, hubiere de corresponder su conocimiento á otros tribunales.

Art. 279. Conocerá la Sala segunda del Tribunal Supremo de los negocios criminales que á continuacion se expresan:

1.º De las competencias suscitadas entre jueces y magistrados que no tengan superior comun.

2.º De los recursos de queja contra los autos que dicten los tribunales, denegando la admision del recurso de casacion por quebrantamiento de forma, ó el testimonio de la sentencia en los intentados por violacion de ley.

3.º De la admision del recurso de casacion por quebrantamiento de ley.

Art. 280. Conocerá la Sala tercera del Tribunal Supremo de los negocios criminales que á continuacion se expresan:

1.º De los recursos de casacion fundados en violacion de ley ó de doctrina legal admitidos por la Sala segunda.

2.º De los mismos recursos por quebrantamiento de forma admitidos por las Audiencias.

3.º De los juicios de residencia de los funcionarios de Ultramar que sean de la competencia del tribunal con arreglo á las leyes.

4.º De las apelaciones de las causas contra los alcaldes mayores de las provincias ultramarinas por los delitos que cometieren durante el ejercicio de sus funciones.

5.º De los recursos de fuerza contra el Tribunal de la Rota de la Nunciatura.

6.º De los recursos de revision.

Art. 281. Conocerá además la Sala tercera en juicio oral y público y única instancia:

1.º De las causas contra los Cardenales, Arzobispos, Obispos y auditores de la Rota.

2.º De las causas contra los consejeros de Estado, ministros del Tribunal de Cuentas, subsecretarios, directores, jefes de las oficinas generales del Estado, gobernadores de provincia, embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios.

Lo dispuesto en este número solo es aplicable á las causas por delitos cometidos mientras estuvieren en servicio activo.

3.º De las causas por delitos cometidos por magistrados de Audiencias ó del Tribunal Supremo, por los fiscales de las Audiencias y por los tenientes y abogados fiscales del Tribunal Supremo y de las Audiencias.

4.º De las causas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los auxiliares del Tribunal Supremo.

Art. 282. Conocerá la Sala cuarta del Tribunal Supremo, en única instancia y en revision, de todos los recursos que con arreglo á la ley entablen contenciosamente los que se sintieren agraviados en sus derechos por resoluciones de la Administracion general del Estado que causen estado.

Art. 283. Conocerá además cada una de las Salas de justicia del Tribunal Supremo en única instancia de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan, á excepcion de su presidente respectivo.

Art. 284. El Tribunal Supremo en pleno, constituido en Sala de justicia, conocerá en única instancia y en juicio oral y público de las causas:

- 1.º Contra los Príncipes de la familia Real.
- 2.º Contra los Ministros de la Corona por los delitos comunes cometidos en activo servicio cuando no deban ser juzgados por el Senado.
- 3.º Contra los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
- 4.º Contra el presidente ó presidentes de Sala ó el fiscal del Tribunal Supremo.
- 5.º Contra los magistrados de una Audiencia ó del Tribunal Supremo cuando sean juzgados todos, ó al menos la mayoría de los que constituyeren una Sala de justicia, por actos judiciales en que hayan tenido participación.

Art. 285. Conocerá además el Tribunal Supremo en pleno, constituido en Sala de justicia, de los incidentes de recusacion que versen sobre la del presidente del Tribunal, ó de los presidentes de Sala, ó de más de dos magistrados de una Sala de justicia.

## CAPITULO VII.

*De las competencias promovidas por la administracion contra las autoridades judiciales por exceso de atribuciones.*

Art. 286. Los gobernadores de provincia serán las únicas autoridades que podrán suscitar en nombre de la Administracion competencias positivas ó negativas á los juzgados y tribunales por exceso de atribuciones en el caso de que estos invadan las que correspondan al órden administrativo.

Art. 287. Las competencias positivas y negativas de atribuciones que la administracion suscitaré, se sustanciarán y decidirán en la forma actualmente establecida ó en la que se estableciere en adelante.

Art. 288. Los juzgados y tribunales no podrán suscitar cuestiones de competencia á la Administracion.

Art. 289. Las decisiones de competencia de que trata este capítulo se insertarán en la *Gaceta de Madrid* y en la *Coleccion legislativa*.

## CAPITULO VIII.

*De los recursos de queja promovidos por las autoridades judiciales contra las administrativas por exceso de atribuciones.*

Art. 290. Las autoridades judiciales sostendrán las atribuciones que la Constitucion y las leyes les confieran contra los excesos de las autoridades administrativas por medio de recursos de queja que elevarán al Gobierno.

Art. 291. Podrán promoverse los expedientes de recursos de queja:

- 1.º A instancia de parte agraviada.
- 2.º En virtud de excitacion del Ministerio fiscal.
- 3.º De oficio.

Art. 292. Solo las Audiencias y el Tribunal Supremo podrán recurrir en queja al Gobierno contra las invasiones de la Administracion en las atribuciones judiciales.

Art. 293. Los juzgados municipales, los de instruccion y los tribunales de partido, cuando sean invadidas sus atribuciones por autoridades del órden administrativo, lo pondrán en conocimiento de las Audiencias para que estas puedan formular el recurso de queja en los casos que proceda.

Al efecto los juzgados municipales y los de instruccion remitirán á los tribunales de partido los expedientes en que consten los hechos relativos al exceso de atribuciones cometido por los agentes del órden administrativo, y los tribunales de partido los pasarán á la Audiencia respectiva.

Cuando los expedientes nacieren en los tribunales de partido, serán remitidos directamente á la Audiencia.

Art. 294. Las Audiencias, recibidos que sean los expedientes á que se refiere el artículo que antecede, ó en vista de los que ante ella se hayan comenzado ó instruido, y el Tribunal Supremo en este último caso, los pasarán al ministerio fiscal para que con toda preferencia emita su dictámen.

Art. 295. En vista del dictámen fiscal y completando el expediente, si fuere necesario, resolverán las Audiencias ó el Tribunal Supremo si debe ó no elevarse el recurso de queja.

Cuando acordaren que debe elevarse, lo harán en una exposicion fundada, á no ser que aceptaren el dictámen fiscal sin adiccion alguna.

Art. 296. Recibido por el Gobierno el expediente, oirá á la autoridad administrativa respecto al exceso de atribuciones que haya dado lugar al recurso. Esta contestará dentro del término que el Gobierno le señale, que nunca excederá de diez dias; y con su contestacion remitirá todos los antecedentes al Consejo de Estado, el cual informará en pleno, dando preferencia en el despacho á estos recursos.

Art. 297. El Gobierno, en vista del informe del Consejo de Estado, resolverá lo que proceda, y la resolucion se insertará en la *Gaceta de Madrid* y en la *Coleccion legislativa*.

## TÍTULO VII.

DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

## CAPÍTULO I.

*Disposiciones comunes á los negocios civiles y criminales.*

Art. 298. Para que los jueces y tribunales tengan competencia se requiere:

1.º Que el conocimiento del pleito, de la causa ó de los actos en que intervengan, estén atribuidos á la autoridad que ejerzan con arreglo á lo dispuesto en el título VI de esta ley.

2.º Que les corresponda el conocimiento del pleito, causa ó accion, con preferencia á los demás jueces ó tribunales de su mismo grado, segun lo que en el presente título se prescribe.

Art. 299. La jurisdiccion civil podrá prorogarse á juez ó tribunal, que por razon de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la gerarquía que tenga en el órden judicial, pueda conocer del negocio que ante él se proponga.

La jurisdiccion criminal es siempre improrogable.

Art. 300. Los jueces municipales del domicilio, y en su defecto los de la residencia del demandado, serán los únicos competentes para autorizar los actos de conciliacion que ante ellos se promuevan, en los casos que con arreglo á derecho corresponda celebrarlos.

En las poblaciones en que hubiere más de un juez municipal, el primero por cuya órden se haga la citacion, será el competente.



Art. 301. Promoviéndose cuestion de competencia ó de recusacion del juez municipal ante quien se provoque el acto de conciliacion, se tendrá por intentada la comparecencia, y con certificacion en que conste, podrá el actor entablar la demanda ó querella que corresponda.

Art. 302. Los jueces y tribunales que tengan competencia para conocer de un pleito ó de una causa determinada, la tendrán tambien para las excepciones que en ella se propongan, para la reconvencion en los casos en que proceda, para todas sus incidencias, para llevar á efecto las providencias de tramitacion y para la ejecucion de la sentencia.

## CAPITULO II.

### *De la competencia en lo civil.*

Art. 303. El juzgado ó tribunal á que los litigantes se sometieren expresa ó tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos á que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumision se haga en quien tenga jurisdiccion para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado.

Art. 304. Se entenderá por sumision expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente á su fuero propio y designando con toda precision aquel á que se sometieren.

Art. 305. Se entenderá hecha la sumision tácita:

1.º Por el demandante en el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda.

2.º Por el demandado en el hecho de hacer, despues de personado en juicio, cualquiera gestion que no sea la de proponer la declinatoria.

Art. 306. La sumision expresa ó tácita á un juzgado

municipal en primera instancia, se considerará hecha para la segunda al tribunal del partido á que el juzgado municipal corresponda.

La que se hiciere á un tribunal de partido en la primera instancia se entenderá hecha para la segunda á la Audiencia á que el partido corresponda.

Art. 307. En ningun caso podrá hacerse sumision expresa ó tácita á Audiencia á cuyo distrito no pertenezca el tribunal de partido que haya conocido en primera instancia.

Art. 308. Fuera de los casos de sumision expresa ó tácita de que tratan los cuatro artículos anteriores, se seguirán las reglas siguientes de competencia en los negocios civiles:

1.<sup>a</sup> En los juicios en que se ejerciten acciones personales, será juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligacion, y á falta de éste, á eleccion del demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque incidentalmente, pudiere hacerse el emplazamiento.

Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos ó más personas que residan en pueblos diferentes y estén obligadas mancomunada ó solidariamente, no habiendo lugar designado para el cumplimiento de la obligacion, será juez competente el del domicilio de cualquiera de los demandados, á eleccion del demandante.

2.<sup>a</sup> En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles ó semovientes, será juez competente el del lugar en que se hallen ó el del domicilio del demandado, á eleccion del demandante.

3.<sup>a</sup> En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, será juez competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa.

Cuando la accion real se ejercite sobre varias cosas inmuebles sitas en diferentes jurisdicciones, pero que se funden en un solo título singular de adquisicion, ó for-  
men una sola heredad ó coto, será fuero competente el de  
cualquiera de los lugares en cuya jurisdiccion estén sitios  
los bienes á eleccion del demandante.

4.<sup>a</sup> En los juicios en que se ejerciten acciones mix-  
tas, será fuero competente el del lugar en que se hallen  
las cosas ó el del domicilio del demandado, á eleccion del  
demandante.

Art. 309. No obstante las reglas establecidas en el  
artículo precedente, se observarán en los negocios y cau-  
sas civiles que á continuacion se expresan, las siguientes:

1.<sup>a</sup> En las demandas sobre estado civil, será fuero  
competente el del domicilio del demandado.

2.<sup>a</sup> En los depósitos de personas, será juez compe-  
tente el que conozca del pleito ó causa que los motive.

Cuando no hubiere autos anteriores, será fuero com-  
petente el del domicilio de la persona que deba ser depo-  
sitada.

Cuando circunstancias particulares lo exigieren, po-  
drá decretar interina y provisionalmente el depósito el juez  
municipal del lugar en que se encontrare la persona que  
deba ser depositada, remitiendo las diligencias al del do-  
micilio y poniendo á su disposicion la persona depositada.

3.<sup>a</sup> En las cuestiones de alimentos, cuando éstos se  
pidan incidentalmente en los casos de depósitos de perso-  
nas ó en un juicio, será competente el que conozca de los  
autos.

Cuando los alimentos sean el objeto principal de un  
juicio, será fuero competente el del lugar en que tenga  
su domicilio aquel á quien se pidan.

4.<sup>a</sup> En el nombramiento y discernimiento de los car-

gos de tutores ó curadores para los bienes y excusas de estos cargos será fuero competente el del domicilio del padre ó de la madre cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su defecto, el juez del domicilio del menor ó el del incapacitado ó el de cualquier lugar en que tuviese bienes inmuebles.

5.<sup>a</sup> En el nombramiento y discernimiento de los cargos de curadores para pleitos, será competente el juez del lugar en que los menores ó incapacitados tengan su domicilio ó el del lugar en que necesitaren comparecer en juicio.

6.<sup>a</sup> En las demandas en que se ejercitaren acciones relativas á la gestion de la tutela ó curaduría, en las excusas de estos cargos despues de haber empezado á ejercerlos y en las demandas de remocion de los guardadores como sospechosos, será fuero competente el del lugar en que se hubiese administrado la guardaduría en su parte principal ó el del domicilio del menor.

7.<sup>a</sup> En las autorizaciones para la venta de bienes de menores ó incapacitados, será fuero competente el del lugar en que los bienes se administraren ó el del domicilio de aquellos á quienes pertenecieren.

8.<sup>a</sup> En las informaciones para dispensas de ley, y en las habilitaciones para comparecer en juicio, cuando por derecho se requieran, será fuero competente el del domicilio del que las solicitare.

9.<sup>a</sup> En las informaciones para perpétua memoria será fuero competente el del lugar ó lugares en que hayan ocurrido los hechos, ó aquel en que estén, aunque sea accidentalmente, los testigos que hayan de declarar.

Cuando estas informaciones se refieran al estado actual de cosas inmuebles, será fuero competente el del lugar en que estuvieren sitas.

10.<sup>a</sup> En las demandas deducidas en juicio sobre obligaciones de garantía ó complemento de otras anteriores, será fuero competente el del lugar en que se conozca de la obligacion principal sobre que recayeren.

11.<sup>a</sup> En las demandas de reconvenccion, será fuero competente el del lugar en que se hubiere interpuesto la que hubiese promovido el litigio.

No es aplicable esta regla cuando el valor de lo pedido en la reconvenccion excediere de la cuantía á que alcancen las atribuciones del juez que entendiere en la primera demanda, en cuyo caso reservará éste al actor de la reconvenccion su derecho para que ejercite su accion donde corresponda.

12.<sup>a</sup> En las demandas en que se ejerciten las acciones de desahucio ó de retracto, será fuero competente el del lugar en que estuviese sita la cosa que dé ocasion al juicio, ó el del domicilio del demandado, á eleccion del demandante.

13.<sup>a</sup> En el interdicto de adquirir, será fuero competente el del lugar en que estén sitos los bienes, ó aquel en que radique la testarmentaría ó abintestato, ó el del domicilio del finado.

14.<sup>a</sup> En los interdictos de retener y de recobrar la posesion, en los de obra nueva y obra vieja, y en los deslindes, será fuero competente el del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto ó deslinde.

15.<sup>a</sup> En las diligencias para elevar á escritura pública los testamentos ó codicilos otorgados verbalmente, ó los escritos sin intervencion de notario público, y en las que hayan de practicarse para la apertura de los testamentos ó codicilos cerrados, será fuero competente el del lugar en que se hubiesen otorgado respectivamente los escritos sin intervencion de notario, los testamentos ó las carpetas.

16.<sup>a</sup> En los juicios de testamentaria ó abintestato será competente el fuero del lugar en que hubiere tenido su último domicilio el finado.

Si éste hubiere tenido su domicilio en país extranjero, será fuero competente el del lugar en que hubiese tenido el finado su último domicilio en España, ó el del lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes.

No obstará esto á que los jueces municipales del lugar donde alguno falleciere, adopten las medidas necesarias para el enterramiento y exequias, en su caso, del difunto, y á que los mismos jueces y los tribunales de partido en cuyas jurisdicciones tuviere bienes, tomen las medidas necesarias para asegurarlos, y poner en buena guarda los libros y papeles, remitiendo las diligencias practicadas á los jueces á quienes corresponda conocer de la testamentaria ó abintestato, y dejándoles expedita su jurisdiccion.

17.<sup>a</sup> En las demandas sobre herencias, su distribucion, cumplimiento de legados, fideicomisos universales y singulares, reclamaciones de acreedores hereditarios y testamentarios, mientras estuvieren pendientes los autos de testamentaria ó abintestato, será fuero competente el del lugar en que se conociere de estos juicios.

18.<sup>a</sup> En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentacion del deudor en este estado, será fuero competente el del domicilio del mismo.

19.<sup>a</sup> En los concursos ó quiebras promovidos por los acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo en las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor si éste ó el mayor número de acreedores lo reclamaren. En otro caso, lo será aquel en que antes se decretare el concurso ó la quiebra.

20.<sup>a</sup> En la acumulacion de autos correspondientes á

diferentes juzgados ó tribunales, cuando proceda segun las leyes, será competente el que conociere de los más antiguos.

Exceptúanse los autos de testamentaria, abintestato, concurso de acreedores y quiebras, de los cuales la acumulacion se hará siempre á ellos.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es aplicable á los autos que estuvieren en diferentes instancias, y en los conclusos para sentencia, los cuales no serán acumulables.

21.<sup>a</sup> En los litigios acerca de recusacion de árbitros y de amigables componedores, cuando ellos no accediesen á la recusacion, será competente el fuero del lugar en que resida el recusado.

22.<sup>a</sup> En los recursos de apelacion contra los árbitros, en los casos en que corresponda segun derecho, será competente la Audiencia del distrito á que corresponda el pueblo en que se haya fallado el pleito.

23.<sup>a</sup> En los embargos preventivos, será competente el fuero del partido en que estuvieren los bienes que se hubieren de embargar, y á prevencion en los casos de urgencia, el juez municipal del pueblo en que se hallasen.

Art. 310. El domicilio de las mujeres casadas que no estén separadas legalmente de sus maridos será el que estos tengan.

El domicilio de los hijos constituidos en potestad, el de sus padres.

El de los menores ó incapacitados sujetos á tutela ó curaduría, el de sus guardadores.

Art. 311. El domicilio legal de los comerciantes en todo lo que concierne á actos ó contratos mercantiles y á sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales.

Los que tuvieren establecimientos mercantiles á su cargo en diferentes partidos judiciales, podrán ser demandados por acciones personales en aquel en que tuvieren el principal establecimiento, ó en el que se hubiesen obligado, á eleccion del demandante.

Respecto á los concursos de acreedores y á las quiebras, se estará á lo prevenido en las reglas 18 y 19 del art. 309.

En todo lo que no se refiera á operaciones mercantiles, estarán los comerciantes sujetos á lo dispuesto en el art. 308.

Art. 312. El domicilio de las compañías civiles y mercantiles será el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de sociedad, ó en los estatutos por que se rijan.

No constando esta circunstancia, se estará á lo establecido respecto á los comerciantes en el párrafo segundo del artículo anterior.

Exceptúanse de lo establecido en los párrafos anteriores las compañías en participacion, en lo que se refiera á los litigios que puedan promoverse entre los asociados, respecto á los cuales se estará á lo que prescriben las disposiciones generales de esta ley.

Art. 313. El domicilio legal de los empleados será el pueblo en que sirvieren su destino. Cuando por razon de él ambularan continuamente, se considerarán domiciliados en el pueblo en que vivieren más frecuentemente.

Art. 314. El domicilio legal de los militares en servicio activo será el del pueblo en que se hallare el cuerpo á que pertenezcan al hacerse el emplazamiento.

Art. 315. En los casos en que esté señalado el domicilio para surtir fuero competente, si el que ha de ser demandado no lo tuviese en algun pueblo de la Península,



islas Baleares ó Canarias, será fuero competente el de su residencia. Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija, podrán ser demandados en el lugar en que se hallen, ó en el de su última residencia, á eleccion del demandado.

Art. 316. El valor de las demandas para determinar por él la competencia de jurisdiccion, se calculará por las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> En los juicios petitorios sobre el derecho de exigir prestaciones anuales y perpétuas, se calculará el valor por el de una anualidad multiplicada por 25.

2.<sup>a</sup> Si la prestacion fuere vitalicia, se multiplicará por 10 la anualidad.

3.<sup>a</sup> En las obligaciones pagaderas á plazos diversos, se calculará el valor por el de toda la obligacion cuando el juicio verse sobre la validez del principio mismo de que proceda la obligacion en su totalidad.

4.<sup>a</sup> Cuando varios créditos pertenecieren á diversos interesados y procediere de un mismo título de obligacion contra un deudor comun la demanda que cada acreedor ó dos ó más acreedores entablaren por separado para que se les pague lo que les corresponda, se calculará como valor de la demanda la cantidad á que ascienda la reclamacion.

5.<sup>a</sup> En las demandas sobre servidumbres, se calculará su cuantía por el precio de adquisicion de las mismas servidumbres, si constare.

6.<sup>a</sup> En las acciones reales ó mixtas se calculará el valor de la cosa inmueble ó litigiosa por el que conste en la escritura más moderna de su enajenacion.

Cuando por medio de la accion real ó mixta se demanden con los bienes las rentas que hayan producido, se acumularán estas al valor de la demanda.

7.<sup>a</sup> En las demandas que comprendieren muchos cré-

ditos contra el mismo deudor, se calculará su cuantía por el de todos los créditos reunidos.

8.<sup>a</sup> En los pleitos sobre pago de créditos con intereses ó frutos, si en la demanda se pidieren con el principal los vencidos y no pagados, se hará la computacion sumando entre sí el uno y los otros.

Se tendrá por cierta y líquida la cuantía de los frutos cuando el actor expresare en la demanda su importe anual y el tiempo que haya trascurrido sin pagarse.

Si el importe de los intereses ó frutos no fuere cierto y líquido, se prescindirá de él no tomando en cuenta más que el principal.

9.<sup>a</sup> La disposicion de la regla precedente es aplicable al caso en que se pida en la demanda con el principal, los perjuicios.

10.<sup>a</sup> Para la fijacion del valor de la demanda no se tomarán en cuenta los frutos ó intereses por correr, sino los corridos.

11.<sup>a</sup> Cuando por los datos expresados en las reglas anteriores no pudiese determinarse el valor de la demanda, se estimará por el que le dieren las partes de conformidad, y estando discordes, por el que estime un perito nombrado de comun acuerdo por las mismas.

Si no se pusieren de acuerdo sobre la eleccion de un solo perito, nombrará cada parte el que estime, y el juez un tercero, para que juntos aquellos hagan la valoracion, dirimiendo el tercero la discordia, si la hubiere.

Art. 317. Cuando no pueda determinarse segun las reglas del artículo anterior la cuantía de la demanda, no caerá bajo la competencia de la jurisdiccion de los jueces y tribunales que la tengan limitada por razon de cantidad.

Art. 318. Lo establecido en el artículo 316 no se

aplicará á las demandas relativas á derechos políticos ú honoríficos, exenciones y privilegios personales, filiacion, paternidad, maternidad, adopcion, tutela, curaduría, interdicion y cualquiera otra que versare sobre el estado civil y condicion de las personas.

Art. 319. Lo establecido en este capítulo comprenderá á los extranjeros que acudieren á los juzgados y tribunales españoles promoviendo actos de jurisdiccion voluntaria, interviniendo en ellos, ó compareciendo en juicio como demandantes ó como demandados, contra españoles ó contra otros extranjeros, cuando proceda que conozca la jurisdiccion española con arreglo á las leyes del Reino ó á los tratados con otras potencias.

Art. 320. Se estará á lo que establezcan las leyes especiales que en determinados negocios fijen otras reglas de competencias.

### CAPITULO III.

#### *De la competencia en lo criminal.*

#### Seccion primera.

De la competencia de la jurisdiccion ordinaria en lo criminal.

Art. 321. Con arreglo á lo establecido en el art. 269 de esta ley, la jurisdiccion ordinaria conocerá de todas las causas criminales, á excepcion de las que estuvieren reservadas al Senado y de las que expresamente se atribuyen en este título á las jurisdicciones de Guerra y de Marina.

Art. 322. El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan culpables personas sujetas á la jurisdiccion ordinaria y otras aforadas, corresponderá exclusivamente á la ordinaria, la cual será competente para juz-

gar á todas aquellas en los casos en que el castigo no esté reservado especialmente por la ley al conocimiento de otra jurisdiccion.

Art. 323. La jurisdiccion ordinaria será competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados.

Esta competencia se limitará á instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales, la jurisdiccion ordinaria remitirá las actuaciones al juez que debiere conocer de la causa con arreglo á las leyes, y pondrá á su disposicion los detenidos y los efectos ocupados.

La jurisdiccion ordinaria cesará en las primeras diligencias tan luego como conste que la especial competente forma causa sobre el mismo delito.

Art. 324. Considéranse como primeras diligencias las de dar proteccion á los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca á su comprobacion y á la identificacion del delincuente, y detener, en su caso, á los reos presuntos.

Art. 325. Fuera de los casos reservados al Senado, y aquellos en que expresa y limitativamente atribuye esta ley el conocimiento de determinadas causas al Tribunal Supremo, á las Audiencias y á las jurisdicciones de Guerra y Marina, serán competentes para la instruccion de las causas y castigo de las faltas y de los delitos, los jueces y tribunales de la demarcacion en que se hayan cometido, segun su respectiva competencia.

Art. 326. Cuando no conste el lugar en que se cometió una falta ó un delito, serán jueces y tribunales competentes para instruir y conocer de la causa:

1.º El de la demarcacion en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.

2.º El de la demarcacion en que el reo presunto haya sido aprehendido.

3.º El de la residencia del reo presunto.

4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

Si se suscitase competencia entre estos jueces ó tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en el párrafo que precede.

Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, se remitirán las actuaciones al juzgado ó tribunal de aquella demarcacion, poniendo á su disposicion á los detenidos y efectos ocupados.

Art. 327. El juez ó tribunal competente para la instruccion ó conocimiento de una causa, lo será tambien para conocer de la complicidad en el delito que se persiga, de su encubrimiento y de las incidencias de aquella.

Art. 328. Un solo juez ó tribunal de los que sean competentes, conocerá de los delitos que tengan conexion entre sí.

Art. 329. La jurisdiccion ordinaria será la competente, con exclusion de toda otra, para juzgar á los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto á ella, aun cuando los demás sean aforados.

Art. 330. Lo establecido en el artículo anterior se entiende en el caso de que sea competente la jurisdiccion ordinaria para juzgar de los delitos conexos.

Si alguno de estos fuere por su índole y naturaleza de la competencia exclusiva de otra jurisdiccion, esta deberá conocer de la causa que se forme sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se instruya sobre los demás.

Art. 331. Considéranse delitos conexos:

1.º Los cometidos simultáneamente por dos ó más personas reunidas.

2.º Los cometidos por dos ó más personas en distintos lugares ó tiempos, si hubiese precedido concierto para ello.

3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros ó facilitar su ejecucion.

4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

Art. 332. Son jueces y tribunales competentes, por su órden, para conocer de las causas por delitos conexos:

1.º El del territorio en que se haya cometido el delito á que esté señalada pena mayor.

2.º El que primero comenzare la causa en el caso de que á los delitos esté señalada igual pena.

3.º El que la Sala de gobierno de la Audiencia, atendiendo solo á la mejor y más pronta administracion de justicia, designe en sus casos respectivos cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, ó no conste cuál comenzó primero, si los juzgados ó tribunales correspondieren al territorio de la misma Audiencia.

4.º El que la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, teniendo tambien en cuenta solo la mejor y más pronta administracion de justicia, designe en el caso del párrafo anterior, si las causas hubieren empezado en juzgados ó tribunales que correspondan á diferentes Audiencias.

Art. 333. Los extranjeros que cometieren faltas ó delinquieren en España serán juzgados por los que tengan competencia para ello por razon de las personas ó del territorio.

Art. 334. Exceptúanse de lo ordenado en el artículo anterior los Príncipes de las familias reinantes, los presidentes ó jefes de otros Estados, los embajadores, los ministros plenipotenciarios, los ministros residentes, los encargados de negocios y los extranjeros empleados de

planta en las legaciones, los cuales, cuando delinquieren, serán puestos á disposicion de sus Gobiernos respectivos.

Art. 335. El conocimiento de los delitos comenzados á cometer en España, y consumados ó frustrados en países extranjeros, corresponderá á los tribunales y jueces españoles, en el caso de que los actos perpetrados en España constituyan por sí delito, y solo respecto á éstos.

Art. 336. Serán juzgados por los jueces y tribunales del Reino, segun el órden prescrito en el art. 326, los españoles ó extranjeros que fuera del territorio de la Nacion hubiesen cometido alguno de los delitos siguientes:

Contra la seguridad exterior del Estado.

Lesá Magestad.

Rebellion.

Falsificacion de la firma, de la estampilla Real ó del Regente.

Falsificacion de la firma de los Ministros.

Falsificacion de otros sellos públicos.

Falsificaciones que perjudiquen directamente al crédito ó intereses del Estado, y la introduccion ó expendicion de lo falsificado.

Falsificacion de billetes de Banco, cuya emision esté autorizada por la ley, y la introduccion ó expendicion de los falsificados.

Los cometidos en el ejercicio de sus funciones por empleados públicos residentes en territorio extranjero.

Art. 337. Si los reos de los delitos comprendidos en el artículo anterior hubiesen sido absueltos ó penados en el extranjero, siempre que en este último caso se hubiese cumplido la condena, no se abrirá de nuevo la causa.

Lo mismo sucederá si hubiesen sido indultados, á excepcion de los delitos de traicion y lesa Magestad.

Si hubieren cumplido parte de la pena, se tendrá en

cuenta para rebajar proporcionalmente la que en otro caso les correspondería.

Art. 338. Lo dispuesto en los dos artículos que anteceden es aplicable á los extranjeros que hubiesen cometido alguno de los delitos comprendidos en ellos, cuando fueren aprehendidos en el territorio español ó se obtuviera la extradición.

Art. 339. El español que cometiere un delito en país extranjero contra otro español, será juzgado en España por los juzgados ó tribunales designados en el art. 326 y por el mismo orden con que se designan si concurrieren las circunstancias siguientes:

- 1.<sup>a</sup> Que se querelle el ofendido ó cualquiera de las personas que puedan hacerlo con arreglo á las leyes.
- 2.<sup>a</sup> Que el delincuente se halle en territorio español.
- 3.<sup>a</sup> Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado ó penado en el extranjero, y en este último caso haya cumplido su condena.

Si hubiere cumplido parte de la pena, se observará lo que para igual caso previene el art. 337.

Art. 340. El español que cometiere en país extranjero un delito de los que el Código penal español califica de graves, contra un extranjero, será juzgado en España, si concurren las tres circunstancias señaladas en el artículo que precede, y por los mismos jueces que en él se designan.

Art. 341. No podrá procederse criminalmente en el caso del artículo anterior, cuando el hecho de que se trate no sea delito en el país en que se perpetró, aunque lo sea según las leyes de España.

Art. 342. Los españoles que delincan en país extranjero y sean entregados á los cónsules de España, serán juzgados con sujeción á esta ley en cuanto lo permitan las circunstancias locales.



Instruirá el proceso en primera instancia el cónsul ó el que le reemplace, si no fuere letrado con el auxilio de un asesor, y en su defecto con el de dos adjuntos elegidos entre los súbditos españoles, los cuales serán nombrados por él al principio de cada año y actuarán en todas las causas pendientes ó incoadas durante el mismo.

Terminada la instruccion de la causa, y ratificadas á presencia del reo ó reos presuntos las diligencias practicadas, se remitirán los autos al tribunal español que, atendida la naturaleza del delito, tenga competencia para conocer de él, y sea el más próximo al consulado en que se haya seguido la causa, á no ser que por fuero personal debiera ser juzgado el reo por distinta jurisdiccion que la ordinaria si hubiere delinquido en España, en cuyo caso lo será por el tribunal superior correspondiente al fuero que disfrute.

Art. 343. La jurisdiccion ordinaria es competente para conocer de las faltas, sin más excepciones que las que señala esta ley respecto á los militares y marinos.

Art. 344. Los jueces del lugar en que se cometa una falta son los únicos competentes para juzgarla.

Art. 345. En las faltas cometidas en país extranjero en que sean entregados los que las cometan á los cónsules españoles, juzgará en primera instancia el vicecónsul si lo hubiere, y en apelacion el cónsul con su asesor, si no fuere letrado; á falta de asesor, con los adjuntos de que habla el art. 342. Si no hubiese vicecónsul, hará sus veces un súbdito español, elegido del mismo modo que los adjuntos, al principio de cada año.

Estos juicios se seguirán en conformidad á las leyes del Reino.

Art. 346. Lo prescrito en esta seccion respecto á delitos cometidos en el extranjero, se entenderá sin perjui-

cio de los tratados vigentes ó que en adelante se celebren con potencias extranjeras.

## Seccion segunda.

De la competencia de las jurisdicciones especiales en lo criminal.

Art. 347. La jurisdiccion de Guerra y la de Marina serán las únicas competentes para conocer respectivamente, con arreglo á las ordenanzas militares del ejército y de la armada, de las causas criminales por delitos cometidos por militares y marinos de todas clases, en servicio activo del ejército ó de la armada.

Art. 348. Bajo la denominacion de servicio militar activo, para los efectos de esta ley, se comprende el que presta el ejército permanente y la Marina, el que se hace por los cuerpos de Guardia civil, los resguardos de Hacienda y cualquiera fuerza permanente organizada militarmente que dependa en este concepto del Ministerio de la Guerra ó Marina, y esté mandada por jefes militares y sujeta á las ordenanzas del ejército ó de la armada en lo que se refiere al cumplimiento de sus deberes militares, aunque tenga por objeto principal auxiliar á la administracion y al poder judicial.

Sin embargo, los individuos de los cuerpos que se hallaren en este último caso no serán responsables á la jurisdiccion militar en lo que se refiere á los delitos ó faltas que cometiesen como agentes de las autoridades administrativas ó judiciales, respecto á los cuales serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria.

Art. 349. No están comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior, y serán por lo tanto juzgados por la jurisdiccion ordinaria:

1.º Los retirados del servicio, sus mujeres, hijos y criados.

2.º Las mujeres, hijos y criados de los que estén en servicio activo.

3.º La gente de mar por delitos comunes cometidos en tierra.

4.º Los operarios de arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas y parques de marina, artillería é ingenieros, por delitos cometidos fuera de sus respectivos establecimientos.

5.º Los reos de delitos contra la seguridad interior del Estado y el órden público, cuando la rebelion ó sedicion no tenga carácter militar.

6.º Los reos de atentado y desacato contra las autoridades políticas, administrativas ó judiciales.

7.º Los reos por los delitos de tumulto, desórdenes públicos y por pertenecer á asociaciones ilícitas.

8.º Los reos de falsificacion de sellos, marcas, monedas y documentos públicos.

9.º Los reos de robo en cuadrilla.

10.º Los reos de adulterio, estupro ó de violacion.

11.º Los reos militares por injuria ó calumnia á personas que no sean militares.

12.º Los reos por defraudacion ó contrabando y delitos conexos, cometidos en tierra, á no haberse hecho resistencia armada á la fuerza pública.

13.º Los que hubieren delinquido antes de pertenecer á la milicia, ó estando dados de baja ó desempeñando algun empleo ó cargo público que no sea militar, ó habiendo desertado.

14.º Los que incurrieren en faltas castigadas en el libro III del Código penal, excepto aquellas á que las ordenanzas, reglamentos y bandos militares del ejército y armada señalen pena mayor, cuando fueren cometidas por

militares, las cuales serán de la competencia de la jurisdicción de Guerra ó de Marina.

Art. 350. Las jurisdicciones de Guerra ó de Marina en sus casos respectivos, serán las únicas competentes para conocer de los delitos siguientes:

1.º De las causas criminales por delitos cometidos por militares ó marinos de todas clases, en servicio activo, á excepcion de los expresados en el artículo anterior.

2.º De los delitos de traicion que tengan por objeto la entrega de una escuadra, plaza, puerto militar, buque del Estado, arsenal ó almacenes de pertrechos navales ó de municiones de boca ó guerra.

3.º De los delitos de seduccion de tropa de tierra ó de mar, ya se refieran á militares ó marineros, españoles ó extranjeros, que se hallen al servicio de España, para que deserten de sus banderas ó buques en tiempo de guerra, ó se pasen al enemigo.

4.º De los delitos de espionaje, insulto á centinelas, á salvaguardias y tropa armada de tierra ó de mar, y de atentado ó desacato á la autoridad militar.

5.º De los delitos de seduccion y auxilio á la desercion en tiempos de paz.

6.º De los delitos de robo de armas, pertrechos, municiones de boca y guerra, ó efectos pertenecientes á la Hacienda militar ó de marina en los almacenes, cuarteles, establecimientos militares, arsenales y buques del Estado y de incendio cometido en los mismos parages.

7.º De los delitos cometidos en plazas sitiadas por el enemigo, que tiendan á alterar el órden público, ó á comprometer la seguridad de las mismas.

8.º De los delitos que se cometan en los arsenales del Estado contra el régimen interior, conservacion y seguridad de estos establecimientos.

9.º De los delitos y faltas comprendidos en los bandos que con arreglo á ordenanza pueden dictar los generales en jefe de los ejércitos y los almirantes de las escuadras.

10.º De los delitos cometidos por los prisioneros de guerra y personas de cualquier clase, condicion y sexo que sigan al ejército en campaña, ó que conduzcan los buques del Estado.

11.º De los delitos de los asentistas del ejército ó de la marina que tengan relacion con sus asientos y contratas.

12.º De las causas por delitos de cualquiera clase cometidos á bordo de las embarcaciones, así nacionales como extranjeras, cuando no sean de guerra, y se cometan los delitos en puerto, bahías, radas ó cualquier otro punto de la zona marítima del Reino, ó por piratas apresados en alta mar, cualquiera que sea el país á que pertenezcan; y de las represalias y contrabando marítimo, naufragios, abordajes y arribadas.

No obstante lo prevenido en este número, cuando los delitos comunes cometidos en buques mercantes extranjeros, en la zona marítima española, lo fueren por los individuos de las tripulaciones contra otros individuos de las mismas, serán entregados los delincuentes que no sean españoles á los agentes consulares ó diplomáticos de la nacion cuyo pabellon llevase el buque en que se cometió el delito, si fueren reclamados oficialmente, á no disponer otra cosa los tratados.

13.º De las faltas especiales que se cometan por los militares ó por individuos de la armada en el ejercicio de sus funciones ó que afecten inmediatamente al desempeño de las mismas.

14.º De las infracciones de las reglas de policía en las

naves, puertos, playas y zonas marítimas, de las ordenanzas de marina y reglamentos de pesca en las aguas saladas del mar.

Art. 351. En todos los casos del artículo anterior, los militares y marinos en servicio activo serán penados con arreglo á las ordenanzas militares del ejército y de la armada, y los demás solo estarán sujetos á esta penalidad cuando el delito cometido no estuviere castigado en el Código penal, que es la ley que deberá aplicárseles.

## CAPITULO IV.

### *De las cuestiones de competencia.*

Art. 352. Podrán promover y sostener las cuestiones de competencia:

- 1.º Los juzgados municipales.
- 2.º Los tribunales de partido.
- 3.º Las Audiencias.

Art. 353. No podrán promover competencias:

Los jueces de instruccion.

El Tribunal Supremo.

Art. 354. Cuando jueces de instruccion que correspondan á un mismo partido no estuvieren conformes acerca de quién debe actuar, no entablarán competencia; pero si no se pusieren de acuerdo despues de la primera comunicacion, darán cuenta al tribunal de partido, el que en vista de las comunicaciones de ambos jueces, decidirá de plano y sin ulterior recurso qué juez debe actuar.

Art. 355. El Tribunal Supremo no formará competencias, y ningun juez ó tribunal podrá promoverla contra él.

Art. 356. Cuando algun juzgado ó tribunal entendiere en negocios que sean de las atribuciones y compe-

tencia del Tribunal Supremo, se limitará éste á ordenar que se abstenga de todo procedimiento el que indebidamente ejerciese funciones que no son suyas, y que le remita los antecedentes.

Tambien podrá ordenar que se le remesen estos para examinar si el juzgado ó tribunal conoce de negocios que estén reservados á él por las leyes.

Art. 357. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria ó por declinatoria.

Art. 358. La inhibitoria se intentará ante el juez municipal ó el tribunal á quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo para que se inhíba y remita la causa.

Art. 359. La declinatoria se propondrá ante el juez municipal ó tribunal á quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y la remita al tenido por competente.

Art. 330. La inhibitoria y la declinatoria podrán ser propuestas:

En los negocios civiles, por los que sean citados ante juez incompetente, ó puedan ser parte en el juicio promovido.

En los negocios criminales, por el ministerio fiscal, por los acusadores cuando los procedimientos no se hayan comenzado á su instancia, por los procesados y por los responsables civilmente del delito.

Art. 361. No podrá, en lo civil, proponer la declinatoria ni la inhibitoria el litigante que se hubiere sometido expresa ó tácitamente á la jurisdiccion de un juez ó tribunal, en los términos que establecen las artículos 303, 304, 305, 306 y 307 de esta ley.

Art. 362. Podrán proponer la inhibitoria ó la declinatoria en lo criminal:

El ministerio fiscal, en cualquier estado de la causa.

El acusador privado, solo al presentarse como parte en la causa.

El procesado y el que sea considerado como parte civil en la causa, solo dentro del tercer dia siguiente al de la notificacion de la terminacion del sumario.

Art. 363. El que hubiere optado por uno de los medios señalados en el art. 357, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplear ambos simultánea ó sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquel á que hubiese dado preferencia.

Art. 364. El juez municipal, ó tribunal que se considere competente en lo criminal, deberá en cualquier tiempo y en cualquier estado de la causa, promover la competencia.

Art. 365. La inhibitoria se propondrá en escrito que firmará un letrado.

En el escrito expresará el que la proponga que no ha empleado la declinatoria. Si resultare lo contrario, será condenado en las costas, aunque se decida en su favor la competencia, ó aunque él la abandone en lo sucesivo.

Art. 366. Los jueces municipales y los tribunales ante quienes se proponga la inhibitoria, oirán al ministerio fiscal cuando no fuere éste quien la hubiere propuesto. El ministerio fiscal contestará dentro del tercer dia.

Art. 367. Con vista de lo que diga el ministerio fiscal, ó sin ella en los casos en que con arreglo al artículo que antecede no proceda, mandarán los jueces ó tribunales librar oficio inhibitorio, ó declararán no haber lugar á hacerlo, en auto motivado.

Art. 368. Los autos en que los jueces municipales denegaren el requerimiento de inhibicion, serán apelables en ambos efectos. Contra lo que en segunda instancia de-



cidieren los tribunales de partido en lo civil y en lo criminal, solo habrá recurso de casacion en su caso.

Art. 369. Los autos en que los tribunales de partido denegaren en primera instancia el requerimiento de inhibicion en materia civil, serán apelables en ambos efectos.

Los autos en que lo denegaren en materia criminal no serán apelables y solo habrá contra ellos el recurso de casacion en su caso.

Art. 370. Contra los autos de las Audiencias denegando el requerimiento de inhibicion, solo habrá en su caso recurso de casacion en lo civil y en lo criminal.

Art. 371. Con el oficio de inhibicion se acompañará testimonio del escrito en que se haya pedido, de lo expuesto por el ministerio fiscal, de la providencia que se hubiere dictado y de lo demás que los tribunales ó jueces estimen conducente para fundar su competencia.

Art. 372. El juez ó tribunal requerido, cuando reciba el oficio de inhibicion, oirá:

En los negocios civiles, á la parte ó partes que hayan comparecido; y cuando no estuvieren éstas de acuerdo con la inhibicion, al ministerio fiscal.

En las causas criminales, al ministerio fiscal y al acusador privado si lo hubiere, y además cuando se hallare ya la causa en plenario, al procesado ó procesados y á los que sean parte como responsables civilmente del delito.

Art. 373. Las comunicaciones de que trata el artículo anterior, serán solo por tres dias, pasados los cuales sin devolverse los autos, se recojerán de oficio con contestacion ó sin ella, y el juez dictará auto inhibiéndose ó negándose á hacerlo.

Art. 374. El auto en que se inhibieren los jueces ó tribunales solo será apelable en los casos establecidos en los artículos 368 y 369.

Art. 375. Consentida ó ejecutoriada la sentencia en que los jueces ó tribunales se hubiesen inhibido del conocimiento de un acto, pleito ó causa, se remitirán los autos al juez ó tribunal que hubiere propuesto la inhibitoria con emplazamiento de las partes para que puedan comparecer ante él para usar de su derecho, y se pondrán á su disposicion, en las causas criminales, los procesados, las pruebas materiales del delito y los bienes embargados.

Art. 376. Si se negare la inhibicion, se comunicará el auto al juez ó tribunal que la hubiere propuesto, con testimonio de los escritos de los interesados, del ministerio fiscal, y de lo demás que se crea conveniente.

Art. 377. En el oficio que los jueces ó tribunales dirijan en el caso del artículo anterior, exigirán que se les conteste, para continuar actuando si se les deja en libertad, ó que se remita la causa á quien corresponda para que se decida la competencia.

Art. 378. Recibido el oficio expresado en el artículo anterior, los jueces ó tribunales que hayan propuesto la inhibitoria, dictarán sin más sustanciacion auto en el término de tercero dia.

Art. 379. Los autos en que se inhibieren los jueces ó tribunales, solo serán apelables en los casos establecidos en los artículos 368 y 369.

Art. 380. Consentido ó ejecutoriado el auto en que los jueces ó tribunales desistan de la inhibitoria, lo comunicarán al requerido de inhibicion, remitiéndole lo actuado ante el mismo para que pueda mandarlo unir á los autos.

Art. 381. Si los jueces ó tribunales insistieren en la inhibitoria, la comunicarán á los que hubiesen sido requeridos de inhibicion, para que remitan los autos al tri-

bunal que corresponda, haciéndolo ellos de lo actuado en su juzgado ó tribunal.

Art. 382. Cuando los jueces ó tribunales entre quienes se empeñe la cuestion de competencia, tuvieren un superior comun, le remitirán la causa y las actuaciones relativas á la misma cuestion.

Art. 383. Si los jueces ó tribunales ejercieren jurisdiccion de diversa clase, ó desempeñaren sus cargos en territorios no sujetos á un superior comun, remitirán los autos y actuaciones sobre la inhibitoria al Tribunal Supremo.

Art. 384. Las competencias se decidirán dentro de los cuatro dias siguientes á aquel en que el ministerio fiscal hubiese emitido su dictámen.

Art. 385. Contra los autos de las Audiencias en que decidan cuestiones de competencia, solo se dará el recurso de casacion en su caso.

Contra los del Tribunal Supremo, no habrá ulterior recurso.

Art. 386. Los autos del Tribunal Supremo en que se decidan competencias, se publicarán dentro de los diez dias siguientes á su fecha en la *Gaceta* y á su tiempo en la *Coleccion legislativa*.

Los de las Audiencias, en los *Boletines oficiales* de las provincias que comprenda su distrito dentro de los quince dias siguientes á su fecha.

Art. 387. El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de las costas causadas en la inhibitoria al juez ó tribunal y á las partes que la hubieren sostenido ó impugnado con notoria temeridad, determinando en su caso la proporcion en que deban pagarlas.

Lo mismo podrán hacer las Audiencias respecto á los jueces y tribunales y á las partes, en el caso expresado en el párrafo anterior.

Cuando no hicieren especial condenacion en costas, se entenderán de oficio las causadas en la competencia.

Art. 388. Los tribunales que hayan resuelto la competencia, remitirán la causa y las actuaciones que hubiesen tenido á la vista para decidirla, con certificacion del auto, al tribunal ó juez declarados competentes, y cuidarán de que se haga efectiva la condenacion en las costas que hubieren impuesto, librando al efecto las órdenes oportunas.

Art. 389. Cuando la cuestion de competencia empeñada entre dos ó más tribunales ó jueces fuere negativa por rehusar todos entender en una causa ó pleito, la decidirá el superior comun, ó el Tribunal Supremo en su caso, siguiendo para ello los mismos trámites prescritos para las demás competencias.

Art. 390. Las cuestiones de jurisdiccion promovidas por jueces ó tribunales seculares contra jueces ó tribunales eclesiásticos, se sustanciarán y decidirán con sujecion á las reglas establecidas para los recursos de fuerza en conocer.

Art. 391. Cuando los jueces ó tribunales eclesiásticos estimaren que les corresponde el conocimiento de una causa en que entiendan los jueces ó tribunales seculares, podrán requerirles de inhibicion, y si no se inhibieren, recurrir en queja al superior inmediato de estos, el cual, despues de oir al ministerio fiscal, resolverá lo que creyere procedente.

Contra esta resolucion no se dará recurso alguno.

Art. 392. Las declinatorias se sustanciarán en la forma que establezca para los incidentes la ley de Enjuiciamiento civil. Contra los autos que pronuncien las Audiencias, solo se dará en su caso el recurso de casacion.

Art. 393. Las inhibitorias y las declinatorias pro-

puestas en las causas criminales durante el sumario, no suspenderán su curso, el cual se continuará por el orden que se expresa en los números siguientes:

1.º Cuando hubiere conformidad sobre el lugar en que se cometió el delito, por el tribunal ó juez que lo sea de él.

2.º Cuando no hubiere dicha conformidad, por el que hubiere comenzado antes á actuar.

3.º Cuando hubieren principiado ambos en una misma fecha, por el tribunal ó juez requerido de inhibicion.

Art. 394. Las inhibitorias y las declinatorias en los negocios civiles y en las causas criminales durante el plenario, suspenderán los procedimientos hasta que se discuta y decida la cuestion de competencia.

Durante la suspension, el tribunal ó juez á quien corresponda, segun los casos establecidos en el artículo anterior, practicará cualquiera actuacion que sea absolutamente necesaria, y de cuya dilacion pudieran resultar perjuicios irreparables, ya sea de oficio, ya á instancia de cualquiera que tenga un interés legítimo.

Art. 395. En el caso de competencia negativa en las causas criminales entre la jurisdiccion ordinaria y otra privilegiada, la ordinaria empezará ó continuará la causa.

Art. 396. Cuando la competencia fuere entre tribunales y jueces que ejerciesen una misma clase de jurisdiccion, empezará ó continuará la causa:

1.º El juez del lugar en que se cometió el delito, si en ello hubiese conformidad.

2.º No habiendo conformidad respecto al lugar donde se cometió el delito, el primero que hubiere empezado á actuar; y si tampoco en este punto hubiese conformidad, aquel ante quien se hubiese presentado querella ó denuncia.

En los casos en que no sean aplicables las reglas anteriores, deberá continuarse la causa por el juez que hubiese promovido la competencia negativa.

Art. 397. Para la decision de toda competencia en lo criminal, el tribunal ó juez que deba continuar conociendo de la causa, remitirá al superior inmediato, cualquiera que sea el estado en que la competencia se empeñare, testimonio de las actuaciones relativas á la inhibitoria y de lo demás que sea conducente en apoyo de su intencion, reteniendo la causa para su continuacion si se hallase en sumario.

El tribunal ó juez que no deba continuar actuando, remitirá original la causa, y si no la hubiere comenzado, las actuaciones relativas á la inhibitoria.

Art. 398. Todas las actuaciones que se hayan practicado hasta la decision de las competencias, serán válidas, sin necesidad de que se ratifiquen ante el juez ó tribunal que sea declarado competente.

## CAPITULO V.

### *De los recursos de fuerza en conocer.*

Art. 399. El recurso de fuerza en conocer procederá cuando un juez ó tribunal eclesiástico conozca ó pretenda conocer de una causa no sujeta á su jurisdiccion, ó llevar á ejecucion la sentencia que hubiese pronunciado en negocio de su competencia, procediendo por embargo y venta de bienes, sin impetrar el auxilio de la jurisdiccion ordinaria.

Art. 400. Podrán promover el recurso de fuerza en conocer:

1.º Los que se consideraren agraviados por la usur-

pacion de atribuciones hecha por un juez ó tribunal eclesiástico.

2.º Los fiscales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo.

Art. 401. Los fiscales municipales, los de tribunales de partido, los jueces y los tribunales de la jurisdiccion ordinaria, no podrán promover directamente recursos de fuerza en conocer.

Cuando supieren que alguna autoridad judicial eclesiástica se haya entrometido á entender en negocios ajenos á su jurisdiccion, se dirigirán á los fiscales de las Audiencias ó al del Supremo, segun sus atribuciones respectivas, dándoles las noticias y datos que tuvieren, para que puedan promover el recurso si lo estimaren procedente.

Art. 402. Los que considerándose agraviados por un juez ó tribunal eclesiástico quisieren promover el recurso de fuerza en conocer, lo propondrán en los términos que prescribe esta ley.

Art. 403. El ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y sin preparacion alguna.

Art. 404. El agraviado preparará el recurso ante el juez ó tribunal eclesiástico, solicitando en peticion fundada que se separe del conocimiento del negocio y remita los autos ó las diligencias practicadas al juez ó al tribunal competente, protestando si no lo hiciere impetrar la Real proteccion contra la fuerza.

Art. 405. Cuando el juez ó tribunal eclesiástico denegare la pretension hecha con arreglo al artículo anterior, podrá el agraviado pedir testimonio de la providencia denegatoria; y obtenido, se tendrá el recurso por preparado.

Art. 406. En el caso de que el juez ó tribunal eclesiástico denegare el testimonio expresado en el artículo anterior, ó no diere providencia separándose del conocimiento

de la causa, podrá el agraviado recurrir en queja á la Audiencia en cuyo territorio ejerciese aquel su jurisdiccion, ó al Tribunal Supremo, segun sus respectivas atribuciones, en conformidad á lo establecido en esta ley.

Art. 407. El tribunal ante quien se interpusiere la queja, si fuere competente para conocer del recurso, ordenará al juez ó tribunal eclesiástico que facilite el testimonio al recurrente en el término del tercer día, desde aquel en que reciba la Real provision que al efecto se le dirija.

Art. 408. Cuando no cumpliera el juez ó tribunal eclesiástico con lo ordenado en la provision de que trata el artículo anterior, se le dirigirá segunda Real provision, conminándole con la pena establecida para este caso en el Código penal.

Art. 409. Si no obedeciese, á la segunda Real provision, el tribunal que conozca del recurso mandará al tribunal del partido, en cuya jurisdiccion residiera el juez ó tribunal eclesiástico, que recoja los autos y se los remita y que proceda desde luego á la formacion de la causa criminal correspondiente.

En este caso, el recurso de fuerza quedará preparado con la remesa de los autos.

Art. 410. Presentado ante el tribunal á quien corresponda conocer del recurso, el testimonio de la denegacion decretada por el juez ó tribunal eclesiástico, ó interpuesto el recurso directamente por el ministerio fiscal, se dictará auto admitiéndolo ó declarando no haber lugar á admitirlo.

Art. 411. Declarará el tribunal la admision cuando haya motivos que induzcan á estimar que el juez ó tribunal eclesiástico ha salido de los límites de sus atribuciones y competencia.



En otro caso, declarará no haber lugar á la admision del recurso.

Art. 412. En la misma providencia en que el tribunal admita el recurso, mandará por medio de una Real provision que el juez ó tribunal eclesiástico, dentro del tercero dia remita los autos, á no ser que ya estuviesen en el tribunal por consecuencia de lo ordenado en el art. 409.

Art. 413. En la Real provision que se despache en conformidad con lo establecido en el artículo anterior, se encargará al juez ó tribunal eclesiástico que haga emplazar á las partes para que comparezcan, dentro de diez dias improrogables, si quisieren, ante el tribunal que conozca del recurso, á hacer uso de su derecho.

Art. 414. Cuando los citados en virtud de lo ordenado en el artículo anterior comparecieren, serán parte en el recurso. Si no lo hicieren, se sustanciará el recurso sin su concurrencia, parándoles perjuicio del mismo modo que si estuvieran presentes.

Art. 415. Los jueces y tribunales eclesiásticos podrán citar á sus respectivos fiscales para que comparezcan como partes ante la jurisdiccion ordinaria.

Este mismo carácter tendrán los jueces y tribunales eclesiásticos cuando se presenten en el recurso para sostener sus actos y su competencia.

Art. 416. Cuando no remitiere el juez ó tribunal eclesiástico los autos que se le reclamen, se observará lo que se expresa en el art. 409 de esta ley.

Art. 417. En el caso en que el tribunal de partido, cumpliendo con lo que ordena el art. 409, remesare los autos al tribunal, mandará notificar la providencia en que lo ordene á los que sean parte en ellos, emplazándoles á los efectos que establece el art. 413.

Art. 418. Remitidos los autos por el tribunal de par-

tido, con arreglo á lo preceptuado en los artículos anteriores, el recurso se tendrá por admitido por el hecho de entrar los autos en el tribunal á cuyo conocimiento corresponda.

Art. 419. En todo caso, recibidos los autos en la Audiencia ó en el Tribunal Supremo, se sustanciará el recurso en la forma establecida en la ley de Enjuiciamiento civil respecto á las apelaciones de los incidentes.

Art. 420. El ministerio fiscal será tambien parte en los recursos que no haya promovido, y en todo caso concurrirá necesariamente á la vista.

Art. 421. El tribunal dictará auto limitándose á las declaraciones que siguen:

1.<sup>a</sup> No haber lugar al recurso, condenando en costas al que lo hubiese interpuesto y mandando devolver los autos al juez ó tribunal eclesiástico para su continuacion con arreglo á derecho.

2.<sup>a</sup> Declarar que el juez ó tribunal eclesiástico hace fuerza *en conocer*, y ordenar que levante las censuras si las hubiere impuesto.

Se podrá en este caso imponer las costas al juez ó tribunal eclesiástico, cuando hubiere por su parte temeridad notoria en atribuirse facultades ó competencia que no tenga.

Esta providencia se comunicará al juez ó tribunal eclesiástico por medio de oficio.

Art. 422. De todo auto en que se declare que un juez ó tribunal eclesiástico hace fuerza *en conocer*, se dará cuenta al Gobierno acompañando copia del mismo auto.

Art. 423. Cuando se declare no haber lugar al recurso, se devolverán los autos al juez ó tribunal eclesiástico, con la certificacion correspondiente para que pueda continuarlos con arreglo á derecho.

Art. 424. Hecha la devolucion de los autos, se tasarán y regularán las costas, y se procederá por la Audiencia ó por el Tribunal Supremo á disponer lo que corresponda para hacerlas efectivas, empleando para ello la vía de apremio.

Art. 425. Si se declarase que el juez ó tribunal eclesiástico hace fuerza, se remitirán los autos con citacion de las partes que se hayan personado en el tribunal, al juez competente, y se dará noticia de la providencia al juez ó tribunal eclesiástico por medio de oficio.

## TITULO VIII.

DE LA RECUSACION DE JUECES, MAGISTRADOS Y ASESORES.

### CAPITULO I.

#### *Disposiciones generales.*

Art. 426. Los jueces y magistrados, cualquiera que sea su grado y gerarquía, y los asesores, solo podrán ser recusados por causa legítima.

Art. 427. Podrán solo recusar:

En los negocios civiles, los que sean ó se muestren parte en ellos.

En los negocios criminales:

El representante del ministerio fiscal.

El acusador privado, ó los que por él puedan ejercer ó ejerciten sus acciones y derechos.

Los procesados.

Los responsables civilmente por delito ó falta.

Art. 428. Son causas legítimas de recusacion:

1.<sup>a</sup> El parentesco de consanguinidad ó afinidad, den-

tro del cuarto grado civil, con cualquiera de los expresados en el artículo anterior.

2.<sup>a</sup> El mismo parentesco, dentro del segundo grado con el letrado de alguna de las partes que intervengan en el pleito ó en la causa.

3.<sup>a</sup> Estar ó haber sido denunciado ó acusado por alguna de ellas, como autor, cómplice ó encubridor de un delito, ó como autor de una falta.

4.<sup>a</sup> Haber sido defensor de algunas de las partes, emitido dictámen sobre el pleito ó proceso como letrado, ó intervenido en él como fiscal, perito ó testigo.

5.<sup>a</sup> Ser ó haber sido denunciador ó acusador privado del que recusa.

6.<sup>a</sup> Ser ó haber sido tutor ó curador para bienes de alguno que sea parte en el pleito ó en la causa.

7.<sup>a</sup> Haber estado en tutela ó guardaduría de alguno de los expresados en el número anterior.

8.<sup>a</sup> Tener pleito pendiente con el recusante.

9.<sup>a</sup> Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en la causa.

10.<sup>a</sup> Amistad íntima.

11.<sup>a</sup> Enemistad manifiesta.

Art. 429. Los jueces, magistrados y asesores comprendidos en el artículo anterior se inhibirán del conocimiento del negocio sin esperar á que se les recuse. Contra esta inhibicion no habrá recurso alguno.

Art. 430. La recusacion en los negocios civiles se propondrá en el primer escrito que presente el recusante, cuando la causa en que se funde fuere anterior al pleito y tenga de ella conocimiento.

Cuando fuere posterior, ó aunque anterior no hubiere tenido antes de ella conocimiento, el recusante la deberá proponer tan luego como llegue á su noticia.

Art. 431. En lo criminal, podrá proponerse la recusacion en cualquier estado de la causa.

Art. 432. Ni en lo civil ni en lo criminal, podrá hacerse recusacion despues de comenzada la vista del pleito ó de la celebracion del juicio público de la causa.

## CAPITULO II.

*De la sustanciacion de las recusaciones de los jueces de instruccion, de partido y de los magistrados.*

Art. 433. En los pleitos de mayor y menor cuantía, y en las causas por delitos, se hará la recusacion en escrito firmado por letrado, por el procurador y por el recurrente si supiere y estuviere en el lugar del juicio ó de la causa. Este último deberá ratificarse ante el juez.

Cuando el recusante no estuviere presente, firmarán solo el letrado y el procurador, si estuviere éste autorizado expresamente para recusar.

En todo caso, se expresará en el escrito detenida y claramente la causa de la recusacion.

Art. 434. Cuando el demandante que sea pobre no tuviere procurador y abogado para su defensa en el incidente de recusacion, podrá pedir que se le nombre de oficio.

Art. 435. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del art. 433, en las causas criminales podrá el procesado, si estuviese en comunicacion, proponer la recusacion verbalmente en el acto de recibirle la declaracion, ó podrá llamar al juez por conducto del alcaide de la cárcel para recusarle.

En este caso, deberá el juez presentarse acompañado del secretario, el cual hará constar por diligencia la peticion de recusacion y la causa en que se funde.

Art. 436. Cuando el recusado estimare procedente la causa alegada, entre las que quedan expresadas, cualquiera que sea la forma que haya empleado el recusante, dictará auto desde luego dándose por recusado, y mandará pasar las diligencias á quien deba reemplazarle.

Contra este auto no habrá recurso alguno.

Art. 437. Cuando el recusado no estimare procedente la recusacion, la denegará.

Art. 438. El auto admitiendo ó denegando la recusacion será fundado, y bastará notificarlo al procurador del recusante, aunque éste se halle en el pueblo en que se siga el juicio y haya firmado el escrito de recusacion.

Art. 439. Al recusante que estuviere incomunicado é interpusiere la recusacion en la forma expresada en el artículo 435, y le fuere denegada, se le advertirá que podrá reproducirla cuando le seaalzada la incomunicacion.

Art. 440. El recusado que no se inhibiere por no considerarse comprendido en la causa alegada para la recusacion, mandará formar pieza separada.

Esta contendrá el escrito original de recusacion y el auto denegatorio de la inhibicion, quedando nota expresiva de uno y otro en el proceso.

Art. 441. Durante la sustanciacion de la pieza separada, no podrá intervenir el recusado en el pleito ó en la causa, ni en el incidente de recusacion, y será sustituido por aquel á quien corresponda con arreglo á esta ley.

Art. 442. La recusacion no detendrá el curso del pleito ó de la causa.

Exceptúase el caso en que el incidente de recusacion no se hubiese decidido cuando sean citadas las partes para la vista ó para el juicio público, suspendiéndose entonces hasta que aquel se decida.

Art. 443. Instruirán las piezas separadas de recusacion:

Cuando el recusado sea el presidente ó un presidente de Sala de una Audiencia ó del Tribunal Supremo, el presidente de Sala más antiguo; y si el recusado fuere el más antiguo, el que le siga en antigüedad.

Cuando el recusado sea un magistrado de Audiencia ó del Tribunal Supremo, el magistrado más antiguo de su Sala; y si el recusado fuere el más antiguo, el que le siga en antigüedad.

Cuando sean dos jueces del tribunal de partido los recusados, el magistrado más moderno de la Sala de la Audiencia á que corresponda el conocimiento.

Cuando el recusado sea juez de instruccion, ó uno solo del tribunal de partido, el presidente del mismo tribunal.

Art. 444. Formada la pieza separada, se oirá á la otra ú otras partes que hubiere en el pleito ó en la causa, por término de tres dias á cada una, que solo podrán prorogarse por otros dos cuando, á juicio del tribunal, hubiere justa causa para ello.

Art. 445. Trascurrido el término señalado en el artículo anterior, con la próroga en su caso, y recogidos los autos sin necesidad de peticion por parte del recusante, se recibirá á prueba el incidente de recusacion, cuando la cuestion fuere de hechos, por ocho dias, durante los cuales se practicará la que hubiere sido solicitada por las partes y admitida como pertinente.

Art. 446. Contra el auto que dictaren los tribunales de partido admitiendo ó denegando la prueba, podrá pedirse reposicion ante los mismos que lo hubieren dictado.

Esta peticion solo podrá hacerse dentro de los tres dias siguientes á la notificacion del auto.

Art. 447. Contra el auto en que las Audiencias ó el

Tribunal Supremo admitieren ó denegaren la prueba, no se dará ulterior recurso.

Art. 448. Cuando por ser la cuestion de derecho, no se hubiere recibido á prueba el incidente de recusacion, ó hubieren pasado los ocho dias concedidos en el art. 445 para la prueba, ó no se hubiere accedido á la reposicion de que trata el art. 446, se mandará citar á las partes, señalando el dia para la vista.

Art. 449. Decidirán los incidentes de recusacion:

Cuando el recusado fuere el presidente ó un presidente de Sala de la Audiencia, la misma Audiencia en pleno.

Cuando fuere magistrado, la Sala á que pertenezca.

Cuando fuere juez de tribunal de partido, el mismo tribunal.

Cuando fueren dos jueces de tribunal de partido, la Sala de la Audiencia á que corresponda.

Cuando fuere juez de instruccion ó municipal, el tribunal de partido.

Art. 450. Los autos en que se declare haber ó no lugar á la recusacion, serán siempre fundados y se pronunciarán dentro de los tres dias siguientes al de la vista.

Art. 451. Contra el auto que dictare el Tribunal Supremo, no habrá recurso alguno.

Contra el que dictare la Audiencia, solo habrá el de casacion en su caso.

Los autos que dicten los tribunales de partido accediendo á la recusacion, no serán apelables.

Los autos en que se deniegue, serán apelables en ambos efectos ante la Audiencia.

Art. 452. Interpuesta y admitida la apelacion del auto denegatorio de recusacion, se citará y emplazará á las partes para que en el término de diez dias comparezcan ante la Audiencia á usar de su derecho, y se remitirá



á la misma original la pieza separada de la recusacion.

Art. 453. Cuando no comparecieren las partes en dicho término, se tendrá por desierta la apelacion y firme el auto apelado, con imposicion de las costas al apelante, devolviéndose los autos al tribunal de que proceden.

Art. 454. Cuando comparecieren, se formará el apuntamiento, siguiendo despues la sustanciacion en la forma establecida en la ley de Enjuiciamiento civil respecto á las apelaciones de los incidentes.

Art. 455. En todos los autos en que se denegare la recusacion, se condenará en costas al que la hubiere propuesto, no siendo el ministerio fiscal.

Art. 456. Además de la condenacion de costas expresada en el artículo anterior, se impondrá al recusante una multa de 25 á 50 pesetas, cuando el recusado fuere juez municipal: de 50 á 100, cuando fuere juez de instrucion ó de tribunal de partido: de 100 á 200, cuando fuere magistrado de Audiencia, y de 200 á 400, cuando fuere magistrado del Tribunal Supremo.

Art. 457. Cuando no se hicieren efectivas las multas respectivamente señaladas en el artículo anterior, sufrirá el multado prision subsidiaria por vía de sustitucion y apremio, en los términos que para las causas por delitos establece el Código penal.

Art. 458. En el caso previsto en el art. 448, de no haber accedido el tribunal de partido á la reposicion del auto denegatorio de prueba, si la Audiencia estimare que debió ésta admitirse, lo declarará así, dejando sin efecto el auto apelado, y mandará devolver las diligencias al tribunal de que procedan para que se practique la prueba y dicte nuevo auto.

Cuando estimare que el juez denegó justamente la reposicion, dictará auto en lo principal.

Art. 459. Cuando un juez de tribunal de partido se inhibiere voluntariamente, ó á petición de parte legítima, del conocimiento de una causa, conforme á lo establecido en el art. 429, dará cuenta al presidente de la Audiencia por medio del que lo sea del tribunal de partido, ó directamente si él fuere el presidente.

El presidente de la Audiencia lo comunicará á la Sala de gobierno, la cual, si considerase improcedente la inhibición, podrá imponerle una corrección disciplinaria, si hubiere suficiente motivo para ello, elevándolo en este caso al conocimiento del Ministro de Gracia y Justicia para que se una al expediente personal del juez á los efectos que correspondan.

Art. 460. Cuando la Audiencia revocare el auto denegatorio de la recusación, se remitirá siempre al expresado Ministerio, para los efectos del artículo anterior, copia del auto revocatorio que hubiere pronunciado.

### CAPITULO III.

#### *De la sustanciación de las recusaciones en los juicios verbales y de faltas.*

Art. 461. En los juicios verbales y de faltas la recusación se propondrá en el mismo acto de la comparecencia.

Art. 462. En vista de la recusación, el juez municipal, si la causa alegada fuere de las expresadas en el artículo 428, y cierta, se dará por recusado, pasando el conocimiento de la demanda ó de la falta á su suplente.

Art. 463. Cuando el recusado no considerare legítima la recusación, pasará el conocimiento del incidente á su

suplente, haciéndolo constar en el acta. Contra este auto no habrá ulterior recurso.

Art. 464. El suplente del juez municipal en el caso del artículo anterior, hará comparecer á las partes, y en el mismo acto recibirá las pruebas que ofrezcan, cuando la cuestion sea de hechos.

Art. 465. Recibida la prueba, ó cuando por tratarse de cuestion de derecho, no fuere necesaria, el juez municipal suplente resolverá sobre si há ó no lugar á la recusacion, en el mismo acto si fuere posible. En ningun caso dejará de hacerlo dentro del segundo día.

De lo actuado y del auto se hará mencion en el acta que se extenderá.

Art. 466. Contra el auto del juez suplente declarando haber lugar á la recusacion, no se dará recurso alguno.

Contra el auto en que la denegare, habrá apelacion para ante el tribunal de partido.

Art. 467. La apelacion que proceda segun el artículo anterior, se interpondrá verbalmente en el acto mismo de la comparecencia, cuando el juez suplente declarare no haber lugar á la recusacion.

Cuando usare de la facultad de diferir la resolucion dentro de segundo dia, se interpondrá la apelacion en el acto mismo de la notificacion, cuando fuere personal; en otro caso dentro de las veinticuatro horas siguientes á ella. La apelacion en este caso se interpondrá tambien verbalmente ante el secretario del juzgado, y se hará constar por diligencia.

Art. 468. Cuando no se apelare dentro de los términos señalados en el artículo anterior, el auto del juez suplente será firme.

Cuando se interpusiere apelacion en tiempo, se remi-

tirán los antecedentes al tribunal de partido, con citacion de las partes, á expensas del apelante.

Art. 469. En el tribunal de partido se dará cuenta en la primera audiencia, sin admitir escritos ni formar apuntamiento.

Los interesados ó sus apoderados podrán hacer verbalmente las observaciones que estimen, previa la vènia del presidente del tribunal.

El tribunal pronunciará su auto inmediatamente, cuando fuere posible.

En ningun caso dejará de hacerlo dentro del segundo dia, siguiente á aquel en que se le hubiere dado cuenta.

Contra su auto no habrá ulterior recurso.

Art. 470. Cuando el auto sea confirmatorio, se condenará en costas al apelante.

Art. 471. Declarada procedente la recusacion por auto firme y remitidos los antecedentes con el auto al juzgado municipal en el caso de que haya habido apelacion, entenderá el suplente en el conocimiento del negocio.

Declarada improcedente la recusacion por auto tambien firme, el juez recusado volverá á entender en el negocio.

## TITULO IX.

### DE LOS AUXILIARES DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

Art. 472. Bajo la denominacion de auxiliares de los juzgados y tribunales se comprenden:

Los secretarios judiciales.

Los archiveros judiciales.

Los oficiales de Sala.

## CAPITULO I.

*De los secretarios judiciales.*

Art. 473. Habrá secretarios:

De juzgados municipales.

De juzgados de instruccion.

De tribunales de partido.

De Salas de justicia de las Audiencias.

De gobierno de las Audiencias.

De Salas de justicia del Tribunal Supremo.

De gobierno del Tribunal Supremo.

## Seccion primera.

De las condiciones comunes á los secretarios judiciales.

Art. 474. Para ser secretario judicial, cualquiera que sea su denominacion ó clase, se requiere:

1.º Reunir las condiciones que requiere el art. 109 de esta ley para ser juez ó magistrado. .

2.º No estar comprendido en ninguno de los casos de incapacidad que para lo mismo señala el art. 110.

3.º No obtener cargo ó empleo de los que son incompatibles con las funciones judiciales, segun el art. 111.

Exceptúanse de esta disposicion los secretarios de los juzgados municipales, en los casos que expresa esta ley.

4.º Ser de buena conducta moral.

Art. 475. Los que intervengan en la propuesta y nombramiento de secretarios judiciales, cuidarán de enterarse de si reunen las condiciones que exige esta ley, ó si por cualquier causa estuviesen inhabilitados para obtener la plaza que haya de proveerse.

Art. 476. En los cargos que se provean por oposicion, deberá cumplirse lo establecido en el artículo que antecede antes de que comiencen los ejercicios, admitiendo á ellos solo á los que no tuvieren tachas legales.

Los que obtuviesen empleos ó cargos incompatibles, serán admitidos á las oposiciones y concursos, si manifestaren que en caso de obtener la plaza que pretenden, harán renuncia del que con ella sea incompatible.

Art. 477. El ejercicio de los empleos de secretarios de juzgados ó tribunales será justa causa para eximirse de los cargos obligatorios de que se hace mencion en el número 3.º del art. 474, siendo extensivo á los secretarios judiciales lo que respecto á los jueces y magistrados se ordena expresamente en los artículos 112 y 113 de esta ley.

Art. 478. Los secretarios judiciales, antes de tomar posesion de sus cargos, prestarán juramento de guardar la Constitucion del Estado, ser fieles al Rey y de cumplir con diligencia las leyes que se refieren al ejercicio de su cargo.

Art. 479. Prestarán este juramento:

Los secretarios de juzgados municipales y de instruccion, ante el juez á quien hayan de auxiliar.

Los de tribunales de partido, ante el tribunal para que hayan sido nombrados.

Los de Sala de justicia de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, ante la Sala en que hayan de desempeñar sus cargos.

Los de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo, ante la Sala de gobierno del tribunal respectivo.

Art. 480. Los jueces ó las Salas correspondientes darán posesion de sus cargos á los secretarios á continuacion de haber prestado juramento.

Art. 481. Será obligacion de los secretarios de juzgados municipales, de instruccion, de tribunales de partido, y de Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo:

1.º Auxiliar á las jueces, á las Salas y á los tribunales segun sus respectivos cargos, en todo lo que se refiere al ejercicio de la jurisdiccion voluntaria ó contenciosa.

2.º Guardar secreto en todas las materias y casos de su cargo, que lo exigieren.

3.º Anotar en los autos los dias y las horas, en los casos en que los términos sean fatales, cuando se les presenten los escritos.

4.º Anotar igualmente los dias en que las partes tomen y devuelvan los autos, y en que sin devolucion de estos presenten escritos.

5.º Dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se les presenten en los negocios en que actúen, siendo responsables de las dilaciones inmotivadas en que incurran.

6.º Extender fielmente y autorizar con su firma las actuaciones, providencias, autos y sentencias que pasen ante ellos.

7.º Custodiar y conservar asiduamente los procesos y los documentos que estuvieren á su cargo.

8.º No dar copias certificadas ó testimonios, sino en virtud de providencia del juzgado ó del tribunal.

9.º Llevar siempre al corriente los libros que prevengan las leyes y disposiciones reglamentarias.

10.º Ser imparciales con todos los que tengan negocios pendientes en sus secretarías.

11.º Cumplir todas las demás obligaciones que les impongan las leyes y las disposiciones reglamentarias.

Art. 482. Los secretarios de los tribunales de par-

tido y los de Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo, además de las obligaciones prescritas en el artículo anterior, cumplirán las siguientes:

1.<sup>a</sup> Dar cuenta de palabra, cuando se trate de providencias de tramitación que no necesiten antecedentes complicados para resolver.

2.<sup>a</sup> Dar cuenta por escrito con la concisión posible, cuando se trate de providencias de tramitación que lo exijan por la gravedad, volumen de los antecedentes ó dificultades que presenten para su resolución.

3.<sup>a</sup> Formar los apuntamientos para las vistas de los pleitos y causas, tanto cuando se vean para incidentes, como para decidir en definitiva.

4.<sup>a</sup> Manifestar en los apuntamientos si los autos se hallan en estado de poderse fallar el artículo, el pleito ó la causa, ó si hay algun defecto grave que deba subsanarse por poder ser su omisión causa de nulidad.

5.<sup>a</sup> Manifestar en los casos de apelación si las sentencias de primera instancia, y en los de casación si las de segunda instancia, fueron pronunciadas dentro del término prevenido por las leyes.

6.<sup>a</sup> Poner al márgen de las providencias los apellidos de los jueces y magistrados que hubieren asistido, y al de los autos y sentencias los nombres y apellidos de los mismos.

7.<sup>a</sup> Extender en las diligencias de las vistas los días de su duración, las horas empleadas en cada día, y los nombres y apellidos de los defensores que hubiesen asistido á ellas.

8.<sup>a</sup> Cuidar de que no quede ninguna providencia sin rubricar por el presidente de la Sala, ni ningun auto ó sentencia por los que asistan á ella.

9.<sup>a</sup> Extender y refrendar las Reales provisiones, car-



tas ó despachos cuando las haya firmado el presidente del tribunal, y los magistrados que deban ejecutarlo.

10.<sup>a</sup> Regular las costas segun arancel, en el caso de que hubiere sido alguno condenado á satisfacerlas, incluyendo las notas de los letrados.

11.<sup>a</sup> Cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y disposiciones reglamentarias.

Art. 483 Los secretarios judiciales residirán en el pueblo en que ejerzan sus funciones. No podrán ausentarse de ellos sin la licencia del juez ó del presidente del tribunal respectivo.

Los que se ausentaren sin licencia serán corregidos disciplinariamente, y si estuvieren sin ella ausentes por tres meses ó más, ó llamados no se presentaren, perderán el cargo.

Art. 484 Los reglamentos señalarán:

1.<sup>o</sup> Los dias y horas en que han de estar abiertas las secretarías, lo cual estará expuesto en un cuadro en la parte exterior de sus oficinas.

2.<sup>o</sup> El número y condiciones de los libros que deban llevar los secretarios.

3.<sup>o</sup> La forma y época en que hayan de hacerse los inventarios de los libros y papeles.

4.<sup>o</sup> La manera de hacer entre los secretarios de un mismo juzgado ó tribunal, el repartimiento de los negocios.

Art. 485. Serán los secretarios judiciales separados de sus cargos por cualquiera de las causas que segun los artículos 223 y 224 de esta ley dan lugar á la destitucion de los jueces y magistrados.

Art. 486. A la separacion precederá un expediente en que se justifique la causa de la misma.

Podrán promover este expediente:

1.º Los fiscales del juzgado ó tribunal á que correspondan los secretarios.

2.º Los jueces, los tribunales, las Salas, los presidentes de Sala y de los tribunales de que fueren auxiliares y sus respectivos superiores gerárquicos.

3.º El Gobierno.

Art. 487. En el expediente expresado en el artículo anterior, serán oídos el secretario interesado y el ministerio fiscal del juzgado ó tribunal respectivo, remitiéndose todo lo actuado:

Al tribunal del partido, cuando se tratare de la separacion de un secretario municipal.

Al Gobierno, cuando se tratare de cualquiera otra clase de secretarios judiciales.

Art. 488. Los tribunales de partido decretarán la separacion ó no separacion de los secretarios de los juzgados municipales.

El Gobierno la de los demás secretarios judiciales.

Art. 489. Contra la separacion de los secretarios de juzgados municipales, hecha por los tribunales de partido, no habrá ulterior recurso. Contra la que haga el Gobierno de los demás secretarios, solo habrá recurso contencioso administrativo, por falta de audiencia del interesado ó del ministerio fiscal.

Art. 490. Los presidentes de los tribunales de partido, de las Audiencias y del Tribunal Supremo, suspenderán respectivamente del ejercicio de sus funciones á los secretarios:

1.º Cuando disciplinariamente se les impusiere como correccion la suspension de empleo y la privacion de sueldo y emolumentos.

2.º Cuando fueren procesados criminalmente.

3.º Cuando se promoviere expediente para su separacion.

En estos casos, les será aplicable lo que respecto á los jueces y magistrados establecen, en igualdad de circunstancias, los artículos 229, 232 y 233 de esta ley.

Art. 491. Los secretarios de los tribunales de partido y los de las Audiencias no podrán ser trasladados del juzgado ó tribunal en que ejerzan su cargo á otro, sin su consentimiento.

Nunca podrán serlo con ascenso.

Mas tanto los de Audiencia, como los del Tribunal Supremo, podrán serlo de una Sala á otra de la misma Audiencia ó del tribunal, por la de gobierno.

Art. 492. Cuando por circunstancias extraordinarias é imprevistas faltare en algun tribunal el número necesario de secretarios para la administracion de justicia y el despacho de los negocios de gobierno, el juez ó el presidente del tribunal habilitarán á uno ó más, si fueren necesarios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno de las causas que hayan hecho indispensable la habilitacion, la cual solo tendrá el carácter de interina.

Art. 493. Los secretarios de los tribunales de partido usarán en las vistas de los pleitos y causas y en todos los actos solemnes, trage negro.

Los que sean abogados, podrán usar el trage de su clase.

Los secretarios de las Audiencias y del Tribunal Supremo, usarán siempre la toga de abogado, sin otro distintivo.

## Seccion segunda.

De los secretarios de los juzgados municipales.

Art. 494. En cada juzgado municipal habrá un secretario que autorizará todos sus actos y un suplente pa-

ra los casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibilidad, recusacion ú otro cualquier impedimento del secretario.

Art. 495. Se preferirá para las funciones de secretario y suplente de secretario de los juzgados municipales á los que tuvieren algunos conocimientos jurídicos adquiridos en estudios profesionales ó en la práctica de negocios judiciales.

Art. 496. Los secretarios y suplentes de secretarios de los juzgados municipales serán nombrados por los presidentes de los tribunales de partido á propuesta en terna hecha por los jueces municipales.

Su dotacion consistirá en los derechos que le estuvieren señalados en los aranceles judiciales.

Art. 497. El cargo de secretario y de suplente de secretario de juzgado municipal será compatible con todo empleo y cargo público cuyo desempeño sea conciliable con él, en las poblaciones que no lleguen á 500 vecinos.

En las que excedan de este número de vecinos, los expresados cargos serán incompatibles con todo empleo, cargo ó comision retribuidos por el Gobierno, por la provincia ó por los pueblos.

### Seccion tercera.

De los secretarios de los juzgados de instruccion y de tribunales de partido.

Art. 498. Los juzgados de instruccion y los tribunales de partido tendrán el número de secretarios que para cada uno de ellos fije el Gobierno, oyendo:

Respecto á los juzgados de instruccion, á los jueces que estén desempeñándolos, á los presidentes de los tribunales de partido y á las Salas de gobierno de las Audiencias del respectivo distrito.

Respecto á los tribunales de partido, á estos mismos tribunales y á las Salas de gobierno de las Audiencias.

Art. 499. El nombramiento de los secretarios de los juzgados de instruccion y de los tribunales de partido corresponderá al Gobierno.

Art. 500. Para ser nombrado secretario de juzgado de instruccion ó de tribunal de partido, además de las condiciones expresadas en el art. 109, se exigirá:

1.º Estar graduado de licenciado en derecho en Universidad costeada por el Estado, ó ser abogado recibido por los tribunales cuando estaban autorizados para ello, ó haber obtenido la habilitacion necesaria para hacer oposicion á esta clase de secretarías en virtud de los estudios y del exámen prévio que señalen los reglamentos.

2.º Ser peritos en taquigrafía.

3.º Haber obtenido la plaza por oposicion.

Art. 501. Las secretarías de los juzgados de instruccion se proveerán siempre por oposicion.

Las de tribunales de partido, alternativamente por oposicion y por concurso.

Art. 502. A la oposicion serán admitidos libremente los que tengan los requisitos señalados en el art. 109.

Art. 503. Al concurso solo serán admitidos los que hayan obtenido plazas de secretarios por oposicion, si reunieren las circunstancias siguientes:

Para ser secretario de tribunal de ingreso, haberlo sido de juzgado de instruccion.

Para ser secretario de tribunal de ascenso, haberlo sido de tribunal de ingreso.

Art. 504. En las provisiones por concurso solo se admitirán solicitudes de los secretarios del territorio de la Audiencia á que corresponda la vacante.

Art. 505. Para las oposiciones á las secretarías de los

juzgados de instruccion y tribunales de partido, habrá una junta calificadora en cada poblacion en que haya Audiencia.

Esta junta se compondrá:

Del presidente de la Audiencia, que lo será tambien de la junta.

Del fiscal de la misma Audiencia.

De dos magistrados de la Audiencia nombrados por el Gobierno.

Del decano del colegio de abogados del punto en que resida la Audiencia.

De dos abogados nombrados por la Junta de gobierno del mismo colegio.

Art. 506. En el caso de que el presidente de la Audiencia, el fiscal de la misma ó el decano del colegio de abogados no pudiesen asistir á la junta, serán sustituidos respectivamente:

El presidente de la Audiencia por un presidente de Sala nombrado por la Junta de gobierno.

El fiscal, por el teniente fiscal ó por el que haga sus veces.

El decano del colegio de abogados, por un individuo de la Junta de gobierno nombrado por la misma.

Art. 507. Los reglamentos designarán los ejercicios que hayan de hacer los opositores y las materias sobre que hayan de versar.

Art. 508. Las juntas calificadoras harán para cada plaza la propuesta en terna que consideren justa á favor de los más capaces, despues de cerciorarse de su moralidad y buena conducta, y las elevarán directamente al Gobierno.

Art. 509. Las Salas de gobierno de las Audiencias harán al Gobierno las propuestas en terna para las plazas que hubieren de proveerse por concurso.

Las propuestas deberán recaer en quienes más lo merezcan por su pericia, moralidad, laboriosidad y conducta.

Art. 510. Los secretarios de juzgados de instrucción y los de tribunales de partido se reemplazarán unos á otros en los casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibilidad, recusación ú otro impedimento legítimo.

Art. 511. No percibirán los secretarios de los juzgados de instrucción y de partido otra retribución que la que les corresponda con arreglo á los aranceles judiciales.

### Sección cuarta.

De los secretarios de las Audiencias y del Tribunal Supremo.

Art. 512. En cada Audiencia y en el Tribunal Supremo habrá un secretario de gobierno, que lo será del tribunal pleno, de la Sala de gobierno y de la presidencia.

En los tribunales de partido despachará los asuntos de gobierno el secretario de justicia que eligiere el presidente.

Art. 513. Es extensivo á los secretarios de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo lo prescrito relativamente á los secretarios en general en los números 2.º, 3.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º y 11.º del art. 481 y los artículos 482, 490, 492 y el párrafo último del art. 493 de esta ley.

Art. 514. Los secretarios de gobierno entenderán exclusivamente en los negocios gubernativos de las Audiencias y del Tribunal Supremo, sin que directa ni indirectamente intervengan en los que tengan carácter contencioso más que para darles el curso correspondiente en sus relaciones con la presidencia.

Art. 515. Corresponderá además á los secretarios de gobierno:

1.º Conservar el sello del tribunal.

2.º Sellar y registrar las Reales provisiones, cartas y despachos que mandare librar el tribunal para las partes interesadas ó de oficio.

3.º Llevar un registro exacto en que estén copiados literalmente los documentos expresados en el número anterior, y no dar copia de ninguno de ellos sin orden escrita del tribunal ó de alguna de sus Salas.

4.º Estar al frente del archivo del tribunal con el carácter y fé pública de archivero, en los tribunales en que no hubiere archivero especial, con las atribuciones y responsabilidades de este cargo.

5.º Estar al frente de la biblioteca en los tribunales en que no hubiere archivero.

Art. 516. En el Tribunal Supremo estará también á cargo de la secretaría la direccion de la *Coleccion legislativa* en la parte que se refiera á la resolucion de las competencias decididas por el mismo tribunal, á las denegaciones de admision de los recursos de casacion en materia criminal, á las sentencias declarando haber ó no lugar á los recursos de casacion en lo civil y en lo criminal, á aquellas en que se fallen los recursos intentados contra la administracion en única instancia ó en revision, y en cualesquiera otras emanadas del Tribunal Supremo que en conformidad á las leyes deban comprenderse en la *Coleccion legislativa*.

Art. 517. Habrá un vice-secretario de gobierno en el Tribunal Supremo.

El Gobierno podrá crear este cargo en alguna Audiencia, cuando la aglomeracion de negocios lo hiciera necesario ó conveniente.



Art. 518. Corresponde á los vicesecretarios reemplazar á los secretarios en caso de vacante, ausencia, enfermedad ó cualquier impedimento legal que tuvierén en negocios determinados, y auxiliarlos en todo lo que se refiera al ejercicio de sus funciones, con arreglo á la distribucion de negocios de la secretaría.

Art. 519. Los vicesecretarios, los oficiales de las secretarías y escribientes dotados por el presupuesto general del Estado, donde los hubiere, y los que con uno ú otro carácter estuvieren pagados de lo destinado al material, estarán bajo las inmediatas órdenes de los secretarios y presidentes.

Art. 520. Los oficiales y escribientes de las secretarías que estuvieren dotados en el presupuesto general del Estado, estarán sujetos en su nombramiento y condiciones á las reglas generales establecidas para los empleados públicos que estén en iguales condiciones.

Los que cobren del material la dotacion que el reglamento interior de la secretaría les señale, serán nombrados, suspensos ó separados libremente por el presidente del tribunal respectivo.

Art. 521. Cada Sala de justicia tendrá el número de secretarios que el Gobierno señale, despues de oír á la Sala de gobierno del mismo tribunal.

Art. 522. Para ser nombrado secretario ó vicesecretario de Audiencia ó del Tribunal Supremo, además de las condiciones expresadas en el art. 109 de esta ley, será necesario:

- 1.º Ser abogado.
- 2.º Ser perito en taquigrafía.
- 3.º Haber sido propuesto por la Junta de gobierno de la Audiencia ó del Tribunal Supremo.

Art. 523. Las secretarías de las Salas de justicia y

las vicesecretarías de las Audiencias, se proveerán siempre por oposicion directa.

Art. 524. Las oposiciones se harán en la forma y con los ejercicios que señalen los reglamentos, ante la Sala á que corresponda el oficio que se haya de proveer, la cual calificará los ejercicios, elevando por conducto del presidente al Gobierno la propuesta en terna, que deberá recaer en los que considere más capaces.

Art. 525. Las secretarías de gobierno de las Audiencias se proveerán entre los secretarios de las Salas de justicia que opten á ellas, cualquiera que sea la Audiencia á que correspondan las plazas que desempeñen y las que pretendan.

El Gobierno, en vista de sus solicitudes, informadas por el tribunal en que estén prestando sus servicios, hará la eleccion.

Art. 526. Cuando no hubiere secretarios de Sala de justicia que soliciten las secretarías de gobierno, se procederá á proveerlas por oposicion en los términos que establece el art. 523 de esta ley.

Esta oposicion se hará ante la Sala de gobierno del tribunal á que corresponda la vacante.

Art. 527. Las secretarías de las Salas de justicia del Tribunal Supremo se proveerán alternativamente por concurso y oposicion.

La oposicion se verificará en los términos establecidos en el art. 524 de esta ley.

Art. 528. El concurso será entre los secretarios de gobierno y los de las Salas de justicia de las Audiencias que lo soliciten.

La Sala de gobierno del Tribunal Supremo hará, por conducto del presidente, la propuesta al Gobierno, al cual corresponderá el nombramiento.

Art. 529. La secretaría de gobierno del Tribunal Supremo se proveerá por concurso de la manera manifestada en el último párrafo del artículo anterior, dando preferencia á las clases que se expresan en este artículo y por el orden con que están colocadas en él:

A los secretarios de Sala del Tribunal, considerándose en igual caso que estos los vicesecretarios.

A los secretarios de Salas de gobierno de las Audiencias.

A los secretarios de Salas de justicia de las Audiencias.

Si no hubiere pretendiente entre estas clases, se sacará la plaza á oposicion en la forma prevenida en el artículo 526.

Art. 530. La vicesecretaría del Tribunal Supremo se proveerá siempre por oposicion directa ante la Sala de gobierno.

Art. 531. Los secretarios de las Salas de lo criminal de cada Audiencia actuarán por turno riguroso en las causas que hayan de verse en las Salas que se constituyan fuera de la capital, ó en las extraordinarias, en conformidad á lo que disponen los artículos 13, 55 y 56 de esta ley.

Art. 532. Los secretarios de Sala de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo se sustituirán recíprocamente, en los casos en que alguno ó algunos estuvieren impedidos.

A los secretarios de gobierno de las Audiencias y al del Tribunal Supremo sustituirán en los casos de vacante, enfermedad ú otro impedimento legal, los vicesecretarios, donde los hubiere, y en otro caso, los secretarios de Sala, comenzando por los más antiguos.

Art. 533. Los secretarios y vicesecretarios de las Audiencias y del Tribunal Supremo solo percibirán el sueldo que se les señale.

A los de Audiencia, que en conformidad á lo prevenido en esta ley deban salir de la capital, se les señalará además extraordinariamente el haber que por cada día se les asigne en una disposicion de carácter general.

Los derechos que para ellos establezcan los aranceles judiciales se pagarán en el papel correspondiente, é ingresarán en el Tesoro.

Art. 534. Se señalará á cada secretario de las Salas de justicia la cantidad alzada que se considere necesaria para pagar los auxiliares y escribientes que les ayuden en sus trabajos.

## CAPITULO II.

### *De los archiveros.*

Art. 535. En el Tribunal Supremo y en las Audiencias en que el Gobierno lo estimare necesario ó conveniente, atendida la importancia y extension de sus archivos, habrá un archivero con los dependientes necesarios para la custodia, conservacion y arreglo de los documentos.

Art. 536. Para ser archivero se necesitará reunir las condiciones que las disposiciones generales de la administracion señalen para esta clase de destinos, y reunir además la circunstancia de ser abogado.

Art. 537. Los archiveros serán propuestos en terna por la Sala de gobierno del tribunal respectivo, y nombrados por el Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 538. Los archiveros de los tribunales tendrán fé pública en los certificados que expidan, relativos á antecedentes que obren en sus archivos.

No podrán expedirlos sino en virtud de providencia judicial, ó por orden del presidente del tribunal.

Art. 539. En los tribunales en que hubiese bibliotecas, estarán al cuidado de los archiveros.

Art. 540. Los empleados en los archivos judiciales de los tribunales estarán inmediatamente bajo las órdenes de los archiveros, y estos á las del presidente del tribunal.

Art. 541. Los archiveros y empleados en archivos tendrán dotacion fija. Los derechos de las certificaciones que expidan se cobrarán en papel é ingresarán en el Tesoro.

### CAPITULO III.

#### *De los oficiales de Sala.*

Art. 542. En los tribunales de partido en que el Gobierno lo considerare conveniente, en todas las Audiencias y en el Tribunal Supremo, habrá oficiales de Sala.

Art. 543. Corresponderá á los oficiales de Sala:

Hacer los emplazamientos, citaciones y notificaciones, embargos, recogidas de autos y demás diligencias que deban practicarse fuera de la presencia judicial, de orden de los juzgados ó tribunales de que dependan.

Asistir al presidente del tribunal y presidentes de las Salas y á los jueces á cuyas órdenes estuvieren, para cumplir las que les dicten, relativas al servicio judicial.

Asistir á los estrados, siempre que por circunstancias especiales lo mande el presidente de la Sala á que estén adscriptos, haciendo que los concurrentes guarden en ella orden y compostura.

Art. 544. Para ser oficial de Sala se requiere:

1.º Reunir todas las circunstancias que segun el artículo 474 de esta ley han de concurrir en los secretarios judiciales.

2.º Tener los conocimientos de las prácticas judiciales, relativas al oficio que han de desempeñar.

Art. 545. Los oficiales de Sala de las Audiencias y

del Tribunal Supremo, serán de nombramiento Real, á propuesta en terna de la Sala respectiva de Gobierno.

Los de los tribunales de partido, serán de nombramiento de los presidentes de las Audiencias, á propuesta en terna del tribunal al cual hayan de auxiliar en el ejercicio de sus funciones.

Art. 546. El Gobierno, oídas las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo, señalará el número de oficiales que ha de haber en cada Audiencia ó Sala.

Oirá tambien á las mismas Salas de gobierno, siempre que sea necesario ó conveniente aumentar ó disminuir su número.

Art. 547. Señalará igualmente el Gobierno los tribunales de partido que han de tener oficiales de Sala y su número en cada uno, oyendo á los mismos tribunales y á las Salas de gobierno de la Audiencia á que correspondan.

Art. 548. Nombrados los oficiales de Sala, acreditarán antes de entrar en sus cargos, que reúnen los conocimientos necesarios para la práctica de los mismos.

Art. 549. Para acreditar su pericia serán examinados por una comision compuesta de tres secretarios de Sala nombrados por el presidente del tribunal respectivo.

Si no hubiere este número ó no puidiere completarse por cualquier causa, se completará con abogados del Colegio respectivo.

Art. 550. En los tribunales de partido se hará el exámen por tres abogados nombrados por el presidente.

Art. 551. Acreditada su idoneidad, prestarán juramento los oficiales de Sala en audiencia pública, en la de gobierno del tribunal respectivo, y los de juzgado de partido, ante el juez á cuyas órdenes hayan de estar inmediatamente.

Art. 552. La fórmula del juramento que prestarán los oficiales de Sala será la de guardar la Constitución y las leyes, y cumplir bien las obligaciones de su cargo.

Art. 553. Los oficiales de Sala de las Audiencias y del Tribunal Supremo estarán dotados con el sueldo que se les señale, despues de oir á las Salas de Gobierno de los tribunales á que correspondan. Este sueldo se incluirá en los presupuestos del Estado. Los derechos que les señalen los aranceles se cobrarán en papel é ingresarán en el Tesoro.

Art. 554. Los oficiales de Sala de las Audiencias no saldrán de la capital en el caso de que se constituyan fuera de ella Salas de Audiencia ó Salas extraordinarias, en conformidad á los artículos 13, 55 y 56 de esta ley. Sus funciones serán desempeñadas por los que las ejerzan análogas en el tribunal de partido.

Art. 555. Los oficiales de Sala en los tribunales de partido no tendrán dotacion fija, percibiendo solamente los derechos de arancel.

Art. 556. Respecto á la destitucion, suspension, traslacion y licencias, serán extensivas á los oficiales de Sala las disposiciones que señala esta ley, respecto á los secretarios judiciales.

#### CAPITULO IV.

*De las recusaciones de los auxiliares de los juzgados y tribunales.*

Art. 557. Los secretarios de los juzgados municipales, de los de instruccion, de los tribunales de partido y de las Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo, serán recusables.

Lo serán tambien los oficiales de Sala.

Na lo serán los archiveros.

Art. 558. Serán aplicables á las recusaciones de los secretarios y oficiales de Sala, á que se refiere el artículo anterior, las prescripciones del título VIII de esta ley, con las modificaciones siguientes:

1.<sup>a</sup> La pieza de recusacion se instruirá cuando los recusados fueren auxiliares de los tribunales de partido, de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, por el juez más moderno del Tribunal ó por el magistrado que lo sea de la Sala á que los auxiliares correspondan ó en que estén pendientes los autos en que sean recusados, y se fallará por la misma Sala.

2.<sup>a</sup> El juez ó magistrado instructor podrá delegar la práctica de las diligencias que no pudiere ejecutar por sí mismo, en los jueces de instruccion y municipales.

Art. 559. Los auxiliares recusados no podrán actuar en la causa ó negocio en que lo fueren, ni en la pieza de recusacion, reemplazándoles aquellos á quienes correspondiera si la recusacion fuese admitida.

Art. 560. En las recusaciones de secretarios de juzgados municipales, instruirá y fallará la pieza de recusacion el juez municipal, donde solo hubiere uno.

Si hubiera dos, el del juzgado á que no pertenezca el recusado, y si tres ó más, el que siga en el orden oficial á aquel á que perteneciere.

Si perteneciere al último en orden, entenderá de la recusacion el primero.

Art. 561. En todo caso, cuando la recusacion fuere admitida, se condenará en costas al recusado, y si se desestimare, al recusante.

Art. 562. Cuando sea firme el auto en que se admita la recusacion, quedará el recusado separado de to-



da intervencion en los autos, continuando en su reemplazo el que le haya sustituido durante la sustanciacion del incidente; y si fuere secretario ú oficial de Sala en juzgado municipal ó de instruccion, ó en tribunal de partido, no percibirá derechos de ninguna clase, desde que se hubiere interpuesto la recusacion, ó desde que siéndole conocida la causa alegada, no se separó del conocimiento del negocio.

Art. 563. Cuando se desestimare la recusacion por auto firme, volverá el auxiliar recusado á ejercer sus funciones; y si fuere éste secretario ú oficial de Sala de juzgado municipal ó de instruccion, ó de tribunal de partido, le abonará el recusante los derechos correspondientes á las actuaciones practicadas en el pleito ó causa, haciendo igual abono al que haya sustituido al recusado.

Art. 564. No podrán los auxiliares ser recusados despues de citadas las partes para sentencia, ni tampoco durante la práctica de alguna diligencia de que estuvieren encargados.

## TITULO X.

### DE LOS SUBALTERNOS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

Art. 565. Bajo la denominacion de subalternos de los juzgados y tribunales, se comprenden los porteros, alguaciles, mozos de estrados y mozos de oficio.

Art. 566. En cada juzgado municipal habrá, por lo menos, un subalterno con el nombre de alguacil: desempeñará las diferentes obligaciones que segun esta ley correspondan á los subalternos.

Art. 567. En los juzgados municipales en que se necesite más de un subalterno, el juez propondrá al tribunal

del partido el número y clase de los que deban nombrarse y éste remitirá la propuesta con su informe al presidente de la Audiencia, quien resolverá lo que estime conveniente.

Art. 568. El Gobierno señalará el número y la clase de subalternos que hayan de tener:

Los juzgados de instruccion, en vista de la propuesta que hagan los jueces y del informe que den los tribunales de partido y las Salas de gobierno de las Audiencias.

Los tribunales de partido, en vista de la propuesta de los mismos tribunales y del informe de la Sala de gobierno de las Audiencias.

Las Audiencias y el Tribunal Supremo, en vista de lo que manifiesten las respectivas Salas de gobierno.

Art. 569. En el Tribunal Supremo no habrá alguaciles.

Cuando los necesitare, podrá pedirlos al presidente de la Audiencia de Madrid, quien le facilitará los que reclame.

Art. 570. Para ser subalterno de juzgado ó tribunal se requiere: ser español, mayor de 25 años, saber leer y escribir, ser de buena conducta y no haber sufrido penas correccionales ni afflictivas.

Una tercera parte de los subalternos de cada clase en los juzgados de instruccion, en los tribunales de partido, en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, se proveerá en licenciados del ejército ó de la armada que tengan buena hoja de servicio.

Art. 571. Los jueces de instruccion y los presidentes de los tribunales harán el nombramiento de los subalternos de sus respectivos juzgados y tribunales.

Art. 572. Cuando fuere nombrado algun subalterno que no reuniese las condiciones establecidas en el artícu-

lo 570, declarará sin efecto su nombramiento el que lo hubiere hecho.

Art. 573. Si el que hizo el nombramiento de algun subalterno sin las condiciones exigidas no lo dejare sin efecto, lo decretarán:

El tribunal de partido, respecto de los subalternos de los juzgados municipales.

El presidente de las Audiencias, respecto á subalternos de los juzgados de partido.

El presidente del Tribunal Supremo, respecto de los subalternos de las Audiencias.

Art. 574. Los porteros y alguaciles cumplirán todas las obligaciones que les impongan las leyes y los reglamentos; obedecerán las órdenes que reciban de los jueces y presidentes de los tribunales y Salas á que correspondan; guardarán Sala; auxiliarán á los secretarios de gobierno y de justicia y á los oficiales de Sala en la práctica de las diligencias judiciales y en los encargos que para cumplir los acuerdos de los tribunales les correspondan, y no podrán excusarse de obedecerlos, sin perjuicio de acudir en queja á los superiores gerárquicos respectivos por los agravios que reciban.

Art. 575. Los mozos de estrados y de oficio se ocuparán en los trabajos mecánicos que señalen los reglamentos interiores de los juzgados y tribunales, y cumplirán las órdenes de sus superiores.

Los jueces y presidentes de los tribunales podrán habilitarlos para que desempeñen los cargos de porteros y alguaciles.

Art. 576. Los subalternos de las Audiencias no saldrán de la capital en los casos en que se constituyan fuera de ella Salas de Audiencia, en conformidad á los artículos 13, 55 y 56.

Sus funciones serán desempeñadas por los que ejerzan funciones análogas en los tribunales de partido.

Art. 577. Los jueces y presidentes de los tribunales reglamentarán el servicio de los subalternos en la forma que estimen más conveniente.

Art. 578. Los subalternos de los juzgados y tribunales podrán ser suspensos y separados libremente por aquellos á quienes corresponda su nombramiento.

Contra lo resuelto por estos no habrá lugar á reclamacion alguna.

Art. 579. Los subalternos de los juzgados municipales no tendrán otra retribucion que la señalada en los aranceles judiciales.

Art. 580. El Gobierno, oidos los jueces de partido y las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo, fijará la cantidad que sea necesaria para dotar ó completar la dotacion de los subalternos de los juzgados de partido y de los tribunales, cuando no baste lo que les esté señalado como derechos en los aranceles judiciales.

Art. 581. Los subalternos se suplirán unos á otros en el caso eventual de que falte el número necesario para el buen servicio, observándose lo que respecto á los auxiliares dispone esta ley.

Art. 582. Usarán los subalternos de las Audiencias y del Tribunal Supremo, cuando estén en servicio dentro del tribunal, ó cuando asistan con éste á actos públicos, el uniforme que se les señale.

Los de los tribunales de partido, usarán trage negro.

## TÍTULO XI

### DEL GOBIERNO Y RÉGIMEN DE LOS TRIBUNALES.

#### CAPÍTULO I.

##### *De los presidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo.*

Art. 583. El gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo estará á cargo de sus presidentes.

Art. 584. Corresponderá á los presidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo, además de las atribuciones y obligaciones que en otros artículos de esta ley se determinan, las siguientes:

1.<sup>a</sup> Cumplir y hacer cumplir esta ley y todas las demás que se refieran respectivamente á los cargos que desempeñen.

2.<sup>a</sup> Hacer guardar el orden debido en los tribunales á los magistrados, auxiliares y subalternos.

3.<sup>a</sup> Exponer al Gobierno lo que estimen necesario ó conveniente para la más cumplida administracion de justicia.

4.<sup>a</sup> Recibir y despachar la correspondencia oficial.

5.<sup>a</sup> Dar curso con su informe á las solicitudes, quejas y consultas que el tribunal pleno, las Salas y los magistrados del tribunal, sus auxiliares y subalternos, en conformidad á lo que previene esta ley, eleven al Ministro de Gracia y Justicia.

6.<sup>a</sup> Reunir y presidir el tribunal pleno y la Sala de gobierno.

7.<sup>a</sup> Recibir las excusas de asistencia de los magistrados, de los auxiliares y subalternos, y ponerlas en cono-

cimiento del presidente de la Sala á quien corresponda.

8.<sup>a</sup> Nombrar á los magistrados que hayan de completar el número de los que sean necesarios para algun negocio, cuando no bastaren los de la dotacion de la Sala, con los de otra Sala, procurando la mayor igualdad en este servicio.

9.<sup>a</sup> Ordenar en todos los dias útiles, á la hora establecida para celebrar audiencia, que se distribuya el tribunal en Salas de justicia.

10.<sup>a</sup> Presidir cuando les parezca, cualquiera Sala de justicia, sin perjuicio de hacerlo en los casos en que expresamente la ley lo ordenare. En estrados llevarán, cuando presidan, la palabra, sin que ningun otro pueda usarla sin su permiso.

11.<sup>a</sup> Cuidar de que todos los magistrados auxiliares y subalternos llenen cumplidamente sus deberes, comunicarles las órdenes que estimen convenientes relativas al ejercicio de sus funciones, y amonestar privadamente á los que se muestren poco diligentes en el cumplimiento de sus cargos.

12.<sup>a</sup> Llamar al fiscal para hacerle las indicaciones que consideren oportunas para la mejor administracion de justicia, relativas á él y á sus subordinados, sin que se entiendan directamente con estos, ni coarten la libertad de accion que corresponde al ministerio fiscal.

Cuando lo consideren necesario podrán dirigirse al Gobierno, manifestando lo que relativamente al ministerio fiscal estimen oportuno.

13.<sup>a</sup> Poner en conocimiento de quien corresponda las faltas de los magistrados que den lugar á correcciones disciplinarias, y del tribunal competente, los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

14.<sup>a</sup> Dar cuenta al Gobierno de las vacantes que ocur-

ran, de la entrada y salida de los magistrados, jueces y auxiliares, del territorio del tribunal, cuando sean nombrados, ascendidos, trasladados, jubilados ó destituidos ó usen de licencia.

15.<sup>a</sup> Oír las quejas referentes á la administración de justicia que les hagan los interesados en causas ó pleitos por el retraso de los negocios; adoptar las providencias que estén dentro de sus facultades, y ponerlo en conocimiento de la Sala respectiva, cuando la gravedad del asunto lo requiera.

16.<sup>a</sup> Nombrar además de los subalternos cuya elección les corresponde con arreglo á esta ley, los dependientes de la secretaría que se satisfagan del material, darles licencia para ausentarse y separarlos libremente.

17.<sup>a</sup> Dictar las medidas que sean necesarias ó convenientes para el buen orden y conservación de los archivos y bibliotecas de los tribunales.

18.<sup>a</sup> Avisar cuando no pudieren asistir, á los que debían hacer sus veces.

Art. 585. Tendrá el presidente del Tribunal Supremo, además de las atribuciones que segun el artículo que precede y demás de esta ley ó de otras especiales le corresponden:

1.<sup>o</sup> La facultad de pedir por sí directamente á los presidentes de las Audiencias, de los tribunales de partido y á los juzgados municipales, los pleitos, causas ó expedientes que estuvieran terminados ó llevados completamente á ejecucion, cuando interese á la administración de justicia ó al Estado, devolviéndolos al tribunal ó juzgado de que procedan, tan luego como esté hecho el examen que hubiere motivado su reclamacion.

2.<sup>o</sup> La facultad de disponer visitas de inspeccion para examinar el estado de la administración de justicia en

determinada Audiencia , tribunal de partido ó juzgado municipal, cuando haya motivos fundados para hacerlo, despues de oir á la Junta de gobierno del Tribunal Supremo.

Art. 586. Los presidentes de las Audiencias tendrán las mismas atribuciones señaladas en el artículo anterior, pero limitadas, la primera á los pleitos, causas ó expedientes terminados y llevados á ejecucion en los juzgados de partido ó en los juzgados municipales de su distrito, y la segunda á los tribunales de partido y juzgados municipales, despues de oir á la Junta de gobierno.

Art. 587. Despues de que los presidentes, en conformidad á lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 584 de esta ley, hayan ordenado la distribucion de los tribunales en Salas de justicia, despacharán la correspondencia, y los demás asuntos de sus atribuciones, autorizando con su firma las comunicaciones que no deban ser dirigidas solo con la firma del secretario.

Art. 588. Concluido el despacho á que se refiere el artículo anterior, dará el presidente audiencia á los interesados que tengan que manifestar alguna queja, procediendo á lo que convenga con arreglo al núm. 15 del artículo 584.

Art. 589. Ningun juez, magistrado, Sala ó tribunal podrá elevar directamente solicitudes al Ministro de Gracia y Justicia, referentes á su cargo ó á asuntos del tribunal á que corresponda, sino por conducto de los superiores gerárquicos que á continuacion se expresan:

Los jueces municipales y de instruccion, por conducto de los presidentes de los tribunales de partido.

Los jueces de tribunales de partido y estos tribunales, por conducto de sus presidentes.

Los magistrados de Audiencias y sus Salas y las Au-



diencias en pleno, por conducto de los presidentes de las mismas.

Los magistrados del Tribunal Supremo, sus Salas y el tribunal en pleno, por conducto de su presidente.

Los presidentes deberán, al dar curso á las solicitudes, decir lo que acerca de ellas se les ofrezca y parezca.

Art. 590. Exceptúanse de lo ordenado en el artículo anterior las exposiciones que se dirijan al Gobierno en queja de alguno de los superiores gerárquicos, mencionados en el mismo artículo, en cuyo caso se omitirá aquel requisito y cuanto á él se refiere.

Art. 591. En las vacantes de la presidencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias y en los casos de enfermedad, ausencia, ú otro impedimento justo, ejercerá este cargo el presidente de Sala más antiguo, sin perjuicio de continuar éste presidiendo también aquella á que corresponda, siempre que las atenciones de la presidencia del Tribunal lo permitan.

## CAPITULO II.

### *De los presidentes de Sala de las Audiencias y del Tribunal Supremo.*

Art. 592. Corresponderá á los presidentes de Sala cumplir y hacer cumplir las leyes que se refieran al cargo que desempeñan; presidir las Salas á que correspondan; llevar en ellas la palabra, sin que ningun otro sin su permiso pueda usarla; hacer que en las mismas se guarde el orden debido, y poner en conocimiento del presidente todo lo que estime oportuno á la mejor administracion de justicia, y las faltas de los magistrados cuando considere que necesitan algun correctivo, que no quepa dentro del límite de sus atribuciones.

Art. 593. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad ó algun otro impedimento legítimo del presidente de Sala, hará sus veces el magistrado más antiguo de la misma.

### CAPITULO III.

#### *De los presidentes de los tribunales de partido.*

Art. 594. Corresponde á los presidentes de los tribunales de partido:

1.º Las atribuciones y obligaciones que los números 1.º, 2.º, 4.º, 11.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º y 18.º del artículo 584 establecen para los presidentes de las Audiencias y el del Tribunal Supremo.

2.º Exponer al Gobierno por conducto de los presidentes de las Audiencias lo que crean necesario ó conveniente para la mejor administracion de justicia en su partido.

3.º Recibir las excusas de asistencia que den los jueces, auxiliares y subalternos del tribunal, y hacer que se avise al que deba sustituirlos.

4.º Hacer al fiscal las indicaciones que estime oportunas para la mejor administracion de justicia, sin coartarle la libertad de accion que le corresponde.

Cuando lo reputen necesario, podrán dirigirse al fiscal de la Audiencia, manifestándole lo que acerca del modo de ejercerse en el tribunal de su partido la accion fiscal, estimen digno de su conocimiento.

5.º Poner en conocimiento de los presidentes de las Audiencias las vacantes que ocurran y las entradas y salidas de los jueces de instruccion y de los del tribunal que presidan, cuando sean nombrados, ascendidos, trasladados, jubilados ó destituidos, ó usen de licencia, para

que los presidentes de las Audiencias lo trasladen al Gobierno.

Lo mismo harán respecto á las vacantes que ocurran de plazas de auxiliares.

## TITULO XII.

### DE LA CONSTITUCION Y ATRIBUCIONES DE LAS AUDIENCIAS Y DEL TRIBUNAL SUPREMO EN PLENO.

Art. 595. Las Audiencias y el Tribunal Supremo se reunirán en pleno:

- 1.º Para constituirse en Salas de justicia.
- 2.º Para actos que no tengan carácter judicial.

Art. 596. Se constituirán las Audiencias en pleno, como Salas de justicia, en los casos expresamente establecidos en el art. 277 de esta ley.

Art. 597. Se constituirá el Tribunal Supremo en pleno como Sala de justicia en los casos expresamente establecidos en los artículos 284 y 285.

Art. 598. Cuando las Audiencias ó el Tribunal Supremo se constituyeren en pleno como Salas de justicia, se arreglarán á lo que respecto á estas prescriben las leyes.

Art. 599. Los presidentes de las Audiencias y el del Tribunal Supremo nombrarán respectivamente los auxiliares y subalternos que hayan de asistir á los tribunales en pleno constituidos en Salas de justicia.

Art. 600. Las Audiencias y el Tribunal Supremo solo podrán constituirse en pleno para actos que no tengan carácter judicial:

- 1.º En los casos expresados en los artículos 184, 186 y 193.

2.º Para evacuar los informes que les pida el Gobierno sobre reformas legislativas que sean ó deban ser aplicadas por el poder judicial, ó sobre otros puntos que más ó menos inmediatamente se refieran á la administracion de justicia.

3.º Cuando para deliberar sobre algun asunto grave lo acuerde así la Sala de gobierno.

Cuando para el mismo fin lo ordenare el presidente.

Art. 601. Para las reuniones de los tribunales en pleno de que trata el artículo que antecede, serán citados por orden del presidente todos los magistrados con antelación bastante para que puedan concurrir.

Tambien lo será el fiscal, que si no pudiere asistir por justa causa, será representado por el teniente fiscal ó por el que haga sus veces.

Art. 602. La categoría y antigüedad de cada magistrado señalarán su preferencia en el asiento.

El fiscal ó el que asista por él, ocupará el lugar que al tratar del ministerio fiscal se le señala.

Art. 603. El fiscal tendrá voz y voto en el tribunal pleno. El teniente fiscal ó el abogado fiscal que le sustituya tendrá voz, pero no voto.

Art. 604. No podrán estar presentes á las discusiones y votaciones los que tuvieren interés directo ó indirecto en el negocio de que se trate.

Art. 605. Los negocios que se lleven al tribunal pleno, irán preparados con informe escrito del ministerio fiscal.

Exceptúanse aquellos que por su urgencia no lo permitan, ó por su facilidad ó sencillez no lo requieran, á juicio del presidente.

Art. 606. La discusion versará sobre el dictámen escrito del fiscal, cuando lo hubiere.

Art. 607. Sobre cada uno de los asuntos que se presenten al tribunal en pleno, se abrirá discusion si hubiere alguno que quiera hacer uso de la palabra, y solo se cerrará cuando no haya quien la use, ó cuando á propuesta de algun magistrado ó del presidente, se dé el punto por suficientemente discutido.

Art. 608. Se turnará en el uso de la palabra por el orden que se hubiere pedido, alternando los que hablen contra el dictámen, puesto á discusion, con sus sostenedores.

El fiscal no estará sujeto á turno.

Art. 609. Cuando algun magistrado pidiere que se suspenda la discusion para mayor estudio de la cuestion que se ventile, se aplazará para otra sesion, siempre que la urgencia del negocio lo permitiere.

Art. 610. En los casos en que el asunto lo requiera, el presidente, en vista de la discusion, nombrará á un magistrado ó á una comision compuesta de dos ó tres magistrados, para que formulen un proyecto de acuerdo, del que se dará cuenta en otra sesion.

Art. 611. Concluida la discusion de cada asunto sin que tenga lugar el aplazamiento ó el nombramiento de comision en conformidad á lo que ordenan los dos artículos anteriores, se procederá á la votacion, que comenzará por el magistrado más moderno y seguirá por orden de menor antigüedad hasta el que presidiere.

Art. 612. El magistrado que disintiere de la mayoría, podrá pedir que conste su voto en el acta, sin necesidad de fundarlo por escrito, y así se hará. Cuando quisiere verificarlo por escrito, lo hará fundándolo, y se insertará en el acta siempre que lo presente dentro del dia siguiente á aquel en que se tomó el acuerdo.

Art. 613. El secretario de gobierno dará cuenta de

los negocios que se lleven al tribunal en pleno; estará presente á su discusion y votacion; redactará las actas en que se hará mencion de todos los acuerdos, refiriéndose á los expedientes en que se insertaren; anotará al márgen los apellidos de los que estén presentes á la sesion; custodiará el libro de actas, y dará en su caso las certificaciones correspondientes.

Art. 614. El presidente, espontáneamente ó por excitacion del fiscal ó de algun magistrado, podrá mandar que el secretario se retire cuando lo aconsejen las circunstancias especiales del negocio ó el buen nombre de la magistratura.

En este caso, el magistrado más moderno desempeñará las funciones de secretario y extenderá y autorizará las actas.

Art. 615. Habrá dos libros de actas.

Uno que se denominará libro general de actas y que estará á cargo del secretario de gobierno, en el cual se inscribirán las actas y los acuerdos que no tengan el carácter de reservados.

Otro que se denominará libro reservado de actas, en que se inscribirán los acuerdos que tengan este carácter. Este libro estará bajo la custodia del presidente.

Cuando en una misma sesion se tratare de asuntos de ambas clases, cada acuerdo se pondrá en su libro.

Los votos particulares de los magistrados se inscribirán en el libro en que esté el acuerdo á que se refieran.

## TITULO XIII.

DE LAS SALAS DE GOBIERNO DE LAS AUDIENCIAS Y DE LA  
DEL TRIBUNAL SUPREMO, Y DE LAS JUNTAS DE TRIBUNALES  
DE PARTIDO PARA NEGOCIOS GUBERNATIVOS.

### CAPITULO I.

*De las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal  
Supremo.*

Art. 616. Corresponderá á las Salas de gobierno de las Audiencias y á la del Tribunal Supremo:

1.º Velar por la administracion de justicia, en su respectivo distrito las Audiencias, y el Tribunal Supremo en toda la Monarquía, ejerciendo las atribuciones que esta ley ú otras especiales les confieran.

2.º Despachar los negocios que estén atribuidos á las Audiencias ó al Tribunal Supremo, y que por su índole no correspondan á Salas de justicia.

3.º Evacuar los informes que el Gobierno les pida relativos á la administracion de justicia, á la organizacion y régimen de los tribunales y á los asuntos gubernativos y económicos de los mismos.

4.º Evacuar los informes que relativamente á los asuntos á que se refiere el número anterior les pidiere su presidente.

5.º Proponer al Gobierno lo que consideren necesario ó conveniente en lo relativo á los asuntos á que se refieren los dos números anteriores.

6.º Proponer al Gobierno la separacion de los empleados de la dependencia del tribunal que fueren de Real

nombramiento, y acordar en este caso su suspension cuando lo estimaren necesario.

En lo que se refiere á los auxiliares se estará á lo que previene esta ley respecto á su separacion.

7.º Decidir las cuestiones relativas al repartimiento de negocios entre las Salas del tribunal á que correspondan, considerándolas como asuntos de gobierno interior y no de competencia, y por lo tanto, no dándoles carácter judicial, sino solo gubernativo.

8.º En los casos de disidencia entre magistrados, ó entre Salas, que puedan influir en la administracion de justicia ó en el orden y buen nombre de los tribunales, adoptar las medidas prudentes que requiera el caso, y si no bastaren, proponer al Gobierno lo que estimen más conducente.

9.º Ejercer la jurisdiccion disciplinaria en los casos que expresa esta ley.

10.º Constituirse en tribunal de justicia en los casos en que esta ley ú otras lo ordenaren.

11.º Desempeñar los demás cargos que esta ley ú otras especiales les confieran.

Art. 617. Las Salas de gobierno se reunirán, por lo menos una vez por semana, en el dia que al efecto se señale, y extraordinariamente cuando el presidente del tribunal lo juzgue necesario, y siempre antes ó despues de las horas de audiencia.

Solo podrá dejarse de celebrar la sesion semanal cuando no haya asuntos pendientes.

Art. 618. No se considerarán legalmente constituidas las Salas de gobierno sino cuando estén reunidos todos los que las compongan, ó los que en su caso deban representar á los ausentes ó impedidos.

Art. 619. En todo lo que se refiera á la manera de



discutir y votar, á los libros de actas y de votos reservados, y á las funciones del secretario, se arreglarán las Salas de gobierno á lo que previene el título XII respecto á las reuniones de tribunales en pleno.

Art. 620. Los acuerdos de las Salas de gobierno serán fundados.

En los casos en que estén conformes con el dictámen escrito del fiscal y con los motivos en que lo apoye, bastará que expresen su conformidad en ambos puntos.

Art. 621. Cuando las Salas de gobierno se constituyan en Salas de justicia ó para ejercer jurisdiccion disciplinaria, no formará parte de ellas el ministerio fiscal, el cual se limitará á ejercer las funciones especiales de su cargo.

Art. 622. En los negocios en que entendieren las Salas de gobierno, convirtiéndose en tribunales de justicia, se arreglarán á lo que prescriben las leyes de procedimientos.

## CAPITULO II.

### *De las juntas de los tribunales de partido para asuntos gubernativos.*

Art. 623. Los tribunales de partido se reunirán gubernativamente con asistencia del fiscal:

1.º Para dar lectura á las órdenes que no tengan carácter general, dirigidas al tribunal ó á su presidencia, cuando corresponda al tribunal acordar su cumplimiento.

2.º Para evacuar los informes que el Gobierno ó sus superiores gerárquicos les pidan en los negocios prevenidos en el núm. 2.º del art. 616 y 617.

3.º Para ejercer la jurisdiccion disciplinaria en los casos que previene esta ley.

4.º Para desempeñar los demás cargos que les confieran las leyes, cuando no tengan carácter judicial.

Art. 624. A estas juntas concurrirán todos los jueces que no estuvieren ausentes ó impedidos.

Cuando el fiscal por estar ausente ó impedido no pudiese asistir, no será sustituido por el suplente, sino por el juez más moderno.

Art. 625. En los casos en que las Salas de gobierno se reunan para ejercer la jurisdiccion disciplinaria, el fiscal se limitará á las funciones especiales de su cargo.

## TITULO XIV.

### DE LA APERTURA DE LOS TRIBUNALES.

Art. 626. En el dia 15 de Setiembre de cada año, ó cuando éste fuera festivo, en el siguiente, se verificará la solemne apertura de los tribunales, en el Supremo, á cuyo acto concurrirán todos los que en Madrid desempeñen cargos judiciales ó del ministerio fiscal, la Junta de gobierno del colegio de abogados, las de los colegios de notarios y procuradores y los auxiliares de los tribunales y juzgados.

Art. 627. Presidirá el acto de la apertura el Ministro de Gracia y Justicia cuando asistiere, y en su ausencia el presidente del Tribunal Supremo.

Art. 628. Leerá el Ministro de Gracia y Justicia, y en su defecto, el presidente del Tribunal Supremo, el discurso inaugural.

En el caso de que el presidente del Tribunal Supremo estuviere impedido, lo leerá el presidente de Sala más antiguo.

Art. 629. A la lectura expresada en el artículo que

precede, seguirá la de un cuadro sinóptico de los trabajos ejecutados por los juzgados y tribunales en el año judicial anterior, que se hará por el secretario de gobierno.

Concluida la lectura, el que presida declarará abierto el nuevo año judicial.

Art. 630. En el día siguiente al de la apertura reanudarán sus tareas los tribunales que hubieren tenido vacaciones.

Art. 631. Un Real decreto especial establecerá el orden de precedencia entre las diferentes clases de funcionarios que han de asistir á la apertura y las disposiciones concernientes á la formacion del cuadro sinóptico de las tareas judiciales en el año judicial anterior.

## TITULO XV.

### DEL MODO DE CONSTITUIRSE LOS JUZGADOS Y SALAS DE JUSTICIA DE LOS TRIBUNALES.

Art. 632. Tendrán los juzgados y tribunales todos los días no feriados audiencia pública, en el edificio destinado al efecto, por el tiempo que á continuacion se expresa:

Los jueces municipales, por el que sea necesario para el despacho de los negocios del día. Exceptúanse los que lo sean de pueblo que no llegue á 500 vecinos, los cuales podrán destinar solo dos días á la semana si bastaren para el despacho (1).

Los jueces de instruccion, por tres horas, á lo menos.

---

(1) La práctica había establecido que, así los jueces de paz como los alcaldes, destinaran solo dos días á la semana para la celebracion de juicios, lo cual daba lugar en Madrid y en las grandes poblaciones á graves inconvenientes, que se evitan con este precepto.

Los tribunales de partido, las Audiencias y el Tribunal Supremo, por cuatro horas, de las cuales tres por lo menos se destinarán á la vista de los pleitos y causas.

Art. 633. Los jueces y los presidentes de los tribunales señalarán la hora en que ha de comenzar la audiencia.

Un edicto fijado constantemente en la parte exterior de las Salas destinadas á los juzgados y tribunales, marcará la hora de empezar.

Art. 634. Sin justa causa no podrá ningun juez ó magistrado dejar de asistir á la audiencia.

Art. 635. Cuando no pueda asistir á la audiencia un juez municipal, lo avisará á su suplente con la anticipacion necesaria para que no deje de abrirse el juzgado, ni se suspenda el despacho de los negocios.

En el caso de que la falta de asistencia pasare de cinco dias, lo pondrá en conocimiento del tribunal de partido.

Art. 636. Los jueces de instruccion avisarán á los municipales del pueblo en que residan para que los sustituyan:

1.º Cuando por cualquiera causa no puedan asistir á la audiencia.

2.º Cuando tuvieren que salir del pueblo de su residencia para formar sumarias ó practicar otras diligencias judiciales.

3.º Cuando por impedimento justo no pudieren practicar algunas diligencias en la cabeza de partido.

Art. 637. Cuando los jueces de instruccion no pudieren por más de cinco dias celebrar audiencias públicas, lo pondrán en conocimiento del tribunal del partido.

Art. 638. Los jueces de los tribunales de partido y los magistrados que por causas justas no pudieren concurrir al tribunal, lo pondrán en conocimiento de los res-

pectivos presidentes, con la anticipacion necesaria, á fin de que en su caso avisen á los que deban sustituirlos.

Art. 639. En los tribunales de partido, en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, se llevará un libro de asistencias, en el cual el secretario más antiguo en los tribunales de partido y el de gobierno en las Audiencias y en el tribunal Supremo, anotarán en cada día de audiencia y por Salas los nombres de los jueces ó magistrados que asistan al tribunal, los que estén exentos de asistir y los que se hubieren excusado, con expresion de la causa. El presidente del tribunal ó el que le sustituya visitará diariamente estas anotaciones.

Art. 640. En todos los casos en que la ley no exija determinado número de jueces ó magistrados, bastarán para formar Sala:

Dos jueces en los tribunales de partido.

Tres en las Audiencias, y cinco en el Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 641. Alternarán entre sí los magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo y los presidentes de Sala, pasando de una á otra, siempre que el servicio lo requiera. Cada dos años el Ministro de Gracia y Justicia, oyendo á las Salas de gobierno, alterará ó confirmará la distribucion de magistrados en las Salas.

Art. 642. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo que antecede, el Ministro de Gracia y Justicia, á propuesta de la Sala respectiva de gobierno, podrá trasladar de una á otra los magistrados de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, siempre que así lo aconseje la conveniencia del servicio.

Art. 643. Cuando no haya en un tribunal de partido ó en una Sala el número de jueces ó magistrados, necesario para constituirlos para la vista de pleitos ó causas, y deba

completarse con los excedentes de otras ó con suplentes en conformidad á los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 79 de esta ley, se suspenderá el despacho ordinario ó las vistas hasta que se complete el número necesario.

Art. 644. Los nombramientos de los designados para asistir á un tribunal de partido ó á una Sala, que no sean de su dotacion, se harán saber inmediatamente á los designados, los cuales se darán por recusados si tuvieren justa causa, que estimará el presidente.

Cuando el presidente estimare que procede la abstencion, nombrará otro juez ó magistrado, respecto al que se observará lo prevenido en el artículo anterior.

Art. 645. No absteniéndose en los negocios civiles los que hubieren sido designados, se harán saber sus nombres á los procuradores de las partes y se procederá inmediatamente á la vista, á no ser que en el acto se hiciere alguna recusacion, aunque sea verbal. En este caso, formalizada que sea ésta por escrito dentro del tercer dia, se seguirá el incidente de recusacion en la forma establecida.

Art. 646. Cuando por no haberse hecho la recusacion en el acto, se procediere á la vista con arreglo á lo ordenado en el artículo anterior, se suspenderá por tres dias la discusion de la sentencia. Dentro de este término podrán ser recusados los jueces ó magistrados suplentes; trascurrido el término sin ejercitar este derecho, no se dará curso á las solicitudes de recusacion y empezará á correr el término respectivamente señalado para dictar sentencia.

Art. 647. Cuando se formalizare y se declarare procedente la recusacion, quedará sin efecto la vista y se verificará de nuevo con magistrados de la Sala ó con jueces del tribunal; y si no fuere posible, se practicará nuevamente lo que ordenan los artículos 643, 644, 645 y el presente.

Cuando se declarare no haber lugar á la recusacion, dictarán sentencia los jueces ó magistrados que hubiesen asistido á la vista, dentro del término legal, el cual empezará á correr desde el dia siguiente al de la sentencia dictada sobre la recusacion.

Art. 648. En las causas criminales, cuando los jueces ó magistrados designados para completar el número necesario, no correspondieren á la dotacion de la Sala de lo criminal, ó del tribunal de partido, se pondrá su designacion en conocimiento de las partes veinticuatro horas por lo menos antes de empezar el juicio público. No se dará curso á las recusaciones interpuestas despues de este término.

Las que se interpusieren dentro del término, se seguirán en la forma que queda ordenada.

## TITULO XVI.

### DE LAS AUDIENCIAS Y POLICÍA DE ESTRADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

Art. 649. El despacho ordinario y la vista de los pleitos y causas se harán en audiencia pública.

Art. 650. Podrán los jueces y tribunales, sin embargo de lo ordenado en el artículo anterior, disponer que se haga á puerta cerrada el despacho y vista de los pleitos y causas en que lo exijan la moral ó el decoro, á peticion de alguna de las partes interesadas, á excitacion del ministerio fiscal, ó de oficio, antes de la vista ó en el acto mismo de su celebracion.

En este último caso, oidas brevemente las partes, el juez ó tribunal decidirán lo que corresponda.

Contra lo que se decida, no se dará ulterior recurso.

Art. 651. Los secretarios darán cuenta del despacho ordinario por el orden de presentación de las peticiones en sus respectivas secretarías.

Art. 652. Las vistas de los negocios civiles y de las causas criminales se señalarán por el orden de su conclusion.

Exceptúanse las cuestiones de alimentos provisionales, de competencia, los interdictos posesorios, los de obra nueva ó vieja, los juicios ejecutivos, las denegaciones de justicia ó de prueba, las causas por delitos á que la ley señale pena que exceda de la de presidio mayor, y los demás negocios que por prescripcion expresa de otras leyes tengan preferencia, los cuales, estando conclusos, serán antepuestos á los demás, cuyos señalamientos aún no se hubieren hecho.

Art. 653. Los pleitos y las causas se verán en el día señalado.

Si al concluir las horas de la audiencia no hubiere finalizado la vista de algun acto, pleito ó causa, podrá suspenderse para continuarla en el día ó dias siguientes, á no ser que el presidente prorogue la audiencia.

Art. 654. Solo podrá suspenderse la vista de los negocios civiles en el día señalado:

1.º Por impedirlo la continuacion de un pleito ó causa pendiente del día anterior.

2.º Cuando por circunstancias imprevistas faltare el número de jueces ó magistrados necesarios para fallarlo.

3.º Cuando lo solicite cualquiera de las partes, fundándose en que su defensor tenga causa legítima, á juicio del tribunal, que le impida asistir á la vista.

Art. 655. Solo podrá suspenderse la vista de las causas criminales:



1.º Por alguna de las causas expresadas en el número 1.º del artículo anterior.

2.º Cuando en las causas criminales falte algun testigo importante ó alguna diligencia de prueba, de la cual pueda depender su éxito, á juicio del tribunal.

3.º Cuando el ministerio fiscal, el procesado ó su defensor, ó el del acusador, en las causas que no puedan seguirse de oficio, tuvieren causa legítima que les impidiere asistir á la vista.

Art. 656. Cuando el letrado que faltare á la defensa en causa criminal sin justa causa, hubiese sido nombrado de oficio, será corregido disciplinariamente (1).

Art. 657. La vista que fuere suspendida, volverá á señalarse para el dia más próximo cuando haya desaparecido el motivo de la suspension, y sin perjuicio, en lo posible, del orden con que estuvieren señaladas las vistas de los demás pleitos ó causas.

El exceso de gastos que ocasionara la suspension, por falta no justificada de un litigante, del procesado, de su defensor, del defensor del acusador, en las que no puedan seguirse de oficio, ó de algun testigo importante, será siempre de cuenta del que los haya originado.

Art. 658. Cuando empezade á ver algun negocio, enfermarse ó de otro modo se inhabilitare alguno ó algunos de los jueces ó magistrados para continuarlo, y no hubiere probabilidad de que el impedido pueda concurrir dentro de pocos dias, se procederá á nueva vista, completando el número de jueces ó magistrados con el ó los que deban reemplazar al ausente.

---

(1) Es muy oportuna esta innovacion; pues era verdaderamente lamentable la costumbre, generalmente admitida, de no asistir á las vistas los letrados nombrados de oficio cuando no se trataba de causas graves, por más que en las confiadas á su despacho se ventilasen difíciles cuestiones de hecho y de derecho.

Art. 659. Los que sean parte en los pleitos y causas podrán, con la v<sup>en</sup>ia del presidente, exponer lo que juzguen oportuno para su defensa en el acto de la vista, ó cuando se dé cuenta de cualquiera solicitud que les concierna.

El presidente deberá conceder la palabra en tanto que la usen contrayéndose á los hechos y guardando el decoro debido.

Art. 660. Los concurrentes á los estrados de los juzgados y tribunales estarán descubiertos; guardarán silencio y compostura, y observarán las disposiciones que para mantener el órden dictare el que presida.

Con igual respeto serán acatados los jueces, magistrados, fiscales y sus auxiliares, en cualquier acto ó lugar en que ejerzan su respectivo ministerio.

Art. 661. Los que interrumpieren la vista de algun proceso, causa ú otro acto solemne judicial, dando señales ostensibles de aprobacion ó desaprobacion, faltando al respeto y consideraciones debidas á los juzgados y tribunales, ó perturbando de cualquier modo el órden, pero sin que el hecho llegue á constituir delito, serán amonestados en el acto por el presidente, y expulsados del tribunal, si no obedecieren á la primera intimacion.

Art. 662. Los que se resistieren á cumplir la órden de expulsion, serán arrestados y corregidos sin ulterior recurso, con una multa que no exceda de 20 pesetas en los juzgados municipales, de 30 en los de instruccion, de 40 en los tribunales de partido, de 60 en las Audiencias y de 80 en el Tribunal Supremo, y no saldrán del arresto hasta que hayan satisfecho la multa, ó en sustitucion hayan estado arrestados tantos dias como sean necesarios para extinguir la correccion, á razon de 5 pesetas cada dia.

**Art. 663.** En los términos expresados en el artículo anterior, serán corregidos los testigos, peritos ó cualesquiera otros que, como partes ó representándolas, faltaren en las vistas y actos solemnes judiciales, de palabra, obra ó por escrito, á la consideracion, respeto y obediencia debidos á los tribunales, cuando sus actos no constituyan delito.

**Art. 664.** No están comprendidos en los dos artículos anteriores los que se hallen sujetos á la jurisdiccion disciplinaria, con arreglo á lo dispuesto en la presente ley.

**Art. 665.** Cuando los actos de que tratan los dos artículos que anteceden, llegaren á constituir delito ó falta, serán detenidos en el acto sus autores, instruyéndose la sumaria correspondiente y poniendo á los detenidos á disposicion del tribunal que deba conocer de la causa.

**Art. 666.** Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la influencia de intimidacion ó de fuerza.

Los jueces, tribunales y Salas que hubieren cedido á la intimidacion ó á la fuerza, tan luego como se vean libres de ellas, declararán nulo todo lo practicado y promoverán al mismo tiempo la formacion de causa contra los culpables.

## TITULO XVII.

DE LA FORMA DE DICTAR ACUERDOS, PROVIDENCIAS, AUTOS  
Y SENTENCIAS, Y DEL MODO DE DIRIMIR LAS DISCORDIAS.

### CAPITULO I.

*De la forma de dictar acuerdos, providencias, autos y sentencias.*

**Art. 667.** Las resoluciones de los tribunales en pleno, cuando no estén constituidos en Salas de justicia, y las de las Salas de gobierno, se llamarán acuerdos.

La misma denominacion se dará á las advertencias y á las correcciones que, por recaer en personas que estén sujetas á la jurisdiccion disciplinaria, se impongan en las sentencias ó en otros actos judiciales, cuando no se exprese en los autos la falta, correccion y nombre de la persona á que se refieran, con la frase *á lo acordado*.

Art. 668. Las resoluciones de los juzgados y tribunales que tengan carácter judicial, se denominarán:

*Providencias*, cuando sean de mera tramitacion.

*Autos*, cuando decidan incidentes ó puntos que determinen la personalidad combatida de alguna de las partes, la competencia del juzgado ó tribunal, la procedencia ó improcedencia de la recusacion, la determinacion de la accion, la admision ó inadmission de las excepciones ó de la reconvention, la reposicion de alguna providencia, la denegacion de la reposicion, la prision y soltura, la admision ó denegacion de prueba, las que puedan producir á las partes un perjuicio irreparable, y las demás que segun las leyes deban fundarse.

*Sentencias*, cuando decidan definitivamente la cuestion civil ó criminal del pleito ó de la causa en una instancia, ó en un recurso extraordinario; las que, recayendo sobre un incidente, pongan término á lo principal, objeto del pleito, haciendo imposible su continuacion, y las que declaren haber ó no lugar á oír á un litigante ó reo declarado en rebeldía.

*Sentencias firmes*, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentidas por las partes.

*Ejecutoria*, el documento público y solemne en que se consigne una sentencia firme (1).

---

(1) Necesario era uniformar la nomenclatura de las providencias, como se

Art. 669. La fórmula de las *providencias* se limitará á la determinacion del juez ó tribunal, sin más fundamentos ni adiciones que la fecha en que se acuerde, la rúbrica del juez ó del presidente de la Sala y la firma del secretario.

La fórmula de los *autos* será fundándolos en resultados y considerandos, concretos y limitados, unos y otros, á la cuestion que se decida.

Las *sentencias definitivas* se formularán con resultados en que se exprese con claridad y con la posible concision los hechos importantes que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolver el juez ó tribunal, y con considerandos en que se apliquen las leyes.

Art. 670. Las *ejecutorias* se encabezarán en nombre del Rey.

En ellas se insertarán las sentencias firmes, y las anteriores, solo cuando por referirse las firmes á ellas, sean su complemento.

Art. 671. Las providencias, los autos y las sentencias serán pronunciadas necesariamente dentro del término que respectivamente establezca la ley.

El juez ó tribunal que no lo hiciere, será corregido disciplinariamente, á no mediar justas causas, que hará constar en los autos.

Art. 672. El juez único, para dictar sentencia, verá por sí los autos.

A los tribunales colegiados se dará cuenta de ellos por los respectivos secretarios, formando apuntamiento en los casos que lo ordenen las leyes de Enjuiciamiento.

Art. 673. El número de jueces ó magistrados para

---

hace en este artículo, pues especialmente en primera instancia se usaba indistintamente de las palabras *auto definitivo* ó *sentencia*, lo cual era ocasionado á confusion, sobre todo para las partes que ignoraban esta práctica.

fallar pleitos y causas será siempre impar y sin que pueda bajar del necesario para celebrar audiencia ni exceder del que baste á dictar sentencia definitiva, segun la naturaleza del pleito ó causa, con arreglo á las leyes de Enjuiciamiento.

Art. 674. En cada pleito ó causa que penda en los tribunales habrá un juez ó magistrado ponente.

Turnarán en este cargo los jueces ó magistrados de la Sala, á excepcion del que la presida.

No estará éste, sin embargo, exento, cuando el tribunal ó la Sala se componga de tres.

Art. 675. Corresponderá á los ponentes :

1.º Informar al tribunal ó á la Sala sobre la admision ó desestimacion de las adiciones á los apuntamientos, que soliciten las partes.

2.º Examinar los interrogatorios y proposiciones de prueba, presentadas por las partes, y calificar su pertinencia. En caso de reclamacion, decidirá el tribunal ó la Sala.

3.º Discernir los cargos de curadores para pleitos ó causas; recibir las declaraciones y ratificaciones de los testigos, y practicar todas las diligencias de prueba ó de otra clase que les ordene el tribunal ó la Sala, cuando segun las leyes no deban practicarse ante el mismo tribunal ó Sala, ó se hagan fuera del pueblo en que esté constituido y no se dé comision á los jueces municipales ó de instruccion para que las practiquen.

4.º Proponer los autos y las sentencias que hayan de someterse á discusion del tribunal y redactarlas definitivamente, conformándose con lo acordado.

En el caso de que no se conformare con el voto de la mayoría, se encargará el juez ó magistrado, nombrado por el presidente del tribunal ó de la Sala, de la redaccion definitiva de la sentencia.

5.º Leer en audiencia pública la sentencia.

Art. 676. Si por cualquier circunstancia no pudiere fallarse algun negocio en el dia correspondiente, no será obstáculo á que se decidan ó sentencien otros, vistos con posterioridad, sin que por ellos se altere el orden más que en lo que sea absolutamente indispensable.

Art. 677. Concluida la vista de los actos, pleitos ó causas, podrá cualquiera de los jueces ó magistrados pedir los autos para reconocerlos privadamente.

Quando los pidieren varios, fijará el que presida el término que haya de tenerlos cada uno, de modo que puedan dictarse las sentencias dentro del tiempo señalado para ello.

Art. 678. Exceptúanse de lo establecido en el artículo anterior las sentencias en los juicios por jurados, que deberán votarse inmediatamente despues de pronunciado el veredicto, no pudiendo separarse el tribunal hasta que haya votado reservadamente y se haya publicado la sentencia en la Sala en que se hubiere celebrado el juicio.

Art. 679. En los juicios civiles y en los criminales en que no intervenga el Jurado podrán pronunciarse los autos y las sentencias inmediatamente despues de la vista; y cuando así no se hiciere, señalará el presidente el dia en que se haya de votar dentro del término señalado respectivamente por las leyes.

Art. 680. La discusion y votacion de las sentencias se verificará siempre en todos los tribunales á puerta cerrada y antes ó despues de las horas señaladas para el despacho ordinario y para las vistas.

Art. 681. El ponente someterá á la deliberacion del tribunal los puntos de hecho, los fundamentos de derecho y la decision que deba comprender la sentencia, y prévia la discusion necesaria, se votará sucesivamente.

Art. 682. Votará primero el ponente, y despues de él los jueces y magistrados por el órden inverso de su antigüedad; el que presida votará el último.

Art. 683. En las causas que se hubieren visto en juicio oral y en los pleitos, cuando la importancia de la discusion lo exigiere, podrá el que presida hacer un breve resúmen de ella antes de la votacion.

En las causas en que interviniere el Jurado, se estará á lo que establezca la ley de Enjuiciamiento criminal.

Art. 684. La sentencia se dictará por mayoría absoluta de votos, excepto los casos en que la ley exigiere expresamente mayor número.

Art. 685. Cuando despues de fallado un pleito por un tribunal, se imposibilitare algun juez ó magistrado de los que votaron y no pudiese firmar, el que hubiere presidido el tribunal lo hará por él expresando el nombre de aquel por quien firme, y despues las palabras *votó en Sala y no pudo firmar*.

Art. 686. Cuando despues de la vista y antes de la votacion, algun juez ó magistrado se imposibilitare y no pudiese asistir á la votacion, dará su voto fundado y firmado, y lo remitirá directamente al presidente de la Sala.

Si no pudiese escribir ni firmar, se valdrá del secretario de la Sala.

El voto así emitido, se unirá á los demás, y se conservará rubricado por el que presida, con el libro de sentencias.

Quando el impedido no pudiese votar ni aun de este modo, se votará el pleito ó causa por los no impedidos que hubieren asistido á la vista, y si hubiere los necesarios para formar mayoría, éstos dictarán sentencia.

Quando en los negocios civiles no hubiere votos bastantes para constituir mayoría, se procederá á nueva vis-



ta, á la que concurrirán los jueces y magistrados que hubiesen asistido á la anterior, y aquel ó aquellos que reemplazaren á los impedidos.

Quando en las causas criminales no hubiere mayoría, se estará á lo que ordena esta ley respecto á las discordias.

Art. 687. Quando fuere trasladado, jubilado, separado ó suspenso algun juez ó magistrado, votará los pleitos y causas á cuya vista hubiere asistido y aún no se hubiesen fallado.

Art. 688. Empezada la votacion de una sentencia, no podrá interrumpirse sino por algun impedimento insuperable.

Art. 689. Todo el que tome parte en la votacion de una sentencia, firmará lo acordado aunque hubiese disentido de la mayoría; pero podrá en este caso salvar su voto extendiéndolo, fundándolo é insertándolo con su firma al pié, dentro de las veinticuatro horas siguientes, en el libro de votos reservados.

Art. 690. En las certificaciones ó testimonios de las sentencias que expidieren los tribunales, no se insertarán los votos particulares, pero se remitirán á la Audiencia ó al Tribunal Supremo en su caso, y se harán públicos, quando se interponga y admita recurso de casacion.

Art. 691. Las sentencias se firmarán por todos los magistrados ó jueces no impedidos dentro de las veinticuatro horas siguientes á aquella en que se hayan acordado.

En las causas en que intervenga el Jurado, se firmarán en el acto de acordarlas.

Art. 692. En cada tribunal donde hubiere solo una Sala y en cada Sala de Audiencia ó del Tribunal Supremo, se llevará un registro de sentencias, en el cual se extenderán y firmarán todas las definitivas.

Art. 693. El registro expresado en el artículo anterior estará en los tribunales de distrito, en las Audiencias y en el Tribunal Supremo bajo la custodia de los presidentes respectivos de las Salas, ó donde no las hubiere, del presidente del tribunal.

Los reglamentos determinarán la forma en que han de llevarse los registros á que se refieren los párrafos anteriores.

Art. 694. Las sentencias definitivas se leerán en audiencia pública y se notificarán á los procuradores de las partes el mismo dia en que se publiquen, ó á lo más al siguiente.

Art. 695. Los jueces y tribunales no podrán variar las sentencias que pronuncien despues de firmadas, pero sí aclarar algun concepto oscuro ó suplir cualquiera omision que contengan dentro del dia hábil siguiente al de la notificacion.

Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio ó á instancia de parte ó del ministerio fiscal en su caso.

## CAPITULO II.

### *Del modo de dirimir las discordias.*

Art. 696. Cuando en la votacion de una sentencia definitiva, auto ó providencia que recayere en acto, pleito ó causa criminal, no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho ó de derecho que deban hacerse, ó sobre la decision que haya de dictarse, volverán á discutirse y á votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.

Quando en los negocios civiles tampoco resultare del segundo escrutinio mayoría, se dictará providencia decla-

rando la discordia y mandando celebrar nueva vista con más magistrados.

Art. 697. Las discordias que resulten en los tribunales de partido al fallar sobre los negocios civiles y causas criminales de su competencia, se dirimirán, con sujeción á las reglas que se determinan en los artículos siguientes para las que ocurran en las Audiencias, por los suplentes á que se refiere el art. 73, siendo llamados al efecto según el orden que en el mismo se establece. A falta de estos, se llamarán los jueces municipales, que fueren letrados, de los pueblos más próximos.

Art. 698. La nueva vista se celebrará con los magistrados que hubieren asistido á la primera, aumentándose dos más cuando los discordantes fueren tres, y cuatro más si fueren cinco ó más los que discordasen.

Art. 699. Asistirán por orden á dirimir las discordias:

- 1.º El presidente del tribunal.
- 2.º Los magistrados de la Sala respectiva que no hayan visto el pleito.
- 3.º Los magistrados más antiguos del tribunal con exclusion de los presidentes.

Art. 700. El presidente del tribunal hará el señalamiento de las vistas en discordia previo aviso del presidente de la Sala respectiva, y despues de designar los magistrados á quienes corresponda dirimirla.

Art. 701. Los nombres de los magistrados que hayan de dirimir la discordia, se harán saber oportunamente á los litigantes, para que puedan hacer uso del derecho de recusacion si fuere procedente.

Art. 702. Los magistrados discordantes consignarán con toda claridad en la providencia que hubiese causado la discordia, los puntos en que convinieren, y aquellos en

que disintieren. Se limitarán á decidir con los dirimientes aquellos en que no hubiese habido conformidad.

Art. 703. Antes de empezar á ver un pleito en discordia, el presidente de la Sala, que haya de dirimirla, preguntará á los discordantes si insisten en sus pareceres, y solo en caso de contestar afirmativamente, se procederá á la vista.

Si al verificarse la votacion de la sentencia en discordia, llegaren á convenir los discordantes en número suficiente para formar mayoría, no pasará adelante el acto.

Art. 704. Cuando en la votacion de una sentencia por la Sala de discordias no se reune tampoco mayoría absoluta de votos sobre los puntos discordados, se procederá á nuevo escrutinio, poniendo solamente á votacion los dos pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente.

Art. 705. Los discordias que resulten en el Tribunal Supremo al fallar en el fondo los negocios civiles cuya ejecutoria hubiese sido casada, los recursos contra la Administracion, las cuestiones de competencia y cualesquiera otras ventiladas en juicio escrito, se dirimirán en la forma establecida en los artículos anteriores.

Art. 706. En las causas criminales cuando en la segunda votacion insistieren los discordantes en sus respectivos pareceres, se someterán á nueva deliberacion los dos votos más favorables al procesado, excluyendo los demás, y entre aquellos optarán precisamente todos los votantes, de modo que resulte aprobado cualquiera de ambos, á menos que convenga la mayoría en otro distinto.

En este caso pondrán en lugar oportuno de la sentencia las siguientes palabras:

*Visto el resultado de la votacion, la ley condena.*

La determinacion de cuáles sean los dos pareceres más

favorables al procesado, se hará á pluralidad de votos.

Art. 707. Las discordias que resultaren en el mismo Tribunal Supremo al fallar las causas de que conozca en juicio oral y público, se dirimirán en conformidad á lo prescrito en el artículo precedente.

Art. 708. En las sentencias que pronunciare el Tribunal Supremo en los recursos de casacion, en los de revision ó en causas criminales, no habrá discordia, quedando al efecto desechados los resultandos y considerandos que no reunan mayoría absoluta de votos.

## TITULO XVIII.

### DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA SOBRE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

Art. 709. La inspeccion y vigilancia sobre el cumplimiento de los deberes de los jueces y tribunales, se ejercerá:

Por los presidentes de los tribunales.

Por las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo.

Por las Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo.

Por los tribunales de partido.

Art. 710. Ejercerán la inspeccion y vigilancia el presidente del Tribunal Supremo y los de las Audiencias en virtud de las atribuciones que les dan, y deberes que les imponen, los artículos 584, 585 y 586, y los presidentes de los tribunales de partido en virtud de los que les señala el art. 594.

Art. 711. Para facilitar la inspeccion y vigilancia se remitirán estados anuales de los negocios civiles y crimi-

nales pendientes y terminados en el año judicial anterior:

Por los juzgados municipales, á los tribunales de partido.

Por los tribunales de partido, á las Audiencias.

Por las Audiencias, al Tribunal Supremo.

Art. 712. Los estados remitidos por los tribunales de partido á las Audiencias comprenderán el resúmen de los que hubieren recibido de los juzgados municipales, además de los suyos que les corresponda remitir.

Los estados de las Audiencias irán acompañados del resúmen de los que hubieren remitido los juzgados municipales y los de partido.

Art. 713. En el Tribunal Supremo se formará un resúmen general de estos negocios, que se remitirá al Gobierno con los del mismo Tribunal.

Art. 714. Los reglamentos establecerán la forma y el tiempo en que cada tribunal y juzgado debe remitir á su respectivo superior los estados á que se refieren los tres artículos anteriores.

Art. 715. El presidente del Tribunal Supremo y los de las Audiencias podrán ordenar visitas de inspeccion en conformidad á los artículos 585 y 586 de esta ley:

Por orden del Gobierno.

De oficio.

En virtud de excitacion del ministerio fiscal.

En virtud de excitacion de las Salas de gobierno.

En virtud de excitacion de las Salas de justicia.

Art. 716. Los presidentes de los tribunales de partido no podrán ordenar visitas de inspeccion para juzgados municipales; pero cuando á su juicio sea necesaria la de alguno, lo manifestarán al presidente de la Audiencia para que resuelva lo que estime procedente despues de oir en su caso á la Sala de gobierno.

Art. 717. Las Salas de gobierno de las Audiencias podrán promover visitas de inspeccion cuando lo consideren conveniente por consecuencia de las Memorias que con arreglo al número 7.º, art. 37, presenten los magistrados que presidan los tribunales de partido.

Art. 718. Las Salas de justicia ejercerán su inspeccion en los negocios civiles ó criminales de que conozcan.

Quando en su concepto conviniere, para evitar abusos, adoptar alguna medida que no sea de sus atribuciones ó despachar alguna visita á algun juzgado ó tribunal, lo manifestarán al presidente para que éste, oida la Sala de gobierno, proceda á lo que corresponda.

Art. 719. Quando el presidente del Tribunal Supremo y los de las Audiencias usaren de las atribuciones que respectivamente les dan el núm. 2.º del art. 585 y el art. 586 de esta ley, expresarán en la comision de visita los puntos á que esta debe extenderse.

Art. 720. La eleccion de visitador recaerá:

En un magistrado del Tribunal Supremo, cuando la visita fuere para Audiencia.

En un magistrado de Audiencia, cuando la visita fuere para tribunal de partido.

En un magistrado de Audiencia ó juez de tribunal de partido, cuando la visita fuere para juzgado municipal.

Art. 721. Podrá el presidente del Tribunal Supremo, cuando lo considere oportuno, delegar en el presidente de la Audiencia el nombramiento:

Del magistrado, que por su órden deba visitar tribunales de partido.

Del juez del tribunal de partido ó del magistrado, que haya de visitar juzgados municipales.

Art. 722. En los casos de delegacion, expresados en

el artículo anterior, se entenderán los jueces ó magistrados, nombrados para la visita, con el presidente del Tribunal Supremo, en todo lo que á la visita se refiera.

Art. 723. Procurarán los presidentes de las Audiencias, cuando no ofrezca inconveniente, encomendar la visita de los tribunales de partido á alguno de los magistrados que, con arreglo el art. 37 de esta ley, salgan á presidirlos ó á presidir las Salas ordinarias ó extraordinarias de las Audiencias ó á formar parte de aquellas, en conformidad á los artículos 13, 55 y 56.

Art. 724. En lo que se refiere al modo de turnar los jueces y magistrados en este servicio, y á las causas que alegaren para eximirse de él, se estará á lo que respecto á los magistrados establecen los números 2.º y 3.º del artículo 37 de esta ley.

A los magistrados se les tomará en cuenta para estos turnos las salidas que hicieren para formar ó presidir Salas ordinarias ó extraordinarias de Audiencia fuera del punto en que éste resida.

Art. 725. Las visitas de inspeccion que se hagan en conformidad á lo ordenado en este título, comprenderán el exámen de todo lo que se refiera á las reglas establecidas para el gobierno de los tribunales y para la buena administracion de justicia, á sus secretarías y á todas sus dependencias.

Art. 726. Podrán las visitas de inspeccion, en los casos en que lo ordenen expresamente los presidentes de las Audiencias ó el del Tribunal Supremo, comprender:

1.º El registro civil.

2.º El registro de la propiedad.

3.º El registro que en conformidad á las leyes deberá llevarse en los tribunales de partido, de los discernimientos de los cargos de tutores y curadores para bienes, del



exámen anual que han de hacer de ellos y de las medidas adoptadas para reemplazar á los que hubieren fallecido ó cesado por otra causa en su cargo, de la prestacion de cuentas, destino ó imposicion de fondos y de cuanto conduzca á evitar abusos ó remediar los que se hubieren introducido.

4.º Los de las notaría.

5.º La confrontacion de la exactitud de los estados anuales que refiere el art. 711.

Art. 727. Los visitadores escribirán una Memoria de visita relativa á su comision, que se pasará al fiscal del tribunal cuyo presidente hubiere decretado la visita.

Art. 728. La junta de gobierno del tribunal correspondiente, en vista del dictámen fiscal, adoptará las medidas que quepan dentro de sus atribuciones, y cuando no alcanzaren, propondrá el Gobierno lo que estime conveniente.

Art. 729. El Gobierno, cuando lo considere necesario, podrá nombrar comisarios régios que visiten los tribunales y juzgados.

Art. 730. Para desempeñar su comision, se facilitarán á los visitadores el secretario y dependientes necesarios, los cuales serán pagados del crédito que para este caso se consignare en los presupuestos del Estado.

## TITULO XIX.

### DE LA JURISDICCION DISCIPLINARIA.

Art. 731. Estarán sujetos á la jurisdiccion disciplinaria:

- 1.º Los jueces y magistrados.
- 2.º Los auxiliares de los juzgados y tribunales.
- 3.º Los abogados y procuradores.

Art. 732. La jurisdiccion disciplinaria sobre los jueces y magistrados, será ejercida:

Por los tribunales de partido, respecto á los jueces municipales y de instruccion.

Por las Salas de gobierno de las Audiencias respecto á los jueces de tribunales de partido.

Por la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, respecto á los magistrados.

Las Salas de gobierno de las Audiencias y la del Tribunal Supremo se constituirán en Salas de justicia para ejercer la jurisdiccion disciplinaria.

Art. 733. La jurisdiccion disciplinaria no se extenderá á los hechos ni á las omisiones que constituyan delito, ni á hechos de la vida privada que no se hayan manifestado con publicidad.

Art. 734. Los jueces y magistrados serán corregidos disciplinariamente:

1.º Cuando faltaren de palabra, por escrito ó por obra á sus superiores en el orden gerárquico.

2.º Cuando faltaren gravemente á las consideraciones debidas á sus iguales.

3.º Cuando traspasaren los límites racionales de su autoridad respecto á los auxiliares y subalternos de los juzgados y tribunales, ó á los que acudan á ellos en asuntos de justicia, ó á los que asistan á los estrados, cualquiera que sea el objeto con que lo hagan.

4.º Cuando fueren negligentes en el cumplimiento de sus deberes.

5.º Cuando por la irregularidad de su conducta moral, ó por vicios que les hicieren desmerecer en el concepto público, comprometieren el decoro de su ministerio.

6.º Cuando por gastos superiores á su fortuna, con-

trajeren deudas que dieren lugar á que se entablen contra ellos demandas ejecutivas.

7.º Cuando recomendaren á jueces ó tribunales negocios pendientes en juicio contradictorio ó causas criminales.

8.º Cuando infringieren las prohibiciones contenidas en los números 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del art. 7.º de esta ley.

9.º Cuando sin autorizacion del Ministerio de Gracia y Justicia publicaren escritos en defensa de su conducta oficial, ó atacando la de otros jueces ó magistrados.

Art. 735. Solo podrán promover las correcciones disciplinarias:

Los presidentes de los tribunales á que correspondiere la jurisdiccion disciplinaria en el caso que sea objeto de ella.

Los fiscales de los mismos tribunales.

Art. 736. Tanto los presidentes como los fiscales podrán promover la correccion por los datos que con caracteres de ciertos hayan llegado á su noticia, por queja de los agraviados, con antecedentes bastantes para demostrar la existencia de hechos que caigan bajo la jurisdiccion disciplinaria, ó cuando se lo prevengan sus superiores en el órden jerárquico.

Art. 737. El procedimiento será meramente instructivo y consistirá en dar vista al juez ó al magistrado, y al fiscal contra quien se proceda, de los antecedentes; admitir los medios de prueba que ambos presentaren; procurar el complemento de los demás que puedan contribuir á aclarar ó á fijar los hechos, y oír por escrito á la parte interesada y al ministerio fiscal.

Art. 738. El juez ó magistrado contra quien se dirija el expediente, será oído antes que el fiscal, cuando el presidente hubiere promovido el expediente.

Cuando el fiscal lo hubiere promovido, será oído éste antes.

Al que se le dé audiencia en segundo lugar, se le pondrá de manifiesto el escrito del contrario.

Art. 739. Terminado el expediente, el tribunal ó la Sala de gobierno, impondrá la correccion disciplinaria ó declarará no haber lugar á imponerla.

Art. 740. A los jueces municipales solo se impondrán las correcciones:

De repension simple.

Multa que nunca bajará de 25 pesetas, ni excederá de 250.

Art. 741. Las correcciones que se impongan á los jueces de instruccion, á los de tribunales de partido y á los magistrados, serán:

Repension simple.

Repension calificada.

Postergacion para ascensos.

Privacion de sueldo.

Suspension de empleo y privacion de sueldo.

Art. 742. Consistirá la repension simple en la comunicacion literal de la correccion que el presidente del tribunal que la hubiere impuesto hará al corregido, directamente, cuando fuese éste juez municipal ó presidente de tribunal de partido ó de Audiencia, y en los demás casos, por conducto del presidente del tribunal á que corresponda.

Art. 743. La repension calificada consistirá en la comunicacion hecha del modo expresado en el artículo anterior y en la pérdida del sueldo correspondiente de uno á tres meses.

Art. 744. La postergacion consistirá en no poder ser ascendido por término de seis meses á un año.

Este término se contará:

Para los ascensos de antigüedad rigurosa, desde el día en que les correspondiere el ascenso por el fallecimiento de la persona que dé lugar al turno.

Para los ascensos en que el nombramiento pueda recaer en personas que esté en determinada parte de una escala ó en toda ella, desde el día en que el corregido acusare el recibo de la comunicacion en que se le hiciere saber la resolucion del tribunal.

Art. 745. La privacion de sueldo no bajará de tres meses, ni excederá de seis.

Art. 746. La correccion de suspension de empleo y privacion de sueldo, durará por lo menos tres meses, y podrá extenderse hasta doce.

En los casos de reincidencia en actos de la misma naturaleza del anteriormente corregido, con suspension de empleo y privacion de sueldo, esta será siempre por un año.

Art. 747. Los tribunales y Salas de gobierno podrán imponer las correcciones expresadas en el artículo anterior segun su prudente arbitrio, tomando en cuenta la mayor ó menor gravedad de los actos ú omisiones.

Art. 748. Las correcciones impuestas á los jueces municipales y de instruccion por los tribunales de partido, serán reclamables para ante las Salas de gobierno de las Audiencias dentro de los diez dias siguientes á aquel en que hubiesen sido comunicadas á los corregidos. Estos pedirán al presidente del tribunal de partido que remita los antecedentes al de la Audiencia. Las Salas de gobierno, uniendo á los antecedentes los que le presentaren ó remitieren directamente los interesados, y cualquiera otra comunicacion que le dirigiere el presidente del tribunal de partido, confirmarán, sin forma de juicio, la correccion, si la esti-

maren justa, y en otro caso la alzârán, atenuarân ó agravarân, segun estimaren procedente.

Art. 749. Contra las resoluciones de las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo no se dará ulterior recurso.

Art. 750. Serán corregidos disciplinariamente por los tribunales de partido y por las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo, los auxiliares de los tribunales:

Cuando se hallaren en uno de los casos expresados en los números 1.º, 2.º, 4.º, 5.º y 6.º del art. 734.

Cuando no guardaren la debida consideración á los que acudan á ellos en cosas relativas á sus funciones, y no se mostraren imparciales en el desempeño de las mismas.

Cuando tuvieren vicios que los hagan desmerecer en el concepto público.

Art. 751. Los juzgados ejercerán la jurisdiccion disciplinaria, en los casos expresados en el art. 734, sobre los auxiliares que en ellos respectivamente ejerzan sus cargos.

Art. 752. Las correcciones que podrán imponerse á los auxiliares de los juzgados y tribunales, serán:

Advertencia.

Apercibimiento.

Multa que no exceda de 100 pesetas en los juzgados municipales, de 200 en los de instruccion, de 300 en los de partido, de 500 en de Audiencias y de 1.000 en el Tribunal Supremo.

Reprension á puerta cerrada por el juez ó por el presidente del tribunal en que ejerciere su cargo el corregido.

Reprension á puerta cerrada ante el tribunal ó Sala á que corresponda el corregido.

Suspension de empleo y privacion de sueldo y de emo-

lumentos, que no exceda de seis meses ni baje de tres: en caso de reincidencia en actos de la misma clase, podrá extenderse á un año. Durante la suspension, el sueldo y emolumentos serán para los que desempeñen sus cargos.

Art. 753. Podrán recurrir los auxiliares:

Por las correcciones impuestas por los juzgados municipales y de instruccion, á los tribunales de partido, contra cuya resolucion, confirmando, alzando, atenuando ó agravando la correccion no habrá ulterior recurso.

De las impuestas á sus auxiliares por los tribunales de partido, á las Salas de gobierno de las Audiencias.

Art. 754. Contra las correcciones impuestas por las Salas de gobierno de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, no habrá ulterior recurso.

Art. 755. En los recursos que los auxiliares interpongan contra las correcciones de los jueces municipales y de instruccion ante los tribunales de partido y contra las resoluciones de éstos, cuando procedan ante las Salas de las Audiencias, seseguirá el orden prescrito en el art. 748, en cuanto les sea aplicable.

Art. 756. Serán corregidos disciplinariamente por los juzgados municipales, tribunales de partido y por las Salas de justicia de los demás tribunales, los abogados y procuradores en los casos siguientes:

Cuando en el ejercicio de su profesion faltaren oralmente, por escrito ó de obra, al respeto debido á los juzgados y tribunales.

Cuando en la defensa de sus clientes se descompusieren contra sus colegas de una manera grave é innecesaria para aquella.

Cuando llamados al orden en las alegaciones orales, no obedecieren al que presidiere el tribunal.

Art. 757. No obstará lo ordenado en el artículo ante-

rior á que, llamados al órden y pidiendo y obteniendo la vénia del juez ó del que presida el acto, puedan explicar las palabras que hubiesen pronunciado y manifestar el sentido ó intencion que les hubiesen querido dar, ó satisfacer cumplidamente al juzgado ó tribunal.

Art. 758. Las correcciones de los abogados y procuradores se impondrán siempre por el juzgado, tribunal ó Sala de justicia donde se siguieren los autos que dieren lugar á ellas, ó en los que se hubieren propasado en la defensa oral.

Art. 759. Las correcciones se pronunciarán de plano sin tomar en cuenta más que lo consignado en los escritos ó en la certificacion que en el mismo acto hubiere extendido el secretario, de órden del presidente, tanto de lo que se considerare digno de correccion, como de las explicaciones dadas.

Art. 760. Contra las resoluciones en que los jueces municipales, de instruccion ó de tribunal de partido hubieren impuesto las correcciones á los abogados ó procuradores, podrá apelarse á las Audiencias.

Contra las correcciones que se impusieren en Salas de justicia, de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, solo habrá recurso de súplica ante la misma Sala que las hubiese impuesto.

Art. 761. Los recursos de apelacion y de súplica á que se refiere el artículo anterior, se sustanciarán en la forma establecida para los incidentes en materia civil.

Art. 762. No obstará lo ordenado en este título á que los juzgados y tribunales impongan á los abogados y procuradores las correcciones que correspondan con arreglo á las leyes, por faltas ó excesos en el ejercicio de sus cargos, que no sean de los comprendidos en el art. 756.



## TITULO XX.

## DEL MINISTERIO FISCAL.

Art. 763. El ministerio fiscal velará por la observancia de esta ley y de las demás que se refieran á la organizacion de los juzgados y tribunales; promoverá la accion de la justicia en cuanto concierne al interés público, y tendrá la representacion del Gobierno en sus relaciones con el poder judicial.

## CAPITULO I.

*De la planta del ministerio fiscal.*

Art. 764. En todos los juzgados y tribunales habrá uno ó más representantes del ministerio fiscal.

Estos serán:

Un solo fiscal en el Tribunal Supremo.

Un solo fiscal en cada Audiencia, tribunal de partido y juzgado municipal.

Un solo teniente fiscal en el Tribunal Supremo y en cada Audiencia.

Doce abogados fiscales en el Tribunal Supremo; seis abogados fiscales en la Audiencia de Madrid; tres en las Audiencias de Barcelona, Búrgos, Coruña, Granada, Valencia, Valladolid y Zaragoza; dos en las de Albacete, Cáceres y Oviedo, y uno en las de Palma, las Palmas, y Pamplona.

Art. 765. El Gobierno podrá aumentar el número de abogados fiscales cuando el servicio lo requiera, y disminuirlo cuando pueda cumplirse el servicio con menor número del señalado en el artículo que precede.

En uno y otro caso, deberá preceder expediente en que se oiga á la Sala de gobierno y al fiscal del tribunal respectivo.

Se oirá, además, al fiscal del Tribunal Supremo cuando el aumento ó disminucion sea en alguna Audiencia.

En todo caso, se oirá á la seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado.

Art. 766. El órden gerárquico de los funcionarios del ministerio fiscal será:

- 1.º El fiscal del Tribunal Supremo.
- 2.º Fiscales de las Audiencias.
- 3.º Fiscales de los tribunales de partido.
- 4.º Fiscales de los juzgados municipales.

Los tenientes y abogados fiscales serán considerados solo como auxiliares de los fiscales.

Art. 767. El órden de categorías del ministerio fiscal será:

- 1.º El fiscal del Tribunal Supremo.
- 2.º El fiscal de la Audiencia de Madrid y el teniente fiscal del Tribunal Supremo.
- 3.º Los fiscales de las Audiencias.
- 4.º Los abogados fiscales del Tribunal Supremo y el teniente fiscal de la Audiencia de Madrid.
- 5.º Los tenientes fiscales de las Audiencias, á excepcion de la de Madrid, y los abogados fiscales de la de Madrid.
- 6.º Los abogados fiscales de Audiencias, á excepcion de la de Madrid.
- 7.º Los fiscales de los tribunales de partido de ascenso.
- 8.º Los fiscales de tribunales de partido de ingreso.

El cargo de fiscal de juzgados municipales no dará categoría.

Art. 768. Cada número del orden de categorías que establece el artículo anterior, formará una sola clase y una sola escala para los comprendidos en él, la cual servirá para los ascensos.

La antigüedad se considerará solo dentro de cada clase.

## CAPITULO II.

### *De los aspirantes al ministerio fiscal.*

Art. 769. Habrá un cuerpo de aspirantes al ministerio fiscal.

Art. 770. Serán extensivas al cuerpo de aspirantes al ministerio fiscal y á los que lo compongan, las disposiciones establecidas en el capítulo I del título II de esta ley, sin más excepciones que las que se expresan á continuación:

1.º Que el presidente del Tribunal Supremo no formará parte de la junta calificadora, la cual será presidida por el fiscal del mismo tribunal.

Cuando este se hallare imposibilitado para concurrir á la oposicion, le reemplazará el fiscal de la Audiencia de Madrid, y en su defecto, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, y á falta tambien de éste, un abogado fiscal del mismo tribunal, nombrado por el Gobierno.

En cualquiera de estos casos, presidirá el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, ocupando el que reemplace al fiscal del mismo, el lugar que, atendida su antigüedad y categoría, le corresponda.

2.º Que las atribuciones y deberes que se refieren á los presidentes de las Audiencias, se entenderán dadas é impuestos á los fiscales de las mismas.

3.º Que los aspirantes al ministerio fiscal serán nom-

brados por los fiscales de las Audiencias, sustitutos de fiscales de tribunales de partido, ó de abogados fiscales de la Audiencia respectiva, con preferencia á los aspirantes á la judicatura.

4.º Que solo podrán los aspirantes al ministerio fiscal ser nombrados jueces municipales, suplentes de los mismos y de jueces de instruccion y suplentes de los de partido, cuando no hubiere aspirantes á la judicatura para desempeñar estos cargos.

En tales casos, el nombramiento será hecho por el presidente de la Audiencia, quien oficiará al fiscal para que le designe los aspirantes que al efecto tenga disponibles.

5.º La aceptacion del desempeño de los cargos confiados á los aspirantes del mismo órden en el pueblo en que residan, es obligatoria; no así la de los cargos, correspondientes al órden judicial.

### CAPITULO III.

#### *De las condiciones generales para todos los cargos del ministerio fiscal.*

Art. 771. Se aplicará á los que ejerzan cargos del ministerio fiscal, cualesquiera que sean su gerarquía y categoría, lo que respecto á las condiciones, incapacidades, incompatibilidades absolutas ó relativas, y exencion de cargos obligatorios, establecen para los jueces y magistrados los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115.

Art. 772. Las incompatibilidades establecidas en el artículo 117 serán tambien extensivas á las que correspondan al ministerio fiscal.

Exceptúanse de lo establecido en el párrafo que antecede:

1.º Los fiscales de los juzgados municipales y sus suplentes.

2.º Los suplentes de fiscales de tribunales de partido y de abogados fiscales de las Audiencias.

3.º Los que accidental ó interinamente desempeñaren cargos del ministerio fiscal.

4.º Los que ejercieren funciones fiscales en Madrid.

Art. 773. Las prohibiciones que para los jueces y magistrados establece el art 119, comprenderán á los que obtuvieren cargo del ministerio fiscal en los mismos tribunales y dentro del mismo territorio; los contraventores incurrirán en la sancion penal que establece el art. 120. Exceptúanse los que estén comprendidos en los tres primeros números del artículo anterior.

Art. 774. Los que obtuvieren cargos del ministerio fiscal, no podrán ejercer la abogacía (1).

Exceptúanse solamente los expresados en los tres primeros números del art. 772.

Art. 775. Para formar parte del ministerio fiscal será necesario, además de reunir las condiciones prescritas en el art. 109, la de ser licenciado por Universidad costeadá por el Estado.

Exceptúanse solo los fiscales de los juzgados municipales.

#### CAPITULO IV.

*De las condiciones especiales para ser fiscales de juzgados municipales.*

Art. 776. Los fiscales de los juzgados municipales y

---

(1) Esta disposicion, no solo era necesaria para garantir la independencía del ministerio fiscal, sino tambien para que sus individuos se dediquen por completo al desempeño de su cargo y no le compartan con los cuidados inherentes al ejercicio de la abogacía.

sus suplentes reunirán las condiciones que según el artículo 121 deben concurrir en los jueces municipales.

Art. 777. Es extensiva á las fiscalías de los juzgados municipales la preferencia que respecto á éstos, según el art. 122, tienen los abogados para ser preferidos á los que no lo sean, á no mediar motivos que aconsejen lo contrario. No será en este caso obstáculo que no tengan la edad de 25 años.

## CAPITULO V.

*De las condiciones especiales para ingresar y ascender en las fiscalías de los tribunales de partido.*

Art. 778. Las fiscalías de los tribunales de ingreso se proveerán en aspirantes al ministerio fiscal, en iguales términos que para los juzgados de instrucción establece el art. 123 de esta ley, siendo aplicable á ellas lo que establecen los artículos 124 y 125.

Art. 779. Las fiscalías de los tribunales de partido de ascenso se proveerán en fiscales de tribunales de ingreso, dándose de cada tres vacantes:

Una, al más antiguo.

Una, al que el Gobierno considere más acreedor entre los fiscales de tribunales de ingreso, comprendidos en la mitad superior de su escala, siempre que lleve por lo menos dos años en su plaza.

Una, al que el Gobierno considere más acreedor en toda la escala de los fiscales de los tribunales de ingreso, siempre que lleve por lo menos tres años de servicio en su plaza.

Art. 780. En los turnos que se proveyeren por antigüedad rigurosa, si el que ocupase el primer lugar en la

escala hubiere sufrido dos correcciones disciplinarias durante los dos años anteriores á la provision de la vacante, estará á lo que en igual caso establece respecto á los jueces de los tribunales de partido el art. 130.

En los turnos en que la provision deba recaer en fiscales que estén en la mitad de la escala ó en cualquier lugar de ella, se estará respecto á los que hayan sido corregidos disciplinariamente á lo que acerca de los jueces expresados que estuviesen en igual caso, establece el artículo 131.

Cuando la correccion disciplinaria consistiere en suspension ó postergacion, se observará tambien lo que para los jueces de los tribunales de partido establece el artículo 132.

Art. 781. En todos los ascensos que no se den á la antigüedad rigurosa, además de la capacidad, conocimientos y servicios de los aspirantes al ministerio fiscal, y de los fiscales de tribunales de ingreso, se atenderá muy especialmente al mérito de distinguirse ventajosamente en el uso de la palabra.

## CAPITULO VI.

*De las condiciones especiales para ingresar y ascender en el ministerio fiscal de las Audiencias y del Tribunal Supremo.*

Art. 782. De cada cuatro plazas de abogados fiscales de Audiencia, á excepcion de la de Madrid, se proveerán:

Las tres primeras, en fiscales de tribunales de ascenso, por el mismo orden de turno que prescribe el artículo 779, observándose respecto á los corregidos disciplinariamente lo ordenado en el art. 780.

En el cuarto turno, se podrá conferir la vacante á

abogados procedentes de Universidades costeadas por el Estado, que hayan ejercido la abogacía en poblaciones donde exista tribunal de partido por espacio de doce años, habiendo pagado en los seis últimos la primera cuota de la contribucion industrial, ó en poblacion en que haya Audiencia por diez años, habiendo pagado por contribucion industrial en los cinco últimos por lo menos la segunda cuota, ó en Madrid por ocho años, habiendo pagado en los cuatro últimos una de las cinco primeras cuotas.

Cuando no recayere en ellos la eleccion, se proveerá la vacante en un fiscal de tribunal de partido de ascenso, que reuna las condiciones que se exigen para el segundo turno.

Art. 783. Las plazas de tenientes fiscales de Audiencia de fuera de Madrid, ó de abogados fiscales de la de Madrid se proveerán en abogados fiscales de Audiencia de fuera de Madrid, observándose el mismo orden establecido en el artículo anterior respecto á los tres primeros turnos, y al cuarto, cuando se proveyere la vacante en abogado fiscal.

Cuando el cuarto turno se confiriere á abogado, deberá tener el elegido la circunstancia de haber ejercido la abogacía en poblacion en que haya Audiencia, por doce años, y pagado en los últimos cuatro una de las tres primeras cuotas de la contribucion industrial, ó en Madrid por diez, habiendo pagado en los cuatro últimos, á lo menos, una de las cinco primeras cuotas.

Art. 784. De cada tres vacantes de abogado fiscal del Tribunal Supremo ó de teniente fiscal de la Audiencia de Madrid, se proveerá:

Una, en el teniente fiscal más antiguo de fuera de Madrid, ó abogado fiscal de Madrid.

Una, en un teniente fiscal de Audiencia de fuera de



Madrid ó abogado fiscal de la de Madrid, que esté en la primera mitad de la escala.

Una podrá proveerse, á eleccion del Gobierno en abogado que haya ejercido la profesion por catorce años á lo menos en poblacion en que residiere Audiencia, y pagado en los seis últimos una de las tres primeras cuotas de la contribucion industrial, ó que hubiese ejercido la profesion en Madrid por diez años, pagando en los tres últimos una de las cuatro primeras cuotas; ó en teniente fiscal de Audiencia de fuera de Madrid; ó en abogado fiscal de la de Madrid, que esté en la mitad superior de la escala.

Art. 785. De cada tres vacantes de fiscal de Audiencia de fuera de Madrid, se proveerán:

Una, en magistrado de Audiencia de fuera de Madrid.

Otra, en teniente fiscal de Audiencia, que no sea la de Madrid, ó abogado fiscal de la de Madrid, que lo haya sido por espacio de tres años al menos.

Otra, podrá proveerse en abogado que haya ejercido su profesion en poblacion donde haya Audiencia, y pagado la primera cuota de contribucion seis años por lo menos, ó en Madrid por cuatro años, habiendo pagado una de las tres primeras cuotas de contribucion.

Cuando no se proveyere la plaza en abogado que reúna las condiciones que quedan expresadas, se conferirá á quien reúna las condiciones de cualquiera de los otros dos turnos.

Art. 786. El cargo de fiscal de la Audiencia de Madrid y el de teniente fiscal del Tribunal Supremo se proveerán en quien tenga alguna de las condiciones siguientes:

Fiscales ó presidentes de Sala de las Audiencias, ó magistrados de la de Madrid, que lleven al menos un año en su respectivo cargo.

Abogados de Audiencia de fuera de Madrid, que ha-

yan pagado la primera cuota de contribucion diez años por lo menos, ó en la de Madrid, que hayan pagado por seis años una de las dos primeras.

Art. 787. La fiscalía del Tribunal Supremo será de libre nombramiento del Gobierno.

Art. 788. Los que intervengan en la propuesta de los fiscales comprendidos en este capítulo, no propondrán á los que no se distingan ventajosamente en el uso de la palabra.

Art. 789. Las correcciones disciplinarias que se hubieren impuesto á los abogados y á los que no asciendan por antigüedad rigurosa, solo impedirán la eleccion de aquellos á quienes se hubiesen impuesto, en el caso de que les hayan hecho desmerecer en el concepto público.

## CAPITULO VII

### *Del nombramiento, juramento y posesion de los funcionarios del ministerio fiscal.*

Art. 790. Para la propuesta, eleccion, incapacidades, excusas, reclamaciones, decisiones de estas, provision de vacantes y publicacion de los nombramientos de los fiscales municipales y sus suplentes, se estará á lo prevenido en el capítulo I, título III de esta ley respecto á los jueces municipales, sin más excepciones que las siguientes:

1.<sup>a</sup> Las atribuciones que se dan y los deberes que se imponen en el citado capítulo á los presidentes de los tribunales de partido, se entenderán dadas é impuestos á los fiscales de los mismos tribunales.

2.<sup>a</sup> Las atribuciones que se dan y los deberes que se imponen á los presidentes de las Audiencias, se entenderán dadas é impuestos á los fiscales de las mismas.

Art. 791. Los nombramientos de los fiscales de los tribunales de partido, de los abogados fiscales de las Audiencias, y del Tribunal Supremo y de los tenientes fiscales de las Audiencias, se harán por Reales órdenes.

Los nombramientos de los fiscales de las Audiencias y los de teniente fiscal y fiscal del Tribunal Supremo se harán por Real decreto.

En los nombramientos que comprende este artículo se expresarán las condiciones en virtud de las que ingresen ó asciendan en el ministerio fiscal los nombrados.

A los nombramientos á que se refiere el artículo anterior, precederá:

La designacion del fiscal del Tribunal Supremo, cuando sea en turnos que, con arreglo á la ley, correspondan á los más antiguos entre los aspirantes, ó á los que ejerzan ya funciones del ministerio fiscal.

El dictámen del fiscal del Tribunal Supremo, cuando sea en turnos que correspondan á los comprendidos en una parte de la escala ó en toda ella, ó cuando los turnos sean de aquellos en que se admitan personas extrañas á la carrera fiscal.

Este dictámen se limitará á manifestar si las personas que el Gobierno indique oficialmente antes de hacer el nombramiento reúnen ó no las condiciones legales; y cuando sean de la carrera fiscal, si son acreedoras al puesto para que se les designa por su capacidad, celo é inteligencia.

Art. 792. Podrá el fiscal del Tribunal Supremo, siempre que lo estime justo, indicar al Gobierno las personas del ministerio fiscal que considere acreedoras al ascenso.

Art. 793. Cuando la designacion hecha por el fiscal del Tribunal Supremo en turnos de rigurosa antigüedad, estuviere ajustada á lo que resultare de las escalas, el Go-

bierno se limitará á hacer el nombramiento. En otro caso, nombrará al que correspondiere.

Art. 794. Los nombramientos de los fiscales municipales y de sus suplentes se comunicarán por los fiscales de las Audiencias á los tribunales de partido, los cuales los pondrán en conocimiento de los juzgados municipales respectivos, encargándoles que les reciban juramento, y en el mismo acto les den posesion en el lugar destinado á la Audiencia.

Art. 795. Todos los nombramientos del ministerio fiscal que se hagan por el Gobierno, se comunicarán al fiscal del Tribunal Supremo, el cual los comunicará al fiscal de la Audiencia respectiva, en el caso de que los nombrados no debieran ejercer su cargo á sus inmediatas órdenes.

Los fiscales de las Audiencias comunicarán á los fiscales de los tribunales de partido los nombramientos que á estos se refieran.

Art. 796. Comunicará tambien el Gobierno los nombramientos al presidente del Tribunal Supremo cuando en él hubieren de ejercer su cargo los nombrados, ó á las Audiencias cuando los nombramientos fueren para ellas ó para los tribunales de partido de su territorio.

Los presidentes de la Audiencia trasladarán los nombramientos de los fiscales de partido á los tribunales en que los electos deban desempeñar sus funciones.

Art. 797. Será extensivo á todos los individuos del ministerio fiscal, nombrados por el Rey, lo que acerca del término para jurar sus cargos, y de la sancion penal á los que no lo hicieren, ordena el art. 187 de esta ley respecto á los jueces y magistrados.

Art. 798. El juramento que han de prestar todos los que pertenezcan al ministerio fiscal será:

*Guardar y hacer guardar la Constitucion de la Monarquía.*

*Ser fieles al Rey.*

*Promover el cumplimiento de la justicia.*

*Cumplir todas las leyes y disposiciones que se refieran al ejercicio de su cargo.*

Art. 799. Corresponderá dar cumplimiento á los nombramientos de los fiscales, tenientes y abogados fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo, á los presidentes respectivos, los cuales señalarán el día en que hayan de jurar y tomar posesion de sus cargos los nombrados.

Art. 800. Los fiscales y tenientes fiscales jurarán y tomarán posesion de sus cargos en un mismo acto, ante el tribunal pleno, en la misma forma que los magistrados, sin más diferencia que la fórmula del juramento.

Art. 801. Los abogados fiscales prestarán juramento y tomarán posesion de sus cargos en un mismo acto, ante la Sala de Gobierno del tribunal donde hayan de ejercer sus funciones, asistiendo los secretarios y subalternos que no estuvieren ocupados en otro servicio.

Art. 802. Los fiscales de los tribunales de partido prestarán el juramento ante la Sala de gobierno de la Audiencia del distrito, y con la certificacion de haberlo prestado tomarán posesion en el juzgado á que correspondan, dentro del término señalado en el art. 191 para los jueces de instruccion y de tribunales de partido, estando, si no lo hicieren, sujetos á la sancion que el mismo artículo establece.

La posesion se les dará en la misma forma y con las solemnidades que la de los jueces de los tribunales de partido.

## CAPITULO VIII.

*De los honores, antigüedad y traje de los funcionarios del ministerio fiscal.*

Art. 803. Los fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo tendrán en las reuniones en pleno y en las Salas de gobierno, lugar y asiento entre los presidentes de Sala, guardando con estos el lugar que les corresponda por su antigüedad, sin distincion de la plaza que sirvan respectivamente.

Art. 804. Los tenientes fiscales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo, cuando concurren á las reuniones en pleno y á las Salas de gobierno, por estar impedido el fiscal respectivo, ocuparán lugar y asiento á continuacion del último magistrado de la derecha.

Cuando por estar impedido el fiscal y el teniente fiscal asistiere un abogado fiscal, ocupará lugar y asiento á continuacion del último magistrado de la izquierda.

Art. 805. Los fiscales de los tribunales de partido, en los actos que no sean judiciales, ocuparán lugar y asiento entre los jueces, segun su respectiva antigüedad, pero siempre despues del presidente. Cuando en su lugar asistan los suplentes, ocuparán el último asiento.

Art. 806. En las Salas de justicia, los fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo tendrán asiento al lado derecho de la mesa del tribunal.

Los tenientes y abogados fiscales, cuando ejerzan funciones de su cargo, tomarán asiento en el lado izquierdo.

Art. 807. Los fiscales de los tribunales de partido en los actos judiciales tendrán asiento al lado derecho de la mesa, y sus suplentes, cuando los sustituyan, en el lado izquierdo.

Art. 808. Los que correspondan al ministerio fiscal se registrarán, en lo que concierne á su antigüedad relativa, por lo establecido en los artículos 197 y 768 de esta ley.

Art. 809. La mayor antigüedad dará derecho de precedencia:

1.º En el orden de asientos y puestos, entre los que correspondan á una misma categoría, en conformidad á lo prescrito en el art. 197.

2.º Para sustituir los abogados fiscales á los tenientes fiscales.

3.º Para asistir los abogados fiscales á las Salas de gobierno, en los casos de vacante ó de cualquier impedimento de los fiscales y tenientes fiscales.

Art. 810. Tendrán los fiscales de tribunales de partido los mismos honores y tratamiento que, segun el artículo 199, corresponde á los jueces de aquellos tribunales.

Los abogados fiscales y los tenientes fiscales, á excepcion de los que lo sean de la Audiencia de Madrid y del Tribunal Supremo, tendrán el tratamiento de señoría en los actos de oficio.

El teniente fiscal de la Audiencia de Madrid y los abogados fiscales del Tribunal Supremo, el personal de señoría.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, el mismo que el fiscal de la Audiencia de Madrid.

Los fiscales de Audiencias y del Tribunal Supremo, el que con arreglo al art. 201 corresponde en sus respectivos tribunales á los presidentes de Sala.

Art. 811. Es extensivo á los que compusieren el ministerio fiscal, lo prescrito en los artículos 202, 203, 204 y 205 de esta ley respecto á los jueces y magistrados.

Art. 812. Los fiscales de los juzgados municipales

usarán en los actos oficiales ó solemnes, á que concurren como tales, una medalla semejante á la señalada á los jueces municipales, arreglada al modelo que apruebe el Gobierno, y en que esté la inscripcion: *Ministerio fiscal*.

Art. 813. Los demás que correspondieren al ministerio fiscal, cualesquiera que sea su clase y categoría, usarán en los actos á que se refiere el art. 207 de esta ley, del traje de ceremonia.

El traje de ceremonia será:

Para los fiscales de tribunales de partido, abogados fiscales de Audiencia y del Tribunal Supremo y tenientes fiscales de Audiencia, á excepcion de la de Madrid, el señalado para los jueces de tribunales de partido.

Para el teniente fiscal de la Audiencia de Madrid y los fiscales de Audiencia y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el de los magistrados de Audiencia.

Para el fiscal del Tribunal Supremo, el de los magistrados de este tribunal.

Art. 814. Será extensiva al ministerio fiscal la prohibicion del art. 211 de esta ley.

Art. 815. En el reverso de las medallas que usen los que correspondan al ministerio fiscal, en lugar de la palabra *Justicia* se inscribirán las de *Ministerio fiscal*.

## CAPITULO IX.

### *De la dotacion del ministerio fiscal.*

Art. 816. Los fiscales de los juzgados municipales percibirán solo los honorarios que les señalen los aranceles judiciales.

Art. 817. Los fiscales de los tribunales de partido ten-



drán la misma dotacion que los jueces del tribunal á que pertenezcan.

Art. 818. Los abogados fiscales de Audiencia, á excepcion de la de Madrid, tendrán 6.000 pesetas anuales.

Los tenientes fiscales de Audiencia, á excepcion de la de Madrid, y los abogados fiscales de la de Madrid 7.500 pesetas.

Los abogados fiscales del Tribunal Supremo y el teniente fiscal de la Audiencia de Madrid, 8.500 pesetas.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, la misma dotacion que el fiscal de la Audiencia de Madrid.

Los fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo, la misma dotacion que los presidentes de Sala del tribunal á que correspondan.

Art. 819. Los tenientes y abogados fiscales que salieren del pueblo de su residencia para actuar en las Salas extraordinarias de las Audiencias, tendrán un sobresueldo de 25 pesetas por cada día que estén fuera de su domicilio.

Este aumento no se computará para los derechos pasivos.

## CAPITULO X.

*De la separacion, suspension, traslacion y jubilacion de los funcionarios del ministerio fiscal.*

Art. 820. El fiscal del Tribunal Supremo y los fiscales de las Audiencias podrán ser separados libremente por el Gobierno.

Cuando la separacion fuese sin causa fundada en actos ú omision en el ejercicio de su cargo, serán atendidos para darles colocacion en la magistratura.

Art. 821. Procederá de derecho la destitucion de los que corresponden al ministerio fiscal, en los casos señala-

dos en el art. 223 respecto á los jueces y magistrados.

Art. 822. Podrán los que corresponden al ministerio fiscal ser destituidos, con justa causa, por Real decreto ó por Real órden, segun la forma con que, atendido su respectiva clase, hubiesen sido nombrados.

Art. 823. Considéranse como justas causas para los efectos del artículo que precede:

1.º Las establecidas respecto á los jueces y magistrados en los números 1.º, 2.º, 3.º y 5.º del art. 224.

2.º La falta de subordinacion á sus superiores gerárquicos.

3.º Las faltas repetidas de deferencia á las instrucciones de sus superiores gerárquicos, cuando aquellas sean completamente infundadas.

Art. 824. La separacion de los funcionarios del ministerio fiscal no podrá hacerse sin prévia audiencia de los interesados, de sus superiores inmediatos y del fiscal del Tribunal Supremo.

Art. 825. Serán suspendidos los funcionarios del ministerio fiscal:

En los tres primeros casos establecidos, respecto á los jueces y magistrados, en el art. 227.

Art. 826. Declarará la suspension de los funcionarios del ministerio fiscal en el caso del artículo anterior, la Sala que conociere de la causa.

Art. 827. El Gobierno podrá suspender á los funcionarios del ministerio fiscal:

1.º Cuando considerare procedente su destitucion mientras dure el expediente.

2.º En los casos establecidos respecto á los jueces de instruccion, jueces de partido y magistrados, en el artículo 230. Esta disposicion no es aplicable á los fiscales de juzgados municipales.

3.º Cuando la suspension se les hubiese impuesto disciplinariamente como correccion.

Art. 828. Será extensivo á la suspension de los funcionarios del órden fiscal lo que establecen los artículos 229 y 232.

Art. 829. Podrán los funcionarios del ministerio fiscal ser trasladados libremente por el Gobierno de uno á otro punto en la misma clase á que correspondan, ó á otra superior, cuando estén en las condiciones de esta ley.

Contra la traslacion, hecha de este modo, no habrá recurso alguno.

Art. 830. Las disposiciones establecidas en los números 2.º, 3.º y 4.º del art. 234 respecto á la traslacion necesaria de los jueces y magistrados, será aplicable al ministerio fiscal, sin más diferencia què en cuanto á la prohibicion de pertenecer á una misma Sala los que sean parientes en el grado que se establece, la cual se entenderá limitada á que mientras se haga la traslacion, no puedan actuar en la misma Sala un pariente como juez ó magistrado y otro como funcionario del ministerio fiscal.

Art. 831. Son igualmente extensivas al ministerio fiscal las disposiciones de los artículos 119 y 120, segun las cuales se entiende que renuncian el cargo que desempeñaren los jueces y magistrados que por sí, sus mujeres ó en nombre de otro, ejercieren industria, comercio ó tomares parte en empresas ó en sociedades mercantiles, como socios colectivos ó como gestores, directores, administradores ó consejeros.

Art. 832. En la jubilacion de los funcionarios del ministerio fiscal regirán las disposiciones que para los jueces y magistrados establece el capítulo V del título IV de esta ley.

Art. 833. Cuando los funcionarios del ministerio fis-

cal se inutilizaren para permanecer en él, pero tuvieren aptitud para desempeñar las funciones de jueces ó magistrados, el Gobierno les pasará á la carrera judicial, si ellos lo pretendieren, dándoles colocacion en plaza adecuada á la que tenian en la fiscal.

Art. 834. Tendrán derecho los que correspondiendo al ministerio fiscal se sintieren agraviados por actos del Gobierno á entablar recursos contenciosos contra la Administracion:

1.º Cuando teniendo un derecho perfecto y determinado en esta ley, para ingresar ó ascender en la carrera judicial, hubiesen sido pospuestos indebidamente.

2.º Cuando fueren destituidos sin observarse las formas que esta ley prescribe.

3.º Cuando fueren jubilados sin alguna de las causas señaladas en esta ley ó sin guardar todas las formas que al efecto se establecen.

## CAPITULO XI.

### *De la responsabilidad de los funcionarios del ministerio fiscal.*

Art. 835. Podrá exigirse á los funcionarios del ministerio fiscal la responsabilidad, tanto civil como criminalmente, en los casos y en la forma que establece el título V de esta ley, sin más alteraciones que las que se expresan en los artículos siguientes.

Art. 836. Solo podrá establecerse el juicio de responsabilidad criminal en virtud de providencia del tribunal competente ó á instancia del ministerio fiscal.

Art. 837. Antes de proceder de oficio los tribunales á decretar procedimientos contra los funcionarios del ministerio fiscal, deberán oír á su inmediato superior gerár-

quico, á quien comunicarán los antecedentes en que se haya de basar la causa.

## CAPITULO XII.

### *De las atribuciones del ministerio fiscal.*

Art. 838. Corresponderá al ministerio fiscal:

1.º Vigilar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones de carácter obligatorio, que se refieran á la administracion de justicia, y reclamar su observancia.

2.º Dar á sus respectivos subordinados las instrucciones generales ó especiales para el cumplimiento de sus deberes, y la posible unidad de la accion fiscal.

3.º Sostener la integridad de las atribuciones y competencia de los juzgados y tribunales en general, defenderlas de toda invasion, ya provenga del órden judicial, ya del administrativo, promoviendo cuestiones de competencia, recursos por abuso de jurisdiccion, ó recursos de fuerza en conocer, é impugnando las competencias que indebidamente se promuevan contra el juzgado ó tribunal en que ejerzan sus funciones.

4.º Representar al Estado, á la Administracion y á los establecimientos públicos de instruccion y beneficencia, en las cuestiones en que sean parte, ya demandante, ya demandada.

5.º Interponer su oficio en los pleitos que versen sobre el estado civil de las personas.

6.º Representar y defender á los menores, incapacitados, ausentes ó impedidos para administrar sus bienes, hasta que se les provea de tutores ó curadores para la defensa de sus propiedades y derechos.

7.º Promover la formacion de causas criminales por delitos y faltas, cuando tengan conocimiento de su perpetracion, si no las hubiesen comenzado de oficio aquellos á quienes corresponda.

8.º Ejercitar la accion pública en todas las causas criminales, sin más excepcion que la de aquellas que, segun las leyes, solo pueden ser promovidas á instancia de parte agraviada.

9.º Investigar con especial diligencia las detenciones arbitrarias que se cometan y promover su castigo.

10.º Asistir á las vistas de los negocios civiles en que sean parte y de las criminales, sin más excepcion que las de aquellas en que no se pueda ejercitar la accion pública.

11.º Promover las correcciones disciplinarias en los casos en que procedan segun las leyes.

12.º Velar sobre el cumplimiento de las sentencias en los pleitos y causas en que hayan sido parte, á cuyo efecto tendrán el derecho y el deber de visitar los establecimientos penales, para inspeccionar si las sentencias, en lo criminal, se cumplen en la forma en que hubiesen sido impuestas.

No podrán, sin embargo, introducir alteraciones en el régimen y disciplina de las prisiones, limitándose en su caso á exponer al Gobierno los vicios que observaren y los medios de corregirlos.

13.º Poner en conocimiento del Tribunal Supremo y del Gobierno los abusos é irregularidades graves que notaren en los juzgados ó tribunales, cuando no alcanzaren de otro modo á obtener su remedio.

14.º Exponer verbalmente su dictámen en asuntos urgentes de fácil resolucion, lo cual se expresará en la providencia ó auto que recaiga.

15.º Pedir á los juzgados y tribunales del territorio en que ejerzan sus funciones y que estén subordinados al tribunal á que pertenezcan, las causas y negocios terminados para ejercer su vigilancia sobre la administracion de justicia y promover la correccion de los abusos que puedan introducirse.

16.º Requerir el auxilio de las autoridades, de cualquier clase que sean, para el desempeño de su ministerio, siendo responsables estas, con arreglo á las leyes, de las consecuencias que resultaren de su falta ó descuido en prestarles dicho auxilio.

17.º Cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes.

Art. 839. Los fiscales adoptarán las reglas que estimen convenientes para el repartimiento de los trabajos entre los tenientes y abogados fiscales que estén á sus órdenes inmediatas, procurando guardar igualdad entre ellos.

Art. 840. Los fiscales de las Audiencias nombrarán fiscales suplentes de partido para las vacantes y para reemplazar á los propietarios en los casos en que estos, por inhabilitacion física ó legal, por ausencia, ó por otra causa, no pudieren ejercer su cargo, prefiriendo á los que correspondan al cuerpo de aspirantes al ministerio fiscal, y despues á los que lo sean del cuerpo de aspirantes á la judicatura.

De estos nombramientos darán cuenta al fiscal del Tribunal Supremo.

Será aplicable á estos suplentes lo que respecto á los de los jueces de instruccion y de tribunales de partido ordena el art. 219 de esta ley.

## CAPITULO XIII.

*De la unidad y dependencia del ministerio fiscal.*

Art. 841. El fiscal del Tribunal Supremo será el jefe del ministerio fiscal de toda la Monarquía, bajo la inmediata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia.

Los fiscales de las Audiencias lo serán en sus respectivos distritos.

Los fiscales de tribunales de partido lo serán de los que ejerzan el ministerio fiscal en los juzgados municipales.

Art. 842. Por consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, cada fiscal:

1.º Dará cuenta á su inmediato superior de los delitos y faltas de que tenga conocimiento, ya se hayan promovido á instancia de parte agraviada, ya de oficio, ya por su requerimiento.

Esto lo verificará en el tiempo y forma que se ordene por las leyes, reglamentos ó por las disposiciones de sus superiores en el órden gerárquico.

2.º Se arreglará á las instrucciones que sus superiores gerárquicos le comuniquen, en lo que se refiera al ejercicio del ministerio fiscal.

3.º Consultará á su inmediato superior gerárquico, cuando la gravedad del negocio, la dificultad del caso ó cualquiera otra circunstancia lo hicieren necesario ó conveniente.

4.º Hará respetuosamente á su superior gerárquico las observaciones que estime conducentes, relativamente á las órdenes é instrucciones que considere contrarias á las leyes ó que por apreciaciones equivocadas ó por cualquier otro motivo sean improcedentes, pero sin que pueda separarse de ellas hasta que así lo ordene su superior.



5.º Interpondrá en tiempo y forma, cuando no tuviere instrucciones en contrario, los recursos procedentes en los negocios en que sea parte, sin perjuicio de lo que su superior resuelva acerca de su seguimiento.

Art. 843 Para la ejecución de lo que se previene en los dos últimos números del artículo anterior, el superior, recibidas que sean las consideraciones emitidas por el inferior, cuando las encontrare legales y procedentes, reformará, ó dejará sin efecto, las órdenes ó instrucciones que él mismo hubiese dado.

En el caso de que provengan de otro superior gerárquico, pondrá en su noticia las referidas observaciones, informando lo que estime para que se resuelva lo que corresponda.

Cuando las órdenes é instrucciones procedan del Gobierno, le dará cuenta para que decida.

Art. 844. Cuando el superior no encontrare legales ó procedentes las observaciones hechas por el inferior, le dará las instrucciones que estime convenientes, y si lo considerare oportuno, nombrará á otro de sus subordinados para que le sustituya en el despacho de negocios.

## CAPITULO XIV.

### *De la recusacion del ministerio fiscal.*

Art. 845. Los representantes del ministerio fiscal no podrán ser recusados.

Deberán, sin embargo, excusarse de intervenir en los actos judiciales cuando concurra en ellos algunas de las causas señaladas en el art. 428.

Art. 846. Si concurriere en el fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, ó en los fiscales de Audiencia, al-

guna de las causas de que en conformidad al artículo anterior deban abstenerse, designarán para que los reemplacen al teniente fiscal, y en su defecto á los abogados fiscales por el orden de antigüedad.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable á los tenientes ó abogados fiscales cuando ejerzan las funciones de su jefe respectivo.

Art. 847. Los tenientes y abogados fiscales del Tribunal Supremo y de las Audiencias harán presente su excusa al superior respectivo, quien los relevará de intervenir en los actos judiciales y elegirá para sustituirlos al que tenga por conveniente, entre aquellos.

Art. 848. Los fiscales de los tribunales de partido presentarán su excusa por escrito á los de las Audiencias, y si estos la estimaren justa, delegarán la intervencion fiscal en los actos judiciales, en quien deba sustituirles.

De la excusa que presentaren los fiscales de tribunales de partido y de la delegacion en su caso, darán conocimiento al tribunal que entendiere en la causa.

Art. 849. Cuando los representantes del ministerio fiscal no se excusaren, á pesar de comprenderles alguna de las causas expresadas en el art. 428, podrán los que se consideren agraviados recurrir en queja al superior inmediato.

El superior oirá al subordinado que hubiere sido objeto de la queja, y encontrándola fundada, decidirá su sustitucion.

Si no la encontrara fundada, podrá acordar que intervenga en el proceso.

Contra esta determinacion, no se dará recurso alguno.

Si fuere el fiscal del Tribunal Supremo el que diere motivo á la queja, deberá ésta dirigirse al Ministro de

Gracia y Justicia, por conducto del presidente del mismo Tribunal.

El Ministro de Gracia y Justicia, oída la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, si lo considera oportuno, resolverá lo que estime procedente.

## CAPITULO XV.

*De las correcciones disciplinarias de los funcionarios del ministerio fiscal.*

Art. 850. En los casos en que con arreglo al artículo 734 há lugar á corregir disciplinariamente á los jueces y magistrados, podrán serlo tambien los individuos del ministerio fiscal.

Art. 851. Las correcciones disciplinarias que se impongan á los funcionarios del ministerio fiscal, serán las señaladas en el art. 741 de esta ley para los jueces y magistrados.

Art. 852. Podrán imponer correcciones disciplinarias despues de oír instractivamente á los interesados:

El fiscal del Tribunal Supremo, á todos los funcionarios del ministerio fiscal.

Los fiscales de las Audiencias, á los funcionarios del ministerio fiscal que sirvan á sus inmediatas órdenes, á los fiscales de tribunales de partido y á los de juzgados municipales.

Art. 853. Contra las correcciones disciplinarias impuestas por los fiscales de las Audiencias, podrá recurrirse al fiscal del Tribunal Supremo.

Contra las correcciones impuestas por el fiscal del Tribunal Supremo, ya sea directamente, ya confirmando, modificando ó renovando las impuestas por los fiscales de

la Audiencia; solo se podrá recurrir al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 854. Contra las resoluciones del Ministro de Gracia y Justicia, no habrá ulterior recurso.

## TITULO XXI.

### DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES.

#### CAPITULO I.

##### *Disposiciones comunes á los abogados y procuradores.*

Art. 855. Los que fueren parte en juicios civiles ó en causas criminales, serán representados por procuradores y dirigidos por letrados, unos y otros legalmente habilitados para el ejercicio de la profesion en los tribunales en que actúen.

No podrá proveerse á solicitud que no lleve la firma de letrado.

Art. 856. Exceptúanse de lo prescrito en el párrafo primero del artículo anterior:

- 1.º Los actos de jurisdiccion voluntaria.
- 2.º Los de conciliacion.
- 3.º Los juicios verbales.
- 4.º Los pleitos de menor cuantía.
- 5.º Los juicios de faltas.

Art. 857. Además de los negocios señalados en el artículo que precede, se exceptúan de lo prevenido en el párrafo segundo del art. 855 los escritos que tengan por objeto personarse al juicio, acusar rebeldías, pedir términos, apremios, publicaciones de probanzas, señalamiento de vistas, su suspension, y cualesquiera otras diligencias de mera tramitacion, los cuales solo serán firmados por

los procuradores, á no ser que se refieran especialmente á los letrados.

Art. 858. No obstante lo dispuesto en el art. 856, tanto los procuradores, como los abogados, podrán asistir con el carácter de apoderados ó de hombres buenos, al acto de conciliación, ó con el de auxiliares de los interesados, cuando estos quisieren espontáneamente valerse de ellos.

En estos casos, si hubiere condenación de costas á favor del que se hubiere valido de procurador ó de letrado, no se comprenderán en ella los derechos de aquel ni los honorarios de éste.

Art. 859. En los pueblos en que haya Audiencia habrá un colegio de abogados y otro de procuradores, cuyo principal objeto será la equitativa distribución de los cargos entre los que actúen en los tribunales existentes en la localidad, el buen orden de las respectivas corporaciones y el decoro, la fraternidad y disciplina de los colegiados.

Art. 860. Podrán, además, establecerse colegios de abogados y procuradores:

En las capitales de provincia, donde no hubiere Audiencia.

En las poblaciones donde hubiere 20 procuradores ó abogados en ejercicio.

Art. 861. Para el efecto de pertenecer á los colegios de abogados, se considerarán como residentes los que, no morando en el pueblo, vivan y ejerzan la profesión en el radio de dos leguas, con tal que se comprometan á soportar los cargos en proporción con los demás.

Esta regla no es extensiva á los procuradores, los cuales tendrán necesariamente su residencia donde estuviere el colegio.

Art. 862. El número de los que componen estos colegios será ilimitado, debiendo ser admitidos en ellos todos los que lo pretendan, con tal que hagan constar que tienen la capacidad legal que prescribe esta ley para ejercer la profesion respectiva.

Art. 863. Los estatutos de los colegios de procuradores y abogados establecerán su organizacion y gobierno, las condiciones para ingresar en ellos, las relaciones de los colegiados con la corporacion y con los tribunales, las obligaciones de aquellos y las correcciones disciplinarias en que pueden incurrir, en lo que no caiga bajo la jurisdiccion disciplinaria de los juzgados ó tribunales.

Art. 864. Nadie podrá ejercer simultáneamente las profesiones de abogado y procurador.

El que estando en el ejercicio de una de ellas optare por el de la otra, cesará en la que tenia y será dado de baja en la lista del respectivo colegio.

Art. 865. En los pueblos en que haya colegios de abogados ó procuradores solo podrán ejercer estas profesiones los que estuvieren incorporados á ellos, con estudio abierto en el mismo pueblo.

El que careciere de las condiciones necesarias para ser procurador ó abogado no podrá incorporarse á los colegios.

Art. 866. Los abogados y procuradores estarán obligados á defender gratuitamente á los pobres, observándose para que no sea desigual este gravámen, las condiciones que se expresan en esta ley.

Art. 867. Las Juntas de gobierno de los colegios de procuradores y abogados establecerán respectivamente las reglas que consideren más equitativas para los turnos en el repartimiento de los pleitos y causas de pobres, guardando la igualdad posible.

Los decanos de los colegios harán, arreglándose á ellas, los nombramientos.

Art. 868. En los pueblos cabeza de partido judicial en que no hubiere colegio de abogados, se llevará por el secretario del tribunal, bajo la inspeccion del juez más moderno, el repartimiento de los pleitos y causas de pobres entre los procuradores y abogados, guardando la posible igualdad. Contra lo que acuerde el juez más moderno, podrá acudirse al tribunal del partido, el cual decidirá de plano sin ulterior recurso.

Art. 869. Donde no haya colegio de procuradores ó abogados será necesario para ejercer estas profesiones:

- 1.º Tener las cualidades que para ello exige esta ley.
- 2.º Hallarse avecindado ó residente en el pueblo en que se abra el estudio de abogado, y en el de la residencia del juzgado el que ejerza la profesion de procurador.
- 3.º Inscribirse en el juzgado ó tribunal como abogado en ejercicio.
- 4.º Pagar la contribucion de subsidio industrial.

Art. 870. Antes de empezar los procuradores y abogados á ejercer su profesion, jurarán guardar la Constitucion de la Monarquía, ser fieles al Rey y cumplir bien y lealmente todas las obligaciones que las leyes y las disposiciones reglamentarias les impongan.

Art. 871. El juramento señalado en el artículo anterior lo prestarán:

En Madrid, ante la Sala de gobierno del Tribunal Supremo.

En las poblaciones en que haya Audiencia, en las Salas de gobierno de las mismas.

Donde no hubiere Audiencia, pero sí tribunal de partido, ante éste.

Donde no hubiere tribunal de partido, ante el juez de

instruccion, si lo hubiere, y en otro caso, ante un juez municipal.

Art. 872. Los abogados y procuradores estarán sujetos á la jurisdiccion disciplinaria de los tribunales en los términos que ordena esta ley.

## CAPITULO II.

### *De los abogados en ejercicio.*

Art. 873. Para ejercer la abogacía se requiere:

- 1.º Haber cumplido 21 años.
- 2.º Ser licenciado en derecho civil.
- 3.º No estar procesado criminalmente.
- 4.º No haber sido condenado á penas aflictivas, ó haber obtenido rehabilitacion.

Art. 874. No podrán ejercer la abogacía:

- 1.º Los que estén desempeñando cargos judiciales ó del ministerio fiscal.

Exceptúanse de esta regla los jueces y fiscales municipales.

2.º Los que desempeñen empleos en el Ministerio de Gracia y Justicia, ó en la seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado.

3.º Los auxiliares y dependientes de los tribunales.

Art. 875. No obstante lo dispuesto en los artículos 865 y 869, los letrados que no estuvieren inscritos en los colegios, teniendo estudio abierto, ni en los juzgados ó tribunales para ejercer la abogacía, pero que reunieren las condiciones expresadas en el art. 873, podrán defender, por escrito ó de palabra, sus negocios civiles ó sus causas criminales y las de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad.



En estos casos, donde hubiere colegios de abogados, serán habilitados por su decano. Donde no los haya, acreditarán ser abogados, y el parentesco, en su caso, ante el juez ó tribunal donde hayan de actuar, el cual les dará su autorizacion.

Art. 876. Los abogados del colegio de la capital donde haya Audiencia, podrán actuar ante las Salas ordinarias y extraordinarias de las mismas, cualquiera que sea el pueblo en que se constituyan.

Art. 877. Los abogados á quienes corresponda la defensa de pobres, no podrán excusarse de ella en las causas criminales sin un motivo personal y justo que calificarán segun su prudente arbitrio los decanos de los colegios, donde los hubiere, y en su defecto el juez ó el tribunal en que hubieren de hacer las defensas.

Art. 878. Cuando en los negocios civiles los abogados no consideraren sostenible el derecho que quisieren hacer valer los pobres, lo manifestarán al tribunal, el cual nombrará ó mandará nombrar otro abogado.

Si este segundo no aceptare la defensa como improcedente, se hará un tercer nombramiento; y si el tercer letrado manifestase lo mismo, se pasará el asunto al ministerio fiscal, cuando no fuere parte, con objeto de que manifieste si es sostenible ó no la pretension del pobre.

Si el ministerio fiscal la considerase insostenible, cesará la obligacion de los abogados; mas si la considerare sostenible, se nombrará un cuarto abogado, que no podrá excusarse de la defensa.

Art. 879. Los honorarios de los letrados no estarán sujetos á arancel.

Podrán, sin embargo, impugnarlos las partes por excesivos, en cuyo caso el tribunal ó juzgado, despues de oir al letrado contra quien se dirija la queja, pasará los

antecedentes al colegio de abogados, donde le hubiere, y donde no, á dos letrados, y si no los hubiere desinteresados en el mismo juzgado, á otros de algun juzgado inmediato, y en vista de su informe aprobará la tasacion ó la reformará en los términos que estime justos, sin ulterior recurso.

Art. 880. Los abogados se presentarán en traje profesional, que será negro, con toga y birrete, de la misma forma que la de los jueces y magistrados, y sin ningun otro distintivo, siempre que como defensores concurren á actos solemnes y á la vista en los tribunales de partido, en las Audiencias ó en el Tribunal Supremo.

### CAPITULO III.

#### *De los procuradores.*

Art. 881. Para ser procurador se requiere:

1.º Acreditar pericia en el órden y tramitacion de los juicios, y en las obligaciones que las leyes imponen á su profesion.

Esta capacidad la acreditarán en la forma que prevengan los reglamentos.

Exceptúanse de este ejercicio los que sean abogados ó hayan concluido los estudios, y tengan la habilitacion, que se exigen para los notarios.

2.º Reunir las condiciones señaladas para los abogados en los números 1.º, 3.º y 4.º del art. 873 de esta ley.

3.º Para los que ingresen en lo sucesivo por virtud de esta ley, constituir como garantía un depósito en metálico ó en papel del Estado al tipo de cotizacion oficial, que cubra la cantidad efectiva que á continuacion se expresa.

25.000 pesetas, en Madrid.

7.500, en poblacion que haya Audiencia.

5.000, donde haya tribunal de partido.

2.000, donde haya juzgado de instruccion.

1.000, en los demás pueblos, ó bien en cualquiera de los casos, constituir la garantía de la quinta parte de las sumas indicadas, agregando á ella la propiedad de un oficio enagenado de la misma clase, mientras no se haya realizado su reversion al Estado en los términos prescritos en el art. 14 de la Constitucion.

Art. 882. La fianza de los procuradores responderá de las multas que se les impusieren, de las cantidades recibidas de sus clientes para gastos judiciales, y de cualquiera otra responsabilidad civil, criminal ó disciplinaria que contrajeran en el ejercicio de su profesion.

Art. 883. Siempre que por cualquiera de las causas que quedan expresadas, se disminuyese la fianza, tendrá que completarla el procurador. Si no la completare á los dos meses, quedará suspenso de su oficio.

Art. 884. Cuando el procurador cesare en su cargo, cualquiera que sea la causa, se anunciará en el *Boletín Oficial* de la provincia en que lo hubiere ejercido, y en los periódicos oficiales de la localidad, si los hubiere, para que en el término de seis meses puedan hacerse las reclamaciones que contra él hubiere.

Pasado dicho término, se devolverá el depósito, si no hubiere reclamacion.

Si se reclamare justamente y en tiempo oportuno, se reintegrará á los acreedores con la parte que sea necesaria.

Art. 885. Será obligacion de los procuradores:

1.º Presentar oportunamente el poder que tengan para comparecer en juicio, ó devolverlo si no lo acepta-

ren tan pronto como sea posible para que no sea perjudicado el poderdante.

2.º Seguir el juicio mientras no hayan cesado en su encargo por alguna de las causas que se expresan en esta ley.

3.º Trasmitir al abogado, elegido por su cliente ó por ellos mismos, todos los documentos, antecedentes é instrucciones que se les remitan, ó que ellos mismos puedan adquirir, haciendo cuanto conduzca á la defensa de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.

Cuando no tuvieren instrucciones ó fueren insuficientes las que se les hubiesen dado, hacer lo que requiera la naturaleza ó índole del negocio.

4.º Pagar los gastos que se causaren á su instancia,

5.º Tener al cliente y al letrado siempre al corriente del curso del negocio que se les hubiere confiado.

6.º Firmar todas las pretensiones que se presenten á nombre del cliente.

7.º Oír y firmar los emplazamientos, citaciones y notificaciones de cualquiera clase, incluso las de sentencias, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el poderdante. No se admitirá la respuesta de que las expresadas diligencias se entiendan con éste.

8.º Asistir á todas las diligencias y actos para los que las leyes lo prevengan.

9.º Llevar un libro de conocimientos de negocios pendientes, y otro de cuentas con los litigantes, con los abogados y con los auxiliares y subalternos que devenguen honorarios ó derechos.

10.º Dar á sus clientes cuentas documentadas de los gastos judiciales é inversion de las cantidades recibidas.

Art. 886. La aceptacion del poder se tiene por hecha en el acto de presentarlo el procurador.

Art. 887. Cesará el procurador en su representacion:

1.º Por la revocacion del poder, tan luego como conste en autos, ya sea expresa, ya tácitamente por el nombramiento posterior de otro procurador para el mismo negocio.

2.º Por el desistimiento voluntario del procurador, ó por cesar éste en su oficio, estando obligado á poner con anticipacion uno y otro caso en conocimiento de sus poderdantes, judicialmente, ó por acto notarial.

Mientras no aparezca en los autos hecho el desistimiento, no podrá abandonar la representacion que tuviere.

3.º Por separarse el poderdante de la accion ó de la oposicion que hubiere formulado.

4.º Por haber trasmitido el mandante á otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, cuando la trasmision haya sido reconocida por providencia ó auto firme con audiencia de la parte contraria.

5.º Por haber terminado la personalidad del poderdante.

6.º Por la terminacion del acto, del pleito ó de la causa para que se dió el poder.

7.º Por muerte del poderdante ó del procurador. En el primer caso, desde que se pueda suponer, atendida la distancia y medios de comunicacion, que se ha sabido la muerte del poderdante.

Art. 888. Los procuradores usarán en los tribunales traje negro.

## TÍTULO XXII.

### DE LAS VACACIONES Y LICENCIAS.

#### CAPITULO I.

*De los dias en que vacan los juzgados y tribunales.*

Art. 889. Los juzgados y tribunales vacarán:

1.º En los dias de fiesta entera.

2.º En los dias del Rey, Reina y Príncipe de Asturias.

3.º En el Jueves y Viernes de la Semana Santa.

4.º En los dias de fiesta nacional.

Art. 890. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los dias en él señalados serán hábiles para las actuaciones del sumario de las causas criminales, sin necesidad de habilitacion especial, y podrán habilitarse para cualesquiera otras civiles ó criminales en que haya urgencia.

Art. 891. Se estimarán urgentes para los efectos del artículo anterior las actuaciones cuya dilacion pueda causar perjuicio grande á los procesados, á los litigantes ó á la buena administracion de justicia, al prudente arbitrio del juez.

Art. 892. Los magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo vacarán, además de los dias señalados en el art. 889, desde el 15 de Julio al 15 de Setiembre de cada año.

Art. 893. Durante el período expresado en el artículo anterior, se formará en cada Audiencia y en el Tribunal Supremo una Sala que se llamará de vacaciones.

Art. 894. La Sala de vacaciones se compondrá en las Audiencias de seis magistrados y uno de ellos el presidente ó un presidente de Sala, y en el Tribunal Supremo de nueve, tomados unos y otros de todas las Salas del respectivo tribunal.

En las Audiencias que solo consten de una Sala, el número de magistrados que formen la de vacaciones será de cuatro.

Art. 895. Para la formacion de la Sala de vacaciones turnarán todos los magistrados; pero cuidando que en ningun caso deje de haber en ellas individuos de todas las Salas.

Art. 896. Aquellos á quienes corresponda constituir la Sala de vacaciones podrán, con sujecion á la regla establecida en la última parte del artículo anterior, permutar con otro de los que no estén en turno, si lo aprobare la Sala de gobierno.

Art. 897. El presidente y los presidentes de Sala turnarán tambien entre sí para la presidencia de la Sala de vacaciones, con igual facultad de permutar.

El presidente del Tribunal Supremo estará exceptuado del turno.

Art. 898. Vacarán tambien los que correspondan al ministerio fiscal en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, turnando entre sí la mitad de los abogados fiscales: cuando el número de ellos sea impar, disfrutará solo de las vacaciones la minoría.

El teniente fiscal y el fiscal alternarán por años.

Cuidarán los fiscales, al arreglar los turnos, que en cada uno haya abogados fiscales que actúen ordinariamente en las diferentes clases de negocios.

Art. 899. Los auxiliares de las Audiencias y del Tribunal Supremo vacarán en los mismos términos que lo es-

tablece el artículo que antecede respecto á los abogados fiscales.

Se cuidará que en ningun caso quede menos de un secretario de cada Sala.

Donde no hubiere más que un oficial por Sala, vacarán la mitad de los que hubiere, haciendo los que no vacuen el servicio de los ausentes.

Art. 900. No gozarán de vacaciones los subalternos de los tribunales. Los presidentes podrán dar prudencialmente licencia á los que la soliciten sin que pueda exceder de la tercera parte de los que componen la dotacion del tribunal.

Art. 901. La Sala de vacaciones reasumirá las atribuciones del Tribunal pleno, de las Salas de gobierno y de las de justicia, y despachará los negocios que tengan carácter de urgencia.

Art. 902. Repútanse negocios urgentes:

1.º La sustanciacion de todos los pleitos civiles y causas criminales hasta que aquellos estén en estado de vista y éstas en el de celebrarse el juicio público.

2.º El despacho de las consultas é informes que el Gobierno les pida con el carácter de urgentes, ó que lo sean, atendida la naturaleza del asunto á que se refieran.

3.º El despacho de los expedientes gubernativos y de los actos de jurisdiccion voluntaria que por tener término preciso señalado en la ley, por su índole, por sus circunstancias especiales, ó por ocasionar la demora de su resolucion perjuicios graves á los interesados en ellos, requieran ser despachados antes de terminarse las vacaciones.

4.º La decision de las competencias de jurisdiccion, de los recursos de fuerza y de los incidentes de recusacion.



5.º Las vistas y sentencias de los interdictos posesorios ó de obra nueva ó vieja, los juicios ejecutivos, las denegaciones de justicia ó de prueba y cualquier otro negocio que, en concepto de las Salas, tenga el carácter de urgencia.

6.º Las vistas y sentencias de los pleitos y causas que se sigan contra jueces ó magistrados para exigirles la responsabilidad civil ó criminal.

7.º Las vistas y sentencias de las causas criminales por delitos á que la ley señala penas que excedan de doce años de duracion en cualquiera de sus grados, ó la de muerte.

Art. 903. Cuando circunstancias extraordinarias lo exigieren, podrá la Sala de vacaciones convocar, para que la auxilien, al tribunal, ó á cualesquiera de sus Salas, ó llamar á alguno ó algunos de los magistrados que se hallen en la misma poblacion, y si no los hubiere, á los que estuvieren en los lugares más cercanos.

Art. 904. Las Salas de vacaciones actuarán con el auxilio de los Secretarios y oficiales de Sala que entiendan ó deban entender en los negocios de que se les dé cuenta, y en su defecto, con los que ordinariamente deban sustituirlos.

Art. 905. Todos los magistrados y auxiliares de los tribunales, que salieren durante las vacaciones del pueblo de la residencia del tribunal á que correspondan, lo pondrán en conocimiento de su presidente, manifestando el punto donde se propongan residir, ó el país ó países por donde piensen viajar.

El mismo aviso darán los abogados fiscales y tenientes fiscales al fiscal del tribunal en que ejerzan sus funciones.

Los fiscales de los tribunales avisarán en iguales tér-

minos al presidente del tribunal en que ejerzan su cargo y al fiscal del Tribunal Supremo.

## CAPITULO II.

### *De las licencias para ausentarse.*

Art. 906. Los jueces municipales podrán ausentarse por ocho dias, ó menos, del territorio municipal de su residencia, dejando al suplente encargado de la jurisdiccion y participándolo al presidente del tribunal del partido.

Art. 907. Para ausentarse los jueces municipales por más de ocho dias y menos de treinta, deberán obtener por escrito licencia del presidente del tribunal de partido; y desde treinta á noventa, del de la Audiencia.

Art. 908. En ninguno de los casos expresados en los dos artículos anteriores podrán los jueces municipales ausentarse del territorio municipal en que ejerzan sus funciones hasta que el suplente respectivo quede encargado de la jurisdiccion.

Art. 909. No podrán los jueces de instruccion ausentarse de la circunscripcion en que ejerzan sus funciones, ni los de tribunales de partido ni los magistrados, cualquiera que sea su categoría, de las poblaciones en que residan los tribunales á que pertenezcan, sin licencia.

Exceptúanse de lo dispuesto en el párrafo anterior los que lo hicieren en cumplimiento de su deber ó para practicar alguna diligencia de la administracion de justicia, ó en tiempo de vacaciones, aquellos á quienes corresponda usar de ellas.

Art. 910. Los presidentes de las Audiencias podrán conceder licencia por un término que no exceda de quince dias á los jueces de instruccion, á los de tribunales de

partido de su distrito y á los presidentes de Sala y magistrados, siempre que hubiere para ello justa causa.

Los presidentes darán cuenta al del Tribunal Supremo de las licencias que concedieren.

Art. 911. Las licencias por más de quince dias hasta sesenta, se darán por el presidente del Tribunal Supremo á los presidentes de Sala y magistrados de Audiencia y á los jueces de los tribunales de partido y á los de instruccion, observándose las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Se dirigirá por conducto del presidente de la Audiencia la instancia acompañada de los documentos que á juicio del que lo pida justifiquen el motivo de la licencia.

2.<sup>a</sup> La Sala de gobierno de la Audiencia de que dependa ó á que corresponda el que pida la licencia, calificará segun su prudente arbitrio la suficiencia y justificacion de la causa alegada, informando sobre ella lo que se le ofrezca.

3.<sup>a</sup> El presidente de la Audiencia remitirá original el expediente al del Tribunal Supremo, proponiendo en su vista y con los fundamentos de su opinion, el otorgamiento ó la denegacion de la licencia.

Art. 912. Cuando se diere la licencia sin guardar todos los requisitos establecidos en el artículo anterior, el presidente de la Audiencia suspenderá su cumplimiento y lo pondrá en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo.

El traslado de la órden concediendo ó denegando la licencia pedida, no podrá comunicarse al interesado sino por el presidente que hubiese dado curso á la solicitud.

Art. 913. El presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Ministro de Gracia y Justicia de todas las licencias que conceda dentro de los ocho dias siguientes al de su otorgamiento con un breve extracto del expediente.

Art. 914. Cuando el término de sesenta dias no fuere bastante al que obtuviere la licencia, podrá el Ministro de Gracia y Justicia concederle otra nueva al que la necesitare por otro término que no exceda tampoco de sesenta dias; pero con los requisitos expresados en el art. 911.

Art. 915. Los presidentes de las Audiencias no podrán ausentarse de la capital en que residan por más de quince dias, sin haber obtenido previamente Real licencia.

Cuando necesitaren ausentarse por dicho término ó menos, podrán hacerlo dando cuenta con anticipacion al presidente del Tribunal Supremo, exponiéndole la causa y dejando en su lugar al presidente de Sala á quien corresponda.

Art. 916. El presidente del Tribunal Supremo podrá conceder licencia á los magistrados del mismo por un término que no exceda de quince dias, dando cuenta al Gobierno.

Art. 917. El Ministro de Gracia y Justicia podrá conceder licencia á los presidentes de Sala, á los magistrados del Tribunal Supremo y á los presidentes de Audiencias por término que no baje de quince dias ni exceda de sesenta, previo el dictámen del presidente y de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, en la forma y con los requisitos expresados en el art. 911.

Podrá ampliar esta licencia por otros sesenta dias, cuando hubiere justa causa para ello.

Art. 918. El presidente del Tribunal Supremo no podrá ausentarse sin Real licencia, la cual podrá concederse en todo caso sin los requisitos expresados en los artículos anteriores.

Art. 919. Los jueces de instruccion, los de tribunales de partido y los magistrados que contraviniendo á esta

ley se ausentaren sin licencia, y los que al espirar el término de la licencia concedida no se presentaren á desempeñar su cargo, ni hubiesen pedido otra nueva en la forma que previene esta ley, serán considerados como renunciantes de su empleo, y dejarán de figurar en la escala del cuerpo, á menos que justifiquen haberse ausentado por fuerza mayor, ó haber estado físicamente impedidos de presentarse y de pedir nueva licencia en el término en que debieran hacerlo.

Art. 920. Los jueces y magistrados, mientras se hallen disfrutando de la licencia por falta de salud, percibirán íntegro su sueldo.

Cuando obtengan dicha licencia por distinta causa, disfrutarán únicamente la mitad del sueldo.

Art. 921. Las disposiciones de los artículos precedentes de este capítulo serán extensivas al ministerio fiscal, entendiéndose aplicables:

A los fiscales municipales, las relativas á los jueces municipales.

A los fiscales de tribunales de partido, las relativas á los presidentes de los mismos.

A los fiscales de las Audiencias, las relativas á sus presidentes.

Al fiscal del Tribunal Supremo, las relativas á su presidente.

Art. 922. Los oficiales de la Sala y los secretarios de los juzgados y tribunales, no podrán ausentarse del lugar en que deban residir, sin licencia.

Cuando la ausencia no pase de quince dias, dará licencia:

A los secretarios municipales y á los de instruccion, el juez respectivo.

A los secretarios de Sala y secretarios de los tribuna-

les de partido ó de las Salas de justicia de las Audiencias, el tribunal ó la Sala á que estuvieren asignados.

A los secretarios de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal á que correspondan.

Art. 923. Cuando la licencia que pidieren los secretarios fuere para más de quince dias, la concederán:

A los secretarios de juzgados municipales ó de instrucción, el presidente del tribunal del partido, previo informe de los jueces.

A los oficiales de Sala, y secretarios de los tribunales de partido, el presidente de la Audiencia, previo informe del presidente del tribunal á que correspondan.

A los oficiales de Sala y secretarios de las Audiencias y del Tribunal Supremo, su presidente, previo informe de la Sala á que corresponda.

A los secretarios de gobierno, el presidente, oída la Junta de gobierno.

Art. 924. Los subalternos de los juzgados y tribunales no podrán ausentarse sin licencia del juez ó del presidente del tribunal á que correspondan.

Art. 925. Las licencias de los secretarios, oficiales de Sala y subalternos no se concederán sin causa justificada, y será aplicable á ellos lo dispuesto en el art. 910 respecto á los jueces y magistrados.

Art. 926. No podrán ausentarse los procuradores por más de quince dias del pueblo en que ejerzan su oficio sin estar autorizados:

En Madrid, por el presidente del Tribunal Supremo.

En las demás poblaciones en que haya Audiencias por el presidente de ésta.

En las cabezas de partido judicial donde no hubiere Audiencia, por el presidente del tribunal de partido.

En las poblaciones cabeza de circunscripción, por el juez de instrucción.

En las demás poblaciones, por el juez municipal.

Art. 927. En las poblaciones en que haya colegio de procuradores, la solicitud se dirigirá por conducto del que le presida. Este la acompañará con su informe á la autoridad judicial que con arreglo al artículo anterior deba dar la licencia.

Art. 928. La licencia podrá concederse hasta por medio año cuando el servicio público lo permita, y solo podrá prorogarse fuera de este tiempo, mediando justa causa probada debidamente.

Art. 929. El procurador que usare de la licencia que se le hubiere concedido, sin dejar persona que legalmente le sustituya, será responsable civil, y en su caso criminalmente, con arreglo á las leyes.

Art. 930. Cuando un procurador, concluida la licencia, no se hubiere presentado al que presidiere el colegio donde lo hubiere, ó en otro caso á la autoridad judicial que se la hubiese dado, se entenderá que ha renunciado á su oficio, á no justificar haber estado impedido para presentarse á pedir la próroga.

Art. 931. Declarará haberse renunciado el oficio, la Junta del colegio de procuradores, donde lo hubiere, y donde no, la autoridad que hubiese dado la licencia: la declaracion se hará en la forma gubernativa.

El procurador podrá oponerse á esta declaracion, resolviendo entonces gubernativamente la Sala de Gobierno de la Audiencia del territorio, y en Madrid la de gobierno del Tribunal supremo, y despues de oir por escrito al interesado y al ministerio fiscal.

Contra esta resolucion no habrá ulterior recurso.

Art. 932. El que hubiere dejado de ser procurador

por consecuencia del artículo que antecede, no podrá volver á serlo hasta despues de tres años contados desde el dia en que hubiese cesado en su cargo.

## TITULO XXIII.

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

#### I.

Procederá el Gobierno:

1.º A hacer y á plantear la división territorial, en lo judicial, con arreglo á lo establecido en el capítulo I, título I de esta ley.

2.º A reformar la ley de Enjuiciamiento civil, poniéndola en armonía con la presente y sujetándose á las reglas que á continuacion se expresan:

(a) Arreglo de la jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales á lo que se establece en esta ley.

(b) Supresion de los títulos II, III y XXII, parte primera de la ley de Enjuiciamiento civil y de las demás disposiciones que contiene y que están derogadas expresa ó tácitamente por haber sido sustituidas por otras, ó por ser opuestas á la letra, ó al espíritu de la presente ley.

(c) Sustitucion del título XXI, parte primera, de la ley de Enjuiciamiento civil, con la ley decretada y sancionada por las Córtes Constituyentes en que se reformaron los recursos de casacion civil, haciendo las alteraciones necesarias para que guarde armonía con las prescripciones de esta ley.

(d) Supresion de todo trámite y diligencia que no sean necesarios, cuidando, sin embargo, escrupulosamente de dejar íntegro el derecho de defensa, y conservando las di-



ligencias necesarias para que pueda haber acierto en los fallos, de modo que la sustanciacion de los negocios judiciales sea más breve y menos costosa á los litigantes.

(e) Inclusion en la ley de las alteraciones hechas hasta ahora para ciertos casos y juicios, en cuanto sean compatibles con las reformas posteriores y conformes con el espíritu que ha de dominar en la reforma.

(f) Inclusion en la ley, y á su final, de una parte especial en que se comprendan las disposiciones especiales necesarias para los negocios mercantiles, procediendo de acuerdo al efecto en este punto los Ministros de Gracia y Justicia y de Fomento.

3.º A reformar los procedimientos criminales, con sujecion á las siguientes reglas:

(a) Organizacion de la policía prejudicial y judicial, de manera que quede para lo futuro suficientemente asegurada la proteccion de las personas, la seguridad de los bienes, la prevencion de las causas criminales y el descubrimiento de la verdad en los sumarios.

(b) Establecimiento de relaciones directas entre los agentes de policía prejudicial y judicial con los jueces de instruccion y con los funcionarios del ministerio fiscal.

(c) Publicidad de los juicios criminales, á excepcion de aquellos en que no lo permita la moral.

(d) Procedimiento para el castigo de las faltas, por los jueces municipales, en primera instancia.

(e) Procedimiento para la segunda instancia, ante los tribunales de partido, en los juicios de faltas, y para el juicio oral, en única instancia, en las causas por los delitos que correspondan á la competencia de dichos tribunales y á la de las Audiencias sin intervencion del jurado.

(f) Procedimiento para el castigo de los delitos en que haya de intervenir el jurado con las Audiencias.

(g) Procedimiento, tambien oral, para el castigo de los delitos reservados al Tribunal Supremo.

(h) Los recursos de casacion en lo criminal se sustanciarán con arreglo á la ley, relativa á los mismos, aprobada y sancionada por las Córtes Constituyentes, en cuanto no se oponga á la presente.

(i) Organizacion del jurado de modo que por sus condiciones de capacidad é imparcialidad, asegurada por el derecho de recusacion, satisfaga las exigencias de la justicia.

4.º A formular y aprobar los diferentes reglamentos, necesarios para la ejecucion de esta ley.

5.º A reformar los aranceles judiciales, poniéndolos en armonía con la nueva forma de procedimientos.

## II.

El planteamiento de la nueva organizacion judicial podrá hacerse sucesivamente en los distritos judiciales, pero habrá de ser simultáneo en todo el territorio de cada uno de ellos.

## III.

Los actuales jueces y magistrados y los que se nombren hasta el planteamiento de esta ley, no gozarán de inamovilidad mientras no sean examinados sus respectivos expedientes, y en su virtud sean especial y nominalmente declarados inamovibles.

## IV.

Los expedientes de que habla la regla anterior, se for-

marán con sujecion á lo que se establece en la presente ley, utilizando los datos que obren en el Ministerio de Gracia y Justicia en los expedientes anteriores, y completándolos en lo que les falte.

## V.

Los expedientes de que trata la regla anterior serán pasados á una Junta de clasificacion, que se compondrá:

Del Presidente del Tribunal Supremo.

De un consejero de Estado en la seccion de Gracia y Justicia, elegido por la misma seccion.

Del fiscal del Tribunal Supremo.

De dos Diputados á Córtes, nombrados por el Gobierno.

De un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por su Sala de gobierno.

De un magistrado de la Audiencia de Madrid, nombrado por su Sala de gobierno.

De un catedrático de derecho de la Universidad Central, nombrado por el Gobierno.

De dos abogados del colegio de Madrid, nombrados por la Junta de gobierno del mismo.

Un oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, nombrado por el Gobierno, hará de secretario sin voto.

## VI.

Se considerará á todos los jueces y magistrados en la categoría que hubiesen llegado á obtener en la carrera judicial.

El exámen de sus condiciones se limitará:

A su conducta moral, por actos públicos.

A si concurren en ellos circunstancias que los hagan desmerecer en el concepto público, ó que los inhabiliten para el ejercicio de funciones judiciales con arreglo á lo que se establece en esta ley, á las correcciones disciplinarias, imposiciones de costas ó de multas en que hubiesen incurrido, á la diligencia y celo por el cumplimiento de sus deberes, y á su aptitud para el ejercicio de las funciones judiciales. La Junta pedirá los datos que estime conducentes á los superiores gerárquicos del territorio en que hubiesen desempeñado sus funciones.

La Junta manifestará al Gobierno su opinion sobre si concurren en ellos las circunstancias necesarias para gozar desde luego de las garantías que esta ley establece.

## VII.

El Gobierno, con vista del dictámen de la Junta, resolverá lo que estime procedente.

En el caso de que considerare que es conveniente la ampliacion de los datos reunidos, podrá decretarlo así, oyendo despues nuevamente á la Junta para la resolucion definitiva.

## VIII.

Mientras existan cesantes de la carrera judicial, que hubieren sido declarados merecedores de volver á ella, se añadirá un turno más respecto á los magistrados, y dos respecto á los jueces, de los señalados en cada clase para ingreso ó ascenso.

En igualdad de circunstancias, serán preferidos los que disfruten cesantía.

## IX.

Para la debida ejecucion de lo dispuesto en la regla anterior, se revisarán los expedientes de los cesantes, con sujecion á las reglas establecidas para los actuales jueces y magistrados.

## X.

Los que antes de la promulgacion de esta ley hubiesen obtenido y desempeñado en propiedad en el Ministerio de Gracia y Justicia plaza de número que por disposicion expresa les diere categoría y derecho para obtener cargos judiciales, conservarán su derecho y serán nombrados segun su antigüedad, previa la calificacion de sus expedientes, en las vacantes que ocurran de su respectiva clase.

Los empleos que se obtuvieren en el Ministerio de Gracia y Justicia despues de la promulgacion de esta ley, no darán opcion ni derecho para ingresar ni ascender en la carrera judicial.

## XI.

Desde la promulgacion de esta ley no se proveerán relatorías ni escribanías de cámara. Pero continuarán desempeñándolas sus actuales poseedores.

Las escribanías de cámara se irán incorporando á las relatorías segun fueren vacando.

Para las relatorías que vacaren se nombrarán letrados que habrán de desempeñar las funciones de relator hasta que vaque alguna escribanía de cámara á que pueda unirse la relatoría, constituyéndose entonces la secretaria de Sala, en cuyo caso el relator entrará á desempeñar las funciones del nuevo cargo.

Para obtener entre tanto las relatorías vacantes se necesitarán las mismas condiciones que la ley establece para las secretarías de Sala de la misma clase.

No son áPLICABLES las reglas precedentes á las relatorías y á las escribanías de cámara cuyas vacantes se hallaban anunciadas y corriendo el plazo para la presentación de opositores, quienes las obtendrán con sujeción á las reglas, y con todos los derechos, vigentes en el día que se hizo la convocatoria.

## XII.

Hasta que se plantee la presente ley, los relatores y escribanos de cámara que hoy existen en las Audiencias continuarán actuando en las Salas de lo civil y lo criminal y percibirán los derechos de arancel.

## XIII.

Los relatores y escribanos de cámara del Tribunal Supremo actuarán en la Sala primera.

En las demás Salas, habrá secretarios con dotación fija. Los derechos de arancel se satisfarán en papel.

## XIV.

Para fijar según esta ley la nueva categoría de los jueces actuales y cesantes, se considerará:

A los jueces de entrada, como jueces de instrucción.

A los jueces de ascenso, como jueces de tribunales de partido de ingreso.

A los jueces de término, como presidentes de los tri-

bunales de partido de ingreso ó jueces de tribunales de partido de ascenso.

Los promotores fiscales de entrada y de ascenso, actuales y cesantes, podrán ser nombrados jueces de instruccion.

Los de término, podrán ser nombrados jueces de tribunales de partido de ingreso (1).

## XV.

Continuarán ejerciendo sus funciones los cancilleres, registradores y tasadores, donde los hubiere.

Cuando vacaren estas plazas quedarán suprimidas.

## XVI.

Los escribanos de los juzgados de primera instancia de poblaciones en que se establezca tribunal de partido, continuarán desempeñando su cargo en el tribunal que se erija en la misma poblacion.

No tendrán derecho á ser promovidos, en concurrencia con los de oposicion.

Las vacantes que ocurran, se proveerán de conformidad con lo que establece esta ley.

## XVII.

Los escribanos de los juzgados ó tribunales suprimidos ó que se supriman en virtud de esta ley, que no fue-

---

(1) En el proyecto presentado por el Gobierno nada se decia de los promotores fiscales actuales ó cesantes á la publicacion de la ley; pero nada mas justo que la enmienda hecha por la comision, y en virtud de la cual deben ser incluidos en los escalafones de jueces de instruccion ó de los tribunales de partido de ingreso.

ren notarios ó que hubieren renunciado las notarías, tendrán opción á ser colocados en plazas análogas á las que desempeñaren, no habiendo justa causa que lo impida. Los que optaren por permanecer en los pueblos de los juzgados donde estaban como secretarios de juzgados de instruccion, serán preferidos para estos cargos, no habiendo justa causa que lo impida.

Cesarán los escribanos de diligencias.

Los actuales y los que lo hubieren sido en juzgados y tribunales suprimidos, podrán optar á plaza de oficiales de Sala, sin necesidad de nuevo exámen:

### XVIII.

La Sala primera del Tribunal Supremo conocerá:

De los pleitos anteriores al Real decreto de 4 de Noviembre de 1838, que eran de la competencia del tribunal en aquella época, y se hallaren todavía pendientes.

De los recursos de injusticia notoria en materia mercantil que hubiesen sido interpuestos antes del decreto del Gobierno provisional de 6 de Diciembre de 1868, y se hallaren todavía pendientes.

De los pleitos en que estaba entendiendo el Consejo de Castilla al tiempo de su extincion, que no estuvieren aun terminados.

Palacio de las Córtes 30 de Agosto de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Pér-si, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.—Mariano Rius Montaner, Diputado Secretario.

Madrid 15 de Setiembre de 1870.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.



Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó en la *Gaceta* del 21 de Junio de 1870 la siguiente

## LEY.

Don Francisco Serrano Dominguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortes soberanas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, salud:

Las Cortes Constituyentes de la Nacion española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Artículo 1.º El Gobierno publicará como ley provisional el proyecto de la de *matrimonio civil*, presentado á las Cortes, sin perjuicio de las alteraciones que las mismas tuvieren por conveniente hacer en él en su discusion definitiva; y sin perjuicio además de lo que se dispone por el derecho foral vigente respecto á los efectos civiles del matrimonio, en cuanto á las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes.

Art. 2.º Publicará igualmente como leyes provisionales los proyectos presentados asimismo á las Cortes sobre *reforma de la casacion en lo civil*; sobre el establecimiento del *recurso de casacion en lo criminal* y reformas consiguientes.

tes en el *procedimiento criminal*, y sobre el ejercicio de la *gracia de indulto*; sin perjuicio tambien de las alteraciones que puedan introducirse en ellos al ser discutidos definitivamente.

Art. 3.º Queda abolida la *pena de argolla* establecida como accesoria en el art. 24 del Código penal, y por lo tanto derogado el 51, el número 1.º del 52, el 113 del mismo Código y todos los demás á que sea aplicable el presente artículo (1).

Art. 4.º Hasta que se publique el Código civil se observarán como complementarias del art. 41 del penal las reglas siguientes sobre los efectos civiles de la *pena de interdiccion*:

Primera. Si el penado con la interdiccion civil fuese soltero y estuviere emancipado, se le proveerá, segun su edad, de curador ejemplar ú ordinario, á fin de que administre sus bienes y aplique los productos en la parte necesaria á cubrir sus obligaciones.

Segunda. Lo mismo se observará si el penado fuere casado y se hallare separado de su cónyuge por sentencia de divorcio.

Tercera. El nombramiento de curador en los casos á que se refieren las dos reglas anteriores se hará con sujecion á lo prescrito en la ley de Enjuiciamiento civil.

Cuarta. Si el penado estuviere casado y no separado por sentencia de divorcio de su mujer, se encargará ésta de la administracion de los bienes de la sociedad conyugal.

---

(1) La abolicion de la pena de argolla es una consecuencia natural del principio de que la ley no reconoce pena alguna infamante. Sin embargo, esta pena se mantuvo en el Código de 1848 contra la opinion de distinguidos jurisconsultos, y por tanto debemos considerar esta reforma como un verdadero progreso científico.

Los artículos citados se refieren al Código reformado de 1850.

Si la mujer del penado fuere de menor edad, se la proveerá de curador; habiendo de ser preferidos para este cargo, sucesivamente, el padre, madre, abuelos, hermanos y parientes más próximos de la menor.

Quinta. Los bienes del penado que correspondan á la clase de los comprendidos en el art. 1401 de la ley de Enjuiciamiento civil, no podrán ser enajenados, hipotecados, empeñados ni gravados, sino en la forma y con las solemnidades establecidas en los artículos 1402 y siguientes de la misma ley.

Sexta. Lo dispuesto en la regla anterior se observará tambien respecto á los bienes de la misma clase de la mujer del penado que fuere menor de edad.

Sétima. La esposa que fuere mayor de edad podrá disponer libremente de los bienes de cualquiera clase que le pertenezcan.

Octava. Los hijos del penado, menores de edad, estarán sometidos al poder de la madre, y si no la tuvieren, á la autoridad del tutor ó curador, que será el mismo que fuere nombrado para el padre.

No vena. El penado que estuviere desempeñando el cargo de tutor ó curador cesará en sus funciones, y se proveerá de nuevo guardador al menor ó incapacitado.

Décima. Cesará tambien el penado en la administracion de bienes ajenos que tuviere á su cargo por cualquier otro concepto.

Art. 5.º Para la reversion al Estado de los *oficios de la fé pública enajenados por la Corona*, y para la provision de las notarías en lo sucesivo se observarán las reglas siguientes:

Primera. Quedan reincorporados á la Nacion todos los oficios de la fé pública, judicial ó extrajudicial, enajenados de la Corona, cualquiera que fuere su denominacion

y clase, conforme á las disposiciones 3.<sup>a</sup> y 4.<sup>a</sup> de las transitorias de la ley de 28 de Mayo de 1862 (1).

Segunda. Los títulos de oficios cuya clasificacion se hubiere efectuado ya, en virtud de los decretos de 26 de Enero y 26 de Junio de 1869 y declarados con derecho á indemnizacion por el Ministerio de Gracia y Justicia, serán remitidos por éste inmediatamente al de Hacienda para los efectos oportunos de liquidacion y pago.

Tercera. Los dueños de oficios no clasificados que no soliciten la indemnizacion dentro de un año, á contar desde la publicacion de esta ley, perderán el derecho á ella.

Cuarta. El Ministro de Hacienda dictará las oportunas disposiciones acerca de la manera de realizar dicha indemnizacion y de determinar la preferencia en su caso, entre los dueños de los oficios.

Quinta. El Gobierno indemnizará á los propietarios de los oficios enajenados á quienes fuere reconocido el oportuno derecho, en títulos de la Deuda pública á precio de cotizacion ó en metálico.

Sexta. La provision de las notarías se hará en virtud de oposicion, conforme á la ley de 28 de Mayo de 1862 y decreto de 5 de Enero de 1869.

De acuerdo de las Córtes Constituyentes se comunica al Regente del Reino, para su promulgacion como ley.

Palacio de las Córtes 24 de Mayo de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Se-

---

(1) Pocas cosas podrian haber hecho los legisladores de la revolucion de Setiembre más convenientes que esta. La reversion de los oficios públicos á la Corona, que nunca debió enajenarlos, era un punto en el cual todos los hombres de ciencia estaban conformes; pero aun cuando se habian dictado diferentes disposiciones, encaminadas á realizar este progreso, la verdad es que se necesitaba un precepto radical, como el de que nos ocupamos, para curar uno de los grandes males que nos legó el despotismo.

cretario.==Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.==Mariano Rius Montaner, Diputado Secretario.

Por tanto:

Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores, y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes. Madrid 18 de Junio de 1870.==Francisco Serrano.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.



# LEY PROVISIONAL

## DE

# MATRIMONIO CIVIL.

### CAPITULO I.

#### De la naturaleza del matrimonio.

Artículo 1.º El matrimonio es por su naturaleza perpétuo é indisoluble.

Art. 2.º El matrimonio que no se celebre con arreglo á las disposiciones de esta ley, no producirá efectos civiles con respecto á las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes (1).

Art. 3.º Tampoco producirán obligacion civil la promesa de futuro matrimonio, cualesquiera que sean la forma y solemnidades con que se otorgue, ni las cláusulas penales, ni cualesquiera otras que en ella se estipulen.

---

(1) «Sin perjuicio además de lo que se dispone por el decreto foral vigente respecto á los efectos civiles del matrimonio, en cuanto á las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes.» Asi lo dispone el artículo 1.º de la ley de autorizacion para promulgar como provisional la ley del matrimonio civil y otras, de lo cual se deduce que el establecimiento de la reforma solo afecta á aquellas provincias de España que se rigen por la legislacion comun de Castilla.

## CAPITULO II.

## SECCION PRIMERA.

*De las circunstancias de aptitud necesarias para contraer matrimonio.*

Art. 4.<sup>o</sup> Son aptas para contraer matrimonio todas las personas que reúnan las circunstancias siguientes:

1.<sup>a</sup> Ser púberes, entendiéndose que el varón lo es á los catorce años cumplidos y la mujer á los doce.

Se tendrá, no obstante, por revalidado, *ipso facto* y sin necesidad de declaracion expresa, el matrimonio contraído por impúberes, si un día despues de llegar á la pubertad legal hubieren vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez, ó si la mujer hubiere concebido antes de la pubertad legal ó de haberse entablado la reclamacion.

2.<sup>a</sup> Estar en el pleno ejercicio de su razon al tiempo de celebrar el matrimonio.

3.<sup>a</sup> No adolecer, con anterioridad á la celebracion del matrimonio, y de una manera patente, perpétua é incurable, de impotencia física absoluta ó relativa para la procreacion.

Art. 5.<sup>o</sup> Aun cuando tengan la aptitud expresada en el artículo precedente, no podrán contraer matrimonio:

1.<sup>o</sup> Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial no disuelto legalmente.

2.<sup>o</sup> Los católicos que estuviesen ordenados *in sacris* ó que hayan profesado en una órden religiosa, canónicamente aprobada, haciendo voto solemne de castidad, á no



+ ~~ser~~ <sup>ser</sup> que unos y otros hayan obtenido la correspondiente licencia canónica.

3.º Los hijos de familia y los menores de edad que no hayan obtenido la licencia ó solicitado el consejo de los llamados á prestarlos en los casos determinados por la ley (1).

4.º La viuda durante los 301 días siguientes á la muerte de su marido ó antes de su alumbramiento si hubiere quedado en cinta, y la mujer cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo en los mismos casos y términos, á contar desde su separacion legal, á no haber tenido la correspondiente dispensa.

Art. 6.º Tampoco podrán contraer matrimonio entre sí:

1.º Los ascendientes y descendientes por consanguinidad ó afinidad legítima ó natural.

2.º Los colaterales por consanguinidad legítima hasta el cuarto grado.

3.º Los colaterales por afinidad legítima hasta el tercer grado.

4.º Los colaterales por consanguinidad ó afinidad natural hasta el segundo grado.

5.º El padre ó madre adoptante y el adoptado; éste y el cónyuge viudo de aquellos, y aquellos y el cónyuge viudo de éste.

6.º Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado mientras subsista la adopción.

7.º Los adúlteros que hubieren sido condenados como tales por sentencia firme.

8.º Los que hubieren sido condenados como autores

---

(1) La ley á que se refiere este artículo es la de 20 de Junio de 1862, publicada en la *Gaceta* de 24 del mismo.

ó como autor y cómplice de la muerte del cónyuge inocente, aunque no hubieren cometido adulterio.

9.º El tutor y su pupila, salvo el caso en que el padre de ésta hubiere dejado autorizado el matrimonio de los mismos en su testamento ó en escritura pública.

10. Los descendientes del tutor con el pupilo ó pupila, mientras que, fenecida la tutela, no haya recaído la aprobacion de las cuentas de este cargo, salvo tambien la excepcion expresada en el número anterior.

## SECCION SEGUNDA.

### *De las dispensas.*

Art. 7.º El Gobierno podrá dispensar, á instancia de los interesados, mediante justa causa debidamente justificada, y previos los trámites que se establecerán en el oportuno reglamento, los impedimentos comprendidos en el núm. 4.º del art. 5.º; los grados tercero y cuarto del núm. 2.º del art. 6.º; los impedimentos que comprenden los números 3.º y 4.º del mismo artículo en toda su extension, menos la consanguinidad natural, y los establecidos en el núm. 6.º

Art. 8.º Las dispensas á que se refiere el artículo precedente se concederán ó denegarán sin exaccion de derechos á los interesados bajo ningun concepto.

## CAPITULO III.

### De las diligencias preliminares á la celebracion del matrimonio.

#### SECCION PRIMERA.

#### *De la publicacion del matrimonio.*

Art. 9.º Los que intentaren contraer matrimonio lo

manifestarán al juez municipal (1) de su domicilio ó residencia, si los dos tuvieran una misma, y en otro caso al de uno de ellos, consignando ambos en esta manifestacion sus nombres y apellidos paterno y materno, su edad, profesion ú oficio, los respectivos pueblos, términos municipales, partidos y provincias de su nacimiento y de su domicilio ó residencia durante los dos últimos años.

Art. 10. Esta manifestacion se hará por escrito y se firmará por los dos interesados ó por otra persona á su ruego, si alguno de ellos ó ambos no supieren ó no pudieren firmar.

Art. 11. El juez municipal, previa la ratificacion de los pretendientes en la manifestacion expresada en el artículo anterior, mandará fijar edictos en el local de su audiencia pública y en otro sitio, tambien público, de la parroquia del último domicilio ó residencia de los interesados.

Art. 12. Mandará tambien remitir los edictos necesarios á los jueces municipales del territorio en que hubieren residido ó estado domiciliados los interesados en los dos últimos años, á fin de que manden fijarlos en el local de su audiencia pública, y en otro sitio, tambien público, de la parroquia en que aquellos hubieren vivido.

Art. 13. Los edictos se fijarán dos veces consecutivas por el término de ocho dias cada uno.

Art. 14. En los edictos se expresarán todas las circunstancias mencionadas en el art. 9.º, el tiempo de la publicacion de cada edicto, si es primero ó segundo el que se publica, invitándose en ellos á todos los que tuvie-

---

(1) La institucion de los jueces municipales se establece por la ley de organizacion del poder judicial.

ren noticia de algun impedimento legal que ligue á cualquiera de los contrayentes, á que lo manifieste por escrito ó de palabra al juez municipal del territorio en que se fije el edicto.

Se hará constar tambien en los edictos la fecha en que se fijan, y se insertarán en ellos textualmente los artículos 4.º, 5.º y 6.º de esta ley.

Art. 15. Cuando los interesados fueren extranjeros y no llevaren dos años de residencia en España, habrán de acreditar por certificacion de la autoridad competente segun las leyes de su país, legalizada en forma y con todas las circunstancias que requieran las leyes españolas para su autenticidad y validez:

Haberse hecho la publicacion del matrimonio que intentaren contraer con todas las solemnidades exigidas en el territorio en que hubieren tenido su domicilio ó residencia durante el año anterior á su entrada en España.

En todo caso acreditarán su libertad para contraer el matrimonio.

Art. 16. El juez municipal á quien compete autorizar el matrimonio podrá dispensar la publicacion de los edictos, y en su caso la presentacion de los documentos á que se refiere el artículo anterior, cuando cualquiera de los interesados se hallare en inminente peligro de muerte.

Art. 17. Los militares en activo servicio que intentaren contraer matrimonio estarán dispensados de la publicacion de los edictos si presentaren certificacion de su libertad, expedida por el jefe del cuerpo armado á que pertenezcan.

Art. 18. En los demás casos, solamente el Gobierno podrá dispensar la publicacion del segundo edicto ó de ambos, mediando causas graves suficientemente probadas. Esta dispensa se concederá gratuitamente en la forma y

con las solemnidades que se prescribirán en el oportuno reglamento.

Art. 19. Los jueces municipales en cuyo territorio se hubieren fijado los edictos, á excepcion del que hubiere de autorizar el matrimonio, expedirán, á instancia de cualquiera de los interesados, á los cinco dias de concluido el término de la publicacion de los edictos, certificacion de los impedimentos que se les hubieren denunciado, ó negativa en el caso de que no exista denuncia alguna.

#### SECCION SEGUNDA.

##### *De la oposicion al matrimonio.*

Art. 20. Los promotores fiscales, y los regidores síndicos de los pueblos en sus respectivos casos, tendrán obligacion de inquirir y denunciar al juez municipal que publicare los edictos para la celebracion del matrimonio, los impedimentos legales que afecten á los pretendientes.

Art. 21. Podrán tambien hacer la denuncia todos los ciudadanos mayores de edad. No será admisible, sin embargo, la que se refiere al impedimento expresado en el núm. 3.º del art. 5.º, si no fuere hecha por la persona llamada por la ley á dar la licencia ó el consejo para el matrimonio intentado.

Art. 22. No podrán ser denunciados otros impedimentos que los declarados y establecidos en los artículos 4.º, 5.º y 6.º de esta ley.

Art. 23. La denuncia de los impedimentos habrá de hacerse en el término señalado en los edictos ó en los cinco dias siguientes á su conclusion.

La que se hiciere despues no será admisible á no in-

terponerse ante el juez municipal que hubiere de autorizar el matrimonio y antes de su celebracion.

Art. 24. La denuncia hecha en tiempo oportuno, á que se refiere el artículo anterior, producirá el efecto de suspender la celebracion del matrimonio hasta que fuere declarada por sentencia firme su improcedencia ó falsedad.

Art. 25. La denuncia podrá hacerse por escrito ó verbalmente.

Si se hiciere por escrito, el juez municipal acordará que durante las veinticuatro horas siguientes se ratifique en ella el denunciante.

Si se hiciere verbalmente, se hará constar en acta, que autorizará el secretario del juez municipal, y firmará el denunciante si supiere ó pudiere firmar.

Art. 26. La denuncia se sustanciará por el juez municipal ante quien hubiere sido hecha, en la forma y por los trámites que se establecieren en la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 27. Cuando la denuncia privada fuere declarada maliciosa por sentencia firme, se condenará al denunciante á la indemnizacion de los daños y perjuicios causados á los interesados.

## CAPITULO IV.

### De la celebracion del matrimonio.

Art. 28. El matrimonio se celebrará ante el juez municipal competente y dos testigos mayores de edad.

Art. 29. Es juez municipal competente para autorizar el matrimonio el del domicilio ó residencia de los con-

trayentes, ó de cualquiera de ellos, á eleccion de los mismos.

Se entiende por residencia, para los efectos del párrafo precedente, la permanencia del interesado en el término municipal con dos meses de antelación; y si se tratare de militares en activo servicio, se considerará residencia de los mismos la del territorio donde se halle, aunque sea accidentalmente, el cuerpo á que pertenezcan ó en que radicare el empleo, cargo ó comision militar que estuvieren desempeñando.

Art. 30. El juez municipal de cada territorio será competente para autorizar el matrimonio del transeunte que en el mismo se halle en inminente peligro de muerte.

Art. 31. El juez municipal no autorizará la celebracion del matrimonio cuando á éste se hubiere hecho denuncia de impedimento legal, mientras ésta no sea desechada en forma.

Tampoco autorizará la celebracion de ningun matrimonio antes que se entreguen en la secretaría del juzgado:

1.º Las certificaciones de nacimiento de los interesados.

2.º Las negativas de denuncia de impedimento expresadas en el art. 19.

3.º Los documentos que acrediten la dispensa de la publicacion de edictos ó de impedimentos legales de los contrayentes en sus respectivos casos.

4.º Los documentos que demuestren haber obtenido la licencia ó solicitado el consejo, conforme á la ley, cuando se trate del matrimonio de hijos de familia y de menores de edad.

5.º Los documentos á que se refiere el art. 15 cuando se trate del matrimonio de extranjeros.

6.º La certificacion de libertad cuando se trate del matrimonio de militares en activo servicio, expedida con arreglo al art. 17.

Art. 32. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez municipal podrá autorizar el matrimonio del que se halla en peligro inminente de muerte, aunque los contrayentes no hayan presentado los mencionados documentos.

El matrimonio así contraído se entenderá condicional mientras que no se acredite la libertad anterior de los esposos en la forma establecida en esta ley.

Art. 33. Despues de trascurridos seis meses desde la fecha del último edicto, ó de su dispensa, sin que se haya celebrado el matrimonio, no podrá autorizarse, aunque los interesados lo soliciten, si no se cumplen nuevamente los requisitos y se practican las diligencias prescritas en esta ley.

Art. 34. Los contrayentes podrán celebrar el matrimonio religioso antes, despues ó al tiempo del matrimonio civil.

Art. 35. El matrimonio podrá celebrarse personalmente ó por medio de mandatario, con poder especial, que deberá expresar el nombre de la persona con quien éste lo haya de celebrar; pero siempre habrá de concurrir personalmente á la celebracion el contrayente domiciliado ó residente en el territorio del juez que haya de autorizar el matrimonio.

Art. 36. Será válido el matrimonio celebrado por medio de apoderado mientras que no se le haya notificado en forma auténtica la revocacion del poder otorgado á su favor por el contrayente.

Art. 37. El matrimonio se celebrará en el local de audiencia pública del juez que hubiere de autorizarlo, á



no ser que este acordare otra cosa, á instancia de los contrayentes, por hallarse alguno de ellos en la imposibilidad de concurrir al local mencionado ó por otra causa análoga.

Art. 38. El matrimonio se celebrará con asistencia de dos testigos mayores de edad, en la siguiente forma:

Primeramente el secretario del juzgado leerá los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º y 6.º de esta ley.

Acto continuo, y sucesivamente, el juez interrogará á cada uno de los esposos con la siguiente fórmula: «Queréis por esposa (ó esposo) á (el nombre y apellido del contrayente no interrogado.)»

Los contrayentes contestarán por su orden: «Sí quiero.» Incontinenti el juez pronunciará las siguientes palabras: «Quedais unidos en matrimonio perpétuo é indisoluble;» y se terminará el acto de la celebracion leyendo el secretario del juzgado los artículos del capítulo V, seccion primera de esta ley.

Art. 39. Todo lo expresado en el artículo anterior se consignará inmediatamente en un acta que firmarán el juez, los cónyuges y los testigos, si supieren ó pudieren firmar, autorizándola el secretario del juzgado.

El expediente formado para las diligencias preliminares del matrimonio se archivará en el juzgado, y á él se unirán los documentos á que se refiere el art. 31.

Art. 40. El matrimonio contraído fuera de España por extranjeros, con arreglo á las leyes de su nacion, surtirá en España todos los efectos civiles del matrimonio legítimo.

Art. 41. El matrimonio contraído en el extranjero por dos españoles, ó por un español y un extranjero, será válido en España siempre que se hayan observado en su celebracion las leyes establecidas en el país en que tuvo

efecto para regular la forma externa de aquel contrato, y los contrayentes tuvieren aptitud para celebrarlo con arreglo á las leyes españolas.

Art. 42. Los matrimonios celebrados en el extranjero por dos españoles, ó por un español que quiera conservar su nacionalidad y un extranjero, habrán de inscribirse en los quince dias siguientes á su celebracion en el registro civil del agente diplomático ó consular español del lugar en que el acto se hubiese efectuado; y no habiéndolo, en el del más próximo.

Art. 43. Los jefes de los cuerpos militares, en campaña, podrán autorizar, en defecto de juez municipal, los matrimonios que intenten celebrar *in articulo mortis* los individuos de los mismos, con arreglo al art. 32.

Los contadores de los buques de guerra y los capitanes de los mercantes podrán desempeñar las mismas funciones en los matrimonios que se celebren á bordo *in articulo mortis*.

## CAPITULO V.

De los efectos generales del matrimonio respecto de las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes.

### SECCION PRIMERA.

*De los efectos generales del matrimonio respecto á las personas y bienes de los cónyuges.*

Art. 44. Los cónyuges están obligados á guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Art. 45. El marido debe tener en su compañía y proteger á su mujer.

Administará tambien sus bienes, excepto aquellos cuya administracion corresponda á la misma por la ley, y estará facultado para representarla en juicio, salvo los casos en que ésta pueda hacerlo por sí misma, con arreglo á derecho, y para darle licencia para celebrar los contratos y los actos que la sean favorables.

Art. 46. El marido menor de 18 años no podrá, sin embargo, ejercer los derechos expresados en el párrafo anterior, ni tampoco administrará sus propios bienes sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste, del de su madre, y á falta de ambos, sin la competente autorizacion judicial, que se le concederá en la forma y en los casos prescritos en la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 47. Tampoco podrá ejercer las expresadas facultades el marido que esté separado de su mujer por sentencia firme de divorcio, que se halle ausente en ignorado paradero ó que esté sometido á la pena de interdiccion civil.

Art. 48. La mujer debe obedecer á su marido, vivir en su compañía y seguirle á donde éste traslade su domicilio ó residencia.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán, con conocimiento de causa, eximirla de esta obligacion cuando el marido traslade su residencia al extranjero.

Art. 49. La mujer no puede administrar sus bienes ni los de su marido, ni comparecer en juicio, ni celebrar contratos, ni adquirir por testamento ó abintestato sin licencia de su marido, á no ser en los casos y con las formalidades y limitaciones que las leyes prescriban.

Art. 50. Los actos de esta especie que la mujer ejecutare serán nulos y no producirán obligacion ni accion si no fueren ratificados expresa ó tácitamente por el marido.

Art. 51. Será válida, no obstante, la compra que al contado hiciere la mujer de cosas muebles y la que hiciere al fiado de las que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de la familia, y no consistieren en joyas, vestidos y muebles preciosos, por más que no hubieren sido hechas con licencia expresa del marido.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, se consolidará la compra hecha por la mujer al fiado de joyas, vestidos y muebles preciosos desde el momento en que hubieren sido empleadas en el uso de la mujer ó de la familia, con conocimiento y sin reclamacion del marido.

Art. 52. Tampoco podrá la mujer publicar escritos, ni obras científicas ni literarias de que fuere autora ó traductora, sin licencia de su marido, ó en su defecto sin autorizacion judicial competente (1).

Art. 53. Podrá la mujer sin licencia del marido:

1.º Otorgar testamento, disponiendo en él de sus bienes con las limitaciones establecidas por las leyes.

2.º Ejercer los derechos y cumplir los deberes que la correspondan respecto á los hijos legítimos ó naturales reconocidos que hubiere tenido de otro y á los bienes de los mismos.

Art. 54. La mujer gozará de los honores de su marido, excepto los que fueren estricta y exclusivamente personales, y los conservará mientras que no contrajere segundas nupcias.

Art. 55. Solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó autorizacion competente.

---

(1) Algunos han manifestado que no comprendian la razon de esta prohibicion en un pais que cuenta entre sus grandes escritores á Santa Teresa. y en que las hembras son llamadas á ocupar el Trono á falta de varon dentro de la misma linea.

## SECCION SEGUNDA.

*De los efectos generales del matrimonio respecto á las personas y bienes de sus descendientes.*

Parte primera.—De la legitimidad de los hijos.

Art. 56. Se presumirán hijos legítimos los nacidos despues de los 180 dias siguientes á la celebracion del matrimonio, y antes de los 300 siguientes á su disolucion ó á la separacion de los cónyuges.

Contra esta presuncion no se admitirá otra prueba que la de la imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros 120 dias de los 300 que hubieren precedido al nacimiento del hijo.

Art. 57. El hijo se presumirá legítimo aunque la madre hubiere declarado contra su legitimidad ó hubiere sido condenada como adúltera.

Art. 58. Se presumirá ilegítimo el hijo nacido en los 180 dias siguientes á la celebracion del matrimonio, á no ser que concurriere alguna de las circunstancias siguientes:

1.<sup>a</sup> Haber sabido el marido antes de casarse el embarazo de su mujer.

2.<sup>a</sup> Haber consentido, estando presente, que se pusiera su apellido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer hubiere dado á luz.

3.<sup>a</sup> Haberlo reconocido como suyo expresa ó tácitamente.

Se entenderá que lo ha reconocido como suyo si ha dejado trascurrir dos meses, á contar desde que tuvo noticia del nacimiento, sin hacer la reclamacion.

Art. 59. El marido ó sus herederos podrán desconocer la legitimidad del hijo que la mujer de aquel hubiese dado á luz despues de trascurridos 300 dias de la disolucion del matrimonio ó de la separacion legal y efectiva de los cónyuges; pero el hijo y su madre podrán tambien justificar en tal caso la paternidad del marido.

Art. 60. Para los efectos civiles no se reputará nacido el hijo que no hubiere nacido con figura humana y que no viviere veinticuatro horas desprendido enteramente del seno materno.

Art. 61. La legitimidad del hijo se probará:

1.º Por la partida de su nacimiento, consignada en el registro civil.

2.º Por la posesion constante del estado de legitimidad.

3.º Por testigos, con tal que hubiere un principio de prueba documental ó indicios que constaren desde luego, siendo estos tales, que con la prueba testifical bastaren para probar la legitimidad.

Art. 62. Es imprescriptible la accion que compete al hijo para reclamar su legitimidad, y se trasmitirá á sus herederos si hubiere muerto antes del quinto año de su mayor edad, ó despues dejando entablada la accion.

Parte segunda.—De la pátria potestad.

Art. 63. Los cónyuges están obligados á criar, educar, segun su fortuna, y alimentar á sus hijos y demás descendientes, cuando éstos no tuvieren padres ú otros ascendientes en grado más próximo, ó éstos no pudieren cumplir las expresadas obligaciones.

Art. 64. El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre sus hijos legítimos no emancipados.

Se reputará emancipado de derecho el hijo legítimo desde que hubiere entrado en la mayor edad.

Art. 65. En consecuencia de tal potestad, el padre, y en su defecto la madre, tendrán derecho:

1.º A que sus hijos legítimos no emancipados vivan en su compañía y á representarlos en juicio en todos los actos jurídicos que les sean provechosos.

2.º A corregirlos y castigarlos moderadamente.

3.º A hacer suyos los bienes que adquirieren con el caudal que hubieren aquellos puesto á su disposicion para cualquiera industria, comercio ó lucro.

4.º A administrar y usufructuar los bienes que los hijos hubieren adquirido por cualquier título lucrativo ó por su trabajo ó industria.

Art. 66. El padre, y en su defecto la madre, no adquirirán la propiedad, el usufructo ni la administracion de los bienes adquiridos por el hijo con su trabajo ó industria, si no viviere en su compañía.

Art. 67. El hijo se reputará como emancipado para la administracion y usufructo de los bienes comprendidos en el artículo anterior.

Art. 68. Tampoco adquirirá el padre, ó en su defecto la madre, la propiedad y el usufructo de los bienes donados ó mandados al hijo para los gastos de su educacion é instruccion, ó con la condicion expresa de que aquellos no hubieren de usufructuarlos si en este caso los bienes donados no constituyeren la legítima del hijo.

Art. 69. El padre, y en su defecto la madre, cuando gozaren del usufructo de los bienes de los hijos, tendrán las obligaciones de todo usufructuario, excepto la de afianzar respecto de los mismos bienes mientras no contrajeran segundas nupcias.

Tambien estarán obligados á formar inventario, con

intervencion del ministerio fiscal, de los bienes de los hijos respecto á los cuales tuvieren solamente la administracion.

Art. 70. Los hijos no emancipados tienen la obligacion de obedecer á sus padres; y aunque estén emancipados, la de tributarles respeto y reverencia.

Art. 71. La potestad del padre ó madre y de los derechos que la constituyen se suspenderán y se extinguirán en los casos determinados por las leyes.

Parte tercera.—De la obligacion de dar alimentos.

Art. 72. La obligacion de dar alimentos será recíproca.

Art. 73. Los alimentos han de ser proporcionados al caudal de quien los diere y á las necesidades de quien los recibiere.

Art. 74. La obligacion de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho á percibirlos, y no se extinguirá solamente por la renuncia de ésta.

Art. 75. Cesará la obligacion de dar alimentos:

1.º Cuando la fortuna del que estuviere obligado á darlos se hubiere reducido hasta el punto de que éste no pudiera satisfacerlos sin desatender sus necesidades precisas y las de su familia.

2.º Cuando el que hubiere de recibirlos haya mejorado de fortuna hasta el punto de no serle necesarios para su subsistencia.

3.º Cuando el mismo hubiere cometido alguna falta por la que legalmente le pueda desheredar el obligado á satisfacerlos.

4.º Cuando el que los hubiere de percibir fuere des-



cendiente ó hermano del que los hubiere de satisfacer, y la necesidad de aquel proviniere de mala conducta ó falta de aplicacion al trabajo, mientras que esta causa subsistiere.

Art. 76. Los alimentos se reducirán ó aumentarán proporcionalmente segun el aumento ó disminucion que sufrieren las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

Art. 77. La obligacion de satisfacer alimentos se extenderá en defecto de ascendientes ó descendientes, ó por su imposibilidad de satisfacerlos, á los hermanos legítimos, germanos, uterinos ó consanguíneos por el orden con que van mencionados en este artículo.

Art. 78. El alimentista tendrá que vivir en compañía del que debiere satisfacer los alimentos, en el caso que éste justificare no poder cumplir de otro modo su obligacion por la escasez de su fortuna.

## CAPITULO VI.

### De los medios de probar el matrimonio.

Art. 79. Los matrimonios celebrados antes de la promulgacion de esta ley se probarán por los medios establecidos en las leyes anteriores.

Art. 80. Los contraidos desde la promulgacion de esta ley se probarán solamente por las correspondientes actas del registro civil, á no ser que éstas hubieren desaparecido, en cuyo caso serán admisibles todos los medios legales de prueba.

Art. 81. La posesion constante de estado de los padres, unida á las actas de nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos, hará prueba plena del matrimonio de aquellos, si ya hubieren fallecido ó se hallaren impedi-

dos de manifestar el lugar de su casamiento, á no constar que alguno de ellos estaba ligado con un matrimonio anterior.

Art. 82. El matrimonio contraído en país extranjero podrá probarse por cualquier medio de prueba, si en el país en que fué celebrado no estuvieren los matrimonios sujetos á registro.

## CAPITULO VII.

### Del divorcio.

#### SECCION PRIMERA.

##### *De la naturaleza y causas del divorcio.*

Art. 83. El divorcio no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan solo la vida comun de los cónyuges y sus efectos.

Art. 84. Los cónyuges no podrán divorciarse, ni aun separarse, por mútuo consentimiento; para ello es indispensable en todo caso el mandato judicial.

Art. 85. El divorcio procederá solamente por las siguientes causas:

1.<sup>a</sup> Adulterio de la mujer, no remitido expresa ó tácitamente por el marido.

2.<sup>a</sup> Adulterio del marido con escándalo público ó con el abandono completo de la mujer, ó cuando el adúltero tuviere á su cómplice en la casa conyugal, con tal que no hubiera tambien sido remitido expresa ó tácitamente por la mujer.

3.<sup>a</sup> Malos tratamientos graves de obra ó de palabra inferidos por el marido á la mujer.

4.<sup>a</sup> Violencia moral ó física ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla á cambiar de religion.

5.<sup>a</sup> Malos tratamientos de obra inferidos á los hijos, si pusiesen en peligro su vida.

6.<sup>a</sup> Tentativa del marido para prostituir á su mujer, ó la proposicion hecha por aquel á ésta para el mismo objeto.

7.<sup>a</sup> Tentativa del marido ó de la mujer para corromper á sus hijos y la complicidad en su corrupcion ó prostitucion.

8.<sup>a</sup> Condenacion por sentencia firme de cualquiera de los cónyuges á cadena ó á reclusion perpétua.

Art. 86. El divorcio solamente podrá ser reclamado por el cónyuge inocente.

## SECCION SEGUNDA.

### *De las disposiciones preliminares del divorcio.*

Art. 87. Admitida la demanda de divorcio, ó antes, si la urgencia del caso lo requiere, se acordará judicialmente:

1.<sup>o</sup> La separacion provisional de los cónyuges y el depósito de la mujer.

2.<sup>o</sup> El depósito de los hijos en poder del cónyuge inocente; y si ambos fueren culpables, el nombramiento de tutor y curador de los mismos y su separacion de los padres.

Si las causas que hubieren dado margen al divorcio fueren las 1.<sup>a</sup>, 2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup>, 4.<sup>a</sup> y 8.<sup>a</sup> del art. 85, podrán los padres proveer de comun acuerdo el cuidado y educacion de los hijos.

3.<sup>o</sup> El señalamiento de alimentos á la mujer y á los hijos que no quedaren en poder del padre.

4.º La adopción de las disposiciones necesarias para evitar que el marido que hubiere dado causa al divorcio perjudique á la mujer en la administración de sus bienes.

### SECCION TERCERA.

#### *De los efectos del divorcio.*

Art. 88. La sentencia ejecutoria del divorcio producirá los siguientes efectos:

1.º La separación definitiva de los cónyuges.

2.º Quedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad y protección del cónyuge inocente.

Si ambos fueren culpables, quedarán bajo la autoridad del tutor ó curador, que se nombrará con arreglo á las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil, salvos los casos comprendidos en el número 2.º del art. 87.

No obstante las disposiciones anteriores, la madre conservará en todo caso á su cuidado á los hijos menores de tres años hasta que cumplan esta edad, á no ser que expresamente se haya dispuesto otra cosa en la sentencia.

3.º La privación por parte del cónyuge culpable, mientras viviere el inocente, de la patria potestad y de los derechos que lleva consigo sobre las personas y bienes de los hijos.

A la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable á recobrar la patria potestad y sus derechos si la causa que hubiere dado margen al divorcio hubiere sido alguna de las comprendidas en el mencionado número 2.º del art. 87.

Si fuere distinta, se nombrará tutor á los hijos en la forma anteriormente prevenida.

La privación de la patria potestad y sus derechos no

eximirá al cónyuge culpable del cumplimiento de las obligaciones que tuviere para con sus hijos.

4.º La pérdida por parte del cónyuge culpable de todo lo que hubiere sido dado ó prometido por el inocente, ó por otra persona en consideracion á éste, y la conservacion de todo lo recibido por el inocente y el derecho de reclamar desde luego lo que hubiere sido prometido por el culpable.

5.º La separacion de los bienes de la sociedad conyugal y la pérdida de la administracion de los de la mujer, si fuere el marido quien hubiere dado causa al divorcio y la mujer los reclamare.

6.º La conservacion por parte del marido inocente de la administracion de los bienes de la mujer, la cual solamente tendrá derecho á alimentos.

Art. 89. El divorcio y sus efectos cesarán cuando los cónyuges consintieren en volver á reunirse, debiendo poner la reconciliacion en conocimiento del juez ó tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoria del divorcio.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso de divorcio sentenciado por las causas 5.ª y 7.ª del artículo 85.

## CAPITULO VIII.

### De la disolucion y nulidad del matrimonio.

#### SECCION PRIMERA.

##### *De la disolucion del matrimonio.*

Art. 90. El matrimonio legítimo se disuelve solamente por la muerte de uno de los cónyuges, debidamente probada.

La ausencia prolongada de uno de ellos, con ignorancia de su paradero, no será causa de presuncion de su muerte, á no ser que durare hasta que tuviere 100 años de edad el ausente, en cuyo caso se le tendrá por fallecido.

Art. 91. El impedimento que, segun las prescripciones de esta ley, anula el matrimonio, no será causa para su disolucion cuando sobreviniere despues de la celebracion del matrimonio.

## SECCION SEGUNDA.

### *De la nulidad del matrimonio.*

Art. 92. No se reputará válido para los efectos de esta ley:

1.º El matrimonio que se contrajere por el que carezca de alguna de las circunstancias necesarias de aptitud prescritas en el art. 4.º, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del número 1.º de dicho artículo.

2.º El que se contrajere mediando alguno de los impedimentos establecidos en los números 1.º y 2.º del artículo 5.º, y en los ocho primeros del art. 6.º, si no hubieren sido previamente dispensados en los casos en que sea procedente la dispensa.

3.º El que no se contrajere con autorizacion del juez municipal competente y á presencia de dos testigos mayores de edad.

4.º El contraido por error en la persona, por coaccion ó por miedo grave que vicien el consentimiento.

5.º El contraido por el raptor con la robada, mientras que ésta se halle en su poder.

Serán, no obstante, válidos los matrimonios á que se refieren los dos números antecedentes si hubieren tras-

currido seis meses de cohabitacion de los cónyuges, á contar desde que el error se hubiere desvanecido ó la libertad se hubiere recobrado sin haber reclamado durante aquel tiempo la nulidad.

Art. 93. En los casos de los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo anterior, podrán reclamar la nulidad los cónyuges, el ministerio fiscal ó cualquiera persona que tuviere interés en ella.

En los casos de los números 4.º y 5.º podrá reclamarla solamente el cónyuge que hubiere sufrido el error, la fuerza ó el miedo.

Admitida la demanda de nulidad del matrimonio, se practicarán las diligencias establecidas en el art. 87.

#### SECCION TERCERA.

Art. 94. El matrimonio nulo contraído de buena fé por ambos cónyuges producirá todos sus efectos civiles mientras subsista, y la legitimidad de los hijos.

Art. 95. El contraído de buena fé por uno de ellos los producirá solamente respecto del cónyuge inocente y de los hijos.

Art. 96. La buena fé se presumirá siempre, á no probarse lo contrario.

Art. 97. Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los hijos varones mayores de tres años quedarán al cuidado del padre y las hijas al de la madre, habiendo habido buena fé por parte de ambos cónyuges.

Si la hubo tan solo por parte de uno de ellos, quedarán los hijos de ambos sexos bajo su poder y á su cuidado.

Pero en todo caso continuarán al cuidado de la madre los menores de tres años hasta que cumplan esta edad.

Art. 98. Lo dispuesto en el artículo anterior no tendrá efecto si los padres, de comun acuerdo, dispusieron otra cosa.

Art. 99. La sentencia ejecutoria de nulidad del matrimonio producirá, respecto de los bienes de los cónyuges los mismos efectos que la disolucion de aquel por muerte.

El cónyuge que hubiere obrado de mala fé perderá sin embargo la parte de los gananciales que en otro caso le hubiera de corresponder.

Art. 100. La sentencia ejecutoria de nulidad del matrimonio se inscribirá en el registro civil en que constare su celebracion.

#### DISPOSICION GENERAL.

El conocimiento y decision de todas las cuestiones á que diere márgen la observancia de esta ley corresponderá á la jurisdiccion civil ordinaria, segun la forma y el modo que se establezcan en las leyes de Enjuiciamiento civil.

Las sentencias y providencias de los tribunales eclesiásticos, sobre todo lo que constituye el objeto de esta ley, no producirán efectos civiles.

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 1.º Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces y tribunales civiles ordinarios no conocerán de las demandas de nulidad de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad á la promulgacion de esta ley y de sus incidencias, cuyo conocimiento correspondió hasta ahora á la jurisdiccion eclesiástica.



Las sentencias que dictaren sobre ellas los tribunales eclesiásticos producirán efectos civiles.

Art. 2.<sup>o</sup> Los matrimonios civiles celebrados hasta la promulgacion de esta ley ante los alcaldes del domicilio ó residencia de los contrayentes y dos testigos mayores de edad, se reputarán legítimos y producirán todos sus efectos civiles si los contrayentes tuvieron capacidad para celebrarlos con arreglo á las prescripciones de esta ley.

Palacio de las Córtes 24 de Mayo de 1870.==Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.==Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.==Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.==Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.==Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1870.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó en la *Gaceta* del 16 de Agosto el siguiente decreto sobre planteamiento de la ley que antecede:

#### EXPOSICION.

Señor: Publicada como provisional, juntamente con otras varias, la ley de matrimonio civil que las Córtes Constituyentes decretaron sin perjuicio de las alteraciones que resulten de su discusion definitiva, el Gobierno se ha ocupado desde luego, como era su deber, en preparar su más inmediata ejecucion.

A la observancia de todas y cada una de sus prescripciones tenia y tiene que preceder el planteamiento de otras leyes, recientemente acordadas tambien por el Poder legislativo, que con ella tienen natural é íntimo enlace, señaladamente la de registro del estado civil, donde han de inscribirse los matrimonios; la de organizacion del Poder judicial, que establece los jueces municipales y los tribunales de partido, llamados á prevenir y autorizar la celebracion de aquellos, y la de reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, que habrá de regular el modo y forma de proceder en los juicios sobre nulidad y disolucion del matrimonio y en el ante-juicio de las causas de divorcio, que hasta ahora se hallaban fuera de la competencia de los tribunales civiles. El Gobierno consagra su especial atencion al planteamiento de la primera de estas leyes, habiéndose anunciado ya la subasta para la adquisicion de los libros de registro civil, primero y más indispen-

ble elemento para el cumplimiento de sus disposiciones, y se ocupa asimismo con asídúo afán en ordenar lo necesario para la aplicacion de las otras dos que están muy próximas á publicarse.

Es igualmente indispensable para el cabal cumplimiento de la de matrimonio civil, que se dicte previamente, oyendo al Consejo de Estado, el reglamento de dispensas que requiere la misma en su art. 7.º, y por ello se está formando el correspondiente proyecto para pasarlo á consulta de aquel alto Cuerpo en cuanto terminen las vacaciones en que actualmente se halla.

Pero si por estos naturales obstáculos, que el Gobierno se esfuerza en superar, no es posible llevar á cumplido efecto la referida ley en todas sus disposiciones, no por eso deja de ser aplicable desde luego en la mayor parte de ellas, y aun en la que sin duda se considerará como más perentoria é importante, la que se refiere á la celebracion de los matrimonios. Cuando para estos no haya impedimentos legales, no se aspire á la dispensa de edictos ó no se presente oposicion formal que la autoridad competente estime justa, la celebracion puede tener efecto, á juicio del Ministro que suscribe, sin dificultad y sin peligro de ninguna clase, bastando para ello establecer un registro provisional para la inscripcion de los matrimonios que se celebren, el cual habrá de pasar en su dia al definitivo, que muy pronto se ha de plantear; dictar algunas disposiciones que contribuyan á facilitar la inteligencia y el uniforme y exacto cumplimiento de las prescripciones de la ley, y aplazar los matrimonios en que haya necesidad de dispensas, de impedimentos ó de edictos, hasta que se decrete y publique el reglamento de aquellas, como tambien el curso de las demandas de nulidad y disolucion de matrimonio ó de divorcio, mientras

no se establece en forma el procedimiento para estos juicios.

El Ministro que suscribe no vacila en proponer á V. A. que se digne mandar poner en ejecucion la ley de que se trata, con arreglo á estas indicaciones. El cumplimiento de las leyes debe seguir inmediatamente á su promulgacion; y aun cuando tenga que diferirse necesaria y legalmente cuando exigen reglamentos prévios é indispensables para su aplicacion, hasta que estos se publiquen, el aplazamiento no debe extenderse más allá de la parte que ha de ser reglamentada cuando las demás prescripciones pueden regir desde luego, y cuando, como en el caso presente, hay términos hábiles para orillar cualquier dificultad que á ello se oponga. Conviene, pues, poner en ejecucion la ley del matrimonio civil en todo aquello en que es posible aplicarla. La opinion pública, que clama coastantemente por el planteamiento de esta institucion; el espíritu que reinó en las Córtes al discutirse; la circunstancia de haberse establecido de hecho en algunos puntos á la raiz de la revolucion de Setiembre, celebrándose cierto número de matrimonios con más ó menos formalidades ante los alcaldes populares; la incertidumbre en que se hallan algunas familias; la proximidad de la publicacion de las demás leyes, que han de completar el sistema, y otras muchas consideraciones de grande importancia social y política, así lo exigen imperiosamente. Agréguese á todo esto que ha de ser muy corto el período en que puede subsistir el estado de cosas que va á crearse con el planteamiento provisional de la referida ley, toda vez que dentro de muy poco tiempo habrá de ser esta aplicada definitivamente en su totalidad, y se comprenderá cada vez más la oportunidad de la mencionada resolucion.

Las disposiciones que para su desenvolvimiento conceptúa oportunas el Ministro que suscribe, y se contienen en el adjunto proyecto de decreto, son sumamente sencillas si se las examina en su conjunto. Redúcense á fijar el día en que debe empezar á regir la ley, determinándose que sea el 1.º de Setiembre próximo en la Península é islas Baleares, y el 15 del mismo mes en las Canarias; á precisar y aclarar algunas de las prescripciones de la misma, que pueden ofrecer duda ó prestarse á diversas interpretaciones; á disponer que se suspenda la celebracion del matrimonio y todo procedimiento relativo al mismo, en los casos en que existan impedimentos ó se aspire á la dispensa de edictos, hasta que se reglamente en forma todo lo relativo á dispensas; á prevenir igual suspension respecto de las cuestiones que se susciten ante los tribunales civiles, sobre nulidad ó disolucion de matrimonio ó sobre divorcio, mientras no se publica la reforma del Enjuiciamiento civil; á encomendar á los actuales jueces de paz y de primera instancias las funciones, deberes y atribuciones que la ley confiere á los jueces municipales, tribunales de partido y sus presidentes, y á los promotores fiscales las que competen á los fiscales de los mismos, hasta que se publique y plantee la nueva ley de organizacion judicial; á encargar á la Direccion general de los registros civil y de la propiedad y del notariado que dicte las órdenes é instrucciones necesarias para el cumplimiento de dicha ley y del decreto en proyecto, y á otros varios puntos de mera ejecucion, como los precedentes, que resultan del articulado.

En virtud de estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la honra de proponer á V. A. el siguiente proyecto de

## DECRETO.

En vista de las razones que me ha expuesto el Ministro de Gracia y Justicia, como Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La ley de matrimonio civil, publicada como provisional en 18 de Junio del corriente año, se cumplirá y observará desde el día 1.º de Setiembre próximo en la Península é islas Baleares, y desde el día 15 del mismo mes en las Canarias, con sujecion á las disposiciones de este decreto y á las órdenes é instrucciones que oportunamente se circularán por la Direccion general de los registros civil y de la propiedad y del notariado.

Art. 2.º No se procederá á la celebracion de los matrimonios que se hallen en cualquiera de los casos siguientes:

1.º Cuando entre los que intenten celebrarlos medie alguno de los impedimentos legales á que se refiere el artículo 7.º de la ley hasta que se publique, previos los trámites correspondientes, el reglamento de dispensas que en el mismo se previene.

2.º Cuando los que intenten celebrarlos aspiren á la dispensa de la publicacion de edictos, excepto los casos á que se refieren los artículos 16 y 17 de la ley, mientras no se reglamente en debida forma todo lo relativo á esta clase de dispensas.

3.º Cuando se presentare en tiempo y forma oposicion al matrimonio intentado, y esta fuere declarada admisible por el tribunal del partido respectivo, previos los trámites correspondientes.

Art. 3.º En los demás casos los jueces municipales

procederán, cada uno en su respectivo territorio, á practicar las diligencias preliminares á la celebracion del matrimonio establecidas en la seccion primera del capítulo III de la ley.

Para la práctica de las expresadas diligencias se cumplirán exstrictamente todas las prescripciones contenidas en los artículos 9.º al 17, y en el 19, en cuanto fueren aplicables á cada caso, y además las siguientes:

1.<sup>a</sup> La manifestacion de los que intentaren contraer matrimonio á que se refieren los artículos 9.º y 10 de la ley se hará al juez municipal de su domicilio ó residencia, si tuvieren una misma, y en otro caso al que elijan para la celebracion de aquel, conforme al art. 29, consignando todas las circunstancias y antecedentes personales expresados en dicho art. 9.º

2.<sup>a</sup> La referida manifestacion podrá hacerse por medio de solicitud escrita y firmada por los que intenten contraer matrimonio, ó verbalmente, exponiendo al juez municipal su propósito de contraerlo y las circunstancias y antecedentes mencionados en la prescripcion anterior. En este último caso, se reducirá en el acto á escrito la manifestacion por el secretario, firmándola los interesados ú otra persona á su ruego si no supieren ó no pudieren firmar, y autorizándola aquel.

3.<sup>a</sup> Inmediatamente despues de presentada ó redactada la manifestacion, el juez municipal dictará providencia mandando que se ratifiquen en ella los interesados. Si la manifestacion adoleciere de alguna omision ó defecto, se suplirá ó subsanará en el acto de la ratificacion, adicionándose ó corrigiéndose lo necesario. La diligencia de ratificacion se firmará por el juez municipal, por los interesados, ó por persona á su ruego, si no supieren ó no pudieren firmar, y por el secretario.

4.<sup>a</sup> Hecha la ratificacion, el juez dispondrá que se formen y publiquen los correspondientes edictos con arreglo á lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley, copiándose el original de los mismos á continuacion de la providencia en que se manden publicar, fijándolos en los parajes marcados en el art. 11, y remitiéndolos á los demás jueces municipales, donde tambien deban publicarse, en los casos expresados en el art. 12.

5.<sup>a</sup> Trascurrido el término de los edictos y los cinco dias más que expresa el art. 23 en cada uno de los juzgados municipales en que aquellos se hayan publicado, los jueces municipales respectivos dirigirán al que haya de autorizar el matrimonio el oportuno oficio, expresando haber tenido efecto la mencionada publicacion de edictos, y acompañando certificacion de los impedimentos que se les hubiesen denunciado, ó negativa en el caso de que no se les hubiese hecho ninguna denuncia.

6.<sup>a</sup> Antes de hacer uso el juez municipal de la facultad que le concede el art. 16 de la ley de dispensar la publicacion de edictos cuando cualquiera de los que intenten contraer matrimonio se hallen en inminente peligro de muerte, exigirá certificacion facultativa que acredite esta circunstancia. En vista de ella y de los demás datos y noticias que sobre el caso pueda adquirir, acordará dicha dispensa si considerase suficientemente justificado el peligro de que queda hecho mérito.

7.<sup>a</sup> Para que los militares en activo servicio puedan considerarse dispensados de la publicacion de edictos, á tenor de lo prevenido en el art. 17 de la ley, será indispensable que presenten certificacion de su libertad, expedida por los jefes del cuerpo ó cuerpos armados á que hayan pertenecido durante los dos últimos años y pertenezcan al solicitar el matrimonio. Si no hubiesen servido todo



aquel tiempo, se fijarán edictos en el domicilio ó domicilios que hubiesen tenido desde la fecha anterior en dos años á la solicitud del matrimonio hasta su entrada en el servicio. En ningun caso se entenderán relevados de presentar el documento que acredite en debida forma el consentimiento ó consejo favorable de quienes deban prestarlo, cuando lo necesiten para contraer matrimonio.

Art. 4.<sup>o</sup> Siempre que se presentare oposicion formal al matrimonio intentado, los jueces municipales y demás funcionarios á quienes corresponda entender en la misma, procederán con extricta sujecion á lo dispuesto en los artículos 20 al 27 de la ley y á las prescripciones siguientes :

1.<sup>a</sup> Toda oposicion en que se denuncien otros impedimentos que los expresados en los artículos 4.<sup>o</sup>, 5.<sup>o</sup> y 6.<sup>o</sup> de la ley; en que denunciándose el mencionado en el número 3.<sup>o</sup> del art. 5.<sup>o</sup> no fuere hecha por la persona llamada por la ley de 20 de Junio de 1862 á dar la licencia ó el consejo para el matrimonio intentado, y las que fueren presentadas fuera del término señalado en el art. 23, serán desechadas de plano por el juez municipal á quien se presenten.

2.<sup>a</sup> Tambien lo serán aquellas en que no se ratificaren los denunciantes, por su culpa ú omision, durante las veinticuatro horas siguientes á la presentacion de la denuncia.

3.<sup>a</sup> Hecha la ratificacion, el juez municipal dictará providencia mandando notificar la denuncia á los que intentaren contraer matrimonio, y á sus padres ó curadores si aquellos fueren menores de 25 años de edad.

Los interesados podrán hacer constar en la diligencia de notificacion si en vista de la denuncia persisten en la celebracion del matrimonio. En el caso de desistimien-

to se suspenderá toda diligencia ulterior, remitiéndose el expediente al juez designado para autorizar el matrimonio.

4.<sup>a</sup> Si los interesados no manifestasen en el acto de la notificacion ó en las veinticuatro horas siguientes su desistimiento, el juez dictará providencia mandando recibir á prueba la denuncia por el término de ocho dias.

Esta providencia se notificará al denunciante y á aquellos á quienes se hubiese tambien notificado la denuncia.

Los interesados, si fueren mayores de 25 años de edad, y sus legítimos representantes si fuesen menores, podrán oponerse á la denuncia; admitiéndoseles en este caso, lo mismo que al denunciante, todas las pruebas pertinentes que en el expresado término propongan.

Las pruebas se practicarán en todo caso con citacion de ambas partes interesadas. Las declaraciones de testigos se recibirán á presencia de las mismas si quisieren concurrir, pudiendo hacerse de palabra á aquellos las preguntas y repreguntas que deseen y el juez estime conducentes. No se admitirán interrogatorios por escrito.

5.<sup>a</sup> Trascurridos los ocho dias útiles destinados para la prueba, á contar desde el de la última notificacion de la providencia mencionada en la regla anterior, se unirán á la denuncia las pruebas practicadas, citándose y emplazándose á las partes ó á sus representantes para que comparezcan ante el tribunal de partido que haya de resolver sobre la denuncia dentro del término de ocho dias, á contar desde la fecha del último emplazamiento. Este término se ampliará á razon de un dia más por cada 10 leguas de distancia del pueblo en que resida el emplazado á aquel en que radique dicho tribunal.

6.<sup>a</sup> El juez que haya instruido el expediente lo remi-

tirá inmediatamente al tribunal de partido, haciendo la remision por conducto del que deba autorizar la celebracion del matrimonio, si este no fuese el mismo que lo hubiese instruido.

El juez á quien corresponda autorizar el matrimonio remitirá juntos todos los expedientes referidos á dicho tribunal.

7.<sup>a</sup> Recibidos en éste, y trascurrido el término del emplazamiento, el tribunal de partido convocará los interesados que se hubiesen personado y al fiscal á juicio verbal, que deberá celebrarse dentro de los tres dias siguientes á aquel en que concluya el término del emplazamiento.

8.<sup>a</sup> Los interesados y el fiscal podrán presentar en el acto del juicio verbal los nuevos documentos y testigos que les convengan. El tribunal podrá asimismo dictar, para mejor proveer, las providencias que considere indispensables á fin de conseguir el mayor esclarecimiento de algun hecho.

9.<sup>a</sup> En todo caso, dentro de los cinco dias siguientes al de la celebracion del juicio verbal, el tribunal de partido dictará providencia motivada, admitiendo ó desestimando las denuncias presentadas.

Si la denuncia fuese desestimada, los denunciantes serán condenados á la indemnizacion de los gastos ocasionados á los que intentaren contraer el matrimonio, á no ser que la denuncia fuese desestimada por hallarse comprendida en la regla 1.<sup>a</sup> del art. 4.<sup>o</sup> de este decreto, en cuyo caso se impondrá la expresada indemnizacion al juez que indebidamente hubiere dado curso á la denuncia.

Si el tribunal de partido considerase maliciosa la denuncia, reservará su derecho á los perjudicados para re-

clamar en juicio ordinario el resarcimiento de daños y perjuicios.

10. Contra la providencia del tribunal no se dará recurso alguno; pero siempre se entenderá reservado su derecho á los interesados para que puedan ejercitarlo en juicio ordinario.

11. Dictada la providencia por el tribunal, mandará devolver inmediatamente todos los expedientes al juez municipal á quien correspondiere autorizar la celebracion del matrimonio.

Art. 5.º No podrá procederse á la celebracion del matrimonio sin que el juez de paz á quien corresponda autorizarlo haga constar en el expediente no haberse presentado en tiempo oportuno denuncia de impedimento legal, ó en otro caso que ha sido desestimada por el tribunal de partido.

Art. 6.º Practicado lo que se expresa en el artículo anterior, no podrá diferirse la celebracion del matrimonio, á no ser que el juez municipal tuviere motivos fundados para creer que exista algun impedimento legal, en cuyo caso pondrá aquellos en conocimiento del representante del ministerio fiscal á fin de que formule la correspondiente denuncia si la estimase procedente.

Si en las veinticuatro horas siguientes no se presentase esta denuncia, el juez municipal no podrá dilatar por esta causa la celebracion del matrimonio.

Art. 7.º Antes de proceder á la celebracion del matrimonio, el juez municipal examinará los documentos á que se refiere el art. 31 de la ley para cerciorarse de su validez y autenticidad.

Además de estos documentos, exigirá que acrediten haber obtenido la licencia del Gobierno los que la necesiten para contraer matrimonio.

Art. 8.º El juez municipal no podrá delegar sus facultades para la autorizacion de los matrimonios. En los casos de ausencia, enfermedad ú otro impedimento legítimo, los sustituirán los suplentes á quienes corresponda con arreglo á las disposiciones legales.

Art. 9.º El acto de la celebracion del matrimonio se verificará con sujecion á las prescripciones de los artículos 37 y 38 de la ley, y además se observarán las siguientes:

1.ª El acto será público y solemne, y se verificará en el dia que los contrayentes designen, poniéndose al efecto de acuerdo con el juez municipal, y en la hora que este determine.

2.ª Los dos testigos, que necesariamente lo han de presenciar, serán designados por los contrayentes, debiendo aquellos ser mayores de edad, conforme al art. 38 de la ley.

3.ª Llegada la hora designada para la celebracion del matrimonio, y hallándose presentes los que deban concurrir al acto, el juez municipal manifestará el objeto de la reunion, y mandará que se proceda á llenar sucesivamente todas las formalidades expresadas en dicho artículo 38.

Si los contrayentes ó alguno de ellos fuere sordo-mudo, deberá expresar su consentimiento por signos que no den lugar á duda acerca de su voluntad de prestarlo.

Si los contrayentes ó alguno de ellos no entendiese el castellano, el juez nombrará un intérprete que comunique con ellos y trasmita al juez y á los concurrentes sus respuestas. Este intérprete deberá tener las circunstancias que se requieren para ser testigo de mayor excepcion, y jurará previamente desempeñar fielmente su cargo. Cuan-

do ocurran estos casos excepcionales, se hará mención de ellos en el acta de matrimonio.

Art. 10. Terminada la celebracion del matrimonio, se procederá acto continuo á extender el acta prevenida en el art. 39 de la ley, con exstricta sujecion á lo dispuesto en el mismo y en los 15, 17, 19, 20, 66 y 67 de la de registro civil, y á los modelos que oportunamente se circularán por la Direccion general de los registros civil y de la propiedad y del notariado.

Art. 11 El acta expresada en el artículo anterior se inscribirá en un registro provisional que se abrirá al efecto en cada juzgado municipal, y subsistirá hasta que se plantee el definitivo que previene la referida ley de registro civil.

Art. 12. El registro provisional expresado en el artículo que antecede se llevará en un libro ó cuaderno de papel del sello de oficio, debiendo estar foliadas todas sus hojas y rubricadas por el presidente del tribunal de partido, poniéndose además en ellas el sello del mismo tribunal, y extendiéndose en la primera hoja útil una certificacion del referido presidente, firmada por el mismo y por el secretario del tribunal, en que se exprese el número de fóllos que contenga el libro ó cuaderno, y no estar manchado, inutilizado ni escrito ninguno de aquellos.

Los presidentes del tribunal de partido mandarán formar desde luego los referidos libros ó cuadernos con el papel de oficio que exista en su poder para los asuntos de su cargo, pidiendo en seguida al jefe de la administracion económica de la provincia que los provea del necesario á fin de que los negocios no sufran dilacion en su curso por falta del mismo.

Los jueces municipales dispondrán que se trace y separe por medio de una raya perpendicular de tinta una

márgen equivalente á la tercera parte sobre poco más ó menos del ancho de la hoja del libro.

Art. 13. La primera inscripcion del acta de matrimonio en el libro, se hará á continuacion de la certificacion expresada en el art. 12.

Las demás inscripciones se irán extendiendo sucesivamente sin dejar hueco alguno en blanco, excepto el natural intermedio de las firmas de la anterior.

Las equivocaciones ú omisiones que se hubiesen cometido al extender las actas se salvarán de puño y letra de la misma persona que haya escrito el asiento al final de éste antes de ser firmada el acta, y haciéndose al efecto las oportunas llamadas. Las tachaduras se harán al propio tiempo, pero de modo que siempre se pueda leer la palabra ó palabras tachadas.

Al márgen de la primera línea de cada inscripcion se pondrá en guarismo el número de órden correspondiente á la misma, y debajo de este número los nombres y apellidos de los contrayentes á que se refiera la inscripcion.

Art. 14. Todas las diligencias anteriores á la celebracion del matrimonio se extenderán en papel de sello de oficio, que deberán proporcionar los interesados.

No se exigirán por aquellas derechos ni retribucion de ninguna clase, bajo ningun concepto, por las autoridades y funcionarios que intervengan en las mismas.

Art. 15. Las certificaciones afirmativas ó negativas que, con referencia al registro provisional ó á los documentos que obran en los expedientes de matrimonios, expidan los jueces municipales á instancia de los interesados, deberán extenderse en el papel del sello correspondiente, y estar autorizadas, además del juez municipal, por el secretario, estampándose al pié de las mismas el sello del juzgado.

Por estas certificaciones ó copias devengarán los secretarios de los juzgados municipales una peseta por cada una, quedando á cargo de los mismos el cubrir los gastos de material que ocasionen las celebraciones de matrimonio y el referido registro provisional.

Cuando los interesados sean pobres, se les expedirán gratis las expresadas certificaciones y copias en papel de oficio.

Art. 16. Inscriptos los matrimonios, los expedientes y documentos relativos á los mismos se archivarán y custodiarán por el órden debido en los respectivos juzgados municipales, bajo la responsabilidad de los jueces y secretarios.

Art. 17. Los matrimonios que se hayan celebrado hasta la promulgacion de la ley de matrimonio civil, en los términos expresados en el art. 2.º de las disposiciones transitorias de la misma, se trascribirán al registro provisional del juzgado de paz en que tuviesen su domicilio ó residencia los contrayentes, ó alguno de ellos, al tiempo de su celebracion, siendo llamados estos, así como el alcalde que los haya autorizado y los testigos presenciales, á firmar el acta transcrita, la cual será firmada igualmente por el juez municipal y secretario.

Art. 18. En los casos en que no sea posible proceder á la celebracion del matrimonio por existir impedimentos dispensables, y no poderse solicitar la dispensa hasta que se publiquen los reglamentos indicados en el art. 2.º del presente decreto, si los interesados celebrasen válidamente el matrimonio canónico y verificasen la celebracion del civil dentro de los dos meses siguientes á la publicacion de dichos reglamentos, los efectos civiles del mismo se retrotraerán á la fecha del canónico.

Art. 19. Las cuestiones que se susciten sobre divor-



cio, nulidad ó disolucion del matrimonio, cuyo conocimiento competa á la jurisdiccion civil ordinaria, á tenor de la disposicion general de la ley, quedarán en suspenso hasta que se establezca en la de Enjuiciamiento civil el procedimiento que ha de seguirse en aquellas causas.

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.<sup>a</sup> Los actuales jueces de paz desempeñarán y cumplirán todas las funciones, deberes y atribuciones que en virtud de la ley y del presente decreto corresponden á los jueces municipales hasta que se publique la ley orgánica del poder judicial y tomen conforme á ella esta denominacion.

2.<sup>a</sup> Mientras no se establezcan los tribunales de partido, los jueces de primera instancia desempeñarán en el territorio de su juzgado respectivo todas las funciones, deberes y atribuciones que se confieren á dichos tribunales y á sus presidentes. Los promotores fiscales y los secretarios del gobierno de los juzgados entenderán del mismo modo en los actos correspondientes á los fiscales y secretarios del tribunal de partido.

3.<sup>a</sup> Las dudas que ocurrieren á los jueces de paz ó municipales acerca de la inteligencia y aplicacion de la ley y del presente decreto, serán consultadas por los mismos en comunicacion clara y precisa á los jueces de primera instancia respectivos, quienes las resolverán á la mayor brevedad con audiencia del promotor fiscal. Si el caso fuere de gravedad, lo consultarán á su vez á la Direccion general de los registros civil y de la propiedad y del notariado en el Ministerio de Gracia y Justicia, elevando al efecto los antecedentes con su informe para su resolucion definitiva.

4.<sup>a</sup> Los gobernadores de las provincias mandarán insertar el presente decreto en los *Boletines oficiales* de las mismas en cuanto reciban la *Gaceta* en que se publique, previniendo que preceda igual insercion de las leyes de matrimonio y registro civil, si no se hubiese ya efectuado.

Madrid 16 de Agosto de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro interino de Gracia y Justicia, Laureano Figuerola.

Por la Direccion general de los registros civil y de la propiedad y del notariado se publicó con fecha 24 de Agosto de 1870 la siguiente

### CIRCULAR.

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS CIVIL Y DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO.—Con esta fecha remito á los gobernadores de las provincias, á fin de que los manden insertar en los *Boletines oficiales*, los modelos de que acompaño á V. S., para su debido conocimiento, los adjuntos ejemplares impresos, formados por esta Direccion, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.º y 10 del decreto de 16 del corriente para la ejecucion de la ley provisional de matrimonio civil.

Tres son los referidos modelos: el primero, para los expedientes en que han de constar las diligencias preliminares á la celebracion del matrimonio, cuando no haya oposicion al mismo, ó hasta que esta se presente en debida forma: el segundo, para los expedientes de denuncia de impedimentos y oposicion al matrimonio, para los casos que en una y otra se deduzcan oportunamente; y el tercero, para las actas que, una vez celebrados los matrimonios, se han de extender en el registro provisional, mandado establecer en el art. 11 del expresado decreto.

Dichos modelos se limitan, como V. S. podrá advertir, á los casos sin complicacion y á los actos más comunes en que han de intervenir los juzgados municipales; pero se añaden las oportunas advertencias, ya en ca-

da actuacion ó trámite, ya al pié del modelo respectivo, en cuanto á los incidentes especiales que se han previsto. Con esto, y con la facultad concedida á los juzgados de primera instancia (mientras no se establecen los tribunales de partido á que se refiere la ley orgánica del poder judicial), de resolver las dudas que ocurran, siempre que no sean de gravedad, tendrán lo suficiente los jueces municipales y sus secretarios para proceder sin dificultades ni vacilaciones.

Muy próxima á publicarse la referida ley orgánica del poder judicial, es probable que no haya caso alguno en que los actuales jueces de paz deban autorizar, con este título, la celebracion de ningun matrimonio. En tal concepto, se emplean en los modelos las palabras «juez y juzgado municipal.» Sin embargo de esto, si algun caso ocurriere en que deban intervenir con su actual denominacion, claro está que han de sustituirse aquellas con las de «juez y juzgado de paz.»

La disposicion del art. 10 del decreto de 16 del actual, que manda extender las actas del matrimonio con sujecion á lo prevenido en las prescripciones legales que cita, y, además, á los modelos que oportunamente se circularán por esta Direccion general, no tiene solamente por objeto el que haya la conveniente uniformidad en el modo de extenderlas en todos los pueblos de la Península é islas adyacentes, sino tambien el asegurar por este medio el puntual cumplimiento de todos los preceptos de la ley, alguno de los cuales pudiera, en otro caso, olvidarse fácilmente. Los que las redacten, pues, tendrán en el modelo un constante y autorizado recuerdo, que les permitirá marchar con confianza y con seguridad de acierto, ahorrándose al propio tiempo no escaso trabajo.

Como estas consideraciones son aplicables á las dili-

gencias preliminares á la celebracion del matrimonio y á la sustanciacion de las denuncias de impedimentos y de oposicion al mismo, esta Direccion ha creido oportuno, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.º del precitado decreto, formar igualmente los modelos señalados con los números 1.º y 2.º, para unos y otros expedientes. Excusado es observar que, siendo tan diversos los casos é incidencias que pueden ocurrir, necesariamente habrá que prescindir muchas veces del método, y aun tambien de las fórmulas que en aquellos se establecen; pero siempre servirán para determinar la índole, á la vez sencilla y especial, del procedimiento; para fijar el nombre y significacion de las resoluciones y diligencias más comunes y necesarias, y para evitar que la diferencia de costumbres, de caracteres y de instruccion produzca grandes divergencias en la manera de instruir dichos expedientes. Importa, por consiguiente, que se tengan muy presentes dichos modelos 1.º y 2.º, y se ajusten á ellos los jueces municipales, en cuanto cada caso lo permita; pero no es necesario que lo verifiquen con toda la exactitud, con toda la puntualidad, con que deberán atemperarse al del número 3.º, cuando verifiquen la inscripcion de las actas de matrimonio.

Al hacer entrega á los jueces de paz, comprendidos en ese partido judicial, de los libros ó cuadernos expresados en los artículos 11 y 12 de dicho decreto, se servirá V. S. enterarles de estas indicaciones, y de todas las demás que estime necesarias, para que puedan desempeñar con el debido acierto las importantes funciones que la ley les confiere. Inspirándose V. S. en los propósitos del legislador, claramente revelados en el preámbulo de la ley de matrimonio civil, y en la discusion parlamentaria que sobre la misma tuvo lugar, podrá contribuir muy eficaz-

mente á que, venciéndose las dificultades inherentes á toda innovacion, por justa y conveniente que sea, se consiga su planteamiento en ese partido con el más satisfactorio resultado.

Convendrá, además, inculcar á los jueces de paz, y á cuantos funcionarios deban intervenir en el matrimonio civil, la necesidad de que estudien con detenimiento, y apliquen con esmero, las prescripciones de la citada ley; de que en los casos en que no sean aplicables las fórmulas establecidas en los modelos, adopten aquellas que, no adoleciedo de ninguna omision ó defecto sustancial, sean más breves y precisas; de que procuren armonizar aquella institucion, establecida en las naciones más civilizadas, incluidas aquellas en que predomina la religion católica, con las costumbres existentes, cosa tanto más fácil y sencilla, cuanto que estando expresamente prevenido en la ley que el matrimonio religioso pueda celebrarse antes, en el acto ó despues del civil, la única innovacion que se introduce respecto de los que profesan aquella veneranda religion, está reducida á que los matrimonios de estos, si han de producir efectos en el órden civil, no se celebren *solamente* por los curas párrocos, sino tambien por los funcionarios de la autoridad temporal; de que combatan con prudencia, á la par que con energía, añejas preocupaciones, ó creencias equivocadas, de gentes sencillas que, inducidas por malévolas sugerencias, miran con desconfianza y recelo, de todo punto injustificados, una reforma que ni ofende los sentimientos religiosos más susceptibles, ni perjudica, antes bien contribuye poderosamente, á la más sólida constitucion de la familia, ni se opone, bajo ningun concepto, á la pureza de las costumbres; y finalmente, de que, penetrándose bien de la alta importancia de la mision que la ley de matrimonio

civil les confiere, no omitan medio ni esfuerzo alguno que conduzca á llenarla del modo más cumplido y acertado.

No necesito encarecer á V. S. la necesidad de que por su parte coopere con el mayor celo y eficacia al mismo objeto. V. S. comprende perfectamente cuánto interesa plantear y consolidar, lo más pronto posible, la reforma de que se trata. Detenerse á hacerle nuevas observaciones, ó á dictarle reglas para el cumplimiento de sus deberes, seria dudar, sin razon ni fundamento alguno para ello, de su ilustracion, ó de su buena voluntad. Por eso se ha abstenido esta Direccion de formar modelos para las diligencias y resoluciones que han de instruir y dictar los jueces de primera instancia, ni para las consultas que han de elevar, con el correspondiente informe, á este centro directivo.

Unicamente me permitiré llamar la atencion de V. S. sobre dos puntos de la mayor importancia y de inmediata aplicacion. El primero se refiere á la urgencia con que deberá proceder á la formacion y entrega á los jueces municipales, comprendidos en su territorio, de los libros, ó cuadernos, que han de servir para el registro provisional de matrimonios, conforme á lo prevenido en los artículos 11 y 12 del decreto, repetidamente citado, de 10 del actual. Debiendo empezar á regir la ley de matrimonio civil en una época tan próxima como la señalada en aquel, es de todo punto indispensable que los jueces de paz tengan en su poder dichos libros, ó cuadernos, antes de que llegue el momento de la celebracion de algun matrimonio, toda vez que su inscripcion en el registro es esencial y tiene que efectuarse en el mismo acto. El número de fóllos de estos cuadernos provisionales debe estar en relacion con los matrimonios que, por

cálculo aproximado, hayan de celebrarse, *durante un cuatrimestre*, en el término municipal respectivo.

Y el segundo se encamina á la remocion de los obstáculos que se opongan al planteamiento y natural desarrollo de la institucion que es objeto de esta circular. Respecto de los funcionarios que deben intervenir en los actos y diligencias preparatorias del matrimonio, injusto seria poner en duda su buen deseo; pero convendrá que V. S. ejerza una constante y celosa inspeccion para que procedan con prontitud y con extricta sujecion á las disposiciones legales, sin causar dilaciones innecesarias, ni dispendios de ninguna clase, á los interesados; y en cuanto á las sugerencias, censuras reprobadas y críticas abusivas que se empleen contra la aplicacion de la ley de matrimonio civil, ora induciendo á los que intenten contraerlo á que no se sometan á ella, ni la acaten, ora negándose los que deban expedir las certificaciones ó entregar los documentos necesarios para la celebracion de aquel, á darlos, ora empleando, en fin, cualquier medio que estorbe ilegítimamente el cumplimiento de la voluntad del legislador, ó las órdenes de la autoridad, deberá V. S. proceder inmediatamente á instruir de oficio, á instancia de parte ó por excitacion fiscal, la correspondiente sumaria en averiguacion de los hechos, para la consiguiente aplicacion de los artículos del Código penal que los castigan, señaladamente los 202, 304, 301 y 331, en sus respectivos casos, y, á su tiempo, los de dicho Código reformado que á tales maquinaciones se refieren.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Agosto de 1870.—El Director general, Tomás María Mosquera —Señor juez de primera instancia de...



MODELO NUM. 1.º

---

DILIGENCIAS PRELIMINARES Á LA CELEBRACION  
DEL MATRIMONIO.

---

Manifestacion escrita de los que intenten contraer matrimonio.

Sr. Juez municipal de.....

Don Juan Rodriguez y Sanchez, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; de..... años de edad; soltero (*ó viudo*); comerciante (*ó la profesion ú oficio que tuviere*); domiciliado (*ó residente*) en....., calle de....., número..... (*ó parroquia de..... si el pueblo no tuviese las casas determinadas por números y calles*), término municipal de....., partido de....., provincia de....., sin haber tenido otro domicilio ni residencia durante los dos últimos años (*ó expresion de los que hubiese tenido*);

Y Doña Teodora Serrano y Garcia, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; de..... años de edad, soltera (*ó viuda*); sin profesion ni oficio determinado (*ó el que tuviere*); domiciliada (*ó residente*) en....., calle de....., número..... (*ó parroquia de..... si el pueblo no tuviese determinadas las casas por números y calles*), término municipal de....., partido de....., provincia de....., sin haber tenido otro domicilio ni residencia durante los dos últimos años (*ó expresion de los que hubiese tenido*);

Desean contraer matrimonio con arreglo á las prescripciones legales, y, al efecto,

Suplican á V. se sirva haber por hecha esta manifestacion, y autorizar, en su día, la celebracion del mismo y su inscripcion en el registro civil, previas las diligencias, trámites y solemnidades correspondientes. (*Fecha en letra.*)

(Firmas de los interesados ó de persona á su ruego, si no supieren ó no pudieren firmar.)

Providencia.—Por hecha la manifestacion que antecede: ratifiquense en ella los interesados en los términos prevenidos en la prescripcion tercera del artículo tercero del decreto de diez y seis de Agosto último; despues de lo cual, se acordará lo que corresponda. Juzgado municipal de..... (*la fecha en letra.*)

(Firma entera del Juez municipal.)

(Firma entera del Secretario.)

## Manifestacion verbal de los que intenten contraer matrimonio.

En..... (*nombre del pueblo*) á (*fecha en letra*), se presentaron personalmente Juan Rodriguez y Sanchez, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; de..... años de edad; soltero (*ó viudo*); labrador (*ó el oficio ó profesion que tuviere*); domiciliado (*ó residente*) en....., calle de....., núm..... (*ó parroquia de..... si el pueblo no tuviese determinadas sus casas por números y calles*), término municipal de....., partido de....., provincia de....., sin haber tenido otro domicilio ni residencia durante los dos últimos años (*ó expresion de los que hubiese tenido*); \_\_\_\_\_

Y Teodora Serrano y Garcia, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; de..... años de edad; soltera (*ó viuda*); sin oficio ó profesion determinada (*ó expresion del que tuviere*); domiciliada (*ó residente*) en....., calle de....., número..... (*ó parroquia de..... si el pueblo no tuviere determinadas sus casas por números y calles*), término municipal de....., partido de....., provincia de....., sin haber tenido otro domicilio ni residencia durante los dos últimos años (*ó expresion de los que hubiese tenido*); \_\_\_\_\_

Manifestando verbalmente al Sr. Juez municipal que intentan contraer matrimonio con arreglo á las disposiciones legales. \_\_\_\_\_

En su consecuencia, y en cumplimiento de lo prevenido en la prescripcion segunda del artículo tercero del decreto de diez y seis de Agosto último, el Secretario que suscribe consigna por medio de la presente acta esta manifestacion.

(*Firmas de los interesados ó de persona á su ruego, si no supieren ó no pudieren firmar.*)

(*Firma entera del Secretario.*)

**Providencia.**—Por hecha la manifestacion contenida en el acta que antecede: ratifiquense en ella los interesados en los términos prevenidos en la prescripcion tercera del artículo tercero del decreto de diez y seis de Agosto último; despues de lo cual, se acordará lo que corresponda. Juzgado municipal de..... (*Fecha en letra.*)

(*Firma entera del Juez municipal.*)

(*Firma entera del Secretario.*)

**Ratificacion.**—Leida á los interesados la precedente manifestacion (*ó acta*, en que se expresa su propósito de contraer matrimonio, se ratificaron en ella ante el Sr. Juez municipal y Secretario autorizante) sin que se hubiese advertido ninguna omision ó defecto que suplir ó corregir (*ó advirtiéndose tal defecto ó omision en la manifestacion de que se trata, y subsanándola con las adiciones ó correcciones oportunas*). Juzgado municipal de..... (*Fecha en letra.*)

(*Firma entera del Juez municipal.*)

(*Firmas de los interesados ó de persona á su ruego, si no supieren ó no pudieren firmar.*)

(*Firma entera del Secretario.*)

**Providencia.**—En vista de la ratificación que antecede, fórmense y publíquense los correspondientes edictos con arreglo á lo dispuesto en la prescripción cuarta del artículo tercero del decreto de diez y seis de Agosto último y en los de la ley á que el mismo se refiere. (*En su caso se añadirá:* remitiéndose aquellos á los demás Jueces municipales, donde deben tambien publicarse.) Juzgado municipal de.....(*Fecha en letra.*)

(*Media firma del Juez municipal.*)

(*Firma entera del Secretario.*)

**Formacion y copia del primer edicto.**—En cumplimiento de la providencia que antecede, el Secretario que suscribe, ha formado el primer edicto, que á la letra dice así: \_\_\_\_\_

«Don..... (*nombre, apellido y títulos del Juez municipal*), Juez municipal de....., partido de....., provincia de... \_\_\_\_\_

Hago saber: que D. Juan Rodríguez y Sanchez, natural de..... (*reproduzcanse las circunstancias y antecedentes personales del futuro esposo, expresados en la manifestacion, con las correcciones ó adiciones, si se hubiesen hecho en la ratificación.*) \_\_\_\_\_

Y Doña Teodora Serrano y García, natural de..... (*hágase igual reproducción en lo relativo á la futura esposa.*) \_\_\_\_\_

Han manifestado su intento de contraer matrimonio en este Juzgado con arreglo á las disposiciones legales. \_\_\_\_\_

En su consecuencia, y por este primer edicto, invito á todos los que tuvieren noticia de algun impedimento legal que obste á dicho matrimonio, siempre que esté comprendido en los artículos cuarto, quinto y sexto de la ley de matrimonio civil, copiados á continuación, á que lo manifiesten, por escrito ó de palabra, al Juzgado de mi cargo, ó de los demás en que los edictos se publiquen, dentro del término en ellos señalado y cinco dias siguientes; advirtiendo que todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho á denunciar, durante el expresado plazo, los referidos impedimentos, excepto el mencionado en el número tercero del artículo quinto, que solo podrá serlo por la persona que deba prestar el consentimiento, ó el consejo, si fuere necesario, para el matrimonio intentado.» \_\_\_\_\_

A continuación de este edicto se han copiado textualmente los artículos cuarto, quinto y sexto de la ley de matrimonio civil. \_\_\_\_\_

Y para que así conste, lo anoto y firmo. (*Fecha en letra y media firma del Secretario.*)

**Fijacion y remision del primer edicto.**—Aprobado por el Sr. Juez municipal el primer edicto preinserto, se han sacado de él (*tantas*) copias que el mismo firmó, sellándolas con el de este Juzgado y autorizándolas el que suscribe, una de las cuales se ha fijado en el local de la Audiencia pública, otra en la plaza pública (*ó en donde se haya fijado*) y las otras..... que se han remitido por correo (*ó por el medio seguro que se hubiese adoptado*) al ó á los Jueces municipales de....., de..... y de....., á los efectos prevenidos en el artículo doce de la ley; todo ello, en este dia. (*Fecha en letra y media firma del Secretario.*)

*Copia del oficio (u oficios) de remision.*—En conformidad y para los efectos del artículo doce de la ley de matrimonio civil, remito á V. los edictos de publicacion del matrimonio que intentan contraer en este Juzgado D. Juan Rodriguez y Sanchez y Doña Teodora Serrano y García. Verificada que sea su publicacion en ese término municipal, trascurrido el plazo marcado en la prescripcion quinta del decreto de diez y seis de Agosto último, se servirá participármelo, acompañando la certificacion prevenida en la misma. Dios etc.

Y para que así conste, lo anoto y firmo. *(Fecha y media firma del Secretario.)*

Al recibir los Jueces municipales los edictos que se les remitan por el designado para autorizar el matrimonio, mandarán poner al márgen de cada uno de ellos el sello de su Juzgado y debajo de él la fecha y lo siguiente:

«Fíjese en los sitios públicos correspondientes de este término municipal.» *(Firmas del Juez y del Secretario.)*

*Formacion, fijacion y remision del segundo edicto.*—En este dia se ha formado el segundo edicto en un todo igual al primero, substituyéndose únicamente las palabras que en este dicen «primer edicto» por las de «segundo edicto», y aprobado que fué por el Sr. Juez municipal, se han sacado del mismo (tantas) copias, que, debidamente selladas y firmadas, se fijaron en los sitios y se remitieron á los Juzgados municipales, designados para dicho primer edicto, en el modo y forma entonces observados. *(Fecha en letra y media firma del Secretario.)*

Cuando se hayan publicado edictos en otros Juzgados, y se reciban el oficio y certificacion expresados en la prescripcion 5.<sup>a</sup>, artículo 3.<sup>o</sup> del decreto de 16 de Agosto último, se mandarán unir al expediente; y, no resultando haberse presentado ninguna denuncia de impedimentos en tiempo oportuno, se dictará la siguiente

*Providencia.*—Habiendo trascurrido el término de los edictos, con más los cinco dias siguientes á su conclusion, y no habiéndose presentado en este Juzgado, ni en los demás en que aquellos se publicaron, denuncia alguna de impedimento legal contra el matrimonio á que este expediente se refiere, segun resulta de las diligencias que preceden y *(en su caso)* de las certificaciones remitidas por los mismos Juzgados, hágase saber á los interesados que presenten los documentos necesarios conforme al artículo treinta y uno de la ley.

Juzgado municipal de..... *(Fecha y firmas enteras del Juez y Secretario.)*

**Presentacion de documentos.**—En este dia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo treinta y uno de la ley y prescripcion sétima del decreto de diez y seis de Agosto último y en la providencia que antecede, los interesados (ó *F. de T. en su nombre*) presentaron en la Secretaría de este Juzgado los documentos siguientes:

2.9

sense todos el

(Exprésense todos ellos con la determinación y separación convenientes.)

De cuyos documentos se ha dado el oportuno recibo al que los presentó, uniéndolos al expediente.

Y para que conste, lo anoto y firmo. (Fecha y firma entera del Secretario.)

Cuando los que deban prestar consentimiento ó dar consejo á los contrayentes ó á alguno de ellos, manifestaren que se proponen otorgárselo en el acto de la celebracion del matrimonio, se expresará así en la diligencia, fir-mándola los manifestantes (*ó persona á su ruego, si no su-pieren ó no pudieren*), y no se les exigirán los documentos expresados en el núm. 4.º del art. 31 de la ley.

En el caso de considerarse suficientes los documentos presentados y de no existir impedimento ó motivo legal que obste á la celebracion del matrimonio, se dictará la siguiente

*Providencia.*—Resultando bastantes los documentos presentados, que se expresan en la diligencia precedente, procédase á la celebracion del matrimonio y á extender el acta correspondiente del mismo en el registro civil de este Juzgado, en el dia y hora que se fijarán, previo acuerdo con los interesados. Juzgado municipal de... (Fecha y firma entera del Juez y Secretario.)

Una vez celebrado el matrimonio é inscrito en el registro civil, se cerrará el expediente con la siguiente

*Providencia.*—Habiéndose celebrado e inscrito en el registro civil con el número.... el matrimonio á que estas diligencias se refieren, archívese el expediente, foliándose antes y rubricándose por el Secretario todas sus hojas. Juzgado municipal de.... (Fecha y firma del Juez y Secretario.)

MODELO NÚM. 2.<sup>o</sup>

---

EXPEDIENTE DE OPOSICION AL MATRIMONIO.

---

Denuncia escrita de impedimento.

D. N. N., mayor de edad, domiciliado en....., calle de....., número....., término municipal de....., partido de....., provincia de....., ante V., Sr. Juez municipal de....., como más haya lugar, digo: que por los edictos publicados de orden de este Juzgado, he tenido noticia de que intentan contraer matrimonio D..... (*nombre y apellidos del solicitante*) y Doña (*id. id. de la solicitante*); y constándome que entre ellos media el impedimento expresado y establecido en el número segundo del artículo sexto de la ley de matrimonio civil (*ó el que fuere*), pues son parientes dentro del cuarto grado en línea colateral (*explíquese el parentesco ó el impedimento que se denuncia con la debida claridad, aunque no se emplee el tecnicismo legal*), denuncio á V. el referido impedimento, y me opongo en debida forma al matrimonio de que queda hecho mérito.

En su consecuencia, y no habiendo trascurrido el término señalado en el artículo veintitres de la citada ley, corresponde y

Suplico á V. que, habiendo por presentada en tiempo y forma esta denuncia, en la que estoy pronto á ratificarme, se sirva mandar que se notifique á los que intentan contraer el expresado matrimonio (*y á sus padres ó curadores, si fueren menores de edad*), a fin de que aquellos manifiesten si persisten ó no en la celebracion del mismo; y en el caso de que no hagan constar su desistimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes á la última notificacion, recibir esta denuncia á prueba y proceder á lo demás que corresponda con arreglo á las prescripciones segunda á la sexta del artículo cuarto del decreto de diez y seis de Agosto último. (*Fecha en letra.*)

(Firma del denunciante.)

*Diligencia.*—El escrito que precede fué presentado al Sr. Juez municipal por..... (*aquí el nombre del que lo haya presentado*) hoy día de la fecha, á (*la hora de la mañana, de la tarde ó de la noche en que lo haya sido*). Y para que así conste, lo anoto, firmando esta diligencia el que lo presentó (*ó persona á su ruego, si no supiere ó no pudiere hacerlo*). Fecha (*con expresion de la hora en que se extiende la diligencia*).

(Firma del que haya presentado el escrito.)

(Firma del Secretario.)

*Providencia.*—Por presentada la denuncia que antecede: ratifiquese en ella el denunciante dentro de las veinticuatro horas siguientes á la presentacion de la misma, que terminarán á las diez de la mañana (ó la hora que corresponda) del dia de mañana; y, verificado, se dispondrá lo que corresponda. Juzgado municipal de..... (Fecha en letra.)

(Firma del Juez municipal.)

(Firma del Secretario.)

*Ratificacion.*—En..... á..... de..... de mil ochocientos.....: ante el Sr. Juez municipal y el Secretario autorizante, compareció D..... (nombre y apellido del denunciante), á quien se leyó íntegramente el escrito de denuncia presentada á nombre del mismo; y, enterado, manifestó que se ratificaba en él y en todo su contenido. Así lo dijo, firma con el Sr. Juez municipal (ó no firma por decir que no sabe ó no puede, haciéndolo á su ruego F. de T.); y de todo ello certifico.

(Firma del Juez municipal.)

(Firma del denunciante.)

(Firma del Secretario.)

### Denuncia verbal de impedimento.

En..... á..... de..... de mil ochocientos.....; á las.... (hora de la mañana, ó de la tarde ó de la noche), ante el Sr. Juez municipal y Secretario autorizante se presentó D..... (nombre y apellido del denunciante), domiciliado en....., calle de....., núm....., término municipal de....., partido de....., provincia de....., manifestando: que, por los edictos publicados de orden de este Juzgado, habia tenido noticia de que intentan contraer matrimonio D..... (nombre y apellidos del solicitante) y Doña (id. id. de la solicitante); y constándole que entre ellos media el impedimento de..... (explíquese claramente el impedimento) expresado y establecido en el núm..... del art..... cuarto, quinto, ó sexto, de la ley de matrimonio civil, lo denunciaba verbalmente y se oponia en forma á dicho matrimonio. Lo cual se hace constar por medio de la presente acta, que firman el señor Juez municipal y el denunciante (ó F. de T. á su ruego, por decir que no sabe ó no puede hacerlo); y de todo ello certifico.

(Firma del Juez municipal.)

(Firma del denunciante.)

(Firma del Secretario.)

Despues de la ratificacion, en caso de denuncia escrita, y del acta, en el de denuncia verbal, procederá dictar la siguiente

*Providencia.*—Notifiquese á D..... (nombre y apellidos del solicitante) y á Doña (id. id. de la solicitante) la denuncia de impedimento presentada contra el matrimonio que intentan contraer; quienes podrán hacer constar en el acto de la notificacion, ó en las veinticuatro horas siguientes á la última que se practique, si, en vista de aquella, desisten de la celebracion del referido matrimonio. Juzgado municipal de..... (Fecha y firmas del Juez municipal y Secretario.)

Cuando los que intenten contraer matrimonio sean menores de veinticinco años, se adicionará la providencia que antecede, mandando notificar, además de aquellos, á sus padres ó curadores, que tengan su representacion legal.

En las notificaciones de esta providencia, debe hacerse constar la hora en que se practiquen.

Si los que intentaren contraer matrimonio, ó alguno de ellos, manifestaren en el acto de la notificacion, ó dentro de las veinticuatro horas siguientes á la última de éstas, que desisten del matrimonio, corresponderá dictar la siguiente

*Providencia.*—En vista del formal desistimiento de los interesados (ó de uno de ellos, expresando quién fuere), contenido en la notificacion (ó en la diligencia en que se haya hecho constar), se suspende toda diligencia respecto del matrimonio intentado entre D..... y Doña....., archivándose este expediente (ó remitiéndose al Juez designado para autorizar, en su caso, la celebracion de aquel). Juzgado municipal de..... (Fecha y firmas del Juez y Secretario.)

Esta providencia y la anterior se notificarán á los interesados en los términos usuales.

Si los que intentaren contraer matrimonio, ó alguno de ellos, no hubiesen manifestado su desistimiento en el acto de la notificacion, ó dentro de las veinticuatro horas siguientes á la última de ellas, ó se hubiere presentado escrito por los mismos, ó por sus legítimos representantes, caso de ser menores de veinticinco años, impugnando la denuncia, deberá dictarse la siguiente

*Providencia.*—Se recibe esta denuncia á prueba por término de ocho días, á contar desde la última notificacion de esta providencia, durante los cuales se admitirán á las partes las pruebas pertinentes que ofrezcan, las que se practicarán con citacion reciproca de aquellas, en los términos prevenidos en la disposicion cuarta del artículo cuarto del decreto de diez y seis de Agosto último. Notifiquese esta providencia al denunciante y á todos aquellos á quienes se hubiese notificado tambien la denuncia. Juzgado municipal de..... (Fecha y firmas del Juez y Secretario.)



Practicadas las notificaciones, se recibirán todos los documentos que dentro del término de los ocho días presenten los interesados, debiendo estar de manifiesto en la Secretaría, durante el mismo período, para que las partes los puedan examinar; y se practicarán también todas las demás diligencias probatorias que los interesados propongan, siempre con citación de las partes y por el método más sencillo, establecido en el derecho común, teniendo presente, respecto á la prueba testifical, lo dispuesto en la expresada regla 4.<sup>a</sup> del art. 4.<sup>o</sup> del decreto precitado.

En cuanto haya trascurrido el término probatorio, deberá dictarse la siguiente

*Providencia.*—Habiendo trascurrido el término probatorio, únanse al expediente de denuncia las pruebas hechas por las partes y remítase, con todas las demás diligencias practicadas en este Juzgado, y las que se han recibido de los demás en donde se publicaron los edictos (si esto hubiere tenido lugar), al Sr. Juez de primera instancia de este partido, citándose y emplazándose á las partes (ó á sus representantes) para que comparezcan á usar de su derecho, si les conviniere, dentro del término señalado en la disposición quinta del artículo cuarto del decreto de diez y seis de Agosto último. Juzgado municipal de. ... (Fecha y firmas del Juez y Secretario.)

Cuando el Juez municipal que hubiese instruido el expediente de denuncia, no fuere el designado para autorizar el matrimonio, remitirá el expediente por conducto de éste, adicionando en tal sentido la providencia que antecede.

Una vez practicadas las notificaciones, se pondrá por el Secretario nota de remisión, en que se exprese el número de expedientes remitidos y fólios de que cada uno conste, el día en que haga la remesa y el medio adoptado para la misma.—Esta se hará con el oportuno oficio.

Inmediatamente despues de vueltos al Juzgado municipal los expedientes con la resolución que hubiese dictado el Juez de primera instancia, se le acusará el corres-

pondiente recibo y se mandará proceder, ó no, á la celebracion del matrimonio, segun que aquella fuere desestimatoria de la denuncia ó la declare admisible.

La providencia del Juez municipal mandando proceder á la celebracion del matrimonio, ó á su suspension, conforme á lo resuelto por el Juzgado de primera instancia, deberá dictarse á continuacion de la resolucion de éste.

# MODELO NÚM. 3.<sup>o</sup>

## ACTA DE MATRIMONIO.

(Aquí deberá ponerse el número del acta y los nombres y apellidos de los contrayentes.)

En (nombre del pueblo), á (fecha en letra), á las (hora de la mañana, de la tarde ó de la noche), ante D....., Juez municipal, y D....., Secretario, comparecieron:

Don Juan Rodriguez y Sanchez, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de....., habiéndose inscrito su nacimiento en el registro de la parroquia de..... (ó en el que lo hubiese sido); en (fecha de la inscripcion del nacimiento); de..... años de edad; soltero (ó viudo); comerciante (ó la profesion ú oficio que tuviere); domiciliado en....., calle de....., número..... (ó parroquia de....., si el pueblo no tuviese determinadas sus casas por números y calles), término municipal de....., partido de....., provincia de.....; hijo legítimo (véase la observacion tercera de las que van al pié) de D. Andrés Rodriguez y Coria, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; casado (ó lo que fuere); comerciante (ó la profesion ú oficio que tuviere); domiciliado en....., término municipal de....., partido de....., provincia de....., y de Doña Ramona Sanchez y Octavio, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de....., casada (ó el estado que tuviere); domiciliada en el de su marido (ó donde lo estuviere); nieto, por la linea paterna, de D. Alejo Rodriguez Zeta, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; casado (ó lo que fuere); propietario (ó la profesion ú oficio que tuviere); domiciliado en....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; y de Doña Margarita Coria y Luque, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; casada; domiciliada en el de su marido (ó donde lo esté); y por la linea materna, de D. Juan Sanchez y Royo y Doña Casilda Octavio y Lopez, naturales de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; difuntos. (Si vivieren, se expresarán las demás circunstancias como en los anteriores.)

Y Doña Teodora Serrano y Garcia, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de....., habiéndose inscrito su nacimiento en el registro parroquial de..... (ó donde fuere), en (fecha de la inscripcion del nacimiento) de..... años de edad; soltera (ó viuda); sin oficio ni profesion determinada (ó la que tuviere); domiciliada en....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; hija legítima de..... (Aquí toda la enumeracion de sus padres y abuelos paternos y maternos con las mismas circunstancias anteriormente expresadas.)

El Sr. Juez municipal manifestó que la comparecencia de los expresados D. Juan Rodríguez y Doña Teodora Serrano tenía por objeto la celebración del matrimonio de los mismos, para el cual se han publicado los correspondientes edictos, y se ha formado el oportuno expediente, donde constan todas las diligencias preliminares y los documentos que la ley exige; y resultando no haberse presentado ninguna denuncia de impedimento legal (*ó habiéndose desestimado las que se hubieren presentado, expresándose, en este caso, la presentada, como también la fecha de la providencia y el Juzgado que la hubiese dictado*), acordó proceder á la celebración del referido matrimonio.

Al efecto, el Secretario leyó los artículos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto de la ley provisional de matrimonio civil.

(Aquí se mencionarán las circunstancias de los casos especiales que ocurran, conforme á las observaciones que van al pié de este modelo, excepto las tercera, cuarta, novena, doce y trece, que se consignarán en el lugar oportuno.)

Acto continuo, el Sr. Juez municipal interrogó á D. Juan Rodríguez y Sanchez con la siguiente fórmula: *¿Quereis por esposa á Doña Teodora Serrano y Garcia?* y el interrogado contestó en alta, clara é inteligible voz: *Si quiero*. Seguidamente, preguntó á Doña Teodora Serrano y Garcia: *¿Quereis por esposo á D. Juan Rodríguez y Sanchez?* la cual, de igual manera, contestó: *Si quiero*.

Incontinenti, el Sr. Juez municipal, dirigiéndose á los dos, pronunció las siguientes palabras: *Quedaís unidos en matrimonio perpétuo é indisoluble*.

Inmediatamente, el Secretario leyó los artículos del capítulo quinto, sección primera, de la referida ley, declarando en seguida el Sr. Juez terminado el acto de la celebración del matrimonio, y mandando que se procediese á extender la correspondiente acta en el registro civil de este Juzgado.

Los contrayentes manifestaron que habían celebrado matrimonio religioso el día..... de....., en..... (*Se expresará el pueblo ó parroquia donde se hubiese celebrado, y si no hubiese precedido el matrimonio religioso, se expresará también.*)

Todo lo cual se verificó y declaró ante los testigos designados por los contrayentes, D. Juan Sanz y Roque, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; de..... años de edad; casado (*soltero ó viudo*); médico (*ó la profesion ó oficio que tuviere*); domiciliado en el pueblo de su naturaleza (*ó en el que fuere*), y D. Leandro Maza y Lara, natural de....., término municipal de....., partido de....., provincia de.....; de..... años de edad; soltero (*ó el estado que tuviere*); comerciante (*ó lo que fuere*); domiciliado en el pueblo de su naturaleza (*si lo fuese en otro, se expresará con los detalles antedichos*), á quienes conoce el Sr. Juez municipal.

Extendida inmediatamente la presente acta, se leyó íntegramente á las personas que deben suscribirla, y se les invitó además á que la leyeran por sí mismas, si lo deseaban, sin que ninguno lo hubiese hecho (ó *habiéndolo verificado N. N.*), estampándose en ella el sello del Juzgado municipal y firmándola el Sr. Juez, los cónyuges (*los padres, en su caso*) y los testigos, excepto N. N., que dijeron no saber (ó *no poder*) firmar, por quienes lo hicieron á su ruego N. N.; y de todo ello certifico.

---

(Sello del Juzgado.)—(Firma entera del Juez.)

(Firmas de los cónyuges, de los padres, en su caso, y de los testigos.)

(Firma del Secretario.)

## OBSERVACIONES

### PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA (1).

---

1.<sup>a</sup> Si los contrayentes ó alguno de ellos fuere sordomudo, deberá expresar su consentimiento en la forma que previene la regla 3.<sup>a</sup> del art. 9.<sup>o</sup> del decreto de 16 de Agosto.

2.<sup>a</sup> Si los contrayentes ó alguno de ellos no entendiere el castellano, el juez municipal dará cumplimiento á lo que previene la misma regla.

3.<sup>a</sup> En el caso de que alguno de los contrayentes no fuere hijo legítimo, se expresará en el lugar especial indicado en el acta, que es ilegítimo, diciendo si es natural ó expósito, sin expresar en los demás casos otra clase de ilegitimidad. (*Art. 67, ley de registro civil.*)

4.<sup>a</sup> Cuando alguno de los contrayentes se casare por medio de apoderado, se hará mención del poder en que se

---

(1) Estas observaciones se formularán en sus respectivos casos y se consignarán inmediatamente después de haber dado lectura el Secretario á los artículos 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup>, 4.<sup>o</sup>, 5.<sup>o</sup> y 6.<sup>o</sup> de la ley y antes de interrogar el Juez municipal á los contrayentes si se quieren por esposos.

cer fiera la representacion, y del nombre y apellido, edad, naturaleza, domicilio, profesion ú oficio del apoderado. (*Art. 35 y 36 de la ley provisional de matrimonio civil y art. 67 de la de registro civil.*)

5.<sup>a</sup> Cuando los interesados fueren extranjeros y no llevaren dos años de residencia en España, habrán de acreditar la publicacion del matrimonio en la forma que disponen los artículos 15 de la ley de matrimonio civil y 67 de la de registro.

6.<sup>a</sup> Si hubiese tenido lugar la dispensa de los edictos por celebrarse el matrimonio *in articulo mortis*, ó cuando por ser militares los contrayentes, presenten certificacion de su libertad, se expresará en el acta, citando la fecha de la dispensa y el jefe que haya expedido la certificacion. (*Art. 17 y 67, ley de registro civil.*)

7.<sup>a</sup> Si los contrayentes manifestaren tener hijos naturales que hayan de legitimarse por el matrimonio, se consignarán la manifestacion y los nombres de estos. (*Art. 67, ley de registro civil.*)

8.<sup>a</sup> Cuando uno de los contrayentes fuere viudo, se consignará en el acta el nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de su fallecimiento, y registro parroquial, ó de otra clase, en que éste se hubiese inscrito. (*Art. 67, ley de registro civil.*)

9.<sup>a</sup> Si alguno de los contrayentes necesitare licencia del Gobierno, se hará mencion en el acta de haber sido presentada.

10. Se expresará en el acta el consentimiento ó la solicitud del consejo que la ley de 20 de Junio de 1862 exige para contraer matrimonio á los hijos de familia y á los menores de edad. (*Art. 67, ley de registro civil.*) Cuando asistieren á la celebracion del matrimonio los que deban prestar el consentimiento ó dar el consejo para el mis-

mo, y manifestaren en el acto su conformidad, firmarán el acta (*ó persona á su ruego si no supieren ó no pudieren hacerlo*); no siendo necesario, en este caso, ningun otro documento para haber por cumplido dicho requisito.

11. Las equivocaciones ú comisiones que se cometan en el acta, serán salvadas de puño y letra de la misma persona que la haya escrito, y á continuacion se firmará y se estampará el sello. (*Art. 17, ley de registro civil.*)

12. Si por cualquiera circunstancia se interrumpiere el acto de la celebracion del matrimonio, se consignará la causa de la interrupcion. (*Art. 19, ley de registro civil.*)

13. Si ocurrieren casos especiales, no previstos en estas observaciones, los jueces municipales se atenderán, para resolverlos, y para consignarlos en el acta, cuando así corresponda, á las prescripciones legales que á ellos se refieran.

Aprobados los tres modelos que preceden.==Madrid 24 de Agosto de 1870.==El Director general, Tomás María Mosquera.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó en la *Gaceta* del 22 de Junio la siguiente

## LEY PROVISIONAL

SOBRE

REFORMA DE LA CASACION CIVIL.

DE LOS RECURSOS DE CASACION (1).

SECCION PRIMERA.

*Disposiciones generales.*

Artículo 1.º El conocimiento de los recursos de casacion en los negocios civiles corresponde exclusivamente á la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 2.º El recurso de casacion en los negocios civiles se da contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias y contra las de los amigables componedores, y solo en los casos establecidos expresamente en esta ley.

Art. 3.º Se entiende por sentencias definitivas para los efectos del artículo anterior:

1.º Las definitivas que terminen el juicio.

2.º Las que cayendo sobre un artículo, pongan término al pleito haciendo imposible su continuacion.

---

(1) Esta ley deroga el título XXI de la de Enjuiciamiento civil, que trataba de los recursos de casacion.



3.<sup>o</sup> Las que declaren haber ó no lugar á oír á un litigante que haya sido condenado en rebeldía.

4.<sup>o</sup> Las pronunciadas en actos de jurisdiccion voluntaria en los casos establecidos por la ley.

Art. 4.<sup>o</sup> El recurso de casacion se fundará en una de las causas siguientes:

1.<sup>a</sup> Ser la sentencia contra ley ó doctrina legal.

2.<sup>a</sup> Haberse quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio.

3.<sup>a</sup> Haber los amigables compondores fallado puntos no sometidos á su decision ó fuera del plazo señalado en el compromiso.

Art. 5.<sup>o</sup> Se consideran como infraccion de formas esenciales del juicio para los efectos del núm. 2.<sup>o</sup> del artículo anterior:

1.<sup>a</sup> La falta de emplazamiento en primera ó segunda instancia de las personas que hayan debido ser citadas para el juicio.

2.<sup>a</sup> La falta de personalidad en alguna de las partes ó en el procurador que la haya representado.

3.<sup>a</sup> La falta de citacion para sentencia definitiva en cualquiera de las instancias.

4.<sup>a</sup> La falta de recibimiento á prueba en alguna de las instancias, cuando ésta procediere con arreglo á derecho.

5.<sup>a</sup> La falta de citacion para alguna diligencia de prueba.

6.<sup>a</sup> La incompetencia de jurisdiccion cuando este punto no haya sido resuelto por el Tribunal Supremo.

7.<sup>a</sup> Haber concurrido á dictar sentencia uno ó más jueces, cuya recusacion, intentada en tiempo y forma, fundada en causa legal, hubiere sido desestimada.

8.<sup>a</sup> Haber sido dictada la sentencia por menor número de jueces del señalado por la ley.

Art. 6.º El recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal no se dará contra las sentencias que recaigan en los juicios de menor cuantía, en los posesorios, en los ejecutivos, ni en ninguno despues del cual pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto; pero sí proceden los que se funden en el quebrantamiento de alguna de las formas del juicio expresadas en el art. 5.º

Art. 7.º Los recursos de casacion que se interpongan por quebrantamiento de forma solo serán admitidos cuando se hubiese pedido la subsanacion de la falta en la instancia en que se cometió y reproducido la peticion en la segunda instancia, cuando la infraccion procediere de la primera.

Art. 8.º No será necesario haber reclamado la subsanacion de la falta en el caso de que ésta hubiere sido cometida en la segunda instancia, cuando fuera ya imposible pedirla.

Art. 9.º Las declaraciones de haber lugar al recurso de casacion producirán los efectos siguientes:

1.º La casacion de la sentencia y el pronunciamiento de otra arreglada á la ley ó á la doctrina legal infringida cuando el recurso se hubiere fundado en esta causa.

2.º La casacion de la sentencia en lo que los amigables componedores hayan decidido fuera de los límites del compromiso, cuando el recurso se hubiere fundado en esta causa.

3.º La casacion de toda la sentencia de los amigables componedores, cuando el recurso se fundare en haber sido dictado fuera del término convenido en el compromiso.

4.º La casacion de la sentencia y la devolucion de los autos al tribunal de que proceden, para que reponiéndolos al estado que tenian al quebrantarse la forma del

juicio, los continúa con arreglo á derecho, cuando el recurso se hubiere fundado en esa causa.

Art. 10. El que intentare interponer recurso de casacion depositará en el establecimiento destinado al efecto:

Mil pesetas cuando fueren conformes de toda conformidad las sentencias de la primera y segunda instancia en los recursos por infraccion de ley ó de doctrina legal y en los que se interpongan contra las sentencias de los amigables componedores.

Quinientas pesetas cuando el recurso se interponga por quebrantamiento de forma.

Art. 11. En los casos en que la cantidad objeto del litigio sea inferior á 3.000 pesetas, el depósito no excederá de la sexta parte de su valor si el recurso que se intenta interponer se fundare en infraccion de ley ó doctrina legal, ó fuere contra el fallo de amigables componedores, ni de la dozava parte si se fundare en quebrantamiento de forma.

Art. 12. Si litigare por pobre la parte que interponga el recurso y éste fuere desestimado, pagará cuando llegue á mejor fortuna la suma á que en su caso hubiere debido ascender el depósito.

## SECCION SEGUNDA.

*De la interposicion de los recursos de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal ó contra los fallos de amigables componedores.*

Art. 13. El que intentare interponer recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal solicitará dentro del término de diez dias, contados desde el siguiente al de la última notificacion de la sentencia, un

testimonio de ésta y de la de primera instancia, si en la segunda hubiesen sido aceptados y no reproducidos textualmente todos sus resaltandos y considerandos. Pasados los diez días sin solicitarlo, la sentencia quedará firme.

Art. 14. La Audiencia mandará dar el testimonio que se hubiere solicitado dentro del término expresado en el artículo anterior, mandando emplazar á las otras partes, para que puedan comparecer en el Tribunal Supremo á usar de su derecho en el término de treinta días en los negocios procedentes de la Península é islas Baleares y de cincuenta en los procedentes de las islas Canarias.

Por diligencia puesta al pié del testimonio se hará constar la fecha de su entrega á la parte que lo hubiere solicitado.

Art. 15. Cuando se hubiere pedido testimonio fuera de término, la Audiencia lo denegará en auto fundado, haciendo en él expresion de las fechas de la sentencia, de su última notificacion y de la de presentacion del escrito en que se hubiere pedido el testimonio

Se dará copia certificada de la providencia denegatoria en el acto de su notificacion al que la hubiere solicitado, el cual podrá recurrir con ella en queja al Tribunal Supremo, en el término de quince días en los pleitos procedentes de las Audiencias de la Península é islas Baleares, y de treinta para los de la de Canarias, contados desde el siguiente al de la entrega.

Pasado este término, no podrá utilizar ningun recurso.

Art. 16. El recurrente que compareciere ante el Tribunal Supremo en el término señalado en el artículo anterior, presentará escrito acompañando la copia certificada de la providencia denegatoria, y formulará el recurso de queja.

La Sala, sin más trámites, resolverá lo que proceda, y contra su decision no habrá ulterior recurso.

Art. 17. Cuando el Tribunal Supremo confirmare la providencia denegatoria, lo comunicará á la Audiencia que la haya dictado, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Cuando la revocase, dirigirá orden á la misma Audiencia para que mande dar el testimonio solicitado.

Art. 18. En el mismo dia en que se entregare el testimonio de la sentencia contra la cual se intente recurrir en casacion, la Audiencia remitirá al Tribunal Supremo certificacion de los votos reservados, si los hubiere, y no habiéndolos, certificacion negativa en que así conste.

Art. 19. Cuando el que solicitare el testimonio litigare por pobre, la Audiencia remitirá al Tribunal Supremo el testimonio solicitado, en su caso, ó la copia certificada de la providencia denegatoria.

Art. 20. En el caso del artículo anterior, el Tribunal Supremo, recibido el testimonio de la sentencia ó la copia certificada de su denegacion, mandará nombrar, en el término de seis dias, á la parte que litigare por {pobre, procurador y abogado que la defiendan si la misma lo pidiere.

El testimonio ó la copia certificada se entregará al procurador nombrado de oficio, para que con acuerdo del abogado y en escrito firmado por ambos, interponga el recurso, si lo estimare procedente en derecho, en el término de quince dias.

Si el letrado nombrado no considerase procedente el recurso, lo expondrá por escrito en el término de tres dias, y en el de otros dos se nombrará nuevo letrado, que si opinare como el anterior, lo expondrá por escrito en igual término, nombrándose en los dos dias siguientes un tercer

letrado, que por escrito tambien manifestará su opinion dentro de tercer dia, si fuere conforme con los anteriores.

Art. 21. Cuando los tres letrados nombrados conviniere en la improcedencia del recurso, se pasarán los antecedentes al ministerio fiscal, á fin de que lo interponga en el término de diez dias, si lo estimare procedente en derecho, ó los devuelva en el mismo plazo, en otro caso, con la nota de *visto*.

Art. 22. Si el ministerio fiscal interpusiera el recurso, su decision aprovechará ó perjudicará á la parte que hubiere intentado proponerlo.

Art. 23. Cuando el fiscal devuelva los antecedentes con la nota de *visto*, no habrá lugar á la admision del recurso, y se comunicará esta resolucion á la Audiencia que hubiere dictado la sentencia.

Art. 24. Cuando el que litigare por pobre nombrase procurador y abogado que respectivamente acepten su representacion y defensa, se entregará al primero el testimonio de la sentencia ó la copia certificada de su denegacion, para que interponga el recurso si lo estimare procedente.

Art. 25. Si el abogado ó procurador nombrados por la parte no aceptasen su representacion ó defensa, ó se negaren á interponer el recurso por creerlo improcedente, el tribunal mandará que en el término de tres dias se nombren otros de oficio, y procederá en su caso á lo demás que prescriben los artículos 20, 21, 22 y 23.

Art. 26. La parte que hubiere obtenido el testimonio de la sentencia interpondrá el recurso de casacion en el Tribunal Supremo en el término de cuarenta dias, contados desde la fecha de entrega del mismo testimonio.

Pasado este término, quedará firme la sentencia y no podrá admitirse el recurso.

Art. 27. Con el escrito en que se interponga el recurso, se presentará el testimonio de la sentencia y el documento en que conste haberse hecho el depósito prevenido en los artículos 10 y 11.

Sin este documento no se admitirá el escrito, á no estar declarado pobre el que lo interponga.

Art. 28. El que interponga el recurso, citará expresamente en el escrito que lo formule la ley ó doctrina legal que la sentencia hubiere infringido.

En el mismo escrito podrá pedir el recurrente que se manden desglosar y venir documentos que obren en autos, y el tribunal podrá ordenar su remision si concurrieren las circunstancias siguientes:

1.<sup>a</sup> Que sean de fecha anterior á la demanda.

2.<sup>a</sup> Que sobre su inteligencia no haya habido acuerdo entre las partes.

3.<sup>a</sup> Que de su inteligencia pueda depender la admission ó decision del recurso.

Art. 29. El que interpusiere recurso de casacion contra fallo pronunciado por amigables componedores, presentará en el Tribunal Supremo:

1.<sup>o</sup> El testimonio de la escritura de compromiso.

2.<sup>o</sup> El del fallo.

3.<sup>o</sup> El documento que acredite el depósito correspondiente, en conformidad á los artículos 10 y 11 de esta ley.

En el escrito en que haga esta presentacion, expresará en qué causa de las referidas en el art. 4.<sup>o</sup>, núm. 3.<sup>o</sup>, funda el recurso, ó si le funda en ambos.

El término para interponer el recurso será de treinta dias respecto á los fallos pronunciados en la Península é islas Baleares, y de cincuenta para los procedentes de las islas Canarias.

En el caso de que se fundara en haberse pronunciado el fallo fuera del término convenido, y éste hubiese sido prorogado, se acompañará además testimonio de la nueva escritura en que conste.

No se admitirá ningún otro documento.

Art. 30. Si la Sala no considerare admisible el recurso interpuesto, lo acordará así en providencia motivada.

Esta providencia será suplicable ante la misma Sala dentro de tercero día.

Ejecutoriada la providencia denegatoria, se comunicará á la Audiencia de donde proceda el litigio, y se publicará en la forma que en esta ley se previene.

#### SECCION TERCERA.

*De la interposicion del recurso de casacion por quebrantamiento de forma.*

Art. 31. El recurso de casacion por quebrantamiento de forma se interpondrá en la Audiencia que hubiere dictado la sentencia dentro de los diez días siguientes al de su última notificación.

Trascurrido dicho término sin haberse interpuesto el recurso, quedará firme la sentencia,

Art. 32. El escrito en que se interponga el recurso, expresará:

1.º La fecha de la última notificación de la sentencia.

2.º La de la presentación del recurso.

3.º El quebrantamiento de forma en que se funde.

4.º Las reclamaciones que se hubiesen hecho para obtener su subsanación, ó si la falta se ha cometido en la



última instancia y cuando ya no era posible solicitar su enmienda.

A este escrito acompañará el documento que acredite haberse hecho el depósito que prescriben los artículos 10 y 11.

Sin este documento no se admitirá el escrito á no estar declarado pobre el que lo interponga.

Art. 33. Interpuesto el recurso, la Audiencia se limitará á examinar sin oír á las partes:

1.º Si se ha interpuesto en el término señalado.

2.º Si se funda en el quebrantamiento de alguna de las formas del juicio expresadas en el art. 5.º

3.º Si se pidió su subsanacion ó si fué imposible pedirla, conforme á lo prevenido en los artículos 7.º y 8.º

Art. 34. Concurriendo todas las circunstancias determinadas en el artículo anterior, la Audiencia admitirá el recurso en el término de tres dias, y remitirá los autos con certificacion de los votos reservados, si los hubiere, ó negativa si no los hubiere.

En la misma providencia se mandará citar y emplazar á las otras partes para que puedan comparecer en el Tribunal Supremo á hacer uso de su derecho.

Art. 35. No concurriendo todas las circunstancias determinadas en el art. 32, la Audiencia denegará la admision del recurso, y mandará proveer á la parte recurrente de una copia certificada de la providencia denegatoria.

Esta providencia será fundada.

Art. 36. Con la copia certificada de la providencia denegatoria podrá el que se considere agraviado recurrir en queja al Tribunal Supremo en el término de quince dias, pasados los cuales sin ejecutarlo no se dará recurso alguno.

El Tribunal, sin más trámites, resolverá lo que proceda, y contra su decision no habrá ulterior recurso.

Art. 37. Si el Tribunal Supremo revocare la providencia denegatoria de la admision del recurso, lo admitirá por sí, y dirigirá orden á la Audiencia de que proceda para que remita los autos con certificacion de los votos reservados si los hubiere ó negativa si no los hubiere, sustanciándose despues el recurso con arreglo á lo que se prescribe en la seccion sétima.

Art. 38. Cuando el Tribunal Supremo confirmare la providencia denegatoria de la admision del recurso, lo pondrá en conocimiento de la Audiencia que la dictó, para los efectos correspondientes.

#### SECCION CUARTA.

*De la interposicion de los recursos por infraccion de ley ó doctrina legal y por quebrantamiento de forma.*

Art. 39. El que intentare interponer contra una sentencia recurso de casacion por infraccion de ley ó doctrina legal y por quebrantamiento de forma, lo hará en un solo escrito, en que á la vez exprese con claridad y separacion los fundamentos de uno y otro recurso.

El escrito se presentará en la Audiencia que haya pronunciado el fallo, dentro de los diez dias siguientes al de la última notificacion de la sentencia.

La Audiencia se limitará á resolver sobre la admision del recurso que se funde en quebrantamiento de forma, dejando reservada al Tribunal Supremo la admision del fundado en infraccion de ley ó doctrina legal, el cual se tendrá por interpuesto para el caso en que proceda su continuacion.

Art. 40. En la sustanciacion del recurso por quebrantamiento de forma se observará lo que se prescribe para los de esta clase en la seccion tercera y en su caso en la sétima de esta ley.

Art. 41. Cuando el Tribunal Supremo declarare haber lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de forma, el que se hubiere fundado en infraccion de ley ó de doctrina legal se considerará como no interpuesto.

Lo mismo sucederá en el caso de que el recurso por quebrantamiento de forma no se hubiere admitido por haberse interpuesto fuera del término legal.

Art. 42. Hecha la declaracion de no haber lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de forma, el que lo hubiere interpuesto hará el depósito correspondiente al recurso por quebrantamiento de ley ó doctrina legal, establecido en los artículos 10 y 11 de esta ley, á no ser pobre, acreditándolo con el documento en que conste haberlo verificado.

Constituido el depósito, se sustanciará el recurso, observándose lo establecido en las secciones segunda y sétima de esta ley.

Si no se acreditare la constitucion de este depósito con el documento correspondiente, en el término de seis dias siguientes al de la notificacion de la sentencia denegatoria del recurso por quebrantamiento de forma, se tendrá al recurrente por desistido del interpuesto por infraccion de ley ó de doctrina legal.

Art. 43. Cumplido lo que se prescribe en el artículo anterior sobre el depósito, se sustanciará el recurso, observándose lo establecido en la seccion segunda y en su caso en la sétima de esta ley.

## SECCION QUINTA.

*De la interposicion de los recursos de casacion contra las sentencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar.*

Art. 44. Los recursos de casacion contra las sentencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar se interpondrán ante las mismas en la forma prevenida por la Real cédula de 30 de Enero de 1855 y demás leyes y disposiciones vigentes en aquellas provincias, arreglándose las partes al interponerlo, y las Audiencias al decretar su admision ó denegacion, á todas las formalidades y condiciones requeridas por las mismas.

Las providencias de estas Audiencias en que se deniegue la admision del recurso de casacion, serán apelables en el tiempo y en la forma prescritos por las referidas leyes y disposiciones.

## SECCION SEXTA.

*Disposiciones comunes á las secciones anteriores.*

Art. 45. El ministerio fiscal podrá interponer el recurso de casacion en los pleitos en que sea parte, ajustándose á las reglas establecidas en los artículos precedentes, pero sin constituir depósito.

Art. 46. Podrá igualmente el ministerio fiscal, en interés de la ley, interponer en cualquier tiempo el recurso de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal en los pleitos en que no haya sido parte, en cuyo caso no serán citadas y emplazadas las partes que intervinieron en el litigio contra cuya instancia se interponga el recurso.

Las resultas de este recurso no afectarán á las partes que intervinieron en el litigio, ni la ejecutoria se podrá alterar en lo más mínimo, sirviendo el fallo únicamente para formar jurisprudencia sobre las cuestiones legales que hubieran sido discutidas y resueltas en el pleito.

Art. 47. Cuando fuere desestimado el recurso interpuesto por el ministerio fiscal en pleito en que haya sido parte, las costas causadas á la contraria deberán reintegrarse de los fondos retenidos procedentes de la mitad de los depósitos cuya pérdida haya sido declarada; y lo mismo será cuando el fiscal se separe del recurso que hubiere interpuesto.

Art. 48. El pago de las costas de que habla el artículo anterior se dará por el orden riguroso de antigüedad y con sujecion á lo que permitan los fondos existentes.

Art. 49. Si las partes no hubieren hecho uso del recurso de casacion dentro del plazo legal, la ejecutoria, ya firme, no se podrá anular.

Art. 50. Siempre que las sentencias de primera y segunda instancia fueren conformes de toda conformidad, podrá la Audiencia decretar su ejecucion á petición de la parte que hubiere obtenido la sentencia, aunque se haya interpuesto y admitido el recurso de casacion, si presta antes fianza bastante, á satisfaccion de la Audiencia, para responder de cuanto recibiere ó pudiese recibir si se declarare la casacion.

#### SECCION SÉTIMA.

##### *De la sustanciacion de los recursos de casacion.*

Art. 51. Los recursos de casacion admitidos, ya procedan de las Audiencias de la Península é islas Baleares

ó Canarias, ya de las de Ultramar, se sustanciarán y determinarán con arreglo á las disposiciones que se establecen en esta seccion.

Art. 52. El tribunal mandará pasar los autos al relator para que forme el apuntamiento.

Art. 53. Trascurrido el término del emplazamiento sin haberse personado la parte que haya obtenido la sentencia, se sustanciará el recurso sin oírlo.

Art. 54. En cualquier estado de los autos que la parte se personare antes de la vista del recurso, se le tendrá por tal, entendiéndose con la misma las actuaciones sucesivas, sin que en ningun caso pueda retroceder la sustanciacion.

Art. 55. En cualquier estado del recurso puede separarse de él el que lo haya intentado, presentando su procurador poder especial otorgado al efecto, ó suscribiendo el mismo interesado el escrito en que se aparte del recurso, en el cual deberá ratificarse.

Art. 56. La providencia en que se estime el desistimiento del recurso, se comunicará para los efectos correspondientes á la Audiencia de que procedan los autos, y se notificará á las partes que hubieren comparecido en el Tribunal Supremo.

Art. 57. Los relatores formarán los apuntamientos, siguiendo el orden de la numeracion de los recursos.

Art. 58. Formado el apuntamiento, se mandará entregar los autos á las partes por su orden y por término de diez dias á cada una para instruccion de sus respectivos letrados.

Art. 59. Al devolver los autos, las partes expresarán bajo la firma de su letrado y procurador su conformidad con el apuntamiento, ó las omisiones é inexactitudes que á su juicio se hayan cometido en él.

Art. 60. Conformes las partes con el apuntamiento, ó hechas en él las rectificaciones que á su peticion haya decretado el tribunal, previo el informe del magistrado ponente, con arreglo al art. 37 de la ley de Enjuiciamiento civil, se mandará traer los autos á la vista, con citacion de las partes y señalamiento de dia y hora para verificarla.

Art. 61. La vista de estos recursos tendrá lugar por el órden riguroso de las fechas en que se haya hecho su señalamiento.

Art. 62. Si por cualquiera causa no pudiera verificarse la vista en el dia señalado, se hará nuevo señalamiento á la mayor brevedad, evitando en lo posible alterar el órden establecido en el artículo anterior.

Art. 63. Ni antes de la vista, ni en el acto de verificarse, ni despues, puede admitirse en el Tribunal Supremo ningun documento que las partes presentaren.

Art. 64. Para la vista de los recursos deberán concurrir siete magistrados, de los cuales uno será ponente.

Art. 65. Si faltare el presidente de la Sala, le reemplazará el del Tribunal; y si éste estuviere impedido, ausente, ó tuviere incompatibilidad, presidirá el más antiguo de los magistrados que compongan la Sala.

Art. 66. El Tribunal dictará sentencia dentro de diez dias, contados desde la conclusion de la vista, estableciendo los hechos y las cuestiones de derecho á que haya dado lugar el recurso, en la fórmula de resultandos y considerandos.

El magistrado ponente presentará redactado el proyecto de sentencia para la discusion y votacion del recurso.

Art. 67. Si el Tribunal estimare que la ejecutoria es contra la ley ó doctrina legal en cuya infraccion se hubie-

re fundado el recurso, declarará haber lugar á él, casando y anulando la ejecutoria y mandando devolver el depósito si se hubiere constituido, y dirigirá orden á la Audiencia de que proceda para que remita los autos.

Art. 68. Remitidos los autos al Tribunal Supremo, mandará que pasen al relator para que amplíe el apuntamiento. Ampliado éste, se observarán la tramitacion y disposiciones establecidas en los artículos 57 al 64 de esta ley.

Celebrada la vista, el Tribunal pronunciará sobre el objeto del pleito la sentencia procedente, conforme á los méritos de los autos y á lo que exigieren la ley ó doctrina infringida en la sentencia.

Art. 69. Si el recurso se hubiere fundado en quebrantamiento de forma, el Tribunal mandará en la misma sentencia en que anule la ejecutoria, devolver los autos á la Audiencia de que procedan, para que reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, lo sustancie ó determine, ó haga sustanciar ó determinar con arreglo á derecho, y decretará igualmente la devolucion del depósito.

Art. 70. Si el Tribunal estimare que la ejecutoria no es contra ley ni doctrina legal, ó que no se ha cometido el quebrantamiento de las formas del juicio, declarará no haber lugar al recurso, condenando en las costas al que lo hubiere interpuesto y á la pérdida del depósito si le hubiere constituido.

Art. 71. La mitad del importe de este depósito, á cuya pérdida se condenará al que hubiere interpuesto el recurso, se entregará á la parte que hubiere obtenido la ejecutoria reclamada, como indemnizacion de perjuicios, conservándose la otra mitad en el establecimiento público en que se hubiere hecho, para los efectos expresados en el art. 47.



Art. 72. Las sentencias en que se declare haber ó no lugar á los recursos de casacion, se publicarán en la *Gaceta de Madrid* é insertarán en la *Coleccion legislativa*.

Si las sentencias, á juicio de la Sala, no debieren insertarse íntegras, se publicarán suprimiendo los nombres propios de las personas, los de los lugares y las circunstancias que puedan dar á conocer á los demandantes y á los demandados, y el juzgado ó Audiencia.

Si por las circunstancias especialísimas de alguno de éstos, el Tribunal estimare que la publicacion de la sentencia ofende á la decencia, podrá ordenar que no se verifique.

Art. 73. No habrá ulterior recurso contra las sentencias en que se declare haber ó no haber lugar al de casacion.

Art. 74. Las providencias interlocutorias son suplicables ante la misma Sala que conoce del recurso.

Art. 75. Dictadas las sentencias, el Tribunal mandará librar una certificacion de las mismas, que se remitirá á la Audiencia de donde proceda el recurso para su cumplimiento, prévia la tasacion de costas si hubiere habido condena.

Art. 76. Cuando la separacion del recurso fundado en infraccion de ley ó doctrina legal se hiciere antes de ser admitido por el Tribunal, se mandará devolver el depósito.

Cuando se verificare despues de admitido y antes de su señalamiento para la vista, se devolverá solo la mitad del depósito, dándose á la otra mitad la aplicacion ordinaria.

Si el recurso de que la parte se separare se hubiere fundado en quebrantamiento de forma, se devolverá la mitad del depósito, cuando el desistimiento se haya verificado antes de su señalamiento para la vista.

**Art. 77.** En cualquier estado del recurso que las partes dejaren de promover su sustanciacion en el término de un año, á contar desde la notificacion de su última providencia, se declarará desierto.

Trascurrido este plazo, se dará cuenta al Tribunal Supremo para que recaiga la anterior declaracion, contra la cual no se dará ulterior recurso.

Palacio de las Córtes 24 de Mayo de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.—J. Sanchez Ruano.—Diputado Secretario.—Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1870.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó en la *Gaceta* de 23 de Junio de 1870, la siguiente

## LEY PROVISIONAL.

SOBRE EL

ESTABLECIMIENTO DEL RECURSO DE CASACION  
EN LOS JUICIOS CRIMINALES (1).

### CAPITULO PRIMERO.

*De los casos en que procede el recurso de casacion.*

**Artículo 1.º** Contra las sentencias de las Audiencias en los juicios criminales habrá lugar al recurso de casacion en los casos y en la forma que esta ley determina.

**Art. 2.º** Se considerarán exclusivamente como sentencias para los efectos de la casacion:

1.º Las sentencias definitivas que absuelvan libremente, condenen ó declaren exentos de responsabilidad á los procesados.

2.º Las sentencias de sobreseimiento que se funden

---

(1) El establecimiento del recurso de casacion en los juicios criminales era una reforma reclamada de consuno por la razon y por la ciencia. Por mucho que interese al hombre la conservacion de sus bienes y el respeto de sus derechos civiles, interésale mucho más su libertad, su vida y su honra; y era de todo punto inexplicable que tan sagrados objetos tuviesen en nuestra legislacion menos garantías que los derechos civiles.

Por otra parte, si es importante uniformar la jurisprudencia en las cuestiones civiles, ¿cuánto más necesario no es alcanzar ese mismo fin en los asuntos criminales?

A satisfacer, pues, estas dos necesidades principales ha venido esta ley, saludada con júbilo por cuantos se interesan en los adelantos jurídicos de nuestra Pátria.

en no estimarse como delito el hecho que hubiere dado lugar al procedimiento.

3.º Las sentencias en que por la misma causa se deniegue la admision de cualquiera denuncia ó querella.

4.º Las sentencias que no admitan el recurso de queja por denegacion del de apelacion de providencia rechazando cualquiera denuncia ó querella.

5.º Las sentencias de inhibicion que se funden en estimarse como falta un hecho que, segun la ley, constituye delito.

Art. 3.º El recurso de casacion se podrá interponer por los que sean parte en el juicio criminal; los que sin serlo ni haber incurrido en rebeldía resulten condenados, y los herederos de unos y otros:

1.º Cuando se infrinja alguna ley en la parte dispositiva de la sentencia.

2.º Cuando se hayan quebrantado en la causa las formas esenciales del procedimiento.

Art. 4.º Se entenderá que hay infraccion de ley para los efectos del recurso de casacion exclusivamente en los casos siguientes:

1.º Cuando los hechos consignados en la sentencia admitidos como probados y en la forma que en ella se refieran, se califiquen como delito, no siéndolo por su propia naturaleza, ó por circunstancias posteriores que impidan penarlo.

2.º Cuando los hechos consignados y admitidos en las sentencias no se califiquen ni penen como delito, siéndolo con arreglo á la ley.

3.º Cuando dados los hechos consignados y admitidos en la sentencia se cometa un error de derecho en la calificación del delito.

4.º Cuando admitidos los hechos consignados en

la sentencia, la calificación legal de la participación que en ellos se atribuya y declare ó cualquiera de los procesados, ó la pena impuesta, no fuere la que corresponda según las leyes.

5.º Cuando presupuestos los hechos se cometa error de derecho en la calificación de las circunstancias agravantes, atenuantes, ó de excepcion de responsabilidad, ó en la designacion del grado de la pena según la calificación que de las mismas circunstancias se hubiere hecho en la sentencia.

Art. 5.º Se entenderán quebrantadas las formas esenciales del procedimiento para los efectos de la casacion exclusivamente en los casos siguientes:

1.º Cuando el que interpusiere el recurso haya dejado de ser citado y emplazado en cualquiera de las instancias, debiendo haberlo sido con arreglo á la ley.

2.º Cuando las partes no hayan sido citadas para alguna diligencia de prueba.

3.º Cuando no se haya recibido la causa á prueba para la ratificación de los testigos del sumario, sin haber renunciado á ella los interesados.

4.º Cuando en la sentencia se haya omitido ó alterado la expresion de algun hecho que resulte de documento auténtico no impugnado en el proceso, y que tenga directa y necesaria influencia en la calificación del delito, ó en la participación en él de alguno de los procesados, ó en la aplicación de la pena impuesta.

5.º Cuando se haya dictado la sentencia por menor número de jueces que el señalado por la ley.

6.º Cuando se haya pronunciado la sentencia por uno ó más jueces cuya recusacion, intentada en tiempo y forma y fundada en causa legal, hubiese sido desestimada.

7.º Por incompetencia de jurisdiccion cuando espe-

cialmente no haya decidido sobre ella el Tribunal Supremo.

Art. 6.º No se admitirá el recurso de casacion por las faltas expresadas en los números 2.º, 3.º y 7.º del artículo anterior, si no hubiere sido reclamada su subsanacion en la instancia en que hubieren sido cometidas, y además en la segunda, si hubieren tenido lugar en la primera.

Si la falta que motive el recurso se hubiere cometido en la última instancia, y cuando no fuere ya posible reclamar contra ella, se admitirá el recurso aunque no haya precedido la reclamacion prevenida en el párrafo anterior.

Art. 7.º En los recursos por infraccion de ley, el Tribunal Supremo, aceptando los hechos como vengan consignados en la ejecutoria, se limitará á declarar si se ha cometido ó no la infraccion alegada, en el supuesto tan solo de que lo sea alguna de las señaladas en el artículo 4.º

En los recursos por quebrantamiento de forma se limitará el Tribunal á decidir sobre la falta alegada para interponerlo.

Para dictar sentencia sobre la admision ó decision de los recursos de casacion, se requiere por lo menos la asistencia de siete magistrados.

## CAPITULO II.

### *De la preparacion del recurso de casacion por infraccion de ley.*

Art. 8.º El que se proponga interponer el recurso de casacion por infraccion de ley, pedirá ante la Audiencia

que haya dictado la sentencia un testimonio de ella y de la de primera instancia si sus *resultandos y considerandos* hubieren sido aceptados y no reproducidos testualmente en aquella.

Art. 9.º La peticion expresada en el artículo anterior, se presentará dentro de los cinco dias siguientes á la última notificacion de la sentencia.

Si trascurriere este término sin presentarse dicha solicitud, quedará firme la sentencia y perdido el derecho á interponer el recurso.

Art. 10. Los tribunales concederán dentro del tercer dia el testimonio de la sentencia, á no ser que se pidiera fuera de los términos señalados en el artículo anterior. En este caso consignarán en la providencia de denegacion la fecha de la sentencia, la de su última notificacion á las partes, y la de la presentacion de la solicitud del testimonio.

De esta providencia denegatoria se dará copia certificada en el acto de la notificacion al que hubiere pedido el testimonio.

Cuando el que se proponga interponer el recurso hubiere sido defendido como pobre, se hará constar esta circunstancia en el testimonio de la sentencia.

Art. 11. De la providencia denegatoria del testimonio podrá el interesado recurrir en queja á la Sala segunda del Tribunal Supremo, dentro de los quince dias siguientes al en que se le hubiere entregado la copia expresada, si la causa se hubiere seguido en la Península é islas Baleares, y de treinta si se hubiere sustanciado en Canarias. Dicha Sala, con vista de la referida copia, que deberá presentarse, y oyendo al fiscal, revocará la providencia denegatoria, mandando á la Audiencia expida el testimonio de la sentencia cuando estimare que ha sido

pedido dentro de los términos expresados en el art 9.º, ó declarará, caso contrario, improcedente el recurso, condenando en costas al que lo haya deducido.

Pasados los términos que en este artículo se señalan, se considerará consentida la providencia denegatoria, y se rechazará de plano la queja.

La interposicion de este recurso suspenderá el cumplimiento de la sentencia hasta que se decida ó quede desierto.

Art. 12. Contra la resolucion del Tribunal Supremo sobre el recurso de queja no se dará ningun otro.

Art. 13. Cuando el recurrente defendido por pobre lo solicitare, la Audiencia remitirá á la Sala segunda del Tribunal Supremo el testimonio necesario para la interposicion del recurso, ó en su caso, la certificacion de la providencia denegatoria del mismo. Dicha Sala mandará nombrarle abogado y procurador que puedan interponer el recurso que corresponda, si él no los hubiere designado.

Art. 14. La Audiencia, en el mismo dia en que entregue ó remita el testimonio de su sentencia, enviará á la Sala segunda del Tribunal Supremo certificacion de los votos reservados si los hubiere, ó negativa en su caso, y notificará á los que hayan sido parte en la causa, además del recurrente, la entrega ó remesa del testimonio, emplazándolos para que puedan comparecer en la referida Sala del Tribunal Supremo á hacer valer su derecho dentro de los términos que se fijarán en el art. 15.

Los procesados que no hayan interpuesto el recurso podrán adherirse á él, acudiendo directamente á la misma Sala del Tribunal Supremo, si los motivos de casacion alegados fueren aplicables á la parte de la sentencia que se refiera á ellos.



## CAPÍTULO III.

*De la interposicion y admision del recurso de casacion por infraccion de ley.*

Art. 15. El recurso de casacion por infraccion de ley se interpondrá en la Sala segunda del Tribunal Supremo, dentro de los veinte dias siguientes al de la entrega ó remesa del testimonio de la sentencia, y certificacion afirmativa ó negativa de votos reservados, si la causa se hubiere sentenciado en la Península é islas Baleares, y de treinta si en Canarias; y trascurridos estos términos sin interponerlo, se tendrá por firme y consentida dicha sentencia.

En el mismo término deberán adherirse al recurso las partes que puedan hacerlo por ser aplicables los motivos de casacion alegados por el recurrente á las declaraciones de la sentencia que se refieran á ellos.

Art. 16. Este recurso se interpondrá en escrito firmado por abogado y procurador, en el cual se expresarán clara y concisamente sus fundamentos, y se citarán el artículo de esta ley que lo autorice y las leyes que se supongan infringidas.

Con este escrito se presentará el testimonio de la sentencia si hubiere sido entregado al recurrente.

La adhesion al recurso se interpondrá en la forma expresada en el párrafo primero de este artículo.

Art. 17. Cuando el recurrente fuere el acusador privado, con el escrito de interposicion presentará á la Sala el documento que acredite haber depositado 1.000 pesetas en el establecimiento público destinado al efecto, si la sentencia contra la cual se interpusiere el recurso no fuere confirmatoria de la de primera instancia, y contra ella el

**Art. 25.** Las vistas de estos recursos se celebrarán en sesion pública por el órden de su numeracion. Los que se intepongan contra sentencias de muerte y cualesquiera otros que declare urgentes la Sala, se antepondrán á todos los demás.

**Art. 26.** La vista se celebrará leyendo el secretario la sentencia, los votos reservados si los hubiere, el escrito interponiendo el recurso, el de adhesion y las notas de impugnacion si se hubieren presentado, y cualquiera otro documento que se hubiere remitido, pero sin asistencia de letrados ni informes orales de ninguna clase.

**Art. 27.** Concluida la audiencia del dia, la Sala deliberará sobre la admision de los recursos de que se hubiere dado cuenta, oyendo al ponente, que deberá, para este efecto, traer redactado el proyecto de sentencia.

Si la Sala creyere necesario aplazar la decision, podrá hacerlo; pero en ningun caso podrá dejar trascurrir más de tres dias sin decidir sobre la admision.

**Art. 28.** La decision se formulará de uno de los modos siguientes:

1.º «Admitido, y pase á la Sala tercera.»

2.º «No há lugar á la admision, y comuníquese al tribunal sentenciador para los efectos correspondientes.»

3.º «Admitido, respecto á la infraccion de la ley... ó del artículo... del Código penal: no há lugar á la admision respecto á las demás infracciones alegadas, y pase á la Sala tercera.»

La fórmula del número 1.º se empleará cuando proceda la admision del recurso por ser la sentencia sobre que verse de las que enumera el art. 2.º, y estar todas las infracciones alegadas comprendidas en cualquiera de las causas que expresa el art. 4.º

La fórmula del número 2.º, cuando la sentencia no

ministerio fiscal no hubiere preparado ni deducido el mismo recurso.

Si el acusador fuere pobre, quedará obligado á responder de la cantidad referida si viniera á mejor fortuna. La Sala hará constar en el testimonio de la sentencia la pobreza del acusador recurrente.

Art. 18. Los recursos se numerarán correlativamente por el orden de su presentacion, y del número que correspondiere á cada uno se dará certificacion á los que los hubieren interpuesto (1).

Art. 19. El escrito interponiendo el recurso, con el testimonio de la sentencia, el de adhesion en su caso, y los demás antecedentes que se hayan remitido á la Sala, inclusa la certificacion relativa á los votos reservados, se pondrán de manifiesto en su secretaría, durante el término que quedare por correr del emplazamiento, y cinco dias más, para que puedan ser examinados por los que hayan sido parte en la causa.

Dentro de este término podrán tambien los mismos interesados presentar notas brevísimas impugnando la admission del recurso ó la adhesion. Si lo verificasen despues, se unirán sus notas al expediente, sin que se interrumpa ni detenga su curso.

Art. 20. Si el recurrente se hubiere defendido como pobre en la causa, mandará la Sala nombrarle abogado y procurador que interpongan el recurso á su nombre.

Si el letrado designado no lo estimare procedente, deberá así manifestarlo dentro del término de tres dias, y la Sala dispondrá se le nombre otro: si éste opinare lo mis-

---

(1) El plausible objeto de esta disposicion es que no se dé preferencia para el más pronto despacho á ningun recurso de casacion, ya sea interpuesto por quienes se defiendan ó acusen como ricos, ó ya por aquellos á quienes la ley otorga el beneficio de pobreza.

mo, lo expresará dentro del propio plazo y se designará un tercero; y si éste fuere del mismo parecer que los anteriores y lo consignara dentro de un período igual de tiempo, se pasarán los antecedentes al fiscal, á fin de que interponga el recurso, si lo creyere procedente, ó los devuelva en otro caso con la nota de *visto*. Si el fiscal hiciere lo primero, se sustanciará el recurso en la forma ordinaria; si lo segundo, se tendrá por desestimado.

El letrado que deje trascurrir el término que expresa el párrafo anterior sin exponer que juzga improcedente el recurso, se considerará que acepta la obligacion de interponerlo dentro del señalado en el art. 15.

Art. 21. En el procedimiento para la admision del recurso no se dará á las partes más audiencia que la prevenida en los artículos 15 y 19, ni se les notificará más providencia que la de señalamiento de vista y la definitiva.

Art. 22. La falta de comparecencia de la parte que no haya interpuesto el recurso no impedirá ni detendrá su sustanciacion.

Art. 23. Trascurridos el término del emplazamiento y los cinco dias más señalados en el art. 19, se pasará el expediente al fiscal para que en el de tres dias manifieste su parecer sobre la admision del recurso.

Si el fiscal la estimare procedente, devolverá el expediente sin dictámen, y en el caso contrario manifestará por escrito los fundamentos de su opinion.

El fiscal podrá alegar nuevos motivos de casacion si los hubiere.

Art. 24. Devuelto el expediente por el fiscal, pasará al magistrado ponente que estuviere en turno, por término de otros tres dias, trascurridos los cuales el presidente de la Sala señalará el dia en que haya de verse el recurso y mandará notificarlo á las partes.

sea de las que enumera el art. 2.º, ó siéndolo, ninguna de las infracciones alegadas esté comprendida en las causas expresadas en el art. 4.º

La fórmula del núm. 3.º, cuando proceda la admision por alguna de las infracciones alegadas, y no por otra.

Art. 29. La providencia en que se deniegue la admision del recurso en todo ó en parte, será fundada y se publicará. La en que se admita, no se fundará ni publicará

Los *resultandos* y *considerandos* de las decisiones fundadas, se limitarán á los puntos que sean de la competencia de la Sala.

Art. 30. Para denegar la admision del recurso serán necesarios cinco votos conformes de siete. No reuniéndose este número de votos, se considerará aquel admitido.

Art. 31. Si el recurso fuere admitido, se pasará el expediente á la Sala tercera para su sustanciacion. Si no lo fuere, se remitirá copia certificada de la decision á la Audiencia de que proceda la causa.

Art. 32. Cuando la Sala denegare la admision del recurso y el recurrente fuere acusador privado que hubiere constituido depósito, lo condenará á perderlo y aplicará la mitad de él al acusado por vía de indemnizacion, y la otra mitad al Tesoro público. Si el acusado no se hubiere presentado, se aplicará el depósito en su totalidad al Tesoro.

Si el acusador no hubiere constituido el depósito por ser pobre, se dictará la misma resolucion para cuando mejore de fortuna.

La parte de los depósitos que ingrese en el Tesoro público tendrá, en cuanto á las causas, la aplicacion prevenida en el art. 1072 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 33. Contra la providencia de la Sala segunda sobre admision del recurso, no se dará ningun otro. La Sala tercera considerará tal providencia como ejecutoria inalterable respecto á los puntos que esta ley declara de la competencia de la Sala segunda.

#### CAPITULO IV.

*De la sustanciacion y decision de los recursos admitidos por infraccion de ley.*

Art. 34. La Sala tercera, despues de recibir de la segunda los antecedentes del recurso admitido, mandará numerarlo del modo establecido en el art. 18; designará el magistrado ponente que estuviere en turno, y entregará dichos antecedentes al que traiga el recurso, por término de tres dias para su instruccion, y despues por otro igual á las demás partes, y por último al fiscal si no fuere el recurrente.

Art. 35. Al dictar la providencia de que habla el artículo anterior, ordenando numerar el recurso y designar el ministro ponente, la Sala tercera mandará tambien nombrar abogado y procurador para su defensa al acusado, condenado ó absuelto por la sentencia, cuando no fuere el recurrente ni hubiere comparecido.

Si el abogado nombrado no aceptare la defensa, deberá manifestarlo á la Sala en escrito motivado dentro del término de tercero dia. En este caso se procederá á la designacion de segundo ó tercer letrado, en la forma establecida en el art. 20.

Art. 36. Devueltos los antecedentes del recurso, la Sala mandará traer éste á la vista, con citacion de las partes por el órden de su numeracion.

Si por cualquier accidente no se pudiese verificar la

vista el dia señalado, se designará otro á la mayor brevedad, cuidando de no alterar en lo posible el orden establecido.

Los recursos contra sentencias en que se hubiere impuesto la pena capital, los que la Sala segunda hubiere declarado urgentes y los que declare que lo son la Sala tercera, tendrán sin embargo la preferencia establecida en el art. 25.

Art. 37. La vista del recurso se verificará en la forma establecida en el art. 26, pero con asistencia é informe oral de los letrados de las partes, si éstas lo creyeren conveniente, y la del ministerio fiscal en todo caso, habiendo primero el recurrente, despues los que se hayan adherido al recurso, y por último, los que lo impugnen. Siempre que el ministerio fiscal contradiga el recurso, hablará el último.

El presidente de la Sala, á instancia del ministerio fiscal ó de los letrados, podrá, cuando lo crea necesario para rectificar cualquier error, ordenar la lectura de alguna parte de los antecedentes, mas no permitirá ninguna otra forma de rectificacion.

Tampoco permitirá el presidente discusion alguna sobre la existencia y forma de los hechos consignados en la sentencia, y llamará al orden al que intente discutirlos.

Sera obligatoria la asistencia de los letrados cuando hayan sido nombrados de oficio y no se hayan excusado en el término y forma que prescribe el art. 35.

Art. 38. Concluida la audiencia pública, la Sala fallará en la forma prevenida en el art. 27; pero pudiendo prorogar hasta cinco dias, cuando fuere indispensable, el término para redactar y publicar la sentencia.

Art. 39. La sentencia se redactará de la manera siguiente:

En párrafos separados, que empezarán con la palabra *Resultando*, se establecerán los puntos de hecho consignados en la sentencia objeto del recurso y pertinentes al mismo, con exclusion de cualesquiera otros que, consignados tambien en ella, no influyan en la decision.

En párrafos, tambien separados, que empezarán con la palabra *Considerando*, se expresarán los fundamentos de derecho de la sentencia.

Y á continuacion se consignará el *Fallo* que corresponda.

Art. 40. Cuando la Sala estimare infringida la ley por cualquiera de los motivos alegados, siempre que sean de los comprendidos en el art. 4.º, declarará *haber lugar al recurso*, y casará y anulará la sentencia.

Si estimare que no ha habido tal infraccion, declarará *no haber lugar al recurso*, y condenará en costas al recurrente, y á la pérdida del depósito en su caso, ó á satisfacer la cantidad equivalente si no se hubiere constituido por el acusador á causa de pobreza.

Art. 41. Si la Sala casare la sentencia, reclamará de la Audiencia la causa, para pronunciar sobre el fondo el fallo que corresponda, y mandará devolver el depósito si se hubiere constituido.

Recibida la causa en la Sala tercera se mandará pasar al relator para que adicione el apuntamiento.

Adicionado éste, se observarán la tramitacion y disposiciones establecidas en los artículos 34, 36, 38 y 39.

La vista de la causa se verificará leyéndose el apuntamiento y observándose lo prescrito en los párrafos 1.º, 2.º y 3.º del art. 37.

Contra la sentencia de casacion y la que en su caso se dicte sobre el fondo, no se dará recurso alguno.



## CAPITULO V.

*De la interposicion y admision del recurso por quebrantamiento de forma.*

Art. 42. El recurso de casacion por quebrantamiento de forma se interpondrá en la Audiencia dentro de los cinco dias siguientes al de la notificacion de la sentencia, y no será admitido si se presentare despues.

Art. 43. Se interpondrá este recurso por escrito con firma de letrado y procurador, en la cual se expresará:

La fecha de la notificacion de la sentencia.

La de la presentacion del recurso.

El artículo de esta ley que lo autorice.

La falta de forma que se suponga cometida.

Las reclamaciones practicadas para subsanarla y su fecha, si la falta fuere de las que exigen este requisito, segun el art. 6.º, para dar lugar al recurso.

Cuando el recurrente fuere el acusador privado, en el escrito de que habla el artículo anterior deberá tambien manifestar que para el caso de que la Audiencia admita el recurso, está dispuesto á presentar ante la Sala del Tribunal Supremo, dentro de los términos que se expresarán en el artículo siguiente, el documento que acredite haber depositado 1.000 pesetas en el establecimiento público destinado al efecto.

Art. 44. La Audiencia, sin oir á las partes, examinará:

1.º Si la sentencia contra la cual se interpone el recurso es de las que enumera el art. 2.º

2.º Si se ha interpuesto el recurso en el término de la ley.

3.º Si se funda en alguna de las causas expresadas en el art. 5.º

4.º Si la falta fué reclamada oportunamente en los casos en que lo exige el art. 6.º

Si concurrieren todas estas circunstancias, admitirá el recurso y ordenará la remesa de la causa ó del ramo de ella en que se suponga cometida la falta, con el apuntamiento, certificacion de la sentencia, los votos reservados si los hubiere, y testimonio de su providencia á la Sala del Tribunal Supremo, citando y emplazando á las partes para que comparezcan ante ella dentro de los veinte dias siguientes al de la citacion, ó treinta si la causa se hubiere seguido en Canarias.

Si faltare cualquiera de las circunstancias referidas en los cuatro números anteriores de este artículo, no será admitido el recurso.

Art. 45. La providencia en que se deniegue la admision del recurso será fundada, y de ella se dará copia certificada al recurrente al tiempo de hacerle la notificacion.

Art. 46. Si el recurrente se creyere agraviado por no admitírsele el recurso, podrá acudir en queja á la Sala segunda del Tribunal Supremo, la cual sustanciará y decidirá este incidente en la forma y términos establecidos en el art. 11.

Cuando el recurrente fuere defendido por pobre, y en el acto de hacérsele la notificacion de la providencia denegatoria de la admision lo solicitare, la Audiencia remitirá directamente la copia certificada que expresa el artículo 45 á la Sala segunda del Tribunal Supremo, la cual mandará nombrarle abogado y procurador que puedan interponer el recurso de queja, si él no los hubiere designado.

Art. 47. Cuando la Sala revocare la providencia denegatoria de la admision, ordenará á la Audiencia que remita la causa con los antecedentes necesarios á la Sala tercera del Tribunal Supremo con arreglo al art. 44. Cuando la confirmare, comunicará su resolucion á la Audiencia para los efectos correspondientes.

En uno y otro caso la providencia que dicte será irrevocable.

## CAPITULO VI.

*De la sustanciacion y decision del recurso admitido por quebrantamiento de forma.*

Art. 48. El recurso por quebrantamiento de forma se sustanciará y decidirá por la Sala tercera del Tribunal Supremo en los términos y con los procedimientos establecidos para los recursos por infraccion de ley en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39, en cuanto sus disposiciones no estén modificadas por las siguientes.

Art. 49. Recibida en la Sala tercera del Tribunal Supremo la causa ó el ramo de ella con sus antecedentes, mandará numerar el recurso del modo establecido en el artículo 18; designará al magistrado ponente que estuviere en turno, y entregará aquella y éstos al recurrente para su instruccion por término de cinco dias, y por otro igual á cada una de las partes y al fiscal.

Al devolver el recurrente la causa no podrá alegar nuevos motivos de casacion.

Art. 50. La entrega de que habla el artículo anterior no tendrá lugar cuando el recurrente fuere el acusador privado, y no hubiere presentado todavía el documento que acredite haber verificado el depósito prevenido en el artículo 17.

Pero si se hubiere defendido como pobre, bastará que se obligue á responder del importe del depósito si viniere á mejor fortuna.

Art. 51. Trascurrido el término del emplazamiento sin que el acusador justifique la constitucion del depósito, se declarará desierto el recurso, condenándole en las costas, y se devolverá la causa á la Audiencia.

Art. 52. Cuando el recurrente fuere pobre, la Sala mandará nombrarle letrado y procurador que le defienda, observándose para este caso lo dispuesto en el art. 20.

Art. 53. En la vista se dará cuenta por el secretario de la sentencia, de los votos particulares, del escrito de interposicion del recurso y de la parte de la causa que se considere necesaria para dar cumplida idea de la falta que hubiere motivado el recurso.

Art. 54. Cuando la Sala estimare haberse cometido la falta en que se funde el recurso, declarará *haber lugar á él* y ordenará la devolucion del depósito, si se hubiere constituido, y la de la causa á la Audiencia, para que repóniéndola al estado que tuviera cuando se cometió la falta, la sustancie y determine ó haga sustanciar y determinar con arreglo á derecho.

Art. 55. Si la Sala estimare no haberse cometido la falta alegada, declarará *no haber lugar al recurso*; condenará al recurrente en las costas y á la pérdida del depósito si se hubiere constituido, ó á la de su importe en su caso para cuando viniere á mejor fortuna, y mandará devolver la causa á la Audiencia. Al depósito se dará la aplicacion prevenida en el art. 32.

Quando resulten falsos los hechos alegados por fundamentos del recurso, la Sala podrá imponer además al recurrente una multa que no bajará de 250 pesetas, ni excederá de 750; y en caso de insolvencia sufrirá, por

vía de sustitucion y apremio, un dia de prision por cada 5 pesetas. Tambien podrá suspender del ejercicio de su profesion, por término que no exceda de un año, á los letrados que lo hubieren interpuesto y sostenido, imponiéndoles además una multa de igual cuantía. En el caso de insolvencia de los letrados se aumentará un mes de suspension por cada 50 pesetas que dejen de satisfacer.

No tendrá lugar la responsabilidad declarada en el párrafo anterior, en cuanto á la multa y suspension, cuando el recurso hubiere sido interpuesto por alguna de las causas expresadas en los números 4.º y 7.º del art. 5.º

## CAPITULO VII.

### *De los recursos por infraccion de ley y quebrantamiento de forma.*

Art. 56. Lo dispuesto en esta ley respectivamente al recurso de casacion por infraccion de ley y al recurso por quebrantamiento de forma, tendrá aplicacion tambien á los recursos que á la vez se funden en infraccion de ley y quebrantamiento de forma, con las modificaciones que en este capítulo se establecen.

Art. 57. Los recursos de casacion por infraccion de ley y quebrantamiento de forma se interpondrán y fundarán á un mismo tiempo dentro del término que fijan los artículos 9.º y 42, por medio de escrito en que se dará cumplimiento á lo prevenido en el 43.

Art. 58. La Audiencia, en vista de este escrito, admitirá ó denegará únicamente el recurso de casacion por quebrantamiento de forma, con arreglo á lo establecido en los artículos 42 y 44, reservando al Tribunal Supremo la del recurso por infraccion de ley.

Art. 59. Cuando la Audiencia admita el recurso, elevará á la Sala tercera del Tribunal Supremo la causa con los antecedentes que requiere el art. 44. En este caso se entenderá preparado el recurso de casacion por infraccion de ley.

Art. 60. Cuando la Audiencia denegare el recurso, los interesados podrán recurrir en queja á la Sala segunda del Tribunal Supremo contra su providencia, en el tiempo y forma que preceptúan los artículos 45 y 46.

Art. 61. Si la Sala segunda del Tribunal Supremo revocare la providencia denegatoria, dirigirá orden á la Audiencia para que remita la causa á la Sala tercera del Tribunal Supremo, al tenor de lo que establecen los artículos 44 y 47. En este caso se entenderá tambien preparado el recurso de casacion por infraccion de ley.

Art. 62. Si la Sala segunda confirmare la providencia denegatoria, comunicará su resolucion á la Audiencia á los efectos que haya lugar.

Art. 63. Los efectos de la providencia, confirmando la denegatoria de que trata el artículo anterior respecto del recurso de casacion por infraccion de ley, serán:

1.º Hacer imposible su interposicion cuando la providencia, confirmando la denegatoria de la admision del recurso de casacion en la forma, se hubiere fundado en haberse presentado el escrito proponiendo uno y otro recurso fuera del término legal.

2.º Dejar expedita su interposicion en su caso y lugar, cuando la providencia, confirmando la denegatoria de la admision del recurso de casacion en la forma, se hubiere fundado en la no concurrencia de las demás circunstancias expresadas en el art. 44.

Art. 64. En este último caso, si el recurrente lo pidiere dentro del término de tercero dia, contado desde el

en que se le haya notificado la confirmacion de la providencia denegatoria, la Audiencia le mandará expedir y entregar, dentro de igual término, el testimonio de su sentencia para que pueda seguir el recurso por infraccion de ley ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, y citará al efecto á las partes, cumpliendo en un todo con lo que ordena el art. 14.

Art. 65. Admitido por el tribunal sentenciador el recurso en la forma, y remitida la causa á la Sala tercera del Tribunal Supremo, se sustanciará y decidirá con arreglo á lo dispuesto en el capítulo VI.

Art. 66. Cuando la Sala tercera declare no haber lugar al recurso por quebrantamiento de forma, condenará al recurrente en las costas y á la pérdida del depósito si le hubiere constituido, y pasará la causa y demás antecedentes á la Sala segunda, que mandará comunicarla á las partes para instruccion, por término de cinco dias á cada una, y al fiscal por tres, al efecto que previene el art. 23; y con arreglo á lo que establecen los artículos 24, 25, 27 y 28 dictará la providencia que corresponda sobre la admision del recurso de casacion por infraccion de ley.

Art. 67. Cuando el recurrente fuere el acusador privado, al devolver la causa manifestando quedar instruido, deberá presentar el documento que acredite haber verificado el correspondiente depósito, en conformidad á lo establecido en el art. 17.

Art. 68. Admitido el recurso de casacion por infraccion de ley, se sustanciará y decidirá ante la Sala tercera en los términos y con los procedimientos establecidos en el capítulo IV.

## CAPITULO VIII.

*De la interposicion de los recursos por el ministerio fiscal.*

Art. 69. Los fiscales de las Audiencias prepararán é interpondrán en su caso los recursos de casacion por infraccion de ley ó quebrantamiento de forma, ó en ambos conceptos á la par, siempre que los juzguen procedentes con arreglo á esta ley, sujetándose á las reglas establecidas en los artículos 8.º, 9.º, 42, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del 43, art. 57, y además á las disposiciones siguientes.

Art. 70. Si la Audiencia denegare el testimonio de la sentencia, el fiscal dará cuenta de ello al del Tribunal Supremo, para que si lo creyere procedente, recurra en queja del modo establecido en el art. 11.

Art. 71. Los fiscales podrán interponer el recurso por quebrantamiento de forma, aunque la subsanacion de la falta alegada no haya sido pedida en la instancia en que se cometiera y en la siguiente.

Art. 72. Si la Audiencia no admitiere el recurso por quebrantamiento de forma, el fiscal procederá del modo prescrito en el art. 70.

Art. 73. El fiscal de la Audiencia, luego que reciba el testimonio de la sentencia si el recurso se funda en infraccion de ley, ó la certificacion de la providencia de admision si se funda en quebrantamiento de forma, los remitirá al fiscal del Tribunal Supremo, á fin de que en su vista introduzca ó sostenga el recurso ó proceda como estime justo.

Art. 74. Si el fiscal del Tribunal Supremo creyere procedente el recurso de casacion, lo interpondrá desde



luego en la Sala tercera dentro del término señalado en los artículos 15 y 44; si no lo estimare así y viniere preparado el recurso por infraccion de ley, comunicará dicho fiscal su resolucion al de la Audiencia de quien proceda para que lo ponga en conocimiento de ésta. Mas si el recurso se fundare en quebrantamiento de forma y hubiere sido admitido, el fiscal del Tribunal Supremo que creyere no deber sostenerlo, desistirá de él, y la Sala pondrá en conocimiento de la Audiencia correspondiente la providencia en que se le tenga por desistido.

Art. 75. Cuando el recurso se hubiere fundado á la par por el fiscal de la Audiencia en infraccion de ley y quebrantamiento de forma, y el fiscal del Tribunal Supremo desistiere de sostenerlo en este último concepto, podrá interponer el de infraccion de ley ante la Sala segunda dentro del término de cinco dias, contados desde el en que se le haya notificado la providencia, admitiéndole el desistimiento de que trata el artículo anterior.

## CAPITULO IX.

### *De los recursos de casacion en las causas de muerte.*

Art. 76. Contra las sentencias en que se imponga la pena de muerte se considerará admitido de derecho, en beneficio del reo, el recurso de casacion.

Art. 77. La Audiencia, en el mismo dia en que dicte su sentencia, elevará la causa á la Sala tercera del Tribunal Supremo, acompañando certificacion de los votos reservados si los hubiere, ó negativa en su caso.

Art. 78. Si dentro de tercero dia de recibida la causa en la Sala tercera del Tribunal Supremo se presentaren los defensores designados por el reo pidiendo la causa para

sostener la procedencia del recurso, se les tendrá por parte y se les mandará entregar por el término de ocho días.

Si no se presentaren dentro de aquel plazo, la Sala mandará nombrar de oficio al reo procurador y abogado que le defiendan, entregándoles el proceso por igual término de ocho días.

Art. 79. Al devolver la causa, el defensor del reo expondrá si existen ó no algunos de los motivos designados en los artículos 4.<sup>o</sup> y 5.<sup>o</sup>, en virtud de los cuales procede en los juicios criminales el recurso de casacion por infraccion de ley ó quebrantamiento de forma.

Art. 80. Por igual término y con igual fin se entregará la causa á las demás partes y al fiscal.

Art. 81. Si el procesado, cualquiera de las demás partes, ó el fiscal, sostuvieran la procedencia del recurso por infraccion de ley ó quebrantamiento de forma, se sustanciará y decidirá con arreglo á lo respectivamente dispuesto en los capítulos IV y VI.

Art. 82. Cuando se declare no haber lugar al recurso en la forma ni en el fondo, ó cuando ninguna de las partes hubiere sostenido su procedencia, la Sala, previa igual declaracion, examinará la sentencia y los méritos del proceso; y si encontrase motivos para aminorar la pena, propondrá, oyendo antes al fiscal, el indulto correspondiente.

## CAPITULO X.

### *Disposiciones comunes á todos los recursos de casacion.*

Art. 83. Las sentencias que dicte la Sala segunda del Tribunal Supremo denegando la admision del recurso de casacion y las que pronuncie la Sala tercera declarando haber ó no lugar á él, expresarán el nombre del ponente,

y se publicarán en la *Gaceta de Madrid* y en la *Coleccion legislativa*.

Art. 84. Si las sentencias de que trata el artículo anterior recayeren en causas seguidas por cualquiera de los delitos comprendidos en los títulos X y XI del libro segundo del Código penal (1), se publicarán suprimiendo los nombres propios de las personas, los de los lugares y las circunstancias que puedan dar á conocer á los acusadores y á los acusados y tribunales que hayan fallado el proceso.

Si por las circunstancias especiales de alguno de estos, estímaran las Salas segunda y tercera del Tribunal Supremo que la publicacion de la sentencia á que se refiere el artículo anterior ofende á la decencia pública, podrá ordenar en la propia sentencia que no se verifique aquella.

Art. 85. Las costas se tasarán por el secretario ó escribano de la Sala que haya impuesto la condena, con arreglo al arancel vigente; la cuenta del importe de los gastos del juicio se formará por el propio secretario ó escribano, incluyendo en ella los honorarios de los letrados.

Art. 86. La tasacion de costas y gastos del juicio se pondrá de manifiesto á las partes por término de dos dias, pasados los cuales sin haberse hecho oposicion á ella, se dictará auto aprobándola. Si se hiciere oposicion, se pasará el expediente ó la causa al ponente, y la Sala, oyéndole de palabra, determinará lo que crea procedente, sin ulterior recurso.

Si la oposicion recayere sobre los honorarios de los le-

---

(1) El Código penal á que se refiere este artículo es el de 1848, reformado en 1850. En este Código los títulos X y XI del libro II trataban de los delitos contra la honestidad y contra el honor respectivamente; en el nuevo Código penal ha variado la numeracion, y esos títulos son el IX y el X.

trados, la Sala, antes de resolver, oirá á la Junta de gobierno del Colegio de abogados.

Cuando conste la insolvencia de los condenados podrá suspenderse la práctica de las tasaciones hasta que resulte que han mejorado aquellos de fortuna.

En ningun caso se diferirá la ejecucion de las sentencias por lo dispuesto en este artículo y en el que le precede.

Art. 87. De la sentencia declarando haber ó no lugar á la casacion, no se dará recurso alguno.

De la que se pronuncie sobre el fondo de la causa despues de casada la sentencia, solo podrá pedirse aclaracion de puntos determinados y concretos dentro de las veinticuatro horas siguientes á la de su notificacion á las partes.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del recurso de revision en los casos en que proceda.

Art. 88. De las providencias interlocutorias en el procedimiento de admision ó en el de decision del recurso podrá suplicarse ante la misma Sala que las dicte, en el término de segundo dia.

Art. 89. El desistimiento del recurso podrá verificarse en cualquier estado del procedimiento, previa ratificacion del interesado ó presentando su procurador poder especial para ello. Si las partes estuvieran citadas para la decision del recurso, perderá la que desista la mitad del depósito, si lo hubiere constituido, y pagará las costas y gastos del juicio que se hubieren ocasionado por su causa.

Art. 90. Las sentencias contra las cuales pueda interponerse recurso de casacion no se ejecutarán hasta que trascurra el término señalado para prepararlo por infraccion de ley ó interponerlo por quebrantamiento de forma.

Si en dicho término se preparase ó interpusiese el recurso, quedará en suspenso hasta su terminacion la eje-

cucion de la sentencia, á menos que esta sea absolutoria, en cuyo caso, si el reo estuviere preso, será puesto en libertad.

Art. 91. Si la sentencia contra la cual se interpusiere el recurso no estuviere redactada en la forma prescrita en la ley, ó no contuviere los fundamentos de hecho necesarios para resolver la cuestion de derecho, la Sala tercera del Tribunal Supremo ordenará á la Audiencia que adicione ó aclare dichos fundamentos, consignándolos en un suplemento de la misma sentencia, sin alterar su texto.

Siempre que esto se verifique, la Sala acordará contra los magistrados que hubieren cometido la falta los apercibimientos ó demostraciones que estime procedentes.

Art. 92. La casacion de la sentencia no aprovechará ni perjudicará á los que siendo citados no hayan comparecido en el recurso, á menos que sean incompatibles con la declaracion de derecho que el tribunal hiciere los pronunciamientos que la sentencia casada contenga respecto á aquellos.

En este caso, la Sala, al dictar la nueva sentencia de fondo, proveerá lo que corresponda en cuanto á los procesados que no hubieren recurrido.

## CAPITULO XI.

### *Del recurso de revision.*

Art. 93. Habrá lugar al recurso de revision contra toda sentencia ejecutoria en los casos siguientes:

1.º Cuando estén sufriendo condena dos ó más personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo delito que no haya podido ser cometido sino por una sola.

2.º Cuando esté sufriendo condena alguno como au-

tor, cómplice ó encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite despues de la condena.

3.º Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia cuyo fundamento haya sido un testimonio declarado despues falso y penado por sentencia ejecutoria.

Art. 94. El recurso de revision podrá promoverse por los penados en todo caso, y por sus cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos, en los casos de los números 2.º y 3.º del art. 97, acudiendo al Ministerio de Gracia y Justicia con solicitud motivada.

Art. 95. El Ministro de Gracia y Justicia, prévia formacion de expediente, podrá ordenar al fiscal del Tribunal Supremo que interponga el recurso cuando á su juicio hubiere fundamento bastante para ello.

Art. 96. El fiscal del Tribunal Supremo podrá tambien, sin necesidad de dicha órden, interponer por sí el recurso ante la Sala tercera, siempre que tenga conocimiento de algun caso en que proceda.

Art. 97. En el caso del número 1.º del art. 93, la Sala declarará la contradiccion entre las sentencias, si en efecto existiere, anulando una y otra, y mandará instruir de nuevo la causa al tribunal á quien corresponda el conocimiento del delito.

En el caso del número 2.º del mismo artículo, la Sala, comprobada la identidad de la persona cuya muerte hubiera sido penada, anulará la ejecutoria.

En el caso del número 3.º del referido artículo, dictará la Sala la misma decision, en vista de la ejecutoria que condene á los testigos por falsarios, y mandará instruir de nuevo la causa al tribunal á quien corresponda el conocimiento del delito.

Art. 98. El recurso de revision se sustanciará oyendo por escrito una sola vez al fiscal y otra á los penados,

que deberán ser citados si antes no comparecieren. Pres-tada esta audiencia, seguirá el recurso los trámites esta-blecidos para admitir el de casacion por infraccion de ley, y la Sala dictará su fallo irrevocable, con informe oral ó sin él, segun acuerde en vista de las circunstancias del caso.

#### DISPOSICION TRANSITORIA.

Art. 99. Las disposiciones de esta ley serán aplica-bles á todas las causas que el dia en que debe comenzar á regir no estuvieren terminadas por ejecutoria.

Exceptúase lo dispuesto sobre los recursos de revision, los cuales podrán interponerse tambien en las causas fe-necidas con anterioridad.

Palacio de las Córtes 24 de Mayo de 1870.==Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.==Manuel de Llano y Pérsi, Di-putado Secretario.==Julian Sanchez Ruano, Diputado Se-cretario.==Francisco Javier Carratalá, Diputado Secreta-rio.==Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1870.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.





Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó en la *Gaceta* del 24 de Junio de 1870 la siguiente

## LEY PROVISIONAL

SOBRE

## REFORMAS EN EL PROCEDIMIENTO

PARA PLANTEAR EL RECURSO DE CASACION

## EN LOS JUICIOS CRIMINALES.

Artículo 1.º Por ahora, y hasta que se publique la nueva ley de enjuiciamiento criminal, continuarán sustanciándose las causas con arreglo á la legislación vigente, con las variaciones y adiciones que se establecen en esta ley.

Art. 2.º Luego que se hayan practicado todas las diligencias del sumario acordadas por el juez, se mandará entregar la causa al ministerio fiscal y al acusador privado si lo hubiere, para que, dentro del término que les señalará segun el volumen y complicacion del proceso, manifiesten por escrito, pero sin razonar ni fundar su juicio:

1.º La calificación que merezca el delito segun los hechos que resulten del sumario.

2.º La participacion que en él haya tenido el procesado ó cada uno de ellos si fueren más de uno.

3.º Si resultan méritos para exigir la responsabilidad civil subsidiaria contra una ó más personas, ó el resarci-

miento por el que á título lucrativo haya participado de los efectos del delito.

4.º Si procede elevar la causa á plenario ó sobreseerla, y en qué términos.

5.º Si renuncian la prueba y la ratificación de los testigos del sumario, ó por el contrario, conviene á su derecho el recibimiento á prueba y la ratificación de todos ó algunos de los testigos.

En este último caso propondrán por medio de otrosíes la prueba que les interese, presentando listas de los testigos que hayan de ser examinados, expresando su nombre, apellido, apodo si lo tuviesen, y domicilio; ó si ignorasen estas circunstancias, los datos que sean conducentes para averiguar su paradero.

Art. 3.º Si el Juez creyere procedente elevar la causa á plenario, dictará auto mandándolo así, y comunicándola á los procesados y personas que cualquiera de los acusadores hubiere designado como responsables subsidiariamente, por un término igual al que se hubiere concedido á cada uno de aquellos.

Este término podrá ser ampliado por otro igual á la mitad del concedido si se pidiere antes de concluir éste y se alegare justa causa, que calificará el juez.

Trascurrido dicho termino, ninguna otra próroga podrá concederse.

Art. 4.º El auto en que se mande elevar la causa á plenario no es apelable.

Art. 5.º Al devolver la causa, los procesados y los responsables civilmente presentarán un escrito firmado por su abogado y procurador, en que manifiesten:

1.º Que se han enterado de la calificación hecha por el ministerio fiscal y acusador privado si lo hubiere.

2.º Si se conforman con las declaraciones de los tes-

tigos del sumario, á efecto de omitir su ratificacion, y renuncian la prueba; ó si, por el contrario, piden la ratificacion de todos ó algunos de dichos testigos y el recibimiento de la causa á prueba.

En este caso propondrán por medio de otrosíes la prueba que intenten practicar, de la manera prevenida en el art. 2.º

Art. 6.º Cuando alguna de las partes lo solicite, el juez recibirá la causa á prueba y mandará practicar las que se hubieren propuesto, si las creyere útiles, ó desestimarás las que á su juicio no lo sean.

Art. 7.º De la providencia en que se desestime toda ó parte de la prueba propuesta ó se niegue la ampliacion del término probatorio concedido, podrá pedirse reposicion dentro del término de segundo día.

Si el juez declarare no haber lugar á ella, se admitirá la protesta que hiciere el interesado para los efectos convenientes en la segunda instancia.

Art. 8.º Durante el término probatorio podrá cualquiera de las partes pedir nueva prueba ó ampliacion de la que hubiere propuesto, siempre que los hechos que intenten justificar hayan ocurrido ó llegado á su noticia despues de haber presentado el escrito proponiendo su prueba.

Art. 9.º Tanto en el caso de que se haya renunciado la prueba, como en el de haber trascurrido el término probatorio, el juez dictará providencia mandando entregar el proceso al acusador privado si le hubiere, y al ministerio fiscal, para que formalicen la acusacion dentro del término que señalará segun el volúmen y complicacion de la causa, pero que no podrá exceder de ocho dias, que podrán prorogarse por cinco más, pidiéndolo antes de espirar el concedido y mediando causa justa.

Trascurrido este segundo término, no se concederá ningún otro, cualquiera que sea la causa que se alegue.

Art. 10. De las acusaciones se conferirá traslado á los procesados y personas responsables civilmente, para que presenten sus defensas dentro del término señalado en el artículo anterior.

Art. 11. Devuelto el proceso por la última de las personas expresadas en el artículo anterior, el juez dictará auto declarando conclusa la causa, y mandando traerla á la vista con citacion de las partes, señalando para ella el día más próximo que sea posible.

Art. 12. Los tribunales y jueces aplicarán las penas señaladas en el Código cuando resulte probada la delincuencia por cualquiera de los medios siguientes, apreciados por las reglas del criterio racional.

- 1.º Inspeccion ocular.
- 2.º Confesion de los acusados.
- 3.º Testigos fidedignos.
- 4.º Juicio pericial.
- 5.º Documentos fehacientes.
- 6.º Indicios graves y concluyentes.

Para que pueda fundarse la condenacion solamente en indicios, es necesario:

- 1.º Que haya más de uno.
- 2.º Que resulte probado el hecho de que se deriva el indicio.
- 3.º Que el convencimiento que produzca la combinacion de los indicios sea tal, que no deje lugar á duda racional de la criminalidad del acusado, segun el orden natural y ordinario de las cosas (1).

---

(1) Cuando se presentó á las Cortes este proyecto, fué objeto de grandes impugnaciones en la prensa este artículo; pero todas las personas sensatas convienen en que á medida que aumentan los medios que tienen los crimina-

**Art. 13.** Las sentencias se redactarán consignando en párrafos separados y numerados, que deberán empezar con la palabra *Resultando*, los hechos que consten del proceso y sus circunstancias, y declarando los que resultan probados.

En párrafos también numerados, que principiarán con la palabra *Considerando*, se consignarán los fundamentos de la apreciación legal de los hechos que se consideren probados.

En seguida se citarán las disposiciones legales que sean aplicables.

Si la sentencia fuere condenatoria, se declarará:

1.º Cuál es el delito que constituyen los hechos que se hayan declarado probados, y la calificación legal de sus circunstancias.

2.º La calificación legal de la participación que en ellos haya tenido cada uno de los procesados.

3.º La pena en que haya incurrido cada uno de ellos.

4.º La responsabilidad civil en que hayan incurrido los sujetos á ella que hayan sido oídos en la causa.

Cuando la sentencia sea absolutoria, comprenderá además de los resultandos y considerandos y la cita de las leyes, la declaración terminante de fundarse la absolución en falta de prueba de los hechos, ó en que estos no constituyan delito, ó en que no esté justificada la participación en ellos de los procesados, ó en estar los mismos exentos de responsabilidad.

---

les á su disposición para borrar las pruebas del delito, es necesario revestir de nuevas armas al poder judicial.

La práctica de los tribunales demuestra que si hubiera de exigirse siempre y en todo caso la prueba taxativa de la ley de Partida, rara vez podría pronunciarse una condena; y dada la naturaleza humana y la de los indicios que por este artículo se exigen, bien puede asegurarse que es más concluyente la prueba de estos que el dicho de dos personas que bastaban para constituir la prueba plena de la ley de Partida.

En todos casos mandará elevar la causa en consulta á la Audiencia y citar y emplazar á las partes, para que acudan á usar de su derecho dentro del término que se les señale.

Art. 14. Recibida la causa en la Audiencia, se mandará pasar al relator para formar el apuntamiento.

Devuelta por el relator, se mandará entregar la causa al acusador privado, cuando lo hubiere, y al ministerio fiscal aunque haya apelado alguna de las partes, para que reproduzcan ó modifiquen su acusacion.

De estos escritos se conferirá traslado á los demás interesados para que formalicen su defensa.

La Sala señalará el término en que hayan de evacuarse las alegaciones expresadas, atendida la complicacion y volúmen del proceso, pero sin que en ningun caso pueda exceder de quince dias para cada una de las partes.

Presentado el último escrito, se señalará inmediatamente dia para la vista.

Art. 15. Cuando vista la causa entendiase el tribunal superior que debió haberse acudido á la prueba propuesta ó ampliado el término, y se hubiere hecho ante el juez de primera instancia la propuesta indicada en el artículo 7.º, dejará sin efecto la sentencia consultada y mandará devolver la causa al juzgado para que repóniéndola al estado que corresponda, practique la prueba ó amplíe el término probatorio y dicte nueva sentencia.

Art. 16. La sentencia se redactará segun queda dispuesto en el art. 13, y se pronunciará dentro de los cinco dias siguientes al de la conclusion de la vista.

Art. 17. Contra las sentencias definitivas que pronuncien las Audiencias en la segunda instancia ó la Sala

cuarta de la de Madrid en la única, no se da otro recurso que el de casacion.

Queda suprimida la tercera instancia.

Art. 18. Las causas pendientes á la publicacion de esta ley continuarán sustanciándose hasta la terminacion de la instancia en que se hallen con arreglo á las leyes y disposiciones vigentes en dicha época.

En todas tendrá lugar el recurso de casacion contra la ejecutoria que recaiga, para lo cual los tribunales superiores redactarán las sentencias con arreglo á lo que queda dispuesto en el art. 13.

Art. 19. Las causas contra reos ausentes se sustanciarán hasta la conclusion del sumario.

Terminado éste, se archivarán hasta que sean habidos ó se presentaren á disposicion del juzgado.

Las causas en que haya además otros procesados presentes, continuarán sustanciándose respecto á estos solamente.

Palacio de las Córtes 24 de Mayo de 1870.==Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.==Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.==Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.==Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.==Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1870.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

.....



Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó en la *Gaceta* del 24 de Junio de 1870 la siguiente

## LEY PROVISIONAL ESTABLECIENDO REGLAS

PARA

### EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO.

#### CAPITULO I.

*De los que pueden ser indultados.*

Artículo 1.º Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo á las disposiciones de esta ley, de toda ó parte de la pena en que por aquellos hubiesen incurrido.

Art. 2.º Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior:

1.º Los procesados criminalmente que no hubiesen sido aún condenados por sentencia firme.

2.º Los que no estuvieren á disposicion del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.

3.º Los reincidentes en el mismo ó en otro cualquiera delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme. Se exceptúa, sin embargo, el caso en que, á juicio del tribunal sentenciador, ó del Consejo de Estado, hubiese razones suficientes de justicia, equidad ó conveniencia pública para otorgarles la gracia.

Art. 3.º Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable á los penados por delitos comprendidos en el capítulo XI del Código penal (1).

## CAPITULO II.

### *De las clases y efectos del indulto.*

Art. 4.º El indulto podrá ser total ó parcial.

Será indulto total la remision de todas las penas á que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente.

Será indulto parcial la remision de alguna ó algunas de las penas impuestas, ó de parte de todas las en que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente.

Se reputará tambien indulto parcial la conmutacion de la pena ó penas impuestas al delincuente en otras menos graves.

Art. 5.º Será nula, y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el tribunal á quien corresponda, la concesion del indulto en que no se hiciese mencion expresa, á

---

(1) La *Gaceta* del 26 de Junio de 1870 publicó la siguiente

#### RECTIFICACION.

Por un error material de copia, en la ley provisional estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, publicada en la *Gaceta* del 24 del actual, se han cometido algunas equivocaciones en los artículos 3.º y 29 de la misma, que se rectifican en la forma siguiente:

«Art. 3.º Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable á los penados por delitos comprendidos en los capítulos I y II, título II, libro II, y capítulos I, II y III, título III del mismo libro del Código penal últimamente reformado.

«Art. 29. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse la conmutacion de la pena de muerte y las impuestas por los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III, título III del mismo libro del Código penal últimamente reformado, sin oír previamente al tribunal sentenciador ni al Consejo de Estado.»

lo menos, de la pena principal sobre que recaiga la gracia.

Art. 6.º El indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, á excepcion de las de inhabilitacion para cargos públicos y derechos políticos y sujecion á la vigilancia de la autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mencion especial en la concesion.

Tampoco se comprenderá nunca en ésta la indemnizacion civil.

Art. 7.º Podrá concederse indulto de las penas accesorias, con exclusion de las principales y vice-versa, á no ser de aquellas que sean inseparables por su naturaleza y efectos.

Art. 8.º El indulto de pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no hubiese satisfecho; pero no comprenderá la devolucion de la ya pagada, á no ser que así se determinare expresamente.

Art. 9.º No se podrá conceder indulto del pago de los gastos del juicio y costas procesales que no correspondieren al Estado; pero sí de la pena subsidiaria que el penado insolvente hubiere de sufrir por este concepto.

Art. 10. Si el penado hubiere fallecido al tiempo ó despues de existir causas bastantes para la concesion de su indulto, podrá relevarse á sus herederos de la pena accesoria de multa, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 8.º y 9.º

Art. 11. El indulto total se otorgará á los penados tan solo en el caso de existir á su favor razones de justicia, equidad ó utilidad pública á juicio del tribunal sentenciador y del Consejo de Estado.

Art. 12. En los demás casos se concederá tan solo el parcial, y con preferencia la conmutacion de la pena impues-

ta en otra menos grave, dentro de la misma escala gradual.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá tambien conmutarse la pena en otra de distinta escala cuando haya méritos suficientes para ello á juicio del tribunal sentenciador ó del Consejo de Estado, y el penado, además, se conformare con la conmutacion.

Art. 13. Conmutada la pena principal, se entenderán tambien conmutadas las accesorias por las que correspondan, segun las prescripciones del Código, á la que hubiere de sufrir el indultado.

Se exceptúa, sin embargo, el caso en que se hubiese dispuesto otra cosa en la concesion de la gracia.

Art. 14. La conmutacion de la pena quedará sin efecto desde el dia en que el indultado deje de cumplir por cualquiera causa dependiente de su voluntad la pena á que por la conmutacion hubiere quedado sometido.

Art. 15. Serán condiciones tácitas de todo indulto:

1.<sup>a</sup> Que no cause perjuicio á tercera persona ó no lastime sus derechos.

2.<sup>a</sup> Que el penado haya de obtener, antes de gozar de la gracia, el perdon de la parte ofendida cuando el delito por que hubiese sido condenado fuere de los que solamente se persiguen á instancia de parte.

Art. 16. Podrán además imponerse al penado en la concesion de la gracia las demás condiciones que la justicia, la equidad ó la utilidad pública aconsejen.

Art. 17. El tribunal sentenciador no dará cumplimiento á ninguna concesion de indulto cuyas condiciones no hayan sido previamente cumplidas por el penado, salvo las que por su naturaleza no lo permitan.

Art. 18. La concesion de indulto es por su naturaleza irrevocable, con arreglo á las cláusulas con que hubiere sido otorgado.

## CAPITULO III.

*Del procedimiento para solicitar y conceder la gracia de indulto.*

Art. 19. Pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes ó cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representacion.

Art. 20. Puede tambien proponer el indulto el tribunal sentenciador, ó el Tribunal Supremo, ó el fiscal de cualquiera de ellos, con arreglo á lo que se dispone en el párrafo tercero, art. 2.<sup>o</sup> del Código penal, y se disponga además en las leyes de procedimiento y casacion criminal.

La propuesta será reservada hasta que el Ministro de Gracia y Justicia con su vista decrete la formacion del oportuno expediente.

Art. 21. Podrá tambien el Gobierno mandar formar el oportuno expediente, con arreglo á las disposiciones de esta ley, para la concesion de indultos que no hubiesen sido solicitados por los particulares ni propuestos por los tribunales de justicia.

Art. 22. Las solicitudes de indulto se dirigirán al Ministro de Gracia y Justicia por conducto del tribunal sentenciador, del jefe del establecimiento ó del gobernador de la provincia en que el penado se halle cumpliendo la condena, segun los respectivos casos.

Art. 23. Las solicitudes de indulto, incluidas las que directamente se presentaren al Ministro de Gracia y Justicia, se remitirán á informe del tribunal sentenciador.

Art. 24. Este pedirá á su vez informe sobre la conducta del penado al jefe del establecimiento en que aquel se halle cumpliendo la condena, ó al gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la

privacion de la libertad , y oirá despues al fiscal y á la parte agraviada si la hubiere.

Art. 25. El tribunal sentenciador hará constar en su informe, siendo posible, la edad, estado y profesion del penado ; su fortuna si fuere conocida ; sus méritos y antecedentes ; si el penado fué con anterioridad procesado y condenado por otro delito, y si cumplió la pena impuesta ó fué de ella indultado, por qué causa y en qué forma ; las circunstancias agravantes ó atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecucion del delito ; el tiempo de prision preventiva que hubiese sufrido durante la causa ; la parte de la condena que hubiere cumplido ; su conducta posterior á la ejecutoria, y especialmente las pruebas ó indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado ; si hay ó no parte ofendida, y si el indulto perjudica el derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictámen sobre la justicia ó conveniencia y forma de la concesion de la gracia.

Art. 26. El tribunal sentenciador remitirá con su informe al Ministro de Gracia y Justicia la hoja histórico-penal y el testimonio de la sentencia ejecutoria del penado, con los demás documentos que considere necesarios para la justificacion de los hechos.

Art. 27. Los Tribunales Supremo ó sentenciador que de oficio propongan al Gobierno el indulto de un penado, acompañarán desde luego con la propuesta el informe y documentos á que se refieren los artículos anteriores.

Art. 28. El Ministro de Gracia y Justicia remitirá despues el expediente al Consejo de Estado, para que la seccion de Gracia y Justicia del mismo informe á su vez sobre la justicia, equidad ó conveniencia de la concesion del indulto.

Art. 29. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse la conmutacion de la pena de muerte y de las impuestas por los delitos comprendidos en el capítulo II del Código penal, sin oír previamente al tribunal sentenciador ni al Consejo de Estado (1).

Art. 30. La concesion de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros, que se insertará en la *Gaceta*.

Art. 31. La aplicacion de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador.

Art. 32. La solicitud ó propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo el caso en que la pena impuesta fuese la de muerte, la cual no se ejecutará hasta que el Gobierno haya acusado el recibo de la solicitud ó propuesta al tribunal sentenciador.

Palacio de las Cortes 24 de Mayo de 1870.==Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.==Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.==Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.==Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.==Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1870.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

---

(1) Véase la nota del art. 3.º

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicó en la *Gaceta* del 20 de Junio de 1870 la siguiente

## LEY.

Don Francisco Serrano Dominguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortes soberanas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, salud:

Las Cortes Constituyentes de la Nacion española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Artículo único. El Gobierno establecerá desde luego, con el carácter de provisional, el registro civil en la Península é islas adyacentes, con arreglo al adjunto proyecto de ley, y sin perjuicio de las alteraciones que las Cortes acuerden en su discusion definitiva.

De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Reino para su promulgacion como ley.

Palacio de las Cortes 2 de Junio de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.—Mariano Rius Montaner, Diputado Secretario.

Por tanto:

Mando á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que la guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.

Madrid 17 de Junio de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.



## LEY PROVISIONAL DEL REGISTRO CIVIL.

## TITULO I.

## DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.º La Direccion general del registro de la propiedad, que en lo sucesivo se denominará *Direccion general de los registros civil y de la propiedad y del notariado*; los jueces municipales en la Península é islas adyacentes y Canarias, y los agentes diplomáticos y consulares españoles en territorio extranjero, llevarán un registro, en el que se inscribirán ó anotarán, con sujecion á las prescripciones de esta ley, los actos concernientes al estado civil de las personas.

Art. 2.º En el registro de la Direccion general se inscribirán:

1.º Los nacimientos en el extranjero de hijos de español que no tenga domicilio conocido en España.

2.º Los nacimientos ocurridos en buque español durante un viaje, si ninguno de los padres tuviese domicilio conocido en España.

3.º Los nacimientos de hijos de militares ocurridos en el extranjero donde los padres se hallen en campaña, si no fuese conocido su último domicilio en España.

4.º Los matrimonios *in artículo mortis* contraidos por militares en el extranjero, hallándose en campaña, si no fuese conocido su último domicilio en España.

5.º Los matrimonios de la misma clase celebrados durante un viaje por mar, si ninguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España.

6.º Los matrimonios de españoles celebrados en el

extranjero, si el contrayente ó contrayentes españoles no tuvieren domicilio conocido en España.

7.º Toda ejecutoria en que se declare la nulidad ó se decrete el divorcio de un matrimonio inscrito en el registro de la Direccion general.

8.º Las defunciones de militares ocurridas en campaña, cuando no sea conocido el domicilio anterior del difunto.

9.º Las ocurridas en viaje por mar, si el difunto no tuviese domicilio conocido en España.

10. Las de españoles ocurridas en el extranjero.

11. Las cartas de naturaleza cuando los interesados no hayan elegido domicilio en España.

12. Las declaraciones de opcion por la nacionalidad española hecha por los nacidos en territorio extranjero de padre ó madre española, si los que hiciesen la declaracion no eligiesen al hacerla domicilio en España.

13. Las de españoles que hubiesen perdido esta cualidad, manifestando que quieren recuperarla, si al hacerlo no eligiesen tampoco domicilio en España.

14. Los que para recuperar la nacionalidad española hagan las personas nacidas en el extranjero de padre ó madre españoles que hubiesen perdido esta cualidad, si tampoco eligiesen domicilio en España.

15. Las hechas con el mismo objeto por españolas casadas con extranjeros despues del fallecimiento de sus maridos, en el mismo caso de los cuatro números anteriores.

Art. 3.º En el registro encomendado á los jueces municipales deberán ser inscritos (1):

---

(1) Los jueces municipales, como ya hemos hecho observar, son creacion de la ley de organizacion del poder judicial, aprobada despues de la de registro civil.

- 1.º Los nacimientos ocurridos en territorio español.
- 2.º Los ocurridos en el mar ó en el extranjero, si los padres ó alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en España.
- 3.º Los matrimonios que se celebren en el territorio español.
- 4.º Los celebrados *in articulo mortis* en viaje por mar si alguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España.
- 5.º Los celebrados en el mismo caso por militares en campaña en el extranjero si fuese conocido su último domicilio en España.
- 6.º Los matrimonios celebrados en el extranjero por un español y un extranjero ó por dos españoles, si estos ó aquel tienen domicilio conocido en España.
- 7.º Los matrimonios de extranjeros celebrados segun las leyes de su país, cuando los contrayentes trasladen á España su domicilio.
- 8.º Las ejecutorias en que se declare la nulidad del matrimonio, ó se decrete el divorcio de los cónyuges.
- 9.º Las defunciones que ocurran en territorio español.
10. Las de militares en campaña cuando sea conocido su domicilio.
11. Las que ocurran en viaje por mar, si el difunto tuviese domicilio conocido en España.
12. Las cartas de naturaleza cuando los interesados elijan domicilio en territorio español.
13. Las justificaciones hechas en forma legal por extranjeros que hayan ganado vecindad en territorio de España relativamente á este hecho.
14. Las declaraciones de opcion por la nacionalidad española, hechas por los nacidos en España de padres

extranjeros, ó de padre extranjero y madre española.

15. Las hechas por los comprendidos en los números 12, 13, 14 y 15 del art. 2.º, si al hacerlas eligiesen domicilio en España.

16. Las que hagan los extranjeros manifestando querer fijar su domicilio en territorio español, ó querer trasladarlo á punto distinto dentro del mismo.

17. Las ejecutorias en que se disponga la rectificación de cualquier partida de dichos registros municipales.

Art. 4.º En el registro que deben llevar los agentes diplomáticos y consulares de España, se inscribirán:

1.º Los nacimientos de hijos de españoles, ocurridos en el extranjero.

2.º Los matrimonios que en él se contraigan por españoles ó por un extranjero y un español que conserve su nacionalidad.

3.º Las defunciones de españoles que allí ocurran.

4.º Las declaraciones de españoles que quieran conservar esta calidad al fijar su residencia en país extranjero, donde por solo este hecho sean considerados como nacionales.

5.º Las declaraciones comprendidas en los números 12, 13, 14 y 15 del art. 2.º

Art. 5.º El registro civil se dividirá en cuatro secciones, denominadas: la primera de *nacimientos*; la segunda de *matrimonios*; la tercera de *defunciones*, y la cuarta de *ciudadanía*, habiendo de llevarse cada una de ellas en libros distintos.

Art. 6.º Los libros del registro civil serán talonarios, y se formarán bajo la inspección de la Dirección general, con todas las precauciones convenientes para evitar falsificaciones.

Se exceptúan de la disposición anterior los que han de

llevar los agentes diplomáticos y consulares de España en el extranjero, los cuales podrán ser de forma comun, rubricándose todas sus fojas por el funcionario encargado del registro, y sellándolas con el sello de la oficina diplomática ó consular á que correspondan.

Art. 7.º Los libros correspondientes á cada una de las secciones del registro municipal y diplomático ó consular se llevarán por duplicado, con su índice alfabético respectivo.

Art. 8.º La Direccion determinará en el reglamento las diligencias y requisitos con que se han de encabezar y cerrar todos los libros del registro, así como los resúmenes anuales de sus inscripciones.

Determinará tambien los libros borradores auxiliares y la forma en que deban llevarse; el método y condiciones de los asientos y el sistema de referencias; el de los índices de documentos: cuándo, dónde y cómo deben formarse y conservarse los archivos de libros y documentos.

Art. 9.º Todas las diligencias de apertura y clausura de los libros del registro civil se autorizarán en el que ha de llevarse en la Direccion general con las firmas del director y del oficial del respectivo negociado; en los que han de establecerse en los juzgados municipales con las de los jueces y secretarios, y en los que han de tener á su cargo los agentes diplomáticos y consulares en el extranjero con las de estos funcionarios y los cancilleres.

Donde no hubiese un encargado especial de la cancellería, firmarán en su lugar dos testigos mayores de edad.

Tambien se autorizarán las diligencias expresadas con el sello que la Direccion general, juzgados, embajadas ó consulados acostumbren á usar.

Art. 10. Cuando se cierre un libro de los del registro municipal y su duplicado por haberse llenado todos

los fóllos de cualquiera de ellos, uno se archivará en la secretaría y otro se remitirá, dentro del término de ocho dias, al tribunal de partido correspondiente, con el objeto de que se archive tambien en la secretaría respectiva.

Los agentes diplomáticos ó consulares de España en el extranjero remitirán el duplicado de que se habla en el artículo anterior á la Direccion general del registro.

Art. 11. Si uno de los dos ejemplares de cualquiera de las secciones del registro sufre extravió ó destruccion, se sustituirá inmediatamente con una copia certificada del ejemplar conservado, librada por el encargado del archivo en que este se encuentre. Dicha copia se sacará en libro talonario, pedido al efecto á la Direccion general, y se cotejará con su original, anunciando veinte dias antes por edictos en las capitales del término municipal y del partido, y en la de la embajada ó consulado en su caso, el dia, hora y lugar en que el cotejo haya de tener efecto, para que cuantos se consideren interesados puedan concurrir al acto.

Presenciarán y autorizarán con sus firmas la diligencia de cotejo uno de los jueces del tribunal de partido y fiscal, ó dos testigos españoles mayores de edad, si el libro correspondiese á un registro diplomático ó consular.

Art. 12. El coste de la copia de que se habla en el artículo anterior y del libro en que haya de sacarse, y los gastos de traslacion y estancia de los funcionarios que hayan de presenciar su cotejo, se satisfarán por la persona responsable de la destruccion ó extravió, si fuese habida y tuviese medios para ello. En otro caso, los gastos de la copia y del libro serán por cuenta de los productos del registro, y los demás de oficio.

Art. 13. Todos los asientos de las diferentes secciones del registro civil estarán autorizados con el sello de la oficina correspondiente, y se firmarán por el juez y por el secretario, ó por quienes legalmente les sustituyan en el desempeño de las atribuciones generales de sus cargos, por la persona ó personas que hayan hecho la declaracion ó manifestacion á que dichos asientos se refieran, y por dos testigos mayores de edad.

Art. 14. Las inscripciones que deban hacerse en los registros de que están encargados la Direccion general y los agentes diplomáticos ó consulares de España en el extranjero, se autorizarán con los sellos respectivos y con las firmas del director general y del oficial del negociado, ó con las de dichos agentes y los cancilleres en su caso, firmando además los testigos y las otras personas que deban concurrir al acto.

Art. 15. Antes de ponerse el sello y firmas de que hablan los artículos anteriores, se leerá íntegramente el asiento á las personas que deban suscribirlo, expresándose al final del mismo haberse llenado esta formalidad.

Las mismas personas podrán leerlo por sí antes de poner su firma.

Art. 16. Hecha una inscripcion, en el acto se extenderá otra exactamente igual en el libro duplicado de la misma seccion del registro, sellándose y firmándose, previo cotejo, por las mismas personas que aquella.

Art. 17. Las equivocaciones ú omisiones que se hubiesen cometido serán salvadas de puño y letra de la misma persona que haya escrito el asiento al final de éste, y haciéndose al efecto las oportunas llamadas. Hecha de esta manera la correccion, se procederá á estampar el sello y firmas que correspondan.

Art. 18. Firmada ya una inscripcion, no se podrá ha-

cer en ella rectificacion, adicion ni alteracion de ninguna clase, sino en virtud de ejecutoria del tribunal competente, con audiencia del ministerio público y de las personas á quienes interese. Esta ejecutoria se inscribirá en el registro donde se hubiere cometido la equivocacion, expresándose en el nuevo asiento el tribunal que la haya dictado, su fecha, juicio en que haya recaído, resolucion que contenga y dia de su presentacion al encargado del registro para su inscripcion.

Al márgen de ésta y de la inscripcion rectificada se pondrá una sucinta nota de mútua referencia.

Art. 19. Si por alguna circunstancia extraordinaria se interrumpiese una inscripcion, cuando sea posible continuarla se extenderá un nuevo asiento, en el que ante todo se expresará la causa de la interrupcion. Al márgen de la inscripcion interrumpida y de la que sobre el mismo acto se haga despues, se pondrán notas de referencia.

Art. 20. Todos los asientos del registro civil deben expresar:

1.º Lugar, hora, dia, mes y año en que son inscritos.

2.º El nombre y apellido del funcionario encargado del registro y del que haga las veces de secretario.

3.º Los nombres y apellidos, edad, estado, naturaleza, profesion ú oficio y domicilio de las partes y de los testigos que en el acto intervengan.

4.º Las declaraciones y circunstancias expresamente requeridas ó permitidas por estas ú otras leyes, con relacion á cada una de las diferentes especies de inscripciones; pero no otras declaraciones ó circunstancias que por vía de observacion, opinion particular ú otro motivo, creyesen conveniente consignar el juez ó cualquiera de las demás personas asistentes.



Art. 21. Los interesados ó personas que como declarantes deban asistir á la formalizacion de un asiento, podrán hacerse representar por medio de apoderado con poder especial y auténtico, siempre que la ley no ordene expresamente su asistencia personal:

Art. 22. Los funcionarios encargados del registro civil y los que intervengan en las inscripciones como secretarios, no podrán autorizar aquellas que se refieran á sus personas ó á las de sus parientes ó afines en línea recta ó en la colateral hasta el segundo grado. Para estas inscripciones les reemplazarán los que deban sustituirles en el desempeño de sus respectivos cargos.

Art. 23. Las inscripciones podrán formalizarse en sitio distinto de la oficina en que se lleve el registro, aunque siempre dentro del respectivo distrito, mediando para ello causa bastante á juicio del encargado de practicarlas, ó en los casos que especialmente determine el reglamento.

Art. 24. Los agentes diplomáticos ó consulares de España en el extranjero remitirán á la Direccion general copia certificada de las inscripciones que hagan en sus registros.

Art. 25. La Direccion general reproducirá literalmente estas inscripciones en el registro que en la misma debe llevarse, salvo en los casos en que conforme á las disposiciones de esta ley haya de remitir las certificaciones recibidas á los jueces municipales para su inscripcion en los registros respectivos.

Art. 26. Por las inscripciones ó anotaciones que se hagan en el registro civil no se podrá exigir retribucion alguna.

Art. 27. Los documentos que se presenten para la extension de una partida en el registro civil deberán estar

legalizados si proceden de punto situado fuera de la respectiva demarcacion del tribunal de partido. Esta legalizacion se hará por el tribunal de partido de cuya demarcacion procedan. Si procedieren del extranjero, se ejecutará de la manera que prescriban las leyes respecto á todos los documentos de igual procedencia.

Art. 28. Cuando los documentos presentados se hallen extendidos en idioma extranjero ó en dialecto del país, se acompañará á los mismos su traduccion en castellano, debiendo certificar de la exactitud de ella el tribunal ó funcionario que los haya legalizado, ó la secretaria de la interpretacion de lenguas del Ministerio de Estado, ó cualquier otro funcionario que para ello esté competentemente autorizado.

Art. 29. Los documentos á que hayan de referirse las inscripciones del registro civil se rubricarán en todas sus fojas en los respectivos casos, por el jefe del negociado de la Direccion general, ó por el secretario del juzgado municipal, ó por el canciller de la embajada ó consulado, y en su defecto por el mismo embajador ó cónsul, y por la persona que los aduzca ó testigo que haya de firmar á su ruego la respectiva inscripcion.

Art. 30. Los funcionarios encargados del registro civil deberán facilitar á cualquier persona que lo solicite certificacion del asiento ó asientos que la misma designe, ó negativa de su existencia.

Art. 31. Estas certificaciones contendrán la copia literal del asiento designado y de todas sus notas marginales, y la fecha en que se expidan, debiendo estar autorizadas por el director general y el jefe del negociado respectivo las expedidas por este centro, y en otro caso con las del encargado del registro y del que haga las veces de secretario ó canciller, si lo hubiere, y con el sello del juz-

gado municipal ó dependencia en que el registro radique.

Art. 32. En igual forma podrán expedirse copias certificadas de los documentos presentados para hacer las inscripciones que en el registro civil deben tener cabida.

Art. 33. No se podrá dar certificacion de las asientos del registro civil con referencia al segundo ejemplar del mismo, que debe archivarse definitivamente en la secretaría de los tribunales de partido, sino en los casos siguientes:

1.º Cuando en el ejemplar existente en el juzgado municipal no se halle el asiento cuya copia se solicita.

2.º Cuando no estén conformes el asiento incluido en un ejemplar del registro con el correspondiente en el otro ejemplar.

3.º Cuando se haya perdido ó destruido el ejemplar depositado en el juzgado municipal, aunque haya sido sustituido con la copia de que habla el art. 11.

Art. 34. Las certificaciones expedidas de conformidad con lo prevenido en los artículos 30, 31 y 33, serán consideradas como documentos públicos.

Art. 35. Los nacimientos, matrimonios y demás actos concernientes al estado civil de las personas que tengan lugar desde el dia en que empiece á regir esta ley, se probarán con las partidas del registro que por ella se establece, dejando de tener el valor de documentos públicos las partidas del registro eclesiástico referentes á los mismos actos. Los que hubieren tenido lugar en fecha anterior, se acreditarán por los medios establecidos en la legislacion vigente hasta la fecha indicada.

Art. 36. Acreditándose que no han existido, ó que han desaparecido los dos ejemplares del registro en que debiera hallarse inscrito un acto concerniente al estado

civil de una persona, podrá acreditarse este acto por los demás medios de prueba que establecen las leyes.

Art. 37. Por las certificaciones expedidas con referencia al registro civil ó á los documentos presentados al hacerse en él las inscripciones ó anotaciones, además del importe del papel sellado que se invierta, se pagarán los derechos que en el reglamento se fijen. En el mismo se determinará tambien la forma y especies en que se ha de verificar el pago y el orden de contabilidad que se haya de seguir.

Art. 38. Al pié de las certificaciones libradas se anotará el pago de los derechos devengados ó la circunstancia de haberse expedido gratis por estar legalmente declarado pobre el que las haya solicitado.

Art. 39. Con el producto de la recaudacion por dicho concepto, se atenderá á los gastos del personal de la Direccion general correspondiente al registro civil é inspecciones, y del material de dicho registro. El sobrante se distribuirá en la forma y proporcion que el reglamento determine entre los funcionarios encargados de llevar el registro y los que deban auxiliarles como secretarios, salvo lo dispuesto ó que se disponga respecto á las embajadas y consulados.

Art. 40. La inspeccion superior del registro civil corresponderá exclusivamente al Ministerio de Gracia y Justicia, ejerciéndola bajo su inmediata dependencia la Direccion general en la forma que en el reglamento se disponga.

Art. 41. Serán inspectores ordinarios del registro civil los presidentes de los tribunales de partido, y estarán obligados en tal concepto á girar una visita cada seis meses ó las demás que creyesen convenientes á todos los registros municipales de su circunscripcion.

Los inspectores podrán delegar algun acto de su cargo en cualquier funcionario del órden judicial y del ministerio fiscal del mismo distrito.

Art. 42. El Ministro de Gracia y Justicia estará facultado para nombrar inspectores extraordinarios de uno ó más registros, los cuales gozarán la retribucion que se les fije en el reglamento.

Art. 43. Los inspectores, así ordinarios como extraordinarios, podrán corregir disciplinariamente las faltas cometidas por los funcionarios encargados del registro con una multa que no exceda de 100 pesetas, segun prescriba el reglamento.

Si la falta cometida pudiera ser calificada de delito, la pondrán inmediatamente en conocimiento del tribunal competente para que proceda á lo que legalmente corresponda.

Art. 44. Los ayuntamientos incluirán en sus presupuestos, y abonarán al Tesoro, el importe de los libros correspondientes á su término, que les remitirá la Direccion.

## TITULO II.

### DE LOS NACIMIENTOS.

Art. 45. Dentro del término de tres dias, á contar desde aquel en que hubiese tenido lugar el nacimiento, deberá hacerse presentacion del recién-nacido al funcionario encargado del registro, quien procederá en el mismo acto á verificar la correspondiente inscripcion.

Art. 46. Si hubiere temor de daño para la salud del recién-nacido ú otra causa racional bastante que impida su presentacion en el término fijado en el artículo anterior, el funcionario encargado del registro se trasladará

al sitio donde el niño se halle, para cerciorarse de su existencia, recibir la declaracion de las circunstancias que deben expresarse en el registro y ejercitar la inscripcion.

Art. 47. Están obligados á hacer la presentacion y declaraciones que se expresarán en los artículos sucesivos de esta ley las personas siguientes, por el orden que se mencionan:

1.º El padre.

2.º La madre.

3.º El pariente más próximo, siendo de mayor edad, de los que se hubiesen hallado en el lugar del alumbramiento al tiempo de verificarse.

4.º El facultativo ó partera que haya asistido al parto, ó en su defecto cualquiera otra persona que lo haya presenciado.

5.º El jefe del establecimiento público ó el cabeza de la casa en que el nacimiento haya ocurrido, si éste se efectuase en sitio distinto de la habitacion de los padres.

6.º Respecto á los recién-nacidos abandonados, la persona que los haya recogido.

7.º Respecto á los expósitos, el cabeza de familia de la casa ó jefe del establecimiento dentro de cuyo recinto haya tenido lugar la exposicion.

Art. 48. La inscripcion del nacimiento en el registro civil expresará las circunstancias mencionadas en el artículo 28, y además las siguientes:

1.º El acto de la presentacion del niño.

2.º El nombre, apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de la persona que lo presenta, y relacion de parentesco ú otro motivo por el cual esté obligada, segun el art. 47 de esta ley, á presentarlo.

3.º La hora, dia, mes y año y lugar del nacimiento.

4.º El sexo del recién-nacido.

5.º El nombre que se le haya puesto ó se le haya de poner.

6.º Los nombres, apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de los padres y de los abuelos paternos y maternos, si pudiesen legalmente ser designados, y su nacionalidad si fuesen extranjeros.

7.º La legitimidad ó ilegitimidad del recién-nacido, si fuese conocida, pero sin expresar la clase de ésta, á no ser la de los hijos legalmente denominados naturales.

Art. 49. Respecto á los recién-nacidos abandonados ó-expósitos, en vez de las circunstancias números 3.º, 6.º y 7.º del artículo anterior, se expresarán:

1.º La hora, día, mes y año y lugar en que el niño hubiese sido hallado ó expuesto.

2.º Su edad aparente.

3.º Las señas particulares y defectos de conformacion que le distinguan.

4.º Los documentos ú objetos que sobre él ó á su intermediacion se hubiesen encontrado; vestidos ó ropas en que estuviere envuelto, y demás circunstancias cuya memoria sea útil conservar para la futura identificacion de su persona.

Art. 50. Los objetos encontrados con el niño expósito ó abandonado, si fueren documentos se encarpetarán y archivarán en la forma dicha en el art. 29, y si fueren objetos de otra clase, pero de fácil conservacion, se custodiarán tambien en el mismo archivo que aquellos, marcándolos de la manera conveniente para que en todo tiempo puedan ser reconocidos.

Art. 51. Respecto á los recién-nacidos de origen ilegítimo, no se expresará en el registro quiénes sean el padre ni los abuelos paternos, á no ser que el mismo padre, por sí ó por medio de apoderado con poder especial y au-

téntico, haga la presentacion del niño y la declaracion de su paternidad.

Lo mismo se observará en cuanto á la expresion del nombre de la madre y de los abuelos maternos.

Art. 52. Habiendo nacido el niño de constante matrimonio ó en tiempo en que legalmente deba reputarse nacido dentro de él, no puede expresarse en el registro civil declaracion alguna contraria á su legitimidad mientras no lo disponga el tribunal competente en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 53. Si se presentare al encargado del registro el cadáver de un recién-nacido, manifestándose que la muerte ha ocurrido poco después del nacimiento, se hará constar por declaracion verbal de facultativo si aquel ha fallecido antes ó después de nacer, y por declaracion de los interesados la hora del nacimiento y del fallecimiento. De todas estas circunstancias se hará mencion en la inscripcion del nacimiento, é inmediatamente se inscribirá la defuncion en el libro de la seccion correspondiente del registro civil.

Art. 54. Cuando el nacimiento tuviese lugar en un lazareto, dentro de las veinticuatro horas, el jefe del establecimiento, en presencia del padre, si se hallare en el mismo, y de dos testigos, formalizará por duplicado un acta en que se expresen todas las circunstancias que segun esta ley deben mencionarse en los asientos del registro civil.

Un ejemplar de esta acta se remitirá inmediatamente al juez municipal del distrito en que el lazareto se halle situado para que verifique su inscripcion en el registro de que esté encargado. El otro ejemplar quedará archivado en el establecimiento.

Art. 55. Si el nacimiento se verificase en buque na-



cional durante su viaje, el contador si el buque es de guerra, ó el capitan ó patron si fuere mercante, formará el acta de que habla el artículo anterior, insertando copia de ella en el diario de la navegacion.

Art. 56. En el primer puerto que el buque tocara, si está en territorio español, se entregarán los dos ejemplares del acta por el oficial que la haya levantado á la autoridad judicial superior del mismo punto, quien hará constar la entrega por diligencia ante notario público, testimoniándose aquella literalmente. Inmediatamente se remitirán á la Direccion general por distintos correos los dos ejemplares del acta original, para que practique en su registro la inscripcion correspondiente si ninguno de los padres del recién-nacido tuviere domicilio conocido en España; y en otro caso remitirá una de ellas al juez municipal del domicilio para que haga la inscripcion, quedando archivado el otro ejemplar en la Direccion. El acta de entrega se depositará en el archivo del tribunal que la haya mandado extender.

Si antes de tocar el buque en puerto español tocara en puerto extranjero donde haya agente diplomático ó consular de España, se entregará á éste uno de los ejemplares del acta de que habla el artículo anterior para que ejecute lo dispuesto en el mismo. El otro ejemplar se entregará con igual objeto, en el primer puerto español en que despues toque el buque, á la autoridad judicial superior, segun lo determina el artículo citado.

Art. 57. Cuando no exista agente español en dicho puerto extranjero, el contador, ó capitan del buque en su caso, reservarán en su poder los dos ejemplares del acta, y al llegar á puerto donde lo haya ó á otro español, practicarán lo ordenado en el art. 56.

Art. 58. Aunque el nacimiento de los hijos de espa-

ñoles en el extranjero haya sido inscrito conforme á las leyes que estén allí en vigor, los padres deberán hacer que se inscriba tambien en el registro del agente diplomático ó consular de España del punto más próximo al de su residencia, presentando con tal objeto al recién-nacido ante este funcionario, si fuese posible, ó remitiendo al mismo dos copias auténticas de la inscripcion ya hecha. A su vez el agente español, practicada la inscripcion en su registro, remitirá á la Direccion general una de dichas copias ó de la inscripcion que hubiese practicado al presentársele el recién-nacido, para que asimismo la inscriba en su registro respectivo si los padres no tuviesen domicilio conocido en España, ó para que en otro caso se remita al juez municipal correspondiente.

Art. 59. El nacimiento de los hijos de militares se inscribirá en el registro del punto en que residan; y si hubiese tenido lugar en el extranjero, donde los padres se hallaren con motivo de guerra, se formalizará un acta como la prescrita en los artículos 54 y 55, por el jefe del cuerpo á que el padre pertenezca, remitiéndose sucesivamente por el conducto más seguro los dos ejemplares de ella al Ministerio de la Guerra, para que en él quede uno archivado y se pase el otro á la Direccion general del registro, con el objeto de que formalice la correspondiente inscripcion.

Art. 60. Al márgen de las partidas de nacimiento se anotarán sucintamente en uno de los dos libros ejemplares, que habrá de ser el que haya de archivar en la misma oficina del registro, los actos siguientes, concernientes á las personas á quienes aquellos se refieran:

- 1.º Las legitimaciones.
- 2.º Los reconocimientos de hijos naturales.
- 3.º Las ejecutorias sobre filiacion.

- 4.º Las adopciones.
- 5.º Los matrimonios.
- 6.º Las ejecutorias de divorcio, sin expresar la causa que lo hubiere motivado.
- 7.º Las en que se declare la nulidad del matrimonio.
- 8.º Las interdicciones de bienes por efecto de la imposición de pena.
- 9.º Los discernimientos de tutela y de toda especie de curatelas.
10. Las remociones de estos cargos.
11. Las emancipaciones voluntarias ó forzosas.
12. Las naturalizaciones en el caso del art. 63.
13. Las dispensas de edad.

14. Y en general todos los actos jurídicos que modifiquen el estado civil del ciudadano y no deban ser objeto de inscripcion principal, segun las disposiciones de esta ley.

Art. 61. Cuando los actos mencionados en el artículo anterior constasen por documento otorgado ante notario público, éste deberá ponerlo en conocimiento del juez municipal en cuyo registro se hallase inscrito el nacimiento del interesado, ó de la Direccion general en su caso, para que haga la correspondiente anotacion marginal, remitiéndole al efecto testimonio en relacion del documento otorgado.

Si dichos actos constasen por ejecutoria ó por decreto de la administracion superior del Estado, ó por inscripcion hecha en el registro civil, cumplirán la obligacion impuesta en el párrafo anterior el tribunal ó autoridad administrativa que hubiesen dictado la sentencia ó decreto que se debe anotar, ó el encargado del registro que hubiese formalizado dicha inscripcion, debiéndose siempre acompañar al aviso la oportuna certificacion ó testimonio á que la anotacion se haya de referir.

Art. 62. El encargado del registro á quien se dirijan estos documentos, estará obligado á acusar inmediatamente el recibo.

Art. 63. La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores se corregirá con una multa de 10 á 100 pesetas.

Art. 64. Los cambios de nombre ó apellido se autorizarán por el Ministerio de Gracia y Justicia, previa consulta del Consejo de Estado, y oyendo á las personas á quienes pueda interesar, para lo cual se anunciarán en los periódicos oficiales las solicitudes que al efecto se hagan.

Estas autorizaciones tambien se anotarán al márgen de la partida de nacimiento del interesado, observándose lo prescrito en los artículos 45 y 47.

Art. 65. Los obligados segun el art. 47 á presentar al encargado del registro el recién-nacido, que no lo hicieren sin justa causa, incurrirán en la multa de 5 á 10 pesetas, y del doble en caso de reincidencia. Los encargados del registro en sus respectivos casos, vigilarán constantemente para que la presentacion tenga efecto, y exigirán las multas prevenidas en el párrafo anterior.

### TITULO III.

#### DE LOS MATRIMONIOS.

Art. 66. Inmediatamente despues de la celebracion del matrimonio, se procederá á su inscripcion en la respectiva seccion del registro civil, extendiéndose en sus libros el acta á que se refiere el art. 39 de la ley sobre el matrimonio civil, la cual firmarán todas las personas que allí se expresan.

Art. 67. En el asiento del registro referente á un matrimonio, además de las circunstancias mencionadas en el art. 20, debe hacerse expresion:

1.º Del registro en que se hubiere inscrito el nacimiento de los contrayentes, y fecha de su inscripcion.

2.º De los nombres y apellidos, naturaleza, estado, profesion ú oficio y domicilio de los padres y de los abuelos paternos y maternos si son legalmente conocidos.

3.º Si los contrayentes son hijos legítimos ó ilegítimos; pero sin expresar otra clase de ilegitimidad que la de si son hijos, propiamente dicho, naturales, ó si son expósitos.

4.º Del poder que autorice la representacion del contrayente que no concorra personalmente á la celebracion del matrimonio, y del nombre y apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio del apoderado.

5.º De las publicaciones prévias exigidas por la ley, ó de la circunstancia de no haber tenido lugar por haberse celebrado el matrimonio *in articulo mortis*, ó por haber sido dispensadas, mencionándose en este caso la fecha de la dispensa y autoridad que la haya concedido.

6.º De la justificacion de libertad, tratándose de matrimonio de extranjeros ó del de militares, si á éste no hubieren precedido publicaciones.

7.º Del hecho de no constar la existencia de impedimento alguno, ó en el caso de que conste, ó de haber sido denunciado, de la dispensa del mismo, y fecha de ella, ó de la desestimacion de la denuncia, pronunciada por tribunal competente.

8.º De la licencia ó de la solicitud de consejo exigida por la ley, tratándose de hijos de familia y de menores de edad.

9.º De los nombres de los hijos naturales que por el

matrimonio se legitiman, y que los contrayentes hayan manifestado haber tenido.

10. Del nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de su fallecimiento, y registro en que éste se hubiese inscrito, en el caso de ser viudo uno de los contrayentes.

11. De la lectura que se haya hecho á los contrayentes de los artículos de la ley sobre matrimonios, de que especialmente deben ser enterados con arreglo á la misma en el acto de la celebracion.

12. De la declaracion de los contrayentes de recibirse mutuamente por esposos, y de la pronunciada por el juez municipal de quedar unidos en matrimonio perpétuo é indisoluble.

13. De la circunstancia de haber precedido ó no el matrimonio religioso, y en caso afirmativo, de la fecha y lugar de su celebracion.

Art. 68. Cuando se haya celebrado un matrimonio *in articulo mortis* se hará un nuevo asiento en el registro, tan luego como se presente la justificacion de libertad que previene la ley, poniéndose nota de referencia al márgen de la primera inscripcion.

Art. 69. El matrimonio de los extranjeros contraído con arreglo á las leyes de su país, deberá ser inscrito en España cuando los contrayentes ó sus descendientes fijen su residencia en territorio español. La inscripcion deberá hacerse en el registro del distrito municipal donde unos ú otros establezcan su domicilio. Al efecto deberán presentar los documentos que acrediten la celebracion del matrimonio, convenientemente legalizados y traducidos en la forma prescrita en el art. 26.

Art. 70. El matrimonio contraído en el extranjero por españoles, ó por un español y un extranjero, con su-

jecion á las leyes vigentes en el país donde se celebre, deberá ser inscrito en el registro del agente diplomático ó consular de España en el mismo país, quien remitirá copia de la inscripcion que haga á la Direccion general para la inscripcion en su registro, ó para remitirlo al juez municipal correspondiente, segun que el contrayente ó contrayentes españoles tengan ó no domicilio conocido en España.

Art. 71. El matrimonio contraido por militar *in articulo mortis*, estando en campaña fuera del territorio español, se inscribirá en el registro de la Direccion general si no fuese conocido su último domicilio en España, y en otro caso en dicho domicilio. Con este objeto se deberá pasar á la Direccion ó al juzgado municipal correspondiente por el Ministerio de la Guerra, uno de los dos ejemplares del acta de la celebracion, que deberá haberla remitido el jefe del cuerpo en que el contrayente sirviere.

Art. 72. Del matrimonio *in articulo mortis* contraido en viaje por mar, extenderá acta el contador si es en buque de guerra, ó el capitan ó patrono si es mercante, en los términos prescritos respecto al nacimiento en el artículo 55, practicándose lo dispuesto en el mismo artículo y en los 56, 57 y 58.

Art. 73. Las ejecutorias en que se decrete el divorcio, ó se declare nulo un matrimonio, ó en que se ordene la enmienda de su inscripcion, se inscribirán tambien en el registro en que se hubiese extendido la partida de aquel, poniéndose además notas marginales de referencia en uno y otro asiento. Con este objeto, el tribunal que haya dictado la ejecutoria deberá ponerlo en conocimiento del encargado del registro en que se deba inscribir, remitiéndole testimonio de ella en relacion, pero sin expresar en la de divorcio la causa que lo hubiese motivado.

Art. 74. Toda inscripcion de matrimonio ó de ejecutoria en que se declare el divorcio, ó se declare la nulidad del matrimonio ó la enmienda de su partida respectiva, deberá ponerse en conocimiento de los encargados de los registros en que estuviere inscrito el nacimiento de los contrayentes, acompañándoles copia certificada del asiento para que hagan la correspondiente anotacion al margen de la partida referente á este acto, segun se previene en los artículos 60 y 61.

Igual conocimiento se dará á los encargados de los registros en que estuviesen inscritos los nacimientos de los hijos habidos del matrimonio anulado, ó de aquel cuya partida se hubiese mandado corregir, ó de los hijos naturales que los contrayentes hayan legitimado al casarse para que pongan tambien la correspondiente nota marginal, segun lo dispuesto en dicho artículo.

## TITULO IV.

### DE LAS DEFUNCIONES.

Art. 75. Ningun cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiento de su defuncion en el libro correspondiente del registro civil del distrito municipal en que ésta ocurrió ó del en que se halle el cadáver, sin que el juez del mismo distrito municipal expida la licencia de sepultura y sin que hayan trascurrido veinticuatro horas desde la consignada en la certificacion facultativa.

Esta licencia se extenderá en papel comun y sin retribucion alguna.

El encargado del cementerio en que se hubiere dado sepultura á un cadáver sin la licencia mencionada, y los que la hubiesen dispuesto ó autorizado, incurrirán en una



multa de 20 á 100 pesetas, que hará efectiva el juez municipal correspondiente.

Art. 76. El asiento del fallecimiento se hará en virtud de parte verbal ó por escrito que acerca de él deben dar los parientes del difunto ó los habitantes de su misma casa, ó en su defecto los vecinos, y de la certificacion del facultativo, de que se hablará en el artículo siguiente.

Art. 77. El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad, ó en su defecto el titular del ayuntamiento respectivo, deberá examinar el estado del cadáver; y solo cuando en él se presenten señales inequívocas de descomposicion, extenderá en papel comun, y remitirá al juez municipal, certificacion en que exprese el nombre y apellido y demás noticias que tuviere acerca del estado, profesion, domicilio y familia del difunto; hora y dia de su fallecimiento, si le constare, ó en otro caso los que crea probables; clase de enfermedad que haya producido la muerte, y señales de descomposicion que ya existan.

Ni por esta certificacion, ni por el reconocimiento del cadáver, que debe precederle, se podrá exigir retribucion alguna.

A falta de los facultativos indicados, practicará el reconocimiento y expedirá la certificacion cualquier otro llamado al intento, á quien se abonarán por la familia ó los herederos del finado los honorarios que marque el reglamento.

Art. 78. El juez municipal presenciará el reconocimiento facultativo, siempre que se lo permitan las demás atenciones de su cargo ó haya motivos para creerlo de preferente atencion.

Art. 79. En la inscripcion del fallecimiento se expresarán, si es posible, además de las circunstancias mencionadas en el art. 20;

1.º El día, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte.

2.º El nombre, apellido, edad, naturaleza, profesion ú oficio y domicilio del difunto y de su cónyuge si estaba casado.

3.º El nombre, apellido, domicilio y profesion ú oficio de sus padres, si legalmente pudiesen ser designados, manifestándose si viven ó no, y de los hijos que hubiere tenido.

4.º La enfermedad que haya ocasionado la muerte.

5.º Si el difunto ha dejado ó no testamento, y en caso afirmativo, la fecha, pueblo y notaría en que lo haya otorgado.

6.º El cementerio en que se haya de dar sepultura al cadáver.

Art. 80. Serán preferidos como testigos de la inscripcion de un fallecimiento los que más de cerca hayan tratado al difunto ó hayan estado presentes en sus últimos momentos.

Art. 81. Si el fallecimiento hubiere ocurrido en hospital, lazareto, hospicio, cárcel ú otro establecimiento público, el jefe del mismo estará obligado á solicitar la licencia de entierro, y llenar los requisitos necesarios para que se extienda la partida correspondiente en el registro civil.

Además tendrá obligacion de anotar las defunciones en un registro especial, que con este objeto deberá llevarse en dichos establecimientos.

Art. 82. En el caso de fallecimiento de una persona desconocida, ó del hallazgo de un cadáver, cuya identidad no sea posible por el pronto comprobar, se expresarán en la inscripcion respectiva:

1.º El lugar de la muerte ó del hallazgo del cadáver.

2.º Su sexo, edad aparente, y señales ó defectos de conformacion que le distinguan.

3.º El tiempo probable de la defuncion.

4.º El estado del cadáver.

5.º El vestido, papeles ú otros objetos que sobre sí tuviere ó se hallaren á su inmediacion, y que ulteriormente puedan ser útiles para su identificacion, los cuales habrá de conservar al efecto el encargado del registro, ó la autoridad judicial en su caso.

Art. 83. Tan pronto como se logre esta identificacion, se extenderá una nueva partida, expresiva de las circunstancias requeridas por el art. 79, de que se haya adquirido noticia, poniendo la nota correspondiente al márgen de la inscripcion anterior, para lo cual la autoridad ante quien se hubiese seguido el procedimiento deberá pasar al encargado del registro testimonio del resultado de las averiguaciones practicadas.

Art. 84. Si hubiere indicios de muerte violenta, se suspenderá la licencia de entierro hasta que lo permita el estado de las diligencias que por la autoridad competente habrán de instruirse en averiguacion de la verdad.

Art. 85. El juez encargado de hacer ejecutar la sentencia de muerte, inmediatamente que se haya ejecutado, lo pondrá en conocimiento del juez municipal, acompañando testimonio, con referencia á la causa, de las circunstancias mencionadas en el art. 79, que en ella constaren, para que pueda extenderse la partida de defuncion del reo y expedirse la licencia de entierro.

Art. 86. Cuando la muerte hubiere sido violenta ó hubiere ocurrido en cárcel, establecimiento penal, ó por efecto de ejecucion capital, no se hará mencion en la partida correspondiente del registro civil de ninguna de estas circunstancias.

Art. 87. Respecto á los fallecimientos ocurridos en buques nacionales de guerra ó mercantes, se procederá á su inscripcion, formalizándose un acta de la manera prescrita en el art. 67, y practicándose lo dispuesto respecto á la inscripcion de nacimientos en los artículos 56, 57 y 58.

Art. 88. El fallecimiento ocurrido en viaje por tierra se inscribirá en el registro del distrito municipal en que se haya de dejar el cadáver para su entierro.

Art. 89. El fallecimiento de militares en tiempo de paz y en territorio español, se pondrá por el jefe del cuerpo á que pertenezcan en conocimiento del juez municipal del distrito en que ocurra, acompañándole copia de sus filiaciones para que proceda á hacer en su registro la inscripcion correspondiente.

Art. 90. Si el fallecimiento de militares ocurriese en campaña en territorio español donde á la sazón no impere la autoridad del Gobierno legítimo, ó en territorio extranjero, el jefe del cuerpo á que perteneciera el difunto dispondrá el enterramiento y lo pondrá en noticia del Ministerio de la Guerra, remitiéndole copia duplicada de la filiacion para que éste haga verificar la inscripcion en el registro del último domicilio del finado, si fuere conocido, ó en el de la Direccion general en otro caso.

Art. 91. Los agentes diplomáticos y consulares de España en el extranjero inscribirán en su registro el fallecimiento de los españoles ocurrido en el país en que estén acreditados, remitiendo copia certificada de esta inscripcion á la Direccion general para que se repita en el registro de la misma, ó en el de su domicilio en España al tiempo del fallecimiento, si lo hubiere tenido.

Art. 92. De toda inscripcion de defuncion se dará conocimiento por medio de copia certificada á los encargados del registro en que se hubiese inscrito el nacimiento

del difunto, para que se anote al márgen de las partidas respectivas.

Art. 93. El encargado del registro en que se haya inscrito la defuncion de un empleado ó pensionista del Estado, deberá dar parte de ello en el término de tres dias á las oficinas de Hacienda pública de la provincia.

Art. 94. La muerte de un extranjero que no hubiese dejado familia deberá ponerse, dentro del mismo término, en conocimiento del agente diplomático ó consular de su país residente en el punto más próximo al en que se deba efectuar el entierro. No habiéndolo, se dirigirá el aviso al Ministerio de Estado para que lo trasmita al Gobierno de la Nacion á que hubiere pertenecido el finado.

Art. 95. En casos de epidemia ó de temor fundado de contagio por la clase de enfermedad que hubiese producido la muerte de una persona, se harán en la puntual observancia de esta ley las excepciones que prescriban las leyes y reglamentos especiales de sanidad.

## TITULO V.

### DE LAS INSCRIPCIONES DE CIUDADANÍA

Art. 96. Los cambios de nacionalidad producirán efectos legales en España solamente desde el dia en que sean inscritos en el registro civil.

Art. 97. En todos los casos en que se trate de inscribir en el registro civil un acto por virtud del cual se adquiere, se recupera ó se pierde la nacionalidad española, deberán presentarse la partida de nacimiento del interesado; la de su matrimonio, si estuviere casado, y las de nacimiento de su enposa y de sus hijos.

Art. 98. No se practicará inscripcion alguna en el

registro de ciudadanía relativa á la adquisicion, recuperacion ó pérdida de la calidad de español, en virtud de declaracion de persona interesada que no se halle emancipada y no haya cumplido la mayor edad.

Art. 99. La adquisicion, recuperacion ó pérdida de la nacionalidad española se anotará al márgen de las partidas de nacimiento de los interesados y de sus hijos, si estos actos hubiesen sido inscritos en el registro civil de España, remitiéndose al efecto copias certificadas de la inscripcion á los encargados de los registros respectivos, quienes acusarán inmediatamente el recibo. Por la falta de cumplimiento de la disposicion de este artículo se impondrá la multa prevista en el art. 65.

Art. 100. En todas las inscripciones del registro de que hablan los artículos precedentes, se expresará, si fuese posible, además de las circunstancias mencionadas en el art. 20:

1.º El domicilio anterior del interesado.

2.º Los nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio de sus padres, si pudiesen ser designados.

3.º El nombre, apellido y naturaleza de su esposa, si estuviere casado.

4.º Los nombres y apellidos, naturaleza, vecindad y profesion ú oficio de los padres de ésta en el caso del número 2.º

5.º Los nombres, edad, naturaleza, residencia y profesion ú oficio de los hijos, manifestando si alguno de ellos está emancipado.

Art. 101. Las cartas de naturaleza concedida á un extranjero por el Gobierno español no producirán ninguno de sus efectos hasta que se hallen inscritas en el registro civil del domicilio elegido por el interesado, ó en el

de la Direccion general si no hubiese de fijar su residencia en España. Al efecto deberá presentarse en uno ú otro registro por el interesado, el decreto de naturalizacion y los documentos expresados en el art. 97, manifestando que renuncia á su nacionalidad anterior y jurando la Constitucion del Estado. En el asiento respectivo del registro se expresarán estas circunstancias y la clase de la naturalizacion concedida.

Art. 102. Los extranjeros que hayan ganado vecindad en un pueblo de España gozarán de la consideracion y derechos de españoles desde el instante en que se haga la correspondiente inscripcion en el registro civil.

Al efecto deberán presentar ante el juez municipal de su domicilio justificacion bastante, practicada con citacion del ministerio público, de los hechos en virtud de los cuales se gana dicha vecindad, renunciando en el acto á la nacionalidad que antes tenian.

De los hechos comprendidos en la justificacion practicada y de esta renuncia deberá hacerse mencion expresa en el asiento respectivo.

Art. 103. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, ó de padre extranjero y madre española, que quieran gozar de la nacionalidad de España, deberán declararlo así en el término de un año, á contar desde el dia en que cumplan la mayor edad, si á la sazón están ya emancipados; y en otro caso desde que alcancen la emancipacion, renunciando al mismo tiempo á la nacionalidad de los padres.

Art. 104. Esta declaracion y renuncia, y consiguienn- te inscripcion en el registro, deberán hacerse ante el juez municipal del domicilio del interesado. Si residiere en pais extranjero, se harán ante el agente diplomático ó consular de España del punto más próximo, quien inscribirá el

acta en el registro de que esté encargado, remitiendo copia á la Direccion para que repita la inscripcion en su registro si el interesado no tuviere domicilio en España.

Art. 105. Respecto á los nacidos de padre extranjero y madre española fuera del territorio de España, se observará la disposicion contenida en el artículo anterior.

Art. 106. El español que hubiese perdido esta calidad por adquirir naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla volviendo al Reino, declarando que así lo quiere ante el juez municipal del domicilio que elija, ó en otro caso ante el director general, renunciando á la proteccion del pabellon de aquel país, y haciendo inscribir en el registro civil esta declaracion y renuncia.

Art. 107. El español que hubiese perdido su nacionalidad por entrar al servicio de una potencia extranjera sin licencia del Gobierno de España, además de los requisitos prevenidos en el artículo anterior, necesitará para recuperar la calidad de español una rehabilitacion especial del mismo Gobierno, y en el respectivo asiento del registro civil deberá hacerse expresa mencion de esta rehabilitacion.

Art. 108. El nacido en el extranjero de padre ó madre españoles que haya perdido esta calidad por haberla perdido sus padres, podrá recuperarla tambien llenando los requisitos prevenidos en el artículo anterior.

Art. 109. Asimismo podrá recuperarla la mujer española casada con extranjero despues que se disuelva su matrimonio, haciendo la declaracion, renuncia é inscripcion que quedan expresadas. En este caso la interesada habrá de presentar el documento que compruebe la disolucion del matrimonio.

Art. 110. Los extranjeros que quieran fijar su residencia ó domicilio en territorio español deberán declarar-



lo así ante el juez municipal del pueblo en que piensen residir, quien procederá en el acto á la correspondiente inscripcion en el registro de ciudadanía, expresando en el asiento tambien, con referencia á la simple manifestacion del declarante y sin exigirle la presentacion de las respectivas partidas de nacimiento y matrimonio, su nombre y apellido, los de su padre, esposa é hijos, su edad, lugar de su nacimiento y su profesion ú oficio. Igualmente declarará el interesado, y se expresará en la inscripcion, el objeto que se proponga al fijar su domicilio en España, como si es el de ejercer el oficio ó profesion que haya declarado, el de arraigarse y vivir de sus rentas ú otro cualquiera.

Art. 111. Tambien deben incribirse en el registro de ciudadanía los cambios de domicilio de un término municipal á otro que hagan los extranjeros. Esta inscripcion se hará primeramente en el registro del distrito que se abandona; y con presencia de certificacion auténtica de ella, se repetirá en el registro del distrito del domicilio nuevamente elegido.

Art. 112. Los españoles que trasladen su domicilio á país extranjero, donde sin más circunstancia que la de su residencia en él sean considerados como naturales, necesitarán para conservar la nacionalidad de España manifestar que esta es su voluntad al agente diplomático ó consular español, quien deberá inscribirles, así como tambien á su cónyuge si fuesen casados, y á los hijos que tuvieren, en el registro especial de españoles residentes, que deberá llevar al efecto.

#### ARTÍCULO TRANSITORIO.

Se concede al Gobierno para sufragar los gastos que

ocasiona el planteamiento del registro civil un crédito de 200.000 pesetas, de cuya inversion dará oportuna-mente cuenta á las Córtes, así como del reintegro obtenido por virtud de los diferentes ingresos que el registro produzca.

Palacio de las Córtes 2 de Junio de 1870.==Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.==Manuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.==Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.==Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.==Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 17 de Junio de 1870.==El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

# ÍNDICE

de las leyes y códigos contenidos en este volúmen.

## CÓDIGO PENAL.

### LIBRO PRIMERO.

	Págs.
<b>Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas. . . . .</b>	<b>7</b>
<b>TITULO I.....</b> <i>De los delitos y faltas, y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan ó la agravan . . . . .</i>	<b>Id.</b>
<b>CAPITULO I....</b> De los delitos y faltas. . . . .	<b>Id.</b>
<b>CAPITULO II.....</b> De las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal. . . . .	<b>9</b>
<b>CAPITULO III....</b> De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal. . . . .	<b>12</b>
<b>CAPITULO IV....</b> De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. . . . .	<b>13</b>
<b>TITULO II.....</b> <i>De las personas responsables de los delitos y faltas. . . . .</i>	<b>16</b>
<b>CAPITULO I....</b> De las personas responsables criminalmente de los delitos y faltas. . .	<b>Id.</b>
<b>CAPITULO II....</b> De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas. . . . .	<b>18</b>
<b>TITULO III....</b> <i>De las penas. . . . .</i>	<b>21</b>
<b>CAPITULO I.....</b> De las penas en general. . . . .	<b>Id.</b>
<b>CAPITULO II.....</b> De la clasificacion de las penas. . . . .	<b>22</b>
<b>CAPITULO III....</b> De la duracion y efecto de las penas. . . . .	<b>24</b>
<b>Seccion 1.<sup>a</sup>.....</b> Duracion de las penas. . . . .	<b>Id.</b>
<b>Seccion 2.<sup>a</sup>.....</b> Efectos de las penas segun su naturaleza respectiva. . . . .	<b>26</b>
<b>Seccion 3.<sup>a</sup>.....</b> Penas que llevan consigo otras acce-	

	sorias. . . . .	30
CAPITULO IV....	De la aplicacion de las penas. . . . .	32
Seccion 1. <sup>a</sup> .....	Reglas para la aplicacion de las penas á los autores de delito consumado, de delito frustrado y tentativa, y á los cómplices y encubridores. . . . .	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> .....	Reglas para la aplicacion de las penas en consideracion á las circunstan- cias atenuantes y agravantes. . . . .	38
Seccion 3. <sup>a</sup> .. ...	Disposiciones comunes á las dos sec- ciones anteriores. . . . .	41
CAPITULO V... .	De la ejecucion de las penas y su cum- plimiento. . . . .	50
Seccion 1. <sup>a</sup> .... .	Disposiciones generales. . . . .	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> .....	Penas principales. . . . .	51
Seccion 3. <sup>a</sup> .....	Penas accesorias. . . . .	56
TITULO IV....	<i>De la responsabilidad civil.</i> . . . .	Id.
TITULO V....	<i>De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias y los que durante una condena delinquen de nuevo.</i> . . . . .	58
CAPITULO I.....	De las penas en que incurren los que quebrantan la sentencia . . . . .	Id
CAPITULO II ... .	De las penas en que incurren los que despues de haber sido condenados por sentencia firme no cumplida, ó durante el tiempo de su condena delinquen de nuevo. . . . .	60
TITULO VI....	<i>De la extincion de la responsabilidad penal.</i> . . . . .	61

## LIBRO SEGUNDO.

<b>Delitos y sus penas.</b> . . . . .	65
<b>TITULO I.....</b> <i>Delitos contra la seguridad interior del</i> <i>Estado.</i> . . . . .	Id.
<b>CAPITULO I.....</b> Delitos de traicion. . . . .	Id.
<b>CAPITULO II.....</b> Delitos que comprometen la paz ó la independencia del Estado. . . . .	68

	Págs.
CAPITULO III.... Delitos contra el derecho de gentes. .	70
CAPITULO IV.... Delitos de piratería. . . . .	71
TITULO II.... <i>Delitos contra la Constitucion.</i> . . . .	72
CAPITULO I. .... Delitos de lesa magestad, contra las Córtes, el Consejo de Ministros y contra la forma de gobierno. . . . .	Id.
Seccion 1. <sup>a</sup> ..... Delitos de lesa magestad. . . . .	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> ..... Delitos contra las Córtes, y sus indi- viduos, y contra el Consejo de Mi- nistros. . . . .	74
Seccion 3. <sup>a</sup> ..... Delitos contra la forma de gobierno. .	79
Seccion 4. <sup>a</sup> ..... Disposicion comun á las tres seccio- nes anteriores. . . . .	97
TITULO III.... <i>Delitos contra el orden público.</i> . . . .	Id.
CAPITULO I..... Rebelion. . . . .	Id.
CAPITULO II..... Sedicion. . . . .	99
CAPITULO III ... Disposiciones comunes á los dos ca- pitulos anteriores. . . . .	102
CAPITULO IV. ... De los atentados contra la autoridad y sus agentes, resistencia y desobe- diencia. . . . .	103
CAPITULO V..... De los desacatos, insultos, injurias y amenazas á la autoridad, y de los insultos, injurias y amenazas á sus agentes y á los demás funcionarios publicos. . . . .	105
CAPITULO VI.... Desórdenes públicos. . . . .	106
CAPITULO VII.... Disposiciones comunes á los tres ca- pitulos anteriores. . . . .	108
TITULO IV . . . <i>De las falsedades.</i> . . . .	109
CAPITULO I.... . De la falsificacion de la firma ó es- tampilla Real, firmas de los Minis- tros, sellos y marcas. . . . .	Id.
Seccion 1. <sup>a</sup> ... . De la falsificacion de la firma ó es- tampilla Real y firma de los Minis- tros. . . . .	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> ..... De la falsificacion de sellos y marcas. .	110
CAPITULO II. . . De la falsificacion de moneda. . . . .	112
CAPITULO III.... De la falsificacion de billetes de Ban-	

	co, documentos de crédito, papel sellado, sellos de telégrafos y correos y demás efectos timbrados cuya expedicion está reservada al Estado. . . . .	114
CAPITULO IV....	De la falsificacion de documentos. . .	117
Seccion 1. <sup>a</sup> .....	De la falsificacion de documentos públicos, oficiales y de comercio, y de los despachos telegráficos.....	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> .....	De la falsificacion de documentos privados. . . . .	118
Seccion 3. <sup>a</sup> .....	De la falsificacion de cédulas de vecindad y certificados. . . . .	119
CAPITULO V.....	Disposiciones comunes á los cuatro capítulos anteriores. . . . .	120
CAPITULO VI....	De la ocultacion fraudulenta de bienes ó de industria, del falso testimonio y de la acusacion y denuncias falsas . . . . .	122
CAPITULO VII...	De la usurpacion de funciones, calidad y títulos, y uso indebido de nombres, trages, insignias y condecoraciones.. . . .	126
TITULO V . . .	<i>De la infraccion de las leyes sobre inhumaciones, de la violacion de sepulturas y de los delitos contra la salud pública.</i> . . . .	128
CAPITULO 1. ....	De la infraccion de las leyes sobre inhumaciones y de la violacion de sepulturas. . . . .	Id.
CAPITULO II ....	De los delitos contra la salud pública. . .	Id.
TITULO VI....	<i>De los juegos y rifas.</i> . . . .	130
TITULO VII...	<i>De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos.</i> . . . .	131
CAPITULO 1.....	Prevaricacion. . . . .	Id.
CAPITULO II.....	Infidelidad en la custodia de presos. .	134
CAPITULO III....	Infidelidad en la custodia de documentos. . . . .	135
CAPITULO IV....	De la violacion de secretos. . . . .	136

CAPITULO V....	Desobediencia y denegacion de auxilio.....	137
CAPITULO VI....	Anticipacion prolongacion y abandono de funciones públicas.....	138
CAPITULO VII..	Usurpacion de atribuciones y nombramientos ilegales.....	140
CAPITULO VIII..	Abusos contra la honestidad.....	141
CAPITULO IX....	Cohecho.....	142
CAPITULO X.....	Malversacion de caudales públicos..	143
CAPITULO XI....	Fraudes y exacciones ilegales.....	145
CAPITULO XII...	Negociaciones prohibidas á los empleados.....	147
CAPITULO XIII..	Disposicion general.....	Id.
TITULO VIII.	<i>Delitos contra las personas.</i> .....	148
CAPITULO I.....	Parricidio.....	Id.
CAPITULO II....	Asesinato.....	Id.
CAPITULO III....	Homicidio.....	149
CAPITULO IV .	Disposiciones comunes á los tres capítulos anteriores.....	Id.
CAPITULO V....	Infanticidio.....	150
CAPITULO VI ...	Aborto.....	Id.
CAPITULO VII...	Lesiones.....	151
CAPITULO VIII.	Disposicion general. . . . .	154
CAPITULO IX ...	Duelo.....	155
TITULO IX....	<i>Delitos contra la honestidad.</i> .....	157
CAPITULO I.....	Adulterio.....	Id.
CAPITULO II ....	Violacion y abusos deshonestos.....	158
CAPITULO III ?..	Delitos de escándalo público.....	159
CAPITULO IV ...	Estupro y corrupcion de menores. . .	160
CAPITULO V ....	Rapto.....	161
CAPITULO VI ...	Disposiciones comunes á los capítulos anteriores.....	Id.
TITULO X.....	<i>De los delitos contra el honor.</i> .....	163
CAPITULO I.....	Calumnia.....	Id.
CAPITULO II ....	Injurias.....	164
CAPITULO III...	Disposiciones generales.....	165
TITULO XI....	<i>Delitos contra el estado civil de las personas.</i> .....	167
CAPITULO I.....	Suposicion de partos y usurpacion del	

# VI

	Págs.
estado civil. . . . .	Id.
CAPITULO II. ... Celebracion de matrimonios ilegales.	167
TITULO XII... <i>De los delitos contra la libertad y seguridad.</i> . . . . .	170
CAPITULO I ..... Detenciones ilegales . . . . .	Id.
CAPITULO II..... Sustraccion de menores. . . . .	171
CAPITULO III.... Abandono de niños. . . . .	Id.
CAPITULO IV.... Disposicion comun á los tres capitulos precedentes. . . . .	172
CAPITULO V... .. Allanamiento de morada. . . . .	Id.
CAPITULO VI... De las amenazas y coacciones. . . . .	173
CAPITULO VII. . Descubrimiento y revelacion de secretos.. . . .	174
TITULO XIII.. <i>De los delitos contra la propiedad.</i> . . .	175
CAPITULO I..... De los robos. . . . .	Id.
CAPITULO II..... De los hurtos. . . . .	181
CAPÍTULO III.... De la usurpacion.. . . .	182
CAPITULO IV. . Defraudaciones . . . . .	183
Seccion 1. <sup>a</sup> ... .. Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. . . . .	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> ..... Estafas y otros engaños.. . . .	186
CAPITULO V. . De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas.. . . .	189
CAPITULO VI.... De las casas de préstamos sobre prendas.. . . .	191
CAPITULO VII... Del incendio y otros estragos. . . . .	Id.
CAPITULO VIII.. De los daños . . . . .	195
CAPITULO IX.... Disposiciones generales. . . . .	197
TITULO XIV.. <i>De la imprudencia temeraria.</i> . . . .	Id.
TITULO XV... <i>Disposiciones generales.</i> . . . .	198

## LIBRO TERCERO.

<b>De las faltas y sus penas.</b> . . . .	199
TITULO I..... <i>De las faltas de imprenta y contra el orden público.</i> . . . .	Id.
CAPITULO I..... De las faltas de imprenta. . . . .	Id.
CAPITULO II..... Faltas contra el orden público. . . . .	200



TITULO II.....	<i>De las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones. . .</i>	203
TITULO III.. .	<i>De las faltas contra las personas. . . . .</i>	209
TITULO IV... .	<i>De las faltas contra la propiedad. . . . .</i>	211
TITULO V.....	<i>Disposiciones comunes á las faltas. . .</i>	216
	<i>Disposicion final. . . . .</i>	218
Decreto de 17 de Setiembre de 1870 sobre aplicacion del art. 23 del Código penal. . . . .		219
<b>Ley provisional sobre organizacion del poder judicial . . . . .</b>		<b>229</b>
TITULO PRELIMINAR. . . . .		Id.
TITULO I..... .	<i>De la planta y organizacion de los juzgados y tribunales. . . . .</i>	232
CAPITULO I.....	<i>De la division territorial en lo judicial y de los juzgados y tribunales. . . .</i>	Id.
CAPITULO II... .	<i>De los jueces municipales. . . . .</i>	237
CAPITULO III... .	<i>De los juzgados de instruccion y tribunales de partido. . . . .</i>	238
CAPITULO IV....	<i>De las Audiencias. . . . .</i>	240
CAPITULO V.....	<i>Del Tribunal Supremo. . . . .</i>	245
CAPITULO VI ...	<i>De los jueces y magistrados suplentes</i>	246
TITULO II.....	<i>De las condiciones para ingresar y ascender en la carrera judicial. . . . .</i>	249
CAPITULO I.. . .	<i>De los aspirantes á la judicatura. . .</i>	Id.
CAPITULO II.....	<i>De las condiciones comunes á todos los cargos judiciales. . . . .</i>	256
CAPITULO III... .	<i>De las condiciones comunes á los jueces de instruccion, á los tribunales de partido y á los magistrados. . . .</i>	259
CAPITULO IV....	<i>De las condiciones especiales á los jueces municipales. . . . .</i>	260
CAPITULO V... .	<i>De las condiciones especiales para ingresar y ascender en los juzgados de instruccion y en los tribunales de partido. . . . .</i>	Id.
CAPITULO VI... .	<i>De las condiciones para ingresar y ascender en las Audiencias. . . . .</i>	263
CAPITULO VII... .	<i>De las condiciones especiales para in-</i>	

	gresar y ascender en el Tribunal Supremo.....	257
TITULO III....	<i>Del nombramiento, juramento, antigüedad, tratamiento, trage y dotacion de los jueces y magistrados.....</i>	268
CAPITULO I....	Del nombramiento de los jueces municipales.....	Id.
CAPITULO II....	Del nombramiento de los jueces de instruccion, de los de tribunales de partido y de los magistrados.....	272
CAPITULO III....	Del juramento y de la toma de posesion de los jueces y magistrados...	276
CAPITULO IV....	De la antigüedad y precedencia de los jueces y magistrados.....	280
CAPITULO V....	De los honores de los jueces y magistrados.....	281
CAPITULO VI....	Del trage de los jueces y magistrados.	282
CAPITULO VII....	De la dotacion de los jueces y magistrados.....	283
TITULO IV....	<i>De la inamovilidad judicial.....</i>	285
CAPITULO I....	Disposiciones generales.....	Id.
CAPITULO II....	De la destitucion de los jueces y magistrados.....	Id.
CAPITULO III....	De la suspension de los jueces y magistrados.....	287
CAPITULO IV....	De la traslacion de los jueces y magistrados.....	289
CAPITULO V....	De la jubilacion de los jueces y magistrados.....	291
CAPITULO VI....	De los recursos por quebrantamiento de las disposiciones comprendidas en este titulo.....	292
TITULO V....	<i>De la responsabilidad judicial.....</i>	293
CAPITULO I....	De la responsabilidad criminal de los jueces y magistrados.....	Id.
CAPITULO II....	De la responsabilidad civil de los jueces y magistrados.....	296
TITULO VI....	<i>De las atribuciones de los juzgados y tribunales.....</i>	297

	Págs.
CAPITULO I.....	De la extension de la jurisdiccion ordinaria. . . . .
	297
CAPITULO II.....	De las atribuciones de los jueces municipales. . . . .
	298
CAPITULO III.....	De las atribuciones de los jueces de instruccion. . . . .
	299
CAPITULO IV.....	De las atribuciones de los tribunales de partido. . . . .
	300
CAPITULO V.....	De las atribuciones de las Audiencias. . . . .
	301
CAPITULO VI.....	De las atribuciones del Tribunal Supremo. . . . .
	304
CAPITULO VII...	De las competencias promovidas por la administracion contra las autoridades judiciales por exceso de atribuciones. . . . .
	307
CAPITULO VIII..	De los recursos de queja promovidos por las autoridades judiciales contra las administrativas por exceso de atribuciones. . . . .
	308
TITULO VII...	<i>De la competencia de los juzgados y tribunales. . . . .</i>
	310
CAPITULO I.....	Disposiciones comunes á los negocios civiles y criminales. . . . .
	Id.
CAPITULO II. ...	De la competencia en lo civil. . . . .
	311
CAPITULO III.....	De la competencia en lo criminal. . . . .
	321
Seccion 1. <sup>a</sup> .....	De la competencia de la jurisdiccion ordinaria en lo criminal. . . . .
	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> .....	De la competencia de las jurisdicciones especiales en lo criminal. . . . .
	328
CAPITULO IV.....	De las cuestiones de competencia. . . . .
	332
CAPITULO V.....	De los recursos de fuerza en conocer..
	340
TITULO VIII..	<i>De la recusacion de jueces, magistrados y asesores. . . . .</i>
	345
CAPITULO I.....	Disposiciones generales. . . . .
	Id.
CAPITULO II.....	De la sustanciacion de las recusaciones de los jueces de instruccion, de partido y de los magistrados. . . . .
	347
CAPITULO III. ...	De la sustanciacion de las recusaciones en los juicios verbales y de fal-

	tas. . . . .	352
TITULO IX....	<i>De los auxiliares de los juzgados y tribunales.</i> . . . .	354
CAPITULO I.....	De los secretarios judiciales . . . . .	355
Seccion 1. <sup>a</sup> .....	De las condiciones comunes á los secretarios judiciales. . . . .	Id.
Seccion 2. <sup>a</sup> .....	De los secretarios de los juzgados municipales. . . . .	361
Seccion 3. <sup>a</sup> .....	De los secretarios de los juzgados de instruccion y de tribunales de partido. . . . .	362
Seccion 4. <sup>a</sup> .....	De los secretarios de las Audiencias y del Tribunal Supremo. . . . .	365
CAPITULO II....	De los archiveros. . . . .	370
CAPITULO III...	De los oficiales de Sala. . . . .	371
CAPITULO IV....	De las recusaciones de los auxiliares de los juzgados y tribunales. . . . .	373
TITULO X.....	<i>De los subalternos de los juzgados y tribunales.</i> . . . .	375
TITULO XI....	<i>Del gobierno y régimen de los tribunales.</i> . . . .	379
CAPITULO I.....	De los presidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo. . . . .	Id.
CAPITULO II....	De los presidentes de Sala de las Audiencias y del Tribunal Supremo. . . . .	383
CAPITULO III...	De los presidentes de los tribunales de partido. . . . .	384
TITULO XII...	<i>De la constitucion y atribuciones de las Audiencias y del Tribunal Supremo en pleno.</i> . . . .	385
TITULO XIII..	<i>De las Salas de gobierno de las Audiencias y de la del Tribunal Supremo y de las juntas de tribunales de partido para negocios gubernativos.</i> . . . .	389
CAPITULO I.....	De las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo. . . . .	Id.
CAPITULO II....	De las juntas de los tribunales de partido para asuntos gubernativos. . . . .	391
TITULO XIV..	<i>De la apertura de los tribunales.</i> . . . .	392

TITULO XV...	<i>Del modo de constituirse los juzgados y Salas de justicia de los tribunales...</i>	393
TITULO XVI..	<i>De las Audiencias y policía de estrados en los juzgados y tribunales.....</i>	397
TITULO XVII.	<i>De la forma de dictar acuerdos, providencias, autos y sentencias, y del modo de dirimir las discordias.....</i>	401
CAPITULO I.....	De la forma de dictar acuerdos, providencias, autos y sentencias.....	Id.
CAPITULO II.....	Del modo de dirimir las discordias..	408
TITULO XVIII	<i>De la inspeccion y vigilancia sobre la administracion de justicia.....</i>	411
TITULO XIX..	<i>De la jurisdiccion disciplinaria.....</i>	415
TITULO XX...	<i>Del ministerio fiscal.....</i>	423
CAPITULO I... ..	De la planta del ministerio fiscal..	Id.
CAPITULO II... ..	De los aspirantes al ministerio fiscal.	425
CAPITULO III....	De las condiciones generales para todos los cargos del ministerio fiscal.	426
CAPITULO IV....	De las condiciones especiales para ser fiscales de juzgados municipales..	427
CAPITULO V.....	De las condiciones especiales para ingresar y ascender en las fiscalías de los tribunales de partido.....	428
CAPITULO VI....	De las condiciones especiales para ingresar y ascender en el ministerio fiscal de las Audiencias y del Tribunal Supremo.....	429
CAPITULO VII...	Del nombramiento, juramento y posesion de los funcionarios del ministerio fiscal.....	432
CAPITULO VIII..	De los honores, antigüedad y traje de los funcionarios del ministerio fiscal.....	436
CAPITULO IX....	De la dotacion del ministerio fiscal..	438
CAPITULO X.....	De la separacion, suspension, traslacion y jubilacion de los funcionarios del ministerio fiscal.....	439
CAPITULO XI....	De la responsabilidad de los funcionarios del ministerio fiscal.....	442

CAPITULO XII...	De las atribuciones del ministerio fiscal. . . . .	443
CAPITULO XIII..	De la unidad y dependencia del ministerio fiscal. . . . .	446
CAPITULO XIV..	De la recusacion del ministerio fiscal. . . . .	447
CAPITULO XV...	De las correcciones disciplinarias de los funcionarios del ministerio fiscal. . . . .	449
TITULO XXI.	<i>De los abogados y procuradores.</i> . . . .	450
CAPITULO I....	Disposiciones comunes á los abogados y procuradores. . . . .	Id.
CAPITULO II.....	De los abogados en ejercicio. . . . .	454
CAPITULO III....	De los procuradores. . . . .	456
TITULO XXII.	<i>De las vacaciones y licencias.</i> . . . .	460
CAPITULO I.....	De los días en que vacan los juzgados y tribunales. . . . .	Id.
CAPITULO II.....	De las licencias para ausentarse. . . . .	464
TITULO XXIII	<i>Disposiciones transitorias.</i> . . . .	470

<b>Ley autorizando al Gobierno para publicar como leyes provisionales los proyectos de matrimonio civil, reforma de la casacion en lo civil, recurso de casacion en lo criminal y reformas consiguientes en el procedimiento criminal, y ejercicio de la gracia de indulto. Abolicion de la pena de argolla; efectos civiles de la pena de interdiccion; reversion al Estado de los oficios de la fé pública enajenados de la Corona, y provision de las notarias.</b> . . . . .	479
--	-----

<b>Ley provisional de matrimonio civil.</b> . . . . .	485
CAPITULO I..... De la naturaleza del matrimonio. . . .	Id.
CAPITULO II..... <i>Seccion 1.<sup>a</sup>—De las circunstancias de aptitud necesarias para contraer matrimonio</i> . . . . .	486
<i>Seccion 2.<sup>a</sup></i> ..... De las dispensas. . . . .	488
CAPITULO III..... De las diligencias preliminares á la celebracion del matrimonio. . . . .	Id.
<i>Seccion 1.<sup>a</sup></i> ..... De la publicacion del matrimonio. . . .	Id.

# XIII.

Págs.

<i>Seccion 2.<sup>a</sup>.....</i>	De la oposicion al matrimonio. . . . .	491
<b>CAPITULO IV....</b>	De la celebracion del matrimonio... .	492
<b>CAPITULO V.....</b>	De los efectos generales del matrimonio respecto de las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes. . . . .	496
<i>Seccion 1.<sup>a</sup>.....</i>	De los efectos generales del matrimonio respecto á las personas y bienes de los cónyuges.. . . .	Id.
<i>Seccion 2.<sup>a</sup>. ....</i>	De los efectos generales del matrimonio respecto á las personas y bienes de sus descendientes. . . . .	499
<i>Parte 1.<sup>a</sup>.....</i>	De la legitimidad de los hijos. . . . .	Id.
<i>Parte 2.<sup>a</sup>.....</i>	De la patria potestad. . . . .	500
<i>Parte 3.<sup>a</sup>.....</i>	De la obligacion de dar alimentos. . .	502
<b>CAPITULO VI....</b>	De los medios de probar el matrimonio. . . . .	503
<b>CAPITULO VII..</b>	Del divorcio. . . . .	504
<i>Seccion 1.<sup>a</sup>.....</i>	De la naturaleza y causas del divorcio	Id.
<i>Seccion 2.<sup>a</sup>....</i>	De las disposiciones preliminares del divorcio. . . . .	505
<i>Seccion 3.<sup>a</sup>.....</i>	De los efectos del divorcio. . . . .	506
<b>CAPITULO VIII..</b>	De la disolucion y nulidad del matrimonio.. . . .	507
<i>Seccion 1.<sup>a</sup>.....</i>	De la disolucion del matrimonio.. .	Id.
<i>Seccion 2.<sup>a</sup>.....</i>	De la nulidad del matrimonio. . . . .	508
<i>Seccion 3.<sup>a</sup>.....</i>	Disposiciones generales. . . . .	509
	Disposiciones transitorias. . . . .	Id.
<i>Real decreto de 16 de Agosto de 1870 sobre planteamiento de la ley de matrimonio civil.. . . .</i>		512
<i>Circular de la Direccion del registro sobre el mismo asunto.</i>		529
<b>Ley provisional sobre reforma de la casacion civil.</b>		550
<i>De los recursos de casacion . . . . .</i>		Id.
<i>Seccion 1.<sup>a</sup>.....</i>	Disposicion general. . . . .	Id.
<i>Seccion 2.<sup>a</sup>.....</i>	De la interposicion de los recursos de casacion por infraccion de ley ó de doctrina legal ó contra los fallos de amigables componedores. . . . .	553

<i>Sección 3.<sup>a</sup>.....</i>	De la interposicion del recurso de casacion por quebrantamiento de forma.	558
<i>Sección 4.<sup>a</sup>.....</i>	De la interposicion de los recursos por infraccion de ley ó doctrina legal y por quebrantamiento de forma. . . .	560
<i>Sección 5.<sup>a</sup>.....</i>	De la interposicion de los recursos de casacion contra las sentencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar. . . . .	562
<i>Sección 6.<sup>a</sup>.....</i>	Disposiciones comunes á las secciones anteriores. . . . .	Id.
<i>Sección 7.<sup>a</sup>.....</i>	De la sustanciacion de los recursos de casacion. . . . .	563

**Ley provisional sobre el establecimiento del recurso de casacion en los juicios criminales. . .** 569

<b>CAPITULO I.....</b>	De los casos en que procede el recurso de casacion. . . . .	Id.
<b>CAPITULO II.....</b>	De la preparacion del recurso de casacion por infraccion de ley. . . . .	572
<b>CAPITULO III ...</b>	De la interposicion y admision del recurso de casacion por infraccion de ley. . . . .	575
<b>CAPITULO IV.....</b>	De la sustanciacion y decision de los recursos admitidos por infraccion de ley. . . . .	580
<b>CAPITULO V.....</b>	De la interposicion y admision del recurso por quebrantamiento de forma.	583
<b>CAPITULO VI.....</b>	De la sustanciacion y decision del recurso admitido por quebrantamiento de forma. . . . .	585
<b>CAPITULO VII....</b>	De los recursos por infraccion de ley y quebrantamiento de forma. . . . .	587
<b>CAPITULO VIII...</b>	De la interposicion de los recursos por el ministerio fiscal. . . . .	590
<b>CAPITULO IX.....</b>	De los recursos de casacion en las causas de muerte. . . . .	591
<b>CAPITULO X.....</b>	Disposiciones comunes á todos los recursos de casacion. . . . .	592



# XV.

Págs.

CAPITULO XI.... Del recurso de revision.. . . . .	595
<i>Disposicion transitoria.</i> . . . . .	597
<b>Ley provisional sobre reformas en el procedimiento para plantear el recurso de casacion en los juicios criminales.</b> . . . . .	599
<b>Ley provisional estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.</b> . . . . .	607
CAPITULO I..... De los que pueden ser indultados. . .	Id.
CAPITULO II.... De las clases y efectos del indulto.. .	608
CAPITULO III... Del procedimiento para solicitar y conceder la gracia de indulto. . . .	611
<b>Ley provisional del registro civil.</b> . . . . .	615
TITULO I..... <i>Disposiciones generales.</i> . . . . .	Id.
TITULO II.... <i>De los nacimientos.</i> . . . . .	627
TITULO III.... <i>De los matrimonios.</i> . . . . .	634
TITULO IV.... <i>De las defunciones.</i> . . . . .	638
TITULO V..... <i>De las inscripciones de ciudadanía.</i> .. .	643
ARTICULO TRANSITORIO. . . . .	647

## FÉ DE ERRATAS.

---

Cuando ya teníamos impresa esta segunda edición, y cuando no debíamos esperar nuevas rectificaciones sobre las leyes que contiene este libro, la GACETA del 24 de Setiembre de 1870 ha publicado lo siguiente:

«En el Código penal reformado, que se publicó en el suplemento al núm. 243 de la GACETA correspondiente al día 31 de Agosto último, se padeció un error de copia, que se rectifica del modo siguiente:

«En el núm. 5.º del art. 516 de dicho Código, en donde dice: *con la pena de prision correccional á presidio mayor*, debe decir: *con la pena de presidio correccional á presidio mayor*.

»En la penúltima línea del art. 524 del mismo Código, en donde dice: *la pena de arresto mayor en su grado medio á prision correccional en su grado mínimo*, debe decir: *la pena de arresto mayor en su grado medio á presidio correccional en su grado mínimo*.»